

Marcelo José Ferlin D'Ambroso

# O ENFOQUE DE DIREITOS HUMANOS

---

APLICADO ÀS RELAÇÕES DE TRABALHO

Editora **RTM**<sup>®</sup>  
Educacional

Marcelo José Ferlin D'Ambroso

**O ENFOQUE DE DIREITOS HUMANOS  
APLICADO ÀS RELAÇÕES DE TRABALHO**

**INSTITUTO** IRTM  
DE DIREITO DO TRABALHO  
E GESTÃO SINDICAL

Belo Horizonte  
2023

Editora **RTM**<sup>®</sup>

D156e D'Ambroso, Marcelo José Ferlin  
O enfoque de direitos humanos aplicado às relações de trabalho /  
Marcelo José Ferlin D'Ambroso. - Belo Horizonte: RTM, 2023.

306 p. - Inclui bibliografia.

1. Direitos humanos. 2. Direito do trabalho. 3. Direitos sociais.  
4. Relações trabalhistas. I. Título.

CDU 342.7:331

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Meire Luciane Lorena Queiroz CRB 6/2233.

ISBN: 978-65-5509-159-5

<b>Editoração Eletrônica e Projeto Gráfico:</b>	Editora RTM - Instituto RTM de Direito do Trabalho e Gestão Sindical
Equipe RTM	
<b>Capa:</b> Equipe RTM	Rua João Euflásio, 80 - Bairro Dom Bosco BH - MG -
<b>Editor Responsável:</b> Mário Gomes da Silva	Brasil - Cep 30850-050
<b>Revisão:</b> o autor	Tel: 31-3417-1628
	WhatsApp: (31) 99913-9998
	<b>E-mail :</b> rtmeducacional@yahoo.com.br
	<b>Site:</b> www.editorartm.com.br
	<b>Loja Virtual :</b> www.rtmeducacional.com.br

**Conselho Editorial:**

Adriane Reis de Araújo	Lívia Mendes Moreira Miraglia
Adriano Jannuzzi Moreira	Lorena Vasconcelos Porto
Amauri César Alves	Lutiana Nacur Lorentz
Ana Maria Aparecida de Freitas	Marcella Pagani
Andréa de Campos Vasconcellos	Marcelo Fernando Borsio
Antônio Álvares da Silva	Marcelo José Ferlin D'Ambroso
Antônio Fabrício de Matos Gonçalves	Márcio Túlio Viana
Bruno Ferraz Hazan	Maria Aparecida Gugel
Carlo Cosentino	Maria Cecília de Almeida Monteiro Lemos
Carlos Henrique Bezerra Leite	Maria Cecília Máximo Teodoro
Cláudio Jannotti da Rocha	Maria Rosaria Barbato
Cleber Lúcio de Almeida	Nasser Ahmad Allan
Daniela Muradas Reis	Ney Maranhão
Delaíde Alves Miranda Arantes	Raimundo Cezar Britto
Elaine Noronha Nassif	Raimundo Simão de Mello
Ellen Mara Ferraz Hazan	Renato César Cardoso
Everaldo Gaspar Lopes de Andrade	Ricardo José Macedo de Britto Pereira
Fernando Maciel	Romulo Nei Barbosa de Freitas Filho
Gabriela Neves Delgado	Rômulo Soares Valentini
Giovani Clark	Ronaldo Lima dos Santos
Gustavo Seferian	Rosemary de Oliveira Pires Afonso
Hugo Cavalcanti Melo Filho	Rúbia Zanotelli de Alvarenga
Jorge Luiz Souto Maior	Sandro Lunard Nicoladeli
José Reginaldo Inácio	Sayonara Grillo
Juliana Teixeira Esteves	Valdete Souto Severo
Leonardo Tibo Barbosa Lima	Vitor Salino de Moura Eça
	Wânia Guimarães Rabêllo de Almeida

Marcelo José Ferlin D'Ambroso

**O ENFOQUE DE DIREITOS HUMANOS  
APLICADO ÀS RELAÇÕES DE TRABALHO**



## PRÓLOGO

*(por Mario Luis Gambacorta)*

En primer término, quiero agradecer a Marcelo D'Ambrosio por la invitación a realizar el prólogo de este interesante trabajo; el cual, es su tesis para el doctorado en ciencias jurídicas, el cual ha alcanzado exitosamente en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA).

El autor cuenta con una extensa experiencia, desde el ministerio público del trabajo a la magistratura, y con estudios de postgrado que lo han enriquecido en su formación, y para la elaboración y verificación de la hipótesis.

La primera y destacable apreciación que se presenta ante este trabajo es su carácter transdisciplinario. El autor, a quien me referiré también, para este prólogo, y en tono más coloquial como Marcelo; desarrolla su tesis doctoral atravesando aspectos y disciplinas diversas y complejas, sosteniendo un enfoque de derechos humanos (EDH) que, entiendo, aporta una mirada a considerar y seguir profundizando.

El trabajo, remarca el autor, antes que nada, es un derecho humano y desde ahí construye una exclusión de la visión contractualista al confrontar con el régimen de mercado y su hegemonía.

El autor, más precisamente, quiere enfrentar y superar esa visión contractualista y juspositivista en la interpretación del derecho del trabajo y su aplicación. Me atrevo a decir que se orienta a una praxis. Se vale de una amplia bibliografía que ha consultado para sostener lo postulado acorde con su visión.

Si bien podríamos afirmar que habrá visiones divergentes en cuanto a si solo el EDH es la única visión humanista. Bosqueja y apunta una nueva plataforma filosófico-teórica. Quiere reescribir el derecho del trabajo; o quizás, más precisamente explicitado, promover una nueva hermenéutica de éste. Y todo ello, en vista de su efectividad y progresividad.

La pregunta entonces es, si esta interpretación por si misma lo garantiza o requiere de otros elementos. Para responderlo, realiza un recorrido histórico y geopolítico muy vasto y completo, y sobre todo, una lectura crítica del capitalismo, de la sociedad de consumo, y de la necesidad de abandonar sus paradigmas.

Nos plantea una relectura del derecho del trabajo y una visión más allá del tradicional concepto de contrato de trabajo. Parte de una metodología desde la teoría crítica del derecho y del método dialéctico marxista y el anticontractualismo.

Si bien provengo de otra tradición en el pensamiento, destaco la profundidad de su mirada y su sentido crítico. Creo que, su cuestionamiento profundo al contractualismo, evidencia una necesidad de brindar y reconocer elementos y conceptos, ante el endiosamiento del mercado, asimismo, una revalorización del humanismo.

Contribuye en mucho y abona teóricamente diversas posibilidades de transformación en un sentido civilizatorio, las cuales, interpreto, deberían ser apreciadas, reflexionadas y utilizadas, inclusive, por quienes no partimos del mismo marco teórico o cosmovisión que el autor.

El foco está puesto en que, desde la teoría crítica, se nos presenta una herramienta indispensable para la efectividad de los derechos humanos del trabajo. Creo que, eso es lo que el EDH que se promueve, viene a sumar a los debates en torno al derecho del trabajo. Nos presenta elementos para salir y superar un reduccionismo positivista que aqueja a los derechos humanos normativizados.

Desde el *enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales* que impulso, veo con alegría aportes como este que, tienden a enriquecer el pensamiento crítico y la producción teórica, en vista de la mejora de la calidad de vida de los hombres y mujeres que trabajan.

En efecto, en este trabajo se evidencia que, su autor quiere centrar la interpretación en los seres humanos, en su dignidad. Esto, a su vez, requiere una interpretación crítica de los derechos humanos en el plano internacional y en cuanto al funcionamiento de los organismos internacionales, como suele señalarlo Eduardo Manuel Val.

Marcelo D'Ambrosio hace referencia al rol del Estado para garantizar e incluir los derechos humanos en políticas públicas; y en términos de hermenéutica jurídica, como instrumento para la dignidad.

Nos propone un EDH en oposición y como superación del contrato de trabajo, el cual el autor, ata al modelo liberal-individualista y vincula como simbólicamente relacionado con éste.

Coincide y cita a Supiot en cuanto a que el trabajo sería una condición y no un producto de la actividad económica. Por mi parte, creo que el derecho del trabajo si bien fue formalmente creado en/por el Estado capitalista, también refleja las reivindicaciones obtenidas y los límites y condicionamientos que se pueden construir frente a dicho modelo de Estado, avanzando más hacia un Estado Social de Derecho.

Amén de estas reflexiones, y a modo de aporte para continuar el debate que abre el autor, es dable atender que el contrato de trabajo es funcional a la lógica mercantilista y puede encubrir toda una serie de abusos. Ahí creo que el EDH puede superar las limitaciones meramente contractualistas, o al menos, mejorar los estándares en cuanto a su aplicación.

Con el debate en torno a si el carácter negociable del trabajo humano es una ficción jurídica en la cual se apoya la economía de mercado; se cuestiona, con una visión crítica del contrato que, una visión estática y hasta anquilosada del derecho del trabajo, que desde determinados intereses se quiere subordinar a la prevalencia de un orden economicista.

Sin desmedro del valor de la producción que refleja este trabajo, me resta la duda respecto si debe desaparecer el contrato del trabajo para lograr la dignidad

de las y los trabajadores. De mi parte, todavía valorizo el poder transformador del derecho en los gobiernos populares. Sé que lo expresado puede llegar a ser considerado insuficiente. Y por ello, hay más razones para seguir los debates y las reflexiones compartidas.

Entiendo que, en la asimetría de la relación entre trabajador y empleador debemos avanzar y profundizar, analizando inclusive aspectos lingüísticos, evitando la dilución de conceptos y las descontextualizaciones del conflicto subyacente a ella. El debate en torno al contrato de trabajo, a mi juicio, contribuiría a dilucidar muchas problemáticas en torno a heterogeneidades laborales.

Se advierte desde las palabras de Dussel que refiere el autor, el pasaje del campo del mercado de trabajo al campo de la actividad económica con la disponibilidad del cuerpo de la persona en favor de la empresa. Nos advierte sobre la reconfiguración social excluyente y la consolidación del precariado como forma de dominación, en términos de Bordieu; y hasta sobre las necropolíticas neoliberales. Por esto y mucho más, la postulada necesidad de cambio, por la que se clama en este trabajo, es tan destacable y necesaria para seguir reflexionando.

Hay un llamado al compromiso social y a la toma de conciencia. Hay un planteo de transformación cultural en donde, amén de los postulados y los cuestionamientos a los que pueda dar lugar el EDH (y considero que eso debería fortalecerlo y revalorizarlo) se presenta como una herramienta imprescindible en la consideración de la hermenéutica juslaboral.

Hermenéutica juslaboral que se halla vinculada con un modelo de sociedad y de democracia constitucional en las que se debe poner foco en los derechos fundamentales.

El autor menciona un estado democrático de derecho, con derechos universalizables.

Si bien advierto que, la influencia del anarcosindicalismo y su paradigma libertario, no es lo que más me seduce. Sin embargo, y más allá de esta afectuosa ironía, comparto la profunda valorización del trabajo humano y la existencia digna conforme marca la justicia social.

En esa línea, y como se expresa en el trabajo, se trata de ese complejo equilibrio entre trabajo y propiedad privada. Frente a ello es importante el estándar mínimo que se llegue a configurar, el cual no creo esté dado suficientemente por una renta universal. Y aquí, otro aporte para seguir profundizando en vista de evitar sociedades duales.

Busca además el autor, aplicar una visión holística que, identificando la relación asimétrica de poder, entre empleador y trabajador, limite el derecho de propiedad y atienda la función social de ésta.

Postula el autor que las normas nacionales no pueden contrariar ni limitar los derechos humanos conforme se encuentran reconocidos por la normativa internacional. Con ello, se podrían superar restricciones contractualistas, tal como el hecho de la no ratificación por Brasil del Convenio 87 de la OIT.



El EDH se orienta al reconocimiento de los valores contenidos en los derechos humanos del trabajo, conforme los tratados internacionales de derechos humanos que ha citado a lo largo de esta tesis. Y respecto de los cuales ha remarcado, en los tramos finales del trabajo, su operacionalización.

Algunos podrán dudar en cuanto a si la hermenéutica jurídica quiebra por completo el carácter contractual, o al menos, logra humanizarlo. Dependerá mucho la respuesta, del enfoque adoptado. Tal el caso del EDH.

Cabe, a mi modesto modo de ver, seguir explorando las relaciones, intereses y conflictos subyacentes. Amén de los debates críticos en torno al contractualismo, la interesante lectura crítica emergente que se nos propone, los más que valorables aportes hermenéuticos, y el debate que trae aparejado un cuestionamiento y cambio de enfoque como el formulado.

Sin desmedro de lo cual, colijo que subsiste un debate en torno a la relación asimétrica y las desigualdades; pero también en cuanto a los mecanismos tutelares que tratan de equilibrarlas. Por ello, entre otras cosas, es importante atender la invisibilización que denuncia el autor respecto los derechos humanos por parte de un contrato de trabajo liso y llano en términos positivistas. Así las cosas, mediante la construcción de nuevas bases epistémicas, seguramente enriquecerá los debates y la aplicación del Derecho del Trabajo.

Sea cual sea la visión del lector de esta tesis, lo que no se podrá dudar es la visión profundamente humanista y bienintencionada, en términos de justicia social, de su autor. Y en estos tiempos, serlo y hacerlo; sumando el desafío de construir un marco teórico, con destacables y profundas reflexiones y análisis, es más que meritorio y celebrable.

El propio autor señala que *“Esta função deve ser cumprida através de uma nova hermenêutica, a crítico-tutelar humanista, transdisciplinar, com Enfoque de Direitos Humanos.”*

Aquí se acerca más al *enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales* que impulso, y al que Marcelo D’Ambroso, al igual que Eduardo Manuel Val y Alejandra Niño Amieva, vienen haciendo valiosos aportes desde sus respectivas áreas de expertise. En el caso del autor, como podemos apreciar, los derechos humanos del trabajo.

En la misma inteligencia, vale recordar la cita que formula de Packer-Balan, en cuanto: *se trata de infundir pleno significado y más vida a los viejos y universalmente adoptados estándares de derechos humanos y a sus promesas, trayéndolos desde los márgenes de debates especializados o slogans populares hasta la maquinaria central de toma de decisiones y gestión gubernamental global, nacional y local.*

Por ello, postulo e invito al autor a que sigamos trabajando, en la armonización sistémica del EDH con el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales. En tal sentido, la profundidad con que se propone operativizar la hermenéutica jurídica desde un EDH, es un punto de contacto más que interesante y destacable.

Vayan para Marcelo mis sinceras felicitaciones por este logro alcanzado, instándolo, amén de la relevancia de la hermenéutica jurídica que nos propone; a seguir profundizando en los mecanismos sustitutivos del contrato de trabajo en términos prácticos; lo cual, seguramente, encaminará tan brillantemente como en este trabajo.

Y por que no hacerlo en el marco de en un postdoctorado...

Buenos Aires, enero de 2022.



## APRESENTAÇÃO

O presente livro é resultado do amadurecimento de uma pesquisa de quatro anos e decorre da tese de doutorado defendida em 10.12.2021 na Universidad del Museo Social Argentino, em Buenos Aires, intitulada “*O Enfoque de Direitos Humanos aplicado à hermenêutica jurídico-laboral para a efetividade dos Direitos Sociais*”.

A tese foi adaptada para a publicação em formato de livro, simplificando o título e eliminando a parte metodológica, resumo e fontes; para melhor fluidez.

A ideia inicial, quando proposto o tema, focava em trazer a teoria do Enfoque de Direitos Humanos para o Direito do Trabalho. No caminho, porém, os estudos demonstraram uma franca contrariedade entre duas categorias, a dos Direitos Humanos e a dos contratos, obrigando à análise de compatibilidade entre ambas. E como toda pesquisa exige, não obstante a definição do tema, chegar até ele demanda uma abrangência de historicidade e estudos multidisciplinares que vão contemplando outras questões. Foi este o caso da abordagem da ideologia existente nas relações de trabalho pretéritas e contemporâneas, nos processos de subjetivação da classe trabalhadora e na estruturação contratualista do Direito do Trabalho. Assim também em relação à fundamentalidade superior do Direito do Trabalho na estruturação contemporânea do Estado Democrático de Direito (mesmo dentro de uma ordem econômica capitalista).

Portanto, o choque entre Direitos Humanos, Direito do Trabalho e o sistema capitalista é evidente e permanente, e esta pesquisa demonstra, ao longo de quatro capítulos, este embate, por diversos prismas.

A estrutura da investigação compreendeu a divisão em quatro capítulos, expostos em eixos temáticos, constituindo-se o primeiro dos conhecimentos necessários prévios (a Teoria Crítica e os Direitos Humanos do Trabalho), repassando desde as origens e sistemas de exploração do trabalho humano até a formação e desenvolvimento do capitalismo, industrialização, lutas imperiais, globalização, neoliberalismo e a localização do processo de construção dos Direitos Humanos e do Direito do Trabalho neste contexto. Foi dado especial destaque à conexão entre Direitos Humanos, Direito do Trabalho e imperialismo, e ainda com desenvolvimento e seguridade econômica, abordando, incidentalmente, a necessidade da renda universal.

Já o segundo capítulo (o Enfoque de Direitos Humanos aplicado à hermenêutica jurídica) avança no desenvolvimento do objetivo geral, apresentando a doutrina, sua origem e desenvolvimento em torno das políticas públicas, e sua perfeita conexão à interpretação e aplicação do Direito, possibilitando a correção de desigualdades em relações assimétricas de poder de forma ampla – e não só nas relações de trabalho.

O terceiro capítulo apresenta as ideologias e as conecta como causas e efeitos na construção da doutrina e jurisprudência laboral contratualista ou juspositivista, cujos efeitos nefastos representam um sério risco às democracias

e ao próprio Estado de Direito, se perpetuados. Tal situação, torna urgentes a mudança e a superação, sobretudo em tempos da chamada quarta Revolução Industrial (infodigital), que, aliada à globalização neoliberal, cria formas diversas de organização do trabalho e novas formas de subjetivação que ameaçam o mundo com um grave retrocesso social.

Enfim, o quarto capítulo, encaminhado como epílogo, reapresenta o Direito do Trabalho desde sua fundamentalidade superior, estruturado na dignidade humana em toda a dimensão prevista na Declaração de Filadélfia, elencando também, por amostragem, precedentes de Brasil, Argentina, Espanha e Portugal, nos quais é possível identificar as deficiências de tutela dos Direitos Humanos nas relações de trabalho. Em contraponto, outras decisões são colacionadas que surgem com uma visão mais humanista, mostrando que outra realidade de efetivação dos direitos sociais e emancipação das classes despossuídas é possível, o que deve ser feito a partir de uma metodologia diversa a ser empregada na maneira de decidir, propondo-se, para tanto, a aplicação do EDH na hermenêutica juslaboral.

A partir da síntese desta composição entre doutrina e prática, com a visão humanista, os resultados da análise crítica contemplarão a parte final do livro sobre a aplicação do Enfoque de Direitos Humanos à hermenêutica juslaboral, tornando visíveis os Direitos Humanos do Trabalho e as implicações de mudanças teóricas e práticas que são geradas na interpretação e aplicação do Direito do Trabalho, adequadas para a qualificação de uma nova visão das relações de trabalho, e de um novo paradigma de interpretação e aplicação do Direito do Trabalho, ou seja, considerando o trabalho como um Direito Humano e não como um contrato ou mercadoria.

A todxs, boa leitura !

Porto Alegre, outono de 2023.

Agradecimento:  
ao querido orientador, Dr. Matías Bailone, pelo precioso apoio  
e estímulo à investigação científica dos Direitos Humanos.  
E uma homenagem ao Prof. Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, cuja obra  
“Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal”,  
com a qual tive contato no início da graduação, foi fundamental para a estruturação  
de uma visão crítica do Direito.

Agradecimiento:  
A mí querido Director de Tesis, Dr. Matías Bailone, por el valioso  
apoyo y estímulo a la investigación científica de los Derechos Humanos.  
Y un homenaje al Prof. Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, cuya obra “En busca de las  
penas perdidas: la pérdida de legitimidad del sistema penal”, con la que tuve  
contacto al inicio de la graduación, fue fundamental para la estructuración de una  
visión crítica del Derecho.



## ÍNDICE

PRÓLOGO (Prof. Dr. Mario Luis Gambacorta, Argentina) .....	05
APRESENTAÇÃO .....	11
ÍNDICE .....	15
ÍNDICE DE ABREVIATURAS .....	17
<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>19</b>
a. Objeto de estudo, objetivos gerais e hipótese .....	21
b. Antecedentes, Justificativa e estado da arte .....	23
c. A perspectiva humanista para as relações de trabalho .....	33
<b>CAPÍTULO I:</b>	
<b>TEORIA CRÍTICA DO DIREITO E OS DIREITOS HUMANOS</b>	
<b>DO TRABALHO .....</b>	<b>37</b>
1.1 Breve síntese cronológica das dimensões de Direitos Humanos e sistemas de proteção .....	39
1.2 Geopolítica e as lutas por Direitos Humanos do Trabalho: da lei imperial ao geodireito .....	49
<i>1.2.1 O imperialismo estadunidense e seu impacto nos Direitos Humanos</i> .....	58
1.3 Neocolonialismo contemporâneo e a ideologia do subdesenvolvimento .....	64
<i>1.3.1 Do Direito ao Desenvolvimento ao Direito à Seguridade Econômica</i> .....	71
1.4 Globalização, capitalismo neoliberal e Direitos Sociais .....	87
1.5 A Teoria Crítica como ferramenta indispensável para a efetividade dos Direitos Humanos do Trabalho .....	95
<b>CAPÍTULO II:</b>	
<b>ENFOQUE DE DIREITOS HUMANOS E HERMENÊUTICA JURÍDICA .....</b>	<b>106</b>
2.1 Acepção do Enfoque de Direitos Humanos .....	106
2.2 Acepção de políticas públicas .....	110
2.3 Aplicação do Enfoque de Direitos Humanos às políticas públicas: caminho para a evolução da cidadania .....	113
2.4 Aplicação do Enfoque de Direitos Humanos à Hermenêutica jurídica: instrumento para a dignidade .....	116



<b>CAPITULO III:</b>	
<b>A COMPREENSÃO DO DIREITO HUMANO DO TRABALHO</b>	
<b>EM OPOSIÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO .....</b>	<b>138</b>
3.1 A ideologia: as origens, impropriedades e incongruências do contratualismo laboral .....	140
3.2 O anticontratualismo de Alain Supiot .....	157
3.3 As causas e os efeitos da ideologia do contrato de trabalho na construção da doutrina e da jurisprudência .....	163
3.4 A nova condição de <i>homo sacer</i> de quem trabalha e o inimigo no Direito do Trabalho da necropolítica ao necrodireito e à necrojustiça .....	170
3.5 Necessidade de mudança .....	186
<b>CAPÍTULO IV: EPÍLOGO</b>	
<b>ENFOQUE DE DIREITOS HUMANOS APLICADO</b>	
<b>À HERMENÊUTICA JUSLABORAL .....</b>	<b>188</b>
4.1 A fundamentalidade superior dos Direitos Humanos do Trabalho .....	188
4.2 As deficiências da jurisprudência trabalhista contemporânea para proteção dos Direitos Humanos do Trabalho .....	201
4.3 Visão jurisprudencial humanista .....	216
4.4 Aplicação do Enfoque de Direitos Humanos à hermenêutica juslaboral e a efetividade dos Direitos Sociais .....	221
<b>CONCLUSÕES .....</b>	<b>229</b>
<b>BIBIOGRAFÍA .....</b>	<b>247</b>
<b>WEBGRAFIA .....</b>	<b>275</b>
<b>ANEXO (LEGISLAÇÃO HISTÓRICA) .....</b>	<b>280</b>

<b>ABREVIATURAS E SIGLAS</b>	
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BIRD	Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
CDH	Conselho de Direitos Humanos (ONU)
CEDH	Convenção Europeia dos Direitos Humanos
CIDH	Corte Interamericana de Direitos Humanos
CADH	Convenção Americana de Direitos Humanos
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho (Brasil)
COVID-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
CT	Código do Trabalho (Portugal)
DH	Direito Humano
DADH	Declaração Americana de Direitos Humanos
DDHH	Direitos Humanos
DDHHT	Direitos Humanos do Trabalho
DESC	Direitos econômicos, sociais e culturais
DHT	Direito Humano do Trabalho
DUDH	Declaração Universal dos Direitos Humanos
EDH ou EBDH	Enfoque de Direitos Humanos (Enfoque baseado em Direitos Humanos)
EUA	Estados Unidos da América
FMI	Fundo Monetário Internacional
FSM	Fórum Social Mundial
LET	<i>Ley del Estatuto del Trabajador</i> (Espanha)
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OEA	Organização dos Estados Americanos
ODMs	Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
OIT	Organização Internacional do Trabalho
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Industrial
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
OTAN	Organização do Tratado do Atlântico Norte
OUA	Organização da Unidade Africana
OXFAM	<i>Oxford Committe for Famine Relief</i>
PIDCP	Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (ONU, 1966)

PIDESC	Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU, 1966)
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
STF	Supremo Tribunal Federal (Brasil)
TST	Tribunal Superior do Trabalho (Brasil)
TEDH	Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
TJUE	Tribunal de Justiça da União Europeia
URSS	União das Repúblicas Socialistas Soviéticas

## INTRODUÇÃO

Falar de Direitos Humanos e de Direito do Trabalho é falar de história, geopolítica, política internacional e nacional, de filosofia, de sociologia, de economia, de capitalismo, de globalização, de filosofia política, de antropologia e de filosofia do direito. Não há nenhuma possibilidade de leitura dos processos de lutas por Direitos Humanos e dos direitos econômicos e sociais, em particular, descontextualizada da história e de outras ciências sociais que seja capaz de permitir a compreensão da dimensão de sua importância para consecução da paz e da justiça social, pois seu entendimento demanda enfoque transdisciplinar. Assim, antes de mais nada, este trabalho faz uma pequena imersão histórico-sociológica (e contínuas revisitações, ao longo de seu desenvolvimento) para buscar as origens de problemas das relações de trabalho e propor mais um instrumento para ajudar a combater a desigualdade e a injustiça sociais, a partir de sua aplicação à hermenêutica jurídica laboral.

Alguns fatos ilustram a importância do tema para a atualidade: segundo dados da OXFAM<sup>1</sup>, desde 2015, um ano antes do previsto, o 1% mais rico do planeta, correspondente a exatas 62 pessoas, tinha riqueza equivalente a 99% da população mundial. Apenas 8 pessoas têm a mesma riqueza que a metade mais pobre do mundo, cifras que indicam uma desigualdade colossal e continuamente crescente, e que já é capaz de colapsar estruturas sociais, democracias e Estados de Direito, se nada for feito para mudar essa brutal realidade.

E, na dinâmica da vida, nada mais pedagógico passou no mundo atual do que a pandemia de COVID-19, obrigando a sociedade a repensar o papel do Estado na contemporaneidade, a dimensão da prestação de serviços públicos indispensáveis à vida digna, notadamente os de saúde e seguridade social, o papel dos sistemas de justiça e os mecanismos de solidariedade e manutenção de emprego e renda indispensáveis em tempos de crise. Nessa perspectiva, preciosas as palavras de BUTLER<sup>2</sup>:

*La desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo.*

Pois na verdade, os pobres, os vulneráveis e as pessoas trabalhadoras morrem em maior número, de modo que bairros pobres têm o maior número de

---

<sup>1</sup> Fonte: OXFAM, resumo executivo de janeiro de 2017, intitulado “Uma economia para os 99%”. [em linha]. Recuperado de <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620170/bp-economy-for-99-percent-161017-summ-pt.pdf?sequence=31&isAllowed=y>

<sup>2</sup> BUTLER (2020: 62).

mortos na pandemia, como tem acontecido em outros momentos na história da humanidade, conforme comenta AMSTER<sup>3</sup>, citando Rudolph Virchow<sup>4</sup>.

Assim, as necessárias reflexões pandêmicas especialmente compreendem voltar os olhos aos Direitos Humanos, e ao Direito do Trabalho e suas transformações contemporâneas que vêm ocorrendo a nível mundial, cuja dinâmica de aplicação não foi capaz, até o momento, de debelar a desigualdade social. Ao contrário, inúmeras reformas e retrocessos de interpretação vem causando mais insegurança à classe trabalhadora, constituinte da grande maioria da população.

Efetivamente, de acordo com a crítica de AVELÃS NUNES<sup>5</sup>, o Direito do Trabalho ou Direito dos Trabalhadores, inspirado no princípio do *favor laboratoris*, na proteção da parte mais fraca na relação de trabalho, até o presente momento tem assumido cada vez mais a sua verdadeira face de Direito dos Empresários. Neste compasso, o autor pontua que o Direito do Trabalho sempre “prometeu o que, por óbvio, não poderia (nem queria) cumprir”, pois, segundo sustenta, nas sociedades de classes, o poder está nas mãos do capital, ainda que haja proteção pelo direito, constituindo sua função (em referência de Aldacy Coutinho) de “reproduzir (função de reprodução), de ocultar a exploração do trabalho não pago (função de ocultação) e de mascarar a insuportável desigualdade decorrente de uma relação de poder/sujeição”<sup>6</sup>. Em especial citação de Adam Smith, AVELÃS NUNES afirma que o próprio pai do liberalismo revela uma desmitificação do “contratualismo”, ao dizer que o “contrato de trabalho” não é um contrato como os outros, dado que as partes não se encontram em posição de igualdade, não sendo os trabalhadores livres de contratar ou não contratar, uma vez que “vivem dos salários”, por não terem nada além da “sua força e habilidade de mãos”, o que significa que são, na verdade, pessoas economicamente (e não juridicamente) obrigadas a trabalhar<sup>7</sup>.

Conforma-se, pois, ao longo da história, uma doutrina e jurisprudência contratualistas ou formal positivistas, que impedem avanços sociais e consolidam o Direito como instrumento de dominação de classe, representando preocupante retrocesso em termos de Direitos Humanos, Direito do Trabalho e conquistas jurídicas das pessoas despossuídas, a ser combatido com a teoria e instrumentos adequados.

---

<sup>3</sup> AMSTER (2020) cita textualmente as palavras de Wirchow, em 1848, precisamente atuais: “As estatísticas médicas serão nosso padrão de medida; pesaremos vida por vida e veremos onde os mortos estão mais densos, entre os trabalhadores ou entre os privilegiados.” Obs.: traduzido.

<sup>4</sup> Rudolph Ludwig Karl Virchow (1821-1902) foi médico e político alemão, é considerado o pai da medicina social. Conforme AMSTER (2020), em seu tempo lutava por justiça social como solução, com pleno emprego, salários altos e educação universal.

<sup>5</sup> AVELÃS NUNES (2015: 579-580).

<sup>6</sup> COUTINHO (2007: 167-180), apud AVELÃS NUNES (2015: 579).

<sup>7</sup> SMITH (2013: 321-322), apud AVELÃS NUNES (2015: 579).

### a) Objeto de estudo, objetivos gerais e hipótese

Assim, para superação da desigualdade social e econômica em busca de consecução de justiça social, a presente pesquisa científica objetiva a superação do paradigma hermenêutico contratualista laboral, defendendo uma evolução da interpretação e aplicação do Direito do Trabalho que resgate a sua essência tuitiva, com nova orientação desde uma perspectiva humanística, com destaque aos direitos sociais como Direitos Humanos que são, em busca de sua efetividade.

A centralidade no valor social do trabalho e na pessoa trabalhadora enquanto ser humano nas relações de trabalho - e não uma mercadoria e nem um “objeto” de um contrato -, visa à garantia de sua dignidade, suplantando o modelo contratual obrigacional que tradicionalmente se utiliza na análise dessas relações. Nesta ótica, a investigação parte da essencialidade do trabalho como expressão da personalidade (Direito Humano) conectada à sociabilidade (esfera pública), tendo por referente, no particular, LUKÁCS<sup>8</sup>, que considera o trabalho como fato ontológico fundamental do ser social:

Visto que o trabalho, como base fundacional de toda socialização humana, mesmo a mais primitiva, tende a elevar as pessoas da esfera das necessidades biológicas puramente espontâneas e da sua satisfação puramente biológica, torna as posições teleológicas as determinantes em seu lugar, que por sua natureza são imediatas, dado um caráter alternativo será necessário que os reguladores sociais desde o início regulem o conteúdo das decisões alternativas de imposição teleológica de acordo com as respectivas necessidades sociais vitais.

(...)

O surgimento do ser social, o tornar-se-humano do ser humano, se conecta aqui de modo ontologicamente necessário. Todavia, desde o início de tal modo que o processo de tornar-se-humano, a adaptação ativa ao ambiente (ligada ao trabalho), desde o princípio implica uma

---

<sup>8</sup> LUKÁCS (2018: 16, 182). Obs.: livre tradução. Texto original:

*Da die Arbeit, als begründende Basis jeder, auch der primitivsten menschlichen Vergesellschaftung, den Menschen aus der Sphäre der rein spontan wirkenden biologischen Bedürfnisse, ihrer rein biologischen Befriedigung tendentiell heraushebt, an ihre Stelle die teleologischen Setzungen zu den bestimmenden macht, die ihrer Natur nach sofort einen alternativen Charakter erhalten, werden von aller Anfang an gesellschaftliche Regulatoren nötig, die die Inhalte der Teleologie setzenden Alternativentscheidungen den jeweils vitalen gesellschaftlichen Bedürfnissen entsprechend regeln.*

(...)

*Die Entstehung des gesellschaftlichen Seins, das Menschwerden des Menchen knüpft in seinsmäßig notwendiger Weise hier an. Freilich von Anfang an so, daß das Menschwerden, die aktive (arbeitsmäßige) Anpassung an die Umwelt von allem Anfang an eine Tendenz zum SichErheben über die biologische Determiniertheit, ein sukzessives, wenn auch nie vollendbares Sich-Loslösen von dieser in sich birgt.*

tendência de se elevar acima dessa determinação biológica, um gradual descolamento dela, ainda que jamais completo.

Para tal desiderato, sustenta-se a aplicação da teoria do Enfoque de Direitos Humanos, inicialmente concebida para aplicação às políticas públicas, e proposta nesta investigação como instrumento de incremento de maior efetividade aos direitos sociais quando acoplada na hermenêutica jurídica trabalhista. Ou seja, a hipótese deste trabalho propõe responder aos problemas de injustiça gerados pela visão tradicional contratual e positivista das relações laborais, e das normas que reduzem direitos econômicos e sociais, através da aplicação da doutrina do Enfoque de Direitos Humanos na hermenêutica jurídica laboral, desde o fundamento da Teoría Crítica dos Direitos Humanos.

Nesta ótica, o objetivo geral do trabalho é propor um novo paradigma hermenêutico baseado na interpretação e aplicação do Direito do Trabalho orientadas por uma visão humanística e não contratual ou juspositivista, como instrumento de correção da desigualdade na relação assimétrica de poder contida nas relações de trabalho e, também, para superação das leis que rebaixam as condições de trabalho, o que se propõe seja feito através do enfoque dos direitos sociais como Direitos Humanos para sua efetividade. Desta forma, conectando-se o valor social do trabalho à função social da propriedade, e com a visibilização da pessoa trabalhadora como ser humano nas relações de trabalho, através do EDH se almeja a tutela da dignidade humana em seu sentido mais amplo nas relações de trabalho.

Também se pretende elucidar as ideologias, sobretudo a do contratualismo laboral, que comprometem os Direitos Humanos do Trabalho e obstaculizam os avanços em relação à sua efetividade, para demonstrar a necessidade de superação desse dogma, a fim de evitar injustiças e buscar a efetiva concretização dos direitos econômicos e sociais.

Assim, o Enfoque de Direitos Humanos terá correlacionada sua importância com a aplicação na hermenêutica jurídica e, mais especificamente, na juslaboral, para a superação das deficiências sistêmicas na interpretação e aplicação do Direito do Trabalho.

Para tanto, faz-se necessário estruturar uma hermenêutica jurídica compatível e logo explicitar como o EDH contribui para a efetivação dos direitos sociais e do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho, aprimorando a interpretação e aplicação do Direito do Trabalho.

Por outro lado, é preciso também fundamentar a premissa de superioridade dos Direitos Humanos a outros bens jurídicos, tecendo particular consideração sobre a dignidade da pessoa humana, a função social da propriedade e o valor social do trabalho, como valores universalmente reconhecidos, para, aplicando o EDH, superar leis que rebaixem a condição social de quem trabalha, prevenindo que, do debilitamento do Estado em tempos de crise econômicas ou políticas, sejam geradas injustiças sociais decorrentes de produção de normati-

vidade precarizadora dos direitos sociais, ou de institucionalidades contrárias à classe trabalhadora.

Finalmente, é também objetivo desta investigação propor uma nova visão holística do trabalho humano, apresentando os direitos sociais e econômicos laborais como Direitos Humanos que são, tornando visível esta sua essência para uma perspectiva emancipatória da pessoa trabalhadora enquanto ser humano nas relações de trabalho. Portanto, em conclusão, serão apresentadas as mudanças que a visão humanista pode produzir na hermenêutica juslaboral, permitindo avançar na busca do equilíbrio nas relações entre capital e trabalho.

## **b) Justificativa, antecedentes e estado da questão**

Os conhecimentos práticos adquiridos na experiência profissional de 29 anos do autor no Ministério Público do Trabalho do Brasil, na Magistratura do Trabalho e no ensino do Direito do Trabalho, aliados à formação especializada e mestrados em Direitos Humanos e Direito do Trabalho, constituem a base para desenvolver a tese proposta de forma adequada, e que se espera contribuir de forma inovadora para a Ciência Jurídica.

Esta contribuição se pretende fazer através de uma releitura do Direito do Trabalho, formulada a partir de um viés crítico-humanista com conclusões sobre a supremacia dos Direitos Humanos como valores universalmente reconhecidos e a visão holística do trabalho humano na qual a pessoa trabalhadora deve ser foco de atenção, com o EDH, para a concretização de sua dignidade, em toda a sua dimensão, e, também, para o equilíbrio das relações entre capital e trabalho.

E inúmeras razões recomendam a perspectiva humanista das relações de trabalho: ora, a mirada contratualista laboral não faz mais do que perpetuar o abissal desequilíbrio entre o poder econômico do dador de emprego e a pessoa que necessita do trabalho para sobreviver – não há contrato, mas uma relação de necessidade que deve ser tutelada pelo princípio tuitivo do Direito do Trabalho, o princípio da proteção (*in dubio pro operario*, ou o *in dubio pro homine* dos DDHH), o qual não pode nem deve ser reduzido aos limites de uma ideologia “contratualista”, mas antes ampliado em conformidade ao seu desenvolvimento na Teoria Crítica dos Direitos Humanos, para estabelecer parâmetros de dignidade humana indispensáveis para o caminho do equilíbrio da relação entre capital e trabalho.

Nesta lógica de raciocínio, algumas categorias têm de ser revistas, pois não há falar em “mercado de trabalho”, uma vez que o trabalho não é uma mercadoria<sup>9</sup>. Em contrapartida, existe uma oferta pública de empregos sobre a qual incide, em maior ou menor grau, dependendo do Estado, regulação pú-

---

<sup>9</sup> Afirmação contida na Declaração de Filadélfia, da Organização Internacional do Trabalho, em 1944, que passou a integrar a Constituição da entidade. Fonte: sítio da OIT. [em linha]. Recuperado de: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilvia/documents/genericdocument/wcms\\_336957.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilvia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf)



blica, além do regramento internacional. E não há “contrato de trabalho”, mas Direito Humano ao trabalho, regulado na quase totalidade de sua dimensão por normas de ordem pública (*ius cogens*), internacionais e nacionais. As categorias “mercado de trabalho” e “contrato de trabalho”, como será abordado, integram a ideologia do contratualismo que invisibiliza o trabalho como um Direito Humano, e são reprodutoras de profunda desigualdade social.

Além disso, a criminologia aponta que as desigualdades econômicas aumentam a criminalidade violenta<sup>10</sup>, e é certo que a insuficiência de atuação do Estado nas relações de trabalho, permitindo ou tolerando a ocorrência de violações de direitos sociais que potencializam as desigualdades econômicas, é um fator de risco que pode potencializar a criminalidade, comprometendo a possibilidade de realização de justiça social.

Assim elucidam SACHSIDA–MENDONÇA<sup>11</sup>:

Gould, Weinberg e Mustard (2002), em um estudo para os Estados Unidos entre 1979 e 1997, concluem que variáveis econômicas são importantes para explicar a criminalidade. Especificamente, o nível salarial e a taxa de desemprego são importantes determinantes da taxa de crimes, com os salários tendo um papel de maior destaque. A tendência salarial chega a explicar mais de 50% do aumento tanto nos crimes de propriedade como nos crimes violentos. Tal resultado indica que uma queda de longo prazo nas taxas de crime depende de uma contínua melhora nos salários dos homens menos qualificados. (SACHSIDA–MENDONÇA, 2013: 12)

Esta situação alimenta um círculo vicioso concernente à exploração, desigualdade e violência, repetindo-se em movimento perpétuo enquanto não houver o devido respeito à condição humana nas relações de trabalho.

---

<sup>10</sup> RESENDE–ANDRADE (2011) comentam que Gary Becker, em 1968, e Isaac Ehrlich, em 1973, propõem a criminalidade como um processo de decisão individual no contexto dos modelos de escolha racional, sendo que a desigualdade de renda pode ser incorporada indiretamente no modelo, porquanto em caso de sucesso da ação criminal, a expectativa de transferência de renda da vítima para o criminoso seria maior em uma sociedade mais desigual. RESENDE–ANDRADE prosseguem afirmando que Mendonça, em 2003, buscou inserir a desigualdade de renda diretamente como um determinante da criminalidade, através da variável “renda de referência”, que condiciona as expectativas de consumo dos indivíduos. Conforme comentam:

A impossibilidade de atingir esta renda no mercado de trabalho formal gera incentivos para que os indivíduos recorram ao crime em busca de renda adicional. Este modelo capta, de alguma forma, o conceito de frustração ou privação relativa do agente, o qual é proporcional à diferença entre a renda de referência e a renda factível no mercado de trabalho. Uma maior desigualdade de rendimentos aumenta essa diferença e, por consequência, amplia a frustração. Nessa construção teórica introduz-se o índice de Gini como uma variável explícita do modelo, pois até então a desigualdade era tida como um determinante indireto do fenômeno da criminalidade. RESENDE–ANDRADE (2011)

<sup>11</sup> SACHSIDA–MENDONÇA (2013: 12).

Soma-se como agravante da realidade social atual a lógica econômica e a racionalidade da economia penetrando a vida contemporânea em todos os seus âmbitos e o Direito<sup>12</sup>, a impor o critério econômico<sup>13</sup> como único para avaliação das coisas<sup>14</sup>, produzindo amplas sequelas sociais, que partem da desvalia da educação (inutilidade do conhecimento não prático, não suscetível de apropriação econômica), mobilidade e precarização do trabalho (deslocando os meios de produção para regiões com maior oferta de mão-obra e menor nível de proteção jurídica), até provocar o retromencionado aumento da criminalidade, marginalização, pobreza e violência. De outro lado, a falta de políticas de assistência social, empregabilidade, renda mínima e educação públicas adequadas somente potencializam os problemas no conflito entre capital e trabalho que, quando atinge o Judiciário, costuma ser analisado sob viés contratualista ou juspositivista, e não humanista, aumentando essa violência econômica e sistêmica.

A Constituição da Organização Internacional do Trabalho, já em 1919<sup>15</sup>, no final da Primeira Guerra Mundial, declarou que a paz, para ser universal e duradoura, deve assentar sobre a justiça social, apontando que as condições de trabalho que implicam miséria e privações devem ser combatidas.

A verdade é que, no primeiro centenário desde a criação da OIT, a fantástica promessa capitalista de igualdade de oportunidades em um sistema supostamente democrático, de ordem liberal, inserido numa economia de mercado, colide duramente com as insignificantes (e raras) possibilidades reais – e que fenecem mais a cada dia –, das classes despossuídas de obterem acesso aos bens de consumo ou mobilidade social (a não ser para baixo). Assim, vários fatores neste sistema impedem a vida digna, desde a desigualdade na repartição de riqueza (propriedade, capital), passando pela falta de oportunidades de formação e de acesso à educação crítica, inacessibilidade ao mercado de capitais (capitalismo financeiro restrito às grandes fortunas) etc. Neste perverso sistema, as pessoas são lançadas numa sociedade frustrante (de realidade deplorável, de

---

<sup>12</sup> SUPIOT (2020) descreve a perversão jurídica feita pelo critério de utilidade econômica com maestria:

*En la actualidad, este hundimiento del orden jurídico es un corolario de la gobernanza por los números, lo cual lleva a someter el Derecho a cálculos de utilidad, allí donde el liberalismo clásico sometía los cálculos de utilidad al imperio del Derecho. Una vez asimilado como un producto competitivo en un mercado de normas, el Derecho se metamorfosea en pura técnica, evaluado en función de la eficacia, excluido de toda consideración de justicia.*

<sup>13</sup> HABERMAS (2002: 114) explana que o utilitarismo universalista representa um sistema moral conforme aos mesmos critérios da lei natural, de modo que todas as ações estratégicas que maximizam o prazer ou as vantagens de um indivíduo são permitidas na medida em que sejam compatíveis com as oportunidades de outro indivíduo maximizar seu prazer ou vantagem.

<sup>14</sup> Conforme ALEMÁN (2015), em artigo intitulado “*Hegemonía y Poder Neoliberal*”, o discurso capitalista que dá suporte ao poder neoliberal se apresenta com a potência de representar tudo e levar todas as singularidades e as diferenças à totalidade do circuito circular da mercancia.

<sup>15</sup> Afirmações contidas no preâmbulo da Constituição da OIT.

expectativas inexistentes) desfilando contrastes extremos entre a miséria e a riqueza bilionária ou trilionária das elites, bancos, monopólios e corporações multinacionais que detêm o poder econômico e a empregabilidade (biopoder ou poder de vida sobre os dependentes economicamente de um emprego), ditando a precarização das condições de trabalho, ou seja, das classes despossuídas que nada mais possuem do que a própria força de trabalho para sobreviver, e que passam a constituir, cada vez mais, uma massa de precariado (classe proletária precarizada).

Portanto, a maioria da população vivencia uma situação deficitária clamando por trabalho e renda dignas. Esta situação corresponde a uma violência sistêmica que o Direito do Trabalho não pode continuar assistindo de forma inerte, mas antes intervir como instrumento de combate e atuação efetiva para a concretização de justiça social.

Não por acaso, na Declaração do Centenário da OIT<sup>16</sup>, em 2019, se proclamou que a abordagem ao futuro do trabalho deve estar centrada no ser humano.

Há urgência, pois, na necessidade de compensação das desigualdades sociais e econômicas pelo Estado, sendo de suma importância o cumprimento deste papel por suas instituições, o que pode ser alcançado através da aplicação do Enfoque de Direitos Humanos ao Direito do Trabalho, como forma de equilibrar as gigantescas assimetrias de poder na sociedade provocadas pela globalização e pelo capitalismo neoliberal hegemônico das últimas décadas<sup>17</sup>.

Neste ponto, sempre oportuna a observação de HERRERA FLORES (2007), ao afirmar que um Direito Humano fundamental se constitui exatamente nos próprios meios e condições necessárias para pôr em prática os processos de luta pela dignidade humana. A investigação propõe alcançar, no âmbito do Direito,

---

<sup>16</sup> Declaração contida no documento final do centenário da OIT, por ocasião da 108ª Conferência Internacional do Trabalho, em 2019. Fonte: sítio da OIT.. Recuperado de [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms\\_706928.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_706928.pdf)

<sup>17</sup> CARCANHOLO-BARUCO (2008: 3) apresentam a sociedade pós-industrial, formada a partir da segunda metade do Século XX e caracterizada por empregar o trabalho mais na prestação de serviços do que no setor industrial, com destaque para o comércio/consumo, as finanças, o lazer, o ensino, a pesquisa científica, em processos produtivos pós-modernos que não exigem mais fábricas com linhas de montagem, mas processos programados pela tecnociência. Em sua conclusão, o fruto dessa hegemonia capitalista neoliberal a nível mundial redundava na condição pós moderna, exercida pelos prazeres obtidos a partir do consumo de bens e serviços, arte etc, operando o mercado como mediador entre os indivíduos e o caráter social de seus relacionamentos com seus semelhantes em que:

...a sociabilidade mercantil também é totalizante e opressora, no sentido de que obriga os indivíduos a se submeterem à sua lógica global, sob pena de negar a existência social a indivíduos que nela não participem, por vontade própria ou - o que é mais comum - pelo fato de que o sistema capitalista não consegue absorver toda a população que não tem outra alternativa para sobreviver, a não ser vendendo sua força de trabalho. (CARCANHOLO-BARUCO, 2008: 15).

um instrumento para tal desiderato, o Enfoque de Direitos Humanos, a partir de sua aplicação à hermenêutica jurídica, em especial, a laboral.

Dada a complexidade dos Direitos Humanos, alcançar uma nova visão libertária que supere a interpretação fundamentalista (como menciona SUPLOT<sup>18</sup>), o jusnaturalismo, o juspositivismo ou o individualismo, não é tarefa simples, nem tampouco obter o implemento de uma cultura adequada de DDHH. Para tal, é necessário despir-se de conceitos arraigados em conteúdos jurídicos ditos de “ordem programática”, incorporar o senso de indispensabilidade de efetivação e concretização dos DDHH, e, a partir daí, encontrar os caminhos para tornar todos e todas sujeitos plenos de direitos e partícipes ativos de sua emancipação humanitária. Isto representa uma mudança total de paradigmas, nada mais nada menos.

No mundo contemporâneo, o trabalho não pode mais ser visto como um contrato, mas sim como um Direito Humano: sem ele, na hegemonia do regime de mercado, para a pessoa despossuída, não há condições de alcance da dignidade humana, pois somente através de sua força de trabalho conseguirá renda para viver, que depende de uma empregabilidade cada vez mais escassa e menos remunerada ou, melhor dito, precarizada. A dimensão que se dá a este eixo central da relação de trabalho - prestação de serviços *versus* salário -, determina o tipo de Direito que se aplica: ou bem um Direito Privado pelo qual se trataria de uma relação de compra e venda da mercadoria trabalho (separando o fenômeno da essência, ou o ser do objeto, ou seja, a pessoa de sua força de trabalho), ou um Direito Público conformado por normas de Direitos Humanos (*ius cogens*) que, na assimetria de poder desta relação, tutela a parte mais fraca preconizando a supremacia da pessoa e de sua dignidade, cujo trabalho há de ter valor superior ao do capital.

E é neste exato sentido que deve ser abandonada a visão tradicional e hegemônica do Direito do Trabalho de que a pessoa “vende” sua força de trabalho e o poder econômico (empregador, dador de trabalho) a “compra”. Trata-se, na verdade, de um processo de legitimação da exploração das pessoas pelo capital já naturalizado no discurso hegemônico e que deve ser urgentemente superado para se alcançar uma perspectiva de humanização das relações de trabalho e busca da dignidade da pessoa trabalhadora.

---

<sup>18</sup> SUPLOT (2012).

Ora, desde a Declaração de Filadélfia de 1944<sup>19</sup> a OIT já estabeleceu que “o trabalho não é uma mercadoria”. Aliás, o item I, letras *a* e *c* da referida Declaração preconizam um norte muito claro de equalização entre capital e trabalho, pelo qual todos os seres humanos têm o direito de assegurar o bem-estar material e o desenvolvimento espiritual dentro da liberdade e da dignidade e que quaisquer planos ou medidas, em caráter nacional ou internacional, em especial os de caráter econômico e financeiro, devem ser considerados sob esse ponto de vista e somente aceitos, quando favorecerem, e não entravarem, a realização desse objetivo principal.

Trata-se de objetivo internacional desprezado até o momento aqui, devido à já citada contratualização das relações de trabalho que, por sua vez, provoca a normalização jurídica da inserção da pessoa que trabalha dentro do campo de um direito de obrigações, privado, com caráter meramente civilista, e não humanista e público como deveria ser. Obrigações estas que tradicionalmente correspondem à paga de remuneração pelo empregador e a da pessoa trabalhadora de prestar serviços, constituindo o restante, no pensamento hegemônico ideológico contratual, de regramentos atribuídos ao âmbito dito “privado” das relações de trabalho, o qual admitiria somente algumas exceções de ordem pública, como as relativas ao meio ambiente de trabalho (normas de saúde, segurança, medicina e higiene do trabalho), quando, então, intervém o Poder Público.

---

<sup>19</sup> A Declaração de Filadélfia integra a Constituição da OIT em instrumento ratificado pelo Brasil e demais países membros, sendo de observância obrigatória, assim, não se trata de *soft-law*. Pela sua importância para este estudo, transcreve-se parcialmente seu conteúdo:

DECLARAÇÃO REFERENTE AOS FINS E OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, reunida em Filadélfia em sua vigésima sexta sessão, adota, aos dez de maio de mil novecentos e quarenta e quatro, a presente Declaração, quanto aos itens e objetivos da Organização Internacional do Trabalho e aos princípios que devem inspirar a política dos seus Membros.

I A Conferência reafirma os princípios fundamentais sobre os quais repousa a Organização, principalmente os seguintes:

- a) o trabalho não é uma mercadoria;
- b) a liberdade de expressão e de associação é uma condição indispensável a um progresso ininterrupto;
- c) a penúria, seja onde for, constitui um perigo para a prosperidade geral;
- d) a luta contra a carência, em qualquer nação, deve ser conduzida com infatigável energia, e por um esforço internacional contínuo e conjugado, no qual os representantes dos empregadores e dos empregados discutam, em igualdade, com os dos Governos, e tomem com eles decisões de caráter democrático, visando o bem comum. (Fonte: sítio da OIT. [em linha]. Recuperado de [http://www.ilo.org/brasil/comeca-a-oit/WCMS\\_336957/lang--pt/index.htm](http://www.ilo.org/brasil/comeca-a-oit/WCMS_336957/lang--pt/index.htm))

No entanto, desde o final da Segunda Guerra Mundial, essa leitura privatista das relações entre capital e trabalho não é mais possível. A notável importância da Declaração de Filadélfia se deve à representação de um marco humanista que orienta o final da exploração do trabalho como uma mercadoria em direção à centralização das relações entre capital e trabalho na pessoa do trabalhador (reafirmada na Declaração do Centenário da OIT de 2019), que jamais pode ser visto como mercadoria que se negocie livremente sob a égide da *Lex Mercatoria*.

A visão contratualista das relações de trabalho é, assim, uma criação artificial derivada das revoluções burguesas, que encontravam no contrato a forma jurídica adequada para a sociedade mercantil de então, ao passo que o capitalismo contemporâneo, dominado pelo pensamento hegemônico neoliberal, o usa como instrumento de legitimação de um sistema de exploração contínua das pessoas, tentando resgatar o conceito de trabalho como mercadoria para dele poder apropriar-se e livremente dispor.

Neste norte, a proposta de investigação busca acoplar a doutrina do Enfoque de Direitos Humanos à hermenêutica jurídica laboral para a efetividade dos direitos econômicos e sociais, enfrentando a questão principal de superar a visão contratualista e juspositivista na interpretação e aplicação do Direito do Trabalho, e de leis que degradam a condição social da classe trabalhadora, em tempos de globalização e pós-modernidade, visando a fundamentar um novo paradigma humanista para a efetividade dos direitos sociais e realização de justiça social.

Com a bibliografia previamente pesquisada e a aportada nesta investigação, não se identifica o desenvolvimento do EDH para aplicação na hermenêutica jurídica, pois a doutrina correspondente se desenvolveu em torno das políticas públicas, do desenvolvimento e da cooperação, o que garante o caráter inovador do tema.

Por fim, a adequada inserção do EDH no conteúdo da Declaração de Filadélfia de 1944 e do Centenário da OIT de 2019, de centralidade do trabalho na pessoa, o legitimam como um novo instrumento para operacionalizar este objetivo internacional.

Como antecedentes, cabe citar a apresentação de DUSSEL<sup>20</sup> sobre os sistemas de exploração de trabalho humano desde a antiguidade.

DELEUZE<sup>21</sup>, por sua vez, comenta que a desterritorialização do trabalho originada no final do feudalismo irá produzir a figura do trabalhador desnudo, no sentido do proprietário somente de sua força de trabalho frente ao capital.

De outra parte, FOUCAULT<sup>22</sup> denunciava que o par-vigiar castigar se instaura como relação de poder indispensável para a fixação dos indivíduos no aparato de produção e da constituição das forças produtivas, meio de coerção

---

<sup>20</sup> DUSSEL (2013: 73-75).

<sup>21</sup> DELEUZE (2017: 263-265).

<sup>22</sup> FOUCAULT (2016: 231).



indispensável para essa integração. Ainda, segundo FOUCAULT<sup>23</sup>, há uma economia política das ilegalidades, na qual a classe trabalhadora é dominada pela lei como instrumento de gestão.

Por sua vez, NEGRI<sup>24</sup> menciona a economia globalizada que enclausura a mobilidade biopolítica do trabalhador, permitindo sua exploração, enquanto o sistema está produzindo o que BAUMAN<sup>25</sup> chamava de pessoas ou seres redundantes, em referência a STIGLITZ (2012), algo semelhante ao *homo sacer* de AGAMBEN<sup>26</sup>, pessoas com uma vida matável e insacrificável, resultando neste contexto a pessoa que trabalha, cuja vida nua ligada ao poder soberano (poder econômico) é passível de ser morta impunemente.

TOUSSAINT<sup>27</sup> também coincide na denúncia do sistema de exploração do trabalho, afirmando que, atualmente, em nome do neoliberalismo, se pretende anular as conquistas das pessoas trabalhadoras e das oprimidas em geral.

ZAFFARONI<sup>28</sup> menciona a perda do poder de mediação dos Estados entre capital e trabalho, ante a liberdade e anonimato do capital financeiro na atualidade.

Da mesma forma, FARIÑAS DULCE (2005) fala no mercado sem cidadania como uma falácia da globalização neoliberal.

Nessa realidade, fica perceptível que uma visão contratualista tradicional, que garante a execução de contratos por conta do capital (SUPIOT, 2012), somente perpetua as assimetrias de poder presentes nas relações de trabalho (DELEUZE, 2017), pois, como ensina CRUZ CASTRO<sup>29</sup> (2004, p. 43), os valores da cultura dominante também legitimam a impunidade.

Em contrapartida, como aponta RODRÍGUEZ GARAVITO<sup>30</sup>, os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos foram adotados pelo Conselho de Direitos Humanos em 2011 e se tornaram uma plataforma global de ação, devendo ser respeitados pelas empresas, no mínimo os elencados na DUDH e na Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT. A própria OCDE adotou os Princípios da ONU.

Por outras palavras, outra realidade é possível observando-se os Direitos Humanos do Trabalho. Assim, o ponto de partida é fazer o que defendeu HERRERA FLORES (2002), ou seja, tornar visíveis os Direitos Humanos, especificamente tornar visíveis os Direitos Humanos no Trabalho, para a compreensão de

---

<sup>23</sup> Idem, *ibidem*, pp. 267-268, 326.

<sup>24</sup> NEGRI (2007: 127).

<sup>25</sup> BAUMAN (2014: 25).

<sup>26</sup> AGAMBEN (2002: 121).

<sup>27</sup> TOUSSAINT (2012: 52).

<sup>28</sup> ZAFFARONI (2017: 33).

<sup>29</sup> CRUZ CASTRO (2004: 43).

<sup>30</sup> RODRÍGUEZ GARAVITO (2018: 29, 109).

que o Direito do Trabalho trata de valores de primeira grandeza, bens jurídicos universais muito maiores do que simples obrigações contratuais.

Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seus arts. 22 e 23, vem afirmar que toda pessoa tem direito à satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais essenciais à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade; o direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições de trabalho justas e satisfatórias, e a uma existência conforme à dignidade humana e que será complementada, se necessário, por quaisquer outros meios de proteção social.

E uma primeira abordagem ao meio ambiente do trabalho pode ser identificada no PIDESC de 1966, cujo art. 7º garante o direito de toda pessoa ao gozo de condições de trabalho equitativas e satisfatórias, que assegurem, em especial, condições de existência dignas, a segurança e a higiene no trabalho. Já o art. 12 do referido documento prevê o direito de toda pessoa de desfrutar do mais alto nível possível de saúde física e mental, com as medidas necessárias para a melhoria, em todos os aspectos, da higiene do trabalho e do meio ambiente, a prevenção e o tratamento das enfermidades profissionais e a luta contra elas.

Além disso, o Princípio 1 da Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, de 1972, estabelece que a pessoa tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao gozo de condições de vida adequadas em um ambiente de qualidade que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar.

De acordo com GHAI<sup>31</sup>, o conceito de uma vida digna pode ser conectado ao conceito de trabalho decente desenvolvido posteriormente em 1999, por ocasião da 87ª Conferência Internacional do Trabalho, da OIT, no sentido de que as pessoas têm direito a um trabalho de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, para evitar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Ademais, o conceito de trabalho decente está também presente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Ainda, corroborando esse caráter universal dos direitos sociais, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia de 2000 contém diversos preceitos aplicáveis, como a dignidade humana, o direito à vida, à integridade física e mental da pessoa, e o direito das pessoas de trabalhar em condições que respeitem sua saúde, segurança e dignidade.

Por conseguinte, seguindo essa lógica evolutiva de Direitos Humanos, há necessidade de alteração da hermenêutica do Direito do Trabalho, porquanto o raciocínio desenvolvido com base em sustentáculos privatistas e obrigacionais de um suposto “contrato de trabalho” não se coaduna com a natureza jurídica dos Direitos Humanos do Trabalho.

O ponto crucial se estrutura na adequação da hermenêutica jurídica laboral à disciplina dos Direitos Humanos. No particular, o EDH, teoria inicialmente desenvolvida para aplicação em políticas públicas (conforme ABRAMO-

---

<sup>31</sup> GHAI (2003: 126).



VICH–PAUTASSI, 2006; BENÍTEZ, 2007; GIMÉNEZ MERCADO–VALENTE ADARME, 2010; GÜENDEL GONZALEZ, 2010; CUNILL GRAU, 2010; VÁZQUEZ–DELAPLACE, 2011), e posteriormente expandido para o tema do desenvolvimento, pode ser acoplado à hermenêutica jurídica do trabalho como forma de operar essa adequação.

A partir da aplicação da Teoria Crítica dos Direitos Humanos com base nos apontamentos de GALLARDO (2010), HERRERA FLORES (2002), WOLKMER (2017), MASCARO (2017) e outros, a visibilização dos Direitos Humanos do Trabalho se estabelece como premissa para a pretendida transformação da realidade e sua concretização por meio da aplicação do EDH, que, segundo CECCHINI (2016) e o ARARTEKO (2012), deve ser utilizado para a proteção social.

Especificamente sobre o EDH, ABRAMOVICH<sup>32</sup> ensina que a ferramenta contempla setores excluídos e as pessoas na ótica de sujeitos de direitos que obrigam ao Estado, mudando a lógica de elaboração de políticas públicas. A mesma linha de raciocínio pode ser usada, pois, para mudar a lógica de elaboração de doutrina e jurisprudência laborais.

Portanto, tendo em consideração esses antecedentes, a investigação adotar uma perspectiva teórica crítica do Direito, uma vez que parte do questionamento da visão da hermenêutica contratualista e positivista tradicional, para chegar a uma visão garantidora dos Direitos Humanos, em oposição ao utilitarismo econômico do Direito (POSNER, 2010), que hoje estrutura a aplicação do neoliberalismo como doutrina hegemônica em torno do Direito (HABERMAS, 2002), em entendimento que o configura como um mero aparato garantidor de contratos (SUPIOT, 2012) na perpetuação das relações de poder que os fundamentam (DELEUZE, 2017), em especial, nas relações de trabalho.

Assim, os conceitos teóricos que serão trabalhados ao longo desta tese terão como base a Teoria Crítica do Direito, com ênfase em autores desde a Escola de Frankfurt, como MARCUSE (2018), que desenvolve uma interessante e atual crítica ao capitalismo, e na sequência de linha crítica, FOUCAULT (2018), que traz a visão da sociedade fiscalizadora e punitiva, e DELEUZE (2017) denunciando as incoerências capitalistas que geram desigualdade social na primazia do capital sobre o valor do trabalho na configuração da atual sociedade de controle – configurando-se as duas formas sociais como campo próprio da aplicação do direito dos contratos. E na atualidade, surge também, segundo HAN (2012), a sociedade do cansaço, com outra subjetivação, a do sujeito do rendimento, que traz em seu bojo formas ainda mais precárias de contratação.

Serão recorrentes ao longo de todo o trabalho autores críticos contemporâneos como AGAMBEN, AVELÃS NUNES, BAUMAN, BECK, BOURDIEU, HARDT, HARVEY, HOBBSAWM, MBEMBE, NARVÁEZ HERNÁNDEZ, NEGRI, STREECK, WOOD, entre outros.

Na linha anticontratualista, será dado especial destaque a GOMES (1952), SUPIOT (2012) e DUSSEL (2013).

---

<sup>32</sup> ABRAMOVICH (2006: 36).

Sob outra perspectiva, a investigação também se desenvolverá desde a Teoria Crítica dos Direitos Humanos, tendo por base os estudos de HERRERA FLORES (2002), que destaca a necessidade de tornar os Direitos Humanos e os processos de lutas sociais visíveis para sua concretização, com a argumentação estruturada de FERRAJOLI (2009) no tocante à sua fundamentalidade, e a atualidade de ALSTON (2017). Ainda, novos aportes serão traçados desde a perspectiva humanista crítica da América Latina de WOLKMER (2017), GALLARDO (2010), ZAFFARONI (2017) e BAILONE (2017), e a linha crítica e marxista do capitalismo, globalização e neoliberalismo de DUSSEL (2013), SAXE-FERNÁNDEZ (2001) e MASCARO (2017).

No campo da hermenêutica jurídica propriamente dito, a fim de melhor estruturar a tese, propõe-se desenvolver o tema com base em argumentos de GADAMER (2012), FERRAJOLI (2009), ZAFFARONI (2017) e, principalmente, HERRERA FLORES (1985) e LUKÁČZ (2018), para conectá-los ao EDH e, ainda, enriquecê-los com os fundamentos de SUPLOT (2015) e sua argumentação relativa à Declaração de Filadélfia e seu legado para o Direito do Trabalho.

O somatório da análise desse conhecimento crítico e humanista, por sua vez, se propõe, em conclusão, a responder aos problemas de injustiça gerados pela tradicional visão contratual e positivista das relações de trabalho, com base na Teoria Crítica dos Direitos Humanos e na aplicação da doutrina do EDH à hermenêutica jurídico-laboral.

Os casos de referência para estudo contribuirão com elementos comuns para agregar à prática dessa nova perspectiva e, também, para superação das deficiências atuais na tutela dos Direitos Humanos do Trabalho.

Destarte, a hermenêutica jurídica desenvolvida por esta investigação e direcionada ao âmbito laboral, parte da Teoria Crítica dos Direitos Humanos, propondo uma nova mirada ao Direito do Trabalho através do EDH como um instrumento de centralização da interpretação e aplicação do Direito do Trabalho nas pessoas trabalhadoras como meio de efetivação dos direitos sociais e de concretização de justiça social.

### **c) A perspectiva humanista para as relações de trabalho**

A cortina de fumaça gerada por uma interpretação fundamentalista (jusnaturalismo, o juspositivismo, o individualismo, o utilitarismo etc., e, especialmente, o contratualismo), obnubla a visão dos direitos laborais como Direitos Humanos, frustrando, também, a incorporação de uma cultura adequada de Direitos Humanos do Trabalho. Para tal, é necessário despir-se de conceitos arraigados em máscaras jurídicas de conteúdo meramente portador de opressão, incorporando o senso crítico de indispensabilidade de efetivação e concretização dos DDHH, e, a partir daí, encontrar os caminhos para tornar todos e todas sujeitos plenos de Direitos Humanos Laborais e partícipes ativos de sua emancipação humanitária nas relações com o capital. Se trata de uma mudança total de paradigmas. Não é um caminho fácil, mas está ao pleno alcance, desde

que se busque, com consciência, construir os meios e instrumentos que garantam efetividade concreta sob uma ótica holística dos DDHH e orientada por um pensamento plural, inclusivo de todas as culturas, do diferente, das minorias, e sempre considerando este processo como uma produção humana – de lutas sociais -, e, assim, também permeável a erros e acertos que se devem detectar e contemporizar a tempo e modo ao longo do processo de seu desenvolvimento. Sem reconhecer as diferenças culturais existentes entre os seres humanos e que as imperfeições fazem parte da vida e da história humanas, como também as lutas e os conflitos, ineficaz se torna a busca da implementação efetiva e concreta dos Direitos Humanos do Trabalho.

De modo que, ao falar de efetividade e exercício de Direitos Humanos, não cabe nenhuma espécie de purismo, fundamentalismo ou homogeneidade na matéria, e nem tampouco uma visão restrita a um imaginário utópico, porquanto, ao fim e ao cabo, serão pensamentos absolutamente inadequados à diversidade humana e insuficientes à concretização dos DDHH, retroalimentando o círculo vicioso do sistema que acentua os bolsões de miséria e exclusão social.

Por outras palavras, não se pode conceber os Direitos Humanos no mundo contemporâneo a partir de uma visão dissociada do pluralismo social e da conflitividade humana, portanto, há necessidade de construção de uma nova plataforma filosófico-teórica que permita a reestruturação doutrinária capaz de universalizá-los como práticas sociais emancipadoras, em prol da dignidade humana, sempre por um enfoque global e respeitador da diversidade.

A pauta é, pois, com uma visão holística e crítico-tutelar de viés humanista, com enfoque transdisciplinar, estabelecer um marco orientador do Direito do Trabalho, consubstanciado na primordialidade da implementação e efetivação de direitos sociais enquanto Direitos Humanos para cumprimento do Estado de Direito, garantia da ordem democrática e aprimoramento da cidadania. Implementar uma cultura de Direitos Humanos como paradigma ético das relações de trabalho e das relações com o poder público.

Nesta perspectiva, a doutrina do Enfoque de Direitos Humanos (EDH) se apresenta como um novo modelo com aptidão para a mudança, para o incremento de uma cultura de Direitos Humanos que signifique, no futuro próximo, a paz social e, sobretudo, o bem-estar das pessoas e em sua relação com o meio-ambiente e os seres vivos, pelo convívio harmônico da humanidade no planeta, celebrando a diversidade de raças e a ecologia, pautas constitutivas da visão integral humanística.

Ora, entender os Direitos Humanos sob a ótica da sua integralidade, interdependência e universalidade, ou seja, que o descumprimento de um compromete o dos demais, significa abrir uma nova perspectiva de sua observância e aplicação, não só em relação às políticas públicas, desenvolvimento e cooperação, mas também ao Direito do Trabalho e às decisões judiciais trabalhistas, especialmente em relação aos direitos econômicos e sociais por sua qualidade de Direitos Humanos de primeira grandeza cujos bens tutelados (direito a um trabalho digno com renda adequada, habitação, transporte, saúde, educação,

assistência social etc.) são imprescindíveis para a eficácia de todos os demais DDHH.

Como diz HERRERA FLORES<sup>33</sup> nem a justiça, nem a dignidade e nem os Direitos Humanos procedem de essências imutáveis ou metafísicas que fiquem além da ação humana para construir espaços de desenvolvimento das lutas pela dignidade. De modo que, observadas novas necessidades, novos tempos e falhas no sistema jurídico contemporâneo que comprometem a concretude e eficácia dos Direitos Humanos, se faz urgente uma nova visão de libertação da dogmática e centrada numa leitura holística da dignidade humana, que contemple, sobretudo, a efetivação concreta de todos os DDHH, cuja divisão em primeira, segunda, terceira ou até quarta e quinta gerações/dimensões, como sustentam alguns autores, não tem maior relevância do que a de uma mera classificação, dadas as características gerais de universalidade, irrenunciabilidade, inalienabilidade, interdependência e integralidade. É este o sentido de tratar as políticas públicas, a cidadania, a interpretação e aplicação do Direito e a atuação judiciária desde o Enfoque de Direitos Humanos: centralizar as ações estatais nas pessoas.

Por conseguinte, centralizar a hermenêutica jurídica nas pessoas, notadamente a laboral, para efetividade dos direitos econômicos e sociais, significa abandonar a visão contratualista de direitos oriunda do capitalismo em prol de uma visão humanística e holística, apta a ajudar no reequilíbrio nas relações entre capital e trabalho.

De modo que, frise-se, o estudo do tema de investigação é de fundamental importância para a concretude e efetividade dos direitos sociais e justiça social. Significa propor algo novo, como dito, em matéria de hermenêutica jurídico-laboral, para a reinterpretção e aplicação do Direito do Trabalho conforme os Direitos Humanos.

Assumir uma posição humanística e libertária, de viés orientado por direitos universalmente consagrados, permite ao intérprete pautar-se pela dignidade da pessoa e pelo valor social do trabalho como elementos fundantes da análise das relações de trabalho em absoluta superioridade da propriedade (capital), cuja função social não se cumpre sem a dimensão da dignidade humana.

A libertação da visão contratual das relações de trabalho, que orienta, atualmente, a aplicação dos direitos econômicos e sociais – nos quais se localizam os Direitos Humanos do Trabalho, permitirá alcançar maior equilíbrio nas relações entre capital e trabalho, prestigiando o valor humano sobre o vínculo estabelecido entre quem presta serviços e quem os remunera, exorbitando de um liame privatista que sempre favorece o poder econômico contratante.

É nesta direção que este trabalho busca acoplar a atual doutrina do Enfoque de Direitos Humanos (EDH), que se desenvolve no âmbito das políticas públicas, desenvolvimento e cooperação, para a hermenêutica trabalhista, advindo daí o seu ineditismo. E sua atualidade pode ser captada das palavras de

---

<sup>33</sup> HERRERA FLORES (Rio de Janeiro, 2004: 68).

ALSTON<sup>34</sup>, para quem “os defensores de direitos humanos precisam repensar de modo urgente diversos de seus pressupostos, reavaliar suas estratégias e ampliar seu alcance, sem abandonar princípios básicos”.

Como assevera Maffesoli<sup>35</sup>:

É esse “mais que um” que se mostra difícil de apreender e que, no entanto, é a base de toda vida social pós-moderna. E para além do que é oficialmente pensado (além dos conformismos habituais), para além do que constitui a ação política habitual, é preciso acionar uma visão penetrante que, como um raio laser, saiba como atravessar todas essas novas maneiras de ser, agir e pensar que constituem a socialidade contemporânea.

É porque a paixão está solta no ar do tempo, para o melhor e o pior, que o “pathos” se propaga no ritmo dos novos meios de comunicação interativos (‘telepatia’) e é por isso que existe uma cruel necessidade de mudar nossos paradigmas de interpretação. (MAFFESOLI, 2009: 124).

Esta é a importância da investigação ao propor nova orientação de interpretação e aplicação do Direito do Trabalho, prestigiando o ser humano nas relações laborais.

Por fim, os ensinamentos de MARCUSE<sup>36</sup> lembram que qualquer teoria crítica da sociedade deve buscar responder ao julgamento de que a vida humana vale a pena ser vivida, ou de que pode ser tornada digna de viver, e o julgamento de que, em determinada sociedade, há possibilidades de melhorar a vida humana como também os modos e meios específicos de realizar estas possibilidades. Assim, afirma o autor que a análise crítica deve demonstrar a validade objetiva desses julgamentos, com embasamento empírico. A esta tarefa se propõe esta investigação, de sustentar o EDH como um desses meios capazes de tornar a vida das classes despossuídas uma vida digna.

---

<sup>34</sup> ALSTON (2017: 268).

<sup>35</sup> MAFFESOLI (2009: 124).

<sup>36</sup> MARCUSE (1973: 14-15).

## CAPÍTULO I

### TEORIA CRÍTICA DOS DIREITOS HUMANOS E OS DIREITOS HUMANOS DO TRABALHO

A mera positivação dos Direitos Humanos, ainda que alçados à categoria de norma constitucional, em vários países, não tem sido capaz de garantir o seu pleno gozo e efetividade por todas as pessoas, especialmente pela ótica juspositivista dogmática.

Isso significa que as limitações hermenêuticas tradicionais impostas à sua aplicação, concernentes à visão desta categoria de direitos como normas meramente programáticas ou que devem ser interpretadas à luz da ótica da reserva do possível<sup>37</sup>, constitui sério embaraço à efetividade dos direitos sociais.

Neste compasso, trazendo uma crítica à Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, HERRERA FLORES<sup>38</sup> lembra que a mesma estabelece os Direitos Humanos como um “ideal a conseguir”, enquanto a situação real do ser humano de ter direitos é bem diferente de poder exercê-los. O autor segue trabalhando a problemática em três planos: no primeiro, estabelece que DDHH são processos ou práticas sociais dirigidas à obtenção de bens materiais e imateriais no processo de humanização; no segundo, que lutamos por DDHH porque necessitamos de condições materiais que permitam obter os bens necessários à existência; e no terceiro, que os objetivos das lutas e dinâmicas sociais em matéria de Direitos Humanos devem ser vistos pelo acesso e distribuição geral e justa da dignidade humana. Conclui dizendo que o conteúdo básico dos DDHH não é o direito a ter direitos, mas o conjunto de lutas pela dignidade e que um Direito Humano fundamental se constitui nos meios e condições necessárias para pôr em prática os processos de luta pela dignidade humana. Ainda, sustenta HERRERA FLORES<sup>39</sup> que a dignidade humana é a obtenção igualitária de bens materiais e imateriais que se vão conseguindo no constante processo de humanização do ser humano.

Deste modo, a marcha de processos de luta pela dignidade humana pressupõe uma conquista de direitos que avança no tempo (assim, não pode retroceder) e não se constitui de “outorga milagrosa”, nem muito menos é dissociada das tramas sociais e culturais que naturalmente se estabelecem pela natureza gregária do ser humano.

---

<sup>37</sup> Segundo KELBERT (2011: 11-12), a doutrina da reserva do possível se originou na Alemanha, com a decisão n. 33 do Tribunal Constitucional Federal, pela qual algumas prestações estatais ficariam sujeitas a uma reserva do possível (*Vorbehalt des Möglichen*), e o indivíduo só poderia almejar prestações que sejam razoáveis. Por outro lado, conforme a autora, a consideração das normas que preveem direitos sociais como de caráter meramente programático, ante o caráter prestacional desses direitos, pressupondo a existência de recursos estatais para sua efetivação, e a mediação legislativa, vem a ser um obstáculo para sua efetivação.

<sup>38</sup> HERRERA FLORES (2007: 18-29).

<sup>39</sup> *Idem*, *ibidem*.



Desde logo, por embasada na teoria crítica, se adota a acepção de HERRERA FLORES<sup>40</sup> sobre Direitos Humanos como processos ou práticas sociais dirigidas à obtenção de bens materiais e imateriais no processo de humanização, de modo que os objetivos das lutas e dinâmicas sociais em matéria de DDHH devem ser vistos pelo prisma de acesso e distribuição geral e justa da dignidade humana. Os Direitos Humanos do Trabalho encontram-se inseridos nesta acepção, como processos ou práticas sociais dirigidas à realização da justiça social e dignidade humana. Nesta ótica dos DDHH como processos, devem ser concebidos por uma visão nova, integradora, crítica e contextualizada em práticas sociais emancipadoras.

Os principais direitos sociais estão contemplados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da ONU, nas Convenções da Organização Internacional do Trabalho, na sua Constituição e Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu seguimento, e no PIDESC – Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966 (promulgado no Brasil pelo Decreto 591/92), além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da Convenção Europeia sobre Direitos do Homem.

No PIDESC, *v.g.*, se encontram compromissos básicos dos Estados-parte, dentre os quais, por exemplo, o previsto no art. 6º, no sentido de reconhecer o direito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito, e de tomar medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. Ainda, direito de remuneração equitativa e existência decente, segurança e higiene no trabalho, igualdade de oportunidades, descanso, lazer, férias periódicas remuneradas (art. 7º), além de um princípio de liberdade sindical contemplando a garantia do direito de toda pessoa de fundar com outras, sindicatos, e de filiar-se ao sindicato de escolha, e de promover e de proteger seus interesses econômicos e sociais (art. 8º).

Sem embargo, não são Direitos Humanos do Trabalho somente os que estão previstos nos tratados e documentos internacionais: devem ser considerados nesta categoria todos os direitos laborais positivados nos ordenamentos jurídicos como também aqueles que nascem das relações de trabalho. A visão humanista que supera o contratualismo laboral é aquela que considera a totalidade dos direitos trabalhistas como DDHH. Do contrário, sempre se cairia na armadilha do contratualismo, garantindo apenas um núcleo duro (e insuficiente) de direitos sociais e relegando o restante ao “contrato”. Cabe destacar que a Constituição brasileira de 1988 instituiu a cláusula pétrea de vedação de retrocesso social (leia-se, princípio da progressividade), no art. 7º, pela qual reconhece aos trabalhadores urbanos e rurais os direitos laborais ali elencados, “além de outros visando à melhoria de sua condição social”. E esta parte final do *caput* do dispositivo citado deve ser lida não só como princípio de progressividade como também de cláusula que recebe outros direitos laborais como direitos fundamentais.

---

<sup>40</sup> *Idem, ibidem, pp. 30-58, 76).*

Portanto, visibilizar e visualizar os direitos laborais como Direitos Humanos significa reescrever o Direito do Trabalho a partir dos Direitos Humanos, sobretudo da Teoria Crítica, pois, rompendo a máscara do contratualismo que permeia a orientação hegemônica de estudo das relações entre capital e trabalho, será possível evoluir em caminho diametralmente oposto à feudalização contratual, empoderando e transformando a pessoa trabalhadora desnuda em sujeito de direitos superiores aos do capital.

Neste sentido, uma ótica humanista das relações de trabalho, consoante os tratados internacionais de Direitos Humanos, deve alcançar o máximo de proteção do Estado à pessoa trabalhadora, exercendo papel de garante de equilíbrio de uma situação assimétrica, de desiguais, em que uma das partes é extremamente vulnerável no sistema capitalista. Os bens jurídicos em jogo dizem respeito à própria vida e dignidade da pessoa e, por isso, não podem ser relegados ao plano das meras obrigações contratuais. Devem, muito antes, ser prestigiados como valores máximos expoentes de humanização e de valorização social do trabalho e da pessoa trabalhadora.

Com a visibilidade dos Direitos Humanos do Trabalho é possível buscar sua efetividade e progressividade, evitando-se um retrocesso histórico evidenciado no horizonte neoliberal de enfraquecimento dos Estados, de desregulamentação das relações laborais e de novas formas contratuais e de organização do trabalho dissimuladoras da subordinação e indutoras de novas formas de subjetivação, para que se possa avançar por um caminho de garantia de concreta dignidade às pessoas trabalhadoras em direção à equalização das relações entre capital e trabalho, para que, enquanto houver regime de mercado no mundo, o trabalho tenha valor superior ou, no mínimo, igual ao do capital.

E para a ideal compreensão crítica, faz-se necessário discorrer sobre as dimensões de Direitos Humanos e os sistemas de proteção, geopolítica, imperialismo, colonialismo, neocolonialismo contemporâneo e seu impacto nos Direitos Humanos, as ideologias que impedem o avanço social (subdesenvolvimento e neoliberalismo), globalização e capitalismo, para, finalmente, chegar na Teoria Crítica como ferramenta indispensável para a efetividade dos Direitos Humanos do Trabalho. Somente com uma visão histórico-evolutiva e crítico-humanista, de enfoque transdisciplinar, será possível alcançar a desejada superação da hermenêutica tradicional ou juspositivista. Assim, seu estudo é pressuposto para a correta compreensão do Enfoque de Direitos Humanos e sua conexão à interpretação e aplicação do Direito do Trabalho e seus efeitos.

### **I.1. Breve síntese cronológica das dimensões de Direitos Humanos e sistemas de proteção**

Direitos Humanos são direitos especiais e inerentes à condição humana e dos quais todas as pessoas são titulares. Não obstante, já se pensa em uma acepção mais abrangente de DDHH, contemplando os direitos dos animais, dos seres vivos, enfim, da vida em todas as suas formas interagindo com os seres



humanos. Já os Direitos Humanos do Trabalho são espécie de DDHH relativa à consideração da condição humana no contexto das relações de trabalho.

Os Direitos Humanos constituem categoria que não trata de direitos consolidados de forma pacífica, mas que, na verdade, encontra seu reconhecimento e afirmação como fruto de um longo processo de lutas contra as injustiças sociais e as desigualdades que acompanha o desenvolvimento histórico da humanidade.

Karel VASAK, ex-Diretor da Divisão de Direitos Humanos e Paz da UNESCO, é o criador do tema das gerações de Direitos Humanos, introduzindo o conceito em 1979, durante sua conferência para o Instituto Internacional de Direitos Humanos, em Estrasburgo<sup>41</sup>, com inspiração no ideário da Revolução Francesa - liberdade, igualdade e fraternidade, identificando as gerações de direitos partindo dos individuais (liberdade) aos solidários (fraternidade).

Assim, inicialmente, em contraposição ao despotismo, ao feudalismo, se afirmam os direitos civis e políticos como marco de respeito às liberdades individuais nas revoluções liberais (Revolução Inglesa e a Declaração dos Direitos da Inglaterra, de 1689; Revolução Americana e a Declaração da Independência dos Estados Unidos, de 1776; Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, de 1789). Esses direitos e liberdades individuais correspondem ao direito à vida, à liberdade, intimidade, integridade física e psíquica, à honra, à crença, expressão, segurança, de votar e ser votado etc. A este primeiro grupo de Direitos Humanos se convencionou chamar de primeira geração ou dimensão, cuja nota característica é a individualidade, ou seja, o respeito da pessoa por todas as demais<sup>42</sup> e pelos Estados. São direitos vinculados à liberdade, cujo bem jurídico tutelado se destina à paz universal e impõe ao Estado o dever de respeito e proteção. Estão consagrados no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP), de 1966<sup>43</sup>.

Após as consequências e transformações provocadas pela Revolução Industrial do século XVIII, surgem as lutas pelo reconhecimento de direitos econômicos, sociais e culturais, tais como o direito ao trabalho, a uma remuneração justa, à educação, à saúde, à qualidade de vida, à seguridade social, moradia, proteção da família, infância e juventude etc. Essas lutas vão corresponder a uma segunda geração ou dimensão de Direitos Humanos, constituindo-se de direitos de ordem coletiva cujo bem jurídico tutelado é a igualdade, exigindo dos

---

<sup>41</sup> *Apud* LIQUIDATO (2019: 13-15). A autora refere que a doutrina de Vasak encontra críticas, como a de Cançado Trindade, para quem não há falar em gerações de Direitos Humanos, por inexistir sucessão cronológica de DDHH, mormente em face de sua interconectividade, e, também, por não haver hierarquia entre eles. Coincide-se em parte com a crítica, porquanto, de fato, como se explica mais adiante, a divisão em gerações ou dimensões leva a pensar em graus de importância conferidos de forma distinta, porém, para fins didáticos e por ordem cronológica de positividade nas normas internacionais, a classificação é útil.

<sup>42</sup> Que hoje se compreende por eficácia horizontal dos DDHH.

<sup>43</sup> Aprovado em 16.12.1966 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Disponível em: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>.

Estados medidas concretas para sua efetivação<sup>44</sup>. Sua positivação está expressa no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), também de 1966<sup>45</sup>.

Na terceira geração ou dimensão, o fundamento é a solidariedade, em relação aos direitos à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, à paz, à identidade cultural, à independência econômica e política, ao meio ambiente, à cooperação internacional, à justiça social internacional etc., contemplando os chamados direitos dos povos ou de solidariedade, tendo por bens jurídicos protegidos o meio ambiente, o desenvolvimento e a paz, podendo ser demandados dos Estados e entre Estados. Estão previstos nos artigos 3 a 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (doravante DUDH)<sup>46</sup>, tidos por síntese das outras gerações de DDHH.

A Declaração de Filadélfia de 1944, a Carta Constitutiva da ONU e a DUDH de 1948, pós Segunda Guerra, marcarão, sem dúvida, o resgate dos Direitos Humanos depois do processo de ruptura dos conflitos armados mundiais, como um processo de aceleração, implementação e desenvolvimento dos DDHH. As características de universalidade e indivisibilidade dos DDHH estão contempladas no documento.

O PIDCP e o PIDESC de 1966 são os referentes da busca de efetividade da segunda dimensão de Direitos Humanos, pois neles se afirma que não há direitos civis e políticos sem direitos sociais.

A década de 1960 irá marcar a preocupação ambiental, sobretudo com a edição do livro de Rachel CARSON, em 1962, intitulado “A Primavera Silenciosa”, alertando sobre o uso de pesticidas químicos na agricultura, que culmina com a apreensão global quanto ao tema. A situação leva a ONU a convocar, em 1968 e 1969, uma conferência mundial sobre meio ambiente para o ano de 1972<sup>47</sup>. A época corresponde ao nascimento da terceira geração de Direitos Humanos<sup>48</sup>, de titularidade coletiva, relativos aos direitos de solidariedade, incluindo os concernentes ao desenvolvimento, meio ambiente e paz.

Desde então, uma sequência de eventos internacionais importantes consagra a dimensão e a importância dos DDHH no mundo contemporâneo, como

---

<sup>44</sup> TAMAMES (1968: 33-34), abordando a Declaração Universal dos Direitos Humanos desde um ponto de vista econômico, aclara que para o pleno exercício do direito à vida e à liberdade previstos no art. 3º dependem da possibilidade de alcançar meios materiais para tanto, e que tais meios são obtidos através da propriedade e do trabalho para aqueles que não tem propriedade.

<sup>45</sup> Também aprovado em 16.12.1966 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Recuperado de <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>.

<sup>46</sup> Aprovada em 10.12.1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. Recuperado de <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por>.

<sup>47</sup> Conforme HANDL (2012: 2).

<sup>48</sup> Mas, como explica ALONSO IGLESIAS (2003: 57), efetivamente a Declaração sobre o Direito Humano ao Desenvolvimento da ONU, em 1986, inaugura a etapa do que se convencionou chamar Direitos Humanos da terceira geração.

a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano<sup>49</sup> (ONU, 1972); Declaração sobre o Direito Humano ao Desenvolvimento<sup>50</sup> (ONU, 1986); a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento<sup>51</sup> (Rio de Janeiro, 1992); a Declaração e Programa de Ação de Viena<sup>52</sup> (1993); a criação da Corte Penal Internacional<sup>53</sup> (2002). Destacam-se, para os fins do presente trabalho, ainda, a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho<sup>54</sup> (OIT, 1998); a Declaração e os Objetivos do Milênio<sup>55</sup> (ONU, 2002); a Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Jus-

---

<sup>49</sup> Publicada pela Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano em 16.06.1972. Fonte: sítio da Universidade de São Paulo. Recuperado de <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html>.

<sup>50</sup> Aprovada pela Resolução 41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 04.12.1986. Fonte: sítio da Universidade de São Paulo. Recuperado de <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-ao-Desenvolvimento/declaracao-sobre-o-direito-ao-desenvolvimento.html>.

<sup>51</sup> Publicada pela Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento em 14.06.1992. Fonte: sítio da Scielo. Recuperado de [https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0103-40141992000200013](https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141992000200013).

<sup>52</sup> Aprovada na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de Viena, em 1993. Fonte: sítio da OEA. Recuperado de <https://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%Aancia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf>

<sup>53</sup> Criada pelo Estatuto de Roma, em 17.07.1998, pela Conferência Diplomática. Fonte: sítio da Universidade de São Paulo. Recuperado de <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Tribunal-Penal-Internacional/o-que-e.html>

<sup>54</sup> Aprovada na 86ª. Conferência Internacional do Trabalho, em 19.06.1998, lembra que os Membros da OIT têm um compromisso derivado desta condição de respeitar, promover e tornar realidade, de boa fé e de conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais concernentes à liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; à eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; à abolição efetiva do trabalho infantil; e à eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. Fonte: sítio da OIT. Recuperado de [https://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration\\_portuguese.pdf](https://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration_portuguese.pdf)

<sup>55</sup> A ONU formou a Cúpula do Milênio, no ano 2000, propondo a Declaração do Milênio contendo os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (doravante ODMs), assim elencados: Objetivo 1 (acabar com a fome) - Erradicar a pobreza extrema e a fome; Objetivo 2 (educação básica) - Atingir o ensino básico universal; Objetivo 3 (igualdade) - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; Objetivo 4 - Reduzir a mortalidade infantil; Objetivo 5 - Melhorar a saúde materna; Objetivo 6 (combater doenças) - Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; Objetivo 7 (qualidade de vida e respeito ao meio ambiente) - Garantir a sustentabilidade ambiental; Objetivo 8 (trabalhando junto pelo desenvolvimento) - Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Fonte: sítio PNUD Brasil. Recuperado de <https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/declaracao-do-milenio.html>

ta<sup>56</sup> (OIT, 2008), os Princípios Diretores sobre Empresas e Direitos Humanos<sup>57</sup> (ONU, 2011), as Linhas Diretrizes sobre Multinacionais<sup>58</sup> (OCDE, 2011) e a Declaração do Centenário da OIT sobre o Futuro do Trabalho<sup>59</sup> (ONU-OIT, 2019).

O destaque na Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 1992, na evolução do pensamento sobre os direitos humanos, é a inclusão do meio ambiente e desenvolvimento, o estabelecimento da interdependência entre paz, desenvolvimento e meio ambiente, e, ainda, uma mudança na filosofia dos DDHH, com o reconhecimento da sua finalidade no desenvolvimento e desfrute pela pessoa. Assentam-se, também, os princípios consuetudinários do Direito Internacional relativos à cooperação, solidariedade e precaução; e destaca-se a importância dos grupos sociais mais desfavorecidos (mulheres, crianças, minorias, povos indígenas e imigrantes). Correlato a esse pensamento se editou a já citada Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, em 1998, cujos fundamentos se assentam em uma “estratégia global de desenvolvimento econômico e social”, para que “as políticas econômicas e sociais se reforcem mutuamente com vistas à criação de um desenvolvimento sustentável de ampla base”<sup>60</sup>, ante a preocupação de assegurar a equidade, o progresso social e a erradicação da pobreza, prestando

---

<sup>56</sup> Aprovada pela 97ª. Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, em 10.06.1998. Segundo a OIT, é a terceira mais importante declaração de princípios e políticas adotada pela Conferência Internacional do Trabalho desde sua Constituição, em 1919, e está embasada na Declaração de Filadélfia e na Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, constituindo uma reafirmação dos valores da OIT, com objetivo de ajudar a alcançar o progresso e a justiça social no contexto da globalização. Fonte: sítio da OIT. Recuperado de [https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS\\_714618/lang--pt/index.htm](https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_714618/lang--pt/index.htm)

<sup>57</sup> Aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, através da Resolução 17/4, de 16 de junho de 2011.

<sup>58</sup> As Linhas Diretrizes sobre Multinacionais da OCDE se estruturaram como recomendações aos governos e empresas, porém, os países-membros e os que a elas aderem (mais Brasil, Argentina e outros) assumem compromisso vinculante de observá-las. As Linhas foram editadas muito antes, porém, cita-se o ano 2011 por ter sido o ano de reforma e incorporação dos Princípios Reitores da ONU sobre empresas e DDHH. Fonte: sítio do Ministério da Economia do Brasil, Secretaria Especial da Fazenda, texto das Linhas Diretrizes disponibilizado em português. Recuperado de <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/atuacao-internacional/ponto-de-contato-nacional/diretrizes-da-ocde-para-empresas-multinacionais>

<sup>59</sup> Aprovada pela 108ª. Conferência Internacional do Trabalho, em 2019, em Genebra, e referendada por Resolução da ONU de 10.09.2019. De acordo com seus fundamentos, recorda e reafirma os objetivos, finalidades e princípios estabelecidos na Constituição da OIT e na Declaração de Filadélfia, sublinhando a importância da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e da Declaração sobre Justiça Social para uma Globalização Justa, insta a renovar o contrato social para a justiça social e a paz universal duradoura. Fonte: sítio da OIT. Recuperado de: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms\\_706928.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_706928.pdf)

<sup>60</sup> OIT: 1998.

especial atenção aos problemas de pessoas com necessidades sociais especiais, notadamente as desempregadas e trabalhadoras migrantes.

De particular interesse para este estudo, a Declaração de Direitos Humanos de Viena, produzida na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de Viena de 1993, em seu art. 5º estabelece que “todos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os Direitos Humanos globalmente de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase”.

Portanto, afirma-se de modo unânime pelos Estados participantes as características dos DDHH de indivisibilidade<sup>61</sup>, universalidade e interdependência, bem assim a necessidade de considerá-los como finalidade de trabalho dos Estados. Ainda, por ocasião dessa Conferência, denunciavam-se os defeitos do sistema internacional, em especial a politização dos DDHH, demonstrada nos conflitos internacionais selecionados para atuação ou não, na imposição de sanções, e o controle dos Estados Unidos (doravante EUA) sobre a ONU (hegemonia americana). Conforme LINDGREN ALVES<sup>62</sup>, nas reuniões do Comitê Preparatório da Conferência nasce a correspondência da tríade democracia, desenvolvimento e Direitos Humanos com o lema liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa.

Todavia, a partir dos atentados de 11.09.2001 ocorre uma regressão nos Direitos Humanos, com uma cruzada contra o terrorismo e o mundo islâmico, reafirmando-se os EUA no papel sempre questionável que exercem relativo à justiça internacional. Ademais, consagra-se o princípio de segurança em sobreposição aos DDHH, ocasionando, por conseguinte, limitações à liberdade e à presunção de inocência, detenções e juízos arbitrais, a relegação de Direitos Humanos a interesses políticos, etc.

A aparição dos movimentos antiglobalização, como o Fórum Social Mundial de Porto Alegre<sup>63</sup> (Brasil), a partir de 2001, em oposição ao Fórum Econô-

---

<sup>61</sup> Conforme LINDGREN ALVES (2000: 20), comentando sobre a precedente e esquecida Conferência de Teerã, de 1968, “ainda que a indivisibilidade de todos os direitos humanos estivesse implícita na Declaração Universal de 1948, a pouca atenção que recebiam os direitos econômicos e sociais e as resistências doutrinárias com que costumavam ser encarados por alguns países ocidentais justificavam esforços para reiterá-la mais claramente”. E prossegue esclarecendo que a indivisibilidade dos Direitos Humanos, pouco respeitada na prática dos países e sempre desconsiderada no contexto das relações internacionais, teve em Viena seu reconhecimento por todos os Estados, com a aceitação consensual do direito ao desenvolvimento, permitindo os avanços da Conferência de 1993.

<sup>62</sup> LINDGREN ALVES (2000: 43).

<sup>63</sup> De acordo com sua Carta de Princípios, o Fórum Social Mundial é um espaço aberto de encontro para pensamentos de reflexão, debate democrático de ideias, formulação de propostas, livre intercâmbio de experiências e interconexão para ação efetiva, por grupos e movimentos da sociedade civil organizada que se opõe ao neoliberalismo e à dominação do mundo pelo capital e qualquer forma de imperialismo, comprometidas em construir uma sociedade planetária orientada para relacionamentos frutíferos entre a Humanidade e entre ela e a Terra. Fonte: sítio do Fórum Social Mundial (2016). Recuperado de <https://fsm2016.org/en/sinformer/a-propos-du-forum-social-mondial/>



mico Mundial (Davos – Suíça), vão compor estratégias de resistência em busca de justiça social. Em 2005 se produz a Carta, Manifesto ou Consenso de Porto Alegre, com doze propostas de antítese ao programa neoliberal, constituindo resumo dos principais temas debatidos na edição 2005 do FSM, assinado por 19 ativistas, a saber: Aminata Traoré, Adolfo Pérez Esquivel, Eduardo Galeano, José Saramago, François Houtart, Boaventura de Sousa Santos, Armand Mattelart, Roberto Savio, Riccardo Petrella, Ignacio Ramonet, Bernard Cassen, Samir Amin, Atilio Boron, Samuel Ruiz Garcia, Tariq Ali, Frei Betto, Emir Sader, Walden Bello, Immanuel Wallerstein. O documento propõe cancelamento das dívidas dos Países do sul (especialmente América Latina e África), adoção de uma taxa internacional sobre grandes transações financeiras (combate à especulação internacional), fim de paraísos fiscais, direito universal ao emprego, proteção social e aposentadoria, promoção da economia solidária e rejeição da economia de livre mercado, com prevalência dos DESC sobre direitos comerciais, garantia da soberania alimentar para todos os Países, abolição de patentes sobre conhecimento e bens essenciais, implementação de políticas públicas de combate ao racismo, à discriminação, sexismo, xenofobia, intolerância religiosa etc., medidas de combate à destruição ambiental e ao efeito estufa, desfazimento de tropas estrangeiras à exceção das comandadas pela ONU, garantia do direito de informação e desconcentração de poder dos detentores da grande mídia, reforma e democratização de organizações internacionais incluindo a mudança da sede da ONU de Nova York para o Sul. Muitos criticam a Carta de Porto Alegre como documento não consensual, pois é uma seleção dentre diversas outras propostas e produzido em espaço fora do local do Fórum<sup>64</sup>, mas traduz, sem dúvida, uma síntese de postulados da luta pela afirmação dos DDHH contrapostos ao sistema hegemônico capitalista neoliberal.

Da mesma forma, o aporte de novos sistemas de equilíbrio econômico mundial, com o papel de China, Rússia e Índia, ampliado com Brasil e África do Sul para o acrônimo BRICS<sup>65</sup>, começam a definir novos contornos contemporâneos para a visão de Direitos Humanos.

A partir desta cronologia dos Direitos Humanos, se pode constatar a estreita relação entre os DDHH assentados nas diversas gerações ou dimensões<sup>66</sup>,

---

<sup>64</sup> O FSM tornou a ser realizado em Porto Alegre – Rio Grande do Sul (Brasil), em 2020, com o nome de “*Fórum Social das Resistências: Democracia e Direitos dos Povos e do Planeta*”. Fonte: sítio do Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Recuperado de <http://forumsocialportoalegre.org.br/forum-social-mundial/>

<sup>65</sup> O acrônimo foi cunhado em referência aos países de economia emergente compostos de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que passaram a se reunir como uma espécie de bloco anti-hegemônico desde 2006.

<sup>66</sup> Há autores que sustentam ainda uma quarta ou quinta gerações de direitos humanos, destacando direitos, no entanto, que se podem enquadrar na terceira. De qualquer sorte, tratando-se de classificação temática e já se tendo referido que o conteúdo dos diversos direitos não é programático, não há sentido em seguir ampliando essa divisão, mormente em face das características de universalidade, interdependência e complementariedade entre eles.

e a interdependência entre eles, demonstrando que a classificação tem apenas finalidade didático-histórica e não quanto à sua importância ou eficácia, pois são todos importantes e igualmente demandantes de implementação efetiva.

A história das duas últimas décadas mostra avanços significativos, como um maior pluralismo na ONU com questionamento das doutrinas e princípios filosóficos dos Direitos Humanos, a centralidade da pessoa como sujeito de Direitos Humanos, por sua vez vistas como medidas aptas à transformação social, a universalidade da justiça em matéria de DDHH e a preocupação com a desigualdade, a pobreza e a violência mundiais, inobstante o movimento de oposição determinado pelo imperialismo estadunidense. Este movimento consagra retrocessos concernentes à politização dos DDHH, preponderância do princípio da segurança devido ao terrorismo<sup>67</sup>, novas barreiras migratórias que deixam à mercê povos afetados por catástrofes naturais ou vítimas de conflitos armados, impunidade nas violações de DDHH, repúdio aos direitos de segunda geração por países mais fortes, negação de problemas ambientais. Especialmente o chamado “populismo de direita”<sup>68</sup>, presente na política atual de diversos Estados (e de que são exemplo atual EUA, Inglaterra, Brasil, Israel, Turquia, Suécia), constitui uma nova ameaça global ao desenvolvimento e implementação da visão humanista, proporcionando novos retrocessos, dentre os quais a xenofobia, aporofobia e o enfraquecimento da ONU e de seus organismos internacionais como a OMS<sup>69</sup>.

---

<sup>67</sup> BAILONE (2010: 545) é elucidativo ao descrever as nefastas consequências da ideologia antiterrorista:

*El antiterrorismo, como antítesis y síntesis de la violencia política, re-producida hasta el infinito, provoca el retraimiento de la participación ciudadana en la «cosa pública». Una criminalización primaria que repose solamente en el reclamo securitario y que evoque emergencias para poder desprenderse de los controles del Estado de Derecho, sumado al alto nivel selectivizante de la criminalización secundaria y a la transferencia de poder a las agencias ejecutivas, obviamente producen un alarmante efecto de desaliento sobre la vida política comunitaria.*

<sup>68</sup> Segundo ALSTON (2017: 268), a ameaça populista à democracia se revela desde o advento das preocupações de segurança após o atentado de 11 de setembro, nos EUA, vertido em medo ou ódio real ou construído contra estrangeiros ou minorias, que são exploradas por governos de diferentes vertentes para justificar restrições de liberdade, privacidade, normas de não discriminação ou garantias de integridade pessoal. Como explica, o populismo é impulsionado pelo medo e pelo ressentimento que se alimentam de desigualdade e exclusão. LINDGREN-ALVES (2019: 32), por sua vez, alerta para o que chama de “americanização total”, em que destaca o papel da política do presidente Donald Trump e seu impacto nos Direitos Humanos, mencionando outros líderes com comportamentos similares, como Jair Bolsonaro no Brasil, Viktor Orbán na Hungria e Duterte nas Filipinas.

<sup>69</sup> Com as recomendações da OMS relativas ao fechamento do comércio e indústria durante a pandemia do COVID-19, os EUA, sob o comando do presidente Trump, iniciaram em 2020 o processo de retirada da entidade. O Brasil, com o presidente Bolsonaro, ameaçou fazer o mesmo. Fonte: notícia publicada no sítio de notícias UOL, de 05 de junho de 2020, intitulada “Bolsonaro ameaça retirar Brasil da OMS, a exemplo dos EUA”. Recuperado de: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/06/05/bolsonaro-ameaca-retirar-brasil-da-oms-a-exemplo-dos-eua.htm>

Portanto, o desenvolvimento do pensamento relativo aos Direitos Humanos demanda e exige, com urgência, a busca de novas ideias e mecanismos de sua afirmação e efetividade, para superação dos retrocessos recentes.

Cabe o destaque de que o PIDESC e o PIDCP e seus dois protocolos adicionais mais a DUDH compõe a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos, constitutiva do sistema chamado global, mundial ou universal de proteção aos DDHH. Com eles, se universalizou a base de DDHH que seria reafirmada e ampliada por diversos documentos regionais no mundo, dos quais são exemplos: a Convenção Europeia de Direitos Humanos (doravante CEDH)<sup>70</sup>, de 1950; a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969<sup>71</sup>; a Carta sobre Direitos Humanos e os Direitos dos Povos dos Estados Africanos<sup>72</sup>, de 1981; a Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos<sup>73</sup>, também de 1981; a Declaração Asiática de Direitos Humanos, de 2012, de Phnom Penh (Camboja)<sup>74</sup>. Estes documentos, por sua vez, vão compor a base de sistemas regionais de proteção aos DDHH, reforçados pela positivação de Direitos Humanos na legislação doméstica dos Estados, constitutiva dos sistemas nacionais de proteção.

Por fim, os Princípios Reitores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, editados em 2011, estruturados sobre os chamados princípios Ruggie<sup>75</sup>

---

<sup>70</sup> Aprovada no Tratado de Roma, de 04.11.1950. Fonte: sítio do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Recuperado de [https://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_POR.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf). Foi o primeiro pacto regional sobre DDHH prevendo mecanismos de controle e execução, com a criação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

<sup>71</sup> Aprovada no Pacto de São José da Costa Rica, de 22.11.1969. Fonte: sítio da CIDH. Recuperado de [https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao\\_americana.htm](https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm). Também prevê mecanismos de controle e proteção, através da criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no art. 33.

<sup>72</sup> Aprovada pela Organização da Unidade Africana (doravante OUA), em 28.06.1981, em Nairobi. Fonte: sítio DHNET. Recuperado de <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/africa/banjul.htm>

<sup>73</sup> Aprovada em 19.09.1981, em Paris. Fonte: sítio DHNET. Recuperado de <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/declaracaoislamica.html>

<sup>74</sup> Aprovada em 08.11.2012, pela Associação das Nações do Sudeste Asiático (doravante *ASEAN – Association of Southeast Asian Nations*). Fonte: sítio da ASEAN. Recuperado de [https://www.asean.org/storage/images/ASEAN\\_RTK\\_2014/6\\_AHRD\\_Booklet.pdf](https://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf)

<sup>75</sup> Após várias situações e denúncias envolvendo violações de Direitos Humanos por empresas, como o acidente na Union Carbide, na década de 1980, em Bhopal na Índia, relativo a um vazamento em indústria de agrotóxicos que produziu milhares de mortos e contaminados; do envolvimento da Shell com a ditadura na Nigéria, na década de 1990, implicando o assassinato de líderes ambientalistas da etnia ogoni, por conta da exploração de petróleo; da Nike, envolvendo exploração de trabalho infantil no sudeste asiático, a ONU passou a preocupar-se com o tema. Em 2005, Kofi Anan, então Secretário-Geral das Nações Unidas, nomeou o professor estadunidense de Direitos Humanos, John Ruggie, como Representante Especial para fazer um estudo sobre como as empresas impactam os DDHH. Ruggie estruturou seu estudo com base em três pilares, “respeitar, preservar e reparar”, apresentando-o em 2008. Com o mandato renovado, Ruggie produziu os Princípios Diretores aprovados pelo CDH em 2011.



(respeitar, preservar, reparar), que especificam obrigações dos Estados e das empresas em relação aos Direitos Humanos, veio a dar mais concretude ao cumprimento das normas internacionais de DDHH. Segundo o item II.12, as empresas devem respeitar, no mínimo, os DDHH previstos na Carta Internacional de Direitos Humanos, e os princípios de direitos fundamentais estabelecidos na Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT. No mesmo sentido, a OCDE, incorporando os Princípios Diretores às suas Linhas Diretrizes sobre Multinacionais, reforçou as obrigações definidas aos Estados e às empresas no documento da ONU, estabelecendo que os países que a integram e mais os que aderem ao documento (Brasil e Argentina, v.g.), possuem compromisso vinculante de observá-lo.

CARVAJAL CONTRERAS<sup>76</sup>, em referência a Jesús Rodríguez y Rodríguez (*Los Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos*), explica que há somente cinco sistemas internacionais de proteção aptos a reunir os cinco elementos considerados indispensáveis para ser considerados efetivamente como tal (ter um instrumento internacional formativo, conter relação de direitos fundamentais tutelados, a obrigação dos estados signatários, faculdades dos órgãos defensores e mecanismo de proteção), sendo eles o sistema universal e os sistemas regionais europeu, africano e americano, restando o asiático como um quinto sistema em vias de desenvolvimento. No sistema universal, mundial ou global de proteção, de titularidade da ONU, como prossegue o citado autor, os mecanismos de observância se compõe da Assembleia Geral, que torna efetivos os Direitos Humanos; o Conselho de Segurança, que vela pelo seu respeito a nível mundial; o Conselho Econômico e Social, que faz recomendações para promoção de respeito aos DDHH; o Conselho de Direitos Humanos, que formula projetos de convenções e convoca conferências internacionais; a Secretaria Geral da ONU, que prepara estudos relacionados com DDHH; e a oficina do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, com competência para apoiar e assessorar os mecanismos de supervisão de DDHH.

Já os sistemas regionais possuem cada qual seus órgãos próprios, destacando-se, para resolução de conflitos, no plano mundial, a Corte de Haya (criada pelo art. 92 do Estatuto da ONU, como órgão judiciário de resolução de conflitos) e o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma com a função de julgar pessoas suspeitas de cometer crimes contra DDHH, e no âmbito regional, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.

Por fim, cabe o registro de que o somatório da Carta Constitutiva da ONU, de 1945, a DUDH, o PIDCP e o PIDESC mais as convenções e tratados internacionais compõem o que se convencionou-se chamar de Direito Internacional de Direitos Humanos.

Portanto, atualmente, a proteção dos Direitos Humanos se dá em múltiplos níveis complementares entre si: no plano internacional, regional e doméstico.

---

<sup>76</sup> CARVAJAL CONTRERAS (2016: 396-400).

co dos países, compreendendo desde a fundamentalização de inúmeros DDHH nas Constituições contemporâneas, como também através da incorporação à ordem jurídica de outros posteriores ao texto constitucional em Tratados e Documentos Internacionais com *status* constitucional ou supralegal (dependendo de cada país), que viabilizam a justicialização no plano interno<sup>77</sup>, até a justicialização internacional, que tem caráter vinculante dos Estados e preponderância sobre as decisões judiciais domésticas.

Assim, traçada esta breve apresentação dos Direitos Humanos, em sintética narrativa de sua evolução cronológica, com os atuais sistemas de proteção nacionais, regionais e internacionais, passa-se a aprofundar o estudo do reconhecimento dos DDHH (incluídos os direitos laborais) ao longo do desenvolvimento da humanidade, desde a sua contextualização histórica e dos processos de luta que os originaram e que ainda persistem na atualidade.

## **I.2. Geopolítica e a luta por Direitos Humanos do Trabalho: da lei imperial ao geodireito**

Segundo KHANNA<sup>78</sup>, geopolítica é a relação entre poder e espaço, conceito preciso para os fins desta investigação. TRIAS<sup>79</sup>, por sua vez, descreve uma relação profunda, orgânica e sutil entre geopolítica e imperialismo, como de imprescindível estudo nas difíceis e complexas circunstâncias do mundo atual, e historicamente vinculada à política das grandes potências na fase do capitalismo monopolista. Mackinder será o geopolítico referente do imperialismo britânico, enquanto Spykman, do imperialismo estadunidense, e Hausofer, do império alemão<sup>80</sup>.

Na civilização clássica, o político se centrava na liberdade, como explica ARENDT<sup>81</sup>, uma liberdade compreendida negativamente como não ser dominado e não dominar, e positivamente como um espaço estabelecido entre muitos, em que cada qual se movesse entre iguais. A análise da autora é muito interes-

---

<sup>77</sup> De passagem, importa referir que a inadequação de uma norma nacional com uma norma internacional de DDHH gera o chamado controle de convencionalidade, obrigação da justiça doméstica fazer, em relação à incompatibilidade que possa existir com a norma internacional, deixando de aplicar a nacional em favor daquela. A última palavra sobre controle de convencionalidade, no âmbito da Convenção Americana de Direitos Humanos, é da Corte Interamericana, que pode, segundo PERRONE (2019: 308-309), dizer que a interpretação interna feita da Constituição é incompatível com a CADH.

<sup>78</sup> Parag KHANNA, apud GÓES (2018: 515).

<sup>79</sup> TRIAS (1972: 8,15).

<sup>80</sup> Halford Mackinder (1861-1947) desenvolveu, em 1904, a teoria do *heartland*, considerando o território dos continentes europeu e asiático (Eurásia) como principal área de interesse político. Nicholas Spykman (1893-1943) tratou da teoria do *rimland* ou estratégia da contenção, defendendo uma política externa intervencionista. Karl Hausofer (1869-1946) pregava o método geopolítico, ensinar o povo alemão a pensar geopoliticamente. Dentre várias teses, desenvolveu a do *Lebensraum* (espaço vital), território a ser conquistado pelo povo germânico.

<sup>81</sup> ARENDT (2017: 69-70).

sante, pois traz à luz a concepção de trabalho como condição para o político: na polis grega, a pessoa devia ser liberada ou liberar-se ela mesmo, ficando livre de obrigações necessárias para viver, tendo o ócio por ideal. Como expõe, os antigos exploravam os escravos para liberar os senhores completamente do trabalho, de forma que eles pudessem se entregar à liberdade do político. Tal liberação era conseguida por meio da coação e da violência, baseando-se na dominação absoluta que cada amo exercia em sua casa.

Este sistema, aplicado no microcosmo da relação senhor-escravo, se replicava de forma macro através das conquistas de povos e territórios pelas grandes potências da antiguidade clássica<sup>82</sup>, pelo uso da força e da violência para aproveitar os recursos naturais dos territórios conquistados e usar a mão-de-obra da população submetida em regime escravocrata. Esta geopolítica antiga de imperialismo militar determinava a ocupação dos territórios por quem tinha mais força, submetendo as pessoas à lei imperial, que por sua vez, garantia a manutenção do poder. O trabalho, neste período, era desprezado, relegado aos escravos ou às pessoas que, para sobreviver, se obrigavam a trabalhar e, por isso, não eram consideradas de todo livres e nem participavam da política.

Os impérios antigos praticavam o colonialismo, ou seja, a extração de recursos naturais e de mão-de-obra pelo uso direto da força.

Após a queda de Roma, na Idade Média, a configuração não muda em sua essência: o poder, no feudalismo, exercido pelos senhores feudais em seus territórios, obrigava a plebe ao trabalho em troca de sobrevivência, era a relação de servidão ou vassalagem. Na elaboração da lei e distribuição da justiça no feudo, obviamente, não participavam camponeses, artesãos ou comerciantes, privilégio exercido pelos senhores feudais, em condição de igualdade entre pares na nobreza.

Abordando a organização pré-capitalista dos Estados, BOITO Júnior<sup>83</sup> assevera que a situação jurídica de ordem e estamento e a situação econômica de classe são distintas. Assim, em que pese entre os integrantes da ordem superior (homens livres) se possa encontrar um número significativo de indivíduos pertencentes às classes populares (artesãos e camponeses na Grécia e na Roma Antigas e na Europa feudal), não serão vistos nas camadas superiores dessa ordem. Segundo o autor, artesãos e camponeses, se livres, tanto no escravismo como no feudalismo, são plebeus, isto é, quando não são escravos nem servos, são enquadrados em um plano inferior da ordem das pessoas livres. Prossegue dizendo que os estamentos superiores, de forma geral, contemplavam pessoas pertencentes à classe dominante, como no patriciado romano (composto, majoritariamente, de grandes latifundiários), da mesma maneira que os nobres no período medieval eram, majoritariamente, os próprios senhores feudais. Conclui no sentido de que, do intrincado encontro das divisões econômica e jurídica de classe, de ordem e de estamento, resultava a monopolização explícita, por

---

<sup>82</sup> Sistema que vinha desde o antigo Egito até Grécia e Roma.

<sup>83</sup> BOITO JÚNIOR (2017: 11).

sedimentada no direito escrito ou consuetudinário, dos cargos repressivos, administrativos e representativos do Estado pelos indivíduos pertencentes à classe dominante.

O advento do mercantilismo marcará a passagem para a criação dos Estados-nações, constituindo o marco histórico deste período o acordo de Westphalia<sup>84</sup>, enquanto o conseqüente advento do capitalismo e a industrialização promoverão a retirada dos meios de produção das pessoas e sua transferência para as fábricas<sup>85</sup>, gerando a classe proletária desterritorializada, a detentora apenas de sua força de trabalho para sobreviver.

E o término da relação servil típica da exploração do trabalho no feudalismo não só originará a figura do trabalhador e da trabalhadora despossuídos, no sistema capitalista, como também fará da escravidão o modo de exploração do trabalho predominante nas colônias das novas potências industriais. Como observa WOLKMER<sup>86</sup>, em referência a De Vita, o desaparecimento do trabalho servil feudal na Europa originou a recriação da escravidão nas colônias europeias.

A transição para um mundo não mais primarizado, que migra sua economia para o comércio e indústria, redesenha a geopolítica em torno dos países pioneiros na Revolução Industrial, com destaque para a Inglaterra, que, juntamente com o domínio dos mares por sua esquadra naval, logra estabelecer sua hegemonia mundial e a chamada *Pax Britannica*.<sup>87</sup> Neste novo contexto, ZAFFARONI<sup>88</sup> esclarece que o colonialismo originário se esgotou com a desaparecimento do sistema escravocrata, que não se adaptava às demandas da nova hegemonia mundial britânica, que tinha de exportar seu excesso de capital originário para a

---

<sup>84</sup> O tratado, de 1648, pôs fim à guerra dos trinta anos, que devastou a Europa, sendo conhecido como marco de nascimento do Direito Internacional Público, e do reconhecimento da soberania e do princípio de igualdade entre os Estados.

<sup>85</sup> Vale o resgate histórico do processo feito por MARX (2015: 994):

A expropriação e expulsão de uma parte da população rural não só libera trabalhadores para o capital industrial, e com eles seus meios de subsistência e seu material de trabalho, mas cria também o mercado interno. De fato, os acontecimentos que transformam os pequenos camponeses em assalariados, e seus meios de subsistência e de trabalho em elementos materiais do capital, criam para este último, ao mesmo tempo, seu mercado interno. Anteriormente, a família camponesa produzia e processava os meios de subsistência e matérias-primas que ela mesma, em sua maior parte, consumia. Essas matérias-primas e meios de subsistência converteram-se agora em mercadorias; o grande arrendatário as vende e encontra seu mercado nas manufaturas.

<sup>86</sup> WOLKMER (2003: 37).

<sup>87</sup> WOOD (2018: 124) narra que quando o Reino Unido conseguiu preponderância no comércio internacional, os êxitos militares e geopolíticos que asseguraram sua preeminência foram tanto causa quanto resultado do sucesso comercial, pois o crescimento econômico sustentava o seu poderio naval. Com a Revolução Industrial, o impulso imperialista deixou de ser a antiga fome por terras e saques pré-capitalistas para o novo imperativo, a expansão dos mercados.

<sup>88</sup> ZAFFARONI (2015: 34).

periferia para continuar com preços competitivos no mercado mundial<sup>89</sup>. Abre-se uma nova forma de colonialismo<sup>90</sup>, atrelado ao imperialismo, a ser exercido mediante dominação comercial, econômica, cultural e política sobre nações não industrializadas. Estas serão as forças motrizes criadoras de condições de trabalho a tal ponto desumanas que provocarão a reação obreira e as primeiras reivindicações laborais como Direitos Humanos. A dependência pessoal e o poder de vida e morte na relação senhor-escravo, senhor feudal-vassalo, agora se converte no biopoder do empregador, exercido através do poder diretivo empresarial no trabalho “contratado” e aplicado nos corpos mediante a ameaça de retirada do trabalho como fonte de sobrevivência. Ou, nas palavras de FOUCAULT<sup>91</sup>, conforme referido na introdução, o par vigiar-castigar se instaura como relação de poder indispensável para a fixação dos indivíduos no aparato de produção, e a constituição das forças produtivas, meio de coerção necessário para que o corpo, o tempo, a vida, os homens se integrem sob a forma de trabalho ao jogo das forças produtivas,

A *pax britannica* dura de 1815<sup>92</sup>, após o final das guerras napoleônicas, com a derrota da França e a ascensão da Inglaterra como potência global, até a eclosão da I Guerra Mundial em 1914.

Mais uma vez, o imperialismo segue em vigência, desta vez acoplado ao capitalismo. Com efeito, o final do século XIX e o início do século XX serão palco de grandes conflitos, notadamente pela partilha da África e sudeste da Ásia pelas grandes potências mundiais. Conforme BARBOSA<sup>93</sup>, é o momento histórico do nascimento do imperialismo moderno, em simbiose com o capitalismo monopolista. Em outras palavras, o neocolonialismo.

Karla CHÁVEZ<sup>94</sup> propõe um conceito atualizado de neocolonialismo, como uma nova forma de colônia composta pela dependência econômica, política, cultural, ideológica e até educativa, de um país com respeito a outro. Diferentemente do colonialismo tradicional, o neocolonialismo não ocupa territórios fisicamente por forças do país dominante, de modo que não existem colonos do

---

<sup>89</sup> No mesmo sentido coincide TRIAS (1972: 16), ao citar Lenin, de que a expansão do capitalismo buscando mercados para desaguar seus excedentes de mercadorias e capitais, e em busca de matéria-prima, é a consequência direta do desenvolvimento desigual de suas estruturas internas.

<sup>90</sup> DUSSEL (2013: 87-88) assinala que a origem do capitalismo e do colonialismo são simultâneas, uma vez que a acumulação originária tem como fonte preponderante a extração da riqueza colonial.

<sup>91</sup> FOUCAULT (2016: 231).

<sup>92</sup> BUENO (1997: 231-232), no entanto, lembra o sonho de uma grande república da América Latina de Simon Bolívar, em 1815, quando na Jamaica Bolívar convocou uma Conferência no Panamá, para 1826, com o objetivo de dar consistência à união da América Latina. A Conferência inicialmente convocava apenas os países da América do Sul e Central, todavia, em 1825, estendeu o convite aos Estados Unidos, e também à Gra-Bretanha e Holanda como observadores. Lamentavelmente, o evento teve poucos resultados e o continente se tornou alvo fácil para a hegemonia estadunidense.

<sup>93</sup> BARBOSA (2009: 148).

<sup>94</sup> CHÁVEZ (2015: 88).

país invasor para submetê-lo. O país neocolonizado segue tendo independência política de forma oficial, porém, sofrendo métodos indiretos que provocam uma dominação lucrativa ao país anteriormente invasor. Conclui dizendo que uma das maneiras indiretas de influência se dá mediante o apoio e manutenção, pelos países dominantes, de acordos com as elites que têm o poder político nos países dominados.

ZAFFARONI<sup>95</sup> chama a esta versão imperial de neocolonialismo de “fase superior do colonialismo”, pois, segundo o autor, a globalização, como produto da revolução tecnológica, desencadeia uma nova forma de dominação hegemônica, que não é mais do que uma nova fase do mesmo colonialismo, e que, *ipso facto*, é melhor chamar as coisas por aquilo que são para que não se perca a visão de continuidade histórica.

Assim, a disputa entre nações industrializadas e as tensões geradas para buscar espaços coloniais e mercado terminará provocando as duas grandes Guerras Mundiais. HARVEY<sup>96</sup> explana que o mundo imergiu numa grande guerra global, no século XX, por rivalidades interimperialistas, e que por duas vezes no espaço de uma geração o mundo vivenciou a desvalorização maciça do capital por meio da destruição física e da extinção final da força de trabalho como bucha de canhão. Como descreve TRIAS<sup>97</sup>, a industrialização tardia da Alemanha, concluída em 1870, faz surgir um formidável aparato de produção, porém desprovido de espaço colonial, dividindo-se o mundo, no final do século XIX e início do século XX, entre potências satisfeitas, com vastos impérios coloniais (como Grã-Bretanha e França), e potências insatisfeitas (como a Alemanha)<sup>98</sup>,

---

<sup>95</sup> ZAFFARONI (2015: 33).

<sup>96</sup> HARVEY (2013: 635). O autor prossegue comentando que a luta de classes, em suas palavras:

(...) pagou o seu tributo à custa da sua integridade física e da sua vida, principalmente devido à violência diária que o capital impunha ao trabalhador no local de trabalho, e devido à violência da acumulação primitiva (incluindo as guerras imperialistas travadas contra outras formações sociais em nome das “liberdades” capitalistas).

<sup>97</sup> TRIAS (1972: 27-28).

<sup>98</sup> Sobre a ascensão da Alemanha como potência industrial e suas diferenças com a Inglaterra, pontua WOOD (2018: 128):

*La observación de Wiener de que el gobierno de Bismarck estaba motivado por las ventajas geopolíticas del desarrollo económico en su promoción de la industrialización proporciona sustento a este punto de vista. Después de todo, no es difícil comprender por qué el capital privado, dirigido por las obligaciones de la acumulación de capital, fue dirigido a los bienes de consumo producidos a bajo coste para un mercado de masas, en el que ya estaban presentes las condiciones necesarias, especialmente en un estadio de desarrollo en el que no se disponen ni de las capacidades tecnológicas ni de mercado necesarias para impulsar los bienes de consumo pesados, mientras que en respuesta a las presiones geopolíticas y militares, los Estados podían decantarse por impulsar la producción a gran escala de bienes de capital. En cierta*



com elevada capacidade produtiva, crescentes quantidades de capital sobrando e sem colônias onde desaguar excedentes de mercadorias e dinheiro<sup>99</sup>.

Paralelamente, o desenvolvimento industrial europeu fez surgir reivindicações por melhores condições de trabalho da classe proletária, destacando-se as revoltas ocorridas em 1848, no movimento conhecido por Primavera dos Povos<sup>100</sup>, que contou levantes populares em diversos países. O Manifesto Comunista, de Marx e Engels, foi contemporâneo ao movimento. Sucessivamente, as reivindicações irão ganhar cada vez mais força até alcançar voz e respaldo mundial com a realização de reuniões internacionais de trabalhadores<sup>101</sup>. A primeira tentativa da classe trabalhadora tomar o poder se dá no final da guerra franco-prussiana, em 1871, no episódio conhecido como Comuna de Paris<sup>102</sup>. Finalmente, em 1917, a tomada de poder exitosa da Revolução Russa e a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922 irá constituir um contraponto à hegemonia capitalista mundial e aos seus representantes, como Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha. Segundo PATASSO<sup>103</sup>, a revolução consolida a ideia de uma cidadania portadora de direitos, possibilitando alcançar níveis inéditos de igualdade, segurança, serviços de saúde e educação, habitação, emprego e cultura, além de pôr fim à discriminação racial e de gênero, desemprego e pobreza extrema. Ainda, pela primeira vez as pessoas trabalhadoras passam a participar de decisões políticas (não obstante o experimento de dois meses da comuna de Paris).

---

*manera, la diferencia entre Inglaterra y Alemania era que la industrialización inglesa fue resultado del capitalismo, mientras que el capitalismo alemán se vio, como mínimo, acelerado por la industrialización, una evolución del capital privado industrial impulsado por el Estado.*

<sup>99</sup> Em 1884, o chanceler alemão Otto Von Bismarck organiza uma reunião entre potências industrializadas (Inglaterra, França, Holanda, Itália, Países Baixos, Estados Unidos etc.) para tratar da partilha da África. O evento ficou conhecido como Conferência de Berlim.

<sup>100</sup> Sobre o episódio, HOBBSAWM (2012: 24-25,34) anotou que as revoluções foram revoluções sociais dos trabalhadores pobres, e que se as mudanças realizadas pelo ano de 1848 não foram as que os revolucionários intentaram, resultaram, no entanto, bem profundas, marcando o fim da política da tradição e da crença monárquica de que os povos aceitavam a regra do direito divino para dinastias presidirem sociedades hierarquicamente estratificadas com a sanção religiosa e a crença dos direitos e deveres patriarcais dos que eram superiores social e economicamente.

<sup>101</sup> Ficaram conhecidas como Internacionais, a primeira, em 1864, em Londres, que resultou na criação da AIT - Associação Internacional de Trabalhadores, tendo Karl Marx como um de seus líderes. Depois, a segunda internacional, em 1889, em Paris, com Friedrich Engels à frente, organizando partidos políticos socialistas e operários. A terceira internacional, ou Internacional Comunista, se deu em 1919, em Petrogrado, sob a liderança de Vladimir Lenin, reunindo partidos comunistas. A quarta internacional teve León Trotsky por fundador, realizada na França, em 1938, com a finalidade de ajudar a classe trabalhadora atingir o comunismo.

<sup>102</sup> A tomada de Paris se deu em março de 1871, no entanto, dois meses depois, a classe burguesa, com apoio dos militares, esmagou o movimento, com o massacre de cerca de vinte mil pessoas e o aprisionamento de outras trinta e oito mil.

<sup>103</sup> PATASSO (2017).

Entretanto, o medo de revoluções trabalhistas na Europa no pós Primeira Guerra dá origem à adoção do fascismo como técnica de controle social e manutenção do regime capitalista. TRAVERSO (2019) descreve o medo das elites que as levou a apoiar o fascismo:

*In the 1930s it was anti-communism that pushed Europe's elites to accept Hitler, Mussolini, and Franco. As several historians have pointed out, such dictators certainly benefited from the many 'miscalculations' made by statesmen and the traditional conservative parties, but there is no doubt that without the Russian Revolution and the global Depression, the economic, military, and political German elites faced with a collapsing Weimar Republic would not have allowed Hitler to take power.<sup>104</sup> TRAVERSO (2019: 17-18)*

O resultado catastrófico do último conflito interimperial, com o uso de técnicas fascistas para manutenção do poder estatal pelo grande capital é conhecido, produzindo a destruição da Europa e do Japão, de sessenta milhões de vidas humanas, e atentados barbáricos a Direitos Humanos como os conhecidos no holocausto.

No período de pós-guerra, com os ânimos beligerantes serenados pós intensa destruição, novamente o constante medo das elites e do grande capital de que a classe trabalhadora tomasse o poder na Europa irá motivar a revitalização da OIT, em 1944, com a Declaração de Filadélfia, um documento que muda a história do Direito do Trabalho, como será explanado mais adiante.

Entrementes, com a II Guerra Mundial, os EUA consolidam seu poderio militar<sup>105</sup> e hegemonia econômicas, propondo o plano Marshall<sup>106</sup> para reconstrução da Europa, que, com a proposta de grandes investimentos estatais em obras públicas e alavancando a empregabilidade, de influência keynesiana<sup>107</sup>,

---

<sup>104</sup> TRAVERSO (2019: 17-18). Tradução livre:

Na década de 1930, foi o anticomunismo que levou as elites europeias a aceitar Hitler, Mussolini e Franco. Como vários historiadores apontaram, tais ditadores certamente se beneficiaram de muitos 'erros de cálculo' feitos por estadistas e os partidos conservadores tradicionais, mas não há dúvida de que sem a Revolução Russa e a Depressão global, as elites econômicas, militares e políticas alemãs, confrontadas com o colapso da República de Weimar, não teriam permitido que Hitler tomasse o poder.

<sup>105</sup> No entanto, o presidente Dwight Eisenhower, em seu discurso de despedida da presidência dos EUA, em 17.01.1961, alertou para o perigo que o poder da combinação industrial-militar representava para as liberdades e os processos democráticos.

<sup>106</sup> O plano foi concebido pelo Secretário de Estado dos EUA, general George Marshall, sendo sancionado pelo presidente Harry Truman, em 03.09.1948, após aprovação do congresso estadunidense. O plano consistia de ajudas econômicas à Europa mediante a concessão de empréstimos para a reconstrução dos países no pós-guerra. Obviamente, era uma estratégia de influência dos EUA na Europa para a manutenção do regime capitalista.

<sup>107</sup> John Maynard Keynes (1883-1946), economista britânico que defendeu a intervenção do estado



irá promover os denominados trinta anos dourados do capitalismo<sup>108</sup>, de 1945 até 1973, a chamada *pax americana*<sup>109</sup>.

Conforme LUKÁCS<sup>110</sup>:

E visto que a Segunda Guerra Mundial acarretou o desmoronamento do antigo colonialismo em escala mundial, essa nova forma da dominação democrática deveria colocar todos os povos mais ou menos atrasados no rumo da civilização. O único inimigo pareceu ser a “obsessão conquistadora” da União Soviética; o monopólio atômico inicial deveria servir para rechaçar de modo aniquilador a agressão tida como certa, para assim estabelecer a “*pax americana*” que traria felicidade a todos na forma de império mundial pacífico e livre. Não é preciso descrever aqui quando, onde e como essa concepção se evidenciou faticamente como slogan publicitário de uma monumental manipulação imperialista.

No final da 2ª Guerra também se promove o acordo de Bretton-Woods<sup>111</sup>, formando um sistema financeiro internacional que favoreceu os Estados Unidos, tornando o dólar como referência mundial econômica mediante a garantia

---

na economia, suprindo-se a disfuncionalidade do mercado através de políticas públicas e de normas, sobretudo voltadas à ação estatal para a promoção e sustentabilidade do pleno emprego. Fonte: sítio *Sabedoria Política*, breve biografia de John Maynard Keynes compilada por Alexandro M. Medeiros. Recuperado de <https://www.sabedoriapolitica.com.br/filosofia-politica/filosofia-contempor%C3%A2nea/john-keynes/>

<sup>108</sup> Conforme GONÇALVES (2014: 45), os chamados anos de ouro representam o que mais se aproximou do ideal liberal de igualdade social aliada ao desenvolvimento capitalista. Contudo, a estrutura capitalista, fundada na desigualdade insuperável dentro da lógica das relações sociais que a sustentam, limita a realização desse ideal.

<sup>109</sup> Com base na teoria da estabilidade hegemônica, pela qual seria necessária uma nação dominante para estabelecer e garantir a ordem internacional, a *pax americana* remonta à expressão latina *pax romana*, correspondente ao período do Império Romano, em que Roma se impôs na civilização clássica através do seu poderio militar, políticas de contenção de revoltas e aculturação dos povos conquistados. Também à *pax britannica*, correspondente ao período de hegemonia do império britânico no século XIX. A *pax americana* se assentava não só sobre os fundamentos de um forte poderio militar ou *hard power*, como também, segundo FROELICH (2005: 208), em uma gama de instrumentos de persuasão, sem uso da força (*soft power*), como a diplomacia (incluindo a concessão de bolsas de estudo para estrangeiros, programas de intercâmbio cultural entre acadêmicos, a mídia financiada pelo Estado, e a atividade de órgãos do governo). Tudo com objetivo de disseminar, no exterior, “a expansão da democracia representativa liberal”. Ainda, FROELICH menciona a expressão do *soft power* por meio do comércio internacional e da ajuda financeira aos países pobres para consolidar o avanço das economias de mercado e o fortalecimento do capitalismo.

<sup>110</sup> LUKÁCS (2013: 581).

<sup>111</sup> Em 1944, em Bretton-Woods, New Hampshire, EUA, se promoveu a conferência monetária e financeira das Nações Unidas. Nesta ocasião, criou-se o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (que mais tarde viria a se tornar o Banco Mundial) e o FMI – Fundo Monetário Internacional.

de sua convertibilidade em equivalente em ouro, através das reservas de ouro dos EUA.

Por outro lado, o choque da guerra impõe a motivação necessária para a busca de um caminho de paz entre os povos, assim, a falida Liga das Nações, criada depois da I Guerra, em 1919, evolui para a fundação da ONU em 1945, extinguindo-se a Liga, conseqüentemente, em 1946. A Carta Constitutiva das Nações Unidas assume relevante marco no âmbito dos Direitos Humanos pelo compromisso de defesa, respeito universal e observância de DDHH para todos, sem discriminação. Seu preâmbulo traduz o espírito do período:

NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, RESOLVIDOS  
a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla.<sup>112</sup>

Todavia, a estruturação da ONU, nesse início, é marcada pela divisão bipolar do mundo (capitalismo-comunismo), e o conflito entre as duas potências emergentes dos pós-guerra, EUA e União Soviética, que irão constituir os grandes polos que digladiarão pela consolidação da influência global na nascente guerra fria<sup>113</sup>.

De outra parte, o declínio de potências imperialistas coloniais europeias, arrasadas com a guerra, como França, Inglaterra, Itália, provoca o processo de descolonização, sobretudo da Ásia e da África, com o estímulo do reconhecimento do direito de autodeterminação dos povos na DUDH. No período, EUA e União soviética irão apoiar os movimentos de independência como estratégia de ampliação de sua área de influência.

Entretanto, NOVACK<sup>114</sup> apontou com propriedade que nenhum dos países neocoloniais conseguiu controle completo de seus destinos econômicos, sendo mantida a submissão aos poderes das metrópoles ricas. Na nova conformação mundial, segundo aponta, a burguesia neocolonial pode dirigir o Estado, não obstante, o capital estrangeiro permanece como fator fundamental na moldagem do desenvolvimento econômico, e que mesmo nos países que conseguiram

---

<sup>112</sup> Fonte: sítio da ONU tratando da Carta das Nações Unidas. Recuperado de: <https://nacoesunidas.org/carta/>

<sup>113</sup> Disputa pela hegemonia mundial entre EUA e a União Soviética (doravante URSS), de 1945 até a extinção da URSS em 1991. O presidente Harry Truman, em 1947, propôs políticas externas aos EUA para combater a expansão da influência soviética no mundo. Conforme a doutrina Truman, o mundo se dividia em governos livres democráticos e totalitarismos comunistas.

<sup>114</sup> NOVACK (1999: 306-307).

afirmar regimes constitucionais ou democracias parlamentares, elas seguem frágeis e instáveis, passíveis de sucumbir ao primeiro sinal de tensão social séria e conflito de classe.

### *1.2.1. O imperialismo estadunidense e seu impacto nos Direitos Humanos*

É conhecida a associação da mão invisível do mercado ao punho invisível militar, feita por Thomas Friedman<sup>115</sup>:

A mão oculta do mercado nunca funcionará sem um punho oculto - o McDonald's não pode florescer sem McDonnell Douglas, o construtor do F-15. E o punho oculto que mantém o mundo seguro para as tecnologias do Vale do Silício é chamado de Exército, Força Aérea, Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos.

O nascimento do imperialismo estadunidense está marcado na chamada doutrina Monroe – “a América para os americanos” -, enunciada pelo presidente estadunidense James Monroe em 1823. HARDT-NEGRI<sup>116</sup> mencionam os esforços dos EUA em exercer o controle de toda a América, como pretensa medida defensiva contra o colonialismo europeu, assumindo o papel de protetores de todas as nações americanas contra a agressão europeia. Posteriormente, em 1904, o presidente Theodore Roosevelt propôs o corolário da doutrina, reclamando para o país um poder internacional de polícia.

Mas é sobretudo no pós II Guerra que o imperialismo estadunidense assumirá uma dimensão global e impactante nos Direitos Humanos. Segundo GÓES<sup>117</sup>, os Estados Unidos dimensionaram um arcabouço de estruturas hegemônicas de poder, cujo início se volta à Conferência de Breton-Woods, em 1944, no final da 2ª Guerra Mundial.

A articulação do plano Marshall para recuperação da Europa, em realidade, se traduziu em mecanismo de contenção do comunismo ofertado aos países capitalistas, evitando a tomada de poder pela classe trabalhadora durante a fragilidade institucional do período de reconstrução do pós guerra. O presidente Harry Truman, em 1947, proclama a necessidade dos países capitalistas se defenderem da ameaça socialista<sup>118</sup>, marcando o início da chamada doutrina Truman e, a partir daí, do conflito entre as potências emergentes do pós Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética, conhecido como Guerra Fria, e da divisão polarizada do mundo entre capitalismo e comunismo.

---

<sup>115</sup> Fonte: artigo intitulado “*Manifesto for the fast world*”, publicado no *The New York Times Magazine*, em 28 de março de 1999. (Obs.: com tradução). Recuperado de <https://www.nytimes.com/1999/03/28/magazine/a-manifesto-for-the-fast-world.html>

<sup>116</sup> HARDT-NEGRI (2012: 418-419).

<sup>117</sup> GÓES (2018: 514).

<sup>118</sup> Fonte: notícia publicada no jornal Deutsche Welle, em 12 de março de 2017, intitulada “*1947: Divulgada a Doutrina Truman*”. Recuperado de <https://www.dw.com/pt-br/1947-divulgada-a-doutrina-truman/a-305913>

Como reflexo ao sul do continente americano, BAILONE<sup>119</sup> aponta que a doutrina geopolítica afiançada na guerra fria colocou toda a América Latina sob a influência estadunidense, permitindo ao país ditar e supervisionar a institucionalidade dos países colonizados e impor cruéis ditaduras<sup>120</sup>. Graves violações de Direitos Humanos foram produzidas, sequestros, torturas, desaparecimentos de pessoas, repressão da greve e do sindicalismo, retrocesso nas legislações laborais dos países sob regime de exceção, tudo sob financiamento e comando imperialista estadunidense, conforme elucida CHOMSKY<sup>121</sup> ao apresentar o mecanismo corporativo motivador da interferência dos EUA para deflagrar, v.g., o golpe militar chileno da década de 1970:

*It wasn't the first time the US had done that. For example, our government intervened massively to prevent Allende from winning the preceding election, in 1964. In fact, when the Church Committee investigated years later, they discovered that the US spent more money per capita to get the candidate it favored elected in Chile in 1964 than was spent by both candidates (Johnson and Goldwater) in the 1964 election in the US! Similar measures were undertaken in 1970 to try to prevent a free and democratic election. There was a huge amount of black propaganda about how if Allende won, mothers would be sending their children off to Russia to become slaves - stuff like that. The US also threatened to destroy the economy, which it could - and did - do. Nevertheless, Allende won. A few days after his victory, Nixon called in CIA Director Richard Helms, Kissinger and others for a meeting on Chile. Can you describe what happened? As Helms reported in his notes, there were two points of view. The 'soft line' was, in Nixon's words, to 'make the*

---

<sup>119</sup> BAILONE (2011: 150-151).

<sup>120</sup> Conforme ROSENMANN (2013: 15), “*los golpes de Estado y el anticomunismo marchan juntos en la historia. Sus comienzos fueron inorgánicos y difusos, pero a medida que los partidos obreros crecieron, el anticomunismo se vertebró como parte de la razón de Estado*”.

<sup>121</sup> CHOMSKY (1995: 92). Tradução:

Não foi a primeira vez que os EUA fizeram isso. Por exemplo, nosso governo interveio maciçamente para evitar que Allende vencesse a eleição anterior, em 1964. Na verdade, quando o Comitê da Igreja investigou anos depois, descobriu que os Estados Unidos gastaram mais dinheiro *per capita* para conseguir que o candidato favorecido fosse eleito no Chile em 1964 do que foi gasto por ambos os candidatos (Johnson e Goldwater) nas eleições de 1964 nos Estados Unidos! Medidas semelhantes foram tomadas em 1970 para tentar impedir uma eleição livre e democrática. Houve uma enorme propaganda obscura sobre como, se Allende vencesse, as mães estariam mandando seus filhos para a Rússia para se tornarem escravos - coisas assim. Os Estados Unidos também ameaçaram destruir a economia, o que podiam fazer - e fizeram. Mesmo assim, Allende venceu. Poucos dias depois de sua vitória, Nixon chamou o diretor da CIA Richard Helms, Kissinger e outros para uma reunião sobre o Chile. Você pode descrever o que aconteceu? Como Helms relatou em suas notas, havia dois pontos de vista. A ‘linha suave’ era, nas palavras de Nixon, ‘fazer a economia gritar’. A ‘linha dura’ era simplesmente apontar para um golpe militar.

*economy scream'. The 'hard line' was simply to aim for a military coup.*  
(CHOMSKY, 1995: 92)

AMIN<sup>122</sup> esclarece que os instrumentos da gestão imperialista “foram implementados logo depois da Segunda Guerra Mundial, progressivamente calibrados para responder às exigências de desenvolvimento imperialista, e reforçados por novas criações”. Desta forma, prossegue AMIN, a OMC<sup>123</sup>, o Banco Mundial e o FMI são os principais instrumentos para a gestão econômica do sistema, enquanto a OTAN e o G7/G8<sup>124</sup> são instrumentos para os setores político e militar. Nesse sentido, coincide GÓES<sup>125</sup>, alertando, ainda, que os EUA desenharam um esquema mundial de cooperação comercial com três grandes áreas de integração comercial, a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), o Mercado Transatlântico, e a Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (APEC). E que estes três instrumentos de integração foram apoiados pela criação estadunidense da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1994, alavancando uma segunda dimensão de indutores indiretos composta pelo FMI, BIRD<sup>126</sup> e OMC, com a qual “o império estadunidense encontraria o caminho ideal para o triunfo capitalista neoliberal de acordo com a condição pós-moderna da geopolítica global”.

LINDGREN-ALVES<sup>127</sup> esclarece que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não se tornou tratado por obra dos EUA, que se opuseram a um documento que lhes impusesse obrigações domésticas, optando por uma simples declaração. Também relata que a recusa dos Estados Unidos em reconhecer direitos econômicos, sociais e culturais fez com que as negociações sobre um tratado genérico tomassem duas vias, em instrumentos separados, originando o PIDCP e o PIDESC, consumindo duas décadas de negociação e dez anos adicionais para a vigência em 1976, e, ainda assim, os EUA ratificaram tão somente o primeiro. Por fim, explica que os Estados Unidos são um dos estados que menos ratificaram instrumentos internacionais de Direitos Humanos, significando que essa relutância perene decorre do autoconferido “excepcionalismo”, que põe o país acima daquilo que ele próprio exige dos demais.

---

<sup>122</sup> AMIN (2005).

<sup>123</sup> Sobre a OMC, o autor ainda acrescenta que a entidade foi criada para reforçar as “vantagens comparativas” do capital transnacional, dando-lhes legitimidade, enquanto os chamados “direitos de propriedade industrial e intelectual” foram formulados para perpetuar os monopólios transnacionais, garantindo-lhes superlucros ao mesmo tempo que criam mais obstáculos para a industrialização das periferias.

<sup>124</sup> As siglas se referem à reunião de países mais industrializados e desenvolvidos economicamente, composta de Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá (G7). O G8 compreende a inclusão da Rússia.

<sup>125</sup> GÓES (2018: 513-514).

<sup>126</sup> Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, criado em 1944, com sede em Washington, inicialmente com a missão de auxiliar na reconstrução dos países europeus, passando a integrar o Banco Mundial e disponibilizar recursos financeiros para nações em desenvolvimento.

<sup>127</sup> LINDGREN-ALVES (2019: 21-22).

FORSYTHE<sup>128</sup> descreve a política internacional estadunidense em várias passagens do livro *Derechos Humanos y Política Mundial*, apontando a diferença entre retórica e realidade, pois internamente a aplicação da política de Direitos Humanos teve ações concretas muito poucas vezes, enquanto o tema DDHH era usado para construir consenso para a formulação de uma política exterior. Destaca-se o trecho:

“Na elite política estava claro que não havia consenso em favor dos direitos humanos em seus distintos aspectos. O senador Daniel Patrick Moynihan (D., NY) disse abertamente que os direitos humanos deveriam ser usados como uma arma contra os países marxistas e seus aliados, e o senador Robert Doyle (R. Kan.) fez exatamente isso ao criticar o Vietnã, mas sem dizer uma palavra sobre regimes de direita igualmente repressivos.” (FORSYTHE, 1988: 108 – obs.: traduzido)

Por outro lado, HARDT–NEGRI<sup>129</sup> explanam que, após a guerra do Vietnã, o processo de descolonização, antes regido, no primeiro período, pela opção entre regime capitalista ou comunista dos países ex-colônias de grandes potências, agora se centrava no processo de descentralização dos lugares e dos fluxos de produção. Tal processo se deu em duas etapas: a fase neocolonial, com a continuidade dos antigos procedimentos imperialistas hierárquicos e a manutenção ou aprofundamento dos mecanismos de intercâmbio desigual entre as regiões subordinadas e os Estados-Nação dominantes; e, depois da guerra do Vietnã, no final da década de 1970, com grandes empresas internacionais estendendo suas atividades por todo o planeta<sup>130</sup>. Nesta fase, esclarecem que as empresas transnacionais se converteram no motor fundamental da transformação econômica e política dos países pós-coloniais e das regiões subordinadas, transferindo tecnologia essencial para construir o novo eixo produtivo dos países subordinados, mobilizando a força laboral e as capacidades produtivas desses países e recoletando os fluxos de riqueza que começaram a circular pelo globo. Fluxos que começaram a convergir basicamente aos EUA, como país garantidor e coordenador, ou em comando direto, do movimento e operação das empresas transnacionais.

HARDT–NEGRI<sup>131</sup> mencionam ainda que, junto ao processo de descolonização e da descentralização dos fluxos, foi produzido um terceiro mecanismo

---

<sup>128</sup> FORSYTHE (1988: 108-109).

<sup>129</sup> HARDT–NEGRI (2012: 389-391).

<sup>130</sup> Em outra passagem da obra *Imperio*, HARDT–NEGRI (2012: 418-419) comentam que, no dia 17.08.1971, quando o presidente Richard Nixon desvinculou o dólar do padrão ouro, rompendo o acordo Bretton-Woods, convertendo a sua moeda em moeda inconvertível *de jure*, agregando ainda uma sobretaxa de dez por cento a todas as importações da Europa, a dívida estadunidense foi impulsionada efetivamente para a Europa, graças ao poder econômico e político dos EUA. Assim, na década de 1970, a crise se fez oficial e estrutural e o sistema de equilíbrios políticos e econômicos inventado em Bretton-Woods caiu, permanecendo apenas a realidade brutal da hegemonia estadunidense.

<sup>131</sup> HARDT–NEGRI (2012: 392).



implicando a disseminação das formas disciplinares de produção e governo por todo o mundo. Assim, nos países pós-coloniais, a disciplina exigia transformar a mobilização popular massiva em favor da liberação, em mobilização em favor da produção, em modelo ideológico projetado desde os países dominantes (particularmente os EUA), consistente de regimes salariais fordistas (altos salários), métodos de organização de trabalho tayloristas<sup>132</sup> e um Estado benfeitor, modernizador, paternalista e protetor.

Após a queda do muro de Berlim, no entanto, ocorreram grandes transformações no plano da geopolítica mundial, motivando, segundo GÓES<sup>133</sup>, a ideia de implantação de uma nova era, de um novo paradigma, representado, no campo da evolução social do Estado, pela mitigação do *Welfare State* (Estado do Bem-Estar Social), em favor de uma revitalização do Estado Liberal, realizada dentro de um contexto de abertura mundial do comércio. No plano internacional, pela transição de uma ordem bipolar de alta estabilidade estratégica para uma ordem mundial ainda em construção, mas disputada por duas grandes perspectivas mutuamente exclusivas: a manutenção do mundo capitaneado pela *pax* hegemônica dos Estados Unidos, e o surgimento do mundo pós-estadunidense, caracterizado pela consolidação de uma ordem mundial multipolar, com crescente equilíbrio de poder de potências globais e regionais, como China, Índia e Rússia. A estatalidade pós moderna teria características relacionadas à globalização neodarwinista, com a abertura mundial do comércio, desprestígio do Estado westfaliano, redução jurídica do Estado e busca por competitividade internacional. Os instrumentos jurídicos do imperialismo são explicados por PISTOR (2019): basicamente o direito contratual, direitos de propriedade (inclusive intelectual), direito colateral, direito fiduciário, corporativo e de falências. A lei imperial deve ser exportada às colônias para segurança jurídica do capital imperial na fase corporativo-financeira.

E se a antiga doutrina Monroe deixava claro que o autoproclamado poder de polícia internacional dos EUA<sup>134</sup> somente agia em favor de seus interesses, a hegemonia consolidada com a queda do muro de Berlim e a extinção da União Soviética, deixava o campo aberto para a propagação do capitalismo estadunidense para qualquer canto do mundo, através de suas grandes corporações oli-

---

<sup>132</sup> Na década de 1970, o modelo toyotista de produção, utilizado na indústria automobilística, em substituição ao fordista, se acoplou perfeitamente ao neoliberalismo, que já estava tornando-se hegemônico, ao preconizar a redução de custos, aumento da produtividade e garantia da ganancia do capital, mediante a entrega do serviço ou produto somente na medida do necessário. Segundo CHAVES JÚNIOR, a produção da grande indústria se desloca para o novo modelo ohnista/toyotista, no qual a produção linear e vertical se substitui por uma concepção mais reticular e horizontal, diminuindo a capacidade da pessoa trabalhadora de paralisação do sistema produtivo (CHAVES JÚNIOR, 2017: 106). O modelo aplicado à administração pública implica em um Estado neoliberal diminuído em suas ações sociais, privatizador e aberto ao capital especulativo, sobretudo das grandes corporações e bancos multinacionais.

<sup>133</sup> GÓES (2018: 512-513).

<sup>134</sup> Tal qual o poder de polícia internacional exercido pela Inglaterra no período da *pax britannica*.

gopólicas, sem qualquer oposição, e sempre com o aparato militar de garante, com o belo pretexto de “defender” a democracia.

De forma que, uma vez vencido o modelo pós-guerra do Vietnã, a proposta de modelo pós-guerra fria dos EUA, sobretudo para a América Latina, passa a ser a do Estado mínimo neoliberal, e de maneira bem explícita, pois, como dizem SAXE-FERNÁNDEZ-PETRAS<sup>135</sup>, os programas militares dos Estados Unidos para o México e a América Latina visam a influenciar na “agenda” de segurança nacional, confinando o papel das forças armadas da região a atividades basicamente policiais e repressivas. Com isso, militarizam a luta antinarcóticos<sup>136</sup>, promovendo programas de adestramento e equipamento para a “contra insurgência” rural e urbana – nas palavras dos autores, desta feita sem as vestimentas da guerra fria e abertamente encaminhados a “solucionar” o grave problema de ingovernabilidade que eles próprios, Estados Unidos, geram, com suas contrapartes locais, através da aplicação de programas de ajuste estrutural do Fundo Monetário Internacional. Programas estes que são desenhados para dismantelar o salário, debilitar a estrutura produtiva e o mercado local; abrindo unilateralmente os mercados, com conseqüente quebra de micro, pequenas e médias empresas nacionais, as principais fontes criadoras de trabalho.

Assim, o desenvolvimento do capitalismo, acompanhado de avanços científicos e evolução da tecnologia, através do seu expoente-mor, os EUA, na atualidade, leva a um geodireito capitaneado pelo capitalismo monopóico de grandes multinacionais, que, conforme IRTI<sup>137</sup>, se determina pela oferta dos Estados e de seus sistemas jurídicos à economia, a qual, espalhada por todo o mundo e capaz de implantar produção e troca em qualquer lugar, calcula custos e benefícios dos direitos individuais. Neste cenário, segundo o autor, o mercado de ordens jurídicas substitui a ordem jurídica do mercado, que se oferecem em concorrência, conforme a escolha das empresas. Conclui que “a lei não determina mais o lugar da economia; mas a economia escolhe o lugar da lei”. Em suas palavras:

*Questo quadro, così racchiuso e serrato, è messo in pericolo dal capitalismo moderno: modo di economia che, applicando il criterio di divisione del lavoro e producendo in serie, esige mercati sempre più vasti e aperti. La volontà d'infinito profitto, congiungendosi con le scoperte della scienza e le applicazioni della tecnica, non conosce confini. La sua natura sospinge a s-confinatezza e de-localizzazione. Il produrre e lo scambiare non richiedono identità né di luoghi né di soggetti: essi si fanno ovunque e con chiunque. Il capitalismo ha tale grado di oggettività e neutralità da considerare i territori degli Stati come spazi di nessuno - o, meglio, come spazi dell'impersonale produrre e scambiare -; e da spogliare gli individui dei loro caratteri (religiosi, linguistici, etnici) riducendoli a mere funzioni del mercato. Tutto ciò che presuppone confine termine limite viene minacciato e travolto: il capitalismo,*

---

<sup>135</sup> SAXE-FERNÁNDEZ-PETRAS (2001: 26).

<sup>136</sup> São exemplos notórios a Colômbia e o Rio de Janeiro.

<sup>137</sup> IRTI (2007).



*nell' indefinito perseguimento di profitto, ignora la misura, capace di definire ambiti e soggetti, sfere e luoghi. E così, mentre politica e diritto si attardano entro la misura dei confini, e restano fedeli alle vecchie forme spaziali, l'economia capitalista varca ogni barriera; non distingue cittadini e stranieri (poiché tutti agguaglia nell' omogeneità dello scambio), si espande ovunque, negozia con chiunque, si configura, insomma, come potenza planetaria e globale (...). (IRTI, 2007)<sup>138</sup>.*

Portanto, esta fase de desenvolvimento do capitalismo como sistema hegemônico, no contexto de globalização e imperialismo dos Estados Unidos, afeta profundamente os Direitos Humanos na atualidade, sobretudo os direitos sociais, tornando a luta por sua afirmação uma necessidade urgente em busca de justiça social universal.

### **I.3 Neocolonialismo contemporâneo e a ideologia do subdesenvolvimento**

O conflito entre potências capitalistas industrializadas que redundou na 2ª Guerra Mundial e a barbárie dela resultante demonstrou a urgência da agenda de Direitos Humanos e do resgate do objetivo de buscar a implementação de justiça social, propalada na criação da OIT, no pós 1ª Guerra em 1919. Nesta direção, já no final do segundo conflito mundial, em 1944, se promove a Declaração de Filadélfia, revitalizando a OIT, e desenhando um novo modelo de Estado, o Estado do Bem-Estar Social<sup>139</sup>, com a promessa de entrega de pleno

---

<sup>138</sup> Tradução livre:

Esse quadro, tão fechado e rígido, está ameaçada pelo capitalismo moderno: um modo de economia que, ao aplicar o critério da divisão do trabalho e da produção em série, exige mercados cada vez maiores e mais abertos. A vontade de lucro indefinido, aliada às descobertas da ciência e às aplicações da tecnologia, não conhece limites. Sua natureza leva ao desconfinamento e à deslocalização. O produzir e o trocar não requerem identidade nem de lugares nem de sujeitos: se fazem em qualquer lugar e com qualquer um. O capitalismo possui um tal grau de objetividade e neutralidade que considera os territórios dos Estados como espaços de ninguém - ou, melhor, como espaços do impessoal produzir e trocar -; e de despojar os indivíduos de seus caracteres (religiosos, linguísticos, étnicos), reduzindo-os a meras funções de mercado. Tudo o que pressupõe fronteira, limite, término é ameaçado e oprimido: o capitalismo, na busca indefinida do lucro, ignora a medida, capaz de definir âmbitos e sujeitos, esferas e lugares. E assim, enquanto a política e o direito se demoram dentro da medida das fronteiras, e permanecem fiéis às velhas formas espaciais, a economia capitalista atravessa todas as barreiras; não distingue cidadãos e estrangeiros (pois iguala a todos na homogeneidade da troca), se expande por tudo, negocia com qualquer um, se configura, em suma, como uma potência planetária e global (...).

<sup>139</sup> GONÇALVES (2014: 41-44), em referência a Singer, narra que iniciativas de implantação do Estado de Bem-Estar Social se deram, inicialmente, na Suécia e Brasil, e posteriormente na Alemanha e nos EUA, representando uma ruptura com a ortodoxia econômica liberal, que apostava no equilíbrio

emprego, salário e condições de vida dignos, saúde, educação e seguridade social<sup>140</sup>. Em continuidade, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 é o ato que culmina o estabelecimento de uma nova base de valores para a manutenção da paz global.

Entretanto, neste mesmo mundo promissor de paz do pós 2ª guerra, emerge um forte neocolonialismo, fruto da hegemonia de países industrializados (sobretudo EUA e as grandes potências da Europa reconstruídas), impedindo o avanço dos países periféricos e seguindo na disputa por recursos naturais, mão-de-obra e mercados para seus produtos, através de suas multinacionais - o chamado capitalismo corporativo, que persiste na fase globalizada.

---

natural do mercado, inaugurando-se uma nova concepção de prestígio ao trabalho como direito social primordial, e derivando daí a incumbência dos governos de instituírem políticas de garantia de pleno emprego. Esclarece que também uma nova concepção econômica vai se impondo, com as formulações de John Maynard Keynes tornando-se hegemônicas até a década de 1970, conferindo novos contornos ao papel do Estado em relação à garantia de pleno emprego, como lógica de organização da sociedade, em correspondência a um direito fundamental da pessoa trabalhadora, de obter trabalho digno com remuneração suficiente para sustentar padrão de vida decente. Conclui no sentido de que o Estado de Bem-Estar Social se caracterizou pela implementação de direitos sociais a partir de fundos públicos e com garantia de acesso universal, independente do mercado ou do mérito individual.

<sup>140</sup> Como expresso no documento:

A Conferência proclama solenemente que a Organização Internacional do Trabalho tem a obrigação de auxiliar as Nações do Mundo na execução de programas que visem: a) proporcionar emprego integral para todos e elevar os níveis de vida; b) dar a cada trabalhador uma ocupação na qual ele tenha a satisfação de utilizar, plenamente, sua habilidade e seus conhecimentos e de contribuir para o bem geral; c) favorecer, para atingir o fim mencionado no parágrafo precedente, as possibilidades de formação profissional e facilitar as transferências e migrações de trabalhadores e de colonos, dando as devidas garantias a todos os interessados; d) adotar normas referentes aos salários e às remunerações, ao horário e às outras condições de trabalho, a fim de permitir que todos usufruam do progresso e, também, que todos os assalariados, que ainda não o tenham, percebam, no mínimo, um salário vital; e) assegurar o direito de ajustes coletivos, incentivar a cooperação entre empregadores e trabalhadores para melhoria contínua da organização da produção e a colaboração de uns e outros na elaboração e na aplicação da política social e econômica; f) ampliar as medidas de segurança social, a fim de assegurar tanto uma renda mínima e essencial a todos a quem tal proteção é necessária, como assistência médica completa; g) assegurar uma proteção adequada da vida e da saúde dos trabalhadores em todas as ocupações; h) garantir a proteção da infância e da maternidade; i) obter um nível adequado de alimentação, de alojamento, de recreação e de cultura; j) assegurar as mesmas oportunidades para todos em matéria educativa e profissional.” Fonte: sítio da OIT. Recuperado de [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasil/documents/genericdocument/wcms\\_336957.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasil/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf)

Desde um ponto de vista de política externa, estas potências historicamente têm influenciado as decisões da ONU, propondo uma espécie de interferência seletiva nas nações mais fracas, a pretexto, v.g., de “ajuda humanitária”<sup>141</sup> e/ou sob a justificativa de “violações de Direitos Humanos”.

De outra parte, de uma perspectiva de política interna nos países periféricos, o neocolonialismo opera com as elites capitalistas locais mediando as influências das grandes potências, como bem descreve este sistema neocolonial contemporâneo VARGAS HERNÁNDEZ<sup>142</sup>:

*Para servir a las elites capitalistas transnacionales, las elites capitalistas locales requieren de Estados recolonizados fuertes para salvaguardar los objetivos imperialistas, y con capacidad para imponer y garantizar la ejecución de las reformas estructurales y de estabilización económica, a pesar de las movilizaciones populares oponentes. Los Estados-Imperiales apoyan directamente a las instituciones financieras internacionales, porque les sirven como instrumentos de penetración y control en los Estados-Neocoloniales, los que a su vez se ordenan conforme a los lineamientos requeridos para convertirse en los garantes de la defensa de los intereses de los capitales transnacionales. Las instituciones financieras internacionales son parte de las extensiones de las redes formadas por los Estados-Imperiales para mantener la supremacía política y económica sobre los Estados-Neocoloniales, los cuales se subordinan a sus dictados, siguen el modelo de corte neoliberal y se convierten en los actores más dinámicos a favor del proyecto hegemónico. La nueva estructura neocolonial del Estado se organiza para la transferencia de valores y recursos a las metrópolis donde se ubican las grandes corporaciones transnacionales, las cuales buscan lograr mayor eficiencia en sus economías de escala y de alcance mediante un nuevo sistema de organización laboral, que ha entrado en una etapa de especialización colonial como base de la creación de ventajas competitivas.*

Porém, não se trata de um processo que se desenvolve sem oposição: em 1955 se organizou a Conferência de Bandung, na Indonésia, com a participação de vários países asiáticos e africanos, com o objetivo de favorecer a cooperação econômica e cultural afro-asiática em uma organização independente, constituindo um início para o futuro Movimento dos Países não Alinhados<sup>143</sup>.

---

<sup>141</sup> Como no caso recente da Venezuela, que amarga as consequências econômicas catastróficas de pesados embargos dos EUA, que, com interesse no petróleo, enviam “ajuda humanitária” para o país, mantendo tropas de sobreaviso para uma eventual invasão. Na notícia intitulada “Sanções dos EUA contra a Venezuela causaram perda de 3 milhões de empregos em 5 anos”, publicada no jornal *Brasil de Fato*, no dia 18.02.2019, é possível conferir inúmeras consequências desses embargos que impactam os Direitos Humanos do povo venezuelano. Fonte: sítio de notícias *Brasil de Fato*. Recuperado de <https://www.brasildefato.com.br/2019/02/18/sancoes-dos-eua-contra-a-venezuela-causaram-perda-de-3-milhoes-de-empregos-em-5-anos/>

<sup>142</sup> VARGAS HERNÁNDEZ (2005: 156).

<sup>143</sup> Fonte: sítio de EcuRed. Recuperado de [https://www.ecured.cu/Conferencia\\_de\\_Bandung](https://www.ecured.cu/Conferencia_de_Bandung)

Neste cenário, de luta dos países periféricos por melhores condições de vida para seus povos, e da construção de uma alternativa, surge o chamado direito ao desenvolvimento, que teve sua primeira definição e caracterização pelo jurista senegalês KEBA M'BAYE, em 1972<sup>144</sup>.

A partir de então, vários documentos internacionais trataram do direito ao desenvolvimento, sendo a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento da ONU (Resolução 41/128 da Assembléia Geral<sup>145</sup>) o principal, editado em dezembro de 1986. Seus três primeiros artigos mencionam o direito ao desenvolvimento como um Direito Humano inalienável que faculta a todos os seres humanos e a todos os povos o direito de participar, de contribuir e de gozar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, no qual todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais possam se realizar plenamente. Na Declaração consta, também, que o Direito Humano ao desenvolvimento implica a realização plena do direito dos povos à autodeterminação, incluindo o exercício do direito inalienável à plena soberania sobre todas as suas riquezas e recursos naturais, tendo a pessoa humana como sujeito central do desenvolvimento.

Desta forma, o Direito Humano ao desenvolvimento constitui uma forma de oposição ao neocolonialismo contemporâneo.

Este direito fecha um ciclo no processo de evolução dos Direitos Humanos iniciado com a Revolução Francesa, pois, como visto, pode ser feita a correspondência proposta por VASAK no tripé “liberdade, igualdade e fraternidade”, encontrando os direitos de primeira dimensão (civis e políticos), correspondentes à liberdade; os direitos de segunda dimensão, correspondentes à igualdade (econômicos, sociais e culturais); e, recentemente, a partir da década de 70, os direitos de terceira dimensão, relacionados à fraternidade (ou solidariedade nos tempos atuais), nos quais se insere o direito ao desenvolvimento como síntese de todos os demais. E na tríade democracia (liberdade), desenvolvimento (igualdade) e Direitos Humanos (solidariedade), fica clara a sua importância, pois não há falar em igualdade sem desenvolvimento. Por outro lado, sem igualdade não há justiça social.

Sucessivos documentos trataram do direito ao desenvolvimento, sendo que o principal foi proclamado em dezembro de 1986, na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento da ONU (Resolução 41/128 da Assembléia Geral), cujos três primeiros artigos mencionam o direito ao desenvolvimento como um Direito Humano inalienável que faculta a todos os seres humanos e a todos os povos o direito de participar, de contribuir e de gozar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, no qual todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais possam plenamente se realizar. Ainda, que o Direito Humano ao desenvolvimento implica também a plena realização do direito dos

---

<sup>144</sup> Na conferência inaugural do Curso de Direitos Humanos do Instituto Internacional de Direitos do Homem de Estrasburgo – França, ETIENE KEBA M'BAYE, falou sobre o direito ao desenvolvimento pela primeira vez em 1972.

<sup>145</sup> Fonte: sítio das Nações Unidas. Recuperado de <http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm>

povos à autodeterminação, o qual inclui, sem prejuízo das disposições pertinentes de ambos os Pactos Internacionais sobre DDHH, o exercício do seu direito inalienável à plena soberania sobre todas as suas riquezas e recursos naturais, sendo a pessoa humana o sujeito central do desenvolvimento, que deve participar ativamente e se beneficiar desse direito<sup>146</sup>.

A ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, culminou na Declaração do Rio, por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, aproximando o direito ao desenvolvimento do direito ao meio ambiente<sup>147</sup>. No ano seguinte, a Conferência Mundial de Viena<sup>148</sup> reafirmou o direito ao desenvolvimento como universal e inalienável e como parte integrante dos direitos humanos fundamentais, sempre com a pessoa humana como sujeito central de desenvolvimento.

Ainda, a Conferência Mundial de Viena, de 1993, estabeleceu que a falta de desenvolvimento não pode ser invocada para justificar a limitação de direitos internacionalmente reconhecidos. O documento nela produzido estabelece que os Estados deverão cooperar entre si para assegurar o desenvolvimento e eliminar os entraves que lhe sejam colocados, cabendo à comunidade internacional promover uma cooperação internacional efetiva com vista à efetivação do direito ao desenvolvimento e à eliminação de entraves, reconhecendo que o progresso duradouro no cumprimento do direito ao desenvolvimento requer políticas de desenvolvimento efetivas a nível nacional, bem como relações econômicas equitativas e um ambiente econômico favorável a nível internacional.

Não obstante, desde o término da 2ª Guerra Mundial, quando surge a Era do Desenvolvimento, as potências imperialistas industrializadas sedimentaram uma noção hegemônica baseada em seu modelo e que, obviamente, não se adapta à condição dos países periféricos de industrialização tardia (ou ainda não industrializados), por diferentes as sociedades, as tecnologias etc. Isto termina por perpetuar as desigualdades entre povos dos países centrais e povos dos países periféricos e naturalizar o processo de extração de recursos naturais e exploração de mão-de-obra barata em seus territórios por parte das corporações multinacionais das grandes potências (sob o pretexto mesmo de “desenvolvimento”). Ou seja, o neocolonialismo contemporâneo vigente no pós grandes guerras, com a hegemonia destes países-potências (preponderando os EUA e seu bloco de apoio consolidado na OTAN), que influenciam politicamente de-

---

<sup>146</sup> Portanto, já com este documento de dezembro de 1986 é possível extrair o Enfoque de Direitos Humanos, tendo a pessoa por sujeito de direito, foco central do desenvolvimento, com direito de participação ativa.

<sup>147</sup> Conforme documento disponível no sítio das Nações Unidas: “Princípio 3. O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras.” (Recuperado de [www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf](http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf))

<sup>148</sup> Fonte: sítio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Recuperado de <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>

cisões da ONU<sup>149</sup>, promove uma interferência seletiva nas violações de Direitos Humanos que ocorrem no planeta e com múltiplas formas de implementação, bastante dissimuladas através de um sistema que anuncia resguardar e garantir DDHH, mas que, ao inverso, permite a intervenção até mesmo direta em nações chamadas mais “fracas”, legalizando sua exploração perante a comunidade internacional.

Portanto, a divisão do mundo proposta pelas Nações Unidas (países desenvolvidos, em desenvolvimento ou emergentes e países subdesenvolvidos), em função das potencialidades de desenvolvimento de cada zona de influência, acaba servindo de instrumento de exclusão social, atendendo interesses econômicos de nações dominantes. Países com recursos diminuídos permaneceriam eternamente subdesenvolvidos, alienados do progresso, e dominados por um sistema de doações de migalhas e constantes intervenções, a pretexto de “salvaguarda de Direitos Humanos”, como se vê acontecer em tantas partes do mundo ao longo da história, a demonstrar que o critério eleito não respeita a diversidade, servindo meramente a interesses imperialistas.

Por este norte, subdesenvolvimento não é um estágio prévio ao desenvolvimento, senão uma consequência do desenvolvimento desmedido de outras nações sustentado por práticas abomináveis de imperialismo, colonialismo e neocolonialismo, e, na verdade, uma armadilha, crença, ou falsa esperança escudada na ideologia de que todos os países “subdesenvolvidos” (leia-se “em desenvolvimento”) serão desenvolvidos um dia. Ademais, a concepção de “desenvolvimento”, nos moldes do discurso mundial de crescimento econômico, tecnologia etc., não corresponde à realidade, já que uma nação pode ser desenvolvida tecnologicamente mas subdesenvolvida em matéria de meio ambiente, etc.

---

<sup>149</sup> Neste sentido, vale a observação de que a menção à “ajuda humanitária” contida no discurso de posse de Truman (*Four Point Speech*), de 20 de janeiro de 1949, foi simplesmente um argumento para legitimar a política expansionista americana do contexto pós 2ª Guerra, nitidamente declarada naquele documento. A assunção, pela ONU, da ideia de desenvolvimento predominante não é tão simples, pois a influência das potências dominantes não pode ser confundida com a efetiva vontade da coletividade de nações que congrega. Inobstante, o organismo também tem obtido resultados positivos, embora o PNUD revele o aumento da desigualdade social entre as nações, o abismo social entre os países “desenvolvidos” e os “não desenvolvidos”, revelando que o sistema atual não está a serviço da redução da desigualdade social. Ora, se houvesse efetiva preocupação de ajuda às nações menos favorecidas, a fome na África já teria sido, no mínimo, remediada em parte. O que se vê são misérias doadas a países mais pobres, sempre com um interesse econômico ou exploratório por trás, que, ainda pior, não respeita a diversidade, impondo globalmente um modelo adotado como “ideal”, que é inatingível pelos “subdesenvolvidos” (em desenvolvimento) no sistema neocolonialista.



Portanto, o sistema atual parte de conceitos<sup>150</sup> impregnados de ideologia imperialista ou exploratória de nações ricas para, a partir daí, estabelecer regras na comunidade internacional. Logo, a melhoria da repartição da riqueza mundial pressupõe profundas mudanças nas bases que sustentam o sistema atual, *conditio sine qua non*. Nesses termos, a consagração do direito ao desenvolvimento é uma luta atual, que confronta grandes potências, especialmente EUA, e as ideias de “globalização”, “livre-mercado” e demais fundamentos neoliberais que seguem sustentando a aplicação da teoria da estabilidade hegemônica, consolidando versão vigente de imperialismo desse país.

De modo que o progresso econômico e o acúmulo de capital, com o consequente aumento do consumo, são ideias que desprezam noções básicas de desenvolvimento sustentável, no qual seja permitido não só a evolução isolada de uma nação, como também a possibilidade das demais se desenvolverem ou, em outro contexto, de todas se desenvolverem por igual.

A visão neoliberalista aplicada na cooperação internacional estimula a permanência do *status quo* planetário persistindo as discrepâncias sociais extremas, entre riqueza e pobreza. O sistema atual de ajuda e cooperação internacional está baseado em interesses dos países ricos, assim, não é coerente e não está corretamente estruturado, e o capital privado, por si só, é incapaz de gerar melhor distribuição de renda entre todos, razão pela qual é imperativa a busca de alternativas que contemplem a mudança do sistema e sua reestruturação enfocando a dignidade humana para todos os povos.

Sobre o tema, a certa observação de MESZÁROS<sup>151</sup>:

A industrialização do ‘Terceiro Mundo’, apesar da sua óbvia subordinação às exigências e aos interesses do capital ocidental, alcançou proporções significativas na configuração global do capital durante os anos do pós-guerra, especialmente nas últimas duas décadas.

Com certeza, nunca teve o sentido de satisfazer as necessidades da população faminta e socialmente carente dos países envolvidos, mas a de prover escoadouros irrestritos para a exportação de capital e gerar nos primeiros tempos níveis inimagináveis de superlucro, sob a ideologia da ‘modernização’ e a eliminação do ‘subdesenvolvimento’. Entretanto, devido à magnitude dos recursos humanos e materiais ativados pelo capital, o impacto geral de tal desenvolvimento não poderia ter sido outro do que pura e simplesmente extraordinário, tanto quanto o da produção total de lucro na referida estrutura global do capital. Apesar de todo um discurso unilateral sobre ‘dependência’, para não mencionar o discurso obscenamente hipócrita da ‘ajuda para o desenvolvimento’, o capital ocidental tornou-se muito mais dependente no ‘Terceiro Mundo’

---

<sup>150</sup> Como exemplo, a Real Academia Espanhola, introduzindo o conceito de “sostenibilidad” no seu dicionário, equivoca-se ao reduzir o conceito de desenvolvimento sustentável a apenas um de seus aspectos, o econômico: “Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Desarrollo, economía sostenible.” Fonte: sítio da RAE. Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=sostenible>

<sup>151</sup> MESZÁROS (2016: 74).



– de matérias-primas, energia mercados de capital e superlucros avidamente repatriados – do que o contrário.

O discurso da liberdade de mercado, pregado no capitalismo contemporâneo, acaba comprometendo a possibilidade de desenvolvimento sustentável enquanto permite exploração sem limites, gerando exclusão social e precarização das classes despossuídas. Logo, o direito ao desenvolvimento sem contrapartida de políticas públicas adequadas em matéria de Direitos Humanos, de educação e conscientização dos povos, redução de desigualdade social, fica comprometido.

Destarte, para evitar as armadilhas do sistema atual e o neocolonialismo histórico que se perpetua em um mundo que ainda convive com o imperialismo estadunidense sob a *pax americana* remodelada, novos conceitos de progresso e desenvolvimento devem ser concebidos, a fim de afastar a ideologia neoliberal colonizadora neles impregnada e que impede o avanço social nos países periféricos. O fortalecimento cultural e educacional dos povos, especialmente em matéria de Direitos Humanos, é o primeiro passo para mudar o sistema e fugir da “crença” no desenvolvimento. Com educação o povo deixa de ser iludido por falsas promessas e passa a exigir melhoria de sua condição social. Povo educado é povo consciente, e, nestes termos, apto a buscar o melhor para si e para o ambiente no qual está inserido.

Dentre outras questões não menos importantes, certo é que, para haver efetivo desenvolvimento, com sustentabilidade, é indispensável garantir o acesso universal à educação, pois, enquanto houver multidão de pessoas excluídas do ensino e que nem sequer aprendem o alfabeto (engrossando as massas trabalhadoras precarizadas), permeável está a humanidade à exploração do próximo e aos sistemas de neocolonialismo. Somente o alcance de um grau de cidadania capaz de revelar ao indivíduo a exploração a que está submetido bem como conscientizá-lo de seus direitos pode trazer mudança para o cenário atual. O povo sem educação, preocupado tão-somente com a sobrevivência é sempre mais fácil de dominar.

Assim, uma vez demonstrado o nexos entre imperialismo, colonialismo e neocolonialismo e a ideologia do desenvolvimento, é necessário definir de forma crítica o que se entende por “desenvolvimento”, com sua conexão aos Direitos Humanos do Trabalho para uma abertura holística e de totalidade concreta do tema em investigação.

### *1.3.1 Do Direito ao Desenvolvimento ao Direito à Seguridade Econômica*

AMARTYA SEN, indiano premiado com o nobel da economia, no ano de 1999 publicou o Livro “O desenvolvimento como liberdade”, no qual propõe uma nova abordagem do conceito de desenvolvimento: partindo do conceito de liberdade por cinco perspectivas (liberdades políticas, disponibilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência, proteção da seguran-

ça), fala na importância central da remoção de privações<sup>152</sup>. Cita o exemplo dos afro-americanos estadunidenses que, relativamente pobres nos EUA, embora sejam mais ricos do que os povos do terceiro mundo, têm menos chances de chegar a idades avançadas como na China, no Sri Lanka ou em partes da Índia.

ABELLÁN<sup>153</sup>, no texto “¿Qué Desarrollo? Introducción”, principiando pela pergunta “que desenvolvimento?”, estrutura uma visão crítica do tema dizendo que, antes de chegar à noção de Desenvolvimento Local e Cooperação Multilateral, cabe retirar as vicissitudes substantivas com as perguntas: a que se refere na atualidade quando se fala de desenvolvimento? De onde surge o conceito? Quais são seus antecedentes? Quais foram suas principais conquistas e faltas? Realmente se superaram as faltas para poder falar de uma etapa mais além do desenvolvimento? Cita o exemplo da Argentina, da exploração de lítio em terras indígenas dos povos Kolla e Atacama, iniciados em 2010, sem consulta, sob o argumento de desenvolvimento como fonte de produção e geração de energia, com o deslocamento das populações afetadas. E, assim, coloca mais questões: Pode ser considerada qualquer forma de desenvolvimento como válida? É legítima a possibilidade de pensar em outras formas e práticas de desenvolvimento que se distanciem da hegemônica? Que é desenvolvimento?

A partir de tantas inquietudes torna-se indispensável uma reflexão crítica sobre o estágio atual do capitalismo para a compreensão da necessidade de mudanças na dinâmica social, que leva, no atual curso, para um futuro incerto em vários aspectos, seja no plano democrático, ambiental ou humano.

Sustenta ABELLÁN<sup>154</sup>, no texto já citado, que existem dois caminhos para responder aos questionamentos relativos ao desenvolvimento: estudar as implicações do conceito (efeitos que determinada concepção de desenvolvimento tem sobre os indivíduos, o grupo, as sociedades, nações e regiões), ou o trabalho sobre as bases ideológicas que subjazem ao mesmo, determinando as causas da adoção de um determinado tipo de desenvolvimento e não outro. A opção pelo segundo é clara e feita sob a ótica da Teoria Crítica dos Direitos Humanos, por uma perspectiva terrenal (entendendo os Direitos Humanos como produtos culturais nascidos no Ocidente, depois da Segunda Guerra Mundial e do período colonial e promovida por interesses concretos), afastando de plano seu universalismo em favor da ideia das lutas sociais onde nascem. E por uma perspectiva integral, ou impura, pela qual se foge de abstrações, purezas e idealizações, com uma visão materialista da realidade, compreendendo-os como a resposta normativa a um conjunto de necessidades e expectativas que se pretendem satisfazer e que a todo momento se entende possam mudar ao longo do tempo. A junção das noções terrenal e impura trata de desenvolver uma visão dos Direitos Humanos no espaço e na ação, na pluralidade e no tempo concreto no qual surgem, por metodologia holística e relacional que consiga abarcar estes

---

<sup>152</sup> SEN (2010).

<sup>153</sup> ABELLÁN (2002).

<sup>154</sup> Idem, *ibidem*.

conceitos em suas mútuas relações consigo mesmos e com os processos sociais nos quais inseridos.

Citando a RIST, ABELLÁN<sup>155</sup> prossegue asseverando que são quatro os pontos básicos que se encontram sob a concepção ideológica de desenvolvimento: 1) o desenvolvimento como processo natural, com sentido e objetivos únicos e estabelecidos de antemão – o crescimento contínuo, por uma analogia biológica (todos crescem); 2) um processo caracterizado pela continuidade e homogeneidade, a manutenção de um mesmo sistema de crescimento; 3) caráter temporal e acumulativo, com o tempo, os menos favorecidos vão superando etapas naturais de crescimento – países desenvolvidos e subdesenvolvidos (ou em vias de desenvolvimento); 4) o processo é irreversível – uma vez metidos no processo, nada nem ninguém impedirá que com o tempo todos cresçam, sobretudo economicamente, e gozem do bem-estar próprio dos países desenvolvidos.

De fato, RIST<sup>156</sup> sustenta que o conceito de desenvolvimento se transformou numa crença ocidental legitimante do passado e das ações futuras. Mostra que os “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”<sup>157</sup>, da ONU, estão impregnados dessa ideologia, porquanto abordam a integração das questões ambientais, o desenvolvimento sustentável e a ilusão do desenvolvimento integral. Ademais, que a crença dos países do Sul (periféricos) de que, seguindo o caminho dos países do Norte, irão se desenvolver, é uma ideologia que deve ser desmascarada para uma alternativa real, pois o conceito de desenvolvimento não é neutro ou asséptico, tendo por objetivo reproduzir as condições de desenvolvimento dos países desenvolvidos.

Neste norte, o exemplo histórico do nascimento do capitalismo mercantil entre o continente americano e os interesses das metrópoles, na época, Espanha e Portugal, é utilizado por ABELLÁN<sup>158</sup> para evidenciar o processo de construção das periferias, pelo qual estas serão induzidas a um tipo de produção estruturado na exportação de matérias-primas e a uma determinada posição subordinada no sistema de comércio mundial, enquanto dependentes dos centros no tocante a recursos tecnológicos e de produção. Tal se pode observar no Tratado de Methuen<sup>159</sup>, pelo qual a Inglaterra obrigava politicamente Portugal a explorar os recursos auríferos da colônia brasileira, que seria mera exportadora de produtos

---

<sup>155</sup> Idem, *ibidem*.

<sup>156</sup> RIST (2002).

<sup>157</sup> De acordo com a informação oficial: “Em setembro de 2000, refletindo e baseando-se na década das grandes conferências e encontros das Nações Unidas, os líderes mundiais se reuniram na sede das Nações Unidas, em Nova York, para adotar a Declaração do Milênio da ONU. Com a Declaração, as Nações se comprometeram a uma nova parceria global para reduzir a pobreza extrema, em uma série de oito objetivos – com um prazo para o seu alcance em 2015 – que se tornaram conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)” (Fonte: sítio das Nações Unidas. Recuperado de <https://nacoesunidas.org/tema/odm/>).

<sup>158</sup> ABELLÁN (2002).

<sup>159</sup> O Tratado de Methuen, também conhecido por Tratado dos Panos e Vinhos, foi firmado entre Portugal e Inglaterra em 1703.

agrícolas à metrópole; a comprar os produtos manufaturados ingleses, capitalizando a revolução industrial iniciada na metrópole; e distribuí-los em regime de monopólio inglês pelo território ibérico e ultramar. O autor afirma que, na teoria, esse sistema traduz relação direta entre o incremento da qualidade de vida de uma nação - defendida por economistas e pensadores liberais, surgindo dos aportes que DAVI RICARDO<sup>160</sup> realizava para a construção da economia moderna através da “teoria das vantagens comparativas”<sup>161</sup>. Assim, não haveria alternativa à forma de crescimento proposta, tendo todos os países que seguir a fórmula, ainda que necessitem destruir a natureza ou situar-se numa posição de dependência, comprar tecnologia, admitir compra de seus serviços essenciais como água, ou admitir uma posição subordinada nos organismos internacionais, impedidos de serem ouvidos. Afirma que, no modelo neoclássico de economia, o ponto de partida do desenvolvimento é assegurar que qualquer pessoa que tenha capital suficiente possa apropriar-se privadamente de todos os recursos, inclusiva água e moradia; que, ao deixar de ser bens públicos acessíveis a todas e todos, tornam-se bens escassos que devem ser comprados para satisfazer as necessidades; a mão invisível do mercado se encarregará de alocar os recursos às pessoas segundo seus méritos e a quantidade de dinheiro que se tenha; feita a apropriação de bens e tornados escassos, os que os possuem podem usá-los como melhor lhes aprouver, inclusive vendendo e acumulando capital. Ou, nas palavras de VARGAS HERNÁNDEZ<sup>162</sup>:

*El otorgamiento de créditos a los países pobres lleva como condición el sometimiento a un programa de ajuste estructural, que implica medidas como la liberación de controles a las inversiones extranjeras y a los flujos financieros, la desregulación de los mercados, la privatización de empresas propiedad del Estado, la reducción de las políticas sociales y el control salarial, entre otras. Los procesos caóticos de privatización se justifican con el diseño de un “Estado pequeño y eficiente”, sin que necesariamente implique funcionar de forma diferente, ya que ignora el fundamento de a quién sirve.*

ABELLÁN<sup>163</sup> destaca, ainda, que este processo de construção centro-periferia<sup>164</sup> e sua crença se desfaz na medida em que os informes do PNUD (Programa

---

<sup>160</sup> Economista britânico (1772-1823), considerado fundador da economia política, junto com Adam Smith e Thomas Malthus, desenvolveu a Teoria das Vantagens Comparativas.

<sup>161</sup> Os países deveriam se especializar nos setores que possuam vantagem comparativa, assim, explicando rapidamente e a grosso modo, países industrializados seguiriam exportando seus produtos enquanto países periféricos seguiriam exportando recursos naturais.

<sup>162</sup> VARGAS HERNÁNDEZ (2005:169).

<sup>163</sup> ABELLÁN (2002).

<sup>164</sup> SOROS (1999) também denuncia esse processo:

*El sistema capitalista global es de carácter puramente funcional, y la función que cumple es (como es lógico) económica: la producción, el consumo y el intercambio de bienes y servicios. Es importante señalar que el intercambio supone no sólo bienes y servicios sino los factores*

das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano)<sup>165</sup> mostram um contínuo depauperamento dos países mais pobres, como também o fluxo internacional de capitais indica que, conforme o tempo passa, menos ajuda do Norte para o Sul e mais fluxo de capitais do Sul para o Norte se observa.

De outra parte, a lógica do modelo hegemônico neoliberal privatizador, que persegue a eliminação do público, coloca em risco a lógica da existência da vida, pois, como denuncia HOUTART, na entrevista intitulada “*Otra moral es posible*”, a situação chega a absurdos:

Já há companhias que estão capturando o oxigênio nos bosques do Equador para colocá-lo em bombas e levá-lo. Descobriram que os velhos bosques não davam tanto oxigênio como os novos e estão suprimindo os bosques tradicionais, toda a biodiversidade, para plantar bosques novos que produzam mais rapidamente oxigênio<sup>166</sup>.

Portanto, neste processo de contínuo “desenvolvimento”, vem sendo travada uma luta pela construção de uma realidade desenvolvimentista alternativa para os países periféricos, em oposição ao conceito hegemônico que induz perpetuação de desigualdade entre as nações e, ademais, exploração predatória de recursos naturais com alto custo social (precarização da mão-de-obra e pobreza nos países da periferia provocada pelas multinacionais das grandes potências).

No texto denominado “*El desarrollo moderno. la consagración de una idea*”, ABELLÁN<sup>167</sup> elenca as respostas vindas do Sul, como a Escola da Dependência, desenvolvida no CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina, que cria uma antítese à concepção hegemônica, pregando que deveriam

---

*de producción. Marx y Engels señalaron ya hace 150 años que el sistema capitalista transforma la tierra, el trabajo y el capital en mercancías. A medida que el sistema se expande, la función económica llega a dominar las vidas de las personas y las sociedades. Penetra en áreas que antes no se consideraban económicas, como la cultura, la política y las profesiones.*

*A pesar de su naturaleza no territorial, el sistema tiene un centro y una periferia. El centro es el suministrador de capital; la periferia es la usuaria del capital. Las reglas del juego están sesgadas a favor del centro. Podría afirmarse que el centro está en Nueva York y Londres, porque ahí es donde están situados los mercados financieros internacionales, o en Washington, Frankfurt y Tokio, porque es allí donde se determina la oferta monetaria del mundo; asimismo, podría afirmarse que el centro está en un paraíso fiscal, porque es allí donde está domiciliada la parte más activa y móvil del capital financiero mundial. (1999: 136-137).*

<sup>165</sup> Conforme informação oficial: “O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a agência líder da rede global de desenvolvimento da ONU e trabalha principalmente pelo combate à pobreza e pelo Desenvolvimento Humano”. Fonte: sítio da ONU. Recuperado de <https://nacoesunidas.org/agencia/pnud/>

<sup>166</sup> HOUTART (2008: 31-32). Obs.: com tradução.

<sup>167</sup> ABELLÁN (2002).

ser consideradas as variáveis sociais e políticas além da econômica para atingir o desenvolvimento, identificando três tipos de dependência entre nações: colonial, financeira-industrial e tecnológica-industrial, cujo mérito é fornecer uma perspectiva além da econômica. Como visto, na Conferência de Bandung, de 1955, houve reação dos chamados países do Terceiro Mundo, marcando o começo de uma reivindicação coletiva no âmbito político e no desenvolvimento, originando a corrente denominada de “não alinhamento”.

Por outro lado, BROWN<sup>168</sup>, citado por ABELLÁN<sup>169</sup>, sustenta a construção de um modelo significativo de desenvolvimento que possa romper o circuito da ideologia hegemônica, com quatro argumentos: 1) existe a possibilidade de estabelecer uma ampla variedade de tipos e formas de propriedade dos meios de produção e de distribuição; 2) oposição à produção da escassez, restringindo ao mínimo as possibilidades de apropriação individual e irrestrita dos bens; 3) divulgação na maior medida do possível das informações acerca de formas diferentes e alternativas de alocação de recursos que não dependam da mão invisível do mercado; 4) recuperar a noção dos *commons*, os bens comuns que não devem estar sujeitos ao processo contínuo de acumulação do capital.

BRINGAS<sup>170</sup> propõe repensar a globalização desde o ponto de vista dos povos indígenas, sustentando que a construção de processos multiculturais na globalização, isto é, o multiculturalismo, exige um pensamento global centrado na vida humana como valor central para articulação de propostas éticas, políticas e normativas que possa dar respostas a demandas urgentes como as reivindicações indígenas. Para tanto, propõe matizações que contornem o padrão ocidental de cultura, asseverando que conflito e violência são elementos presentes na construção da identidade indígena. Logo, em primeiro lugar, tendo em consideração que o cultural é uma direção para guiar e pautar a ação social, pondera que cada cultura tem uma concepção própria de como entender a dignidade humana. Em segundo lugar, o cultural surge do encontro de processos culturais, e o contrato social que se estabelece na América Latina é o resultado da expropriação violenta e da negação sistemática e repressão da autonomia cultural indígena, de modo que um processo cultural na região está ainda por ser feito. Cabe reconhecer, pois, para construir um processo multicultural sustentável, a violência cultural, direta e estrutural produzida nos povos indígenas. Em terceiro plano, pondera necessário erradicar a compreensão do cultural como algo aproblemático e completo, evitando-se a preponderância dos valores ocidentais concernentes à dimensão do território no conceito Estado-nação, do conceito privado e patrimonialista da terra, frente à autodeterminação como autonomia ou autogoverno dos recursos e patrimônios indígenas.

---

<sup>168</sup> BROWN (1995).

<sup>169</sup> ABELLÁN, *op. cit.*

<sup>170</sup> BRINGAS (2008: 269-299).



BRINGAS<sup>171</sup> propõe a importância dos processos culturais com três argumentos, primeiro, a consideração dos processos culturais indígenas como direito fundante e que dão condição ao exercício de outros direitos (participação política, autonomia, consentimento prévio e informado, terra, território, recursos naturais, patrimônio cultural e genético, direitos sociais sob a perspectiva indígena etc.). Depois, a necessidade de, com base no princípio da diferença, admitir um direito da pluriculturalidade, fulcrado na dimensão plurinacional dos povos indígenas, que lhes permite a construção de ordenamentos e sistemas jurídicos próprios. Por fim, entender os povos indígenas como sujeitos de Direitos Humanos provoca mudança no Direito Constitucional, desgarrando-se dos conceitos ocidentais de Estado-nação-cidadania, para admitir outras concepções culturais distintas da lógica capitalista.

Também desde a perspectiva indígena, no interessante artigo sobre o “bom viver”, AGUADO, BELLOTT e MONTES<sup>172</sup> sustentam a inviabilidade do modelo hegemônico capitalista seguir orientando o desenvolvimento, pois não produz igualdade – ao contrário, gera desigualdades ecológico-distributivas ao redor do planeta e agressão degenerativa dos limites biofísicos da Terra. Desenvolvendo o estudo, os autores afirmam que o modelo capitalista de desenvolvimento humano, que busca o crescimento incessante de renda e consumo, esgotará os recursos naturais, não sendo sustentável, além do que, apesar de todo o progresso tecnológico atual, não responde à eliminação da desigualdade social, nem melhora a qualidade de vida e nem a felicidade das pessoas. A partir de um determinado limite denominado *suficiente*, o ingresso de recursos materiais e o consumo não mudam a situação de quem já os possui, embora possa fazer diferença para quem não os tem, assim para o desenvolvimento efetivo da humanidade se deve buscar mais igualdade. Como o modelo hegemônico capitalista é insustentável, ou seja, consome os recursos naturais do planeta sem produzir igualdade, acentuando isolamento social, concorrência entre as pessoas, alienação psíquica, sedentarismo e perda de hábitos saudáveis, se deve buscar alternativas de modelo de vida capazes de promover o equilíbrio na esfera do meio ambiente e social e a felicidade geral. De acordo com os autores, reconhecer, pois, o fracasso do modelo ocidental como referente de desenvolvimento, e a globalização neoliberal, é pressuposto para construir uma alternativa universalizável, já que a atual prestigia apenas nações do norte em detrimento das do sul. Uma possibilidade é o modo de relação entre ser humano e natureza concebido pelos povos tradicionais da América do Sul, cuja experiência já começa na Bolívia e Equador, através da incorporação, nos textos constitucionais, da expressão “bom viver” e “viver bem”, como uma forma de vida em plenitude, harmonia e equilíbrio com o planeta, com o cosmos, a vida e a história, e em permanente respeito de toda forma de existência, além de partilhar ao invés de competir, e conviver bem em direção a uma vida simples, equilibrada

---

<sup>171</sup> Idem, *ibidem*.

<sup>172</sup> AGUADO–BELLOTT–MONTES (2014: 153-163).



e espiritual, em comunidade, irmanada com os outros seres vivos e alijada do sobreconsumo.

Na mesma linha segue BERRAONDO LÓPEZ<sup>173</sup>, no texto “*Tierras y territorios como elementos substantivos del derecho humano al medio ambiente*”, referindo o meio ambiente desde a perspectiva indígena, entendida sem o referente ocidental de valores, que pudesse estruturar o direito indígena ao meio ambiente concebido como elemento central em torno do qual gira toda a cultura, a vida política social e econômica, materializado através do direito à terra, aos recursos naturais e ao território. O direito indígena à terra equivale ao Direito Humano ao meio ambiente e o direito indígena ao território equivale ao sistema de recursos, espaço jurisdicional no qual se exercem direitos coletivos de que é titular o povo tradicional. O direito ao território trata-se de um direito condição, no sentido de que todos os direitos dependem dele, como também um direito síntese, pois vincula o direito ao desenvolvimento, enfeixando todos os elementos materiais e imateriais que o conformam.

Portanto, realmente é necessário o nascimento de um novo modelo de Estado, não só na sua gênese, mas na conformação cultural desocidentalizada das pessoas que permita entender e assimilar pontos de vista diferentes da visão capitalista hegemônica. Acima foram elencadas apenas algumas das muitas propostas que existem para a construção de uma alternativa, todavia, em todas elas se percebem elementos comuns: desocidentalização de concepções, em especial, do desenvolvimento; abandono do utilitarismo econômico; rejeição ao neoliberalismo; respeito às condições de vida do planeta; estatização e ou publicização dos recursos naturais; limitação às possibilidades de apropriação privada de bens etc.

A visão neoliberal hegemônica aplicada na cooperação internacional estimula a permanência do *establishment* planetário com as discrepâncias sociais extremas, entre riqueza e miséria. O capital privado, por si só, é incapaz de gerar melhor distribuição de renda entre todos, comprovando a falência do sistema “desenvolvimentista” atual, não solidário e incapaz de reduzir a fome e a pobreza mundiais ou de promover crescimento com equilíbrio ecológico.

É necessário, pois, fugir do capitalismo como referente para estabelecer critérios de desenvolvimento - somente a desconexão do regime capitalista possibilitará evoluir para buscar outros indicadores de aferição do grau de desenvolvimento, com a abertura para as diversidades culturais que determinam modos de vida diferentes. Por esta ótica, certamente, o grau de solidariedade entre as pessoas pode ser um indicador hábil para aferir a conexão social pelo convívio harmônico, respeitoso, tolerante às diferenças, e de ajuda mútua, apto ao respeito ambiental para a vida do ser humano afinado com a natureza.

No entanto, é importante saber que os indicadores PNUD que, por ora, prevalecem universalmente, idealizados por MAHBUD UL HAQ e AMARTYA SEN<sup>174</sup>,

---

<sup>173</sup> BERRAONDO LÓPEZ (2006: 469-488).

<sup>174</sup> Conforme o sítio PNUD Brasil:

trabalham o desenvolvimento sob a perspectiva de renda, saúde e educação, mas ainda não medem, por exemplo, sustentabilidade. SEN, como economista, partiu sua proposta da ótica econômica, logo, os indicadores utilizados também não são neutros. Ora, o viés econômico é apenas um aspecto de desenvolvimento e, ainda assim, se pensado sob a perspectiva da predominância do regime capitalista no mundo, leva à prevalência, também na aferição do desenvolvimento, de critérios pautados no grau de acumulação de capital revelados no PNUD<sup>175</sup>. Contudo, como bem aponta ABELLÁN<sup>176</sup>, dois mais dois em ciências humanas pode não resultar em 4, v.g. pode haver um país com renda alta do povo, bom acesso à educação e cultura baixa, cabendo questionar qual a cultura que realmente importa, não devendo ser a de consumismo ou do contínuo crescimento econômico, dada a insuficiência de recursos do planeta.

Indicadores são importantes para análise, mas devem ser restritos à sua gênese: mera indicação. Devem ser maleáveis para adaptação à diversidade entre os povos e devem contemplar múltiplos aspectos da vida, como, por exemplo, reafirma-se, o grau de solidariedade entre as pessoas.

De qualquer sorte, na Declaração de Estabelecimento de uma Nova Ordem Econômica Mundial (ONU, 1974), consta que os países “em desenvolvimento” representavam 70% da população do mundo mas recebiam apenas 30% dos ingressos mundiais. Assim, mesmo observando-se os indicadores de natureza econômica atualmente utilizados nos informes do PNUD da ONU, não há demonstração de evolução no passar dos anos, constatando-se que a “crença” no desenvolvimento é, definitivamente, uma falácia.

Portanto, a crença de que a realidade vá mudar no sistema atual se dissipa na medida em que não existem perspectivas concretas de mudança na tendência dos países ricos de somente aumentarem suas riquezas e a desigualdade em relação aos demais, sem nem mesmo aumentar sua colaboração aos menos favorecidos - e mesmo porque, se houvesse tal incremento, não existem garantias

---

O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento Humano foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) *per capita*, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, o IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma representação da “felicidade” das pessoas, nem indica “o melhor lugar no mundo para se viver”. Democracia, participação, equidade, sustentabilidade são outros dos muitos aspectos do desenvolvimento humano que não são contemplados no IDH. (Fonte: sítio PNUD Brasil, “*O que é o IDH*”. Recuperado de <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html>)

<sup>175</sup> A título de exemplo, o indicador de renda das pessoas representa mais renda, logo mais poder de paridade de compra e mais “desenvolvimento”.

<sup>176</sup> ABELLÁN (2002).

de que não acabaria por retornar aos cofres originários dos países centrais, seja por acordos econômicos lesivos aos países e regiões periféricos, seja pela atual prática de “ajuda condicionada”, mediante a qual países ricos prestam ajuda impondo a compra exclusiva de produtos aos “ajudados”, e de forma inversamente proporcional à quantidade doada. Ou seja, a crença se desfaz na medida da inexistência de solidariedade no modelo hegemônico atual.

É certo, também, que o recente processo de formação dos Direitos Humanos, ainda permeado pela influência de países ricos, especialmente na ONU, impede a implementação de um modelo global de desenvolvimento sustentável, capaz de reduzir os níveis excessivos de consumo, evitar o neocolonialismo e reduzir as desigualdades sociais.

As políticas de ajuda externa e a cooperação internacional, no sistema atual, não fazem mais do que acentuar os abismos sociais existentes entre países ricos e países pobres, como se pode extrair dos dados apresentados historicamente no PNUD. Ou, como bem assevera PERALES<sup>177</sup> (*Cooperación al desarrollo y globalización: entre la beneficencia pública y el estado del bienestar mundial*), o atual sistema internacional de ajuda e cooperação ao desenvolvimento é um fiel reflexo de uma sociedade de Estados escassamente integrada e regulada, e mais que um “sistema global de bem-estar social” ou uma “política global de coesão”, é um imperfeito esquema de beneficência pública no qual os recursos se assinam de forma voluntária e não há obrigações relativas à sua quantia nem critérios objetivos quanto aos beneficiários. E, ao abordar as perspectivas sobre a ajuda no desenvolvimento e a futura ordem mundial, o autor identifica duas visões:

- por primeiro, um modelo liberal-conservador de ajuda oficial ao desenvolvimento, funcional à integração das economias nacionais em um mercado mundial desregulado (lógica da mão invisível de mercado);

- e em segundo, um modelo de ajuda oficial ao desenvolvimento baseado no conceito de cidadania mundial, que encontra seu fundamento em uma visão social e democrática da globalização, baseada na plena vigência dos direitos humanos e, em particular, do direito ao desenvolvimento.

Assim, para escapar da concepção hegemônica do crescimento, cabe desenvolver o segundo modelo, mas com a perspectiva crítica dos Direitos Humanos, entendidos como ontologicamente ligados ao processo de lutas sociais, e pensando, também, em alteridade – olhar o outro, o diferente, construindo pontes entre povos e pensamentos distintos, dado o pluriculturalismo mundial -, para observar como outros povos se desenvolvem, muitas vezes de forma totalmente alheia ao modelo ocidental, ou seja, não há uma resposta exata e universal para todas as realidades sociais.

Destarte, a construção de um mundo diferente do atual deve partir do abandono da ideia da sociedade de consumo como ideal, do crescimento econômico como modelo, pois esta forma de pensar rapidamente esgotará os recursos

---

<sup>177</sup> PERALES (2002).

do planeta sem distribuir igualdade entre os povos. De modo que, para escapar do modelo hegemônico, deve ser construído um novo modelo de desenvolvimento que não esteja somente baseado em critérios econômicos<sup>178</sup>, mas sim em elementos que indiquem o grau de solidariedade entre as pessoas, como forma de evolução respeitadora das diferenças e construtora de igualdade.

Neste sentido, é interessante a proposta de BROWN<sup>179</sup>, sobre a ideia de oposição à produção da escassez, restringindo ao mínimo as possibilidades de apropriação individual e irrestrita dos bens, e de recuperar a noção dos *commons*, os bens comuns que não devem estar sujeitos ao processo contínuo de acumulação do capital<sup>180</sup>. Aliás, caberia trabalhar nos distintos tipos e formas de propriedade dos meios de produção e de distribuição a que se refere o autor para abandonar o capitalismo. Talvez aliar essa ideia à de solidariedade humana e alteridade possa ser um caminho para a construção de uma alternativa diferente para o desenvolvimento.

Sobretudo, e já em conexão do tema aos Direitos Humanos do Trabalho, pensar em projetos de renda universal, capazes de garantir condições de vida dignas para todas e todos, como também em limites de renda máxima, já que o processo de acumulação contínua de capital é produtor de máxima desigualdade social e miséria, além de sacramentar a exploração inescrupulosa das pessoas e do planeta. A renda máxima, por esta perspectiva, significaria dizer que, atingido um determinado nível de acumulação de capital, o excedente se reincorporaria ao Estado para prestação de serviços públicos à sociedade. O trabalho, desta forma, sempre seria necessário por parte de todas e todos, pois o limite de acúmulo de capital deve considerar, também, a necessidade de manter cada indivíduo trabalhando, de modo a evitar o ócio que caracteriza o topo da elite capitalista, absolutamente injustificável na medida em que pressupõe o trabalho dos outros para multiplicação inconcebível de rendimentos (números por números, no sistema de remuneração por juros mediante contínuo endividamento de quem não tem capital e necessita “vender” sua força de trabalho para sobreviver). Num sistema verdadeiramente justo, não pode existir castas privilegiadas pelo ócio, enquanto outras são obrigadas a trabalhar para receber migalhas.

---

<sup>178</sup> Segundo SOROS (1999: 235):

*Los valores sociales pueden ser más nebulosos que los valores del mercado, pero la sociedad no puede existir sin ellos. Los valores del mercado han sido promovidos a la posición de los valores sociales pero no pueden cumplir esa función. Están concebidos para la toma de decisiones individuales en un marco competitivo y no son aptos para la toma de decisiones colectivas en una situación que requiere cooperación además de competencia.*

<sup>179</sup> BROWN (1995).

<sup>180</sup> Como água, energia elétrica, recursos naturais em geral, e, também, saúde, educação, transporte público etc.

Desde uma perspectiva laboral, evidencia-se que dentro de um sistema capitalista, as pessoas que não possuem propriedade (despossuídas) e as que possuem pequenas ou médias propriedades, em momentos de crises, necessitam de ajuda estatal, ou seja, seguridade econômica. Isto ficou bem demonstrado no período pandêmico de COVID-19.

A seguridade econômica, tema que voltará a ser tratado mais adiante, é um conceito incorporado na Declaração de Filadélfia pela OIT, no qual a entidade assevera que: “todos os seres humanos, sem distinção de raça, crença ou sexo, têm direito a perseguir seu bem-estar material e seu desenvolvimento espiritual em condições de liberdade e dignidade, de seguridade econômica e de igualdade de oportunidades”<sup>181</sup>. A seguridade econômica, portanto, é um instrumento de equidade econômica para dotar as pessoas de liberdade e dignidade, manifestando-se em seu poder aquisitivo. Em 2004, a OIT, constatando em uma de suas análises que os sistemas de seguridade social convencionais resultavam inapropriados para responder às novas formas de risco sistêmico, assim como a incerteza que caracterizava o sistema econômico mundial emergente, ponderou a necessidade de medir a seguridade econômica em seus informes. A entidade assinala que esta medição serve para que os Estados possam pronunciar-se em tomar medidas atinentes para promover o bem-estar pessoal, a felicidade e a tolerância, além de resultar benéfica para vislumbrar o caminho para o crescimento e estabilidade social. Contrariamente, sua antítese, a inseguridade econômica provoca no mundo ansiedade e ira, além da intolerância, estresse, mal-estar social, violência social<sup>182</sup>, e também se pode agregar o fascismo<sup>183</sup>. Segundo MARCUSE:

Na verdade, há infelicidade penetrante, e a consciência feliz é bastante abalável - uma delgada superfície sobre o temor, a decepção, o desgosto. Essa infelicidade se presta facilmente à mobilização política; sem lugar para o desenvolvimento consciente, ela se torna o reservatório instintivo para um novo estilo fascista de vida e morte. (MARCUSE, 1973: 86)

De forma bastante tímida, já existem iniciativas em diversos países de assegurar uma distribuição universal de renda mínima ao povo, sendo exemplos a Itália, a Espanha<sup>184</sup> e os países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Suécia, Fin-

---

<sup>181</sup> Fonte: sítio da OIT. Recuperado de [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasil/---ilo-brasilia/documents/genericdocument/wcms\\_336957.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasil/---ilo-brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf)

<sup>182</sup> Conforme o artigo “*La seguridad económica mundial en crisis. Un nuevo informe de la OIT descubre un ‘mundo lleno de ansiedad e ira’*” (OIT, 2004).

<sup>183</sup> O ressentimento e a frustração em não ter um trabalho livremente escolhido, a angústia, o medo do desemprego, a fome e a miséria, o descrédito da política, são condições que permitem o crescimento de ideologias fascistas nas sociedades.

<sup>184</sup> No Brasil, a Lei 10835, de 08 de janeiro de 2004, instituiu a “*renda básica de cidadania*”, mesmo que sem especificar valores, dispondo que o benefício deverá corresponder a uma quantia suficiente para atender às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde – a lei, não

lândia e Islândia)<sup>185</sup>. É, também, uma maneira de tornar efetiva a seguridade econômica, mas o conceito, na forma prevista pela OIT, pressupõe uma renda capaz de proporcionar liberdade e dignidade, a tal ponto que seja possível a pessoa escolher trabalho<sup>186</sup>. Assim, não pode ser mínima nem básica. A renda universal deve ser, sobretudo, digna, atendendo às expectativas das pessoas de aceder ao direito à moradia, saúde, educação, alimentação, cultura e ócio.

Instalada uma crise, seja ela pandêmica ou não, o primeiro que se deveria fazer é garantir a renda às pessoas, ou seja, que a eventualidade de uma circunstância da vida que impeça as pessoas de trabalharem, ou que as obrigue a não sair de suas casas, como passou no caso do COVID-19, não lhes comprometa a subsistência digna. Em segundo lugar, garantir o emprego, a manutenção dos postos de trabalho, proibindo a despedida e a redução de salários. Depois, garantir a sobrevivência das pequenas e médias empresas. Se não se garante renda às pessoas (e quando se fala de rendas, entenda-se ajudas estatais e não concessão de empréstimos, que não é a mesma coisa), sendo estas pessoas trabalhadoras ou possuidoras de pequenas e médias empresas, ficaria difícil sustentar, a longo prazo, uma quarentena sem revoltas ou sem ter brutais consequências sociais, relacionadas à quebra generalizada de empresas, ao desemprego e aumento da desigualdade social. Outra medida cabível e indispensável seria impor taxas progressivas ao grande capital, ou seja, partindo de um

---

obstante, ainda não tem efetividade. (Fonte: sítio do Palácio do Planalto, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 10835/04. Recuperado de [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/lei/110.835.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.835.htm)). Na Espanha, foi aprovado em 2020 o *Real Decreto-ley 20*, de 29 de maio, estabelecendo o “*ingreso mínimo vital*”, conceituado como uma prestação econômica dirigida a prevenir o risco de pobreza e exclusão social das pessoas que vivem sozinhas ou integradas em uma unidade de convivência, quando se encontrem em uma situação de vulnerabilidade por carecer de recursos econômicos suficientes para a cobertura de suas necessidades básicas. (Fonte: sítio do *Boletín Oficial de España*. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5493>). Na Itália, foi criado o “*Reddito di Cittadinanza*” e o “*Reddito di Emergenza*”, o primeiro dividido em 18 cotas mensais às pessoas desempregadas ou aquelas que trabalham só ocasionalmente e que têm um ingresso de menos de 9.360 euros por ano; o segundo, em duas cotas mensais para atender à emergência do COVID-19, não sendo compatível a percepção dos dois benefícios. Fonte: artigo intitulado “*Reddito di Emergenza e Reddito di Cittadinanza: differenze*”, da redação do jornal *PMI. It*, de 22 de maio de 2020. Recuperado de <https://www.pmi.it/economia/lavoro/333124/reddito-di-emergenza-e-reddito-di-cittadinanza-differenze.html>

<sup>185</sup> Como descrevem MACHADO–GALVÃO JÚNIOR (2018), sob a orientação do economista sueco Karl Gunnar Myrdal, que dividiu o prêmio Nobel de Economia de 1974 com Friedrich von Hayek, os países nórdicos implantaram o modelo de Estado de Bem-Estar Social depois do final da Segunda Guerra Mundial, com imposição de elevada tributação e garantia de renda mínima, entre outros direitos. O modelo nórdico de social democracia combina uma economia de mercado com um Estado forte, com elevados gastos sociais, altos tributos, salários elevados, mantendo o nível da atividade econômica em pleno emprego, além de entregar educação e saúde de qualidade.

<sup>186</sup> BUENO (2018: 169) destaca que o direito ao trabalho, conforme previsto no art. 6º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, contempla o direito a eleger e aceitar livremente trabalho.



mínimo de 50% até 99%, desde determinado grau de concentração de renda e de lucro, para assim sustentar uma seguridade social adequada, cujos mecanismos de ingresso universal e garantia de renda encaminhem a todos e todas para uma vida digna em qualquer circunstância<sup>187</sup>. Entretanto, para a realização disto, seria imprescindível consolidar um novo modelo de Estado de Bem-Estar Social, que permita cumprir o objetivo de justiça social proclamado desde a criação da OIT em 1919.

A centralidade do trabalho nas pessoas foi objeto da Declaração do Centenário da OIT<sup>188</sup> do ano 2019 e é importante para, junto com a seguridade econômica, terminar com as políticas neoliberais, por um freio ao mecanismo de concentração de renda que atualmente precariza o trabalho com a promoção de verdadeiras necropolíticas<sup>189</sup>. Se seguem as políticas neoliberais, não há mudanças no sistema, e toma-se o rumo diretamente para um retorno à escravidão, resumida na pergunta de que se deve escolher entre direitos ou emprego, discurso muito conhecido no Brasil<sup>190</sup>.

É necessário estabelecer um novo modelo de Estado de Bem-Estar Social fortalecido e aprimorado, com novas formas de não só reduzir, mas também evitar e banir as desigualdades sociais.

Consequentemente, espera-se que a crise traga um aprendizado à humanidade com aptidão para a mudança urgente do sistema econômico mundial, a partir de padrões internacionais que partem da ONU e de seus órgãos, como OMS e OIT, para garantir, por exemplo:

---

<sup>187</sup> Segundo GAMBACORTA (2017: 7):

*Las políticas tributarias cumplen un rol de distribución ineludible, pero la distribución incluyente e inclusiva puede darse, reconocer y hacer reconocer socialmente a los trabajadores su derecho a la efectiva participación en cómo se distribuyen las rentas en una sociedad.*

<sup>188</sup> De acordo com o documento intitulado “Declaração do Centenário da OIT para o Futuro do Trabalho”, a centralidade do trabalho no ser humano demanda enfoque em três ações prioritárias: aumentar o investimento na capacidade das pessoas, aumentar os investimentos nas instituições do trabalho, e aumentar o investimento no trabalho decente e sustentável. Recuperado de <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--es/index.htm>

<sup>189</sup> O termo necropolítica se refere à soma do prefixo necro (significando morte) com política. Conforme MBEMBE (2018), corresponde à seleção de quem pode viver e quem deve morrer no sistema, segundo decide a classe dominante. Precisas as palavras de VALVERDE GEFAELL (2015: 127):

*“La necropolítica del neoliberalismo despolitiza (quita contenido político a los temas sociales) manipulando el lenguaje, culpabilizando e individualizando. La repolitización podría ocurrir cuando los incluidos llenen de contenido político la realidad nombrando las injusticias y abandonando la falsa seguridad”.*

<sup>190</sup> Como se pode conferir na notícia intitulada “‘Ou todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego’, diz Bolsonaro”, publicada no jornal *Estadão*, no dia 09.11.2018. Recuperado de <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,recebi-projetos-sobre-previdencia-e-pouco-sera-aproveitado-diz-bolsonaro,70002599184>



- o estabelecimento de uma obrigação universal dos Estados de criar mecanismos de renda digna (nem básica nem mínima) a todas as pessoas que vivam em seus territórios, garantindo a segurança econômica, como condição básica de seu desenvolvimento material e espiritual; da concretização da dignidade humana, permitindo às pessoas escolherem o trabalho segundo a sua vocação e não para a subsistência;

- a manutenção do emprego e da renda em situações de crise, proibindo demissões e redução de salários;

- a sobrevivência das pequenas e médias empresas, através de mecanismos de auxílios estatais distintos da concessão de empréstimos, incluindo a possibilidade de o Estado assumir o pagamento de salários e encargos sociais em tempos de crise;

- a imposição universal de tributação progressiva sobre o grande capital através da cobrança de taxas de um mínimo de 50% a 99%, constituindo financiamento para o aumento da seguridade social e mecanismos de renda decente para todas as pessoas, independentemente de trabalharem ou não;

- um sistema de ajuda internacional e incondicional – econômica, sanitária, humanitária -, com capacidade de reduzir os impactos da crise em países com maior desigualdade social, obtida a partir da tributação internacional de bancos e empresas multinacionais.

Mais do que tudo, é hora de mudar a visão da economia: com todos os problemas ambientais gerados pelo consumo excessivo de uma sociedade hedonista, movida pela propaganda e pela indústria cultural, o pensamento deve ser de inverter a ordem atual - as pessoas não devem estar a serviço da economia, é a economia que deve estar a serviço das pessoas.

Assim, para definir o desenvolvimento sem cair na armadilha da “crença” é necessário compreender tal conceito sob a ótica distributiva e sustentável, de justiça social – vida digna para todos os povos e todas e cada pessoa, e em equilíbrio ecológico global. Somente com uma nova visão poderá ser dada efetividade ao desejo das nações de construção de sociedades democráticas, pluralistas, justas, livres, solidárias e respeitadoras da dignidade humana e do meio ambiente.

Logo, uma releitura proposta para o desenvolvimento é sua compreensão como o direito de convivência humana pacífica e digna, sem exploradores nem explorados, com acesso universal a todos os direitos definidos como necessários à satisfatória e digna existência humana, incluindo o direito à seguridade econômica, entendido em duplice significado: de garantia estatal de renda digna e universal independente de trabalho, e o direito de cada pessoa de eleger e aceitar livremente trabalho com condições dignas e remuneração suficiente para uma vida digna e decente. Estas são as premissas que garantem a liberdade de cada qual buscar o aprimoramento espiritual e material respeitando a esfera de atuação do próximo.

Para a concretização dessa nova acepção de desenvolvimento, é necessário buscar pontos universais de convergência em matéria de desenvolvimento humano, para que a independência, progresso e autoafirmação dos povos respeite parâmetros básicos de DDHH, evitando-se danos colaterais do processo que possam causar prejuízo ou atraso em determinados campos, daí a importância, também, de tudo ocorrer em harmonia com a preservação do meio ambiente, em desenvolvimento sustentável e equilibrado com a natureza e também com os demais DDHH.

E, reiterar-se, a releitura do direito ao desenvolvimento, sob o aspecto laboral, significa reconhecê-lo como Direito Humano inalienável de todas as pessoas à segurança econômica que lhes permita condições de eleger um trabalho que lhes pareça mais favorável, e de participar, de contribuir e de gozar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, com garantia de realização plena de todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais. A segurança econômica, que garante a vida, deve anteceder o trabalho – o modelo de Estado de Bem-Estar Social dos países nórdicos já demonstrou que isso é possível concretamente.

Na verdade, a crise pandêmica mostrou este imperativo, e de forma generalizada, de que os Estados devem garantir a segurança econômica para todas as pessoas que vivem em seus territórios, pois, nas contingências da vida, o trabalho nem sempre é possível. E quando é possível o trabalho, a pessoa deve ter o direito de escolher o que melhor lhe aprouver e não ser engajada no primeiro disponível como condição de sobrevivência. A continuidade do sistema de “venda de força de trabalho” de acordo com a lei de oferta e procura no “mercado de trabalho” eternamente consolidará a desigualdade brutal de quem não tem propriedade e continuará a exposição da pessoa trabalhadora “desnuda” ao livre alvedrio do capital. A garantia do chamado “poder diretivo” empresarial, pelo qual quem assume os riscos da atividade econômica teria o direito de dirigi-la<sup>191</sup>, continuaria sendo a forma legalizada de exploração através do exercício direto de biopoder do empregador sobre o corpo desnudo de quem necessita trabalhar – o poder de dar ou negar condições de vida, de dar ou negar trabalho, de “contratar” ou despedir sumariamente.

Tal sistema, quando aplicado nos países periféricos, potencializa a submissão dos povos às nações dominantes, cujas multinacionais encontram campo fértil para a exploração maximizada da força de trabalho, muitas vezes em regime de semi-escravidão, realidade vivenciada em muitos países do hemisfério sul<sup>192</sup>.

---

<sup>191</sup> Já não há falar em “poder diretivo”, mas sim direito diretivo, e com bastante limitações e atenuações, em rumo à democratização das empresas, consoante linha inaugurada nos Princípios Diretores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, incorporados nas Linhas Diretrizes para Multinacionais e Direitos Humanos da OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

<sup>192</sup> A título de exemplo, a reportagem publicada em 23.06.2016 na revista Galileu, intitulada “Escravos da moda: os bastidores nada bonitos da indústria fashion”, mostra a dura realidade de pes-

Centrar o ser humano numa perspectiva global, como sujeito de direitos, e trazer a conscientização em torno desses direitos, pode ser um passo para alcançar um desenvolvimento solidário, o que se constrói a partir de políticas públicas com Enfoque de Direitos Humanos e, também, com a interpretação e aplicação do Direito, em especial dos direitos sociais - que constituem o contraponto da globalização neoliberal -, desde o EDH. Eis a importância de se desfazer de ideologias, como a do desenvolvimento, e proceder às releituras conceituais necessárias, desde a ótica dos Direitos Humanos e com uma visão abrangente, holística, crítico-tutelar e transdisciplinar de totalidade concreta do entorno das relações de trabalho.

#### **I.4 Globalização, capitalismo neoliberal e Direitos Sociais**

IRTI<sup>193</sup>, com propriedade, esclarece que o mercado global reduz lugares para um “qualquer lugar”, todos fungíveis, substituíveis e medidos pelo grau de lucro. Assim, estendendo-se além das fronteiras, o mercado *deslocaliza* e descentraliza as pessoas, chamando-as para funções específicas no sistema de produção e troca.

Este cenário da política internacional atual de “desenvolvimento” reproduz os efeitos nefastos da globalização, potencializados pela ideologia neoliberal reinante que torna o capitalismo selvagem, sem freios, com uma série de consequências que comprometem o futuro da humanidade desde a precarização acentuada das condições sociais das classes despossuídas.

A globalização é popularmente entendida como um processo de integração econômica, social, cultural e política, acelerado e aprofundado pela evolução dos meios de transporte, de comunicação e de informática. Atualmente, o uso do termo está mais vinculado à faceta econômica, como sinônimo de livre circulação de mercadorias (capital), restando a contrapartida de livre circulação de pessoas (trabalho) a grande incógnita a ser superada no *establishment* da comunidade internacional. O fenômeno impacta diretamente os Direitos Humanos, especialmente no que concerne aos direitos sociais.

Neste sentido, uma das consequências perversas da globalização é a possibilidade de volatilização do capital, que se transfere de uma região para outra do mundo, conforme ditarem os custos da mão-de-obra, fomentando a exploração desmedida e gerando, como efeito perverso, a precarização e a mi-

---

soas que trabalham para a indústria têxtil: enquanto grandes marcas mundiais como Walmart, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger (EUA), Zara (Espanha), Christian Dior (França), Burberry (Inglaterra), Versace (Itália) etc. gozam da maximização do lucro, milhares de trabalhadoras e trabalhadores são explorados na confecção destas peças nas formas de escravidão moderna, através de servidão por dívida, jornadas exaustivas, trabalho forçado, condições degradantes etc. Segundo a reportagem, enquanto na década de 1960 95% das roupas vendidas nos Estados Unidos eram produzidas naquele país, atualmente esse percentual não passa de 3%. Fonte: sítio da Revista Galileu. Recuperado de <https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2016/06/escravos-da-moda-os-bastidores-nada-bonitos-da-industria-fashion.html>

<sup>193</sup> IRTI (2007).

séria. BAUMAN<sup>194</sup> comenta que a nova elite global e a lei do livre mercado são translocais enquanto as ordens são locais, e sempre que as pessoas de uma ordem local se intrometam e molestem, o capital pode apelar a leis globais para mudar os conceitos da ordem e das regras do jogo locais, e, se ainda assim, houver demasiado agito local, sempre existe a possibilidade de partir. BAUMANN conclui que a “globalidade” da elite é a mobilidade, que entranha a capacidade de evadir-se, escapar, e que não faltarão guardiões da ordem do local para fazer vista grossa a isso.

Assim, hoje não há nacionalidade para o capital, o que gera uma nova forma de neocolonialismo sem fronteiras (a posse do capital dita as fronteiras do grupo beneficiado de qualquer parte do planeta), evidenciando novas formas de exploração do outro, geradoras de miséria no mundo. Desta forma, a livre circulação do capital financeiro é um estímulo para que o sistema se retroalimente, enquanto no plano internacional não se criem tributos e regras sobre essa circulação e espaços de redistribuição de recursos para reversão da desigualdade social.

GÓES<sup>195</sup> alerta para que não se perca de vista o verdadeiro significado de uma estatalidade pós-1989, seja ela considerada pós-moderna ou não, porque nela está inserida a globalização neodarwinista, com a abertura mundial do comércio, desprestígio do Estado westfaliano, redução jurídica do Estado e busca pela competitividade internacional. Assim, o autor conecta a globalização ao neoliberalismo e apresenta o novo formato pós-moderno de estatalidade como idealizado pelos EUA de forma a reconsolidar sua hegemonia mundial para a conquista de mercados e mentes. Neste sentido, afirma que o termo globalização pode e deve ser associado à geopolítica global estadunidense, de modo que o fenômeno da globalização da economia não é um simples instrumento de regulação do comércio internacional, nem instrumento de promoção de cooperação internacional, mas um instrumento de disputa de poder global. Nessa linha coincide BOURDIEU<sup>196</sup>:

Se a globalização é antes de tudo um mito justificador, há um caso em que ela é bem real; é o dos mercados financeiros. Graças à diminuição de um certo número de controles jurídicos e do aprimoramento dos meios de comunicação modernos, que acarreta a diminuição dos custos de comunicação, caminha-se para um mercado financeiro unificado, o que não quer dizer homogêneo. Esse mercado financeiro é dominado por certas economias, isto é, pelos países mais ricos, e particularmente pelo país cuja moeda é utilizada como moeda internacional de reserva e que, com isso, dispõe, no interior desses mercados financeiros, de uma grande margem de liberdade. O mercado financeiro é um campo no qual os dominantes, os Estados Unidos nesse caso particular, ocupam uma posição tal que podem definir em grande parte as regras do jogo.

---

<sup>194</sup> BAUMAN (1999, p. 162-3).

<sup>195</sup> GÓES (2020: 513-515).

<sup>196</sup> BOURDIEU (1998: 33).

Esta globalização econômica como mecanismo de controle planetário impacta no modelo tradicional de Estado, representando um desafio para as políticas públicas voltadas ao bem-estar social e à própria prestação de serviços públicos estatais, pois, como alerta AVELÃS NUNES<sup>197</sup>:

Um dos dogmas do monetarismo neoliberal é o da morte da política econômica (a morte da política, sem mais). Porque as leis naturais do mercado (a reinventada mão invisível) resolvem tudo sem erro possível, para além do justo e do injusto, e porque os agentes econômicos privados dispõem da mesma informação do estado, o que lhes permite antecipar as medidas de política econômica e os seus efeitos e agir como agentes econômicos racionais, adotando comportamentos que anulam os efeitos das políticas públicas, tornando-as neutras em relação à economia, e por isso desnecessárias (é a teoria das expectativas racionais, a fina flor do monetarismo).

MESZÁROS<sup>198</sup> assevera que, nesta fase, o capitalismo assume contornos de poder político manipulador. Afirma, também, que as oportunidades de vida dos indivíduos são determinadas segundo o lugar em que os grupos sociais a que pertencem estão situados na estrutura hierárquica de comando do capital. O autor descreve um metabolismo socioeconômico deste sistema de capital, com caráter totalizador, estabelece uma correlação inimaginável anteriormente entre economia e política.

Já na década de 1990, FARIA<sup>199</sup> denunciava, na mesma linha de MESZÁROS e STREECK, que a globalização econômica estava substituindo a política pelo mercado, como uma instância privilegiada de regulação social. A imunidade do capital financeiro às fiscalizações governamentais, a fragmentação das atividades produtivas ao longo do mundo e a redução das sociedades a meros conjuntos de grupos e mercados unidos em rede esvazia parte dos instrumentos de controle dos atores nacionais. Transnacionalizado o processo decisório, as decisões políticas restam condicionadas por equilíbrios macroeconômicos que passam a representar um efetivo princípio normativo responsável pelo estabelecimento de determinados limites às intervenções reguladoras e disciplinadoras dos governos. Relativizada, pois, a autonomia decisória dos governos, com a geração de novas formas de poder autônomas e desterritorializadas, a transnacionalização dos mercados debilitou o caráter essencial da soberania, colocando em xeque tanto a centralidade quanto a exclusividade das estruturas jurídico-políticas do Estado-nação, de modo que o direito positivo e suas instituições perdem uma parte significativa de sua jurisdição. Tal ocorre pela concepção da atuação estatal dentro de limites territoriais precisos, com base nos instrumentos de violência monopolizados pelo Estado, cujo alcance tende a diminuir na mesma proporção em que as barreiras geográficas vão sendo superadas pela expansão da microeletrônica, da informática, das telecomunicações e dos trans-

---

<sup>197</sup> AVELÃS NUNES (2015: 602).

<sup>198</sup> MESZÁROS (2011: 98-99).

<sup>199</sup> FARIA (1997).

portes. O autor fala na aparição de instâncias de justiças emergentes, quer nos espaços infra estatais (os espaços locais, por exemplo, com figuras de mediação, negociação e conciliação, autocomposição de interesses, auto resolução de divergências, arbitragens privadas ou mesmo a imposição da lei do mais forte - crime organizado e narcotráfico) quer nos espaços supra estatais (polarização por diversos organismos multilaterais, como o Banco Mundial, FMI, OMC, Banco de Compensações Internacionais, OMPI etc.), como também por conglomerados empresariais, instituições financeiras, entidades não-governamentais e movimentos representativos de uma sociedade civil supranacional.

STREECK<sup>200</sup> fala na “imunização do mercado a correções democráticas”, seja através de uma reeducação neoliberal das pessoas, com “doutrinação pública permanente por parte da teoria da economia convencional”, seja através da abolição da democracia segundo o modelo chileno dos anos 70. Assim, sustenta, a “eliminação da tensão entre capitalismo e democracia”, e “a consagração de um primado duradouro do mercado sobre a política” têm de ser implementadas com reformas incrementadoras das instituições político-econômicas mediante a transição para uma política econômica baseada num conjunto de regras (bancos centrais independentes, política orçamentária imune aos resultados eleitorais, transferência das decisões político-econômicas para autoridades reguladoras e para grupos de expertos, freios duradouros ao endividamento público).

Portanto, sobre a invasão da política pelo mercado, coincidem IRTI, GÓES, MESZÁROS, FARIA, STREECK e AVELÃS NUNES<sup>201</sup>.

E para o mercado, quanto mais fragilizada estiver a classe trabalhadora, mais fácil será o controle pelo capital, pois, conforme Alain Greenspan<sup>202</sup>, quan-

---

<sup>200</sup> STREECK (2013: 68).

<sup>201</sup> Conforme o autor: “Esta subordinação aos ‘mercados’ não é recente. Mas alguns têm o mérito de o dizer com todas as letras. É o caso de Joschka Fisher (ex-dirigente de Os Verdes e ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros de um governo alemão liderado pelo SPD), que escreveu: ‘ninguém pode fazer política contra os mercados.’ É a confissão da capitulação perante os especuladores e os agentes do crime sistémico, é a aceitação da morte da política (da morte da cidadania, da liberdade e da democracia), sacrificadas à vontade e ao poder do grande capital financeiro especulador e às leis dos mercados, como se estas fossem a constituição das constituições. Mercados über alles! (AVELÃS NUNES, 2015: 537).

<sup>202</sup> Fonte: publicação do jornal *The New York Times*, de 27.02.1997, intitulada *Job Insecurity of Workers Is a Big Factor in Fed Policy*, pelo repórter Louis Uchitelle. Recuperado de <https://www.nytimes.com/1997/02/27/business/job-insecurity-of-workers-is-a-big-factor-in-fed-policy.html>. Conforme o original:

*“For months now, the Federal Reserve has been poised to raise interest rates, but has held off. Why?*

*The answer lies mainly in what the Fed’s chairman, Alan Greenspan, describes as a powerful recent force in the American economy: job insecurity. In his testimony to Congress yesterday, he clearly elevated this insecurity to major status in central bank policy. Workers have been too worried about keeping their jobs to push for higher wages, he said, and this has been sufficient to hold down inflation without the added*



do diretor do Federal Reserve (FED), dos Estados Unidos, a insegurança no trabalho é uma força poderosa para a economia, porque quando os trabalhadores e trabalhadoras estão preocupados em manter seus empregos, não pressionam por salários mais altos.

Explicando como a fórmula se aplica na União Europeia, AVELÃS NUNES<sup>203</sup> diz que os países dominantes procuram maximizar, em benefício das suas economias, os ganhos de um grande mercado aberto à concorrência, compreendendo a solidariedade devida aos novos países do alargamento europeu apenas como um componente do discurso político (ou politiquero), cujos níveis de produção inferiores aos de 1989, os condena a recorrer a práticas equiparáveis ao *dumping* salarial, ao *dumping* social, ao *dumping* fiscal e ao *dumping* ambiental, como armas de concorrência. O autor afirma, ainda, que ganham com esta situação os senhores do grande capital, jogando com a deslocalização de empresas para tentar obter idênticas vantagens salariais e fiscais em outros países (áreas onde os Tratados afastam qualquer ideia de harmonização). Assim, conforme prossegue, para poderem ser competitivos e assegurar elevadas taxas de lucro aos capitais estrangeiros que querem atrair, os governos desses países condenam os seus trabalhadores e trabalhadoras a manter (ou a diminuir) os baixos níveis salariais e os baixos níveis de proteção social que possuem, e aceitam abdicar da cobrança dos impostos sobre os rendimentos do capital.

E nessa linha, TOUSSAINT<sup>204</sup> denuncia que, em 2009, em plena crise mundial, o Banco Mundial continuou predicando a eliminação da proteção social dos trabalhadores, ainda que a crise tenha produzido enorme incremento do desemprego, sob o argumento de que os Estados que adotaram regulamentos de emprego mais flexíveis experimentaram decréscimo no número de empresas que trabalham no setor informal. Explica que o Banco Mundial adota, desde 2003, uma classificação anual dos países relativas às reformas para melhorar o “clima de negócios”, na qual quanto mais se facilite na legislação de um país as despedidas dos trabalhadores, tanto melhor será sua qualificação, com objetivo de reforçar ainda mais os direitos dos investidores e da propriedade privada às expensas dos direitos sociais.

DELEUZE<sup>205</sup>, numa visão crítica do capitalismo (capitalismo e esquizofrenia), questiona o que falta para que se realize o encontro entre os fluxos descodificados do capital ou do dinheiro e os fluxos descodificados, desterritorializados das pessoas trabalhadoras, pois a maneira pela qual o dinheiro se descodifica para se tornar capital-dinheiro e a maneira pela qual trabalhadores e trabalhadoras são arrancados da terra para se tornarem proprietários e proprietárias só de sua força de trabalho são dois processos completamente independentes um do

---

*restraint of higher interest rates.”*

<sup>203</sup> AVELÃS NUNES (2015: 565).

<sup>204</sup> TOUSSAINT (2012: 54-55).

<sup>205</sup> DELEUZE (2017: 22-23).



outro e que deveriam se encontrar. O filósofo<sup>206</sup> amplia sua crítica ao mostrar a migração de uma sociedade disciplinar, no início do século XX, própria do sistema de capitalismo produtivo e organização fordista da produção, para uma sociedade de controle, do capitalismo financeiro e da organização empresarial toyotista:

*Las viejas sociedades de soberanía manejaban máquinas simples, palancas, poleas, relojes; pero las sociedades disciplinarias recientes se equipaban con máquinas energéticas, con el peligro pasivo de la entropía y el peligro activo del sabotaje; las sociedades de control operan sobre máquinas de tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores cuyo peligro pasivo es el ruido y el activo la piratería o la introducción de virus. Es una evolución tecnológica pero, más profundamente aún, una mutación del capitalismo. Una mutación ya bien conocida, que puede resumirse así: el capitalismo del siglo XIX es de concentración, para la producción, y de propiedad. Erige pues la fábrica en lugar de encierro, siendo el capitalista el dueño de los medios de producción, pero también eventualmente propietario de otros lugares concebidos por analogía (la casa familiar del obrero, la escuela). En cuanto al mercado, es conquistado ya por especialización, ya por colonización, ya por baja de los costos de producción. Pero, en la situación actual, el capitalismo ya no se basa en la producción, que relega frecuentemente a la periferia del tercer mundo, incluso bajo las formas complejas del textil, la metalurgia o el petróleo. Es un capitalismo de superproducción. Ya no compra materias primas y vende productos terminados: compra productos terminados o monta piezas. Lo que quiere vender son servicios, y lo que quiere comprar son acciones. Ya no es un capitalismo para la producción, sino para el producto, es decir para la venta y para el mercado. Así, es esencialmente dispersivo, y la fábrica ha cedido su lugar a la empresa. La familia, la escuela, el ejército, la fábrica ya no son lugares analógicos distintos que convergen hacia un propietario, Estado o potencia privada, sino las figuras cifradas, deformables y transformables, de una misma empresa que sólo tiene administradores. Incluso el arte ha abandonado los lugares cerrados para entrar en los circuitos abiertos de la banca. Las conquistas de mercado se hacen por temas de control y no ya por formación de disciplina, por fijación de cotizaciones más aún que por baja de costos, por transformación del producto más que por especialización de producción. El servicio de venta se ha convertido en el centro o el "alma" de la empresa. Se nos enseña que las empresas tienen un alma, lo cual es sin duda la noticia más terrorífica del mundo. El marketing es ahora el instrumento del control social, y forma la raza impúdica de nuestros amos. El control es a corto plazo y de rotación rápida, pero también continuo e ilimitado, mientras que la disciplina era de larga duración, infinita y discontinua. El hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. (DELEUZE, 2006).*

E, recentemente, HAN<sup>207</sup> apresenta a sociedade do século XXI como a sociedade do rendimento: explica que, em algum momento da produtividade,

---

<sup>206</sup> DELEUZE (2006).

<sup>207</sup> HAN (2012: 27-31).

a técnica disciplinar alcança seu limite, tendo no inconsciente social inerente o desejo de aumentar a produção. Assim, segundo sustenta, para aumentar a produtividade, substitui-se o paradigma disciplinar pelo de rendimento, e o sujeito de rendimento, já tendo atravessado a fase disciplinar, segue disciplinado. Esta violência sistêmica, prossegue, dá origem a infartos psíquicos, depressão por esgotamentos, síndrome de desgaste ocupacional. O empreendedor de si mesmo, que se auto-explora, sofre e se enferma pelo imperativo do rendimento, como novo mandato da sociedade do trabalho pós-moderna (ou tardo-moderna, nas palavras do autor).

Neste compasso, o discurso ambíguo dos direitos sociais, como v.g., na Constituição europeia em contraposição ao regramento concreto de economia e segurança<sup>208</sup>, bem assim, a impossibilidade de acesso a um emprego não precário, na atualidade, mostram a dura realidade de quem necessita trabalhar para sobreviver.

Se o discurso dos direitos sociais prega o direito a um salário digno, ao lazer, ao transporte, à assistência social, à paternidade, à maternidade, à seguridade social, etc., na outra ponta é certo que a forma positivada destes direitos e sua interpretação orientada por uma visão “contratual” entre quem concede emprego e quem presta serviços, jamais será capaz de garantir a todos uma ocupação digna e não precarizada.

Assim, enquanto o Direito do Trabalho peca por estar orientado a uma visão contratualista que não é apta a emancipar a classe trabalhadora, restando permeável às influências do poder do capital global e local, por outro lado, a forma de proteção contemporânea dos Direitos Humanos no plano internacional, por sua vez, também não ajuda, de *per si*, a melhorar a situação. Neste norte, discorrendo sobre a proteção e garantia dos Direitos Humanos em âmbitos internacionais, BERRAONDO LÓPEZ<sup>209</sup>, bem demonstra a complexidade dos me-

<sup>208</sup> AVELÃS NUNES (2015: 561-562), discorrendo sobre a perspectiva europeia comenta que:

No plano interno, o déficit de solidariedade revela-se, entre outros domínios, na incapacidade:

1. de levar a sério o objetivo da coesão económica e social (a que a UE afeta menos de 1/3 das verbas do seu orçamento, percentagem que ganha significado se lembrarmos que a PAC absorve 47%);
2. de avançar para um mínimo de harmonização em matéria de políticas sociais (neste âmbito, as deliberações continuam a ser tomadas por unanimidade);
3. de estabelecer um mínimo de harmonização fiscal, nomeadamente no que toca ao imposto sobre as sociedades, à tributação dos rendimentos do capital e das mais-valias;
4. de pôr de pé uma política concertada de promoção do pleno emprego, de combate ao desemprego e de proteção social aos desempregados;
5. de dotar a União de um orçamento suficiente para ter efeitos redistributivos relevantes e para financiar políticas capazes de enfrentar os efeitos dos chamados choques externos ou choques assimétricos.

<sup>209</sup> BERRAONDO LÓPEZ (2004: 50-78).

canismos atuais de proteção dos DDHH, praticamente inacessíveis aos mortais cidadãos e cidadãs planetários (a menos que possuam formação na matéria), e absolutamente insuficientes para prevenir e coibir violações, especialmente num mundo globalizado (em que empresas transnacionais migram livremente suas fábricas e instalações de um país a outro conforme ditarem os custos da mão-de-obra, cada vez mais precarizando e deteriorando os direitos sociais).

CASTELLS<sup>210</sup> já denunciava que o processo de individualização do trabalho deixa trabalhadores e trabalhadoras por sua própria conta para negociar seu destino *vis-à-vis* com as forças do mercado em constante mudança, e que a crise do Estado-Nação e das instituições da sociedade civil construídas em seu entorno durante a era industrial, compromete a capacidade institucional de corrigir desequilíbrios sociais derivados da lógica irrestrita do mercado. Por fim, explica que no limite, o Estado, esvaziado de representatividade com seu povo, se torna um predador deste.

Neste norte, CANCLINI<sup>211</sup> denuncia a passagem de um “capitalismo da precariedade”, que potencializou suas ganâncias agravando a injustiça e a insegurança social para um “capitalismo da prescindibilidade”, no qual desaparece a figura das pessoas desempregadas, passando-se a conviver com jovens exaltados como empreendedores, líderes de uma nova economia criativa em uma ansiosa auto exploração de trabalhadoras e trabalhadores que não sabe quanto vai durar o que fazem hoje e qual vai ser sua próxima ocupação. Enquanto empresários e governantes encontram emoção e intensidade no uso do tempo de pessoas trabalhadoras “independentes”, sua vida revela perda de direitos trabalhistas, novas discriminações de gênero e étnicas, denuncia CANCLINI.

A organização do trabalho pós-moderna passa, então, do modelo toyotista para o modelo darwiniano. Nas palavras de BOURDIEU<sup>212</sup>:

A instituição prática de um mundo darwiniano que encontra as molas da adesão na insegurança em relação à tarefa e à empresa, no sofrimento e no estresse, não poderia certamente ter sucesso completo, caso não contasse com a cumplicidade de trabalhadores a braços com condições precárias de vida produzidas pela insegurança bem como pela existência — em todos os níveis da hierarquia, e até nos mais elevados, sobretudo entre os executivos — de um exército de reserva de mão-de-obra docilizada pela precarização e pela ameaça permanente do desemprego. O fundamento último de toda essa ordem econômica sob a chancela invocada da liberdade dos indivíduos é efetivamente a violência estrutural do desemprego, da precariedade e do medo inspirado pela ameaça da demissão: a condição do funcionamento “harmonioso” do modelo micro-econômico individualista e o princípio da “motivação” individual para o trabalho residem, em última análise, num fenômeno de massa,

---

<sup>210</sup> CASTELLS (2000: 165). O autor expõe sua perspectiva desde o *informacionalismo*, que seria uma forma nova de desenvolvimento originada da reestruturação do modo de produção capitalista no final do Século XX.

<sup>211</sup> CANCLINI (2020).

<sup>212</sup> BOURDIEU (1998: 82-83).

qual seja, a existência do exército de reserva dos desempregados. Nem se trata a rigor de um exército, pois o desemprego isola, atomiza, individualiza, desmobiliza e rompe com a solidariedade.

Urge, pois, a busca de um pensamento diferente do estabelecido, apto a construir uma plataforma de concretização da dignidade da pessoa humana para todos os povos e, também, de um instrumento que permita a efetividade dos Direitos Humanos no mundo globalizado, com aptidão a repelir as novas formas de ataque do capital aos direitos sociais. Se o capital busca a imunização do mercado à democracia e doutrinação pública neoliberal permanente, em contração a sociedade deve buscar a imunização dos direitos sociais aos ataques do poder econômico e a conscientização pública permanente da importância do Direito do Trabalho e dos Direitos Humanos.

### **I.5. A Teoria Crítica como ferramenta indispensável para a efetividade dos Direitos Humanos do Trabalho**

Na contextualização dos Direitos Humanos em uma perspectiva histórico-evolutiva e crítica do sistema contemporâneo, percebe-se, na história recente pós-Declaração Universal de 1948, em suas diversas etapas (Tratados e Convenções, institucionalização, busca da despolitização, prevalência do princípio da segurança, teoria crítica), a existência, dentre muitos outros, de dois grandes problemas estruturais: o primeiro, pertinente à efetividade e exercício dos Direitos Humanos; o segundo, quanto à prática internacional de DDHH, dissociada do conteúdo dos documentos internacionais, e que se revela, até o momento, insuficiente para conter o avanço da desigualdade social no planeta. Como visto, as práticas imperialistas de nações dominantes como os Estados Unidos seguem impedindo a consecução de justiça social.

Esta análise se fulcra, basicamente, na visão realista mundial e na crítica perceptiva do sistema contemporâneo, indispensável em um mundo dominado por uma globalização imperialista, no qual, como bem aponta HERRERA FLORES<sup>213</sup>, quase 80% da humanidade está excluída dos benefícios da globalização. Aliás, vale frisar que as benesses do sistema seguem dirigidas ao favorecimento do grande capital, atualmente as corporações multinacionais e bancos, e fortalecimento dos mecanismos de manutenção e concentração de renda, em direção ao capitalismo do 1%<sup>214</sup>, como apontam PEMBERTON–PIKETTY<sup>215</sup>, no documentário intitulado *Le capital au XXIe siècle*, mostrando que a sociedade atual retornou aos níveis de desigualdade social pré-Revolução Francesa, do século XVIII.

---

<sup>213</sup> HERRERA FLORES (2007).

<sup>214</sup> Segundo o *Informe Social Mundial 2020: la desigualdad en un mundo en rápida transformación*, da ONU, o “1% mais rico da população tem cada vez mais dinheiro, enquanto que o 40% mais pobre obtém menos de 25% dos ingressos”. (Obs.: a tradução é minha). Fonte: notícia disponível no sítio da ONU sobre o Informe. Recuperado de <https://news.un.org/es/story/2020/01/1468241>

<sup>215</sup> PEMBERTON-PIKETTY (2020).

Como demonstra STREECK<sup>216</sup>, em oposição à justiça social o poder econômico impõe a justiça de mercado, e uma sociedade que se deixa convencer pela teoria econômica convencional, pode aceitar a justiça de mercado como justiça social, anulando a tensão entre ambas. Ou, segundo prossegue, outra possibilidade é declarar o conceito de justiça social impraticável, tal como feito por Friedrich von Hayek<sup>217</sup>, e organizar as instituições políticas e econômicas de forma a excluir quaisquer perturbações da justiça de mercado por exigências de justiça social.

SANDERS<sup>218</sup> explica que o término da guerra fria produziu prestígio dos mercados e do pensamento por eles pautado: os países passaram a adotar mecanismos de mercado na gestão da economia, enquanto, paralelamente, os valores de mercado assumiam um rol maior da vida social e a economia tornava-se um domínio imperial até a lógica da compra e venda governar a vida como um todo.

Neste contexto, a lógica liberal de mercado apropriando-se da vida através de tentáculos políticos, legislativos e jurídicos é bem descrita por RIBAUDO<sup>219</sup>, esclarecendo que o sopro de liberdade de expressão permitido pelo mercado impede o esclarecimento, desviando a atenção das massas, enquanto os direitos políticos são anulados por leis eleitorais majoritárias não representativas; tudo escudado por uma mídia completamente servil ao modelo econômico, social e político fundado no contínuo choque das populações através de notícias brutais relacionadas ao terrorismo, a homicídios, medo de invasão de imigrantes etc. Segundo o autor, a antecipação das leis do Estado pelo mercado garante às empresas o completo domínio sobre os direitos sociais e a eliminação de todos os direitos sindicais, gerando lucros máximos na exploração do trabalho humano e do meio ambiente. A esse modelo perverso administrado pelo Estado como máscara de corporações privadas em conchavo com as instituições públicas, bancos e companhias de seguro, sufocando a população na escravidão por dívida, RIBAUDO denomina de *ordoliberalismo*<sup>220</sup>.

Neste ponto estamos: neutralizados o Direito do Trabalho e os Direitos Humanos pela hegemonia neoliberal globalizante, que torna permeável a políti-

---

<sup>216</sup> STREECK (2013: 66). Segundo o autor: “O mercado é que decide aquilo que é justo em termos de mercado, exprimindo-o em preços; aquilo que é socialmente justo decide-se na ponderação do poder e da mobilização, própria dos processos políticos, e exprime-se em instituições formais e informais”. E mais adiante: “A justiça social é de natureza material e não formal, por isso, do ponto de vista da racionalidade formal do mercado só pode ser considerada irracional, imprevisível e arbitrária – uma ideia que já se encontra no pensamento de Max Weber.” (Idem, *ibidem*).

<sup>217</sup> Friedrich August Von Hayek (1899-1992), economista e filósofo austríaco, defensor do neoliberalismo e fundador da *Mont Pèlerin Society*, para difusão das ideias neoliberais no mundo.

<sup>218</sup> SANDERS (2012: 11).

<sup>219</sup> RIBAUDO (2017).

<sup>220</sup> A dura conclusão de RIBAUDO mostra a realidade nua e crua das pessoas estagnadas em feroz desigualdade, competindo indivíduo contra o indivíduo, um darwinismo social em modelo produtor de criminalidade, corrupção e guerra entre os pobres.

ca e o Direito ao poder econômico, resta questionar como superar este ponto de inflexão para alcançar o desiderato de justiça social.

Assim, cabe a abordagem dos Direitos Humanos por uma teoria crítica, que seja capaz de fornecer elementos necessários para superar os problemas detectados, ao mesmo tempo visibilizando a realidade do trabalho como um Direito Humano, e dando-lhe a necessária concretude para imprimir seu inerente caráter tuitivo. Ou seja, estabelecer as bases de um enfoque crítico-tutelar.

Na estruturação e busca de uma teoria crítica, o assunto é vasto porque pode ser abordado por diversos pontos de vista e concepções filosóficas de Direitos Humanos. A seguir, se condensam algumas ideias principais e assertivas que podem ser usadas como norte para a interpretação, aplicação e efetividade dos DDHH, quanto aos seus pontos comuns.

Por um prisma marxista, MASCARO<sup>221</sup> assevera que a lógica capitalista opera os Direitos Humanos como mecanismo de sociabilidade, de combate político aos que não a respeitam ou como negação constante em face de seus incômodos, de modo que a defesa dos DDHH na sociabilidade capitalista contraditória é, concomitantemente, sua negação.

SUPIOT<sup>222</sup> fala em três figuras da interpretação fundamentalista ocidental dos Direitos Humanos a serem superadas: o messianismo, quando procura impor ao mundo inteiro sua interpretação literal; o comunitarismo, quando os DDHH se convertem em signo de superioridade do Ocidente, negando a outras culturas a capacidade de deles se apropriar; e o cientificismo, quando a interpretação é remitida aos dogmas da biologia ou da economia, como leis intangíveis do comportamento humano.

Condensando essas ideias, SOUZA SANTOS<sup>223</sup> afirma que uma das características estruturais das sociedades capitalistas é que a existência de constelações de poder, de direito e de conhecimento é ignorada, ocultada ou suprimida por uma série de estratégias hegemônicas que convertem a redução da política ao espaço da cidadania em senso comum político, com a redução do direito ao estatal em senso comum jurídico e a redução do conhecimento ao científico em senso comum epistemológico. Denomina de “reduções hegemônicas” que, depois de vertidas em senso comum, são difíceis de serem vencidas, sendo que o papel de uma teoria crítica, muito além de identifica-las e desmascara-las, deve se transformar num novo senso comum e emancipatório.

Acerca da dicotomia jusnaturalismo e juspositivismo, GALLARDO<sup>224</sup> indica, com propriedade, que nem um nem outro podem ancorar os Direitos Humanos, pois não contêm nem facilitam uma compreensão crítica dos mesmos. O primeiro, porque contempla visão dos indivíduos com inteira independência de suas relações sociais, e DDHH não constituem mera projeção metafísica

---

<sup>221</sup> MASCARO (SÃO PAULO, 2017: 111).

<sup>222</sup> SUPLOT (Buenos Aires, 2012: 253).

<sup>223</sup> SOUZA SANTOS (2000: 326-327).

<sup>224</sup> GALLARDO (2010: 58-62).



da dignidade da pessoa humana alheia à inserção social; e, o segundo, porque vincula o Direito ao Estado que não é um ser neutro nem universal, mas parte da conformação social e tradutor das exclusões e injustiças do vigente sistema de acumulação de capital. Assim, por um ou por outro ângulo permitiriam possíveis violações aos Direitos Humanos, especialmente considerando a situação de grupos vulneráveis, a depender do regime de governo e da legislação positiva.

Sobre jusnaturalismo, ZAFFARONI<sup>225</sup> é enfático em sua crítica:

*La invocación de un derecho supralegal para desconocer límites de legalidad siempre es peligrosa, pues todo depende de quién establezca lo que es o se pretende natural. Como es sabido, no hay una única teoría acerca del derecho natural, sino muchas. Basta revisar cualquier texto que contemple la historia del pensamiento jurídico para verificar la enorme gama de versiones del jusnaturalismo y sus variables (es suficiente remitir a obras ampliamente divulgadas y clásicas, como Alfred Verdross, *La filosofía del derecho del mundo occidental*, Centro de Estudios Filosóficos, UNAM, México, 1962; Hans Welzel, *Introducción a la Filosofía del Derecho, Derecho Natural y Justicia Material*, Aguilar, Madrid, 1971). Sin entrar en mayores detalles que no vienen al caso, es claro que hay un derecho natural de raíz escolástica, otros de claro origen contractualista liberal y absolutista, pero también hubo derechos naturales con ese u otro nombre autoritarios y totalitarios, abiertamente irracionales. La legislación penal nazista apelaba a un pretendido derecho natural fundado en la sangre, la raza y el suelo.*

E sobre o juspositivismo, com enfoque distinto de GALLARDO, MASCARRO<sup>226</sup> explica que, nas visões juspositivistas, vislumbra-se desde uma redução dos Direitos Humanos a meros direitos fundamentais normatizados (juspositivismo estrito, Hans Kelsen, Século XX) até a afirmação dos DDHH como compreensão superior, distinta e de principiologia inexorável para o manejo das normas (juspositivismo ético, últimas décadas, tendo como exemplos de expoentes, Ronald Dworkin, Jürgen Habermas, Robert Alexy)<sup>227</sup>.

Nesta etapa do juspositivismo, em sua forma ética, DWORKIN<sup>228</sup>, que foi um crítico ao utilitarismo econômico do Direito, desenvolveu, em contraposição à prática jurídica utilitarista, o conceito de integridade sistêmica, que defende ser a coerência de princípios e a pressuposição de equidade, justiça e devido

---

<sup>225</sup> Excerto extraído do voto do eminente jurista argentino, quando Ministro da *Corte Suprema de la Nación*, no julgamento em 2005, do caso *Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. Causa N°17.768C. (pp. 133-134)*. (08 de julho de 2020). Fonte: sítio do Ministério Público da Argentina. Recuperado de: <https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Simon-CSJN.pdf>

<sup>226</sup> MASCARRO (2017: 112-3).

<sup>227</sup> Segundo MASCARRO (2016: 286-287), se trata de uma espécie nova de ecletismo juspositivista, surgida na parte final do século XX, com visão ética liberal, avançando para além da normatividade em favor do uso ético do Direito positivo, com penetração no início do século XXI.

<sup>228</sup> DWORKIN (2007: 191).



processo legal. DWORKIN<sup>229</sup> ensina a possibilidade de aplicação de princípios e valores para permitir uma adequada oxigenação do sistema aos valores sociais. CÁRCOVA<sup>230</sup> explica que DWORKIN propõe um critério de integridade, o qual supõe reconhecer os princípios que mostram que a comunidade comparta deste valor de integridade, o qual determina a forma de uma complexa operação que produz a melhor adjudicação, aplicação do Direito, a única resposta correta, e que só poderão identificar aqueles que estiverem comprometidos em uma atitude íntegra para alcançar sua melhor interpretação moral. DWORKIN<sup>231</sup> desenvolve a interpretação construtiva como elemento de preservação da integridade do sistema<sup>232</sup> na busca da coerência do corpo de normas aplicáveis, observados os princípios de equidade, justiça e devido processo legal.

Se bem que o juspositivismo ético representa um avanço às formas juspositivistas anteriores, especialmente tendo mérito na contraposição à visão utilitarista econômica do Direito, não alcança o conteúdo crítico-tutelar necessário para a proteção e efetividade dos Direitos Humanos exigida pelo Enfoque de Direitos Humanos, segundo a Teoria Crítica dos Direitos Humanos. Esta linha hermenêutica não alcança os enunciados do poder econômico contidos nas normas, vez que trata da moralidade nas normas e estas, como visto, são permeáveis às influências imperialistas, corporativas, logo, a interpretação juspositivista ética não conseguirá transpor completamente a moral econômica para encontrar o valor humano em toda a sua dimensão (como a compreensão dos processos históricos de lutas pelos direitos, relações de poder e domínio subjacentes etc.). É, por outras palavras, o que se depreende de LUKÁCS<sup>233</sup>:

À medida que o direito foi se tornando um regulador normal e prosaico da vida cotidiana, foi desaparecendo no plano geral o *páthos* que adquirira no período do seu surgimento e mais fortes foram se tornando dentro dele os elementos manipuladores do positivismo. Ele se torna uma esfera da vida social em que as consequências dos atos, as chances

---

<sup>229</sup> *Idem, ibidem.*

<sup>230</sup> CÁRCOVA (2012: 203)

<sup>231</sup> Como comenta GARCÍA FIGUEROA (2017), o livro *Levando os direitos a sério*, de DWORKIN (2002), marca o fim da hegemonia juspositivista e faz uma teoria da adjudicação, uma teoria da argumentação jurídica que permite uma concepção interpretativa do Direito superadora de uma visão estática. A figura do juiz “boca da lei”, próprio da era napoleônica, não se ajusta com a sociedade pós capitalista, de riscos, que exige uma abertura valorativa do sistema na aplicação da norma.

<sup>232</sup> Segundo DWORKIN (2007: 191), o Direito como integridade demanda que os juízes admitam, na medida do possível, que o Direito é estruturado por um conjunto coerente de princípios sobre a justiça, a equidade e o devido processo legal, que devem ser aplicados de forma que a situação de cada pessoa seja justa e equitativa segundo as mesmas normas. Neste ponto, sua teoria não é apta para a adjudicação dos DDHH segundo o Enfoque de Direitos Humanos, pois conforma a interpretação no conjunto das normas, sem ponderar a realidade social, processos de luta, relações de poder e de domínio nelas imbricadas, além de ponderar a integridade “na medida do possível”, o que não é suficiente para a efetivação concreta dos DDHH exigida pelo EDH.

<sup>233</sup> LUKÁCS (2013: 172).

de êxito, os riscos de sofrer danos são calculados de modo semelhante ao que se faz no próprio mundo econômico.

Portanto, apesar de que o juspositivismo ético encontre um caminho crítico ao utilitarismo econômico do Direito, não consegue, no entanto, desgarrar da lógica econômica das normas, ainda que lidas em seu conjunto (e, considerando os valores constitucionais, princípios etc.), porque são componentes do sistema e sua ideologia<sup>234</sup>. Como expõe LUKÁCS<sup>235</sup>, o Direito é fruto da classe dominante, contudo, esta, ao produzir normas, ainda assim precisa observar certos limites e compromissos.

Os Direitos Humanos constituem, por excelência, limites a qualquer forma de dominação. No entanto, a sua positivação, seja em normas internacionais ou domésticas, está permeada de freios, entraves ou filigranas advindas das lutas imperialistas e da hegemonia do poder econômico e das classes dominantes. A visão crítica, necessária, pois, para alcançar o conteúdo da luta histórica do mais débil, o processo social que logrou concretizar um limite ao poder, que possa extrair da norma um conteúdo ou enunciado realmente protetivo da parte mais fraca, deve ser revelada por outra forma de interpretação, mais ampla, e de questionamento profundo ao sistema.

Assim, para alcançar concretamente a efetividade dos Direitos Humanos, para o devido prestígio à dignidade humana, algumas premissas de raciocínio são necessárias: centrar a interpretação nas pessoas e nos processos históricos de luta pelos DDHH; incorporar, na estrutura lógica de formulação jurídica, a supremacia dos DDHH; abandonar de vez a ideia de fracionamento dos DDHH em gerações/dimensões, pois induz pensar, de forma equivocada, em um caráter meramente programático para os reconhecidos posteriormente àqueles denominados de primeira geração/dimensão (civis e políticos)<sup>236</sup>. Portanto, numa Teo-

---

<sup>234</sup> Cabe trazer à colação novamente os ensinamentos de LUKÁCS (2013: 175):

Por outro lado, a coesão teórica do respectivo sistema jurídico positivo, essa sua falta de contraditoriedade oficialmente decretada, é mera aparência. Todavia, apenas do ponto de vista do sistema; do ponto de vista da ontologia do ser social, toda forma de regulação desse tipo, até a mais energicamente manipulada, constitui uma regulação concreta e socialmente necessária: ela faz parte do ser-propriadamente-assim justamente da sociedade na qual ela funciona. Mas, precisamente por essa razão, o nexos sistemático, sua dedução, fundamentação e aplicação logicistas são apenas aparentes, ilusórias, porque a constatação dos fatos e seu ordenamento dentro de um sistema não estão ancorados na realidade social mesma, mas apenas na vontade da respectiva classe dominante de ordenar a práxis social em conformidade com suas intenções.

<sup>235</sup> Idem, *ibidem*, p. 170.

<sup>236</sup> Na evolução dos Direitos Humanos, no pensamento prevalente na comunidade internacional, primeiramente, considerava-se que os de primeira geração (os civis e políticos considerados absolutos) seriam básicos e de observância obrigatória, constituindo sua violação delitos de lesa-humanidade, enquanto que os DESC (direitos econômicos, sociais e culturais), de segunda geração, seriam pro-

ria Crítica Dos Direitos Humanos, já não se considera a existência de DDHH de primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta gerações/dimensões senão para efeitos meramente didáticos, já que o descumprimento de qualquer deles leva ao descumprimento dos demais.

Há mais a ser considerado: as características dos Direitos Humanos como direitos interdependentes, inter-relacionados e complementares produzem reflexos a incorporar no raciocínio interpretativo, de que, nesta qualidade, demandam implementação integral e não segmentada, logo, não podem mais ser considerados como conquistas progressivas e que se poderiam efetivar aos poucos.

De outra parte, as características de universalidade, integralidade, irrenunciabilidade, inalienabilidade<sup>237</sup>, interdependência e complementariedade dos Direitos Humanos implicam, além da necessidade de observância obrigatória de todos, também a de sua concretude e efetividade.

Assim, é necessário abandonar a visão metafísica de Direitos Humanos, como meta inatingível, e, também, a ideia de que somente os direitos vindicáveis juridicamente (positivados) são os que devem ser concretizados e, quando mais a partir de uma visão interpretativa estreita que ora os contempla num plano idílico ou abstrato ora os limita pelas diretrizes contratualistas do capitalismo<sup>238</sup>. Tampouco resolve a incorporação do valor ético na aplicação das normas, já que tal interpretação possivelmente encontraria os limites do enquadramento da relação de trabalho como um “contrato” (ainda que subordinando o contrato a valores superiores do ordenamento).

Há de se ter presente, também, que os Direitos Humanos surgem de lutas sociais, como bem indica GALLARDO<sup>239</sup>, de bases conflitivas, produto, nos

---

gressivos, permitindo aos Estados sua implementação flexibilizada pelas condições que tivessem de fazê-lo (como se percebe do art. 2º.1 do PIDESC:

1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.

<sup>237</sup> A inalienabilidade está expressa no primeiro “considerando” do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. (Obs.: o grifo é meu. Fonte: sítio das Nações Unidas – DUDH. Recuperado de: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf>).

<sup>238</sup> Se uma pessoa passa fome ou é analfabeta, por exemplo, não adianta lhe garantir o direito de voto, porque ela precisa primeiro ter seus direitos econômicos, sociais e culturais (de segunda geração/dimensão) garantidos para que os civis e políticos (primeira geração/dimensão) lhe sejam efetivos e úteis. Por este viés, a consideração dos direitos econômicos, sociais e culturais como progressivos, segundo o PIDESC, é falha, por induzir os Estados ao seu reconhecimento segundo critérios de conveniência e oportunidade, atrasando o progresso social e comprometendo a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana e a realização da justiça social.

<sup>239</sup> GALLARDO (2010: 65, 88-9).

dias atuais, de forças sociais movidas por excluídos do sistema capitalista e das relações hegemônicas. Conforme o autor, deve-se procurar a visão do outro – das pessoas marginalizadas, excluídas do sistema –, observando a totalidade social com sensibilidade crítica das relações sociais, do sistema de dominação e de sua reprodução para encontrar o caminho da mudança. Resume GALLARDO que a Teoria Crítica dos Direitos Humanos preconiza o estudo sócio-histórico da justiça, pois o conteúdo axiológico do termo advém das produções humanas (sociais, políticas, culturais, objetivas e subjetivas), abstraindo de concepções naturais, morais ou meramente jurídicas advindas do jusnaturalismo ou do juspositivismo, para discutir ações políticas. Ademais, envolve estar e ser no mundo para aprendê-lo socialmente e comunica-lo de forma libertária por uma atitude sócio-política de avanço na produção cultural e política de uma humanidade que produza humanidade através do reconhecimento e acompanhamento de uma diversidade excludente da discriminação e das diversas modalidades sócio-históricas de império humano.

Com o seguinte exemplo, GALLARDO<sup>240</sup> consegue traduzir o significado crítico: numa visão tradicional, uma pessoa trabalhadora é vista como força de trabalho durante sua jornada laboral e, como ser humano, somente fora dessa jornada, como marido, com seus filhos, filhas, ou num bar, ou seja, somente secundariamente é vista como pessoa. O autor destaca que a violação de Direitos Humanos pelo Estado não é só a direta, mas também aquela produzida pela inércia, pela não promoção de sensibilidade coletiva à reprovação de discriminações, por não sancionar violações de DDHH ou não apoderar as instituições e lógicas sociais de processos de eliminação de discriminações.

HERRERA FLORES<sup>241</sup> propõe quatro condições para elaborar uma teoria realista e crítica dos Direitos Humanos, sendo a primeira, assegurar uma visão realista do mundo em que vivemos e sobre o que desejamos atuar, utilizando os meios que nos aportam os DDHH - aprofundar o entendimento da realidade para poder orientar racionalmente a atividade social. Como segunda condição, sustenta que o pensamento crítico é um pensamento de combate, desempenhando papel de conscientização para ajudar na luta pelos Direitos Humanos. Em terceiro lugar, afirma que uma teoria crítica do direito deve se sustentar sobre dois pilares - o reforço das garantias formais reconhecidas juridicamente e o fortalecimento dos grupos mais desfavorecidos na hora de poder lutar por novas formas, mais igualitárias e generalizadas, de acesso aos bens protegidos pelo direito. A força do direito se manifesta basicamente na possibilidade que se tenha de abstrair das próprias restrições que a forma dominante de considerar o trabalho jurídico impõe, com o objetivo de criar novas formas de garantir os resultados das lutas sociais. Por fim, diz que o pensamento crítico demanda a busca permanente de exterioridade ao sistema dominante. Criticar não consiste

---

<sup>240</sup> Idem, *ibidem*.

<sup>241</sup> HERRERA FLORES (2007: 30-58, 76).

em destruir para criar ou em negar para afirmar. Um pensamento crítico é sempre criativo e afirmativo<sup>242</sup>.

Na sequência de desenvolvimento do tema, HERRERA FLORES<sup>243</sup> propõe uma metodologia crítica para o desenvolvimento dos Direitos Humanos, com a recuperação da ação política e a implantação de uma filosofia dita “impura” dos DDHH, que aceite as “impurezas” que impõem a todo fenômeno social a ação, a pluralidade e o movimento ou dinâmica histórica, rechaçando “purismos” e “fundamentalismos” tendentes ao estático, ao passivo e ao homogêneo. Segundo o autor, recuperar a ação política compreende três aspectos: entender os Direitos Humanos conjuntamente com as ações políticas no contexto real em que vivemos, não separadamente, e, muito menos, como meros “ideais”; os Direitos Humanos devem servir para aumentar nossa potência e nossa capacidade de atuar no mundo; recuperar o político como esfera complementar e paralela à luta pela dignidade a partir dos DDHH. O autor propõe a reivindicação de três tipos de direitos: a) direitos à integridade corporal; b) direitos à satisfação de necessidades; c) direitos de reconhecimentos, contrariando a naturalização dos processos a que nos conduz o neoliberalismo econômico político e cultural dominante. Já a construção de uma filosofia “impura” dos Direitos Humanos significa, a partir de uma visão materialista da realidade, concebendo-se o nosso mundo como real, repleto de situações de desigualdade, de diferenças e disparidades, de impurezas e mestiçagens, atentando-se para as matizes de condição (movimento, pluralidade e tempo), entender os DDHH desde a realidade do corporal, como a resposta normativa a um conjunto de necessidades e expectativas que pretendemos satisfazer, com as seguintes categorias ou instrumentos de trabalho - espaço, pluralidade e narrações. A metodologia crítica compreende, ainda, segundo sustenta, estabelecer uma metodologia relacional, colocando os Direitos Humanos nos espaços em que nos movemos (ação), na pluralidade (corporalidade) e no tempo (história), abarcando estes conceitos em suas mútuas relações consigo mesmos e com os processos sociais nos quais estão insertos.

---

<sup>242</sup> O autor prossegue mencionando quatro deveres básicos, a saber, o dever de reconhecimento, correspondente ao compromisso que todas e todos devem assumir para visualizar que somos animais culturais; dever de respeito, como forma de conceber o reconhecimento com uma condição necessária, mas insuficiente na hora da construção de processos de luta pela dignidade (tomar consciência das desiguais posições que no acesso aos direitos ocupam os diferentes coletivos aos quais se reconhecem suas particularidades); dever de reciprocidade, como base para saber devolver o que tomamos dos outros para construir nossos privilégios, seja de outros seres humanos, seja da mesma natureza da que dependemos para a reprodução primária da vida; dever de retribuição, com o estabelecimento de regras jurídicas, fórmulas institucionais e ações políticas e econômicas concretas que possibilitem a todas e todos não somente satisfazer as necessidades vitais primárias, senão, ademais, a reprodução secundária da vida, a construção de uma dignidade humana não submetida a processos depredadores do sistema imposto pelos processos de privatização e de acumulação sem restrições de capital. (HERRERA FLORES, 2007: 30-58, 76).

<sup>243</sup> Idem, *ibidem*.

Para tanto, assevera HERRERA FLORES<sup>244</sup> que quatro atitudes teóricas são necessárias: uma perspectiva nova, segundo a qual os Direitos Humanos devem se converter em parâmetro informador da construção de um novo conceito de justiça e de equidade, tendo em conta a realidade da exclusão de quase 80% da humanidade dos benefícios da globalização; uma perspectiva integradora, a estabelecer um elemento ético e político universal consistente na luta pela dignidade, na qual podem e devem reclamar-se como beneficiárias todas as pessoas e todos os grupos que habitam nosso mundo, tendo-se o cuidado de não adotar uma visão unilateral de gerações de direitos que pressuponha a superação, na fase atual, das fases anteriores (direitos de primeira geração: individuais; direitos de segunda geração: direitos sociais; direitos de terceira geração: direitos ambientais; direitos de quarta geração: direitos culturais); uma visão crítica, de que o processo de respeito e consolidação de Direitos Humanos pressupõe políticas de desenvolvimento integral, comunitário, local e controlável pelos próprios afetados, e não somente a exigência de cumprimento destes direitos; práticas sociais emancipadoras, ou seja, concebendo-se os DDHH como práticas sociais concretas que permitam combater a homogeneização, invisibilização, centralização e hierarquização das práticas institucionais tradicionais. Por fim, ressalta que somente deste modo poderemos construir uma nova cultura de Direitos Humanos que tenda a uma tripla abertura e não ao fechamento e/ou bloqueio da ação social.

Logo, por diversas perspectivas e argumentos é possível construir algo diferente que possibilite a universalização fática e não meramente retórica, efetividade e concretização dos direitos humanos, constituindo a teoria crítica uma plataforma apta para isto, questionando e construindo.

É possível, pois, extrair alguns pontos comuns de uma visão crítica dos Direitos Humanos:

- Necessidade de visibilização e concretização dos DDHH;
- Reforço das garantias jurídicas formalizadas em prol do fortalecimento de grupos mais desfavorecidos para acesso efetivo aos bens protegidos pelo direito;
- Abandono da visão jusnaturalista ou juspositivista em prol de uma visão política direcionada à implementação e observância obrigatória da totalidade dos DDHH para sua efetividade e concretude;
- Abandono das constrictões de entendimento tradicionais que impedem o avanço na efetivação dos DDHH;
- Respeito à diversidade humana;
- Reconhecimento dos DDHH como processo histórico de lutas sociais;
- Visão holística da sociedade (observância da totalidade social) com a ótica das pessoas excluídas do sistema;

---

<sup>244</sup> Idem, *ibidem*.



- Repúdio de qualquer forma de discriminação, dominação e de relações hegemônicas;
- Empoderamento das pessoas como sujeitos de Direitos Humanos;
- Reconstrução do espaço público no mundo globalizado visando à dignidade da pessoa humana;
- Desenvolvimento solidário, em equilíbrio com o meio ambiente e com os Direitos Humanos;
- A própria visão crítica como processo em construção, fruto do pensamento humano e, assim, conflitivo e mutável.<sup>245</sup>

A importância de tratar Direitos Humanos desde uma teoria crítica se embasa na necessidade de uma ferramenta apta a superar modelos de estatalidades conformados por políticas internacionais imperialistas e neocolonialistas que esmagam qualquer possibilidade de implementação efetiva de DDHH no mundo atual. Para alcançar visibilidade dos processos de lutas pela afirmação dos Direitos Humanos, e possibilitar propostas doutrinárias superadoras, que alcancem sua efetividade, em busca incessante de justiça social, é necessário tratar o tema com a consciência histórica e crítica da realidade.

---

<sup>245</sup> Como diz MAFFESOLI (2009: 114-115), é preciso passar pelo crivo da inteligência todas as palavras da modernidade (individualismo, racionalismo, universalismo, democratismo, republicanismo, contratualismo, progressismo, desenvolvimentismo etc.), sob pena de atolar-se em dogmatismo esclerosado, aceitando a ideia de que nada é tabu.



## CAPÍTULO II

### ENFOQUE DE DIREITOS HUMANOS E HERMENÊUTICA JURÍDICA

Estabelecido o viés crítico necessário para o desenvolvimento do Enfoque de Direitos Humanos, já que o EDH justamente se origina da visão crítica, passa-se, num primeiro momento, a discorrer sobre sua aplicação às políticas públicas (campo no qual primeiro se desenvolveu a teoria) e, depois, à hermenêutica jurídica, e o que acresce para a necessária emancipação e revitalização do Direito como um todo. O emprego da ferramenta na interpretação e aplicação ao Direito do Trabalho e sua importância teórico-prática para a mudança preconizada nesta investigação será tratada no capítulo final, abordando-se, antes, problemas específicos enfrentados no âmbito trabalhista como conhecimento necessário e prévio.

Com efeito, num mundo globalizado em eterna crise, a busca de mecanismos e instrumentos de afirmação dos Direitos Humanos em meio ao caos, como uma tábua de salvação diante do naufrágio contínuo da democracia e dos governos<sup>246</sup>, sempre ameaçados ou tomados pelo grande capital, é indispensável para obter uma resposta capaz de centralizar a pessoa nos objetivos da economia planetária, de modo a entregar os direitos sociais a todas e todos, assegurando um nível de vida digno à população planetária, adequando o consumo a níveis equilibrados de sustentabilidade, em respeito do meio ambiente e dos povos como um todo, na busca de uma interação de respeito à diversidade cultural planetária, inclusiva e equalizadora.

Não se trata, pois, de tarefa fácil, porém, entende-se que o Enfoque de Direitos Humanos é um instrumento apto à sua consecução, além de revitalizar o Direito, de forma genérica, vinculando-o de forma efetiva à dignidade da pessoa humana.

#### II.1 Acepção do Enfoque de Direitos Humanos

Segundo JIMÉNEZ BENÍTEZ<sup>247</sup>, o Enfoque de Direitos Humanos pode ser entendido como uma nova perspectiva para conceber e desenhar políticas pú-

---

<sup>246</sup> Ao ponto de BOBBIO (2016: 43-4) referir os Direitos Humanos como limitadores dos poderes nos Estados de direito:

Enfim, Estado de direito, no sentido total da palavra, é aquele em que cada poder é limitado não só por leis, mas pelos direitos do homem, reconhecidos pelas constituições liberais, diante das quais as maiorias, mesmo legitimadas pelo consenso dos eleitores, devem se inclinar respeitosamente. Devem fazê-lo porque são universalmente interpretados como direitos, cuja existência precede a instituição do governo, e nenhum governo, mesmo aquele que tem o consenso da maioria dos cidadãos, pode violá-los impunemente.

<sup>247</sup> JIMÉNEZ BENÍTEZ (2007: 34-35).

blicas direcionadas para o desenvolvimento humano, num processo de acerto entre Estado e sociedade civil. O autor refere que o EDH obteve uma síntese conceitual definitiva na Declaração de Viena de 1993, na qual se estabeleceu que os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados, sendo que seu tratamento deve ser em pé de igualdade e que todos têm o mesmo peso, devendo-se ter em conta as particularidades nacionais e regionais, e, também, que é dever do Estado promover e proteger todos os DDHH e as liberdades fundamentais. Ainda, assevera que o EDH considera as gerações de Direitos Humanos como um processo histórico de ampliação do conteúdo jurídico da dignidade humana, imbricados e interdependentes entre si como forma de sua concreção para garantia da pessoa humana como bem jurídico protegido.

Por este viés, o Enfoque de Direitos Humanos é necessário para que o exercício da cidadania esteja conectado ao conceito de dignidade da pessoa humana. Com a ênfase nos DDHH, se torna imperativo buscar a inclusão social, a não discriminação, a concretização efetiva de todos os princípios internacionais e constitucionais. Um novo paradigma de interpretação, a partir dos DDHH, aporta a análise crítica da aplicação do Direito e da qualidade das políticas públicas em marcha. A dignidade da pessoa humana vinculada ao exercício da cidadania reclama o cumprimento efetivo de obrigações estatais básicas relacionadas à saúde pública, alimentação, habitação, educação etc. Ademais, o Estado não pode reprimir as pessoas por exigir o respeito aos Direitos Humanos, pelo contrário, deve empodera-las e torna-las partícipes ativos e efetivos das políticas públicas.

Segundo GIMÉNEZ MERCADO–VALENTE ADARME (2010):

*En la actualidad, el enfoque de derechos constituye un marco conceptual que incluye dos aspectos: el normativo y el operacional. El primero se refiere a que está orientado por los instrumentos jurídicos internacionales que establecen mecanismos de exigibilidad ciudadana. El segundo tiene su base en el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos (OACDH, 2006). Las obligaciones generales derivadas de los derechos concretos contempla los deberes de:*

- 1. respetar: «exige que el Estado no interfiera directa o indirectamente en el disfrute del derecho»;*
- 2. proteger: «requiere que el Estado adopte medidas para evitar que terceros interfieran en el ejercicio pleno del derecho»; y*
- 3. cumplir: «exige que el Estado adopte medidas legislativas, administrativas, [presupuestarias, judiciales] y de otra índole adecuadas para [facilitar, proporcionar y promover] la plena realización del derecho» (OACDH, 2004:35).” (GIMÉNEZ MERCADO–VALENTE ADARME, 2010: 59)*

A essas obrigações de respeitar os DDHH, VÁZQUEZ–DELAPLACE<sup>248</sup> acrescentam ainda os desdobramentos correspondentes a que nenhum órgão estatal atue ou se omita violando DDHH. Em relação à obrigação de cumprir, refe-

---

<sup>248</sup> VÁZQUEZ–DELAPLACE (2011: 42-43).

rem-na como “garantir”, acrescentando a subdivisão obrigacional do Estado em prevenir, sancionar, investigar e reparar as violações a DDHH.

A partir do Enfoque nos Direitos Humanos, se propõe que o Estado garanta o desenvolvimento humano com políticas públicas adequadas que permitam, ao mesmo tempo, a participação popular ativa no desenvolvimento social e controle da atividade pública e, também, apropriar-se devidamente de seus direitos. Com a incorporação dos Direitos Humanos na legislação nacional se viabiliza a correção de práticas discriminatórias e de desigualdades persistentes na sociedade, o que faz que, ao fim e ao cabo, ocorra a desejada promoção e proteção dos DDHH, desde uma interpretação crítica. Na prática, identificar as pessoas titulares de direitos e aquilo a que têm direito e dar-lhes as condições de seu efetivo exercício, assim como fazer responsáveis quem têm a obrigação de atuar são formas de operacionalizar este enfoque.

ABRAMOVICH<sup>249</sup> ensina que, pelo Enfoque de Direitos Humanos, se considera principalmente o Direito Internacional dos Direitos Humanos como um marco conceitual apto a oferecer um sistema coerente de princípios e regras no campo do desenvolvimento. Através do EDH, os setores excluídos e as pessoas são consideradas sujeitos de direitos que obrigam ao Estado, mudando a lógica de elaboração de políticas, para que o ponto de partida não seja a existência de pessoas com necessidades que devem ser assistidas, mas titulares de direito a demandar determinadas prestações e condutas. Segundo afirma, as ações neste sentido não são meros cumprimentos de mandatos morais ou políticos, mas sim a via eleita como necessária para cumprir obrigações jurídicas, imperativas e exigíveis impostas pelos Tratados de Direitos Humanos que requerem mecanismos de exigibilidade e cumprimento.

Portanto, ABRAMOVICH<sup>250</sup> assevera que, a partir da consideração das pessoas como sujeitos de direito, ou seja, sujeitos com direito a demandar prestações e condutas do Estado, o Enfoque de Direitos Humanos, como marco conceitual na aplicação e coerência de princípios e regras voltados para a pessoa, oferece um sistema efetivo e envolvente não só dos governos como também dos cidadãos cuja participação (inclusão) é estimulada como forma de melhor elaborar as pautas e as políticas públicas. Assim, sua importância é fundamental para o desenvolvimento adequado da sociedade e, por isso, compreende, além da formulação de políticas, sua concretização e posterior prestação de contas pelos responsáveis, seja a nível local, seja internacional, fazendo com que as ações que se empreendam neste campo sejam mais efetivas e legítimas.

Conforme GUENDEL GONZÁLEZ<sup>251</sup>, o Enfoque de Direitos Humanos é uma concepção da vida social que procura reconciliar a moral, a política e o Direito em um horizonte ético e ao mesmo tempo operacional, avançando para uma visão de política pública, superando a separação destas três ordens

---

<sup>249</sup> ABRAMOVICH (2006: 36).

<sup>250</sup> Idem, *ibidem*.

<sup>251</sup> GUENDEL GONZÁLEZ (2002: 108-110).

pelas concepções positivistas. Uma das principais características é a ênfase nas pessoas e suas relações e o aporte principal consiste no restabelecimento da unidade entre sujeito social e sujeito de direito, rompida pelas concepções realistas, positivistas e institucionalistas, reconhecendo que as relações de poder não estão só no Estado, mas em toda a estrutura social. Prossegue esclarecendo que o restabelecimento desta unidade permite alcances importantes no sentido de entender que o Direito constitui um espaço de luta social e que os sujeitos sociais são sujeitos que ao mesmo tempo podem vigiar, exigir e velar pelo cumprimento dos direitos; que o Direito não somente constitui uma norma legal mas, também e principalmente, uma norma social a ser amplamente observada; assumir que o sujeito social constitui um sujeito autorreflexivo que deve submeter à crítica permanente a relação com o outro e sua participação nos espaços sociais; reconhecer que a categoria sujeito é resultado de um processo permanente de construção da identidade social e pessoal. Com a dimensão do Enfoque de Direitos Humanos se adquire uma nova perspectiva de igualdade: pelo enfoque estrutural (acesso à riqueza social); enfoque das oportunidades (igualdade de condições para acesso ao mercado); enfoque jurídico ou formal (igualdade perante a lei); enfoque social ou cultural (reconhecimento do sujeito social como pessoa ativa com capacidade para autorrefletir e incidir em todos os âmbitos sociais).

ABRAMOVICH<sup>252</sup> menciona que os mecanismos de prestação de contas e de responsabilidade contribuem a reforçar os espaços de fiscalização e controle das políticas, dos serviços públicos e das ações de governo, assim como dos demais atores sociais envolvidos nas estratégias de desenvolvimento. Ou seja, mecanismos de exigibilidade dos direitos, com procedimentos administrativos de revisão de decisões, de fiscalização e controle cidadão das políticas públicas, além de controle político nos parlamentos, instituições especializadas como defensorias públicas, serviços de proteção de consumidores etc.

CUNILL GRAU<sup>253</sup>, abordando a exigibilidade como força real da doutrina do Enfoque dos Direitos Humanos, explica que assegurar o exercício de um direito não basta só pela instituição e provisão dos respectivos serviços, mas também pela existência de obrigações reais sobre os responsáveis de sua concretude perante a cidadania.

Com muita propriedade, MASCARO<sup>254</sup> aponta que da subjetividade jurídica geral brotou o que se chama política e juridicamente por Direitos Humanos: fazer dos indivíduos portadores de direitos, destacando que “neste solo do mínimo da forma jurídica parece ter residido também, confortável ou desgraçadamente, o horizonte do máximo do que se espera e do que se luta por tal”. Obviamente, é necessário ir além, e a superação compreende que o Direito não pode servir ao capital, ao poder econômico, nem conformar uma realidade mi-

---

<sup>252</sup> ABRAMOVICH, *op. cit.*, p. 63.

<sup>253</sup> CUNILL GRAU (2010: 47-8).

<sup>254</sup> MASCARO (2017: 120).

nimalista de direitos das pessoas de forma submissa a uma ordem ou institucionalidade meramente tolerante ou permissiva de Direitos Humanos, e, ainda, de forma progressiva, ou seja, “quando e se possa”. Antes, a construção jurídica da humanidade deve contemplar o ponto de partida desde os DDHH, como pilares que dão sustentação a todo o restante. É neste âmbito que pode incidir e operar a doutrina do EDH.

O Enfoque de Direitos Humanos constitui, pois, resultado de uma visão libertária e crítica dos DDHH que busca resgatar o conteúdo formal, jurídico e material de sua tutela para a pessoa humana. Um de seus importantes méritos é o deslocamento do discurso econômico neoliberal para o discurso humanista no papel do Estado e dos organismos internacionais, além de ser um importante instrumento de combate aos malefícios da globalização quando preconiza a efetivação fática e não retórica dos Direitos Humanos.

## II.2 Acepção de políticas públicas

Pode-se entender que a política pública é desde uma simples ação de governo até um instrumento de resposta a necessidades e demandas sociais. Contudo, aprecia-se a definição de JIMÉNEZ BENÍTEZ<sup>255</sup>, no sentido de que as políticas públicas são programas de ação governamental que buscam a concretização dos direitos estabelecidos nos princípios constitucionais, de conformidade com uma perspectiva de Direitos Humanos, e que, assim, como normas jurídicas, se legitimam mediante diretrizes. O conceito em questão incorpora o Enfoque de Direitos Humanos na gênese do termo, ligando o vocábulo intimamente aos DDHH, agregando-lhes mais efetividade.

O tema das políticas públicas voltadas aos Direitos Humanos, na América Latina, ainda é sinônimo de relativa novidade, pois, em geral, os governos da região não se preocupam em desenvolver um desenho de políticas de Estado com este enfoque. Mas é absolutamente necessário impulsionar a inclusão do tema dos Direitos Humanos em todos os campos, o que se pode fazer seja pela análise das políticas públicas já existentes a partir da ótica dos DDHH, produzindo diagnósticos e divulgando-os, ou por sua inclusão em projetos de lei, tornando obrigatória a sua observância pelos governos.

De outra parte, a promoção da cultura dos Direitos Humanos depende de sensibilização social e, também, de promoção de estudos na academia, com vistas a que sua inclusão futura nas agendas políticas se converta em uma realidade.

Mas de que políticas públicas se fala? De todas as necessárias para o desenvolvimento humano, em especial as de educação, porque através dela se pode contemplar, desde logo, a cultura dos Direitos Humanos, a convivência harmônica e o reconhecimento da dignidade da pessoa humana como seu fundamento.

---

<sup>255</sup> JIMÉNEZ BENÍTEZ (2007: 42).

JIMÉNEZ BENÍTEZ<sup>256</sup> escreve que, desde o Enfoque De Direitos Humanos, pode-se entender as políticas públicas como instrumentos ou veículos para a concretização dos DDHH e para a realização do direito útil ou regulativo ou como programas de ação governamental que buscam a concretização dos direitos estabelecidos nos princípios constitucionais, segundo uma perspectiva de Direitos Humanos e que, desde o ponto de vista da norma jurídica, se legitimam mediante diretrizes. Já o direito útil e regulativo, segundo sustenta, pode ser visto como um meio para a realização de fins, enriquecido por critérios de índole material (econômicos, políticos, axiológicos, étnicos, técnicos, etc.)<sup>257</sup>.

Pois bem, com a aplicação do EDH, de plano se adentra na acepção de políticas públicas diretamente vinculadas à concretude de Direitos Humanos, estabelecidas por diretrizes que pautam a ação de governo, servindo o direito, pois, como instrumento de sua efetivação. É, assim, um processo cíclico virtuoso que parte dos DDHH (gênese) e para eles se dirige (fim).

Por outro lado, a implantação de uma política pública tem numerosas variáveis, desde a avaliação da etapa em que se encontra o lugar em que será aplicada, em termos de desenvolvimento de Direitos Humanos, ou seja, os tratados internacionais ratificados pelo país, a legislação nacional, o diagnóstico da situação atual, a realidade, com o objetivo a alcançar. Além disso, a aplicação prática envolve questões fáticas, de conveniência e oportunidade, avaliação de custos etc., por parte dos seus realizadores. Com isto, a aferição de uma política pública e sua aptidão para o Enfoque de Direitos Humanos implica verificar sua estabilidade, adaptabilidade, coordenação e coerência temporal e geográfica, qualidade de implementação e efetiva aplicação, além da orientação ao interesse público e a sua eficiência. A política pública é um processo de construção no qual se determina seu alcance e limites, relevância e impacto social.

Contudo, especialmente em tempos de globalização e neoliberalismo hegemônico, é importante buscar a recriação do espaço público para alcançar as decisões e diretrizes corretas. Como bem explica MARQUES NETO<sup>258</sup>, no neoliberalismo a noção de espaço público se contrai e se dilui, reduzida ao espaço de garantia das relações negociais, enquanto a cidadania perde seu sentido político (de participação ativa na gestão da sociedade política) e jurídico (a cidadania enquanto direito a ter direitos), para identificar-se ao acesso ao consumo. Assevera, com razão, que, no mundo liberal, é considerado cidadão ou cidadã quem pode consumir. Assim se vão perdendo referências relativos ao âmbito público e à cidadania.

Neste norte, BAUMAN, no capítulo “Em Busca de Espaço Público”<sup>259</sup>, da obra *Em busca da política*, recorda que, nos Estados Unidos, um de cada três empregados ocupou o mesmo posto na mesma empresa em menos de um ano e

---

<sup>256</sup> Idem, *ibidem*, pp. 42,44.

<sup>257</sup> Idem, *ibidem*, p. 33.

<sup>258</sup> MARQUES NETO (2010: 116).

<sup>259</sup> BAUMAN (2011: 27-28). Obs.: traduzido.



dois de cada três estiveram no mesmo posto menos de cinco anos, enquanto na Grã-Bretanha, há vinte anos, 80% dos empregos eram do tipo 40/40 (quarenta horas por semana durante quarenta anos de vida), com a proteção de rede de contenção sindical, jubilatória e de direitos compensatórios, ao passo que hoje apenas 30% dos empregos permanece assim e a porcentagem decresce de forma veloz. Afirma que há uma alta rotatividade nos postos de trabalho e que isso vem acontecendo em virtude da transferência do controle de fatores econômicos cruciais das mãos das instituições representativas dos governos às mãos do livre jogo de forças de mercado, provocando a redução da quantidade global de emprego. Prossegue dizendo que o Estado soberano está em rápida dissolução, pois, enquanto o capital flui livremente, a política segue sendo irremediavelmente local e a velocidade do movimento faz do poder real algo extraterritorial. Como as instituições políticas existentes cada vez mais são incapazes de regular a velocidade do movimento de capitais, o poder está cada vez mais distanciado da política, o que causa a apatia política crescente, o progressivo desinteresse do eleitorado no que seja político, e o desvanecimento das expectativas de que a salvação venha de edifícios governamentais. Aprofundando o tema, BAUMAN<sup>260</sup> diagnostica o quadro atual com precisão:

*La economía política de la incertidumbre es el conjunto de 'reglas para acabar con las reglas', impuestas por poderes financieros, capitalistas y comerciales extraterritoriales a las autoridades políticas locales. Sus principios encontraron plena expresión en el Acuerdo Multilateral de Inversiones – en las limitaciones impuestas a la libertad de los gobiernos de acotar la libertad de movimiento del capital, así como en la manera clandestina en que fue negociado y la reserva en que lo mantuvieron por mutuo acuerdo los poderes políticos y económicos -, hasta que ese acuerdo fue descubierto y sacado a la luz por un grupo de investigadores periodísticos. Los principios son simples, ya que casi todos son negativos; no están destinados a establecer un nuevo orden, solo a desarticular los órdenes existentes y a impedir que los gobiernos estatales del momento puedan reemplazar por otras las leyes anuladas. La economía política de la incertidumbre se reduce esencialmente a la prohibición de reglas y regulaciones – políticamente establecidas y garantizadas – y al desarme de las instituciones y asociaciones defensivas que impedían que el capital y las finanzas fueran verdaderamente sans frontières. El resultado de ambas medidas es un estado de permanente y ubicua incertidumbre, destinada a reemplazar la autoridad coercitiva de la ley como fórmula de legitimación y lograr así obediencia (o más bien, falta de resistencia) a los nuevos poderes supraestatales y globales.*

*La política económica de la incertidumbre es buena para los negocios. Torna innecesarios los costosos e incómodos instrumentos de disciplina. A los que no reemplaza con el autocontrol típico de los entrenados, sino más bien con la incapacidad de actuar de manera concertada de los individuos privatizados y endémicamente inseguros; incapacidad que se profundiza aun más porque esos individuos no creen que exista alguna acción efectiva ni que los problemas personales puedan*

---

<sup>260</sup> BAUMAN (2011: 182-183).

*convertirse en temas colectivos y, menos aun, en el proyecto común de un orden alternativo.*

O quadro, portanto, é de deterioração das políticas públicas, especialmente as de proteção social, por parte do poder econômico, e de descrédito da política por parte da população, ao padecer permanentemente num estado de incerteza ou insegurança que normaliza essa condição e, ao mesmo tempo, a incapacita para a reação. Destarte, importa saber a valoração que se imprime aos conceitos universais que ligam a todos e todas enquanto seres humanos e como são aplicados, ou seja, não basta descobrir valores universais, nem tampouco construir uma tese universal em torno do progresso da civilização e da dignidade humana, se na prática não existirem mecanismos capazes de garantir a aplicação efetiva desses conceitos e de forma imparcial, no contexto de uma sociedade globalizada e de poderes desterritorializados.

Por isso, a importância da doutrina do Enfoque de Direitos Humanos como instrumento para unir a teoria à prática e revitalizar o espaço público, as políticas públicas e as instituições que as executam.

### **II.3 Aplicação do Enfoque de Direitos Humanos às Políticas públicas: caminho para a evolução da cidadania**

BOLZAN DE MORAIS<sup>261</sup> escreve que a democracia é afetada pela complexidade das relações contemporâneas, num processo conjunto de desterritorialização e reterritorialização, não mais restrito aos limites geográficos do Estado-Nação, mas incluindo o espaço internacional, comunitário, além das experiências locais (em referência aos projetos de democracia participativa), o que faz com que a noção de cidadania seja revisitada em seus conteúdos e em seus espaços de expressão. Sustenta que a noção tradicional de cidadania, identificada com elenco de liberdades civis e políticas e de instituições e comportamentos políticos altamente padronizados, que possibilitam a mera participação formal dos membros de uma comunidade política nacional, é incompatível com a desterritorialização provocada pela globalização, sendo necessário repensar o seu conteúdo e extensão. Em relação ao conteúdo, fala na ultrapassagem do viés apenas político, ingressando em diversos outros setores como o social, o gênero, o trabalho, a escola, o consumo, os afetos, as relações jurídicas e jurisdicionais, além de uma cidadania atrelada às gerações de Direitos Humanos. E no tocante à extensão, assevera que é preciso saber conjugar e materializar as práticas e conteúdos no tradicional espaço nacional da modernidade e do Estado Nação, com o espaço regional/comunitário, além de expandi-las para o espaço supranacional, no âmbito das relações privadas como no das relações interestatais, bem como compartilhar do esforço de forjar um espaço local/participativo, no qual haja uma transformação radical nas fórmulas das práticas cidadãs e democráticas aproximando e autonomizando autor e sujeito das decisões.

---

<sup>261</sup> BOLZAN DE MORAIS (2010: 142-143).

Na mesma linha, com sua costumeira firmeza, escreve AGAMBEN<sup>262</sup>:

4. Enquanto o declínio do Estado deixa sobreviver em todos os lugares seu invólucro vazio como pura estrutura de soberania e de domínio, a sociedade em seu conjunto é, por sua vez, entregue irrevogavelmente à forma da sociedade de consumo e de produção orientada ao único fim do bem-estar. Os teóricos da soberania política, como Schmitt, vêm nisso o sinal mais seguro do fim da política. E, na verdade, as massas planetárias dos consumidores (quando não recaem simplesmente nos velhos ideais étnicos e religiosos) não deixam entrever nenhuma figura nova da *polis*.

Como visto, o mundo atual está permeável aos efeitos nefastos da globalização, a partir de um discurso internacional do capitalismo contemporâneo favorável à liberdade de mercado, livre circulação de capitais e restritivo da circulação de pessoas (princípio da segurança), o que favorece um neocolonialismo gerador de novas formas de exploração, marginalização, exclusão social e miséria humana, e que compromete a democracia, a política e a prestação de serviços estatais. É neste contexto que AGAMBEN<sup>263</sup>, ao comentar a biopolítica nazista, comparando-a com o capitalismo, menciona a necessidade de uma nova política, pois, conforme defende, o projeto democrático-capitalista de eliminar as classes pobres através do desenvolvimento, não só reproduz o povo dos excluídos como também transforma em vida nua todas as populações do terceiro mundo, tornando imperativa uma política superadora e que possa terminar com a guerra civil que divide os povos e as cidades da terra.

Mais incisivo, MARQUES NETO<sup>264</sup> assevera que o neoliberalismo, no plano político, ataca princípios e conceitos fundamentais, de democracia, Estado, Nação, soberania e cidadania, os quais, fundados no princípio ético da dignidade da pessoa humana, vão se transfigurando e se dissolvendo, e a soberania desloca-se para o domínio do mercado.

Pois bem. A noção tradicional de cidadania remete aos direitos de participação política da pessoa, de votar e ser votada, de se reunir, de se associar, como membros de uma comunidade, encaminhando a defesa de pretensões e

---

<sup>262</sup> AGAMBEN (2015: 104-105).

<sup>263</sup> AGAMBEN (2002: 186). O autor faz uma analogia:

Parafrazeando o postulado freudiano sobre a relação entre Es e Ich, se poderia dizer que a biopolítica moderna é regida pelo princípio segundo o qual 'onde existe vida nua, um Povo deverá existir'; sob condição, porém, de acrescentar imediatamente que este princípio vale também na formulação inversa, que reza 'onde existe um Povo, lá existirá vida nua'. A fratura que se acreditava ter preenchido eliminando o povo (os hebreus, que são o seu símbolo) se reproduz assim novamente, transformando o inteiro povo alemão em vida sacra votada à morte e em corpo biológico que deve ser infinitamente purificado (eliminando doentes mentais e portadores de doenças hereditárias). (AGAMBEN, 2002: 186)

<sup>264</sup> MARQUES NETO (2010: 116).

analisando e votando as pretensões dos outros e outras no espaço público. Mas a concepção do público como uma área de interesse de todas as pessoas implica a demanda e participação de diversos atores, organizações não governamentais e não só do Estado, para a criação e conservação de verdadeiros espaços públicos de intercâmbios culturais nos quais as pessoas e os grupos decidam e promovam processos de mudança e desenvolvimento, celebrando a diversidade cultural e promovendo a igualdade, desde uma perspectiva sempre participativa e ativa para a institucionalidade verdadeiramente democrática dos Direitos Humanos. Com esta diretriz é possível resgatar e fortalecer as capacidades das pessoas nas dimensões política, social, cultural, econômica etc., e obter seu efetivo empoderamento, ou seja, com a aplicação do Enfoque de Direitos Humanos, para que se sintam como sujeitos de direitos. A partir disso, a conscientização social que se forma permite, cada vez mais, exigir do Estado e de seus agentes a adoção do EDH, superando a política do capital.

A verdade é que a cidadania política é incompleta se não se tem acesso aos bens e serviços necessários ao mercado em condições idênticas que proporcionem qualidade de vida, ensina GÜENDEL GONZÁLEZ<sup>265</sup>. Sustenta que o cumprimento de direitos se torna uma responsabilidade de todas as pessoas e organizações sociais para a construção de uma democracia participativa e global<sup>266</sup>, já que o Enfoque de Direitos Humanos obriga a falar de sistemas políticos, pois em cada unidade social (família, comunidade, escola), segue viva uma trama de poder expressada em um conjunto de regras que devem ser vigiadas para garantir os direitos.

Portanto, o Enfoque de Direitos Humanos aplicável às políticas públicas, como fruto da teoria crítica dos DDHH, mais que um conceito, é um parâmetro jusfilosófico apto a ajudar a superar esses problemas derivados da lógica de mercantilização do espaço público, resgatando a cidadania para as pessoas dentro desse processo de transnacionalização e de superação de fronteiras que promove a globalização de forma seletiva, ao entregar as benesses ao capital e as misérias às pessoas.

CECCHINI-RICO (2015), em referência à SEPÚLVEDA<sup>267</sup>, propõem os seguintes elementos a considerar como essenciais para o EDH nas políticas públicas e programas de proteção social: igualdade e não discriminação; integridade; institucionalidade; participação; transparência e acesso à informação; prestação de contas.

Com efeito, o Enfoque De Direitos Humanos é uma via de mão dupla: de um lado, interpela o Estado e os políticos pela incorporação desta perspectiva,

---

<sup>265</sup> GÜENDEL GONZÁLEZ (2002: 110-111).

<sup>266</sup> Importante a observação de MARQUES NETO (2010: 114), no sentido de que, a democracia é um espaço político no qual é possível a convivência dialética das diferenças, onde há lugar para a alteridade, o que não se confunde com desigualdades, que constituem diferenças a serviço da dominação, da opressão.

<sup>267</sup> *Apud* CECCHINI-RICO, 2015: 334.

especialmente pelo cumprimento dos compromissos de Direitos Humanos assumidos no plano internacional; por outro, demanda, também, dos atores sociais e das pessoas, a interação com o Estado e os governos e sua efetiva participação na vida pública, com o desiderato de construção de uma democracia revolucionária participativa e ativa. Ademais, por esta via as pessoas se constituem como sujeitos de direitos e deles se empoderam, exatamente um dos objetivos do Enfoque. São processos que interatuam e se complementam entre si. Sem a participação efetiva da sociedade o EDH não se concretiza. É um processo em construção de conscientização e de lutas de todas e de todos.

Destarte, eleger as ações corretas, partindo dos Direitos Humanos como referentes (gênese), tomando as perspectivas de concretude e efetividade dos DDHH nela veiculados (fim), esse é o objetivo do Enfoque, sempre com a garantia da plena participação da sociedade civil na sua elaboração e fiscalização (incluindo a devida prestação de contas<sup>268</sup> para demonstração da implementação concreta dos Direitos Humanos) veiculados na política pública. Por esta via, não somente se concretiza o resgate da democracia, vencendo-se o modelo formal, representativo e ocultador da consciência de classe e das lutas de classe, como também se revoluciona a cidadania para uma forma participativa e indutora de empoderamento humano, cumulando nas pessoas a condição de cidadania e de sujeito de direitos.

Assim concluem CECCHINI-RICO (2015):

*En conclusión, destacamos que el enfoque de derechos resulta ser un imperativo ético a la vez que un mecanismo de cumplimiento de las obligaciones y los compromisos asumidos por los Estados, y un instrumento para avanzar hacia una protección social inclusiva y universal. El fin último es que las políticas y los programas de protección social se constituyan en un factor crucial para romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad, con autonomía y empoderamiento de los titulares de derechos.* (CECCHINI-RICO, 2015: 359)

O EDH se constitui, portanto, de instrumento revitalizador, por excelência, da cidadania, em seu viés político e jurídico, superando ataques neoliberais às políticas públicas, especialmente as de proteção social, para reafirmar e redimensionar a democracia com maior participação das pessoas na gestão pública.

#### **II.4 Aplicação do Enfoque de Direitos Humanos à Hermenêutica Jurídica: Instrumento para a Dignidade**

Abordando as consequências do impacto do modelo neoliberal sobre o Direito, MARQUES NETO<sup>269</sup> explana que há uma tendência ao esvaziamento dos direitos que gradativamente se incorporaram ao patrimônio jurídico das pes-

---

<sup>268</sup> SEN-KLIKSBER (2009: 39) ponderam que a democracia confere poder político aos setores vulneráveis, fazendo com que os dirigentes devam prestar contas e assumir a responsabilidade por seus erros.

<sup>269</sup> MARQUES NETO (2010: 110-111, 119-120).

soas, tanto sob a perspectiva individual quanto coletiva, em direção contrária à acumulação de direitos e ampliação dos espaços de reivindicação e de exercício da cidadania. Ainda, que há uma crescente internacionalização das normas jurídicas de caráter negocial, obrigando os Estados à adesão e incorporação no ordenamento jurídico interno. Uma drástica redução de direitos sociais, trabalhadores, previdenciários, correspondentes aos direitos coletivos de igualdade. Diz mais: que se produz a substituição das garantias de direito pelas garantias de mercado e que os princípios, categorias, institutos, conceitos fundamentais e a própria estrutura da lógica jurídica vão sendo gradativamente redimensionados e substituídos por princípios utilitários de conteúdo econômico. Na mesma linha coincide FERRAJOLI<sup>270</sup>, comentando que o Estado de Direito, como ordenamento orientado funcionalmente à tutela dos direitos fundamentais das pessoas, entrou em crise a partir da consolidação do estado liberal e com a conversão conservadora da cultura jurídica liberal.

Na esteira desta conclusão, FUMAGALLI<sup>271</sup> afirma que o capitalismo biocognitivo se estrutura como regime de acumulação na base de três pilares: a função dos mercados financeiros como motor da acumulação (processo de financeirização como controle biopolítico da vida); função da geração (aprendizagem) e da difusão (rede) do conhecimento como fonte principal de valorização capitalista em escala global; e a decomposição da força de trabalho em escala internacional. Neste mesmo compasso, POMARES CINTAS<sup>272</sup> descreve precisamente o sistema contemporâneo, como conformado no paradigma da rentabilidade econômica, da instrumentalização mercantilista das pessoas como força produtiva, mais que como sujeitos de direitos que já vão perdendo conteúdo em prol da rentabilidade econômica do sistema e da sustentabilidade do mercado.

---

<sup>270</sup> FERRAJOLI (1995: 219).

<sup>271</sup> FUMAGALLI (2009: 100).

<sup>272</sup> POMARES CINTAS (2015: 633-4). A autora, ao abordar a reforma do Código Penal da Espanha operada em 2015 em relação aos delitos contra os direitos dos trabalhadores, anota:

*La política económica dictada desde organismos supranacionales, de patente déficit democrático, que cobran un protagonismo decisivo en la producción del derecho interno, ha revertido sobre los trabajadores las consecuencias de la crisis económica y financiera. La Unión Europea, que actuó con pasividad y despreocupación ante la desregulación de las operaciones financieras sobre la deuda privada, ahora toma las riendas afectando de lleno a las políticas sociales. Los derechos sociales están sufriendo una grave metamorfosis en aras de una ética que gira en torno exclusivamente a la competitividad económica, a la supremacía de los intereses del mercado, la competencia empresarial. Se impone una reducción drástica del techo social, de los costes laborales, incrementando el poder empresarial y su «Confianza» a la hora de mantener, o en su caso, generar empleo -precario- porque menores serán los costes de producción.*



As consequências são vistas a olho nu no plano mundial: aumento da desigualdade social (desemprego em alta, aumento da precariedade laboral, com subempregos), perda de conquistas democráticas e civilizatórias, perda de significado e conteúdo de Direitos Humanos e direitos fundamentais. Estas razões sustentam a falibilidade do sistema atual, que provoca um comprometimento perigoso das democracias, quando não há limites para o capital. DELEUZE<sup>273</sup> bem observa que o capitalista não extorsiona mais do que o Direito lhe permite, portanto, é possível frear os abusos do poder econômico e reconstituir o amálgama social-democrata desde o resgate e revitalização do Direito Humano. Vencer o problema exige mudar a forma de interpretar e aplicar o Direito.

Para esta finalidade, resulta apta a construção jurídica humana estruturada nos valores universais contidos nos Direitos Humanos, por seu caráter crítico-tutelar imanente aos processos históricos de luta pelos direitos que consolidaram reivindicações contra-hegemônicas ao poder, ao longo de séculos, prove-niente de pessoas vulneráveis, discriminadas, enfraquecidas ou de minorias<sup>274</sup>, inspiradas pela busca da liberdade, igualdade, solidariedade, vida digna, preservação do meio ambiente, alteridade, convívio intercultural planetário, união dos povos etc. Como demonstrado no decorrer desta investigação, estes valores universais, frutos de lutas, discussão global e democrática, estão incorporados nos principais documentos e tratados ratificados pela ampla maioria dos países,

---

<sup>273</sup> DELEUZE (2017: 263-265).

<sup>274</sup> Vale conferir o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, tutelando o direito das pessoas refugiadas e contextualizando seu processo de luta pelo direito a ter direitos:

A comunidade internacional, em 28-7-1951, imbuída do propósito de consolidar e de valorizar o processo de afirmação histórica dos direitos fundamentais da pessoa humana, celebrou, no âmbito do direito das gentes, um pacto de alta significação ético-jurídica, destinado a conferir proteção real e efetiva àqueles que, arbitrariamente perseguidos por razões de gênero, de orientação sexual e de ordem étnica, cultural, confessional ou ideológica, buscam, no Estado de refúgio, acesso ao amparo que lhes é negado, de modo abusivo e excludente, em seu Estado de origem. Na verdade, a celebração da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados – a que o Brasil aderiu em 1952 – resultou da necessidade de reafirmar o princípio de que todas as pessoas, sem qualquer distinção, devem gozar dos direitos básicos reconhecidos na Carta das Nações Unidas e proclamados na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Esse estatuto internacional representou um notável esforço dos povos e das nações na busca solidária de soluções consensuais destinadas a superar antagonismos históricos e a neutralizar realidades opressivas que negavam, muitas vezes, ao refugiado – vítima de preconceitos, da discriminação, do arbítrio e da intolerância – o acesso a uma prerrogativa básica, consistente no reconhecimento, em seu favor, do direito a ter direitos. [Ext 783 QO-QO, rel. p/ o ac. min. Ellen Gracie, voto do min. Celso de Mello, j. 28-11-2001, P, DJ de 14-11-2003.]. (Fonte: sítio do STF, legislação anotada pelo STF, *A Constituição e o Supremo*. Recuperado de: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=17>

e estão presentes em quase todas as Constituições, portanto possuem idoneidade e vocação para a orientação superior do Direito.

Esta orientação, para alcançar sua finalidade, como instrumento de mudança social e mecanismo de empoderamento das pessoas frente aos abusos e violência sistêmica do poder econômico na atualidade, deve estar vinculada às práticas jurídicas – quando o *dictamen* normativo é concretizado, sendo esta a razão de seu acoplamento à hermenêutica jurídica, para o momento de interpretar e aplicar o Direito, tornar efetivos os Direitos Humanos através de um enfoque crítico e tutelar transdisciplinar humanista. E para o desempenho desta tarefa, se propõe duas bases: estruturar a lógica de raciocínio sobre DDHH desde uma visão crítica efetivamente humanista, contextualizada nos processos históricos de lutas sociais; e estruturar os fundamentos, elementos, características e formas de aplicação do EDH ao Direito em geral, e, em um segundo momento, de forma específica ao Direito do Trabalho.

WITKER<sup>275</sup> menciona a necessidade de superar as epistemologias e metodologias tradicionais para desenhar novas bases epistêmicas nas quais o pensamento complexo e os métodos holísticos ou de totalidade sejam coadjuvantes à abordagem transdisciplinar na investigação jurídica dos Direitos Humanos.

Sobre a tarefa da hermenêutica, GADAMER<sup>276</sup>, desde uma concepção filosófica, ensina que se trata de indagar que classe de compreensão, e para que classe de ciência serve esta compreensão “que é movida, por sua vez, pela própria mudança histórica”. Também, ensina que para adaptar adequadamente o sentido de uma lei deve-se conhecer também o seu conteúdo de sentido originário, pensando em termos histórico-jurídicos, ou seja, em contínua confrontação com a objetividade histórica para compreendê-la em seu valor posicional na história, reconduzindo essa compreensão para a adaptação ao presente jurídico. Além disso, como sustenta o autor, “o conhecimento do sentido de um texto jurídico e sua aplicação a um caso jurídico concreto não são atos separados, mas um processo unitário”.

Além disso, é importante ter presente, para o correto enfoque crítico superador da ideologia contida na aplicação do Direito, nesse sentido, os apontamentos de LUKÁCS<sup>277</sup>, sobre o distanciamento entre sujeito e objeto e a linguagem daí originada, carregada de ideologia, que reproduzirá este distanciamento (como no caso da separação da pessoa que trabalha do seu trabalho). LUKÁCS<sup>278</sup>

---

<sup>275</sup> WITKER (2018: 144). O autor afirma que “o Direito expressa relações sócio-jurídicas, instituições, interesses e valores que respondem a contextos sócio-históricos dos quais derivam lógicas construtoras de conceitos e teorias, que articulam discursos e narrativas”. (Idem, *ibidem*, p. 145).

<sup>276</sup> GADAMER (1999: 462-463, 484).

<sup>277</sup> LUKÁCS (2013: 93-94).

<sup>278</sup> Importante observação de LUKÁCS (2013: 355), ao tratar da ideologia:

Assim, certas relações de produção condicionam certas formas do direito, e sua conjunção é tão forte na imediatidade do ser social que as pessoas que agem têm de tornar uma objetividade unitária presen-

alerta a necessidade de uma perspectiva ontológica do ser social, base crucial do conhecimento crítico da realidade reprodutora do *status quo*, composta de mecanismos, instituições e normas que acabam condicionando a interpretação dentro dos limites do sistema para sua reprodução.

Uma vez instalada a lógica de mercado em todos os âmbitos da vida – e, também, no Direito, como superestrutura das relações de produção capitalistas –, como cultura hegemônica, o raciocínio humanista deve romper com dogmas, conceitos e tradições impregnados da ideologia mercantilista, tomando o cuidado de fazê-lo sem se desconectar da realidade e da conexão dialética entre fenômeno (regulação, interpretação e aplicação do Direito) e essência (o trabalho como Direito Humano, como inerente ao ser humano).

Assim, desde os fundamentos da Teoria Crítica dos Direitos Humanos e dos enfoques históricos e transdisciplinares expostos anteriormente, partindo da ideia de ruptura metodológica tradicional de WITKER (2018), para firmar uma visão holística-histórica, com inspiração em GADAMER (1999), e o cuidado metodológico-crítico recomendado por LUKÁCS (2013), toma-se a tarefa de indagação da compreensão crítico-humanista que deve inspirar a hermenêutica jurídica para alcançar o EDH, na prática.

Com efeito, o Enfoque de Direitos Humanos está diretamente relacionado e embasado na acepção de Estado democrático de Direito (todo poder é exercido em nome do povo, para quem está dirigido), por resgatar, recuperar e revitalizar o sentido da democracia na aplicação das normas, recompondo-lhes legitimidade, correspondência aos anseios populares de realizar e tornar concretos os valores universais da humanidade na consecução de justiça social.

Em busca de fundamentos para a aplicação da doutrina de EDH à hermenêutica jurídica, são preciosas as palavras de BAILONE<sup>279</sup>, que dão a tônica ao tema:

*Entendiendo a los derechos fundamentales – según la concepción fer-rajoliana– como la ley del más débil, como alternativa a la ley del más fuerte que regiría en su ausencia, se les reconoce a los mismos una genealogía de luchas sociales y conquistas populares que ganaron un ámbito de libertad y de igualdad más justo. El derecho a la vida como derecho frente a la ley del más fuerte físicamente; el derecho a la in-munidad y libertad frente al arbitrio del más fuerte políticamente; y los derechos sociales que son derechos a la supervivencia contra la ley de quien es más fuerte económica y productivamente.*

---

te nelas para pressuposto ou objeto de seus pores teleológico práticos. Isso naturalmente não impede que elas constituam complexos extremamente díspares do ser social que atuam de modo – relativamente – independente um do outro, não impede que as relações de produção, impelidas pelo desenvolvimento das forças produtivas, se modifiquem independentemente do sistema legal e, desse modo, necessariamente imponham a este a modificação total ou parcial ou pelo menos as reinterpretações correspondentes.

<sup>279</sup> BAILONE (2010: 530-531).

A concepção exposta por BAILONE em referência a FERRAJOLI<sup>280</sup> é o exato ponto de partida para ponderar um fundamento de justiça social (que é também objetivo) na gênese do EDH: ao tratar de Direitos Humanos, esta genealogia de lutas sociais e conquistas populares deve estar automaticamente incorporada como premissa lógica – visualizar a parte mais fraca, as relações assimétricas de poder e seus instrumentos de dominação ocultos, para encontrar os valores e bens da vida preponderantes para a correta e adequada tutela. Ou seja, a tutela de EDH ancora sua legitimidade na atuação corretiva de desigualdades nas relações de direito material, através da interpretação e aplicação do Direito de forma crítico-tuitiva e transdisciplinar humanista.

Assim, o fundamento do EDH se vincula ao próprio Estado de Direito. Neste norte, ALMAGRO<sup>281</sup>, Secretário Geral da OEA, lembra que o Estado de Direito é o elemento de união para o bem-estar humano, a paz, a democracia, o acesso à justiça e o desenvolvimento sustentável. Em sua opinião “representa a única maneira efetiva de lograr a equidade, e o equilíbrio necessário que pode assegurar a sustentabilidade do meio ambiente e o bem-estar humano”.

Conforme os ensinamentos de FERRAJOLI<sup>282</sup>, a expressão Estado de Direito não designa só um estado legal ou regulado pela lei, mas um modelo caracterizado, no plano formal, pelo princípio de legalidade, em virtude do qual todo poder público está subordinado a leis gerais e abstratas que disciplinam suas formas de exercício, e cuja observância está submetida a controle de legitimidade pelos juízes e juízas. No plano substancial, pela funcionalização de todos os poderes do Estado a serviço da garantia dos direitos fundamentais das pessoas<sup>283</sup>, com a incorporação limitativa na Constituição dos deveres públicos correspondentes: as proibições de lesar direitos de liberdade e as obrigações de dar satisfação aos direitos sociais, e ainda os poderes de cidadãos e cidadãs de

---

<sup>280</sup> Conforme FERRAJOLI (2010: 54): “*Los derechos fundamentales se afirman siempre como leyes del más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regía y regiría en su ausencia.*”

<sup>281</sup> ALMAGRO (2015), prólogo à publicação da OEA intitulada “*Estado de derecho en materia ambiental: Tendencias en las Américas: Ensayos seleccionados*”.

<sup>282</sup> FERRAJOLI (1995: 856-857). O autor enuncia algumas características do Estado de Direito: aquele que conforma um tipo de ordenamento em que o poder público está rigidamente limitado e vinculado a uma lei no plano substancial e que a conjunção entre estado social máximo e direito penal mínimo expressa o conjunto de deveres públicos positivos (obrigações) ou negativos (proibições) dos órgãos estatais, na forma idônea para maximizar os vínculos do poder estatal e suas funções de garantia dos direitos fundamentais das pessoas. (Idem, *ibidem*, pp. 104, 114).

<sup>283</sup> De forma similar, coincide BRYNER (2015: 174):

*“La naturaleza fundamental del Estado de Derecho se basa en la idea de que las sociedades deberían ser gobernadas por un conjunto de reglas y normas justas que se aplican de forma equitativa a todos. Con este fin, el Estado de Derecho incorpora principios como la justicia, la rendición de cuentas, la imparcialidad y la equidad, entre otros.* (BRYNER, 2015: 174).

ativar a tutela judicial. Conforme o autor<sup>284</sup>, estas duas versões do princípio da legalidade, a primeira, na qual a lei figura como condicionante, e na segunda, como condicionada, definem conjuntamente a complexa estrutura da legalidade no Estado de Direito, distinguindo-se entre mera legalidade e estrita legalidade, relacionando a primeira com a legitimação jurídico-formal subsequente à vigência das normas produzidas e a segunda com a legitimação jurídica substancial que deriva dos vínculos que condicionam a validade das normas vigentes.<sup>285</sup>

Assim já decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos,

*32. La ley en el Estado democrático no es simplemente un mandato de la autoridad revestido de ciertos necesarios elementos formales. Implica un contenido y está dirigida a una finalidad. El concepto de leyes a que se refiere el artículo 30, interpretado en el contexto de la Convención y teniendo en cuenta su objeto y fin, no puede considerarse solamente de acuerdo con el principio de legalidad (ver supra 23). Este principio, dentro del espíritu de la Convención, debe entenderse como aquel en el cual la creación de las normas jurídicas de carácter general ha de hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución de cada Estado Parte, y a él deben ajustar su conducta de manera estricta todas las autoridades públicas. En una sociedad democrática el principio de legalidad está vinculado inseparablemente al de legitimidad, en virtud del sistema internacional que se encuentra en la base de la propia Convención, relativo al “ejercicio efectivo de la democracia representativa”, que se traduce, inter alia, en la elección popular de los órganos de creación jurídica, el respeto a la participación de las minorías y la ordenación al bien común (ver supra 22).*

*35. En consecuencia, las leyes a que se refiere el artículo 30 son actos normativos enderezados al bien común, emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. Esta acepción corresponde plenamente al contexto general de la Convención dentro de la filosofía del Sistema Interamericano. Sólo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención.*

Ora, considerando que a política, a democracia e, por conseguinte, a produção legislativa atual é permeável ao grande capital<sup>286</sup>, sobretudo financeiro e das grandes corporações, de natureza imperialista e monopolista, produzindo injustiça social, é indispensável proceder ao controle de legitimidade proposto por FERRAJOLI, aferindo a legitimação jurídica substancial da norma, na inter-

---

<sup>284</sup> FERRAJOLI (1995: 380).

<sup>285</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Parecer Consultivo OC-6/86, de 9 de maio de 1986. Série A Nº. 6. Governo da República Oriental do Uruguai. Fonte: repositório de jurisprudência da CIDH no sítio da Corte IDH. Recuperado de [https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha\\_tecnica\\_opinion.cfm?nId\\_Ficha=13&lang=en](https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica_opinion.cfm?nId_Ficha=13&lang=en)

<sup>286</sup> Ao ponto de SUPLOT (2010: 67) referir a instauração de um “mercado de produtos legislativos” para a eliminação progressiva de sistemas normativos menos aptos a satisfazer as necessidades financeiras dos investidores.

pretação e aplicação do Direito, em consonância da operatividade do Estado em cumprimento, garantia e efetivação dos Direitos Humanos. Este controle de legitimação popular e humana é uma das finalidades do Enfoque de Direitos Humanos quando acoplado à hermenêutica jurídica.

Como sustenta FERRAJOLI<sup>287</sup>, a finalidade do Estado de Direito, como sistema de poder vinculado por regras, é a tutela da vida e dos demais direitos fundamentais das pessoas, logo, a hermenêutica jurídica tradicional, hegemônica, negocial, que interpreta e aplica o Direito positivo segundo as regras do contrato e se presta à justiça de mercado, não cumpre a finalidade do Estado Democrático de Direito. De forma diametralmente oposta, a hermenêutica jurídica com Enfoque de Direitos Humanos desempenhará este papel ao interpretar e aplicar o Direito de forma crítico-tutelar humanista, a partir das normas internacionais de Direitos Humanos e dos valores universais incorporados nas Constituições, centralizando o resultado no ser humano, para produzir justiça social e a tutela da vida em todas as suas dimensões e formas<sup>288</sup>.

Abordando o EDH nas políticas públicas, VÁZQUEZ–DELAPLACE (2011) enunciam, a título de exemplo, interessante roteiro de cumprimento de ações do Estado com características básicas informadas por elementos que podem ser aproveitados para a aplicação do Enfoque na hermenêutica jurídica:

*Disponibilidad.- garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho para toda la población.*

• *Accesibilidad.- que los medios por los cuales se materializa un derecho sean accesibles (física y económicamente) a todas las personas, sin discriminación alguna.*

• *Calidad.- que los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esa función.*

• *Adaptabilidad.- que el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de un DH tenga la flexibilidad necesaria para que pueda ser modificado, si así se requiere, a fin de adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a*

<sup>287</sup> Idem, *ibidem*, p. 227.

<sup>288</sup> Importante precedente do Supremo Tribunal Federal do Brasil respalda esta visão relativa à aplicação das normas internacionais de Direitos Humanos, inclusive conferindo-lhe *status* de função política:

Presente esse contexto, convém insistir na asserção de que o Poder Judiciário constitui o instrumento concretizador das liberdades civis, das franquias constitucionais e dos direitos fundamentais assegurados pelos tratados e convenções internacionais subscritos pelo Brasil. Essa alta missão, que foi confiada aos juízes e Tribunais, qualifica-se como uma das mais expressivas funções políticas do Poder Judiciário. Fonte: excerto do voto do Min. Celso de Mello. Supremo Tribunal Federal. Processo HC 87.585/TO, julg. em 12.03.2008. [em linha]. Recuperado de: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC-87585VISTACM.pdf>



*contextos culturales y sociales variados.*

• *Aceptabilidad.- que el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de un derecho sean aceptados por las personas a quienes están dirigidos, lo que está estrechamente relacionado con la adaptabilidad y con criterios como la pertinencia y adecuación cultural, así como con la participación de la ciudadanía en la elaboración de la política en cuestión.*

*El último de los elementos que se debe tener en cuenta para “desempacar” un derecho son los principios de aplicación: identificación del núcleo de la obligación, progresividad y prohibición de regresividad y máximo uso de recursos disponibles. (VÁZQUEZ-DELAPLACE, 2011: 43)*

Tais características da atuação estatal podem ser facilmente replicadas para a atuação judiciária, como pressupostos para a correta aplicação do EDH no momento da prestação jurisdicional, compreendendo um *iter* que vai desde a prévia disponibilização de equipamentos públicos judiciais suficientes até o amplo acesso à justiça (compatibilidade, adequação ou qualidade, publicidade, aceitação e adaptabilidade dos instrumentos, ou seja, das ações, dos ritos processuais e dos procedimentos). Não é a mesma situação um processo de indígena, de um migrante ou de uma mulher em situação de violência doméstica, v.g., pois, para cada dessas pessoas, o aparato judicial e os consectários (ações, processos e procedimentos) terão de ser adaptados pelo órgão jurisdicional para a correta e eficaz tutela dos Direitos Humanos em questão.

Também tratando de políticas públicas, GIMÉNEZ MERCADO – VALENTE ADARME<sup>289</sup> enunciam os seguintes princípios para o EDH:

- Universalidade e equidade: não discriminação e respeito à diversidade;
- Participação e empoderamento: envolvimento das comunidades, por suas entidades representativas, participando do processo de resolução de problemas em seu entorno, centralidade nas pessoas, para que se apropriem e participem dos processos de tomada de decisão;
- Prestação de contas e exigibilidade: responsabilidade dos titulares de deveres, com sistemas de monitoramento e avaliação, a fim de aferir avanços nos DDHH;
- Integralidade e progressividade: se vinculam às próprias características dos DDHH, em que o descumprimento de um compromete os demais, cabendo ao Estado empregar o máximo de esforços possíveis para alcançar ou permitir o exercício dos direitos às pessoas.

Tais princípios também podem ser aproveitados ao EDH na interpretação e aplicação do Direito, em especial os atinentes à universalidade e equidade, integralidade e progressividade. Já as questões atinentes à prestação de contas e exigibilidade, participação e empoderamento, representam um passo evolutivo na construção do Direito, pois dependem de democratizar a doutrina (com o pressuposto de que quem escreve, antes consulte, ouça os atores envolvidos, por exemplo), e a jurisprudência. Ou seja, a edição, v.g., de uniformização de

---

<sup>289</sup> GIMÉNEZ MERCADO – VALENTE ADARME (2010: 65-74).

jurisprudência de um tribunal seria precedida de audiências públicas, consulta popular, para que a comunidade tome parte do processo. Sem dúvida, a adoção desses dois últimos princípios representaria um passo adiante na democratização do próprio Direito, conferindo-lhe, por conseguinte, maior legitimidade.

Em síntese do conteúdo principal da aplicação do EDH na hermenêutica jurídica, suas premissas são:

1) a genealogia de lutas sociais e conquistas populares contra todas as formas de discriminação e privilégios, e de busca de igualdade, dignidade, alteridade, interculturalidade, solidariedade, justiça, espaços públicos democráticos de expressão e reivindicação etc.;

2) tornar visíveis as relações assimétricas de poder e seus instrumentos de dominação ocultos;

3) encontrar os valores e bens da vida preponderantes para a correta e adequada tutela humanista e holística.

A base do EDH é o Estado Democrático de Direito e a justiça social, tendo por finalidades:

a) o controle de legitimação popular e humana na interpretação e aplicação do Direito;

b) correção de desigualdades;

c) efetividade dos Direitos Humanos;

d) produção de justiça social;

e) tutela da vida e do bem-estar universal.

Sua legitimidade se dá e se afere pelo cumprimento dos seus objetivos.

Assim, enquanto a hermenêutica jurídica neoliberal hegemônica, utilitarista do Direito, se volta para a defesa do poder econômico com base nas regras do contrato<sup>290</sup>, causando mais desigualdade social, a hermenêutica com EDH reflete uma visão crítico-humanista e emancipadora do Direito para a proteção e tutela da vida em todas as suas formas e dimensões.

CECCHINI–RICO (2015) assim apontam o fundamento ético do EDH:

*En materia normativa, el enfoque de derechos en la protección social se basa, en particular, en claros compromisos legales, tanto de carácter nacional como internacional, que los países tienen que cumplir. Estos compromisos demuestran el creciente consenso alrededor de los derechos humanos como fundamento y marco conceptual para las políticas de desarrollo (Abramovich, 2006; Townsend, 2009), y entregan al enfoque de derechos una fuerte autoridad moral. Al regirse por principios universales que ostentan un carácter vinculante y según los cuales toda persona debe tener acceso a los recursos necesarios para llevar una vida digna, el enfoque de derechos constituye el fundamento ético de*

---

<sup>290</sup> O utilitarismo econômico do Direito (POSNER, 2010) estrutura hoje a aplicação do neoliberalismo no entorno ao Direito (HABERMAS, 2002), como um mero aparato garantidor de contratos (SUPIOT, 2012), em perpetuação das relações de poder que os subjazem (DELEUZE, 2017), em especial, as laborais.

*las democracias de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2006). (CEC-CHINI-RICO, 2015: 340)*

Em comparação, pode-se enunciar como características da hermenêutica jurídica tradicional (de viés prevalente neoliberal):

- Estática: prioriza o alcance da “segurança jurídica” a qualquer preço;
- Contratualista: *pacta sunt servanda*, se embasa na primazia das regras do contrato;
- Utilitarista: busca o conteúdo econômico do Direito, a consideração do Direito e bem da vida pelo valor, resultado econômico;
- Negocial: toma a relação jurídica por um negócio entre as partes (traduzido na potencialização do axioma “o contrato faz lei entre as partes”);
- Obrigacional: volta-se para os deveres e obrigações descumpridos no contrato;
- Limitadora<sup>291</sup>: o Poder Judiciário deve respeitar a autonomia da vontade das partes nas relações privadas e os ditames da conveniência e oportunidade dos gestores públicos nas questões estatais;
- Busca a justiça de mercado, produzindo desigualdade social;
- Preponderantemente privada: a administração da justiça em favor de interesses privados não se legitima diante dos anseios populares e do interesse público.

Já a hermenêutica jurídica com EDH, em contraposição, se apresenta com as seguintes qualidades:

- Dinâmica: incorpora os processos de luta pelos direitos na leitura da norma;
- Humanista: centralizada no ser humano e na vida;
- Universal: estruturada nos valores universais da humanidade;
- Ampla: seus limites serão justamente a não agressão a Direitos Humanos e liberdades fundamentais;
- Igualitária: busca equilibrar relações assimétricas de poder na concretização do Direito;
- Democrática: permite que situações de vulnerabilidade sejam corrigidas e que partes ou grupos hipossuficientes obtenham a devida apreciação de seu direito segundo a ótica tutelar humanitária;

---

<sup>291</sup> É normal a utilização do discurso da divisão tripartite de poderes para limitar o cumprimento das funções do Poder Judicial. Enquanto os legisladores exorbitam de seus poderes, produzindo legislação viciada, e os gestores públicos cometem arbitrariedades nas suas funções, o Judiciário não poderia atuar nessas questões porque estaria invadindo os demais poderes. Nas relações de Direito Privado, o império da autonomia da vontade não poderia ser corrigido pelo juiz, juíza. Todavia, o Poder Judiciário, em um Estado verdadeiramente democrático de Direito, atua como garante dos direitos fundamentais das pessoas, não podendo ser limitado na entrega da justiça quando falham os demais poderes e serviços estatais ou a aplicação da lei.

- Crítica: perscruta a história e a realidade social, descobrindo e combatendo relações assimétricas de poder e instrumentos de dominação ocultos em normas, institutos ou formas jurídicas;

- Progressista: não se conforma à leitura asséptica e estática das normas, adaptando-as à solução que melhor tutelar o Direito Humano em foco, não admitindo retrocesso social;

- Legítima: deve atuar em nome e para os interesses do povo e de seu desenvolvimento material e espiritual em harmonia com a vida em todas as suas formas e dimensões.

Os fundamentos da hermenêutica tradicional se assentam no Direito positivo maximizado e nos contratos, inclusive muitas vezes, por sobre as Constituições, lidas como valores abstratos e programáticos da sociedade. Já os Direitos Humanos costumam passar ao largo das interpretações do meio jurídico hegemônico, conformado pela visão conservadora neoliberal<sup>292</sup>. Como expõe MALAGUIDO (2019)<sup>293</sup>, o mercado neoliberal, visando apenas à lucratividade, olha para o indivíduo para calcular o quanto de lucro aquela pessoa pode gerar e, não sendo o ser humano lucrativo, é descartado, tornando-se inexistente. É o mercado sem cidadania como falácia da globalização neoliberal, nas palavras de FARIÑAS DULCE<sup>294</sup>. O alcance máximo interpretativo da hermenêutica tradicional se limita ao juspositivismo ético (que de alguma forma tem obtido penetração, também chamado pospositivismo), que, apesar de prestigiar os valores constitucionais e a ética jurídica, no entanto, não desgarra da lógica das normas positivas, analisadas em seu conjunto e segundo princípios, mas sem considerar, como já dito, a realidade histórico-social, os processos de luta ou relações de poder e dominação que a ela subjazem, e que fazem a diferença na com-

---

<sup>292</sup> Fruto da subjetividade neoliberal construída no mundo durante décadas de hegemonia do pensamento econômico neoliberal, o utilitarismo do Direito redesenhou os cursos de graduação nas Universidades de forma a atender às “tendências de mercado”, à lógica do mercado, o que provoca graves deficiências na formação de profissionais do meio jurídico, sobretudo em Direitos Humanos e, ultimamente, também no Direito do Trabalho. Termina-se por prestigiar o “Direito de Empresa”, “Direito Empresarial”, e suas demandas, inclusive nas pós-graduações, que acabam sendo as mais procuradas e, por conseguinte, dominam e esvaziam as contra hegemônicas. No particular, SALLES (2014: 86) explica que a expansão do ensino jurídico, no Brasil, seguiu o modelo da iniciativa privada anglo-saxão e estadunidense quanto à adaptação às demandas de mercado. A questão não é menor, pois, como defende MALAGUIDO (2019):

(...) não havendo uma consciência formada perante princípios democráticos não há que se falar em hermenêutica constitucional realizadora da democracia. E, sem esta não há Estado Democrático de Direito, e, conseqüentemente, sem este não há que se falar em limitação ao poder. Em outras palavras, o intérprete possui compromisso com a democracia, o que corresponde a compromisso, em primeiro lugar com a dignidade da pessoa humana. (MALAGUIDO, 2019)

<sup>293</sup> O autor trata do tema abordando a hermenêutica jurídica no Estado Democrático de Direito.

<sup>294</sup> FARIÑAS DULCE (2005).

preensão. Em se tratando de Direitos Humanos, ter presente a consciência desta realidade é fundamental para alcançar a compreensão para a potência transformadora da vida na interpretação e aplicação do Direito, ao ponto de HERRERA FLORES<sup>295</sup> propor a “consciencia cyborg” em oposição ao sistema dominante:

*La “consciencia cyborg”, constata que, a pesar de las odas al fin del trabajo productivo, son las/los trabajadoras/es de los sectores descualificados, las gentes de color; los indígenas y/o descendientes del comercio/mercado de esclavos, los nuevos inmigrantes, los nuevos esclavos de las actuales cadenas de montaje de las maquilas..., todos estos seres humanos, a los que el poeta salvadoreño Roque Dalton dedicaba sus “poemas de amor”, son los que mantienen en funcionamiento la maquinaria productiva necesaria para que las grandes empresas transnacionales de la nueva fase de acumulación del capital sigan con su labor depredadora. Gentes que viven sus vidas cotidianas atravesadas por las nuevas tecnologías (que abaratan su fuerza de trabajo y agilizan la obtención rápida e indiscriminada de beneficios) y las antiguas discriminaciones de raza, género, sexo, clase, lengua y posición social. Gentes híbridas que viven en contextos híbridos, en los que predomina la exclusión y la explotación, tanto de sus saberes como de sus cuerpos y sus necesidades. (HERRERA FLORES, 2005: 20).*

O direcionamento do Direito e sua interpretação e aplicação para a tutela e proteção da vida em todas as suas formas e dimensões, nos mais diversos casos de aplicação do Enfoque de Direitos Humanos, se escuda no fato de que o atual estágio de desenvolvimento dos DDHH, no âmbito internacional e doméstico dos países, não mais permite o exercício da atividade econômica em desconformidade com os Direitos Humanos. Como assevera RODRÍGUEZ GARAVITO<sup>296</sup>, desde que os Princípios Diretores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos foram adotados pelo Conselho de Direitos Humanos em 2011, no final do mandato de John Ruggie, como representante especial do Secretário Geral da ONU para as Empresas e Direitos Humanos, eles se converteram em uma plataforma global de ação. O autor prossegue afirmando que os direitos que as empresas deveriam respeitar, como mínimo, segundo os Princípios Diretores, são aqueles elencados na Carta Internacional de Direitos Humanos (DUDH, PIDCP, PIDESC e seus protocolos) e a Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT. A própria OCDE incorporou os Princípios Diretores da ONU nas suas Linhas Diretrizes para Empresas Multinacionais, que formam parte da Declaração da entidade sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais, os princípios gerais, v.g., de números 2, 4, 5, 8 e 9, que mencionam o respeito aos Direitos Humanos, à saúde, à segurança e higiene, ao trabalho<sup>297</sup>.

---

<sup>295</sup> HERRERA FLORES (2005: 20).

<sup>296</sup> RODRÍGUEZ GARAVITO (2018: 29, 109).

<sup>297</sup> Fonte: sítio da OCDE, *Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales*. Recuperado de: [www.oecd.org/investment/mne/16975360.pdf](http://www.oecd.org/investment/mne/16975360.pdf)

O Enfoque de Direitos Humanos na hermenêutica jurídica encontra respaldo normativo no art. 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao dispor o seguinte:

Artigo 29 - Normas de Interpretação

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:

- a) permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista;
- b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados-Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados;
- c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; e
- d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.

Disposições similares também se encontram na Convenção Europeia de Direitos Humanos<sup>298</sup>:

Art. 18. As restrições feitas nos termos da presente Convenção aos referidos direitos e liberdades só podem ser aplicadas para os fins que foram previstas.

Art. 53. Nenhuma das disposições da presente Convenção será interpretada no sentido de limitar ou prejudicar os direitos do homem e as liberdades fundamentais que tiverem sido reconhecidos de acordo com as leis de qualquer Alta Parte Contratante ou de qualquer outra Convenção em que aquela seja parte.

Ainda, também as Constituições de Espanha (art. 10.2) e Portugal (art. 16.2) positivam de forma similar esta interpretação, condicionando à observância da DUDH.

Logo, em consonância das normatividades supracitadas, a interpretação dos DDHH deve ser pautada pelos seguintes elementos, que integram o Enfoque de Direitos Humanos:

- Identificação dos DDHH em jogo, no caso, e do núcleo das obrigações a eles relativas;
- Supremacia dos Direitos Humanos<sup>299</sup>;

---

<sup>298</sup> A Constituição da Espanha, no art. 10.2, de forma similar, prevê: “*Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.*”

<sup>299</sup> A Constituição brasileira de 1988 albergou o princípio da prevalência dos Direitos Humanos no art. 4º, II. Sobre o tema, vale destacar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que, no julgamento que excluiu a possibilidade de prisão civil do depositário infiel, com base na



- Progressividade ou não retrocesso;
- Eficácia vertical e horizontal (observância dos DDHH nas relações com o Estado e, também, nas relações entre particulares) ou oposição *erga omnes*;
- *In dubio pro homine*;
- Forma democrática de governo, com direitos e garantias a ela inerentes,
- Caráter coercitivo (*ius cogens*) das normas de Direitos Humanos.

A hermenêutica jurídica com enfoque de EDH, na prática, pode ser visualizada no seguinte exemplo: em uma ação de despejo, por falta de pagamento de aluguel ou de financiamento imobiliário, hipoteca, a hermenêutica tradicional opera o raciocínio jurídico desde o ponto de vista do contrato, a obrigação descumprida operando o consequente despejo<sup>300</sup>, diferindo no tempo a execução,

---

Convenção Americana de Direitos Humanos, reconheceu a prevalência da norma internacional ao Direito doméstico:

Tenho para mim, desse modo, Senhora Presidente, que uma abordagem hermenêutica fundada em premissas axiológicas que dão significativo realce e expressão ao valor ético-jurídico-constitucionalmente consagrado (CF, art. 4º, II) – da “prevalência dos direitos humanos” permitirá, a esta Suprema Corte, rever a sua posição jurisprudencial quanto ao relevantíssimo papel, à influência e à eficácia (derrogatória e inibitória) das convenções internacionais sobre direitos humanos no plano doméstico e infraconstitucional do ordenamento positivo do Estado brasileiro. Com essa nova percepção do caráter subordinante dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos, dar-se-á consequência e atribuir-se-á efetividade ao sistema de proteção dos direitos básicos da pessoa humana, reconhecendo-se, com essa evolução do pensamento jurisprudencial desta Suprema Corte, o indiscutível primado que devem ostentar, sobre o direito interno brasileiro, as convenções internacionais de direitos humanos, ajustando-se, desse modo, a visão deste Tribunal às concepções que hoje prevalecem, no cenário internacional - consideradas as realidades deste emergentes -, em torno da necessidade de amparo e defesa da integridade dos direitos da pessoa humana.

Nesse contexto, e sob essa perspectiva hermenêutica, valorizar-se-á o sistema de proteção aos direitos humanos, mediante atribuição, a tais atos de direito internacional público, de caráter hierarquicamente superior ao da legislação comum, em ordem a outorgar-lhes, sempre que se cuide de tratados internacionais de direitos humanos, supremacia e precedência em face de nosso ordenamento doméstico, de natureza meramente legal. Fonte: excerto do voto do Min. Celso de Mello. Supremo Tribunal Federal. Processo HC 87.585/TO, julgado em 12.03.2008. [em linha]. Recuperado de: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC87585VISTACM.pdf>

<sup>300</sup> Inúmeros exemplos podem ser lançados, de forma similar, como no caso de uma execução bancária por falta de pagamento de empréstimo, que termina, na maior parte dos casos, com a aplicação da lei que compromete senão diretamente a sobrevivência, no mínimo a dignidade humana da pessoa dita “inadimplente”, expropriada de seus bens em favor do capital financeiro – *dura lex sed lex*. O direito dos contratos não é sensível à vida, opera desde a lógica subjetiva neoliberal, que é implacável com as pessoas chamadas “losers” (perdedores), aplicando-lhes um castigo pelo “fra-

segundo a ética que possa (ou não) alcançar um intervalo mínimo para reacomodação das pessoas desalojadas. Já a hermenêutica com EDH partirá o raciocínio desde o Direito Humano à moradia<sup>301</sup>, à vida digna em todos os seus aspectos, buscando a melhor interpretação que proteja este direito, a despeito do contrato. A lógica não será a do despejo, mas a de assegurar a moradia, a dignidade, compondo a questão econômica de forma razoável. Da mesma forma, em uma ação relativa à cobertura de exame médico, procedimento cirúrgico, fornecimento de medicamento em plano de saúde, a hermenêutica hegemônica afere as regras do contrato para encontrar a previsão ou não do direito vindicado, enquanto o EDH permitirá encontrar fundamentos de tutela e proteção da vida.<sup>302</sup>

Ora, o econômico sempre pode ser composto e ressarcido, no entanto, as vidas humanas perdidas ou negligenciadas, a miséria humana produzida pelo sistema – e a conseqüente violência –, são irreversíveis em seus efeitos sociais e para as vítimas diretas. A lógica hegemônica interpretativa do “contrato”, embora induza repelir com veemência esta hermenêutica, cede diante do bem da vida maior a proteger, os Direitos Humanos subjacentes à questão, como valores universais indutores do convívio respeitoso e solidário em sociedade, e do indispensável olhar humano às pessoas envolvidas nas mais distintas situações da vida.

---

caso” no sistema, muitas vezes representativos de verdadeira morte civil, aumentando a miséria e a desigualdade social.

<sup>301</sup> Neste sentido é a interpretação do Supremo Tribunal Federal do Brasil, conforme o seguinte precedente:

Reconhecimento do direito à moradia como direito fundamental. Cabe assinalar, neste ponto, por relevante, que o direito à moradia - que representa prerrogativa constitucional deferida a todos (CF, art. 6º) — qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se à noção dos direitos de segunda geração (RTJ 164/158-161). A essencialidade desse direito é também proclamada por declarações internacionais que o Brasil subscreveu ou a que o nosso país aderiu, valendo referir, dentre elas, a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana (art. 25) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 11), que dispõem sobre o reconhecimento do direito à moradia como expressão de um direito fundamental que assiste a toda e qualquer pessoa. [RE 407.688, rel. min. Cezar Peluso, voto do min. Celso de Mello, j. 8-2-2006, P, DJ de 6-10-2006.]” (STF, 2017: pp. 54-5)

<sup>302</sup> Vale ressaltar que uma interpretação ético-jurídica poderá alcançar, em determinadas situações da vida (e os exemplos dados seriam possibilidades), relativa satisfação dos direitos sociais envolvidos, porém, ao fim e ao cabo, aplicaria limitações embasadas nos contratos, e o valor “segurança jurídica” certamente seria invocado, em detrimento dos DDHH. Na hermenêutica com EDH, a segurança jurídica a ser ponderada é a própria da salvaguarda dos Direitos Humanos, das pessoas, da vida, da saúde, do meio ambiente em perigo etc., e não mais a perpetuação do *pacta sunt servanda*. Neste norte, BRYNER (2015: 178), tratando do meio ambiente, defende que a insegurança jurídica deve ser resolvida para proteção da natureza, ou seja, da vida.

A grande prova planetária de que o conteúdo econômico das relações humanas não pode prevalecer sobre a vida e os Direitos Humanos restou demonstrada com a pandemia de COVID-19, pois os países que optaram por manter abertas ou reabrir suas economias antes do achatamento da curva de contágio sofreram maiores índices de contágio da população (ofensa ao Direito Humano à saúde) e, por conseguinte, mais enfermidades e mais mortes (violação do direito à vida).

Por outras palavras, a atividade econômica, seja ela civil ou comercial, estatal, entre particulares ou com o Estado, sujeita-se inegavelmente às limitações decorrentes da supremacia dos Direitos Humanos.

Necessário considerar, também, que a aplicação do EDH na hermenêutica jurídica não se destina somente ao Poder Judiciário, mas também a advogados e advogadas, membros do Ministério Público etc. Obviamente, os mais diversos profissionais do Direito podem ter em consideração a doutrina no desempenho de suas atividades. Assim, uma petição inicial relativa aos exemplos dados, deverá considerar, no desenho do pedido da prestação jurisdicional os Direitos Humanos envolvidos e a forma de sua tutela para alcance de justiça social. De idêntica forma, uma atuação ou parecer ministerial a ser exarado pelo Ministério Público.

A justiça, por seu órgão jurisdicional, por sua vez, deverá considerar, na entrega da prestação judicante vindicada, o seu impacto e consequências, atendendo para a dimensão social da decisão, isto é, se a mesma é apta a promover justiça social ou a replicar, acentuar desigualdades e assimetrias de poder no sistema.

Há de se considerar, também, que, do ponto de vista da horizontalidade dos Direitos Humanos, todos os particulares deveriam observar o cumprimento da lei segundo a perspectiva do EDH: *in dubio pro homine*, ou seja, atuando sempre de acordo a um juízo hermenêutico favorável à proteção/observância/garantia dos Direitos Humanos – na dúvida na aplicação de normas, observar a que melhor tutela os DDHH; na dúvida, insegurança, se decide em favor da proteção/conservação dos DDHH, e assim por diante. A fundamentação dos princípios *in dubio pro reo*, *in dubio pro natura*, segundo BRYNER<sup>303</sup>, é a própria proteção do Estado de Direito, à qual podemos agregar também o *in dubio pro homine*, por alinhado à mesma lógica que informa os anteriores, pois, como bem pondera o autor, como parte do Estado de Direito, um dos deveres fundamentais dos governos é proteger e salvaguardar os direitos e interesses das partes vulneráveis e minorias.

O Enfoque de Direitos Humanos acopla-se perfeitamente aos ramos do Direito que já possuem caráter tutelar, ou seja, que já se estruturam segundo a

---

<sup>303</sup> BRYNER (2015: 174-176, 178). O autor trata da aplicação do princípio *in dubio pro natura*, em Direito Ambiental, invocando o *in dubio pro reo* por analogia. Em suas palavras: “el *in dubio pro natura* es una extensión lógica de conceptos similares en otras áreas del Derecho que están diseñados para salvaguardar los intereses vulnerables o insuficientemente representados.”

lógica de reconhecimento da desigualdade entre as partes na relação jurídica ou a proteção de bem da vida (meio ambiente, v.g.), como o Direito do Trabalho, o Direito da Infância e Juventude, o Direito Ambiental, etc. Entretanto, isso não obsta que seja utilizado também em outros ramos do Direito, sempre que houver relação assimétrica de poder ou a desigualdade entre as partes for de tal ordem que torne uma delas, ou o bem da vida em jogo<sup>304</sup>, vulnerável ou submissa à outra, seja de forma evidente, presumida ou comprovada.<sup>305</sup>

Assim, podem-se estabelecer como características e parâmetros para a aplicação do EDH na hermenêutica jurídica:

- Compatibilidade nata com os ramos de Direito tutelares;

- Aptidão às questões em que as partes sejam desiguais (relações entre bancos e pessoas físicas, micro e pequenas empresas; relações envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade econômica ou social; relações em que a assimetria de poder resulte na sujeição ou submissão de uma das partes ou do bem da vida a uma delas etc.)<sup>306</sup> – o que encontra respaldo na norma do art. 21.3 da Convenção Americana de Direitos Humanos, segundo a qual, “tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem devem ser reprimidas pela lei”;

- Submissão do direito de propriedade à ordem jurídico-humanitária, ou seja, na ponderação entre a lesão ao direito à propriedade e à lesão a Direito Humano, tutela-se este; ou, na forma do art. 21.1 da CADH, o uso e gozo da propriedade pode ser subordinado ao interesse social<sup>307</sup>;

---

<sup>304</sup> Por exemplo, o Direito Humano à saúde como bem da vida subjacente a uma disputa comercial entre empresas na produção de vacinas, medicamentos, demanda que a justiça aprecie a causa desenhando a decisão que melhor proteja este DH em benefício da coletividade.

<sup>305</sup> Este critério excluiria, por exemplo, na ação de despejo, o locatário que tem bens e posses, e que, optando por morar de aluguel, não paga, evitando o risco de banalização da aplicação do EDH que viesse a causar injustiça em relações entre iguais ou estimular o uso reverso da ordem jurídica humano-democrática por quem não é despossuído.

<sup>306</sup> No exemplo do aluguel, o pequeno proprietário cuja única renda para sobreviver provém do ganho com o imóvel também não pode ter sua sobrevivência em risco.

<sup>307</sup> Exatamente neste sentido, cita-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal do Brasil:

**“Caráter relativo do direito de propriedade visto sob o prisma da função social**

O direito de propriedade não se reveste de caráter absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, descumprida a função social que lhe é inerente (CF, art. 5º, XXIII), legitimar-se-á a intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados na própria Constituição da República. O acesso à terra, a solução dos conflitos sociais, o aproveitamento racional e adequado do imóvel rural, a utilização apropriada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente constituem elementos de realização da função social da propriedade. A desapropriação, nesse contexto — enquanto sanção constitucional impositiva ao descumprimento da função social

- *In dubio pro homine*;
- Prevalência dos Direitos Humanos;
- Concretização da dignidade da pessoa humana<sup>308</sup>.

Aliás, sobre o princípio da prevalência dos Direitos Humanos, cabe de-

---

da propriedade — reflete importante instrumento destinado a dar consequência aos compromissos assumidos pelo Estado na ordem econômica e social. Incumbe, ao proprietário da terra, o dever jurídico-social de cultivá-la e de explorá-la adequadamente, sob pena de incidir nas disposições constitucionais e legais que sancionam os senhores de imóveis ociosos, não cultivados e/ou improdutivos, pois só se tem por atendida a função social que condiciona o exercício do direito de propriedade, quando o titular do domínio cumprir a obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na terra labutam; (2) de manter níveis satisfatórios de produtividade; (3) de assegurar a conservação dos recursos naturais; e (4) de observar as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem o domínio e aqueles que cultivam a propriedade. (...) O processo de reforma agrária, em uma sociedade estruturada em bases democráticas, não pode ser implementado pelo uso arbitrário da força e pela prática de atos ilícitos de violação possessória, ainda que se cuide de imóveis alegadamente improdutivos, notadamente porque a Constituição da República — ao amparar o proprietário com a cláusula de garantia do direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII) — proclama que “ninguém será privado (...) de seus bens, sem o devido processo legal” (art. 5º, LIV). [ADI 2.213 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 4-4-2002, P, DJE de 23-4-2004.] (STF, 2017: 55).

Segue também interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador (*Sentencia de 6 de mayo de 2008*):

*60. El derecho a la propiedad privada debe ser entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas proporcionales que garanticen los derechos individuales. La función social de la propiedad es un elemento fundamental para el funcionamiento de la misma, y es por ello que el Estado, a fin de garantizar otros derechos fundamentales de vital relevancia para una sociedad específica, puede limitar o restringir el derecho a la propiedad privada, respetando siempre los supuestos contenidos en la norma del artículo 21 de la Convención, y los principios generales del derecho internacional.* Fonte: *Digesto de jurisprudencia da CIDH*, constante do sítio da Corte IDH. Recuperado de: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_179\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_179_esp.pdf)

<sup>308</sup> É o que apregoa textualmente o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal do Brasil:

**A prestação jurisdicional e o princípio da dignidade da pessoa humana**

A prestação jurisdicional é uma das formas de se concretizar o princípio da dignidade humana, o que torna imprescindível seja ela realizada de forma célere, plena e eficaz. [Rcl 5.758, rel. min. Cármen Lúcia, j. 13-5-2009, P, DJE de 7-8-2009.] (STF, 2017: 24).

fender que possui um duplo significado: a prevalência das normas internacionais de DDHH sobre a legislação doméstica e, também, a sua prevalência sobre outros direitos. Neste contexto, segue interpretação da Suprema Corte do Brasil sustentando a defesa intransigente da prevalência dos DDHH:

No Estado de Direito Democrático, devem ser intransigentemente respeitados os princípios que garantem a prevalência dos direitos humanos. (...) A ausência de prescrição nos crimes de racismo justifica-se como alerta grave para as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais admitem. [HC 82.424, rel. p/ o ac. min. Maurício Corrêa, j. 17-9-2003, P, DJ de 19-3-2004.]<sup>309</sup>

No tocante aos requisitos do Enfoque de Direitos Humanos aplicado à hermenêutica jurídica é de se destacar o conteúdo do documento publicado pela ONU<sup>310</sup>, intitulado “*Principios y Directrices recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas*”, no qual a entidade busca a proposição de um tratamento holístico e multidisciplinar sobre o tema do combate ao tráfico de pessoas. Embora seja uma temática específica, o cuidado contido no estudo e nas proposições nele alinhadas, para a efetividade dos diversos tratados e documentos internacionais versando sobre o assunto nele citados, ou seja, de cunho jurídico-tutelar, o credenciam para os propósitos coincidentes desta investigação ao acoplar o EDH na hermenêutica jurídica. Com efeito, pode-se extrair o seguinte conceito de EDH no documento em questão: “(...) marco conceitual para fazer frente a um fenômeno (...), o enfoque baseado nos Direitos Humanos é um enfoque *baseado desde o ponto de vista normativo* nas normas internacionais de Direitos Humanos e *dirigido desde o ponto de vista operacional* à promoção e à proteção dos Direitos Humanos”<sup>311</sup>. Assim, tendo esta fonte em perspectiva, os requisitos podem ser estruturados sobre a base definida no documento, abrangendo:

- Identificação dos Direitos Humanos envolvidos na relação jurídica em estudo e os bens jurídicos que tutelam;
- Análise da forma com a qual se vulneram os Direitos Humanos e os bens jurídicos neles protegidos no contexto da relação jurídica em apreciação;
- Análise das obrigações dos Estados em virtude do Direito Internacional dos Direitos Humanos e sua aplicação prática no caso concreto;
- No âmbito processual, inversão do ônus da prova para favorecer a parte mais débil na relação assimétrica de poder;
- Identificação e aplicação da forma de corrigir as práticas ilícitas e a distribuição injusta de poder que subjaz a relação jurídica em apreciação, e a

---

<sup>309</sup> Fonte: legislação anotada pelo STF, *A Constituição e o Supremo*, constante do sítio do Supremo Tribunal Federal. Recuperado de: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=17>

<sup>310</sup> ONU (2010: 51-52).

<sup>311</sup> Idem, *ibidem*, p. 51.



assimetria que perpetua a impunidade dos responsáveis, negando justiça a suas vítimas.

De outra parte, como diretrizes de aplicação do EDH, atenta-se para o seguinte:

- O EDH não pode servir de estímulo ao uso reverso da ordem jurídico-democrática humanista<sup>312</sup> – a compreensão humanista tem por pressuposto a proteção da vida em todas as suas formas e dimensões e os Direitos Humanos, desde seu pressuposto, o ponto de vista do mais débil -, logo, o EDH não deve ser invocado ou aplicado em situações em que, a pretexto de salvaguarda de DDHH, o resultado provocar injustiça social ou a violação de outro Direito Humano de importância superior no caso concreto;

- A dosimetria e a adaptação das medidas derivadas do raciocínio de aplicação do EDH devem ser desenhadas e compatibilizadas ao caso concreto, prestigiando a vida e os Direitos Humanos, reiterando-se, sem causar injustiças nem risco à ordem jurídico-democrática humanista<sup>313</sup>, ou seja, buscando a realização de justiça social compreendida no Estado Humano-Democrático de Direito e não fora dele;

- Os juízos de adequação e aplicação do EDH ao caso concreto devem ser pautados pelo binômio necessidade-capacidade, ou seja, atendendo a necessidade do mais débil na medida da capacidade do outro<sup>314</sup>.

---

<sup>312</sup> Entende-se por ordem jurídico-democrática humanista e o Estado Humano-Democrático de Direito a organização social que determina um aparato público defensor da vida em todas as suas dimensões e formas, de atenção centralizada nas pessoas (ser humano) e suas relações harmonizadas com as demais formas de vida, com a finalidade de sua proteção e desenvolvimento, e a conseqüente estrutura jurídica daí derivada.

<sup>313</sup> A menção ao risco à ordem jurídico-democrática humanista se refere a evitar que o raciocínio com EDH produza um tipo de resultado que possa comprometer o convívio democrático em sociedade, que é pautado nas normas de DDHH, internacionais, constitucionais e domésticas, com a devida releitura humanista preconizada neste trabalho. No caso do exemplo citado do aluguel, hipoteca não pagos por família em situação de vulnerabilidade econômica, o EDH incide para garantir o direito à moradia (direito à vida e existência digna), que prepondera sobre o direito de propriedade, que deve atender a esta função social.

<sup>314</sup> Aliás, este é o sentido que LUKÁCS (2013: 177) encontra para a justiça:

Somente quando todas as condições e relações objetivas do trabalho social tiverem sido revolucionadas, “quando tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição entre trabalho intelectual e manual; quando o trabalho tiver deixado de ser mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade vital; quando, juntamente com o desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, suas forças produtivas também tiverem crescido e todas as fontes da riqueza coletiva jorrarem em abundância”, numa sociedade cuja base de reprodução é “de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades”, essa discrepância deixará de existir, todavia ao mesmo tempo se tornará supérflua a esfera do direito assim como a conhecemos na história até esse momento. (Obs.: o grifo é meu). (LUKÁCS, 2013: 177)

Como instrumento de medição de responsabilidade social do Estado, através do Poder Judiciário, na aplicação da hermenêutica jurídica com EDH, caberia estabelecer indicadores de justiça social aptos a aferir o impacto de decisões judiciais, da atuação do Ministério Público e da advocacia em relação à efetividade dos Direitos Humanos. De forma similar, FERRAJOLI<sup>315</sup>, falando sobre as tarefas que um sistema de juízo penal positivo abre para uma filosofia analítica do garantismo penal, comenta a necessidade de análise de todos os espaços de discricionariedade que caracterizam o juízo penal, para expô-los à responsabilidade política e ao controle público, em nome da controlabilidade jurídica da validade das decisões judiciais, como postulados do moderno Estado de Direito. Na espécie, em se tratando de Direitos Humanos, as decisões judiciais deveriam também ser submetidas a essa responsabilidade política (lembrando que o STF menciona expressamente constituir função política do Poder Judiciário garantir os DDHH) e controlabilidade jurídica de validade, sempre que implicarem inefetividade dos DDHH. Tal poderia ser feito tomando por base um índice e, ao final de determinado espaço de tempo, verificar se este índice melhorou. Por exemplo, no caso do direito à saúde, ver as decisões que o garantiram ou não, em certo período, avaliando as motivações de aumento ou decréscimo das demandas. Também, tomar as decisões garantidoras e tornar público seu resultado (quantidade de cirurgias, de tratamentos médicos, de medicamentos fornecidos em decorrência de atuação do Poder Judiciário, v.g.). No direito à moradia, avaliar quantas pessoas perderam ou recuperaram seus lares por força de decisão judicial. Ministério Público e advocacia, por sua vez, podem implementar controle de ações destinadas à efetividade dos Direitos Humanos e seu resultado. Enfim, todos estes dados podem ser cruzados interinstitucionalmente e publicados para apurar se a distribuição de justiça estatal está ou não promovendo justiça social.

De outra parte, audiências públicas locais, regionais e nacionais poderiam ser feitas para consulta pública da população envolvida para saber as prioridades do ano judiciário para implementação de Direitos Humanos, apurando-se necessidades específicas da sociedade.

Há várias formas, portanto, de parametrizar a atuação judicial e jurídica para consecução de justiça social e efetividade dos Direitos Humanos, assim, espera-se que haja sensibilidade, no futuro, por parte das instituições e pessoas encarregadas da alta administração da Justiça.

Vê-se, pois, que a dinâmica de incorporação do EDH na hermenêutica jurídica tem aptidão não só para superar o modelo utilitarista econômico do Direito como também para produzir sensíveis câmbios sociais qualificadores da democracia e da vida, aperfeiçoadores das funções públicas estatais, em promoção da dignidade da pessoa humana e redução da desigualdade social.

---

<sup>315</sup> FERRAJOLI (1995: 177).

### CAPÍTULO III

## A COMPREENSÃO DO DIREITO HUMANO DO TRABALHO EM OPOSIÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO

Para compreender a impropriedade total da figura do contrato de trabalho como categoria jurídica para abarcar as relações de trabalho, é importante indagar da gênese da sua aplicação e dissecar seus componentes, retirar a máscara para observar, de perto, seu conteúdo.

DUSSEL<sup>316</sup>, tratando das formas de gestão do excedente de produção nos sistemas econômicos antigos, explica que toda produção humana tem excedentes, distinguindo-se de outras espécies por essa capacidade de produzir mais do que necessita para produzir e reproduzir sua vida, porém, é necessário guardar e gerenciar o excedente. Os sistemas econômicos tributários, segundo sustenta, foram os mais generalizados, com vigência na Ásia, Mediterrâneo, África, Meso-América e Império Inca, com semelhanças no manejo despótico dos tributos exigidos principalmente do campesinato, mediante dominação militar, política e cultural. Já no sistema econômico escravista, há uma dominação absoluta sobre a pessoa trabalhadora (desde o escravo, meios de produção, terra etc.), tendo por componente o senhor-livre e o sujeito que trabalha que é, por excelência, não livre. No sistema econômico do feudalismo europeu, o senhor feudal exerce a dominação sobre o servo através de um direito de domínio com certas responsabilidades: possui o controle completo dos bens do feudo e recebe o excedente na forma de tributo, enquanto o servo se liga ao feudo como totalidade econômica por sujeição coactiva, detendo o uso e usufruto de parte da terra, pagando tributo; em contrapartida, cabe ao senhor feudal garantir a defesa militar da comunidade.

Em continuidade, o sistema econômico capitalista, que tem por base a propriedade, permite o exercício de dominação sobre a pessoa trabalhadora, assalariada ou não, pelo detentor do capital através da propriedade dos meios de produção, da matéria-prima, do produto e do excedente<sup>317</sup>.

Como já explanado anteriormente, nesta transformação do sistema econômico feudal para capitalista, a classe emergente do mercantilismo, a burguesia, produz revoluções (Revolução Inglesa, Revolução Americana, Revolução Francesa) que mudam a organização política da sociedade. Um novo formato político-jurídico é necessário para legitimar o poder econômico burguês, surgindo o contratualismo.

Segundo FOUCAULT<sup>318</sup>, a nova distribuição espacial e social da riqueza industrial e agrícola que surgiu da revolução burguesa tornou necessários novos controles sociais no fim do século XVIII, em sistemas estabelecidos pelo poder,

---

<sup>316</sup> DUSSEL (2013: 73-75).

<sup>317</sup> DUSSEL (2013: 88).

<sup>318</sup> FOUCAULT (1996: 102).

pela classe industrial, pela classe dos proprietários, tomados dos controles de origem popular ou semi-popular, aos quais foi dada uma versão autoritária e estatal, dando origem à sociedade disciplinar.

WOLKMER<sup>319</sup> explica que, nessa passagem entre feudalismo e capitalismo, o liberal-individualismo que surge das novas relações sociais estruturadas na burguesia ascendente de uma sociedade mercantilista, dará origem a um princípio de legalidade contemplador da igualdade formal perante a lei, um princípio de generalidade (abrangência da norma a um número de pessoas em igual situação jurídica), um princípio de abstratividade (alcance do maior número possível de ações e acontecimentos) e um princípio de impessoalidade (abrangência da norma a uma quantidade indefinida de pessoas, de modo aleatório e não particularizado). O autor prossegue afirmando que o modelo liberal-individualista, com esteio nesses princípios de abstração, generalidade e impessoalidade, contempla a ideologia que oculta a desigualdade econômica entre os agentes, em nome de uma suposta igualdade formal perante a lei. Neste compasso, o contrato adquire relevo como “símbolo máximo do poder da vontade individual numa estrutura sócio-econômica capitalista”. Em referência a Orlando Gomes, o autor pontua que a liberdade contratual, enquanto pilar jurídico do sistema capitalista, é fonte de grande injustiça, escondendo a opressão real que a classe dominante impõe defendendo seus interesses materiais, pois a liberdade de contratar funciona só para quem tem esse poder, sendo impotência para quem contra ele se insurge, e que, obviamente, não tem liberdade de contratar quem possui como único bem a sua força de trabalho.

Com efeito, os escritos de GOMES<sup>320</sup>, na década de 1950, no Brasil, já ilustravam a impropriedade do uso da categoria jurídica do contrato, do modelo liberal do século XIX, para abarcar relações jurídicas emergentes de novas necessidades, não ajustáveis à sua moldura e aos princípios que o disciplinam, como os direitos sobre o emprego. Como explica, os conceitos de equidade, bons costumes, boa-fé, lealdade e confiança recíprocas, usura, lesão, imprevisão e abuso de direito se enfeixam para possibilitar uma elasticidade que amortecerá os atritos entre a lei e o fato.

---

<sup>319</sup> WOLKMER (2003: 26-31).

<sup>320</sup> GOMES (1952: 189-193). Nas palavras do autor, “(...) muito vinho novo tem enchido os velhos odres do direito”. E prossegue: “Juristas teóricos e práticos têm sempre uma camisa de força para imobilizar na categoria do contrato relações jurídicas emergentes de novas necessidades (...)”.

### III.1 A ideologia: as origens, impropriedades e incongruências do contratualismo laboral

As origens do contratualismo remontam, basicamente, a três filósofos principais (Hobbes<sup>321</sup>, Locke<sup>322</sup> e Rousseau<sup>323</sup>) que orientam a concepção de Estado, sociedade e governo com base na ideia de um contrato coletivo organizador da vida em sociedade, ante a existência de um estado natural anterior, de indivíduos em luta competitiva<sup>324</sup>. Para Hobbes, o caráter violento do ser humano, em seu estado natural, exigia a criação de um Estado com forte concentração de poder para permitir o convívio social. Locke defendia o contrato social a partir da consideração de que, no estado de natureza, as pessoas gozavam de igualdade, consoante lei natural, garantindo a possibilidade de terem posse sobre qualquer bem. Surge o Estado, então, como ente civil regulador da posse, através de leis, devendo atuar com obediência aos limites do direito de propriedade. Rousseau, por sua vez, idealizava o contrato social como forma de atender à vontade geral, já que o ser humano, no seu estado natural, seria bom, mas a sociedade o corromperia. No contrato social rousseauiano tem vigência a soberania política da vontade coletiva.

Sobre o tema, NEGRI<sup>325</sup> ensina que um elemento extremamente importante na constituição da ideologia é o pensamento de Hobbes, para quem a forma imediatamente política da exigência de apropriação capitalista está traduzida com perfeição na tradição contratualista.

WOOD<sup>326</sup>, falando sobre a fragmentação do mundo social, escreve que a passagem do feudalismo ao capitalismo na Inglaterra se operou sem a mediação de um absolutismo desenvolvido, diferente da França. Enquanto na França se entendia o Estado como unidade de famílias, escolas ou corpos corporativos, na Inglaterra o conceito de comunidade se vinculava a uma multidão de indivíduos livres. Em suas palavras:

*El reemplazo de las entidades corporativas por individuos en el papel de unidades constituyentes de la sociedad, la separación del Estado y la sociedad civil, la autonomización de la «economía» —todos ellos*

---

<sup>321</sup> Thomas Hobbes (1588-1679) foi matemático e filósofo inglês conhecido pelas obras “*Leviatã*” e “*Do Cidadão*”.

<sup>322</sup> John Locke (1632-1704), filósofo inglês que defendeu o individualismo liberal, escreveu, dentre outros, “*Cartas sobre a Tolerância*” e “*Dois Tratados sobre o Governo*”.

<sup>323</sup> Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo suíço, escritor do “*Discurso sobre a Desigualdade*” e “*Contrato Social*”. Foi um dos principais filósofos do Iluminismo. Suas ideias inspiraram a Revolução Francesa.

<sup>324</sup> DUSSEL (2013: 75-76) esclarece que o ponto de partida da descrição crítica de todo sistema econômico não equivalencial não concebe esse estado de natureza competitiva, conformado na narrativa mítica da economia clássica europeia, mas sim pela ótica da exterioridade do sujeito ante ao sistema ao qual será incorporado como uma totalidade.

<sup>325</sup> NEGRI (1993: 112).

<sup>326</sup> WOOD (2018: 116-117).

*factores asociados con la evolución del capitalismo inglés— llevaron a la atomización del orden social en discretas y separadas esferas teóricas. Y con ello se produjo un desprendimiento de las ciencias sociales de la historia, por el que las relaciones sociales y sus procesos pasaron a ser concebidos como sucesos naturales, que respondían a las leyes universales de la economía. Los desocializados individuos que surgirían de este tipo de visión mundial a duras penas podían ser explicados si no era en términos psicológicos, como un ejemplo de naturaleza humana perenne, transhistórica, abstraída de cualquier tipo de relaciones históricas y sociales específicas. Incluso la temprana economía política clásica, que aún reconocía la historia de un modo que sus sucesores dejarían de hacerlo poco después, se inclinaba a presentar una historia «etapista» de «formas de subsistencia», que culminaba en una «sociedad comercial» cuyas leyes resultaban ser las leyes propias de la naturaleza. (WOOD, 2018: 116-117)*

Portanto, nas origens do capitalismo na Europa, no país precursor da Revolução Industrial, a Inglaterra, o contratualismo e a fragmentação do mundo social sentaram as bases da dissociação do trabalho da pessoa (sujeito e objeto), e, por conseguinte, como um Direito Humano, abarcado na totalidade de uma sociedade comercial contratualista que, posteriormente, veio a se tornar hegemônica (*pax brittanica*). Práticas seculares que, arraigadas na mentalidade coletiva, tornam-se categorias difíceis de serem vencidas, ainda que dito e reafirmado que o trabalho é um Direito Humano.

A formação do Estado capitalista também é descrita por WOOD<sup>327</sup>, ao tratar dos componentes de uma cultura do capital, referindo que o Estado se converteu em um instrumento da classe capitalista industrial, cujas necessidades e resistências determinavam as ações estatais. A forma característica de intervenção estatal, afirma, se pautou na manipulação de todo o possível através da legislação, as relações de trabalhadores e capital em benefício da acumulação de capital. A autora cita como exemplo o Reino Unido, que liderou o mundo quanto ao tipo de intervenção que denegava aos trabalhadores qualquer tipo de acesso aos meios de subsistência e de reprodução, exceto através do contrato salarial. Explica que a maneira de fazê-lo foi atacando os direitos consuetudinários e os direitos comuns, com reforma das *Poor Laws* (leis de ajuda social aos pobres), e redefinição e instituição de castigos draconianos aos delitos contra a propriedade<sup>328</sup>.

---

<sup>327</sup> WOOD (2018: 129).

<sup>328</sup> NARVÁEZ HERNANDEZ (2006: 45-46) narra um processo similar nas Américas:

*La igualdad jurídica y la desamortización de bienes comunales tuvieron dos consecuencias inmediatas: Que el indio podía ahora disponer libremente de sí mismo en el mercado de trabajo y la tierra que ocupaba podía pasar a ser propiedad privada. De hecho estos efectos no ocurrieron en forma general y abstracta...la extensión de los cultivos comerciales, la penetración de los ladinos a las comunidades habitadas por la etnia indígena, la apropiación de la tierra por parte de aquéllos, la formación de grandes latifundios y el trabajo asalariado de los in-*



Por outra perspectiva, desde a França, o nascimento do “contrato de trabalho” como figura jurídica correspondente às relações de trabalho é descrita por SUPLOT<sup>329</sup>, que explica que o capitalismo, ao transformar produtos em mercadorias comparáveis pelo seu valor, também se apropriou das artes e dos ofícios, assimilando-os a uma noção única de trabalho apropriada para medição e intercâmbio, como exigência característica da economia de mercado, sempre reduzindo a quantidades tanto as pessoas quanto as coisas. O autor esclarece que o trabalho é uma condição e não um produto da atividade econômica, assim, sua consideração como um bem quantificável e intercambiável é uma ficção. Nestes termos, explana que somente o Direito podia instituir tal ficção e assim nasceu o Direito do Trabalho, com o entendimento de reger os intercâmbios de trabalho e de dinheiro. Nesta mesma direção coincide AVELÃS NUNES<sup>330</sup>, com contundente crítica:

O Direito do Trabalho sempre foi, com efeito, um direito criado pelo estado capitalista e este não é um estado acima das classes, mas um estado de classe, cuja função é a de garantir as condições de funcionamento do modo de produção capitalista, que não pode subsistir, como sublinha a Autora atrás referida, ‘sem divisão entre proprietários e não proprietários, sem exploração do trabalho alheio, sem tomada da mais-valia, sem instaurar uma relação de poder/dominação/disciplina-sujeição/obediência’. Esta é também a função do estado e do Direito do Trabalho nas sociedades capitalistas.

Buscando a origem normativa do contrato de trabalho, SUPLOT<sup>331</sup> assevera que a Revolução Francesa e a adoção, em 1791, do Decreto de Allarde e da Lei Le Chapelier<sup>332</sup>, aniquilando a organização corporativa, abriram o caminho para a contratualização das relações de trabalho, operada efetivamente no Código Civil de 1804, quando o trabalho deixou de ser uma parte do estatuto das pessoas para transformar-se em objeto de uma forma de arrendamento, a locação de obras, prevista no art. 1710, como um contrato no qual uma das partes se compromete a fazer algo para a outra em troca de um preço acertado.

---

*dios en estas fincas y haciendas...Así fueron estableciéndose nuevas relaciones económicas entre los indígenas y el resto de la población.*

<sup>329</sup> SUPLOT (2008: 17-19).

<sup>330</sup> AVELÃS NUNES (2015: 579). O autor, no texto transcrito, se refere a COUTINHO (2007: 167-180).

<sup>331</sup> SUPLOT, *op. cit.*, pp. 17-19.

<sup>332</sup> A Lei Le Chapelier, de 17 de junho de 1791, proibia as corporações de ofício e lideranças como presidentes, secretários, como também registros dos interesses comuns das profissões e atividades. Já o Decreto de Allarde estabelecia a liberdade de comércio, profissão ou arte, mediante o pagamento de um tributo único denominado de licença, cobrado sobre o instrumento de trabalho, excetuados os agricultores e funcionários públicos, extinguindo juizes, escrivães, mestres de comunidades de comércio, artes e ofícios. Vide anexo.

O Código napoleônico<sup>333</sup>, concebido na vigência do capitalismo agrário francês, no capítulo III (*Du Louage D'ouvrage et D'industrie*) do título VIII (*Du Contrat de Louage*) dedicou o art. 1710 e os arts. 1779 a 1799 para tratar do tema, dividindo essa contratação em três tipos principais, segundo o art. 1779: “contratação para trabalho e indústria”, que era “a contratação de pessoas que trabalham para servir alguém” (trabalhos domésticos, definidos nos arts. 1780 e 1781), contratação de condutores de pessoas e mercadorias por água e terra (arts. 1782 a 1786) e contratação de empreiteiros por orçamento ou contrato (arts. 1787 a 1799). As modalidades correspondiam a uma espécie de aluguel ou arrendamento de obras e serviços<sup>334</sup>.

MARX<sup>335</sup> sintetiza bem a passagem da estrutura econômica feudalista para a capitalista:

A estrutura econômica da sociedade capitalista surgiu da estrutura econômica da sociedade feudal. A dissolução desta última liberou os elementos daquela.

O produtor direto, o trabalhador, só pôde dispor de sua pessoa depois que deixou de estar acorrentado à gleba e de ser servo ou vassalo de outra pessoa. Para converter-se em livre vendedor de força de trabalho, que leva sua mercadoria a qualquer lugar onde haja mercado para ela, ele tinha, além disso, de emancipar-se do jugo das corporações, de seus regulamentos relativos a aprendizes e oficiais e das prescrições restritivas do trabalho. Com isso, o movimento histórico que transforma os produtores em trabalhadores assalariados aparece, por um lado, como a libertação desses trabalhadores da servidão e da coação corporativa, e esse é único aspecto que existe para nossos historiadores burgueses. Por outro lado, no entanto, esses recém-libertados só se convertem em vendedores de si mesmos depois de lhes terem sido roubados todos os seus meios de produção, assim como todas as garantias de sua existência que as velhas instituições feudais lhes ofereciam.

E a história dessa expropriação está gravada nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo. (MARX, 2015: 961-962)

SUPIOT<sup>336</sup> narra que, a partir da industrialização da França, como o trabalho na fábrica exigia a mobilização de um “exército industrial” – idealizado

---

<sup>333</sup> Fonte: consulta no original do Código Civil francês de 1804, disponível no sítio da Assembleia Nacional francesa. Obs.: traduzido. Recuperado de: <http://www.assemblee-nationale.fr/evenements/code-civil-1804-1.asp>

<sup>334</sup> No contexto histórico, apesar da Revolução Francesa ter abolido a escravidão (Lei 16 *Pluviôse*, de 4 de fevereiro de 1794), Napoleão Bonaparte a restaurou em 1802, atendendo pressão da aristocracia rural, e o Código Civil de 1804 a permitiu nas colônias, que seguiu sendo praticada até 1848. ANDRADE (2010: 410), em referência a TIGAR-LEVY (1978: 229-242), descreve que a tomada de poder da burguesia, após a Revolução Francesa, está expressa no Código napoleônico de 1804, a quem está exclusivamente a serviço, cujo caráter revolucionário se vincula à proclamação dos ideais da burguesia sobre contrato e propriedade, em clara traição das aspirações e interesses de trabalhadores e camponeses, a verdadeira força de choque da Revolução.

<sup>335</sup> MARX (2015: 961-962).

<sup>336</sup> SUPLOT (2008: 17-19).

sobre o modelo militar de subordinação -, o centro de gravidade do Direito do Trabalho se deslocará do arrendamento de obra para o arrendamento de serviços, originando uma nova figura contratual, a do contrato de trabalho.

NARVÁEZ HERNANDEZ<sup>337</sup> mostra a exportação do contrato de obra napoleônico para as Américas, no México, através das leis de reforma, como fruto das influências codificadoras francesas e que prepararam o terreno com o confisco de terras das comunidades indígenas, que posteriormente foram concedidas a caciques crioulos confabulados com os governos locais. O autor comenta que o absolutismo jurídico da Europa gerou no país o caciquismo jurídico, “porque a lei é rígida e sem coração, assim através de engano e no marco do Código Civil, milhares de pessoas eram escravizadas, ligadas a um contrato leonino que desde o início fazia contrair ao desafortunado que o realizava, uma dívida pessoal que se transmitia hereditariamente a seus descendentes”.<sup>338</sup> O endividamento se dava, relata, através da obrigação de compra dos bens básicos de consumo dos trabalhadores em um único lugar, aproveitando-se o fazendeiro<sup>339</sup> para especu-

---

<sup>337</sup> NARVÁEZ HERNANDEZ (2006: 45-46).

<sup>338</sup> Obs.: traduzido.

<sup>339</sup> Segundo o autor (NARVÁEZ, 2006: 44-45), no México, na base do sistema de fazendas se encontrava, muitas vezes, um contrato de serviços, na prática, uma situação equivalente a um estado de escravidão. Relata que a linguagem utilizada pelos fazendeiros era de “trabalhadores contratados”, a pessoa encarregada de vender aos peões, “agente de empregos”, que fazia uma “oferta de trabalho”. Em suas palavras:

*Tal vez el libro más paradigmático en este punto sea el de John Kenneth, quien haría un Reportaje de inicios del siglo XX que mostraba las contradicciones del sistema de contratación que reducía a miles de mexicanos a una verdadera situación de esclavitud, él mismo narra como el lenguaje utilizado por los hacendados era el de “trabajadores contratados” la persona encargada de vender a los peones “agente de empleos” quien hace una “oferta de trabajo” y se le da un anticipo con el cual se le ‘engancha’ “generalmente el obrero secuestrado en esta forma pasa por el formalismo de firmar un contrato...le pasan por los ojos un papel impreso y el enganchador lee con rapidez algunas frases engañosas allí escritas. Luego le ponen una pluma en la mano y le hacen firmar a toda prisa. La entrega del anticipo de cinco dólares es para afianzar el contrato y para que la víctima quede en deuda con el agente. Le suelen dar oportunidad para que los gaste en todo o en parte...con el objeto de que no pueda devolverlos cuando descubra que ha caído en la trampa. Los espacios blancos del contrato impreso para fijar el jornal u otros detalles son cubiertos después por mano del enganchador o consignatario”. (NARVÁEZ, 2006: 44-45)*

Mais adiante, cita um sistema similar no Perú:

*Ramos Núñez también se ha visto atraído por el tema en el caso peruano: después de la elaboración del “Reglamento interior de las haciendas de la costa” de 14 de octubre de 1825 que si bien contenía una invitación a tratar a los esclavos con humanidad todavía contemplaba su existencia y regulaba los castigos, pues bien este reglamento “supo-*

lar os preços com o fim de endividar e manter o peão no lugar de trabalho pela vida<sup>340</sup>. Por fim, acresce que existia a proibição de circular livremente, pois as autoridades intervinham em favor do patrão no caso do peão que não quisesse pagar suas dívidas fugisse; além de açoites e castigo por baixa produtividade e abuso físico aos familiares do trabalhador, tudo no marco legal de um contrato, um crédito e a obrigação de pagá-lo.

No Brasil, SOUZA<sup>341</sup>, em referência à obra de Gilberto Freyre (“Casagrande e Senzala”, de 1932), comenta que o período colonial compreendeu um modelo de organização econômica e social que tinha suas bases assentadas em um sistema econômico de produção escravocrata monocultor e organização social patriarcal<sup>342</sup> (a família patriarcal de união de português com mulher indígena).

---

*nia en realidad un inicio de una fase de consolidación de la esclavitud, cuya expresión legislativa culminante se hallaría en el propio Código Civil de 1852”. Este código contenía un artículo el cual permitía al esclavo de ser liberado siempre y cuando no colaborara con el enemigo político del gobierno en turno; así como la prohibición a chinos e indígenas de trabajar libremente sino a través de la locación de obra y bajo las condiciones que fácilmente se pueden suponer.*

*El Código serviría para legalizar aquellas situaciones de esclavitud de facto, explicaba Ramos Nuñez en su intervención al Congreso Internacional L’avenir de la Codification en France et en Amérique Latine, en Paris el 2 de abril del 2004: existía de hecho el contrato de enganche por el cual se ‘convencía’ a personas en extrema miseria a trabajar como esclavos situaciones sí bien al margen del Código Civil pero en el ámbito de su aplicación. (NARVÁEZ, 2006: 45)*

<sup>340</sup> Esta situação até hoje persiste no mundo, embora atualmente seja considerada ilegal, como servidão por dívida ou *truck-system*. No Brasil, é prevista como crime de redução à condição análoga à de escravo no art. 149 do Código Penal:

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

§ 2º. A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

I – contra criança ou adolescente;

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

<sup>341</sup> SOUZA (2018: 135).

<sup>342</sup> Idem, *ibidem*, pp. 141-142. O Autor aponta que este modelo de produção escravocrata monocultor e organização social patriarcal é o que aproxima todas as formas de sociedades escravocratas nas Américas, seja Brasil, Estados Unidos ou Cuba, segundo exemplifica.

Assim, o chefe de família patriarcal e senhor de terras e escravos era constituído autoridade absoluta nos seus domínios.

A independência de Portugal, no princípio do Século XIX, não impediu que este modelo de organização persistisse, pois apesar da primeira Constituição do país, de 1824<sup>343</sup>, não mencionar a escravidão, é fato que tampouco a proibia, de modo que, de 1822 a 1888 o Brasil teve dois regimes de trabalho: o escravocrata, com base nas Ordenações Filipinas, acolhidas pela Lei de 20 de outubro de 1823, e o das prestações/locações de serviços. O Título XVII, Livro IV das Ordenações Filipinas da ex-metrópole, permitia e regravava a compra e venda de escravos. Nessa normatividade, segundo LIMA<sup>344</sup>, estava também prevista a regulação das relações entre senhores e criados, formas e valores de pagamento de soldadas e serviços, sem abranger outras formas de trabalho que não o serviço doméstico e, ainda, de modo bem restrito. E conforme Souza<sup>345</sup>, multiplicava-se pelo país a figura “do dependente ou agregado formalmente livre e de qualquer cor”, pessoa que se encontrava em posição intermediária entre o senhor proprietário e o escravo, “um despossuído formalmente livre”, fruto da agricultura mercantil escravocrata, que “simultaneamente abria espaço para sua existência e os deixava sem razão de ser”, seres humanos dispensáveis por não incluídos nas funções produtivas essenciais, sobreviventes nas ocupações marginais da ordem produtiva.

O surgimento do contrato de trabalho no Brasil, lembra LIMA<sup>346</sup>, ocorreu com a edição da Lei de 13 de setembro de 1830, em consideração à imigração – embora o regramento fosse aplicável a brasileiros e estrangeiros -, sendo que, posteriormente, no contexto de tratados com a Inglaterra, sustenta o autor, foi editada a Lei 108, de 11 de outubro de 1837, destinada a trabalhadores imigrantes.

Analisando-se o primeiro diploma normativo, encontra-se uma espécie de contrato de prestação de serviços, com caráter draconiano<sup>347</sup>, em que o presta-

---

<sup>343</sup> Na análise do texto constitucional, encontra-se no art. 179 a garantia do exercício de qualquer gênero de trabalho e, com alguma similitude da lei francesa, Decreto de Allarde e Lei Le Chapelier, de 1791, a Carta do Império abolia as Corporações de Ofícios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres. O direito de livre reunião, no entanto, estava reconhecido.

<sup>344</sup> LIMA (2005: 331).

<sup>345</sup> SOUZA (2018: 155).

<sup>346</sup> LIMA, *op. cit.*, p. 331).

<sup>347</sup> Transcreve-se o texto, por curto, e dado seu interesse histórico:

Art. 1º. O contracto por escripto, pelo qual um Brasileiro, ou estrangeiro dentro, ou fóra do Imperio, se obrigar a prestar serviços por tempo determinado, ou por empreitada, havendo adiantamento no todo, ou em parte, da quantia contractada, será mantido pela fórmula seguinte:

Art. 2º. O que estipulou para si os serviços: 1º poderá transferir a outro este contracto, com tanto que não peiore a condição do que se obrigou a prestal-os, nem lhe seja negada essa transferencia no mesmo contracto; 2º não poderá apartar-se do contracto, emquanto a outra parte obrigada

dor de serviços (trabalhador) só poderia recusar-se ao trabalho, segundo seu art. 3º, restituindo adiantamentos e pagando a metade do que ganharia até o final do pacto, estando sujeito à prisão caso assim não procedesse (e depois da terceira prisão seria condenado a trabalhar preso até indenizar o contratante). Não obstante, o contratante (empregador) também poderia ser preso se não cumprisse o contrato e, após a determinação do juiz de paz para pagamento do devido, não o fizesse ou não prestasse caução suficiente.

Já a segunda lei<sup>348</sup>, destinada a regulamentar as relações de trabalho dos futuros colonos migrantes (não aplicável a trabalhadores brasileiros, portanto), instituiu o contrato de locação de serviços (“pelo qual algum estrangeiro se obriga como locador”, segundo o art. 1º), retirando essa possibilidade de prisão na recusa ao trabalho e mantendo, no lugar, a possibilidade de condenação à prestação de serviços em obras públicas (salvo se não houvesse obras públicas, limitada a prisão para pagamento da dívida do contrato a dois anos). A regulamentação era dotada de caráter um pouco mais protetivo (atenção a menores de 21 anos), instituição de curador de colonos, para assistência nos contratos, termo de quitação de serviços a ser dado pelo contratante (empregador) no final do pacto, possibilidade de prisão do contratante locatário (empregador) até pagar em dobro a rescisão, no caso de despedida arbitrária antes do término da avença (e se não tivesse condições de pagar, serviria de graça ao trabalhador até

---

aos serviços cumprir a sua obrigação, sem que lhe pague os serviços prestados, e mais a metade do preço contractado; 3º será compellido pelo Juiz de Paz, depois de ouvido verbalmente, á satisfação dos jornaes, soldada, ou preço, e á todas as outras condições do contracto, sendo preso, se em dous dias depois da condemnação não fizer effectivamente o pagamento, ou não prestar caução sufficiente.

Art. 3º. O que se obrigou a prestar serviços só poderá negar-se á prestação delles, emquanto a outra parte cumprir a sua obrigação, restituindo os recebimentos adiantados, descontados os serviços prestados, e pagando a metade do que mais ganharia, se cumprisse o contracto por inteiro.

Art. 4º. Fóra do caso do artigo precedente, o Juiz de Paz constringerá ao prestador dos serviços a cumprir o seu dever, castingando-o correccionalmente com prisão, e depois de tres correccões inefficazes, o condemnará a trabalhar em prisão até indemnizar a outra parte.

Art. 5º. O prestador de serviços, que evadindo-se ao cumprimento do contracto, se ausentar do lugar, será a elle reconduzido preso por deprecada do Juiz de Paz, provando-se na presença deste o contracto, e a infracção.

Art. 6º. As deprecadas do Juiz de Paz, tanto neste caso, como em qualquer outro, serão simples cartas, que conttenham a rogativa, e os motivos da prisão, sem outra formalidade mais, que a assignatura do Juiz de Paz, e seu Escrivão.

Art. 7º. O contracto mantido pela presente Lei não poderá celebrar-se, debaixo de qualquer pretexto que seja, com os africanos barbaros, á excepção daquelles, que actualmente existem no Brazil.

<sup>348</sup> Vide Anexo ao final.



o final do contrato), destinação dos juízes de paz para apreciação das ações derivadas dos contratos de locação de serviços, com decisão sumária em audiência (embrião da futura Justiça do Trabalho brasileira). Entretanto, caso o trabalhador ficasse enfermo e não pudesse honrar sua obrigação, o fato constituía justa causa para a rescisão do contrato sem pagamento de verbas. A explicação para o país tratar o trabalhador estrangeiro de forma mais equitativa e benéfica do que o nacional reside, possivelmente, no incentivo à imigração europeia para povoamento do território (com política eugênica de “branqueamento” da população<sup>349</sup>), como forma de demonstrar aos países originários alguma garantia às pessoas que se aventuravam em busca de uma vida melhor no novo mundo.

Posteriormente, o trabalho passou a ser tratado no Código Comercial de 1850<sup>350</sup>, com um Título dedicado a seu regramento (Título X, arts. 226 a 246), sob o nome de contrato de “locação mercantil”, definido no art. 226 como “o contrato pelo qual uma das partes se obriga a dar à outra, por determinado tempo e preço certo, o uso de alguma coisa, ou do seu trabalho”. A nova regulamentação mantinha, em linhas gerais, as normas anteriores, acrescentando que, pelos danos ocasionados no trabalho por imperícia ou erro do ofício, respondia o operário. Também disciplinava a empreitada e definia como ilícito administrativo o aliciamento de trabalhadores<sup>351</sup>. Ainda, o art. 19 do Título Único do Código cometia a competência para os Juízes de Direito do Comércio (Justiças ordinárias), na conformidade do Código e segundo o processo nele estabelecido, ainda que não interviesse na relação pessoa comerciante. Sem embargo, o art. 245 do Título X disciplinava que todas as questões resultantes de contrato de locação mercantil seriam decididas em juízo arbitral.

Em 1879, foi editado o Decreto 2827, de 15 de março, destinado a disciplinar o trabalho na agricultura e as empreitadas e serviços nas obras e fábricas a ela relacionadas, mantendo a regulação do trabalho nas demais atividades econômicas no Código Comercial, ao qual se reconhecia aplicação supletiva quanto às empreitadas e trabalhos nas obras e fábricas da agricultura. O De-

---

<sup>349</sup> Conforme LIMA–D’AMBROSO (2018: 33), o processo migratório brasileiro foi orientado pela doutrina da eugenia, buscando atrair imigrantes europeus para “melhoramento da raça”, entendendo-se, na época, que quanto mais “branca” fosse a pessoa, mais civilizada seria, e, por conseguinte, melhor trabalhadora. Nesse sentido, coincidem FRANCO–MOREIRA (2011: 18-19), afirmando que a pressão inglesa pelo término da escravidão, já nos primórdios da declaração de independência, estimulava debates no Congresso Nacional para a melhor forma de encaminhar o seu término, difundindo-se a ideologia do “branqueamento da raça” para construir uma nação nos moldes europeus.

<sup>350</sup> Lei 556, de 25 de junho de 1850. Vide Anexo. Fonte: sítio do Palácio do Planalto, Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Recuperado de: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/LIM/LIM556.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM556.htm)

<sup>351</sup> Conforme a redação do Código:

Art. 244. O comerciante empresário de fábrica, seus administradores, diretores e mestres, que por si ou por interposta pessoa aliciem empregados, artífices ou operários de outras fábricas que se acharem contratados por escrito, serão multados no valor do jornal dos aliciados, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, a benefício da outra fábrica.

creto retornava a nomenclatura da “locação de serviços”, com algum grau de proteção à classe trabalhadora em regulamentação mais extensa (86 artigos). A nova lei regravava outras formas de contratação, que persistem até hoje no Direito brasileiro sem a característica de trabalho regulamentado: a “parceria agrícola” e a “parceria pecuária”<sup>352</sup>. O Decreto ainda criava um protótipo de Direito Penal do Trabalho com um capítulo dedicado a regular a matéria penal, constante de tipos penais que tinham por sujeito ativo do delito apenas o locador de serviços (trabalhador), que respondia criminalmente desde a ausência injustificada até a recusa ao trabalho. O aliciamento (art. 80), que era definido pela “sedução ao serviço” de pessoa já comprometida em trabalhar para outrem<sup>353</sup>, passava a ser criminalizado, e era o único tipo penal que não tinha por sujeito ativo o trabalhador.

Assim as coisas, passaram-se 66 anos desde a independência até que o país, o último a abolir a escravidão nas Américas, por resistência de suas elites

---

<sup>352</sup> A primeira, uma espécie de arrendamento rural para cultivo, partilhando-se a colheita. A segunda, cessão de animais para criação, mediante divisão dos lucros. Atualmente, as modalidades encontram-se disciplinadas no Estatuto da Terra (Lei 4504/64, art. 92) como um contrato expresso ou tácito para “posse ou uso temporário da terra, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa”, seguindo a regulamentação da própria lei. (Fonte: sítio do Palácio do Planalto. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Recuperado de: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L4504.htm#tituloiicapituloivse%C3%A7aoi](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4504.htm#tituloiicapituloivse%C3%A7aoi)). O Estatuto da Terra, editado em 30 de novembro de 1964, trata-se de institucionalidade da ditadura militar instalada no país com o golpe de 01 de abril do mesmo ano – foi assinada pelo marechal Humberto de Alencar Castello Branco, na condição de Presidente da República de fato. Em 2007 recebeu atualização através da Lei 11443, de 05 de janeiro, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Vale dedicar umas linhas sobre a origem da “parceria”. Conforme FRANCO–MOREIRA (2011: 18-20) o colapso que se avizinhava do sistema de trabalho baseado na escravidão, por força de pressão da Inglaterra, já fazia sentir nos cafezais paulistas, após a declaração de Independência, a falta de mão-de-obra escrava, determinando a procura de sua substituição. Assim, em 1847, o senador e fazendeiro Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, trouxe 423 colonos da Alemanha, contratando-os para trabalho em fazenda no interior da então província de São Paulo, através do “adiantamento” da quantia correspondente ao transporte entre Hamburgo até o porto de Santos e valores para subsistência inicial, de modo que o novo colono começava com “dívidas” decorrentes da própria imigração. O fazendeiro criou a empresa Vergueiro & Cia Ltda., através da qual firmava contratos com os colonos, estipulando o pagamento dessas “dívidas” acrescidas de juros de 6% ao ano, em modelo no qual determinava às famílias cafezais para cultivo, comprometendo-se à remuneração com metade do valor líquido obtido com a venda do produto, tendo por base a Lei de 1830. Essa modalidade de “contratação”, que, lamentavelmente, persiste até hoje, é, em realidade, uma forma de desproteção e invisibilização do Direito Humano ao Trabalho de pessoas que laboram no campo (campesinos), a quem não se permite reconhecer juridicamente a possibilidade de partilha dos meios de produção na qualidade de trabalhador (somente como “parceiro”, “meeiro”, “arrendatário”, “comodatário” etc.).

<sup>353</sup> Ou seja, na visão de que o trabalho era bem apropriável, logo, quem violasse o direito de propriedade de outrem sobre o trabalho alheio, cometia uma espécie de delito contra o patrimônio (“furtiva”, mediante “sedução”, trabalhadores de outra pessoa).

agrárias<sup>354</sup>, proibisse a mercantilização das pessoas. Somente com a assinatura da Lei Áurea em 1888 pela Princesa Isabel, adveio o basta com o veto ao direito de propriedade sobre outro ser humano, abolindo-se o contrato de compra e venda de pessoas. Em 1916, o Código Civil regulamentou o contrato de locação de serviços. Nesta época, o Brasil era um país de economia primária, agrária e extrativista, com escassa regulamentação laboral no período pós abolição da escravatura, e que assim permaneceu até 1930, quando, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, teve início a estruturação da proteção laboral no país (com a criação do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, reconhecimento dos sindicatos urbanos em 1932, e a constitucionalização dos direitos sociais na Carta de 1934 (que criou o salário mínimo, repouso semanal aos domingos, a Justiça do Trabalho e outros direitos trabalhistas), de forma contemporânea ao início da industrialização do Brasil. Em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho, no governo Vargas, disciplinou o contrato de trabalho.

Nas palavras da Equipe do Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul (2011: 142):

A chamada 'Questão Social' foi um dos pontos centrais da plataforma da Aliança Liberal que, derrotada nas urnas, conquistou o poder pela via da chamada 'Revolução de 1930'. O objetivo central era o de industrializar o País, tornando-o uma Nação moderna, que rompesse com suas heranças escravocratas, patriarcais e monocultoras. *Par i passu*, integrar os trabalhadores via positivação de direitos sociais reivindicados e construir políticas públicas de caráter social voltadas ao operariado urbano brasileiro era fundamental. Uma das primeiras iniciativas do recém empossado Presidente Getúlio Vargas que, aliás, fora Presidente do Estado do Rio Grande do Sul entre 1928 e 1930, herdeiro das tradições positivistas de Julio de Castilhos e Borges de Medeiros, foi a criação do MTIC.<sup>355</sup>

...

De fato, nos primeiros anos da década de 1930, foi pródiga a positivação de leis sociais de proteção ao trabalho e à seguridade social, incorporando, por um lado, as reivindicações operárias da época; por outro, privilegiando um dos atores fundamentais no processo de industrialização: os trabalhadores; por outro, ainda, buscando harmonizar os interesses em conflito entre capital e trabalho, num sentido integrador, próprio do ideário positivista. (2011: 142)

Portanto, em todos os tempos, permaneceu a ideia de dissociação entre sujeito e objeto (pessoa e trabalho), seguindo o Brasil, como nos demais países, a forma jurídica primitiva (e já secular) de mercantilização do corpo das pessoas

---

<sup>354</sup> A resistência seguiu após a abolição e as elites, insatisfeitas com a política do Imperador D. Pedro II, que vetou a exploração de mão-de-obra de graça, provocaram o golpe de 1889, com a proclamação da República, instalando-se a República Velha ou também chamada República do Café com Leite, que se constituiu de alternância de elites agrárias no poder (proprietários de cafezais em São Paulo e estancieiros de Minas Gerais). Ou seja, naquele momento, a insatisfação com a monarquia não se deu por parte do povo, mas das classes dominantes.

<sup>355</sup> MTIC corresponde à sigla do então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

desposuídas via “contrato de trabalho”, inobstante o avanço protetivo das leis sociais.

Cabem algumas considerações na análise histórica deste regramento brasileiro do protótipo de contrato de trabalho do início do Século XIX, no sentido de que, embora evidentemente não seja nem de longe similar ao grau de proteção da norma de direito material atual à classe trabalhadora, parecia, em sua origem, ser muito mais protetivo quanto à efetividade do cumprimento das obrigações principais, no particular, no tocante à remuneração (alimento, sobrevivência da pessoa que trabalha) e no respeito à sua continuidade (segurança, estabilidade no trabalho). Isto porque o não pagamento da prestação de serviços e a despedida arbitrária sujeitava o empregador (então contratante ou locatário) à possibilidade de prisão em juízo sumário até pagar a dívida com o trabalhador (ou até mesmo prestar serviços a este, na impossibilidade), algo que se perdeu no tempo e se traduz, vagamente, nas reminiscências do Decreto-Lei 368/68 (da época da ditadura militar e ainda em vigor atualmente), cujo art. 4º estabelece como contravenção penal a conduta empresarial de distribuir *pro labore*, lucros, dividendos ou qualquer outra forma de remuneração aos sócios quando houver mora salarial<sup>356</sup>. Não por casualidade o art. 7º, 7 da Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece a possibilidade de prisão civil por dívida de caráter alimentar. Aliás, cronicamente sofismada a aplicação do preceito convencional no Brasil, no âmbito das relações de trabalho, porque a máscara do contrato faz com que a leitura se contente apenas com a proibição de prisão por dívida derivada de uma “obrigação contratual”, e não com a permissão excepcional de restrição de liberdade como instrumento de efetividade de uma das necessidades mais básicas do ser humano (aquilo que em sua gênese é): um direito alimentar da pessoa que usa a força de trabalho para sobreviver.

Este contexto reforça que a forma contratual estabelecida para as relações de trabalho (compra e venda para escravos, locação de serviços para não escravos, atual contrato de trabalho), instrumento da sociedade mercantilista nascida do capitalismo (agrário ou industrial), conveniente à acumulação de capital para legitimar juridicamente a exploração do trabalho alheio, sempre teve incongruências em si mesma, já que em sua origem a normatividade histórica reconheceu a importância do salário como fonte de vida de quem trabalha como valor superior à liberdade, como também a necessidade de manutenção, estabilização do emprego, e assistência estatal a pessoas em condições de vulnerabilidade (colonos migrantes), notas distintas de direitos cuja gênese é a

---

<sup>356</sup> Embora o art. 7º da Constituição de 1988 define que constitui crime a retenção de salários, o dispositivo constitucional nunca foi regulamentado, permanecendo o regramento retórico e insuficiente da ditadura militar, consoante o vigente Decreto-Lei 368/68. Diz-se retórico, porque não basta a mora salarial para a caracterização da contravenção penal (e não o crime, forma penal mais grave e prevista constitucionalmente como categoria adequada à conduta de retenção salarial), há de ser comprovada a distribuição de *pro labore*, lucros, dividendos ou outra forma de remuneração aos sócios no período da retenção de salários.

proteção da vida humana e de uma existência digna, e que não podem ser “contratualizados”.

Desde logo, registram-se algumas conclusões importantes: o direito de remuneração pelo trabalho é condição de sobrevivência humana, derivado do direito à vida, tem inegável caráter alimentar, e, portanto, se configura como um Direito Humano do Trabalho superior à liberdade e à propriedade, conforme estabelecido na CADH. A proibição de escravidão demonstra que a liberdade é um bem superior à propriedade, e a leitura do Direito Humano de liberdade da pessoa que trabalha faz, no mínimo, questionar a legitimidade do direito contratual do empregador (que é derivado da propriedade) de “dirigir a atividade econômica e comandar a prestação de serviços” (poder hierárquico), como também o poder disciplinar, de “punir” a pessoa trabalhadora (este desdobramento do direito de propriedade, inclusive, com muito mais razão deve ser questionado sob a ótica humanista crítica, já que, como visto, nasceu da necessidade de organização da força de trabalho como exército para otimizar a produção industrial e, mesmo na ótica da ficção jurídica do contrato, não detém uma de suas características, que é o sinalagma contratual, ou seja, reciprocidade, já que quem trabalha não pode punir o empregador por suas faltas durante a relação de trabalho.

DUSSEL<sup>357</sup>, de outro prisma, mostra a iniquidade do contrato laboral:

*Es decir, el poseedor del dinero paga la fuerza de trabajo (igual al salario), pero además usa parte de la actividad del sujeto humano o del trabajo vivo mismo, que no recibe pago alguno por ese plus-trabajo ejercido en un plus-tiempo (más allá del tiempo necesario para reproducir el valor del salario, como ya lo hemos expresado). En el plus-tiempo se pone trabajo impago (unbezahlte). Esto significa que el contrato no era equitativo (aunque su inequidad permanece oculta bajo el manto de un fetichismo esencial a todas las teorías económica capitalistas), sino que uno pone más (el trabajador objetiva plusvalor no pagado) que el otro (el que sólo paga el salario como precio de la fuerza de trabajo). (DUSSEL, 2013: 94-95).*

Por outro lado, o contrato, na regulação do trabalho, não atende a um elemento essencial de validade, a licitude do objeto, pois os Direitos Humanos são inalienáveis, não constituintes de *res in commercio*<sup>358</sup>. Ainda, o desequilíbrio

---

<sup>357</sup> DUSSEL (2013: 94-95).

<sup>358</sup> Abstraindo a impropriedade do uso de uma criação jurídica romana (o contrato), originada de uma cultura escravocrata como era a de Roma antiga, para disciplinar Direitos Humanos, mesmo assim cabe apontar que até os romanos faziam a distinção entre *res in commercio* e *res extra commercium*, sendo que esta última englobava bens que não podiam ser alienados. CRISTOBAL MONTES (1965: 95), explica que na categoria de *res extra commercium humani iuris* se encontrava uma distinção entre *res communes omnium*, *res publicae*, *res universitatis*, sendo que na *res commune omnium* localizavam-se as coisas que, por Direito natural, eram comuns a todos, como o ar, a água, o mar e as costas do mar, que todos podiam usufruir e não eram suscetíveis de apropriação. O autor refere que o direito de usar e gozar das coisas comuns era considerado um atributo da personalidade humana. Portanto, aqui se pode encontrar um embrião do direito humano ao meio ambiente (natu-

nos contratos é causa de sua nulidade (como numa troca entre bens de valores desproporcionais), sendo o pacto laboral a relação mais distintiva da ocorrência *ab ovo* de disparidade entre a mais valia extraída da prestação de serviços e a remuneração paga pelos mesmos. Ou seja, por várias perspectivas, mesmo as civilistas, não se encontra nenhuma justificativa para manter a forma jurídica mercantilista do final do século XVIII, início do século XIX, como categoria apta a reger Direitos Humanos do Trabalho, senão como odiosa ideologia contida na legislação inferior e não superada pela doutrina e jurisprudência, estruturadas desde um olhar repetitivo e acrítico, e conformado à reprodução de relações de poder e dominação do passado.

Destarte, observada a gênese do contrato de trabalho (e seus antecedentes contratos de compra e venda e de locação de serviços), e as inúmeras injustiças e crimes acobertados por esta máscara ao longo da história, percebe-se que a ficção jurídica do pacto laboral possui características absolutamente incompatíveis com a natureza dos Direitos Humanos, e é no mínimo curioso que esta criação dos primórdios da revolução industrial sobreviva contemporaneamente. Quanto a essas características, cabe citar novamente a descrição de SUPLOT, ao explicar que o contrato laboral repousa na ficção de uma separação entre o trabalhador que se obriga e o trabalho, objeto de sua obrigação, ficção esta que é a condição da alienação contratual do seu trabalho e permite tratar o assalariado tanto como sujeito quanto objeto do contrato. O autor explica que essa ficção localiza o corpo da pessoa trabalhadora no domínio dos bens, das coisas negociáveis, valendo transcrever suas palavras a respeito: “(...) apesar de que nosso direito proíbe que seja tratado como coisa”.<sup>359</sup>

Sobre a questão da separação do trabalhador do trabalho, escreveu DEBORD<sup>360</sup>:

Com a separação generalizada do trabalhador daquilo que ele produz perde-se todo ponto de vista unitário sobre a atividade realizada, perde-se toda a comunicação pessoal direta entre os produtores. Na senda do progresso da acumulação dos produtos separados, e da concentração do processo produtivo, a unidade e a comunicação tornam-se atribuições exclusivas da direção do sistema. O êxito do sistema econômico da separação significa a *proletarização do mundo*. (DEBORD, 2003: 17)

---

reza), com sua característica de inalienabilidade. *Mutatis mutandis*, fazendo uso da originalidade da ideia romana com sua atualização para os tempos atuais, é possível ponderar, também, que o trabalho é um atributo da personalidade humana e dela inseparável

<sup>359</sup> SUPLOT (2008: 36). Obs.: traduzido.

<sup>360</sup> DEBORD (2003: 17).



Também NIETZSCHE<sup>361</sup>, DUSSEL<sup>362</sup> e LUKÁ CZ<sup>363</sup>. Este último menciona a impossibilidade de separação do sujeito (trabalhador) do objeto (trabalho), de fenômeno de essência e de reificações e autoreificação da pessoa, na perspectiva ontológica do ser social.

Ou, de uma forma mais didática, ensina RODOTÀ (2014) sobre a constituição da pessoa:

*La constitucionalización de la persona se cumple, pues, en la importancia atribuida a un cuerpo reconstruido en su unicidad, justamente para que la persona quede garantizada en su plenitud. No nos hallamos frente a una simple regla de convivencia entre tres dimensiones —física, psíquica, electrónica—. Lo que se delimita es un sustrato que actúa sobre la construcción misma de la noción de persona.*

*El hombre ya no es un ser descarnado sino un ser reconducido hacia las múltiples valencias que le atribuyen su ser en sociedad, empezando por la física. Se confirma así que la persona remite a un sistema de re-*

---

<sup>361</sup> Assim escreve NIETZSCHE (2017: 126-127):

*206. Estado imposible – Pobre, alegre e independiente son tres condiciones que se encuentran reunidas en una persona por excepción; pobre, alegre y esclavo son condiciones que se encuentran también, y es lo mejor que puede decirse de los obreros de la esclavitud de las fábricas, suponiendo que no les parezca vergonzoso el ser utilizados como el tornillo de una máquina. ¡Vaya noramala la creencia de que con un salario más elevado se remediaría lo que hay de esencial en su miseria, es decir, su servidumbre impersonal; vaya noramala el dejarse persuadir de que con un aumento de esa impersonalidad, por medio de las ruedas de la máquina de una nueva sociedad, la vergüenza de la esclavitud podría transformarse en virtud; vaya noramala el tener un precio mediante el cual se deja de ser persona para convertirse en tornillo! ¿Sois cómplices de la presente locura de las naciones que lo que quieren es producir mucho y enriquecerse todo lo posible? (Obs.: grifou-se).*

<sup>362</sup> Nas palavras de DUSSEL (2013: 98):

*(...) la alienación esencial que constituye el capital: cuando el trabajo vivo humano es considerado una cosa apropiable por el pago del «valor del trabajo» (esta última una categoría ficticia, ya que es la «fuerza de trabajo» la que tendría valor, que puede pagarse como salario, pero que de todas maneras nunca podría ser poseída real y legítimamente por otra voluntad que la voluntad libre del mismo trabajo vivo).*

<sup>363</sup> Conforme LUKÁ CZ (2013: 482):

A nova forma objetiva “fantasmagórica” do valor de troca cria aqui – de maneira crescente com o desenvolvimento econômico – reificações cada vez mais incrementadas, cada vez mais universais, que, nos seus estágios mais elevados, no capitalismo, já se convertem diretamente em estranhamentos, em autoestranhamentos. Basta indicar que, para o trabalhador, a sua própria força de trabalho se converte em mercadoria, em valor de troca, que ele é obrigado a vender no mercado como se faz com qualquer outra mercadoria.

*laciones, y tal vez la mejor aclaración sobre este punto la encontramos en una página de Jung donde se dice que «la persona debe entenderse como una necesaria mediación entre la existencia individual y la colectiva [...]». (RODOTÀ, 2014: 152)*

Logo, é uma abstração total a separação da pessoa (indivíduo) daquilo que executa, o trabalho (existência coletiva), a qual, obviamente, só tem uma finalidade: mascarar, sob nova forma jurídica, as operações de compra e venda de pessoas proibidas desde o término da escravidão.

Importante destacar que a expressão contrato de trabalho não contém apenas a ideologia da servidão mascarada na fórmula contratual. WOOD<sup>364</sup> faz interessante análise do patriarcado como substrato da ilusão do contrato para manutenção da relação de poder sobre a classe trabalhadora, porquanto a concepção patriarcal da hierarquia e da autoridade era adaptável de forma conveniente aos requisitos do capitalismo, podendo manter uma desigualdade substantiva sem incompatibilidade com uma igualdade jurídico-formal. Explica que isso era útil para definir as relações entre amo e servo e os princípios patriarcais na manutenção da relação contratual entre capital e trabalho, já que o rápido desenvolvimento do capitalismo impulsionou a concepção patriarcalista da relação amo-escravo, constituindo o apoio ideológico mais rapidamente acessível e adaptável para a desigualdade do contrato salário-trabalho.

O resultado, pontua WOOD<sup>365</sup>, é que o progresso da democracia sob o capitalismo foi acompanhado por um declive na importância da cidadania e a aquisição de direitos políticos completos por parte dos trabalhadores não teve o mesmo efeito transformador que o acesso à cidadania poderia ter feito, por exemplo, na Grécia antiga, em relação aos escravos e camponeses. Também afirma que a igualdade jurídica não teve o mesmo significado para o trabalhador assalariado da que tinha para o camponês feudal, assim como a igualdade jurídica e o sufrágio universal não negam o princípio constitutivo do capitalismo, a relação entre apropriadores e produtores, entre capital e trabalho. “Se o capitalismo pode tolerar o corpo cidadão inclusivo é porque também reduz, deve reduzir o valor da cidadania e não poderia suportar uma restauração desse valor”<sup>366</sup>, conclui.

Evidentemente, não há a menor possibilidade de enquadrar, nem sequer de compatibilizar, do ponto de vista dos Direitos Humanos, o trabalho humano num contrato. HARVEY (2014) lembra as explorações comuns impostas pelo capital no contrato:

*Las condiciones del contrato laboral impuesto pueden violar normas legalmente establecidas, y también puede haber transgresiones de todo tipo: incumplimiento del pago de los salarios, ampliación forzada de la jornada laboral, multas por supuestas faltas. Las condiciones del*

---

<sup>364</sup> WOOD (2018: 168-169).

<sup>365</sup> Idem, *ibidem*, p. 211.

<sup>366</sup> Obs.: traduzido.

*proceso de trabajo pueden hacerse intolerables o muy peligrosas (exposición a sustancias tóxicas, incremento forzado de la intensidad del trabajo más allá de las capacidades humanas razonables). (HARVEY, 2014: 82-83).*

E violações de limitação de jornada (o primeiro Direito Humano do Trabalho obtido pela classe operária), trabalho não remunerado, descontos irregulares, condições inseguras, perigosas, insalubres de trabalho, exigência de produtividade sobre-humana são todas transgressões de Direitos Humanos do Trabalho.

Vale transcrever as belas palavras de GOMES<sup>367</sup>, em sua crítica ao “contrato” como categoria jurídica central do Direito do Trabalho:

No DIREITO DO TRABALHO o fenômeno da falta de correspondência entre a substância e a forma manifesta-se em alto grau, a partir da própria relação que constitui seu objeto. Tratada como se fora um contrato, refoge a esse envoltório com tamanha desenvoltura, que seus intérpretes, impressionados com as particularidades, invertem os termos do problema, entreendo a decadência do contrato onde há apenas a impropriedade de uma categoria que, todavia, não pode ser substituída porque o conteúdo do vínculo jurídico se abarrotava de elementos institucionais por uma antecipação que não coaduna com a organização privada das empresas. Por outro lado, sendo uma incorporação em massa de marginais do direito, cuja inferioridade econômica precisava ser compensada com uma superioridade jurídica, distendeu-se como um largo manto protetor, tecido, porém, com o mesmo fio de que se faz o véu que recobre as instituições clássicas.

Nele, mais do que em outro domínio, a noção de equidade penetra fundo, para emprestar maleabilidade a seus preceitos, e muitos daqueles amoteadores do direito civil ditam princípios e substancializam regras, numa objetivização crescente e sistemática. (GOMES, 1952: 194)

Como conclui GOMES<sup>368</sup>, o Direito do Trabalho “exterioriza-se como instrumento de desarticulação das coordenadas ideológicas da ordem jurídica individualista”, mas permanece vinculado a fatores que condicionam o seu desenvolvimento em limites pequenos. E na aparência vistosa de um processo revolucionário, assevera, germinam instituições conservadoras. Assim, enquanto inovações técnicas tomam o aspecto de uma originalidade progressista, nenhuma ultrapassa o quadro da juridicidade capitalista, e tendências objetivadas em forma de leis que parecem traduzir alterações estruturais – citando o exemplo do direito à participação nos lucros da empresa e ao compartilhamento de gestão do empreendimento -, não promovem nenhuma transformação radical, permanecendo intactos todos os elementos básicos do sistema capitalista de produção, atingido somente de leve.

---

<sup>367</sup> GOMES (1952: 194).

<sup>368</sup> Idem, *ibidem*, p. 195.

### **III.2. O anticontratualismo de Alain Supiot**

SUPIOT, na década de 1990, aporta uma crítica ao Direito do Trabalho, fundamentando que o tratamento do trabalho como um bem ou coisa negociável e destacável do trabalhador é, em realidade, uma ficção na qual se apoia a economia de mercado. Assim, o Direito do Trabalho se constitui de um *composé* de opostos, entre a pessoa e a coisa, entre a liberdade e a subordinação, entre o coletivo e o individual, o público e o privado, a lei e o contrato etc. O autor<sup>369</sup> retrocede na história para elucidar a eleição do contrato como forma jurídica para a regulação do trabalho humano:

*La conceptualisation juridique de la relation de travail s'est alimentée en Europe à deux traditions culturelles différentes - la romaniste et la germanique - dont elle a opéré d'une certaine manière la synthèse. La culture juridique romaniste connaissait la locatio hominis, variété de louage des choses, par laquelle un maître (dominus) concédait temporairement à autrui la jouissance d'un esclave moyennant rétribution. L'opération par laquelle un homme libre se mettait lui-même au service*

<sup>369</sup> SUPIOT (2011: 56-57). Tradução livre:

A conceitualização jurídica da relação de trabalho se alimentou, na Europa, de duas tradições culturais diferentes - a romanista e a germânica - das quais ela operou, de uma certa maneira, a síntese. A cultura jurídica românica conhecia a *locatio hominis*, variedade de aluguel de coisas, pela qual um senhor (*dominus*) concedia temporariamente a outros o gozo de um escravo mediante retribuição. A operação pela qual um homem livre se colocava ele mesmo ao serviço de outros - a *locatio operarum* - era excepcional e considerada como degradante. Ela foi concebida pelos juristas romanos segundo o modelo da *locatio hominis*. Este homem livre, *locat se*, alugava-se a si mesmo, como o senhor aluga a seu escravo, *locat servum*. Está sob uma forma semelhante que se encontra entre os juristas franceses do Antigo Regime, como Pothier, que classificou o aluguel de serviços diretamente entre as diferentes espécies de aluguel de coisas. (...)

Os códigos inspirados na ideologia revolucionária de 1789 vão, ao contrário, dar a essa análise contratual, um lugar cardeal na conceitualização jurídica da relação de trabalho. Trata-se, com efeito, para eles, de arruinar a organização corporativa do trabalho. Face à subordinação pessoal e hierárquica que caracterizava essa organização, a análise contratual permite afirmar a liberdade individual do trabalhador, tornando-o comerciante de sua própria força de trabalho. É assim que o Código Napoleônico, que foi aplicado não apenas na França, mas também na Bélgica, Luxemburgo, Itália, parte da Alemanha, como então o Código Civil holandês de 1838, depois o Código Civil italiano em 1865, e até mesmo o BGB alemão em 1896, reclamaram o aluguel de serviços romano, cuja tradição havia sido preservada por juristas. Para que este contrato fosse usado para essa liberação individual dos trabalhadores, seria suficiente retirá-lo da categoria de aluguel de coisas onde Pothier ainda o colocava, e torná-lo uma espécie autônoma de contrato de aluguel, como visto na taxonomia do código napoleônico. (SUPIOT, 1994: 56-57)

*d'autrui - la locatio operarum - était exceptionnelle, et considérée comme avilissante. Elle fut conçue par les juristes romains sur le modèle de la locatio hominis. Cet homme libre, locat se, se loue lui-même, comme le maître loue son esclave, locat servum. C'est sous une forme semblable qu'on la retrouve chez les juristes français d'Ancien Régime, comme Pothier, qui rangeait directement le louage de services parmi les différentes espèces de louage de choses. Mais cette analyse n'a guère d'intérêt que doctrinal, à cette époque où la plupart des relations de travail s'inscrivent dans le cadre juridique et institutionnel des corporations de métier.*

*Les codes inspirés de l'idéologie révolutionnaire de 1789 vont au contraire donner à cette analyse contractuelle une place cardinale dans la conceptualisation juridique de la relation de travail. Il s'agit en effet pour eux de ruiner l'organisation corporative du travail. Face à la subordination personnelle et hiérarchique qui caractérisait cette organisation, l'analyse contractuelle permet d'affirmer la liberté individuelle du travailleur, en en faisant le négociant de sa propre force de travail. C'est ainsi que le code Napoléon, qui s'est appliqué non seulement en France, mais aussi en Belgique, au Luxembourg, en Italie, dans une partie de l'Allemagne, comme ensuite le code civil néerlandais de 1838, puis le code civil italien en 1865, et même encore le BGB allemand en 1896, se sont réappropriés le louage de services romain, dont la tradition avait été gardée par les juristes. Pour que ce contrat puisse servir à cette libération individuelle des travailleurs, il avait suffi de le sortir de la catégorie du louage des choses où le rangeait encore Pothier, et d'en faire une espèce autonome de contrat de louage, comme on le voit dans la taxinomie du code Napoléon. (SUPIOT, 2011: 56-57)*

Em outra obra e quase vinte anos mais tarde, SUPLOT<sup>370</sup>, aprofundando a perspectiva anticontratual, aponta que a larga tradição, que atribui ao adágio *pacta sunt servanda* o valor de dogma em uma sociedade ordenada, é responsável pela normalização jurídica de uma cultura que enaltece o contrato, custe o que custar, como se fosse uma missão dita civilizadora, adaptável a todas as épocas e a todos os povos, por virem do Direito Natural e da razão natural (respeito à palavra dada). Afirma que a crença na mundialização (globalização) celebra as virtudes do livre comércio e do contrato como flexível, igualitário e emancipador, em oposição à lentidão do Estado e da Lei, considerada rígida, unilateral e opressora<sup>371</sup>. Em virtude disso, deriva a ideologia do contratualismo, como faceta da ideologia econômica, que tenta reduzir o direito imperativo a tão somente o necessário para a execução dos contratos, a ideologia segundo a qual “o vínculo contratual seria a forma mais evoluída do compromisso social e que tenderia a substituir em todas as ordens os imperativos unilaterais da lei”<sup>372</sup>.

---

<sup>370</sup> SUPLOT (2012: 121-126).

<sup>371</sup> Idem, *ibidem*, p. 127.

<sup>372</sup> Idem, *ibidem*, p. 128. Obs.: traduzido.

Na primeira metade do século XIX, ENGELS (2010), por sua vez, denunciou o nascimento da ideologia mercantilista que funda o “contratualismo laboral”:

Todas as relações humanas são subordinadas ao imperativo do lucro e aquilo que não propicia ganhos é visto como algo insensato, inoportuno e irrealista. É por isso que a Economia Política, ciência que se ocupa dos meios de ganhar dinheiro, é a disciplina favorita desses traficantes – são todos economistas.

A relação entre o industrial e o operário não é uma relação humana: é uma relação puramente econômica – o industrial é o “capital”, o operário é o “trabalho”. E quando o operário se recusa a enquadrar-se nessa abstração, quando afirma que não é apenas “trabalho”, mas um homem que, entre outras faculdades, dispõe da capacidade de trabalhar, quando se convence que não deve ser comprado e vendido enquanto “trabalho” como qualquer outra mercadoria no mercado, então o burguês se assombra. Ele não pode conceber uma relação com o operário que não seja a da compra-venda; não vê no operário um homem, vê *mãos (hands)*, qualificação que lhe atribui sistematicamente. (ENGELS, 2010: 308)

SUPIOT (2012) esclarece que o movimento *Law and Economics* ou análise econômica do Direito, preconizado por Richard Posner<sup>373</sup> e outros, na atualidade, generaliza para todo o comportamento humano o que chama de antropologia rústica do Direito contratual, pela qual o homem sabe o que quer e o que é melhor para ele. Desta forma, o Direito dos contratos não precede nem condiciona mas antes é mero instrumento da economia do mercado, assim, dentro da orquestração do tema da mundialização (globalização), a ciência econômica, no papel de discurso fundador da ordem universal, limita o Direito à magra porção dos Direitos Humanos<sup>374</sup>.

Vale transcrever as palavras de SUPLOT (2012) abordando a figura da ficção jurídica do “contrato de trabalho”:

Este tipo de estrutura, que faz derivar uma relação de obrigação de um aparente artifício, segue estando presente em nosso patrimônio jurídico. A mesma ideia de “patronato”, que os diretores franceses de empresas repudiaram muito recentemente, manifesta a influência duradoura do modelo da filiação paternal na relação de trabalho, posto que a vemos passar desde o Direito romano (onde designa o vínculo que une o libertado com seu antigo proprietário, que o fez nascer para a vida civil e cujo nome leva) até o Direito do Trabalho assalariado. Nosso moderno contrato de trabalho faz derivar de uma mudança de estado profissional (acesso ao emprego, com o que implica de subordinação e de segurança) uma obrigação cujo conteúdo preciso não se revela senão à medida em que se executa o contrato. (SUPLOT, 2012: 132-133)<sup>375</sup>

---

<sup>373</sup> Jurista norte americano, nascido em 1939, expoente maior da “análise econômica do Direito” (*Law and economics*).

<sup>374</sup> SUPLOT, *op. cit.*, pp. 128-130.

<sup>375</sup> Obs: traduzido.



E em texto recente, SUPLOT (2020) descreve a ficção do trabalho-mercadoria:

*Uno de los rasgos característicos del capitalismo ha sido tratar al trabajo, la tierra el dinero como mercancías. Pero se trata de lo que Karl Polanyi llamó «mercancías ficticias». Se actúa como si fueran productos intercambiables en el mercado cuando se trata de las condiciones mismas de la producción y del intercambio. Sin embargo, para ser sostenibles, estas ficciones necesitan estar apoyadas en montajes jurídicos que las hagan compatibles con el principio de realidad. Por eso, tal y como afirma con fuerza la Declaración de Filadelfia (1944), «el trabajo no es una mercancía». El trabajo, en efecto, no es separable de la persona del trabajador y su ejecución moviliza un compromiso físico, una inteligencia y unas competencias que se inscriben en la singularidad histórica de cada vida humana. Para que la ficción del trabajo-mercancía sea duraderamente sostenible, ha hecho falta que el derecho inserte en todo contrato de trabajo un estatuto que tenga en cuenta el tiempo de la vida humana, más allá del tiempo corto del mercado. La noción de mercado de trabajo descansa así sobre una ficción jurídica. Sin embargo, las ficciones jurídicas no son ficciones novelescas, que permitirían liberarse de las realidades biológicas y sociales, sino lo contrario de las técnicas inmateriales que permiten acoplar nuestras representaciones mentales a esas realidades. (SUPLOT, 2020)*

Porém, destaca o autor que o trabalho, a terra e a moeda não são produtos, mas condição para a atividade econômica e que tratá-los como produtos é uma ficção que atua como instrumento jurídico, pois o Direito autoriza a operar como se o trabalho fosse uma mercadoria separável da pessoa do trabalhador, organizando um estatuto salarial que limita essa mercantilização e impede tratar o trabalhador como uma coisa. O esquecimento dessas ficções, submetidas como tais aos valores que fundamentam a ordem jurídica, e tratar as pessoas e a natureza como meras mercadorias não somente é “irritante” (em suas palavras) no plano moral, como também pode conduzir a catástrofes ecológicas e humanitárias, posto que o bom funcionamento do mercado pressupõe regras e instituições que garantam a segurança dos recursos humanos, naturais e monetários<sup>376</sup>.

O autor denuncia que a mercantilização do “recurso humano”, inerente à ideia de contrato de trabalho e à instauração do mercado de trabalho, chega a contradizer a separação entre pessoas e coisas que funda a ordem mercantil<sup>377</sup>, em direção à feudalização do vínculo contratual, com os Estados desmantelando as leis. Na área trabalhista, refere que a OIT antigamente tentava fazer que todos as pessoas acessassem o bem estar ocidental, mas atualmente a entidade replica reivindicações mínimas do Século XIX, como isolar as epidemias, proibir o trabalho escravo, limitar o trabalho infantil<sup>378</sup>. Nessa feudalização do con-

---

<sup>376</sup> Idem, *ibidem*, pp. 139-140.

<sup>377</sup> Idem, *ibidem*, p. 144.

<sup>378</sup> Idem, *ibidem*, p. 147.

trato, retrocede o princípio da igualdade, já que o objeto contratual passa a ser hierarquizar os interesses das partes ou daqueles a quem representam, fundando um poder de controle de uns sobre outros, e seu objeto primário não é intercambiar bens nem selar uma aliança entre iguais mas sim legitimar o exercício de um poder, agregando ao intercâmbio e à aliança a vassalagem (*allégeance*), mediante a qual uma parte se localiza na área de exercício de poder da outra, como ocorre nos contratos de dependência (submeter a atividade de uma pessoa aos interesses de outra), tendo por modelo o contrato de trabalho na fórmula da subordinação livremente consentida, ampliando-se para a estrutura de rede pela qual se submetem as pessoas sem privá-las de liberdade e responsabilidade, com novos híbridos como a distribuição, subcontratação, integração agrícola etc. Isto une a liberdade com a servidão, a igualdade com a hierarquia, ao revés do Direito do Trabalho, abrindo novas formas de poder sobre os homens<sup>379</sup>.

SUPIOT conclui asseverando que o traço comum de todos estes avatares do contrato consiste em inscrever pessoas (físicas ou jurídicas, privadas ou públicas) na área de exercício do poder de outro sem que se vejam afetados, ao menos formalmente, os princípios de liberdade e igualdade. Tais vínculos de vassalagem vão acompanhados de uma transgressão da distinção entre o público e o privado e pela fragmentação da figura do garante dos pactos. Aponta que é necessário desfazer-se das ilusões de uma “totalidade contratual”<sup>380</sup>.

Em HARVEY (2018), encontramos uma descrição do processo de compra e venda de pessoas operada no “mercado de trabalho”:

Munido de dinheiro como capital, o capitalista vai ao mercado e adquire dois tipos de mercadoria: força de trabalho e meios de produção. Isso presume que o trabalho assalariado já exista e que a força de trabalho esteja disponível, esperando para ser adquirida. Também presume que a classe de trabalhadores assalariados tenha sido privada do acesso aos meios de produção e, portanto, deva vender sua força de trabalho para sobreviver. O valor dessa força de trabalho é determinado por seus custos de reprodução em determinado padrão de vida. Equivale ao valor do conjunto básico de mercadorias de que o trabalhador precisa para sobreviver e se reproduzir. Mas repare que o capitalista não compra o trabalhador (isso seria escravidão), e sim o uso da força de trabalho do trabalhador por um período fixo de tempo (por uma jornada diária de oito horas, por exemplo). (HARVEY, 2018: 21)

Não há dúvidas, pois, de que o contrato de trabalho, além de institucionalizar e legitimar uma relação de poder por uma máscara que invisibiliza os Direitos Humanos, ainda caminha para uma figura degradada pelo neoliberalismo e sua vertente de análise econômica do Direito, que retira a proteção estatal através da introdução sub-reptícia do princípio de vassalagem, delineando uma futura submissão total das pessoas ao poder econômico.

---

<sup>379</sup> Idem, *ibidem*, pp. 151-152.

<sup>380</sup> Idem, *ibidem*, pp. 154-155.

Já o ultraneoliberalismo, que vem ganhando terreno no mundo, adianta-se um passo: suprime o contrato, introduzindo no território selvagem do mercado de trabalho duas ficções mais precárias, a do trabalho autônomo e da microempresa individual. Com isto, cria uma guerra entre pessoas subordinadas do contrato, com alguns direitos, e novos vassalos e vassalas do poder econômico, sem nenhum direito, em que o vínculo que poderia atrair alguma responsabilidade ao contratante, simplesmente desaparece.

ARZATE–MARTÍNEZ<sup>381</sup> alertam para o produto das relações assimétricas de poder: geram assimetrias sistemáticas de perspectivas de vida, uma *nautonomia*, em referência à David Held<sup>382</sup>, que a conceitua como a produção e distribuição assimétrica de perspectivas de vida, limitadoras e erosivas das possibilidades de participação política. Os autores fazem uma pergunta contundente: “acaso há algo mais reprovável no *status quo* predominante que a cancelação de oportunidades de realização para qualquer pessoa?”

Na mesma linha a observação de WOOD<sup>383</sup>:

*Las inmensas concentraciones de poder en forma de propiedad capitalista y, de hecho, los dictados impersonales de las disciplinas del mercado y los imperativos de maximización del beneficio, están aislados de cualquier tipo de obligación democrática de rendir cuentas. El mandato democrático no funciona, por ejemplo, en el lugar de trabajo, como tampoco lo hace en la distribución del trabajo y de los recursos. Esto deja inmensos espacios de la vida humana —de hecho, la mayor parte de nuestra experiencia cotidiana— fuera del ámbito de la democracia, incluso en lo que se refiere a sus principios, y por tanto menos aún en la práctica. (WOOD, 2018: 214)*

Efetivamente, para resgate da cidadania da classe trabalhadora e imposição de democracia nas relações de trabalho, é urgente a necessidade de superar a visão contratualista e dogmática tradicional do Direito do Trabalho em favor de uma visão humanista e centralizada na pessoa trabalhadora, visibilizando e efetivando os Direitos Humanos que subjazem a relação de trabalho.

A importância do anticontratualismo de SUPLOT advém de seu enfoque transdisciplinar, compreendendo uma análise histórico-antropológica e humanista da relação de trabalho e, portanto, mais completa, esmiuçando as impropriedades desta ficção mercantilizadora das pessoas e de seu trabalho.

---

<sup>381</sup> ARZATE–MARTÍNEZ (2018: 99). Obs.: traduzido. Os autores citam a obra de HELD (1997: 210)), “*La democracia y el orden global, del Estado moderno al gobierno cosmopolita*.”

<sup>382</sup> Cientista político inglês, David Held (1951-2019) escreveu sobre democracia, globalização, governança global, dentre outros temas.

<sup>383</sup> WOOD (2018: 214).

### III.3 As causas e os efeitos da ideologia jurídica do contrato de trabalho na construção da doutrina e jurisprudência

WARAT<sup>384</sup>, tratando da linguagem de poder do Direito, explica que a organização da linguagem da ciência, qualquer que seja o ponto de vista neopositivista, produz a ausência da ideologia, induzindo pensar que as operações de abstração e generalidade devem pressupor a neutralidade ideológica, negando-se, assim, à ideologia a sua condição material – por conseguinte, a elucidação da verdade proposicional resta descomprometida da problemática ideológica. Conclui que isso produz a eliminação linguística da ideologia e a consequente abstração e fuga da história. De fato. Analisando o contrato por esse prisma, essa operação de linguagem de poder se evidencia de forma clara na expressão “contrato de trabalho”, pois esconde reproduzir a ideologia da servidão, sendo que o raciocínio acrítico subsequente a ela, quanto à compreensão do conteúdo do “contrato de trabalho”, provoca leitura asséptica, desconectando completamente essa ficção jurídica da sua gênese histórica que segue reproduzindo: a captura dos corpos das pessoas despossuídas para o trabalho<sup>385</sup>.

Portanto, a visão contratualista da relação de trabalho, absorvendo o dogma abstrato da venda da força de trabalho (categoria dissociada da pessoa, do corpo), sem considerar tratar-se de máscara de uma alienação “consentida” do corpo<sup>386</sup>, conforma a naturalização dessas transgressões como simples descumprimentos contratuais. Esta já perversa forma de encobrir a mercantilização de Direitos Humanos, sobretudo concernente ao corpo das pessoas, também dessensibiliza juristas e profissionais do Direito para verdadeiros atentados à vida cometidos nos chamados “pactos laborais”. Assim, outro fenômeno se vai produzindo, que é a perda de significado dos direitos sociais e de seu conteúdo,

<sup>384</sup> WARAT (1995: 62).

<sup>385</sup> WOOD (2018: 211) escreve que a potência da apropriação capitalista reside em compulsões puramente económicas e, sobretudo, na despossessão dos trabalhadores e trabalhadoras. Em suas palavras:

*Estos deben vender su fuerza de trabajo por un salario a fin de tener simplemente acceso a los medios necesarios para su reproducción. Esto significa que el capitalismo puede llegar incluso tan lejos como para defender y mantener el sufragio universal, sin tener que redefinir sus relaciones dominantes de producción y su modelo de apropiación.*  
(2018: 211)

<sup>386</sup> Sobre os efeitos da alienação, HARVEY (2014: 260) comenta que o trabalhador ou a trabalhadora alienam legalmente a utilização de sua força de trabalho por um período de tempo legalmente estabelecido em troca de salário, tempo no qual o capitalista exige lealdade e atenção e pedindo confiança no capitalismo para geração de riqueza e bem-estar. Porém, prossegue, a pessoa trabalhadora fica separada de seu produto, assim como de outros trabalhadores, da natureza e de todos os demais aspectos da vida social durante o tempo do contrato de trabalho e depois dele, devido à sua natureza esgotante. Assim, experimenta e internaliza a privação e a despossessão como uma sensação de perda e tristeza diante da frustração dos próprios instintos criativos.

em direção a um processo de desumanização de direitos e contratualização que os reposiciona no âmbito da disponibilidade das partes<sup>387</sup>.

Ora, Direitos Humanos são inalienáveis, não se pode estabelecer sua compra e venda, o que evidencia o sofisma da alienação contratual do trabalho. Esta característica, em relação ao trabalho humano, está expressa textualmente na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher – CEDAW, de 1979<sup>388</sup>:

Artigo 11

1. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na esfera do emprego a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, os mesmos direitos, em particular:

a) O direito ao trabalho como direito inalienável de todo ser humano;  
(Obs.: destacou-se)

As pessoas e seus corpos também são inseparáveis (a não ser por uma ficção jurídica de mau gosto), e nenhum deles pode ser tratado como objeto ou coisa, assim como a liberdade e a saúde humanas não podem ser compradas nem vendidas. Como, então, sobrevive a cultura do “contrato de trabalho”? Várias questões podem ser ponderadas, mas, para efeitos desta investigação, abordam-se duas principais: a primeira, a invisibilização dos Direitos Humanos provocada, historicamente, pelo anacronismo entre o reconhecimento do trabalho como DH, com sua dimensão social, ocorrida com a Constituição da OIT em 1919, após prática secular de “contratação de locação de mão-de-obra”. Além disso, as épocas de industrialização dos países foram distintas, como também o surgimento de normas laborais específicas (e não civilistas) para a tutela do trabalho, persistindo a ficção jurídica hegemônica nas novas legislações que foram sendo editadas. Em realidade, o câmbio de uma institucionalidade não se opera de um momento para outro, apesar de que, já centenário o nascimento da OIT, é tempo que aconteça. Segundo LUKÁCS (2013):

Essa constatação também reforça a verdade do que foi exposto até aqui: o desenvolvimento na sociedade, o seu constante tornar-se cada vez mais social, de modo algum necessariamente reforça a compreensão que os homens têm da verdadeira constituição das reificações por eles efetuadas espontaneamente. Pelo contrário, evidencia-se uma tendência crescente de submeter-se acriticamente a esses modos de vida, de apro-

---

<sup>387</sup> HARVEY (2014: 204-205) também aponta que o capital exige do Estado a proteção da propriedade privada e que faça valer os contratos e os direitos de propriedade intelectual, descansando suas liberdades sobre a falta de liberdade de outros. O autor cita Marx, quanto ao fato do capital extrair tanto tempo de trabalho como for possível dos trabalhadores, enquanto estes tratam de proteger sua liberdade para poderem viver sem ser explorados até a morte, decidindo entre esses dois direitos a força.

<sup>388</sup> Fonte: sítio do Palácio do Planalto, Subchefia para Assuntos Jurídicos, do governo federal brasileiro, texto contido no Decreto n. 4377/02, que promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Recuperado de: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/2002/D4377.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm)

priar-se deles cada vez mais intensamente, de modo cada vez mais determinante da personalidade, como componentes irrevogáveis de cada vida humana. (LUKÁCS, 2013: 483-484)

Também, na forma exposta no decorrer deste trabalho, há de se considerar os efeitos da lógica de mercado incidindo sobre a estatalidade com as técnicas gerenciais próprias da iniciativa privada (*new public management*) e impactos na educação universitária<sup>389</sup>, e a completa descontextualização do ensino jurídico da geopolítica, da sociologia, da história, da filosofia e de outras disciplinas, produzindo leitura acrítica das normas e profissionais burocratas “bocas-da-lei”, reprodutores da aplicação mecanizada do Direito<sup>390</sup>, espécie de robôs replicantes da lógica de mercado e seus imperativos.

Com efeito, Direitos Humanos deveriam ser a primeira disciplina a ser estudada nas Universidades, para permitir que estudantes tenham desde o princípio uma perspectiva humanista, de centralidade da pessoa na concepção, elaboração, interpretação e aplicação das normas jurídicas. Na prática, no entanto, é recente a inserção da disciplina Direitos Humanos nos currículos dos cursos de Direito e nos concursos públicos da Magistratura, Ministério Público e exames de aptidão para a advocacia. E a conexão do Direito do Trabalho com os Direitos Humanos tem sido objeto de miradas ainda mais recentes no meio jurídico, não incorporadas à doutrina e Universidades, senão timidamente (e mesmo assim, quando feitas, não desgarrando da sua adaptação ao “contrato”).

De outra parte, a cultura de mercado desenvolvida com o capitalismo, como visto, tomou dimensão total, abarcando todos os âmbitos da vida, inclusive a educação e o ensino<sup>391</sup>. O modelo hegemônico de ensino do Direito trabalha

---

<sup>389</sup> Sobre o tema, ROS-WŁOSKO (2019: 256-257) comentam, em referência a Ibarra Colado (2003) que as políticas e programas de reestruturação da educação superior em diversos países do mundo sob os influxos da privatização, desregulação e competitividade acabam produzindo o que Slaughter-Leslie (1997) denominaram de “capitalismo acadêmico”, que caracteriza a situação de Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Tal forma de administração universitária incorpora as instituições de ensino em redes de conhecimento nas quais as decisões acadêmicas se tomam em função de motivações econômicas. As autoras citam a Argentina, como exemplo de país para onde foi exportado o modelo, mas pode-se agregar também o Brasil.

<sup>390</sup> NARVÁEZ HERNANDEZ (2006: 158) fala num “direito desterritorializado” fomentado pelas relações internacionais nos novos contratos demandados pelas empresas transnacionais a juristas que, pressionados pela velocidade das operações econômicas e urgência dos pedidos, não alcançam avaliar a transcendência e responsabilidade de sua tarefa.

<sup>391</sup> Interessante a referência histórica à Inglaterra, no início da Revolução Industrial, quanto ao individualismo, ahistoricismo e fragmentação do mundo social no pensamento inglês, observada por WOOD (2018: 116-117), no sentido de que a substituição das entidades corporativas por indivíduos no papel de unidades constituintes da sociedade, a separação do Estado e a sociedade civil, a autonomização da economia foram fatores da evolução do capitalismo inglês que provocaram a atomização da ordem social. Explica que isso produziu desprendimento das ciências sociais da história e os processos das relações sociais passaram a ser concebidos como sucessos naturais baseados nas leis universais da economia.



com a lógica mercantilista, indutora do formato *fast-food* jurídico, para venda do produto ensino do Direito no mercado, para consumo rápido estudantil, que obviamente será pautado quase que exclusivamente no estudo normativo, isto é, da lei, que passa a ser confundida com a ciência do Direito. A prática resulta nos já mencionados juízes, juízas “bocas da lei”, acompanhados de advogados, advogadas ultra especializados e que perdem o senso do Direito como um todo, aplicando às peças profissionais os limites normativos do ramo em que atuam, e de forma totalmente acrítica<sup>392</sup>, ou seja, replicadores do contratualismo.

O Direito do Trabalho, ensinado neste formato, opera descontextualizado da sua gênese de Direito Humano reivindicado na luta sangrenta da classe operária super explorada e massacrada desde os primórdios da Revolução Industrial no século XVIII, e usada como bucha de canhão nos conflitos entre potências imperialistas. A massa estudantil, então, “aprende” o Direito do Trabalho desde a ótica do “contrato de trabalho”, e o caráter tuitivo se dissolve completamente como um valor abstrato, meramente simbólico e longínquo na naturalização das violações “contratuais”, de consequências todas previsíveis e monetizadas (preferentemente quantificadas na própria lei, para que possam ser antecipadamente contabilizadas pelas empresas)<sup>393</sup>. E assim, violações de Direitos Humanos, em normas internacionais, constitucionais, de ordem pública, são tratadas nos escritórios de advocacia e na justiça como inadimplemento de Direito das Obrigações, como uma mera relação comercial ou civil entre partes presumidamente iguais.

Por outro lado, soma-se a este problema o que SUPLOT<sup>394</sup> chama de *darwinismo normativo*<sup>395</sup>, explicando que no mercado total, o Direito é considera-

---

<sup>392</sup> Neste contexto, alcançar uma interpretação sistemática já é um avanço, a ponto de ser desenvolvida a Teoria do Diálogo das Fontes (Erik Jayme, na Alemanha, Cláudia Lima Marques, no Brasil), resgatando a noção de que a ciência do Direito é um todo e não fragmentos. LIMA MARQUES (2009: 89-90) explica que, em conformidade ao pluralismo pós moderno do Direito de múltiplas fontes legislativas, a aplicação simultânea, coerente e coordenada das plurais fontes legislativas, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes mas não iguais, defendida por JAYME (1995) na Alemanha, gera a necessidade de coordenação entre leis no mesmo ordenamento como exigência para um sistema jurídico eficiente e justo. A doutrina, no entanto, pode ser enquadrada como outra forma de juspositivismo ético.

<sup>393</sup> Sobre o tema, CHAVES JUNIOR–D’AMBROSO (2018), alertando os riscos da precificação do Direito, já que uma vez quantificadas monetariamente as violações jurídicas, as mesmas podem ser contabilizadas e provisionadas no cálculo contábil das empresas, tornando o inadimplemento de deveres relativos à preservação da vida e da saúde das pessoas que trabalham, por exemplo, um cálculo matemático cujo resultado, se for compensatório, significará a opção empresarial em favor do risco, retirando o efeito preventivo e coativo das normas. Assim, “a possibilidade de prever e monetizar o direito conduz à desnecessidade de sua observância e cumprimento”.

E, com a monetização do direito, monetizam-se direitos humanos.

<sup>394</sup> SUPLOT (2010: 64-65).

<sup>395</sup> SUPLOT comenta que este *darwinismo normativo* já tinha sido idealizado por Friedrich von Hayek, no livro “*L’ordre politique d’un peuple libre*”, em referência à p. 184.

do como um produto em competição ao redor do mundo, onde se operará a seleção natural das ordens jurídicas melhor adaptadas à exigência de retorno financeiro. Conforme explana, no mercado total, ao revés da livre concorrência estar fundada sobre o Direito, o Direito é que deveria estar fundada sobre ela. No plano do Direito do Trabalho, o autor, coincidindo com o apontamento de TOUSSAINT<sup>396</sup>, cita o relatório do Banco Mundial (*doing business*), que estimula o rebaixamento da proteção do trabalho, recomendando a flexibilização da despedida como forma de melhorar o “clima de negócios”.

O princípio da proteção ou tutelar, *in dubio pro operario*, resulta em retórica inoperante na prática, e ainda é revertido em propaganda neoliberal contra a classe operária, nas sucessivas reformas trabalhistas que vão sendo aprovadas contra os direitos sociais, com o famoso discurso de que trabalhadores e trabalhadoras têm muitos direitos e se deve escolher entre o direito a ter direitos<sup>397</sup> ou o direito a ter emprego.

FOUCAULT (1996), falando sobre a verdade e as formas jurídicas<sup>398</sup>, comenta que diversas instituições de sequestro, aparentemente de proteção e segurança, foram criadas para que o tempo do operário, não só da jornada, mas de sua vida inteira, possa ser utilizado da melhor forma pelo aparelho de produção, para atender o mercado de trabalho e suas exigências. Conforme suas palavras, “a extração da totalidade do tempo é a primeira função destas instituições de sequestro”, e menciona que nos países desenvolvidos se usa o mecanismo do consumo e da publicidade para controle geral do tempo. FOUCAULT afirma que a segunda função do sequestro é transformar o corpo em força de trabalho, a terceira a constituição de um poder polivalente (econômico e político), um micro-poder em que as pessoas que dirigem as instituições se delegam direitos para, como um poder judiciário, punir e recompensar. Finalmente, a quarta função do sequestro seria um poder epistemológico, de extrair e apropriar-se do saber do indivíduo (como nas fábricas, os melhoramentos técnicos, invenções e descobertas dos trabalhadores).

---

<sup>396</sup> TOUSSAINT (2012: 54-55).

<sup>397</sup> A necropolítica laboral aumenta o número de pessoas marginalizadas pelo sistema, tal qual as pessoas migrantes, todas lutando pelo direito a ter direitos, em uma espécie de não-cidadania ou de condição sub-humana, criando outra forma de darwinismo social.

<sup>398</sup> FOUCAULT (1996: 118-122). Sobre formas jurídicas, também coincidem TIGAR-LEVY (1978), apresentando as formas jurídicas concretas como um agregado ideológico da sociedade, enquanto as leis expressam os direitos e deveres que protegerão determinado grupo através do poder que possui, formuladas para proporcionar um meio previsível de solução de conflitos, de modo que o Direito é uma superestrutura edificada sobre a base das relações de poder.

Não é demasiado concluir, então, que o “contrato de trabalho”<sup>399</sup> é a forma jurídica do neoescravo<sup>400</sup>, a pessoa, despida de Direitos Humanos. A pessoa trabalhadora desnuda de DELEUZE<sup>401</sup> (ou o *homo sacer* de AGAMBEN<sup>402</sup>) é convidada, no território selvagem do mercado de trabalho, a negociar<sup>403</sup> diretamente com seu empregador (normalmente chamado “patrão”, ou dono, proprietário de “subordinados” – afinal, “a empresa é que move a economia”). O Direito do Trabalho, então, ao revés de operar a correção das desigualdades materiais da relação laboral, com normas tutelares, recompondo o equilíbrio, passa a se comportar como o Direito do Trabalho do Inimigo, incluindo a pessoa trabalhadora na abrangência da norma para excluí-la da proteção jurídica, de forma muito similar ao que AGAMBEN sustenta, como será tratado mais adiante. Neste contexto, a empresa vira o “campo”, o espaço anômico em que os corpos de

---

<sup>399</sup> FOUCAULT (1996: 116) também dá suas referências à gênese contratualizadora do trabalho e o surgimento do “mercado de trabalho”:

São necessárias duas coisas para que se forme a sociedade industrial. Por um lado, é preciso que o tempo dos homens seja colocado no mercado, oferecido aos que o querem comprar, e compra-lo em troca de um salário; e é preciso, por outro lado, que este tempo dos homens seja transformado em tempo de trabalho. (1996: 116)

<sup>400</sup> A abolição da escravatura realmente terminou a escravidão? Ou ela trocou de nome: o contrato de compra e venda de escravos se tornou contrato de compra e venda de força de trabalho, e o mercado de escravos é o novo mercado de trabalho, categorias mais amplas, palatáveis, e com verniz “democrático”, já que passam a tratar não só de pessoas negras, mas de todas aquelas que, no sistema, não logram ter propriedade (os 99% de despossuídos, na atualidade, diante do 1% detentor do grande capital e ditador das normas). MARCUSE (2018: 68-69), no século XX, descreveu a pessoa trabalhadora no contexto da sociedade industrial: “*Los esclavos de la sociedad industrial desarrollada son esclavos sublimados, pero son esclavos, porque la esclavitud está determinada no por la obediencia, ni por la rudeza de las tareas, sino por el status de instrumento y la reducción del hombre al estado de cosa.*”

<sup>401</sup> DELEUZE (2017: 22-23).

<sup>402</sup> AGAMBEN (2002).

<sup>403</sup> NEGRI-HARDT (2016: 23-24) desmascaram o mito da troca livre e igual, apresentando-a como relação hierárquica entre devedor-credor:

Outrora, havia uma massa de trabalhadores assalariados; hoje, há uma multidão de trabalhadores precarizados. Os primeiros eram explorados pelo capital, mas a exploração era mascarada pelo mito de uma troca livre e igual entre os proprietários dos bens. Os segundos continuam a ser explorados, mas a imagem dominante de sua relação com o capital configura-se não mais como uma relação igual de troca, e sim como uma relação hierárquica entre devedor e credor. De acordo com o mito mercantil da produção capitalista, o dono do capital encontra o dono da força de trabalho no mercado, e os dois fazem uma troca justa e livre: eu lhe dou meu trabalho e você me dá um salário. Era o Éden, Karl Marx escreve com ironia, da “liberdade, igualdade, propriedade e Bentham”. Não temos necessidade de lembrar de quão falsas e mistificadoras são essas supostas liberdade e igualdade.

trabalhadores e trabalhadoras são submetidos ao biopoder do empregador, o senhor feudal dos novos tempos, no pleno uso e gozo do biopoder diretivo empresarial, com direito de comando, disciplina e de vida e morte sobre as pessoas que lhe prestam serviços, os súditos e vassallos da nova era, ou simplesmente neoescravos, exercido através do chamado “direito potestativo de rescindir o contrato de trabalho” – dogma do contratualismo juslaboral. Uma forma naturalizada de necrodireito<sup>404</sup>, como aponta a profunda crítica ao Direito do Trabalho de NARVÁEZ HERNANDEZ<sup>405</sup>:

*Hay además una muerte sutil. Tan trágico es que mueran personas en la búsqueda de seguridad, comida y una mejor vida, como quienes todos los días mueren un poco en la infinidad de oficinas de todo el mundo, la obsesión por la producción terminó por convertirnos en objetos de una interminable cadena de explotación. Y muy pocos se dan cuenta. Los pretextos sobran para cosificar a una persona, los tiempos urgen, la demanda no se detiene, hay que aparentar que trabajamos todo ese tiempo; todo se convierte en una farsa macabra, la gente tiene una vida hostil dentro de cuatro paredes, puede observarse perfectamente la (no) lucha de clases, los que mueren y los que explotan, los horarios son diferentes, las prestaciones sobre todo, pero lo que más indigna es el trato, la manipulación y el chantaje; el sadismo y el saberse “amo/ dueño” del otro, genera un insano gusto por el sufrimiento ajeno, la tragedia es que la cotidianeidad y la banalidad en la maldad de estas prácticas, impide distinguir la magnitud del problema. Gota a gota los explotadores saben que asesinan un parte de la ya mal trecha dignidad humana, se nota en sus miradas, en la voz que somete y ningunea a muchos que pierden no solo su salud, su familia, su espacio personal, sino hasta su vida, el cinismo llega incluso las revisiones médicas anuales in situ, no hay necesidad de dejar ni siquiera un día de asistir al trabajo, literalmente les extraen la sangre de las venas en el mismo lugar laboral.*

*(...) por eso es importante hablar de la muerte, como lo hace el infrarrealismo, de esos miles de cadáveres insepultos, desaparecidos o simplemente olvidados; solo así recordaremos que estamos vivos y quizá nos rebelaremos ante esta muerte silenciosa que nos quita un poco de las chispa vital cada día con la ayuda del derecho laboral. (NARVÁEZ HERNANDEZ, 2018: 181-182)*

Ocorre que esta incidência normativa desde a lógica do “contrato” e do “mercado de trabalho”, categorias jurídicas incorporadas na mente das pessoas e na dogmática juslaboral, com a normalização da concepção de “venda da força de trabalho”, jamais será apta para corrigir desigualdades nem muito menos trazer equilíbrio para as relações entre capital e trabalho.

---

<sup>404</sup> O termo foi cunhado por NARVÁEZ HERNANDEZ (2017), em referência a quando o jurídico tem função determinante entre viver e morrer – “o direito que mata”, uma atividade com pleno impacto na vida e na morte dos destinatários de cada sistema jurídico, pois, como o Estado não contempla a totalidade social, omitindo-se em atender grupos vulneráveis, priorizando, normalmente, as questões econômicas, em detrimento das questões existenciais, provoca a morte.

<sup>405</sup> NARVÁEZ HERNANDEZ (2018: 181-182).

Uma coisa é estudar e compreender o Direito do Trabalho como ramo pertencente aos Direitos Humanos e ao Direito Internacional Público, em conformidade à sua gênese, outra é divagar raciocínios no modelo indefinido que a doutrina tradicional ora localiza no Direito Privado (predominante), ora como Público ou híbrido, mas sempre com uma forma jurídica absolutamente incompatível com os Direitos Humanos, a do “contrato”.

Ora, Direitos Humanos são valores universais, absolutos, de conteúdo público, não se vendem, e assim como não se vende a vida, a liberdade, a saúde, também não pode seguir vigente a ideia de venda do trabalho. Neste sentido, as relações de trabalho não são privadas, as relações de trabalho, no Estado Democrático de Direito, mesmo com regime capitalista, são de natureza pública – embora anacronicamente ainda esteja permitida a sua organização privada<sup>406</sup>, mas sempre sob a tutela e fiscalização do Estado e desde que observada a sua função e interesse social e o valor social do trabalho e seus desdobramentos lógicos e necessários: preponderância do trabalho sobre a propriedade.

#### **III.4. A nova condição de *homo sacer* de quem trabalha e o inimigo no Direito do Trabalho: da necropolítica ao necrodireito e à necrojustiça**

A consagração da hegemonia do poder econômico em escala global vem deteriorando rapidamente as condições de trabalho das classes despossuídas. Neste compasso, FARIÑAS DULCE<sup>407</sup> escreve que as empresas transnacionais se converteram em um novo ator social, com capacidade para incidir na realidade social, econômica e jurídica.<sup>408</sup>

---

<sup>406</sup> Anote-se que a organização privada das relações de trabalho, neste estágio, não significa a direção autoritária do empregador, do capital, mas a partilha conjunta dos meios de produção, através da participação da classe trabalhadora na gestão do empreendimento e na divisão de lucros – uma das dimensões da função social da propriedade. Na prática, porém, a hegemonia do poder econômico e suas formas de reproduzir a dominação sobre as pessoas despossuídas impede a gestão democrática da atividade econômica.

<sup>407</sup> FARIÑAS DULCE (2005: 145 e ss.).

<sup>408</sup> A título de exemplo, Google, Microsoft e Cisco mantêm bilhões em reservas monetárias fora dos EUA, para não pagar impostos no país de origem, o que ocorre de forma similar com outras empresas nos mais variados países do mundo, constituindo uma forma sofisticada de fraude tributária. Do mesmo modo, várias multinacionais recebem isenção de impostos e benefícios (como doação de áreas de terra para seu parque fabril) para a instalação de fábricas e filiais em diversas regiões e, quando termina o prazo de isenção fiscal, simplesmente fecham as instalações migrando para outro lugar que conceda nova imunidade tributária. Fonte: notícia publicada no jornal *Valor Econômico*, de 29.08.2016, intitulada “*Tributação de empresas deve mudar nos EUA após eleição*”. Recuperado de: <https://www.valor.com.br/internacional/4690129/tributacao-de-empresas-dos-eua-deve-mudar-apos-eleicao>

De fato, uma vez estabelecida a supremacia do poder econômico em forma total, não há limites para o que os orçamentos de empreendimentos privados podem fazer em escala planetária<sup>409</sup>. A hegemonia de mercado neoliberal, por sua vez, facilita a aquisição de todos os bens da vida, transformando tudo em bens de consumo, desde a política, meios de comunicação, indústria cultural, redes sociais etc., ante a anomia existente sobre o controle do capital globalizado, causando grave comprometimento das democracias. KLEIN<sup>410</sup> demonstra que o neoliberalismo, por mais de quarenta anos, tem usado reiteradamente a mesma prática, esperar que aconteça uma crise (ou fomentar uma), declarar um momento de política extraordinária (ou estado de exceção), suspender algumas ou todas as normas democráticas e logo concretizar a lista de desejos das corporações o mais rápido possível<sup>411</sup>. Nessa linha coincide AGAMBEN<sup>412</sup>, descrevendo o discurso do capitalismo contemporâneo, sempre em crise, como provocador de marginalização, exclusão social e miséria humana:

Nada é mais nauseante do que o descaramento com que aqueles que fizeram do dinheiro a sua única razão de vida agitam periodicamente o fantoche da crise econômica, e os ricos vestem, hoje, roupas austeras para alertar os pobres de que sacrifícios serão necessários para todos. Igualmente estupefaciente é a docilidade com que aqueles que se tornaram tolamente cúmplices do desequilíbrio da dívida pública, cedendo ao Estado todas as suas economias em troca de BOT, recebem sem pestanejar a admonição e se preparam para apertar o cinto. E, no entanto, qualquer um que tenha conservado alguma lucidez sabe que a crise está sempre em curso, que ela é o motor interno do capitalismo em sua fase atual, assim como o estado de exceção é hoje a estrutura normal do poder político. E assim como o estado de exceção requer que haja porções sempre mais numerosas de residentes desprovidos de direitos políticos e que, no limite, todos os cidadãos sejam reduzidos a vida nua, do mesmo modo a crise, tornada permanente, exige não apenas que os povos do Terceiro Mundo sejam sempre mais pobres, mas também

<sup>409</sup> BAUMAN (1999: 162-163) comenta:

*Finalmente, la nueva elite global goza de una ventaja enorme frente a los guardianes del orden: los órdenes son locales, mientras que la elite y la ley del mercado libre son traslocales. Si los encarados de un orden local se vuelven demasiado entrometidos y molestos, siempre se puede apelar a las leyes globales para cambiar los conceptos del orden y las reglas del juego locales. Y, desde luego, si el ambiente en la localidad se agita demasiado, siempre existe la opción de partir; “la globalidad” de la elite es movilidad, y ésta entraña la capacidad de escapar, evadir-se. No faltará un lugar donde los guardianes locales del orden estén dispuestos a hacer la vista gorda ante una violación.*

<sup>410</sup> KLEIN (2017).

<sup>411</sup> Idem, *ibidem*, p. 150. KLEIN prossegue explicando que, em meio à hiperinflação ou ao colapso dos bancos, por exemplo, as elites governantes conseguem convencer a população em pânico de fazer um ataque às suas próprias proteções sociais, como também enormes resgates de recursos públicos para manter o setor financeiro de pé.

<sup>412</sup> AGAMBEN (2015: 119-20).



que um percentual crescente de cidadãos das sociedades industriais seja marginalizado e sem trabalho. E não há Estado dito democrático que não esteja atualmente comprometido até o pescoço com essa fabricação maciça de miséria humana. (AGAMBEN, 2015: 119-20)

De outra parte, o capital transnacional só paga impostos quando e como quer, armazenando recursos financeiros em paraísos fiscais e fazendo investimentos onde o atrativo ofertado lhe for conveniente<sup>413</sup>. A prática gera uma forma de *dumping* social (ou o já referido darwinismo legislativo), sustentada pela concorrência entre os Estados para oferecer melhores condições empresariais e menor proteção social, leiloando direitos da classe trabalhadora. Logo, os Estados vão arrecadando da população impostos elevados para compensar perdas causadas pelo capital transnacional, ao mesmo tempo em que reduzem os direitos sociais que seriam indispensáveis para diminuir a desigualdade social e atender às demandas do povo.

Estes sucessivos ataques do capital às proteções sociais feitos em escala globalizada têm sérias consequências, provocando uma desfundamentação dos Direitos Humanos do Trabalho, operada desde a produção legislativa doméstica dos países corrompida pelo poder econômico e dissonante da normativa internacional e constitucional – ao contrariar princípios e postulados regulamentadores das relações laborais<sup>414</sup>-, até a engenharia de “novas formas” de trabalho que, justamente por constituírem o “novo”, não estariam abarcadas no elenco normativo tradicional e, portanto, pretensamente “não sujeitas” à ordem jurídico-social.

De modo que, desde a desfundamentação dos Direitos Humanos do Trabalho, nas propagadas reformas neoliberais, e, também, como resultado da naturalização das violações aos direitos sociais pelo contratualismo, já explanada, diversas outras formas jurídicas vêm aparecendo para dar ares de legalidade à exploração das pessoas que trabalham em condições de verdadeira neoesclavidão. Assim, a chamada *uberização* das relações de trabalho, no capitalismo de plataforma, a *gig economy*, *crowdwork*, trabalho digital, etc. FILGUEIRAS–ANTUNES<sup>415</sup> apresentam uma definição uniforme para essa “nova forma” de trabalho, como sendo aquele que é realizado através das tecnologias da informação e comunicação (TIC), podendo ser efetuado digitalmente (*crowdwork*) ou presencialmente (*on-demand*). Obviamente, a forma de prestação de serviços

---

<sup>413</sup> Ou seja, enquanto os Estados têm regras rígidas orçamentárias, necessitando justificar os gastos à população, o capital não tem nenhum limite, apenas o de prestar contas aos participantes do próprio empreendimento, cuja preocupação é sempre obter mais lucros.

<sup>414</sup> Como são exemplos as reformas laborais da Espanha e Portugal de 2012, e a do Brasil de 2017, pelas quais se operou, em total contrariedade ao princípio da progressividade ou não retrocesso social, várias reduções de proteção social à classe trabalhadora, constituindo exemplos a retirada de ultratividade das normas coletivas, a desproteção contra a despedida em massa, permissão de formas de trabalho precário (“contrato temporário”, a tempo parcial) etc.

<sup>415</sup> FILGUEIRAS–ANTUNES (2019).

não desnatura a essência da relação, fundada na exploração de trabalho por conta alheia. Nessa linha coincide SUPLOT (2020):

*Finalmente, a pesar de la jurisprudencia que ha reconocido en la dirección por algoritmos todas las trazas de la subordinación salarial, los trabajadores “uberizados” son constreñidos a quedar en un subempleo por dirigentes políticos sometidos a una fuerte acción de lobbying por parte de las plataformas digitales.*

Perguntado sobre a “estética” das novas formas de subjetividade proletária neoliberal, RANCIÈRE<sup>416</sup> recorda que o proletariado sempre designou um mosaico de forma de trabalho, de vida e de ideologia muito diferentes, e que não se deve deixar-se seduzir pelas implicações da palavra “liberalismo”, pois muitos críticos acabam concedendo o que o liberalismo demanda, a identificação de novas formas de imposição do trabalho que isolam os indivíduos e os pressionam mediante formas de participação e responsabilidade ampliadas correspondentes aos impulsos individualistas destas pessoas. O autor sustenta que a maior parte dos discursos que se pretendem radicais fazem que a palavra “flexibilidade” designe uma forma de organização que responde a um desejo de liberdade e de participação dos trabalhadores, “como se a autoridade fosse substituída por formas de integração suave e como se todos transbordassem nas delícias perversas do consumo extremo”<sup>417</sup>.

HAN (2012) descreve o produto dessa forma de subjetivação advinda das novas formas de organização do trabalho como o “sujeito de rendimento”:

*El sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera, no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo. En este sentido, se diferencia del sujeto de obediencia. La supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad; más bien hace que libertad y coacción coincidan. Así, el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. (HAN, 2012: 31)*

Também como consequência da desfundamentação, emerge uma espécie de “novo” Direito do Trabalho contemporâneo, que se desdobra em duas facetas: como regulamentação (ou desregulamentação) das condições do neoescravo, o permissivo que legaliza a exploração das pessoas não detentoras de capital (ou despossuídas); e como dispositivo invisibilizador e desconstituidor de Direitos Humanos, normalizador do biopoder empresarial exercido pelo “contrato” (o contrato faz lei entre as partes e *pacta sunt servanda*). Parece um retorno às condições que denunciava ENGELS (2010) no século XIX:

O proletariado é desprovido de tudo – entregue a si mesmo, não sobreviveria um único dia, porque a burguesia se arrogou o monopólio de

---

<sup>416</sup> RANCIÈRE (2017: 10-11).

<sup>417</sup> Idem, *ibidem*, p. 11.

todos os meios de subsistência, no sentido mais amplo da expressão. Aquilo de que o proletariado necessita, só pode obtê-lo dessa burguesia, cujo monopólio é protegido pela força do Estado. Eis por que o proletariado, de direito e de fato, é escravo da burguesia, que dispõe sobre ele de um poder de vida e de morte. Ela lhe oferece os meios de subsistência, mas em troca de um “equivalente” – seu trabalho; e chega ao ponto de lhe dar a aparência de agir segundo sua própria vontade, de estabelecer livremente com ela um contrato, sem constrangimentos, como se o proletariado fosse o autor de seu próprio destino. (ENGELS, 2010: 118)

Investigando sobre a interseção entre o modelo jurídico-institucional e o modelo biopolítico de poder, AGAMBEN<sup>418</sup> busca no Direito Romano arcaico o *homo sacer*, pessoa declarada sacra e, portanto, matável e insacrificável, “uma obscura figura do direito romano arcaico, na qual a vida humana é incluída no ordenamento unicamente sob a forma de sua exclusão (ou seja, de sua absoluta *matabilidade*)”. O autor desenvolve o conceito de “campo”, como espaço no qual opera a lei marcial ou estado de sítio, distinto de um espaço de reclusão, e propício ao exercício do poder de exceção (anomia). Tal poder corresponde à aplicação do ordenamento para proceder a uma “inclusão exclusiva”, mediante a qual a pessoa é incluída na ordem jurídica para ser alocada no campo, ou seja, excluída da comunidade política como *homo sacer* ou vida nua, matável e insacrificável, em um espaço no qual a lei se declara inaplicável.

Com outras palavras, novamente a situação se assemelha a um retorno aos primórdios do século XIX, conforme descreveu, em seu momento, ENGELS (2010):

Em primeiro lugar, é evidente que o conjunto da legislação tem o objetivo de proteger os proprietários contra os despossuídos. As leis são necessárias exatamente porque existem os despossuídos e, mesmo que poucas leis o expressem diretamente – como, por exemplo, aquelas contra a vadiagem e aquelas que punem a falta de residência fixa, pelas quais o proletariado como tal é declarado fora da lei –, a hostilidade em face do proletariado está na base do ordenamento jurídico. E isto se demonstra quando os juízes, especialmente os juízes de paz, eles mesmos burgueses e com os quais o proletariado se relaciona com mais frequência, interpretam nesse sentido hostil, e sem vacilações, o espírito das leis. (ENGELS, 2010: 312)

Neste “novo” Direito do Trabalho desfundamentalizado, permite-se ao poder econômico exercer, mediante o afastamento legislativo da proteção jurídica laboral (lei de exceção) ou por simples negativa de aplicação dos Direitos Fundamentais e Humanos do Trabalho, biopoder sem nenhuma mediação estatal sobre a pessoa trabalhadora que, previamente declarada *homo sacer* (nova condição), torna-se vida nua (desprovida de proteção jurídica e banida da vida política), capturável para o “campo”<sup>419</sup> da empresa ou atividade econômica (por

---

<sup>418</sup> AGAMBEN (2002: 14, 16, 27).

<sup>419</sup> O campo empresarial ou econômico é o espaço anômico representativo do retorno do capitalismo

engajamento). Portanto, torna-se perceptível a figura do neoescravo ou *homo sacer*, declarado sacro pelo Estado (*sacer esto*) e entregue ao campo prévio, o mercado de trabalho<sup>420</sup>, como sujeito “matável” e “insacrificável”, cuja morte no campo posterior, o do engajamento na atividade econômica (seja através da eliminação de direitos ou comprometimento da sobrevivência, no desligamento sumário pelo exercício do biopoder do empregador ou poder econômico enga-

---

selvagem, no qual a pessoa trabalhadora é disponibilizada ao capital sem nenhuma proteção jurídica ou mediação do Estado. A figura do *homo sacer* e o conceito de campo, tratados por AGAMBEN, podem bem ser aplicados às relações de trabalho. Assim, nesta investigação, a alusão ao “campo” da empresa significa que a pessoa trabalhadora sai do “campo” do mercado de trabalho (outro espaço anômico) para entrar no “campo” empresarial, onde tudo pode, por tratar-se de espaço de exceção no qual o empregador dita as regras ou a ausência delas (biopoder). Por pertinente, cita-se a explicação de AGAMBEN (2002: 177-178) sobre o campo, comentando sobre os campos de concentração nazistas:

Hannah Arendt uma vez observou que, nos campos, emerge em plena luz o princípio que rege o domínio totalitário e que o senso comum recusa-se obstinadamente a admitir, ou seja, o princípio segundo o qual ‘tudo é possível’. Somente porque os campos constituem, no sentido que se viu, em espaço de exceção, no qual não apenas a lei é integralmente suspensa, mas, além disso, fato e direito se confundem sem resíduos, neles tudo é verdadeiramente possível. Se não se compreende esta particular estrutura jurídico-política dos campos, cuja vocação é justamente a de realizar estavelmente a exceção, o incrível que aconteceu dentro deles permanece totalmente ininteligível. Quem entrava no campo movia-se em uma zona de indistinção entre externo e interno, exceção e regra, lícito e ilícito, na qual os próprios conceitos de direito subjetivo e de proteção jurídica não faziam mais sentido; além disso, se era um hebreu, ele já havia sido privado, pelas leis de Nuremberg, dos seus direitos de cidadão e, posteriormente, no momento da ‘solução final’, completamente desnacionalizado. Na medida em que os seus habitantes foram despojados de todo estatuto político e reduzidos integralmente a vida nua, o campo é também o mais absoluto espaço biopolítico que jamais tenha sido realizado, no qual o poder não tem diante de si senão a pura vida sem qualquer mediação. Por isso o campo é o próprio paradigma do espaço político no ponto em que a política torna-se biopolítica e o *homo sacer* se confunde virtualmente com o cidadão. A questão correta sobre os horrores cometidos nos campos não é, portanto, aquela que pergunta hipocritamente como foi possível cometer delitos tão atrozes para com seres humanos; mais honesto e sobretudo mais útil seria indagar atentamente quais procedimentos jurídicos e quais dispositivos políticos permitiram que seres humanos fossem tão integralmente privados de seus direitos e de suas prerrogativas, até o ponto em que cometer contra eles qualquer ato não mais se apresentasse como delito (a esta altura, de fato, tudo tinha se tornado verdadeiramente possível). (2002: 177-178)

<sup>420</sup> O mercado de trabalho também se constitui em espaço anômico, porque nele não incidem regras legais regulamentares, apenas a lei da oferta e da procura (quem aceita o menor salário, as piores condições de trabalho), a “meritocracia”, a concorrência predatória do outro (espécie de *darwinismo* social), em síntese, a lei da selva.

jante), não será punida. A pessoa trabalhadora despossuída (vida nua) é o *homo sacer* dos tempos atuais, constituindo vida matável e não sacrificável, cuja eliminação de direitos, da cidadania, da condição de ser humano e até da própria vida<sup>421</sup> não constitui crime nem sequer ilícito.

DUSSEL<sup>422</sup> descreve bem a passagem do campo do mercado de trabalho para o campo da atividade econômica, quando o corpo da pessoa trabalhadora fica à disposição da empresa, no que chama de subsunção do trabalho e do processo de trabalho:

[5.41] *Firmado el contrato, el trabajador sale del mercado (la circulación) y entra en el lugar donde actualizará efectivamente su trabajo ante medios de producción poseídos igualmente por el antiguo poseedor del dinero. Es allí donde se produce una misteriosa transformación. Marx usa aquí su extensa cultura literaria y trayendo a colación la Divina comedia de Dante escenifica la situación como la entrada al infierno (es decir: la fábrica):*  
«Abandonemos, por tanto, esa ruidosa esfera instalada en la superficie y accesible a todos los ojos, para dirigimos, junto al poseedor del dinero y al poseedor de la fuerza de trabajo, siguiéndole los pasos, hacia la oculta sede de la producción en cuyo dintel se lee: *No admittance except on business*».<sup>423</sup>

Interessante observar que as novas formas jurídicas concernentes à *uberização*, à *gig economy*, ao microempreendedorismo, v.g., procuram descontextualizar a relação de trabalho, eliminando a figura do empregador e da pessoa empregada (a pessoa não vende mais sua força de trabalho, mas sim, presta serviços “autonomamente” em uma plataforma<sup>424</sup> que reúne múltiplos tomadores, ou pela “empresa de si mesmo”<sup>425</sup>), permitindo que a “mão invisível do merca-

<sup>421</sup> Inúmeras vidas de pessoas que trabalham para aplicativos de tele entrega, por exemplo, são consumidas em acidentes de trânsito nas grandes cidades sem que as plataformas sejam responsabilizadas por acidente de trabalho decorrente do risco da atividade.

<sup>422</sup> DUSSEL (2013: 92).

<sup>423</sup> Cabe trazer à baila, por pertinente, a integralidade da citação de MARX feita por DUSSEL, comparando a pessoa que trabalha como o cordeiro que vai ao sacrifício:

*El capital, lib. I, cap. 4 (Marx, 1975,11,6, p. 191; 1975b, I/l,p. 214). Con respecto al cordero del sacrificio escribe: «El otrora poseedor de dinero abre la marcha como capitalista; el poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como su obrero; el uno, significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo hace con recelo, reluciente, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que se lo curtan» (ibid., pp. 191-192; p. 214). (DUSSEL, 2013: 92)*

<sup>424</sup> A figura que pode corresponder a um sindicato ou consórcio empresarial é desvirtuada nominal e juridicamente para um conceito modernoso e abstrato de “plataforma”.

<sup>425</sup> Conforme FESTI (2020), “a aparente liberdade esconde nova forma de servidão. Em cada plataforma digital, tem-se um algoritmo que gere o trabalho e é capaz de intervir e orientar o comportamento dos indivíduos envolvidos. Assim, reforça-se o que há de mais tradicional no capitalismo, o controle sobre o processo de trabalho e a apropriação privada dos lucros.” O autor conclui de forma

do” (ente abstrato que despessoaliza o poder econômico) regularize as “novas relações de trabalho” que emergem da quarta Revolução Industrial ou digital e suas transformações (automação, economia digital, *big data* etc.), mediante a lei da oferta e da procura. Assim, o “antigo” Direito do Trabalho, em processo de extinção, fica reservado apenas a pessoas trabalhadoras essenciais a formas de empreendimento ainda não atualizadas, o que cria, também, um *darwinismo* social<sup>426</sup> no “mercado de trabalho” entre pessoas com alguns direitos trabalhistas e pessoas sem direitos. É a realização esplendorosa do neoliberalismo<sup>427</sup>, a insegurança total para quem trabalha, que permite ao capital maximizar sua ganância explorando ao máximo o trabalho alheio – *arbeit macht frei*<sup>428</sup>.

A multinacional Amazon, por exemplo, a mais potente de comércio mundial, que tem por proprietário Jeff Bezos, um dos maiores bilionários do mundo, colocou bracelete em seus trabalhadores e trabalhadoras com duas finalidades, de controlar os seus movimentos, para ser mais “produtivos”, como também

---

contundente que a pessoa integrante desse contingente informal “não trabalha para viver, vive para trabalhar num mundo cada vez mais caótico, precário e instável. É o distópico capitalismo de plataforma.”

<sup>426</sup> Vale a transcrição de ZOJA (2015: 62-63) sobre o *darwinismo* social:

*A partir de la idea de selección natural introducida por Darwin, se produce un deslizamiento hacia el darwinismo social. Esta ideología se presentó como una prolongación del estudio de la naturaleza: sostiene que las culturas (a menudo definidas como ‘razas’, de modo que sus cualidades queden establecidas desde el nacimiento y resulten inmutables) ‘inferiores’ están destinadas a desaparecer por una cuestión de selección natural’. Exterminar está mal, pero ayudar a la naturaleza en sus procesos de crecimiento y colaboración con las variantes más aptas es algo bueno, no un hecho censurable*

<sup>427</sup> Conforme BOURDIEU (1998: 36):

Efetivamente, a força da ideologia neoliberal se apoia em uma espécie de *neodarwinismo* social: são “os melhores e os mais brilhantes”, como se diz em Harvard, que triunfam (Becker, prêmio Nobel de economia, desenvolveu a idéia de que o darwinismo é o fundamento da aptidão para o cálculo racional, que ele atribui aos agentes econômicos). Por trás da visão mundialista da internacional dos dominantes, há uma filosofia da competência, segundo a qual são os mais competentes que governam, e que têm trabalho, o que implica que aqueles que não têm trabalho não são competentes. Há os *winner*s (vencedores) e os *loser*s (perdedores), há a nobreza, o que eu chamo de nobreza de Estado, isto é, essas pessoas que têm todas as propriedades de uma nobreza no sentido medieval do termo, e que devem sua autoridade à educação, ou melhor, segundo eles, à inteligência, concebida como um dom do céu, quando sabemos que na realidade ela é distribuída pela sociedade, fazendo com que as desigualdades de inteligência sejam desigualdades sociais.

<sup>428</sup> “O trabalho liberta”, frase em alemão encontrada nas entradas dos campos de concentração nazistas, nos quais o povo judeu e pessoas excluídas pelo regime eram mantidas em trabalho forçado até a aplicação da “solução final”, o extermínio.



para que os programas de *software* da empresa pudessem entender o trabalho dos operários para logo os substituíssem por robôs, com objetivo de eliminar totalmente a força de trabalho humano<sup>429</sup>. A lógica é a de máxima exploração antes do descarte total.

STANDING<sup>430</sup> comenta que, nos anos 70, um grupo de economistas com inspiração ideológica ganhou a atenção dos políticos propondo um modelo neoliberal, no qual um dos temas era a flexibilidade do mercado de trabalho, o que se converteu em agenda para transferência de riscos e insegurança para os trabalhadores e suas famílias, tendo por resultado a criação de um precariado global – milhões de pessoas no mundo sem uma âncora de estabilidade. No mesmo sentido, BOURDIEU:

A existência de um importante exército de reserva, que não se acha mais apenas, devido à superprodução de diplomas, nos níveis mais baixos de competência e de qualificação técnica, contribui para dar a cada trabalhador a impressão de que ele não é insubstituível e que o seu trabalho, seu emprego, é de certa forma um privilégio, e um privilégio frágil e ameaçado (é aliás o que lembram a ele, ao primeiro deslize, seus empregadores, e, à primeira greve, os jornalistas e comentaristas de todo gênero). A insegurança objetiva fundar uma insegurança subjetiva generalizada, que afeta hoje, no cerne de uma economia altamente desenvolvida, o conjunto dos trabalhadores e até aqueles que não estão ou ainda não foram diretamente atingidos. (BOURDIEU, 1998: 72)

Segundo BECK<sup>431</sup>, três mitos blindam o debate público que impede compreender que o mundo está se dirigindo a toda velocidade para um capitalismo sem trabalho: o mito da impenetrabilidade (“tudo é complicado”), o mito de que o auge da sociedade dos serviços vai salvar a sociedade do trabalho, e o mito de que os custos laborais devem ser reduzidos ao mínimo para que termine o problema do desemprego. O autor cita o exemplo de Inglaterra e Estados Unidos, a primeira, que na década de 1970 possuía 80% de sua população em idade de trabalhar plenamente empregada e já, ao final da década de 1990 só restou 1/3 desta mesma população empregada, e ambos os países, acreditados como “paraísos da ocupação”, oferecem, na verdade, uma redistribuição do desemprego, sob novas formas mistas de desemprego e ocupação, compreendendo trabalhos atípicos (como a tempo parcial e insignificante), nas quais a maioria das pessoas

---

<sup>429</sup> O fato está divulgado em diversas notícias, como por exemplo, a constante da Revista Exame, publicada em 26 de maio de 2014, intitulada “Jeff Bezos, da Amazon, é eleito o pior chefe do mundo”. Recuperado de <https://exame.com/negocios/jeff-bezos-da-amazon-e-eleito-o-pior-chefe-do-mundo/> Também em notícia mais recente, divulgando a oposição do governo da Itália à prática da empresa, no jornal *Corriere della Sera*, publicada em 01 de fevereiro de 2018, com o título “Amazon brevetta il braccialeto elettronico che controlla i lavoratori: scoppia la polemica”. Recuperado de [https://www.corriere.it/cronache/18\\_febbraio\\_01/amazon-brevetta-braccialeto-elettronico-che-controlla-lavoratori-scoppia-polemica-6eacf7d2-0760-11e8-8886-af603f13b52a.shtml](https://www.corriere.it/cronache/18_febbraio_01/amazon-brevetta-braccialeto-elettronico-che-controlla-lavoratori-scoppia-polemica-6eacf7d2-0760-11e8-8886-af603f13b52a.shtml)

<sup>430</sup> STANDING (2014: 15).

<sup>431</sup> BECK (1998: 93).

vivem na corda bamba entre o trabalho e o desemprego, tendo de se contentar com salários de fome<sup>432</sup>.

GAMBACORTA (2020) acrescenta o mito atualmente vigente:

*La hegemonía prevalente ha confundido a muchos trabajadores y trabajadoras haciéndoles pensar que su mínima participación en emprendimientos, economía colaborativa o su asociación (?) a aplicaciones digitales, los transforma automáticamente en prósperos empresarios.*  
(GAMBACORTA, 2020)

A questão da desfundamentalização dos Direitos Humanos do Trabalho também pode ser vista da perspectiva do Direito do Trabalho do Inimigo, paráfrase da doutrina do Direito Penal do Inimigo. Aliás, o encontro entre Direito Penal e Direito do Trabalho não é casualidade. ZAFFARONI<sup>433</sup> narra que a Revolução Industrial, com a ascensão de uma nova classe hegemônica de industriais e comerciantes no poder, deslocou o poder punitivo, sem perder seu caráter seletivo, aos “molestos”, ampliados com a concentração urbana, a quem era necessário domesticar para a produção industrial como também neutralizar os que resistissem. STANDING<sup>434</sup> pontua que, na era da globalização, há uma quantidade sem precedentes de pessoas sendo criminalizadas, e que parte da expansão da criminalização deve-se ao pequeno crime, incluindo reações comportamentais aos esquemas de assistência social, criadores de riscos imorais, situações em que as pessoas carentes se arriscam e terminam violando alguma regra burocrática. Nesta categoria, sustentam, encontram-se os trabalhadores temporários desprovidos de carreiras, migrantes, batalhadores criminalizados, requerentes de benefícios sociais etc.<sup>435</sup>

---

<sup>432</sup> Idem, *ibidem*, 93-94.

<sup>433</sup> ZAFFARONI (2018: 43-44). O autor prossegue dizendo que, como não era mais tolerável exterminar nas praças, se prendiam em prisões com altas taxas de mortalidade, submetendo as pessoas apreendidas a processos com juízos intermináveis.

<sup>434</sup> STANDING (2014: 33-34).

<sup>435</sup> BOURDIEU (1998:29) comenta o resultado visível nos EUA:

Nos Estados Unidos, assiste-se a um desdobramento do Estado: de um lado, um Estado que mantém as garantias sociais, mas para os privilegiados, suficientemente cacifados para que possam dar segurança, garantias; de outro, um Estado repressor, policialesco, para o povo. No estado da Califórnia, um dos mais ricos dos Estados Unidos — por um momento considerado por alguns sociólogos franceses como o paraíso de todas as liberações — e também dos mais conservadores, dotado da universidade certamente mais prestigiada do mundo, o orçamento das prisões é superior, desde 1994, ao orçamento de todas as universidades reunidas. Os negros do gueto de Chicago só conhecem, do Estado, o policial, o juiz, o carcereiro e o *parole officer*, isto é o oficial que aplica as penas, diante de quem eles devem se apresentar regularmente, sob risco de voltar à prisão. Temos ali uma espécie de realização do sonho dos dominantes, um Estado que, como mostrou Loïc Wacquant, se reduz cada vez mais à sua função policial.

Portanto, a falta de proteção social nas relações de trabalho desborda para a criminalização ou, por outras palavras, a inoperância do Direito do Trabalho sujeita as pessoas a uma condição de vulnerabilidade tal, que acaba, de uma forma ou de outra, atraindo a sua criminalização, migrando do Direito protetivo para o Direito punitivo, o Direito Penal<sup>436</sup>.

Retornando ao Direito Penal do Inimigo, ZAFFARONI<sup>437</sup>, tratando dos fundamentos políticos dessa doutrina, dentre outros pensadores, cita Hobbes, que não admitia a oposição de resistência ao soberano, a qual implicava a guerra de todos contra todos (*bellum omnium contra omnes*), considerando a pessoa que resistisse ao poder do soberano como um inimigo reintrodutor da guerra e não como um delinquente. Por conseguinte, a este inimigo, os danos infligidos não podiam ser considerados como penas, pois, ao não estar sujeito à lei não poderia transgredi-la, como também os danos que poderiam lhe ser causados seriam entendidos como atos de hostilidade, sendo legítimo infligir qualquer classe de danos em uma situação de hostilidade declarada. Como se vê, o fundamento hobbesiano para a condição de *inimigo* encontra muita similitude à condição do *homo sacer*, de AGAMBEN, diferindo apenas que para este último o sujeito é incluído no ordenamento, enquanto para Hobbes a ele nunca pertenceu.

A doutrina penal do Direito do Inimigo, na atualidade, é defendida por JAKOBS, que propõe a seguinte síntese:

Quem por princípio se conduz de modo desviado, não oferece garantia de um comportamento pessoal. Por isso, não pode ser tratado como cidadão, mas deve ser combatido como inimigo. Esta guerra tem lugar com um legítimo direito dos cidadãos, em seu direito à segurança; mas diferentemente da pena, não é Direito também a respeito daquele que é apenado; ao contrário, o inimigo é excluído. (JAKOBS, 2007: 49)

O autor ainda esclarece que, no âmbito de aplicação do Direito Penal do Inimigo, as medidas não tem lugar fora do Direito, no entanto, os imputados são excluídos de seu direito e “o Estado elimina direitos de modo juridicamente ordenado”<sup>438</sup>.

Neste contexto, o Direito do Trabalho do Inimigo se configuraria na eliminação de direitos sociais, pelo Estado, “de forma juridicamente ordenada”, excluindo do direito pessoas declaradas párias ou imputadas pelo poder econômico (as que não podem ter direitos para não comprometer a máxima lucratividade empresarial), nas novas figuras de precariado pós moderno (como autônomos uberizados e microempreendedores individuais), que são incluídas na ordem jurídica para simplesmente perder proteção social, e logo submetidas ao completo controle e dominação pelo capital na forma liberal clássica, no âmbito do Direito Civil ou Comercial, numa relação entre “iguais”. Segundo BOURDIEU<sup>439</sup>,

---

<sup>436</sup> Ou seja, a pessoa paga, literalmente, com o corpo pelo seu fracasso no sistema capitalista.

<sup>437</sup> ZAFFARONI (2018: 123-124).

<sup>438</sup> Idem, *ibidem*, p. 40.

<sup>439</sup> BOURDIEU (1998: 74).

“a precariedade se inscreve num modo de dominação de tipo novo, fundado na instituição de uma situação generalizada e permanente de insegurança, visando obrigar os trabalhadores à submissão, à aceitação da exploração.”

STANDING<sup>440</sup> descreve o precariado (palavra originada da composição entre proletariado e precário) como uma classe sem identidade baseada no trabalho, em condições de vulnerabilidade e desprovida do que chama de sete formas de garantia e segurança de trabalho (segurança no emprego, segurança no trabalho, segurança de renda, garantia de vínculo empregatício, garantia de mercado de trabalho, garantia de reprodução de habilidade, garantia de representação). O autor sustenta que se trata de uma classe não homogênea, desprovida de sentimento de pertencimento a uma classe trabalhista solidária. Em suas palavras, “ser precarizado é ser sujeito a pressões e experiências que levam a uma existência precariada, de viver no presente, sem uma identidade segura ou um senso de desenvolvimento alcançado por meio do trabalho e do estilo de vida.”<sup>441</sup>

ZAFFARONI<sup>442</sup> sustenta que o Direito Penal do Inimigo é doutrina compatível apenas com Estados totalitários e não com Estados de Direito. Lembrando que BINDING–HOICHE (2009), que estruturaram o Direito Penal nazista, sustentavam que a “vida indigna de ser vivida” podia ser assim definida pelo soberano (*Führer*) e, nesta condição, exterminada.

De igual forma, o Direito do Trabalho do Inimigo é compatível apenas com o totalitarismo tecnofinanceiro<sup>443</sup> que comanda a política e a produção legislativa contemporânea, afastando a ordem jurídica e a aplicação da justiça de um Estado de Direito que passa a operar como Estado totalitário econômico (neoabsolutismo ou absolutismo econômico – *le pouvoir c’est moi*<sup>444</sup>).

Outra perspectiva de análise das relações de trabalho desfundamentalizadas é a da aparição das necropolíticas neoliberais, flexibilizadoras e desregulamentadoras, que paulatinamente vão dando lugar ao necrodireito do trabalho e à necrojustiça laboral, conceitos em oposição total aos Direitos Humanos do Trabalho e à justiça social.

<sup>440</sup> STANDING (2014: 28-33).

<sup>441</sup> Idem, *ibidem*, p. 37.

<sup>442</sup> ZAFFARONI (2018: 159-160).

<sup>443</sup> Segundo FARIÑAS DULCE (2020), grandes empresas tecnológicas tentam impor uma ideologia pantecnológica, a serviço de interesses privados sem limites nem controles, situando as sociedades atuais em déficit democrático difícil de superar. O triunfo da razão tecnológica induz crer que se vive em um tecnototalitarismo, contra o qual não se pode fazer nada, mesmo que se vejam afetados direitos fundamentais, liberdades públicas e privacidade individual, e ainda que se ponha em risco as estruturas democráticas.

<sup>444</sup> Este fenômeno se traduz em espécie de absolutismo contemporâneo: no passado, a fórmula eternizada por Luis XIV, monarca da França, “*l’État c’est moi*”, pode ser relida como *le pouvoir c’est moi* – já que os grandes bancos e as grandes corporações reinam de forma absoluta no mundo, acima do bem e acima do mal. Nesta etapa, o capital imperante subjuga as democracias.

Com efeito, é incompatível ao sistema e principiologia de Direitos Humanos o retrocesso, inobstante, várias reduções de direitos sociais efetuadas através de reformas neoliberais operadoras de necropolíticas sociais, são incorporadas e aplicadas sem muitos questionamentos ao Direito do Trabalho, que se torna um necrodireito do trabalho (NARVÁEZ HERNANDEZ, 2017). O Poder Judiciário, por sua vez, quando aprecia os conflitos entre capital e trabalho, valida a aplicação dessas normas, desconsiderando completamente a principiologia do Direito do Trabalho e dos Direitos Humanos (sempre ignorados, ante a prevalência do contratualismo). Toma lugar, então, a necrojustiça laboral, consagrando uma postura estatal contra a classe mais débil, que necessita empregar sua força de trabalho para a subsistência.

A questão não é menor, pois trabalhadores e trabalhadoras sofrem violência cotidiana pelo capital, no massacre de seus Direitos Humanos laborais, que, como visto, representam a sobrevivência. A jornada extraordinária exigida e não paga, v.g., que retira a pessoa do convívio social e familiar, e de seu direito de descanso, pode representar, no final do mês, o medicamento que se deixou de comprar (em modelos de Estado cada vez menos dedicados à saúde pública e assistência social), a qualidade da alimentação em função da comida que teve de ser adquirida em menor quantidade e qualidade, ou das refeições que deixaram de ser feitas para economizar etc.

O resultado é a perda da dignidade, como denuncia RODOTÀ (2014):

*El trabajador, pues, es la figura que da directa concreción al homo dignus. Pero esta antropología de la modernidad jurídica es la que ahora se pone en tela de juicio, y hasta es desafiada y radicalmente negada por una lógica del mercado que, en nombre de la productividad y de los imperativos de la globalización, anula los derechos y nos devuelve a aquella «gestión industrial de los hombres» que ha sido el rasgo más angustioso de los totalitarismos del siglo XX. El nexo entre trabajo y dignidad cae hecho pedazos ante una nueva reducción de las personas a cosas, a «objetos» compatibles con las exigencias de la producción. De la existencia libre y digna se tiende a pasar a una especie de «grado cero» de la existencia, a la retribución como mero umbral de supervivencia, como garantía únicamente del «salario mínimo biológico», del «mínimo vital». (RODOTÀ, 2014: 178)*

Não é necessário falar de cultura (acesso a livros, educação, teatro, cinema etc.), pois a luta pela sobrevivência não permitirá a essas pessoas nem mesmo o luxo de pensar<sup>445</sup>. MATTELARD<sup>446</sup> sintetiza bem a realidade dessas ne-cropolíticas:

Em nome do imperativo categórico geo-tecno-financeiro, as sociedades são obrigadas a curvar-se à ordem de aceitar as desregulamentações do estado de direito como algo indiscutível. Apresentados aos cidadãos como fatos acabados, estes decretos os privam de sua voz e, por isso mesmo, fazem recuar os umbrais da tolerância democrática.

O multi-fluxo linear (mais do mesmo) de conteúdo informacional operado em rede e entregue nas chamadas redes sociais e na mídia digital às pessoas, pronto para consumo imediato (mensagem direta ou subliminar *prêt-à-porter*), se encarrega de limitar a instrução e a diversão à prática milenar do *panem et circenses*<sup>447</sup>, a transmissão da atual *necrocultura*: racismo, homofobia, misoginia, ódio, fascismo<sup>448</sup>, *fake-news* etc., nas redes sociais, e os “instrutivos”

<sup>445</sup> A obra clássica de GALEANO (2012), “*As veias abertas da América Latina*”, há muito apontou:

É multitudinária a invasão de braços provenientes das zonas mais pobres de cada país; as cidades excitam e defraudam as expectativas de trabalho de famílias inteiras, atraídas pela esperança de elevar o nível de vida e conseguir um lugar no grande circo mágico da civilização urbana. Uma escada rolante é a revelação do Paraíso, mas o deslumbramento não se come: a cidade torna os pobres ainda mais pobres, pois cruelmente lhes oferece miragens de riquezas às quais jamais terão acesso, automóveis, mansões, máquinas poderosas como Deus e como o Diabo, ao mesmo tempo em que lhes nega um emprego seguro, um teto decente para se recolher e pratos cheios na mesa de cada meio-dia.

<sup>446</sup> MATTELARD (2000: 185).

<sup>447</sup> Cada vez menos pão e mais circo, na sociedade do espetáculo, que apresenta o *show* de horrores na mídia e nas redes sociais, estimulando a corrupção da alteridade, ensinando as massas a ter medo do *outro*, impedindo a formação de solidariedade e consciência de classe. Conforme DEBORD (2003: 10), “a forma e o conteúdo do espetáculo são a justificação total das condições e dos fins do sistema existente. O espetáculo é também a presença permanente desta justificação, enquanto ocupação principal do tempo vivido fora da produção moderna”.

<sup>448</sup> A definição de DEBORD (2003: 71-72) sobre fascismo coincide com releituras mitológicas contemporâneas do chamado populismo de direita (no Brasil, o discurso do golpe de 1964 recuperado – “Deus, pátria, família”):

O fascismo foi uma defesa extremista da economia burguesa, ameaçada pela crise e pela subversão proletária, o estado de sítio na sociedade capitalista, pelo qual esta sociedade se salva e se dota de uma primeira racionalização de urgência, fazendo intervir maciçamente o Estado na sua gestão. Mas uma tal racionalização é, ela própria, agravada pela imensa irracionalidade do seu meio. Se o fascismo se lança na defesa dos principais pontos da ideologia burguesa tornada conservadora (a família, a propriedade, a ordem moral, a nação), reunindo a pequena burguesia e os desempregados desnorreados pela crise ou desiludidos pela



programas televisivos (teoria do agendamento nos noticiários e futebol<sup>449</sup>), tornando as massas<sup>450</sup> cada vez mais imbecilizadas<sup>451</sup>, consolidando o projeto neoliberal contemporâneo de eliminação dos exércitos de reserva<sup>452</sup>, não mais necessários em face do desenvolvimento da automação e robótica nas empresas do terceiro milênio<sup>453</sup>.

Em NIETZSCHE<sup>454</sup>, é possível encontrar as consequências sociais da *necro-cultura*, que leva as pessoas a canalizar suas frustrações e insatisfações de uma vida indigna (ou de privações) no que chamou de gozo da crueldade:

---

impotência da revolução socialista, ele próprio não é fundamentalmente ideológico. Ele apresenta-se como aquilo que é: uma ressurreição violenta do mito, que exige a participação numa comunidade definida por pseudovalores arcaicos: a raça, o sangue, o chefe.

<sup>449</sup> Intercalar noticiário com futebol (tirando o foco de fatos relevantes, por exemplo) é fórmula de sucesso comprovado na América Latina. A teoria da agenda ou *agenda-setting*, desenvolvida por Maxwell McCombs (1996), com base em estudos de Walter Lippmann (1922), comprova que a mídia tem efeito na opinião pública, pois, como explica COLLINGS (2001: 88-89, 95), através de estratégia de *framing*, ou enquadramento seletivo e destacado de aspectos da realidade no texto comunicativo, provoca-se a interpretação, a avaliação moral e ou o tratamento recomendado para o tema apresentado.

<sup>450</sup> Segundo CASTELLS (1999: 416-417, 504-505), o conceito de comunicação de massa, originou-se da sociedade de massa como expressão direta do sistema de mídia da nova tecnologia de comunicação eletrônica exercido por governos e oligopólios empresariais. Aponta que a elite dominante usa como forma fundamental de dominação a capacidade de desorganizar os grupos da sociedade que, embora constituam a maioria, enxergam seus interesses parcialmente representados apenas no atendimento dos interesses dominantes.

<sup>451</sup> A filósofa Márcia Tiburi (TIBURI-CASARA, 2017) explica que profissionais de mídia, remunerados pelo grande capital, agem como “imbecilizadores profissionais”, desinformando e desvirtuando a atenção da população, extirpando o senso crítico das pessoas pelo que chama de “espetacularização da inutilidade”, no culto de algo capaz de reproduzir o processo de imbecilização. Contudo, a autora fala em lobotomia televisiva, virtual e digital para ausência de reflexão. “Estão todos por demais ocupados cumprindo com as obrigações assumidas e, quando surge um minuto livre, uma tarde, uma noite diante da televisão ou do computador, o pobre cidadão trabalhador terá seu espírito maltratado pelo imbecilizador do povo”.

<sup>452</sup> Depois de operada a transferência da “proteção” do necrodireito do trabalho para o âmbito do Direito Penal, na costumeira proteção da propriedade (delitos contra o patrimônio), quem não vai para a cadeia, enfrentar a violência do Estado policial nas instalações desumanas das prisões, é deixado para morrer à míngua, nas gentrificações dos bolsões de miséria das cidades, desguarnecidos de infraestrutura como água e esgoto, ou, muitas vezes, nas ruas, sem direito a um teto (violação do Direito Humano de moradia).

<sup>453</sup> É o que explica Susan GEORGE na entrevista denominada “*Es necesaria outra globalización*”, que as pessoas pobres são cada vez menos necessárias porque não aportam nada em termos de produção nem de consumo, constituindo um exército de reserva de mão-de-obra, a que se referia Marx, que já alcançou proporções globais, pois neste quadro de pobreza sempre haverá alguma pessoa disposta a trabalhar por menos e, por isso, o capital se fez livre para utilizar esta reserva aonde quer que esteja. (GEORGE, 2008: 40).

<sup>454</sup> NIETZSCHE (2017: 16-17).

18. *La moral del padecimiento voluntario. - ¿Cuál es el goce mayor para los hombres en estado de guerra, en las pequeñas comunidades rodeadas de constantes peligros, en que reina la moral más estrecha? O mejor: ¿Cuál es el mayor placer para las almas vigorosas, sedientas de venganzas, rencorosas, pérfidas, dispuestas para los lances más tremendos, endurecidas por las privaciones y por la moral? El placer de la crueldad; de ahí que para estas almas y en estas situaciones se tenga por virtud el ser ingenioso e insaciable en la venganza. La comunidad se siente vigorizada ante el espectáculo de los actos de crueldad y puede desechar por un momento la presión del miedo y la inquietud de las continuas precauciones a que se ve obligada. La crueldad es uno de los más antiguos goces de la humanidad. (NIETZSCHE, 2017: 16-17)*

Portanto, o prefixo *necro* tem um sem número de aplicações, como por exemplo, no *necrossindicalismo*, quando o sindicato é convidado, pelo necrodireito do trabalho aplicado pela necrojustiça laboral, a praticar a prevalência do negociado sobre o legislado, rebaixando os direitos mínimos conquistados no Direito positivo da categoria que representa.

Assim, o sucesso da necropolítica, do necrodireito e da necrojustiça se somam para, em círculo “virtuoso”, operar a *necro-eleição*, sonhando a cidadania das massas desinformadas pela *necrocultura*, chamadas a votar e eleger políticos cada vez mais sem escrúpulos, representativos do grande capital, totalmente em contra de seus direitos. HERRERO<sup>455</sup> ilustra esta realidade:

*En medio de estas turbulencias se produce un repunte significativo de opciones políticas de ultraderecha. Trump, Bolsonaro o Abascal enarbolan un discurso xenófobo, misógino, histriónico y agresivo que evoca un pasado glorioso que nunca existió. Buscan desviar la mirada del proceso de desposesión y expulsión que estamos viviendo. Solo en un clima de tensión, violencia e histeria es posible esconder dicho proceso. La economía globalizada asienta el fascismo territorial a partir de la ingeniería social y la racionalidad económica que considera que las vidas y los territorios importan solo en función del “valor añadido” que produzcan. La extrema derecha es el cómplice necesario que criminaliza, estigmatiza, deshumaniza y legitima el abandono y expulsión de las personas “sobrantes”. La ultraderecha pretende mantener el orden del fascismo territorial mediante el miedo, la desconfianza y el ejercicio del poder contra el último. (HERRERO, 2019)*

Esta realidade das novas formas de controle e dominação social do grande capital chamam a atenção para uma realidade distópica cuja permanência pode entregar um futuro totalitário (corporativismo globalizado totalitário neoliberal), em que a democracia será uma vaga lembrança do passado e o Direito do Trabalho um assunto encerrado em sarcófago de algum museu. A interconexão dos Direitos Humanos em ataque mostra como é possível a regressão social sem questionamento pelo povo, pois o massacre de direitos sociais acompanhado da anulação do Direito Humano à informação impede o senso crítico e a reação.

---

<sup>455</sup> HERRERO (2019).

### III.5 Necessidade de mudança

Não obstante a Declaração de Filadélfia proclamar que o trabalho não é uma mercadoria, enquanto o mundo jurídico-laboral<sup>456</sup> tratar o trabalho humano no contexto de um “contrato” que tem por substrato uma operação de compra e venda, em que o empregador compra e a pessoa trabalhadora “vende a sua força de trabalho”, disponível e ofertada no “mercado de trabalho”, o resultado será, inevitavelmente, o rebaixamento e a precarização da condição social e da cidadania de quem necessita trabalhar para sobreviver. *Ipsa facto*, cabe a crítica à postura da OIT, no Século XXI, em seguir utilizando a expressão “mercado de trabalho” e tolerar a ficção jurídica do “contrato de trabalho” nos países capitalistas.

A futura história do Direito do Trabalho, se este sobreviver ao ataque neoliberal do capital, em alguns anos poderá estar mostrando um dos maiores absurdos cometidos na construção jurídico-laboral, que foi a engendração da figura do “contrato de trabalho” (não importa se individual ou coletivo). Interessante perceber que as normas constitucionais de Estados de Bem-Estar Social, Estados Democráticos de Direito, e internacionais, não são compatíveis com estas formas jurídicas que se atribuiu às relações de trabalho. Não se sabe, portanto, o que ficou pelo caminho após a promulgação das cartas constitucionais garantidoras dos direitos sociais como direitos fundamentais: a não compreensão dos Direitos Humanos do Trabalho ou a sua não aceitação como tal. Seja como for, o contratualismo laboral conseguiu, em pleno século XXI, a façanha de desnaturalizar, desfundamentalizar os direitos laborais, seja através de produção legislativa corrompida, seja por meio de jurisprudência contratualista, ou ambas juntas.

Vale a anotação de que as Constituições do Brasil, de 1988, e da Espanha, de 1978, coincidiram com o período de transição democrática: após o término das ditaduras nesses países, os parlamentos foram inspirados a estruturar desenhos de Estados Social-Democráticos de Direito. Entretanto, a concretização do modelo estatal orientado por ideais democráticos não se perfectibilizou, pois a aplicação das normas continuou sendo feita desde o nível de baixo na pirâmide normativa, e os textos constitucionais foram interpretados pela lógica de leis da ditadura (aliás, quase nunca revogadas, salvo casos pontuais) ou de leis de outro momento histórico que não eram mais compatíveis com as novas ordens constitucionais. Ou seja, não houve transição democrática para a recomposição da ordem jurídico-democrática, duramente abaladas por décadas de terrorismo de Estado (tomado pelo poder econômico), que, se tivesse ocorrido, certamente geraria estatalidades e institucionalidades realmente democráticas (e não pela metade), as quais poderiam rejeitar as figuras do “contrato de trabalho” e do “mercado de trabalho”.

---

<sup>456</sup> Nele compreendido a prática das relações laborais, doutrina, interpretação e aplicação do Direito do Trabalho.

Portanto, pode-se ter as melhores normas, as melhores leis, mas se as pessoas não adquirem consciência social e compreensão de seu significado, seu conteúdo não passará de mera retórica. De idêntica forma, se não há cultura de Direitos Humanos, não passarão de dizeres bonitos, decorativos de leis e cartas constitucionais, mas de pouca ou nenhuma aplicabilidade prática.

Essa é mais uma razão do chamado ao Enfoque de Direitos Humanos para o Direito do Trabalho, que obriga o intérprete a incorporar esta cultura antes de aplicar a norma e repensar dogmas que deveriam estar esclerosados no século XXI, mas persistem como cadáveres adiados e insepultos putrefazendo qualquer possibilidade de evolução social.

## CAPÍTULO IV

### ENFOQUE DE DIREITOS HUMANOS APLICADO À HERMENÊUTICA JUSLABORAL

Estabelecida a necessidade de aplicação do Enfoque de Direitos Humanos à hermenêutica jurídica, passa-se a abordar o atual estágio de evolução (ou involução, melhor dito) da hermenêutica juslaboral, ou seja, do Direito do Trabalho, que demanda o uso do EDH para superação de problemas e deficiências na aplicação das normas laborais na contemporaneidade.

Como dito, o EDH se acopla perfeitamente aos ramos do Direito com natureza tutelar, como o é o Direito do Trabalho. Parafraseando ZAFFARONI<sup>457</sup>, que defende que o Direito Penal Humano deve aprofundar ao máximo a interpretação de todo o Direito segundo as normas fundamentais, também o Direito Humano do Trabalho deve seguir o mesmo caminho, como se passa a explicar.

#### IV.1 A fundamentalidade superior do Direito Humano do Trabalho

A fundamentalidade de um direito pode ser entendida pelo aspecto formal (constar do rol de direitos e garantias fundamentais da Constituição de um país<sup>458</sup>) ou material, relacionado à sua universalidade como valor humano, como alerta FERRAJOLI<sup>459</sup>. O autor propõe a seguinte definição, dita teórica:

(...) são “direitos fundamentais” todos aqueles direitos subjetivos que correspondem universalmente a “todos” os seres humanos enquanto dotados do *status* de pessoas, de cidadãos ou pessoas com capacidade de obrar; entendendo por “direito subjetivo” qualquer expectativa positiva (de prestações) ou negativa (de não sofrer lesões) adscrita a um sujeito por uma norma jurídica; e por “*status*” a condição de um sujeito, prevista assim mesmo por uma norma jurídica positiva, como pressuposto de sua idoneidade para ser titular de situações jurídicas e/ou autor dos atos que são exercício destas”<sup>460</sup>.

Com base na proposta de definição teórica, FERRAJOLI<sup>461</sup> propõe quatro teses para a construção da democracia constitucional: radical diferença de estrutura entre os direitos fundamentais e os direitos patrimoniais; dimensão substancial da democracia (conformam interesses e expectativas de todas as pessoas, compondo o fundamento e o parâmetro da igualdade jurídica); natureza supranacional; relações entre direitos e suas garantias, primárias (obrigações

---

<sup>457</sup> ZAFFARONI (2017: 33).

<sup>458</sup> Mas, nesse caso, um legislador constituinte poderia fazer figurar algo não necessário para a organização social e política, razão pela qual a mera imposição da forma como direito fundamental não atende ao conteúdo da fundamentalidade, vinculado à própria existência do Estado de Direito.

<sup>459</sup> FERRAJOLI (2009: 20-21).

<sup>460</sup> Idem, *ibidem*, p. 19.

<sup>461</sup> Idem, *ibidem*, pp. 25-26.

de prestação e proibições de lesão) e secundárias (obrigações de reparação e sanção judicial das lesões).

Efetivamente, serão direitos fundamentais aqueles positivados nas Constituições como parte estruturante do Estado Democrático de Direito, que obedece a valores universais (e não particulares), como se passa a identificar.

Apresentando o debate sobre a ancoragem dos bens jurídicos merecedores de tutela penal, TERRADILLOS BASOCO<sup>462</sup> ensina que a seleção e definição de bens jurídicos em positivo deve partir do guia estabelecido pelos Direitos Humanos, uma vez que são universalizáveis e prévios ao Estado e ao Direito positivo, cristalizando necessidades humanas que devem ser satisfeitas. Assim, explica que não só valores relacionados aos interesses individuais como vida, liberdade, honra devem ser extraídos, como também os vinculados aos interesses coletivos que dão lugar a sucessivas gerações de Direitos Sociais e de solidariedade. Logo, assevera que são relevantes também os bens jurídicos correspondentes às pessoas como sujeitos relevantes social, política, cultural e economicamente.

Voltando à FERRAJOLI<sup>463</sup>, por outras palavras, nenhum contrato pode dispor da vida, nenhuma vontade política pode dispor das liberdades e dos demais direitos fundamentais de uma pessoa.

Destarte, para melhor compreensão do tema, cabe estruturar e visualizar a gênese de concepção e formação internacional do Direito Humano do Trabalho e como se vinculam à essência de um Estado Democrático de Direito, assim como seu desdobramento no cabedal normativo doméstico de direitos erigidos à condição de fundamentais<sup>464</sup> concernentes às relações entre trabalho e capital (valor propriedade), presentes na maior parte das Constituições. Para fins comparativos, serão tomadas as Constituições do Brasil, Argentina e Espanha.

Antes da internacionalização dos Direitos Humanos do Trabalho, há dois documentos históricos a serem mencionados na fundamentalização desses direitos: a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar (Alemanha) de 1919. Conforme ROBL FILHO<sup>465</sup> (2017), a Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos de 1917 tem influência do anarcossindicalismo (de Mikhail Bakunin<sup>466</sup>) e se traduziu na primeira Constituição social do mundo, colocando os direitos trabalhistas como direitos fundamentais ao lado das liberdades individuais e direitos políticos, inspirando a posterior Constituição de Weimar e a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, da Revolução Russa. Nas palavras de ROBL FILHO:

---

<sup>462</sup> TERRADILLOS BASOCO (2019: 207-209).

<sup>463</sup> FERRAJOLI (2010: 52).

<sup>464</sup> Positivados nas Constituições como parte principal estruturante do Estado de Direito.

<sup>465</sup> ROBL FILHO (2017: 361-362).

<sup>466</sup> Mikhail Bakunin (1814-1876) foi sociólogo e filósofo, defensor do anarquismo, escreveu, dentre outras, as obras “A Comuna de Paris e a Noção de Estado”, “Federalismo, Socialismo e Antiteologia”, “Deus e o Estado”.



O que importa, na verdade, é o fato de que a Constituição mexicana foi a primeira a estabelecer a desmercantilização do trabalho, ou seja, a proibição de equipará-lo a uma mercadoria qualquer, sujeita à lei da oferta e da procura. A Constituição mexicana estabeleceu, firmemente, o princípio da igualdade substancial de posição jurídica entre trabalhadores e empresários na relação contratual de trabalho, criou a responsabilidade dos empregadores por acidentes de trabalho e lançou, de modo geral, as bases para a construção do moderno Estado Social de Direito, inclusive e fortemente, no Brasil. Deslegitimou, com isso, as práticas de exploração mercantil do trabalho, e, portanto, da pessoa humana. (ROBL FILHO, 2017: 361-362).

Finda a Primeira Guerra Mundial, a criação da OIT em 1919 finalmente dá espaço para a internacionalização dos direitos trabalhistas e o reconhecimento de sua natureza de Direitos Humanos, com caráter universal. Assim, para alcançar o significado da fundamentalidade superior do Direito Humano ao Trabalho, é necessário focar a mirada na Constituição da OIT e seu anexo, a Declaração de Filadélfia, entidade da qual Brasil, Espanha e Argentina são membros. Nestes documentos, destacam-se as assertivas do preâmbulo da Constituição da entidade, de que a paz, para ser universal e duradoura, deve assentar sobre a justiça social, e que a não adoção, por qualquer nação, de um regime de trabalho realmente humano, cria obstáculos aos esforços das outras. A introdução à carta também registra que os países membros são movidos por sentimentos de justiça e humanidade.

O complemento da Constituição da OIT, a Declaração de Filadélfia, editada no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, acrescenta: que o trabalho não é uma mercadoria; que a liberdade de expressão e de associação é uma condição indispensável a um progresso ininterrupto; que a penúria constitui um perigo para a prosperidade geral; que há necessidade internacional, em forma contínua e conjugada, de combater a carência, mediante discussão e decisões democráticas de representantes de trabalhadores e empregadores, em igualdade, visando ao bem comum; que todos os seres humanos de qualquer raça, crença ou sexo, têm o direito de assegurar o bem-estar material e o desenvolvimento espiritual dentro da liberdade e da dignidade, da tranquilidade econômica, em condições de igualdade; que a realização de condições que permitam o exercício de tal direito deve constituir o principal objetivo de qualquer política nacional ou internacional; que quaisquer planos ou medidas, no plano nacional ou internacional, em especial de caráter econômico e financeiro, devem ser consideradas sob esse ponto de vista e somente aceitos se favorecerem e não entravarem, a realização desse objetivo principal.

Ou seja, na gênese da positivação internacional dos Direitos Humanos do Trabalho, encontramos como seus fundamentos os seguintes valores:

- Paz;
- Justiça e justiça social;
- Regime de trabalho humano;

- Natureza pública do trabalho (o trabalho não é uma mercadoria);
- Bem comum;
- Prosperidade geral, tranquilidade econômica, bem-estar e desenvolvimento espiritual;
- Não discriminação;
- Dignidade;
- Igualdade entre trabalhadores e empregadores;
- Democracia;
- Liberdade de expressão e de associação;
- Humanidade.

Nestes postulados contidos preambularmente na Constituição da OIT e na Declaração de Filadélfia, se localizam os valores universais que embasam a fundamentalidade do Direito Humano ao Trabalho, cujo conteúdo e significado está estruturado na parte III da Declaração, com os seguintes preceitos:

- **Busca do pleno emprego:** “proporcionar emprego integral para todos e elevar os níveis de vida”;

- **Direito de eleição de trabalho:** “dar a cada trabalhador uma ocupação na qual ele tenha a satisfação de utilizar, plenamente, sua habilidade e seus conhecimentos e de contribuir para o bem geral”, o que deve ser favorecido com possibilidades de formação profissional e facilitação das “transferências e migrações de trabalhadores e de colonos, dando as devidas garantias a todos os interessados”;

- **Direitos Humanos laborais em espécie:** “editar normas referentes aos salários e às remunerações, ao horário e às outras condições de trabalho, a fim de permitir que todos usufruam do progresso e, também, que todos os assalariados, que ainda não o tenham, percebam, no mínimo, um salário vital”;

- **Direito de manutenção do poder aquisitivo, direito de participação na organização da produção, direito de colaborar na aplicação da política social e econômica:** “assegurar o direito de ajustes coletivos, incentivar a cooperação entre empregadores e trabalhadores para melhoria contínua da organização da produção e a colaboração de uns e outros na elaboração e na aplicação da política social e econômica”;

- **Direito à renda mínima e cobertura médica**<sup>467</sup>: “ampliar as medidas de segurança social, a fim de assegurar tanto uma renda mínima e essencial a todos a quem tal proteção é necessária, como assistência médica completa”;

- **Direito à saúde, segurança, medicina e higiene do trabalho:** “assegurar uma proteção adequada da vida e da saúde dos trabalhadores em todas as ocupações”;

---

<sup>467</sup> Desde 1944 a OIT preconiza a renda universal como benefício de Seguridade Social, direito cuja necessidade se evidenciou com a pandemia de COVID em 2020.

- **Direito de proteção à infância e à maternidade:** “garantir a proteção da infância e da maternidade”;

- **Direito à moradia, à alimentação, ao lazer e à cultura:** “obter um nível adequado de alimentação, de alojamento, de recreação e de cultura”<sup>468</sup>;

- **Direito de acesso à educação e formação profissional:** “assegurar as mesmas oportunidades para todos em matéria educativa e profissional”.

SUPIOT<sup>469</sup> considera o conteúdo do art. 2º da Declaração de Filadélfia a correspondência de uma definição global e compreensiva de justiça social, cujo texto diz: “todos os seres humanos de qualquer raça, crença ou sexo, têm o direito de assegurar o bem-estar material e o desenvolvimento espiritual dentro da liberdade e da dignidade, da tranquilidade econômica e com as mesmas possibilidades”. Destaca SUPLOT que a Carta torna a realização da justiça social o objetivo principal de toda política internacional e nacional. Assim, é este autor que, resgatando a importância do espírito do documento, editado já quase no pós-guerra (1944), com todas as consequências desastrosas que as lutas imperiais capitalistas trouxeram para a humanidade, apresenta o contexto do que se pode chamar nesta investigação de fundamento superior dos Direitos Humanos do Trabalho.

Com efeito, SUPLOT<sup>470</sup> afirma que há cinco elementos fundamentais da Declaração de Filadélfia que são encontrados na Carta Constitutiva das Nações Unidas e na Declaração Universal de Direitos Humanos:

- Explicitação dogmática de princípios fundamentais como ato de vontade;

- Ato de vontade e de razão que procede da experiência de que uma paz, para ser duradoura, deve se assentar sobre a base da justiça social, cujo instrumento superador da barbárie em direção a uma ordem justa é o Direito<sup>471</sup>;

- Dignidade humana como princípio fundador de toda a ordem jurídica, superando a reificação da pessoa, se reconhece o corpo e suas necessidades fi-

---

<sup>468</sup> A previsão encontra correspondência no art. 6º da Constituição brasileira, no art. 14 bis da Constituição argentina e nos arts. 44 e 47 e da Carta Política da Espanha.

<sup>469</sup> SUPLOT (2010: 24).

<sup>470</sup> Idem, *ibidem*, pp. 21-23.

<sup>471</sup> Em referência ao preâmbulo da Carta Constitutiva da ONU, quando expressa que:

(...) preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla.

sicas como elementos irrenunciáveis da dignidade, superando as ideologias que reduzem o ser humano a material ou capital humano;

- A dignidade humana obriga a vincular os imperativos de liberdade e de segurança no sentido de que os seres humanos gozem de segurança física e econômica que os liberte do terror e da miséria, razão pela qual a ordem jurídica deverá contribuir para instaurar melhores condições de vida em maior liberdade. Logo, o liame estabelecido entre segurança e liberdade é baseado nos quatro princípios fundamentais da Declaração de Filadélfia: o respeito ao trabalho (“o trabalho não é uma mercadoria”); as liberdades coletivas (de expressão e de associação); a solidariedade; a democracia social. A dignidade humana recusa sistemas que desprezam a liberdade em nome da segurança e a segurança sobre a liberdade;

- Subordinação da ordem econômica ao princípio de justiça social, a economia e as finanças como instrumentos a serviço das pessoas.

No particular, BUENO<sup>472</sup>, ao tratar da “economia humana”, explica que o trabalho tanto pode ser considerado como atividade útil que contribui à prosperidade humana, fonte de identidade, autorrealização pessoal ou satisfação, bem assim como valor instrumental de fonte de recursos para viver uma vida plena. Segundo o autor, a economia humana adota um enfoque potencializador, destacando o Direito Humano a eleger o trabalho no desempenho de um papel que ganha relevo na melhora da liberdade de trabalho numa sociedade. O autor<sup>473</sup>, falando sobre o conteúdo do Direito Humano ao Trabalho, menciona quatro aspectos: o direito à oportunidade de ganhar a vida pelo trabalho; o direito a aceitar ou eleger livremente o trabalho (compreendendo, por sua vez, o direito a rechaçar o trabalho incumbido e o direito a não ser obrigado a aceitar trabalhos indecentes).

TERRADILLOS BASOCO<sup>474</sup>, abordando os direitos econômicos, sociais e culturais desde o PIDESC, comenta que o primeiro desses direitos enunciado no documento está previsto no art 6º., o direito a trabalhar, sendo que os artigos 7º a 9º desenvolvem seus conteúdos: salário mínimo suficiente para assegurar condições de vida dignas para trabalhadores e suas famílias, salário equitativo e igual por trabalho de igual valor, sem discriminações, segurança no trabalho, promoção pessoal assentada em critérios objetivos, jornadas e calendários laborais que integrem razoavelmente tempo livre e férias, a associar-se e a atuar sindicalmente, à greve, a participar em sistemas de seguridade social etc. O autor afirma que o conteúdo do PIDESC no que tange ao trabalho digno se apoia em pilares explícitos, como da proteção de crianças e adolescentes contra a exploração econômica e social (art. 10.3), direito à saúde física e psíquica, melhoria da higiene do trabalho e do meio ambiente (art. 12.2), distribuição

---

<sup>472</sup> BUENO (2018: 167-168).

<sup>473</sup> Idem, *ibidem*, pp. 169-172.

<sup>474</sup> TERRADILLOS BASOCO (2019: 211-212).

equitativa dos alimentos mundiais em relação com as necessidades (art. 11.2), direito à cultura etc.

Nos desdobramentos e significado de toda a dimensão do valor “liberdade de trabalho”, um grande referente da localização da fundamentalidade superior dos Direitos Humanos do Trabalho pode ser encontrado nos Princípios e Diretrizes Recomendados sobre Direitos Humanos e Tráfico de Pessoas<sup>475</sup>, da Oficina do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, de 2002 (documento E/2002/68/Add.1), reportando um vasto elenco de Direitos Sociais e Individuais violados com a prática de tráfico de pessoas, que corresponde à forma original primitiva de exploração do trabalho humano vinculada à escravidão<sup>476</sup>:

- Proibição de discriminação por um ou mais motivos vedados: raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra índole, origem nacional ou social, propriedades, origem ou outra condição;
- Direito à vida;
- Direito à liberdade e segurança da pessoa;
- Direito de acesso à justiça, à igualdade ante os tribunais e a um juízo imparcial;
- Direito a não ser submetido à escravidão, servidão, trabalhos forçados ou em condições de escravidão;
- Direito a não ser submetido à escravidão em caso de conflito armado;
- Direito a não ser submetido à tortura nem a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes;
- Direito a não ser objeto de violência por motivos de gênero;
- Direito à liberdade de reunião;
- Direito à liberdade de circulação;
- Direito ao mais alto grau possível de saúde física e mental;
- Direito a condições de trabalho justas e favoráveis;
- Direito a um nível de vida adequado;
- Direito à seguridade social;
- Direito a não ser comercializado (direito a não ser vendido nem ser objeto de comércio, nem prometido em matrimônio).

---

<sup>475</sup> Fonte: sítio do Ministério Público de Portugal, Gabinete de Documentação e Direito Comparado. Recuperado de: <http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/diretrizesprinc-dhtraficopessoas.pdf>

<sup>476</sup> Elenco de direitos vulnerados com a prática de tráfico de pessoas extraído do documento elaborado pelo Defensor Geral do Povo, na Espanha, intitulado “*La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles*” (2012: 27), em referência aos Princípios e Diretrizes Recomendados sobre Direitos Humanos e Tráfico de Pessoas.

Portanto, o fundamento superior dos Direitos Humanos ao Trabalho se vincula à dignidade humana, como elo necessário entre liberdade e segurança, tratando de direitos que concretamente possibilitam a existência humana, uma vida digna, a liberdade e o desenvolvimento de todo o potencial de expressão humana em busca de progresso material, espiritual e coletivo. Ou seja, sem a efetividade dos direitos econômicos e sociais não há liberdade nem dignidade, a pessoa não é livre, não usufrui de uma vida digna que valha a pena ser vivida, razão pela qual os Direitos Humanos ao Trabalho dão suporte ao exercício de todos os demais para a concretização da dignidade humana tal qual prevista na Declaração de Filadélfia, na Carta Constitutiva da ONU e na DUDH.

Não por outra razão, a importância do Direito Humano ao Trabalho está marcada em inúmeros documentos internacionais, como destaca BUENO<sup>477</sup>, tratando da sua universalidade:

*A nivel internacional, el derecho al trabajo está explícitamente definido en el párrafo 1 del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).<sup>8</sup> Los Estados Unidos, Malasia, Arabia Saudita o Singapur figuran entre los pocos países que no han ratificado el PIDESC, aunque los Estados Unidos fue uno de los principales promotores del derecho al trabajo durante los trabajos preparatorios de la DUDH.<sup>9</sup>*

*El derecho al trabajo ha sido también reconocido a nivel regional. Por orden cronológico, éste derecho se menciona en el artículo 1 de la Carta Social Europea, en el artículo 15 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, en el artículo 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 1 de la Carta Social Europea revisada, en el artículo 15 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 30 de la Carta Árabe de Derechos Humanos y, si bien no se trata de un tratado internacional jurídicamente vinculante, en el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental.<sup>10</sup>*

*Por último, el derecho al trabajo está incluido en numerosas constituciones nacionales de diferentes sistemas políticos o económicos. El derecho al trabajo está reconocido, por ejemplo, en las constituciones afgana, argelina, china, danesa, holandesa, francesa, india, italiana, japonesa, polaca, rumana, rusa, eslovaca, surcoreana y española. (BUENO, 2018: 168-169)*

Explanada a fundamentalidade superior dos Direitos Humanos ao Trabalho, cabe buscar sua estruturação e total vinculação como elemento base (*conditio sine qua non*) para o Estado Democrático de Direito, a partir do Direito Constitucional Comparado. No particular, analisando-se o preâmbulo das Constituições de Brasil, Argentina e Espanha, percebe-se que os três coincidem em afirmar o prestígio à justiça, o bem-estar geral, a convivência democrática, em consonância da Constituição da OIT e da Declaração de Filadélfia. Desta-

---

<sup>477</sup> BUENO (2018: 168-169).



cam-se, também, as seguintes afirmações de vontade, pertinentes ou correlatas aos direitos sociais:

- **Brasil:** instituir um Estado Democrático; assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, estabelecidos como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social;

- **Argentina:** afiançar a justiça; consolidar a paz, promover o bem-estar geral, assegurar a liberdade;

- **Espanha**<sup>478</sup>: estabelecer a justiça, a liberdade e a segurança e promover o bem de todos; garantir a convivência democrática conforme a uma ordem econômica e social justa; proteger o exercício dos Direitos Humanos; promover o progresso da cultura e da economia para assegurar qualidade de vida digna a todos; estabelecer uma sociedade democrática avançada.

Mais incisiva sobre o tema em evidência neste estudo, a Constituição portuguesa declara, no preâmbulo, que derrubou o regime fascista e que a liberação do país da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma mudança histórica da sociedade. Em seguida, o art. 1º estabelece que a República portuguesa tem por base a dignidade humana e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e o art. 2º estabelece as bases do Estado democrático de Direito, similares a Brasil e Espanha<sup>479</sup>.

Neste norte, a Constituição brasileira prevê, em seu art. 1º, III e IV, como fundamentos da República, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, significando que a dignidade antecede e não há falar em atividade (trabalho, atividade econômica) sem dignidade e sem valor social.

A Constituição espanhola determina, no art. 10.1, que são fundamentos da ordem política e da paz social a dignidade da pessoa, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da personalidade, o respeito à lei e aos direitos dos demais.

A Constituição argentina estabelece a incumbência ao congresso, no art. 75, 23, de legislar e promover medidas de ação positiva que garantam a igualdade real de oportunidades e de tratamento, e o pleno gozo e o exercício dos direitos nela reconhecidos e nos tratados internacionais vigentes sobre Direitos Humanos, com destaque para a DADH, DUDH, PIDESC e PIDCP, entre outros.

Mais adiante, o regramento constitucional brasileiro (art. 3º) define como objetivos fundamentais da República, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais; a promoção do bem de todos e todas, sem

---

<sup>478</sup> O art. 1.1 da Constituição da Espanha expressamente prevê a organização do Estado como Social e Democrático de Direito.

<sup>479</sup> Preâmbulo da Constituição de Portugal de 1976 (Fonte: sítio do parlamento português. Recuperado de <https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/constituicaoerepublicaportuguesa.aspx>).

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A norma argentina (art. 75, inc. 19) obriga o Estado a prover o conducente ao desenvolvimento humano, ao progresso económico com justiça social, à geração de emprego, à formação profissional de trabalhadores<sup>480</sup>. Na Espanha, o art. 40.1 dispõe que os Poderes Públicos promoverão as condições favoráveis para o progresso social e económico, para distribuição da renda mais equitativa e realizarão uma política orientada ao pleno emprego, devendo, ainda, fomentar política para formação e readaptação profissional, velando pela segurança e higiene no trabalho e garantindo descanso mediante a limitação da jornada laboral, férias periódicas.

Ao tratar da ordem económica (art. 170), a Constituição brasileira incorpora princípios da Declaração de Filadélfia, estabelecendo o fundamento da ordem económica na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, ainda, os princípios da função social da propriedade; defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais; busca do pleno emprego. O art. 14 bis da Constituição argentina, da mesma sorte, assegura condições dignas e equitativas de labor, direito à moradia digna, retribuição justa, salário mínimo vital móvel, proteção contra a despedida arbitrária<sup>481</sup>. E no art. 75, 22, declara *status* de norma supralegal ao conteúdo dos seguintes tratados e documentos internacionais de Direitos Humanos: a DADH, a DUDH, a CADH, o PIDESC, o PIDCP, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção sobre os Direitos da Criança, entre outros.

Como direito e garantia fundamental, o art. 5º da Constituição brasileira estabelece a igualdade de todas as pessoas, sem distinções, perante a lei, e a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, especificando que é livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão, e que a propriedade atenderá à sua função social. Na Constituição argentina, a correspondência está nos arts. 16 e 14. Na Espanha, nos arts. 33.1 e 36, 128 e 131 (direito de trabalhar e livre eleição de profissão ou ofício, função social do direito de propriedade e de herança, função pública da riqueza, que subordina toda a riqueza do país, em suas distintas formas, ao interesse geral, com a possibilidade do Estado planificar a atividade económica geral para atender as necessidades coletivas, equilibrar e harmonizar o desenvolvimento regional e setorial, e estimular o crescimento da renda e da riqueza e sua justa distribuição). Ou seja, valores reiterados como fundamentos e objetivos do Es-

---

<sup>480</sup> A Constituição argentina, no art. 16, não admite prerrogativas de sangue ou nascimento, estabelecendo a igualdade das pessoas perante a lei.

<sup>481</sup> Que também são tutelados na Constituição brasileira no art. 7º, I e IV, lembrando que o salário mínimo previsto é aquele capaz de atender às necessidades vitais básicas e às da família de trabalhadores e trabalhadoras, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo.

tado Democrático de Direito e, também, como direitos e garantias fundamentais (Direitos Humanos positivados constitucionalmente).

Com relação aos direitos sociais em espécie, a mais detalhista das três Cartas Políticas é a brasileira, cujo art. 7º possui extenso rol, com 34 incisos mais um parágrafo dedicado a trabalhadores e trabalhadoras em serviços domésticos, prevendo desde o 13º salário, férias, limitação da jornada, proteção contra a automação, aviso prévio, remuneração superior do trabalho noturno, proteção contra a despedida arbitrária, licença-paternidade, proteção ao trabalho da mulher, redução de riscos inerentes ao trabalho, normas de saúde, segurança e higiene no trabalho, proibição de discriminação, assistência gratuita a filhos e dependentes em creches e pré-escolas etc. A norma constitucional espanhola do art. 35.1 define o dever de trabalhar e o direito ao trabalho de livre eleição (em consonância da Declaração de Filadélfia), à promoção através dele e a uma remuneração suficiente para satisfazer a suas necessidades e às de sua família, vedando a discriminação, e a do art. 40.1, já citada, direito à segurança e higiene no trabalho, descanso, limitação da jornada laboral, férias periódicas. No art. 129.2, encontra-se o comando aos Poderes Públicos para a promoção eficaz das diversas formas de participação na empresa e fomento das cooperativas, além do estabelecimento dos meios que facilitem o acesso da classe trabalhadora à propriedade dos meios de produção. Já o art. 14bis da Constituição argentina, também já mencionado, elenca condições dignas e equitativas de trabalho, limitação da jornada, descanso e férias remunerados, retribuição justa, salário mínimo vital móvel, igualdade de remuneração por tarefas, participação nos lucros com controle de produção, proteção contra despedida arbitrária, estabilidade do empregado público, seguro social obrigatório, aposentadorias e pensões móveis, acesso à moradia digna. Ainda, as três Constituições garantem o direito de livre reunião, associação, greve, convênios coletivos, liberdade sindical (art. 14bis da Constituição argentina, arts. 28 e 37 da Constituição espanhola e arts. 8º a 11 da Constituição brasileira).

Quanto ao significado da fundamentalidade superior do Direito Humano ao Trabalho, obviamente, uma sociedade livre, justa e solidária, que combate desigualdades, pobreza e marginalização, prestigia os DDHH para seu pleno gozo, provedora de justiça social e tutela da igualdade real, não comporta a presença de nenhuma forma de servidão ou subordinação servil<sup>482</sup>, porque as relações de poder assimétrico e domínio que implicam não são categorias compatíveis com estes postulados democráticos. A promoção do bem de todas as pessoas e a igualdade real significam que a tutela estatal não pode permitir um desequilíbrio tamanho, na relação, entre uma parte que ganha e outra que perde, que provoque a marginalização e a pobreza da classe operária.

---

<sup>482</sup> O art. 15 da Constituição espanhola proíbe tratamento desumanos ou degradantes, previsão similar à garantia fundamental do art. 5º, III, da Constituição brasileira, enquanto o art. 75, 22 da Carta Política argentina promulga a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes.

Portanto, se o fundamento da ordem econômica é a valorização do trabalho humano, e sua finalidade é assegurar existência digna, segundo a justiça social, não há nenhum espaço, nesta concepção de Estado Democrático de Direito, para a manutenção de categorias anteriores à ordem constitucional-social, relativas a “contrato de trabalho”, “relação laboral de Direito Privado”. Destaque-se que o texto constitucional brasileiro reitera, por uma terceira vez, a função social da propriedade, agora como princípio, juntamente com a defesa do meio ambiente, redução das desigualdades e busca do pleno emprego. Ora, se a propriedade existe de acordo com a sua função social, e esta é exercida pela geração de trabalho e existência dignos, na ponderação de valores está clara a prevalência do trabalho, pelo notável interesse público da relação laboral como pressuposto da paz e da justiça social., conclusão referendada pelo disposto no art. 14 bis, da Constituição argentina, ao tutelar o trabalho assegurando controle da produção, participação nos lucros e colaboração com a direção, e, de forma similar, no art. 7º, XI, da Constituição do Brasil, prevendo a participação nos lucros e na gestão da empresa. Nesta direção, portanto, a inteligência das normas citadas em busca da efetiva igualdade material e real entre trabalho e capital.

Destaque-se que a função social da propriedade não se esgota na mera criação de emprego: o emprego criado deve ser apto a valorizar o trabalho humano, assegurar a existência digna, e estar conforme ao interesse coletivo (social), entendendo-se esta conformidade na medida em que tenha potencial para efetivar justiça social, reduzir desigualdades. Não há dúvidas, pois, que este arcabouço normativo constitucional fundamental entorno ao trabalho e ao capital (propriedade), absolutamente incompatibiliza formas de trabalho precário, condições indignas de trabalho, agressões ao meio ambiente laboral (que protege a vida e a saúde das pessoas que trabalham e que nele circulam, e a vida em toda a sua dimensão e formas) e subordinação servil (o “contrato”) ou mercantilização da vida humana (o “mercado de trabalho”).

Cabe destacar a redação do art. 15 da Constituição argentina ao referir que “todo contrato de compra e venda de pessoas é um crime do qual serão responsáveis os que o celebrarem, e o escrivão ou funcionário que o autorize”. A norma brasileira, no art. 243, prevê expropriação de terras onde for localizada sua exploração, e o confisco de bens decorrentes.

Como explanado por SUPIOT e DUSSEL, o problema está em separar a pessoa da sua força de trabalho e, embora se proíba a compra e venda da pessoa, se permite a compra e venda de sua força de trabalho, que contemporaneamente, diante das contínuas precarizações impingidas às relações laborais, equivale a uma verdadeira neoescavidão.

O Direito Humano do Trabalho está multiplamente relacionado em diversos tratados internacionais, como visto ao longo desta investigação, sendo mais relevante o conteúdo da Constituição da OIT e da Declaração de Filadélfia, da DUDH e do PIDESC. Os efeitos ou características da fundamentalidade de um direito, que deverão ser considerados na interpretação e aplicação da norma que o assegura, estão bem sintetizados no art. 53 da Constituição da Espanha: ca-

ráter vinculante - a vinculação de todos os poderes públicos (comando contido no art. 31 da Constituição argentina); legalidade, regulação de seu exercício somente por lei, que deve sempre respeitar seu conteúdo essencial (na Argentina, art. 28); tutela diferenciada mediante recurso rápido, gratuito e eficaz no acesso à justiça – o amparo, habeas corpus e habeas data na Espanha (arts. 17.4, 53.2), e Argentina (art. 43); habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção no Brasil (art. 5º, LXVIII, LXIX, LXXI e LXXII); a eficácia horizontal dos direitos fundamentais (art. 10.1 da Constituição da Espanha). Cabe acrescentar, ainda, à síntese espanhola, a aplicabilidade imediata (previsão no art. 5º, §1º, da Constituição brasileira); a integração à ordem jurídico-democrática do Estado de Direito como cláusula pétrea (não suscetível de derrogação pelo legislador constituinte derivado, art. 60, §4º, IV, da Constituição do Brasil); a universalidade (gênese) e a indisponibilidade (inalienabilidade).

Ressalte-se que a justiciabilidade dos Direitos Humanos do Trabalho, nestes três países, se define, também, por procedimentos processuais especiais próprios, de natureza sumária e preferencial, e dotados de aparatos judiciários especializados para sua operacionalização, ou seja, para a apreciação dos conflitos emanados das relações de trabalho<sup>483</sup>.

Em conclusão, vale frisar que a fundamentalidade superior dos Direitos Humanos do Trabalho escuda-se na dignidade humana e seus desdobramentos, pelo fato de, concretamente, como direitos econômicos e sociais, darem sustentáculo à vida e a uma existência digna e livre, pressuposto para o exercício dos demais direitos (como os civis e políticos), constituindo, como visto, base para a paz social, a justiça social, desenvolvimento humano e o convívio democrático, valores essenciais de sociedades civilizadas. Em realidade, retomando as origens da formação do Estado moderno, não há possibilidade de constituição de Estado Democrático de Direito sem a prevalência dos direitos sociais, porque sem eles não há falar em justiça, paz e igualdade. Segundo TERRADILLOS BASOCO<sup>484</sup>, o Estado Social de Direito transcende o papel de garante de uma ordem social na qual se exercem pacificamente os Direitos Humanos de primeira geração, pois tal ordem é mera construção retórica, não existe. Assim, a vigência dos Direitos Humanos econômicos, sociais e culturais é *conditio sine qua non* da vigência dos DDHH de primeira geração constantes da DUDH e do PIDCP.

A primazia do regime constitucional e supraconstitucional (internacional) de Direitos Humanos do Trabalho é essencial para a racionalidade, controle e equilíbrio entre o trabalho e a propriedade privada (capital), definindo o valor social do primeiro a dimensão da função social da segunda, sem a qual a mesma não se legitima.

---

<sup>483</sup> Malgrado a perspectiva de apreciação dos mesmos se faça sob a ótica do contrato e não desde sua gênese, como instrumento de justiciabilidade dos DDHH do Trabalho, tal como previsto no PIDESC e na Convenções Americana e Europeia de Direitos Humanos.

<sup>484</sup> TERRADILLOS BASOCO (2019: 213-214).

Neste ponto, se alguma dúvida resta de que o trabalho é superior ao valor propriedade, vale trazer à colação os sólidos argumentos de FERRAJOLI (2010), para quem o direito à propriedade restou indevidamente fundamentalizado, por não possuir valor absoluto nem universal:

*La confusión más llamativa es, con toda seguridad, la inclusión de la propiedad privada en la misma clase de los derechos de libertad y de autonomía. La propiedad, como el derecho de crédito y los demás derechos patrimoniales, no es en absoluto universal en el mismo sentido en que lo son los demás derechos de la personalidad y de ciudadanía, ya sean estos humanos, civiles, políticos o sociales: es un derecho por naturaleza existencial (o singular), excludendi alios, que no corresponde a todos, pues cada persona puede ser o no ser titular, y en caso de ser titular lo es siempre con exclusión de las demás personas. No sólo. A diferencia de los demás derechos de la persona y del ciudadano, que son indisponibles e inalienables -pues quedan sustraídos tanto al mercado como al ámbito de las decisiones públicas, e incluso de las decisiones tomadas por mayoría-, y al igual que los demás derechos patrimoniales, la propiedad es por naturaleza disponible, es decir, alienable, negociable, transigible. (FERRAJOLI, 2010: 102)*

Por fim, sobreleva notar, que, no exame da Constituição da OIT, da Declaração de Filadélfia, da DUDH, da CADH, da CEDH, do PIDESC, do PIDCP, nenhum deles menciona a expressão “contrato de trabalho”, mas sim trabalho, trabalho humano, relação de trabalho.

Portanto, uma relação de trabalho, num Estado Democrático de Direito, de Bem-Estar Social, ainda que capitalista, desde sua concepção, não se trata de uma simples operação contratual de “compra e venda” de “mercadoria” – sujeita à lei da oferta e da procura, como quer o neoliberalismo –, mas de uma relação complexa, de alto conteúdo social, que envolve o cumprimento do pressuposto anterior à sua formação, o respeito à dignidade humana, dotada de interesse público (interesse coletivo, de todos e todas), e qualificada por todos os elementos e atributos característicos de um Direito Humano e fundamental estruturador da paz e da justiça social.

## **IV.2 Deficiências da jurisprudência trabalhista para proteção dos Direitos Humanos do Trabalho**

Para abrir o tema, vale lembrar a denúncia de ENGELS (2010), nos primórdios do capitalismo inglês do século XIX:

E, nas fábricas, o patrão é o legislador absoluto. Determina, a seu bel-prazer, os regulamentos; altera os contratos conforme sua vontade e, quando introduz as cláusulas mais absurdas, o operário ouve dos tribunais: “Você é livre para decidir, só deve aceitar os contratos que lhe interessarem. Mas agora que subscreveu livremente esse contrato, tem de cumpri-lo”.



É assim que o operário tem de suportar a ironia do juiz de paz, que é um burguês, e da lei, imposta pela burguesia. Sentenças desse gênero são comuns. (ENGELS, 2010: 213-214)

A situação parece se repetir em muitas decisões do século XXI, marcadas não só pelo contratualismo como também por juspositivismo estrito incapaz de contextualizar a trama e o drama social no qual são enredadas as pessoas que necessitam vender sua força de trabalho para sobreviver. Atualizando para questões mais recentes na interpretação e aplicação do Direito do Trabalho, comentando sobre a judicialização dos direitos econômicos e sociais na América Latina, afirmam CECCHINI-RICO (2015):

*En muchos países de la región aún está arraigada la visión según la cual los derechos económicos y sociales constituyen meras declaraciones de intención que no son exigibles por la vía judicial ni administrativa. (...)*

*En otros, como el Brasil o Colombia, la consagración constitucional de los derechos económicos y sociales se ha traducido en una creciente jurisprudencia por parte de los tribunales (Sepúlveda, 2014). La judicialización de la protección social también conlleva una serie de riesgos y dificultades, tanto en materia de igualdad — dado que la población más pobre y vulnerable tiene mayores restricciones de acceso a la solución judicial, tanto por razones económicas como culturales (...). (CECCHINI-RICO, 2015: 351)*

Some-se a estas deficiências históricas do sistema o papel que o neoliberalismo outorgou ao Poder Judiciário, protagonizando diversas reformas judiciais com o fim de, nas palavras de RODRÍGUEZ GARAVITO<sup>485</sup>, “melhorar o funcionamento do mercado”. Como sustenta o autor, as funções essenciais dos tribunais ficariam relegadas a oferecer um clima estável de investimento através da aplicação das regras do jogo previsíveis, garantindo as condições de funcionamento do mercado. RODRÍGUEZ GARAVITO assevera que, na prática, nestas funções de manter a previsibilidade das normas, os tribunais devem fazer cumprir os contratos e abster-se do ativismo judicial redistributivo, além de promover o devido controle social com eficiência ao prevenir e castigar o delito, para garantir a paz<sup>486</sup>.

Pois bem. Conhecidas as motivações, causas e efeitos da atual interpretação e aplicação do Direito do Trabalho pela justiça, a título de ilustração prática do significado do EDH aplicado na hermenêutica juslaboral, é importante desenvolver o raciocínio com base em exemplos concretos, e visualizar as graves deficiências e ou incorreções cometidas na aplicação de normas relativas aos Direitos Humanos do Trabalho.

---

<sup>485</sup> RODRÍGUEZ GARAVITO (2009: 29).

<sup>486</sup> Idem, *ibidem*.

Em relação ao Direito Humano do Trabalho concernente à liberdade sindical, seus fundamentos internacionais mais importantes encontram-se no PIDESC e nas Convenções 87 e 98 da OIT. Na jurisprudência brasileira, no entanto, encontra-se cristalizado o entendimento a respeito da estabilidade no emprego para o exercício do mandato sindical na conformidade da Súmula 369<sup>487</sup> do Tribunal Superior do Trabalho da seguinte forma, *litteram*:

Súmula nº 369 do TST

DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

I - É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho.

II - O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 3º, da CLT a sete dirigentes sindicais e igual número de suplentes.

III - O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

IV - Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade.

V - O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

De plano, nos itens II, III, IV e V desta súmula de jurisprudência da mais alta Corte laboral brasileira, já se percebe a inadequação ao postulado previsto no art. 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, concernente à forma de interpretar os DDHH, ou seja, a interpretação deve ser sempre ampliativa e nunca restringir mais do que a norma substrato do direito humano prevê como limites.

Na espécie, a normatividade internacional relativa à estabilidade no emprego do dirigente sindical, como desdobramento da liberdade sindical, não encontra nenhuma limitação na normatividade sindical, especificamente a Convenção 98 da OIT:

Art. 1 — 1. Os trabalhadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em matéria de emprego.

---

<sup>487</sup> A súmula 369 do TST segue em vigor. (Fonte: sítio do Tribunal Superior do Trabalho do Brasil. Última modificação em 14.09.2012. Recuperado de: [http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas\\_com\\_indice/Sumulas\\_Ind\\_351\\_400.html#SUM-369](http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400.html#SUM-369)) A respeito de edição de Súmula, no Direito brasileiro, significa a estabilização de uma interpretação, com caráter vinculante dos membros da Corte, em conformidade ao seu regimento interno. Com a reforma do Código de Processo Civil, em 2015, cumpridos determinados requisitos, como no incidente de assunção de competência ou no incidente de recursos repetitivos, a súmula de jurisprudência editada passa a ter força vinculante a todas as instâncias inferiores ao tribunal que a editou.

2. Tal proteção deverá, particularmente, aplicar-se a atos destinados a:
- a) subordinar o emprego de um trabalhador à condição de não se filiar a um sindicato ou deixar de fazer parte de um sindicato;
  - b) dispensar um trabalhador ou prejudicá-lo, por qualquer modo, em virtude de sua filiação a um sindicato ou de sua participação em atividades sindicais, fora das horas de trabalho ou com o consentimento do empregador, durante as mesmas horas.

A orientação superior definidora deste direito em concreto, é a prevista como princípio de liberdade sindical: a não ingerência do Estado na organização, gestão, funcionamento e administração sindical, inclusive acolhido como direito/garantia fundamental no art. 8º da Constituição de 1988<sup>488</sup>. Embora o Brasil não tenha ratificado a Convenção 87 da OIT<sup>489</sup>, sobre liberdade sindical,

<sup>488</sup> Segundo o texto constitucional:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

**VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.** (Obs.: o grifo é meu)

A Súmula 369 do TST, como se percebe, interpreta a norma internacional e a Constituição a partir da legislação infraconstitucional e não o contrário, adotando interpretação restritiva do direito não prevista na Convenção 98 da OIT e PIDESC.

<sup>489</sup> Segundo a Convenção:

Art. 2 — Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com os estatutos das mesmas.

é signatário do PIDESC, cujo art. 8<sup>o490</sup> consagra os princípios de liberdade sindical previstos no referido convênio (e a ele se reporta), que estabelece como limites aos direitos de liberdade sindical a eventual contrariedade à “segurança nacional”, “ordem pública” ou para “proteção de direitos e liberdades alheias”. A questão de segurança nacional e ordem pública, de plano se pode descartar porque não há nenhum risco de agressão a esses valores pela estabilidade no emprego que se concede a dirigente sindical. Com relação à proteção de direitos e liberdades alheias, o direito à propriedade tampouco pode ser invocado,

---

Art. 3 — 1. As organizações de trabalhadores e de empregadores terão o direito de elaborar seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente seus representantes, de organizar a gestão e a atividade dos mesmos e de formular seu programa de ação.

**2. As autoridades públicas deverão abster-se de qualquer intervenção que possa limitar esse direito ou entravar o seu exercício legal.**

...

**Art. 8. ...**

**2. A legislação nacional não deverá prejudicar nem ser aplicada de modo a prejudicar as garantias previstas pela presente Convenção.**

(Obs.: destacou-se)

Nos itens grifados, percebe-se que a Súmula contraria expressamente a norma internacional, ao adotar interpretação restritiva pautada em lei incompatível com a liberdade sindical (art. 522 da CLT, ao limitar o número de dirigentes sindicais na organização de um sindicato).

<sup>490</sup> Conforme o PIDESC:

ARTIGO 8º

1. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a garantir:

a) O direito de toda pessoa de fundar com outras, sindicatos e de filiar-se ao sindicato de escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos da organização interessada, com o objetivo de promover e de proteger seus interesses econômicos e sociais. O exercício desse direito só poderá ser objeto das restrições previstas em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades alheias;

b) O direito dos sindicatos de formar federações ou confederações nacionais e o direito destas de formar organizações sindicais internacionais ou de filiar-se às mesmas.

**c) O direito dos sindicatos de exercer livremente suas atividades, sem quaisquer limitações além daquelas previstas em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades das demais pessoas:**

d) O direito de greve, exercido de conformidade com as leis de cada país.

...

**3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que os Estados Partes da Convenção de 1948 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, venham a adotar medidas legislativas que restrinjam - ou a aplicar a lei de maneira a restringir as garantias previstas na referida Convenção. (Obs.: destacou-se)**

pois, como visto no decorrer deste trabalho, os direitos humanos do trabalho se fundamentam de forma superior na dignidade humana estruturante do Estado Democrático de Direito contemporâneo, subordinando-se a propriedade à sua função social, a qual respalda a dignidade no trabalho e ampla liberdade de atuação de quem exerce mandato de representação sindical para reivindicar e lutar pelos direitos da categoria.

Portanto, a conclusão que recebe como compatível à Constituição a obrigatoriedade do sindicato observar número máximo de sete dirigentes sindicais e seus suplentes, como únicos detentores de estabilidade, afronta tanto as Convenções 87 e 98 da OIT, como o PIDESC e a Constituição de 1988. É raro que um entendimento assim siga vigente e sem maiores questionamentos, mas na lógica dos efeitos do contratualismo laboral na doutrina e jurisprudência, se compreende como pode uma linha de raciocínio diametralmente oposta aos Direitos Humanos se tornar hegemônica.

Assim, por simples critério de interpretação (humanista e não contratualista), já se percebe não estar conforme a súmula às normas internacionais de proteção à liberdade sindical. Mas não é só: para alcançar a dimensão de efetiva tutela do direito humano à estabilidade no emprego do dirigente sindical, buscando o processo de luta histórica, no qual milhares de trabalhadores e trabalhadoras não só perderam o emprego, como perderam suas vidas ao reivindicar direitos, é inegável tratar-se de uma necessidade que deve ser amplamente amparada pelo Poder Judiciário. Quanto mais pessoas atuantes na entidade sindical estiverem com sua fonte de subsistência garantida, mais fortalecida será a luta pela melhoria das condições sociais da categoria, desiderato da normatização dos Direitos Humanos do Trabalho. De modo que a aplicação do EDH, na apreciação do direito de estabilidade no emprego de dirigente sindical, refutaria imediatamente as restrições impostas na súmula, quanto ao número de pessoas beneficiárias, quanto ao espaço e tempo de exercício. Ora, o exercício de atividade sindical pode se dar tanto em nome das reivindicações atuais quanto das passadas (por exemplo, de quem já se desligou do trabalho na empresa), logo, não há nenhuma razão para considerar perdida a estabilidade em face do encerramento das atividades da empresa no local. É mais: o capital é volátil, a mobilidade humana restrita – condicionar o direito humano de estabilidade no emprego do dirigente sindical à permanência da empresa no local é um convite para que o capital, sentindo-se incomodado com um sindicato atuante, simplesmente remova a atividade para outro local em que a representação sindical não tenha a mesma força, rebaixando, portanto, o grau de proteção laboral da norma e precarizando a luta pela melhoria da condição social da classe trabalhadora.

Também deve ser considerado que a pertinência entre as atividades desenvolvidas pela pessoa que trabalha que passa a representar mandato de representação sindical é um limite incompatível com a dimensão do Direito Humano ao Trabalho, porquanto os processos de luta pelos direitos sociais demonstraram que quanto mais unida está a classe obreira (sem nenhuma limitação por ativi-

dade), como nas greves gerais, maior força tem a sua reivindicação. A solidariedade é traço característico da consciência de classe que faz crescer a luta pelos Direitos Humanos do Trabalho que melhoram a condição social, de modo geral (e não particular) de trabalhadoras e trabalhadores.

Finalmente a ocorrência de aviso prévio como notificação de encerramento da relação de trabalho não pode obstar o direito, já que, normalmente, o mandato de representação sindical, antes mesmo da formalização do registro de candidatura da pessoa, é precedido de uma campanha ou sondagem (como em todo processo eleitoral), da qual o empregador pode tomar conhecimento e encerrar imediatamente a relação de trabalho para obstar o direito.

Vê-se, pois, que a súmula de jurisprudência em questão não tutela adequadamente do direito à liberdade sindical e não se legitima do ponto de vista do EDH.

No âmbito argentino, encontra-se o seguinte precedente da *Corte Suprema de Justicia de la Nación*<sup>491</sup>:

*SENTENCIA*

*27 de Septiembre de 2018*

*CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES*

*Magistrados: ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO - JUAN CARLOS MAQUEDA - HORACIO ROSATTI - CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ*

*Id SAIJ: FA18000076*

*Ejes temáticos del fallo:*

*Accidente in itinere - Condena a la ART a abonar una indemnización por muerte - Decreto 472/14 sobre aplicación del índice RIPTE a las prestaciones de pago único y los pisos mínimos - Declaración de oficio de su inconstitucionalidad por parte de la Cámara - Interpretación que no se ajusta a los criterios establecidos en el precedente “Espósito” (Fallos: 339:781) - Aplicación del adicional de pago único (art. 3° de la ley 26.773) - Afirmación arbitraria de la cámara - Intención del legislador de circunscribir el beneficio a los infortunios laborales producidos en el ámbito del establecimiento laboral y no a los accidentes in itinere - Se deja sin efecto la sentencia apelada - Disidencia del juez Rosatti: confirmación de la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14 por haber incurrido en exceso reglamentario - Decisión válida de encuadrar el accidente in itinere en el supuesto referido al dependiente que se encuentra a disposición del empleador a los fines de la aplicación del adicional de pago único.*

A questão de fundo julgada envolve a indenização relativa ao falecimento de um trabalhador quando em deslocamento para o trabalho, um acidente dito *in itinere*. O ponto central era definir se a indenização adicional constante do

<sup>491</sup> Fonte: sítio do Ministério de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Recuperado de <http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-recurso-hecho-deducido-demandada-causa-paez-alfonzo-matilde-otro-asociart-art-sa-otro-indemnizacion-fallemiento-fa18000076-2018-09-27/123456789-670-0008-1ots-eupmocsollaf?>



art. 3º da Lei 26773, no importe de 20%, era devida ou não aos descendentes do trabalhador. O recurso foi encaminhado pela empresa, que alegou, perante a Corte Suprema, dentre outras coisas, violação ao seu direito de propriedade, ante a norma invocada excluir o acidente *in itinere* do âmbito de sua aplicação<sup>492</sup>. O Tribunal, estimando o recurso da empresa, com base em interpretação literal da lei, determinou a exclusão da indenização adicional que havia sido imposta na instância inferior.

Pois bem. A normativa de Direitos Humanos afeta ao caso diz respeito à segurança no trabalho, incumbindo aos Estados-parte, obrigações concernentes a uma política nacional coerente e que determine responsabilidades em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e meio ambiente do trabalho, considerando a prevenção de acidentes e danos à saúde que forem consequentes do trabalho ou que tenham relação com o trabalho, como se extrai do texto dos arts. 4º e 6º do Convênio 155 da OIT. A Convenção 121 da OIT, também prevê a necessidade de prestações em caso de acidente do trabalho, para proteção de todos os assalariados, aprendizes, do setor público e privado, pessoal de cooperativas, e beneficiários em caso de falecimento (art. 4.1), abrangendo, conforme o art. 7.1, a consideração dos acidentes sofridos no trajeto como acidentes do trabalho. A Convenção Americana de Direitos Humanos, por sua vez, prevê o direito à vida (art. 4.1) e à integridade pessoal (art. 5.1), enquanto o PIDESC estabelece o direito a uma existência decente para os trabalhadores e suas famílias, o direito à segurança e à higiene no trabalho (art. 7.II e *b*) e o direito à previdência social (art. 9). Além disso, a tutela da dignidade humana e a realização da justiça social impõe a necessidade de uma indenização justa pela perda da vida ou dano sofrido, que deve ser orientada, para atingir essa finalidade, pelo princípio da reparação integral.

Assim, tendo em consideração esses valores na interpretação da norma do art. 3º da Lei 26773, resta em contrariedade a exclusão da indenização adicional ao acidentado no trajeto, porquanto a Convenção 121 da OIT determina a sua consideração como acidente do trabalho. A limitação do valor adicional somente para acidentados no local de trabalho seria constitutiva de odiosa discriminação e, por isso mesmo, violadora de diversas outras normas internacionais de Direitos Humanos, a começar da Convenção 111 da OIT, cujo art. 1.a define como tal toda distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão.

---

<sup>492</sup> Conforme consta do par. 1º do art. 3º da Lei 26773:

*Quando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único em compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma.*

Por fim, a morte é o pior evento que pode ocorrer num acidente de trabalho, e deve ser ressarcido adequadamente, não havendo cogitar em distinguir indenização para quem falece no ambiente de trabalho ou quando está se deslocando para ele – o dano ou a morte é igual para as duas situações. A disponibilidade da pessoa ao trabalho se inicia com o deslocamento e, obviamente, excluído o trabalho da rotina desse trabalhador, o mesmo não teria perdido a vida (nexo de causalidade perfeitamente identificável). Quanto à violação alegada ao direito de propriedade da empresa, reitera-se que está condicionado ao cumprimento de sua função social, a qual, na espécie, se realiza mediante a adequada indenização à família do trabalhador falecido que consiste na reparação integral das vítimas.

Por outras palavras, a não concessão do adicional de 20% pelo infortúnio ocorrido no trajeto é motivada por uma álea injustificável, a da pessoa que trabalha ter a “sorte” de sofrer acidente no local de trabalho e não no trajeto. Em realidade, consagra relação assimétrica de poder entre quem sofre o dano (menos protegido) e quem deve indenizar (mais protegido). Logo, a interpretação com EDH não limitaria a indenização na hipótese, dada a incompatibilidade da restrição legal frente às normas de Direitos Humanos mencionadas que, na Argentina, têm caráter supralegal.

Na Espanha, encontra-se um recente precedente do Tribunal Constitucional, também limitador do Direito Humano ao Trabalho, desta feita, desde uma visão contratualista *stricto sensu*<sup>493</sup>:

*SENTENCIA 118/2019, de 16 de octubre  
(BOE núm. 279, de 20 de noviembre de 2019)  
ECLI:ES:TC:2019:118*

*Ponente: Andrés Ollero Tassara*

*Resumen: Integridad física: el art.52d) ET. cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El precepto cuestionado permite la extinción del contrato por causas objetivas, Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses*

*Integridad física (art.15 CE): no se infringe porque la norma tiene por finalidad el aumento de la productividad y la eficiencia en el trabajo, reduciendo así los costes directos e indirectos que suponen las ausencias cortas. La norma no implica un riesgo grave y cierto para la salud del afectado. Las ausencias que pueden dar lugar a la aplicación de dicho precepto legal por este motivo serían las derivadas de enfermedad o indisposición de corta duración, hayan dado lugar o no a la expedición de partes médicos de baja. En efecto, además de otros supuestos que*

---

<sup>493</sup> Fonte: sítio do Tribunal Constitucional da Espanha. Recuperado de: <https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26061>

*no vienen ahora al caso, el art. 52 d) LET excluye de su aplicación los supuestos de enfermedad o accidente no laboral cuando la baja médica tenga una duración de más de veinte días consecutivos, así como las que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave*  
*Derecho al trabajo (art.35.CE): resulte contrario al art. 35.1 CE, pues si bien es cierto que el legislador ha adoptado una medida que limita el derecho al trabajo, en su vertiente de derecho a la estabilidad en el empleo, lo ha hecho con una finalidad legítima –evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo–, que encuentra fundamento constitucional en la libertad de empresa y la defensa de la productividad (art. 38 CE). Se han ponderado los derechos e intereses en conflicto, especialmente a través de las señaladas excepciones a la cláusula general que permite la extinción del contrato de trabajo por absentismo, así como mediante el establecimiento de la correspondiente indemnización al trabajador en caso de que el empresario opte por la decisión extintiva, que en todo caso puede ser impugnada ante la jurisdicción social. A esta corresponde controlar que la decisión empresarial se ajusta a los presupuestos establecidos en el art. 52 d) LET y que la aplicación del precepto en el caso concreto no va más allá de lo necesario para alcanzar la finalidad legítima de proteger los intereses del empleador frente a las faltas de asistencia del trabajador a su puesto de trabajo, cuando alcancen la duración establecida por la norma.*

*Derecho a la salud.(art.43.1 CE): mediante la regulación controvertida el legislador ha pretendido mantener un equilibrio entre el legítimo interés de la empresa de paliar la onerosidad de las ausencias al trabajo, que se conecta con la defensa de la productividad (art. 38 CE) y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, por lo que cabe concluir que el art. 52 d) LET no vulnera el derecho a la protección de la salud que el art. 43.1 CE reconoce, ni tampoco, valga añadir, el derecho de los trabajadores a la seguridad en el trabajo (art. 40.2 CE).*

A fundamentação do julgado em análise parece retroceder ao tempo do início do século XIX, quando se permitia o término da relação laboral (“antigo contrato de locação de serviços”) pela razão do trabalhador estar doente<sup>494</sup>.

Ora, a alteração do art. 52, *d*, da Lei do Estatuto dos Trabalhadores (LET) da Espanha, promovida pelo Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de outubro, se trata de norma draconiana e absolutamente contrária a postulados de Direitos Humanos: ao se permitir a despedida de trabalhadores e trabalhadoras, ainda que justificadas, sob o pretexto de resguardar a defesa da produtividade, nitidamente se está desconectando a função social da propriedade das relações de trabalho. A norma, neste sentido, com a devida vênia da interpretação dada no julgado em comento, é, de fato, de conteúdo incompatível com o art. 33.2 da Constituição espanhola, ao estabelecer preeminência da propriedade sobre o valor trabalho, o que não cumpre a função social prevista na norma constitucional apontada.

---

<sup>494</sup> Vide Lei imperial brasileira 108, de 1837, e o regramento do Código Civil napoleônico, no Anexo.

Na espécie que gerou o precedente, as faltas da trabalhadora foram motivadas por força de licenças de saúde, o que não pode ser causa de término de relação de trabalho, a teor do art. 6.1 da Convenção 158 da OIT<sup>495</sup>, ratificada pela Espanha:

Art. 6. 1. A ausência temporal do trabalho por motivo de doença ou lesão não deverá constituir causa justificada de término da relação de trabalho.

Como já visto, as normas domésticas não podem contrariar nem limitar os Direitos Humanos além dos contornos previstos na normativa internacional, de modo que o permissivo de despedida objetiva com base no somatório de faltas, ainda que justificadas, viola frontalmente o quanto expresso na referida Convenção.

Ainda, é possível visualizar contrariedade à CE no art. 15 (direito à integridade física), ao art. 35.1 (ao trabalho), e ao art. 43.1 (proteção da saúde), já que o absenteísmo, na ótica do julgado em apreço, está sendo tratado somente da ótica empresarial (defesa da produtividade), e não como um fenômeno que decorre de múltiplos fatores (baixos salários, jornadas elevadas, más condições de trabalho, precarização etc.), e que demanda olhar holístico. Repassar os custos da atividade econômica à classe trabalhadora é conduta incompatível com os Direitos Humanos ao Trabalho, pois devem ser arcados pelo capital (propriedade) empregador, mormente quando existem várias enfermidades laborais, inclusive de ordem psiquiátrica, que ensejam adoecimento laboral e absenteísmo, que nem sempre são detectáveis de imediato. A síndrome de *burnout*<sup>496</sup>, por exemplo, é objeto de estudos recentes, a indicar que o excesso de exigência de produtividade de trabalhadores leva ao esgotamento profissional. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho e gera não só o absenteísmo, como também até mesmo incapacidade laboral permanente.

A interpretação com EDH, neste caso, identificaria a relação assimétrica de poder (do empregador, exigindo prestação de serviços, mesmo diante do adoecimento da pessoa que trabalha), e adotando visão holística, limitaria o

---

<sup>495</sup> Fonte: sítio da OIT, disponibilização e pesquisa das Convenções. Texto da Convenção 158, em vigor no plano internacional desde 23 de novembro de 1985. Recuperado de [https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS\\_236164/lang--pt/index.htm](https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS_236164/lang--pt/index.htm)

<sup>496</sup> A síndrome de *burnout* foi detectada por Herbert Freudenberg, na década de 1970, correspondendo a um distúrbio psíquico de ordem depressiva, derivado de situações de trabalho desgastantes, tanto do ponto de vista físico como mental (ambientes laborais competitivos ou de alta responsabilidade ou produtividade), ou ambos, gerando exaustão, estresse e esgotamento físico, nem sempre remissíveis por tratamento, já que casos graves podem gerar incapacidade permanente. Frustração, ansiedade, estresse, depressão, absenteísmo, dificuldade de concentração, baixa produtividade são sintomas comuns dessa enfermidade que consta da Classificação Internacional de Doenças sob o código CID-11.24. Fonte: sítio UOL, página do professor Dráuzio Varella sobre doenças e sintomas, intitulada “Síndrome de burnout (esgotamento profissional)”. Recuperado de: <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/sindrome-de-burnout-esgotamento-profissional/>

direito de propriedade ao cumprimento de sua função social (arcar com os riscos da atividade econômica e suportar o absenteísmo, mantendo a pessoa no posto de trabalho, em cumprimento da segurança e estabilidade no trabalho), reconhecendo a total incompatibilidade da alteração do Estatuto do Trabalhador espanhol constante de art. 52, *d*, com as normas constitucionais supra apontadas e com o art. 6.1 da Convenção 158 da OIT, para, exercendo o controle de constitucionalidade e convencionalidade, prestigiar as normas de Direitos Humanos do Trabalho e anular a despedida com a consequente reintegração da trabalhadora ao emprego.

Tanto é certa esta conclusão, que recentemente a Lei 1/2020<sup>497</sup>, de 15 de julho, derogou a modalidade de término da relação de trabalho por despedida objetiva por faltas ao trabalho constante do art. 52, *d*, do texto refundido da Lei do Estatuto dos Trabalhadores, aprovado pelo Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de outubro. Segundo a exposição de motivos, a nova normativa atendeu ao julgamento do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 18 de janeiro de 2018, que, em síntese, entendeu pela incompatibilidade do texto do art. 52, *d*, da LET espanhola, com a Diretiva 2000/78/CE<sup>498</sup>, sobre igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional, concluindo que:

«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i) — Prohibición de discriminación por motivo de discapacidad — Normativa nacional que permite, en determinadas circunstancias, el despido de un trabajador por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes — Ausencias del trabajador a causa de enfermedades atribuibles a su discapacidad — Diferencia de trato por motivo de discapacidad — Discriminación indirecta — Justificación — Combatir el absentismo laboral — Carácter apropiado — Proporcionalidad»

...

El artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a un trabajador debido a las faltas de asistencia de éste al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, cuando tales ausencias sean consecuencia de enfermedades atribuibles a la discapacidad de ese trabajador, salvo que dicha normativa tenga la finalidad legítima de combatir el absentismo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad, lo cual corresponde evaluar al órgano jurisdiccional remitente.<sup>499</sup>

---

<sup>497</sup> Fonte: sítio do *Boletín Oficial del Estado*, Espanha. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7937#dd> (vide íntegra no Anexo, com a exposição de motivos)

<sup>498</sup> O texto integral da Diretiva 2000/78/CE pode ser encontrado no sítio que disponibiliza a legislação europeia (EUR-Lex). Recuperado de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32000L0078>

<sup>499</sup> Fonte: *Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera*, de 18 de janeiro de 2018, disponível no sítio de jurisprudência do TJUE. Recuperado de <http://curia.europa.eu/juris/document/document>.

Apesar do julgado em epígrafe ter motivado a derrogação da norma questionada, em seu conteúdo se encontram presentes as mesmas deficiências originais da decisão espanhola, porquanto admite a possibilidade de uma norma doméstica ter a “finalidade legítima de combater o absentismo e não ir mais além do necessário para alcançar essa finalidade”, ou seja, parte de um pressuposto empresarial (e, portanto, unilateral) de produtividade e não de humanidade nas relações de trabalho, deixando de ponderar o que foi dito anteriormente sobre as causas do absentismo serem justamente geradas pelo incremento de exigência de produtividade.

Fechando os exemplos de deficiência jurisprudencial em matéria de proteção de Direitos Humanos, também em Portugal a questão se repete, conforme se colhe do seguinte julgado da Suprema Corte de Justiça<sup>500</sup>:

9224/13.0T2SNT.L1.S1

4ª SECÇÃO

Relator: FERREIRA PINTO

Descritores: DESPEDIMENTO COLETIVO

COMPENSAÇÃO

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE DESPEDIMENTO COLETIVO

INCONSTITUCIONALIDADE

Data do Acórdão: 16/11/2017

Votação: UNANIMIDADE

I) As normas contidas nos n.ºs 5 e 6, do artigo 366º, do CT/2009, na redação dada pela Lei n.º 23//2012, de 25 de junho, interpretadas no sentido de que a exceção perentória da aceitação do despedimento por parte do trabalhador faz funcionar a presunção legal nelas estabelecida, não são materialmente inconstitucionais por não violarem o direito de acesso ao direito e a uma tutela jurisdicional efetiva e o direito à segurança no emprego, consagrados nos artigos 20º e 53º, ambos da Constituição da República Portuguesa, por não serem direitos absolutos.

II) O legislador ao estabelecer que, no despedimento coletivo, se presume que o trabalhador que receber a compensação do empregador aceita o despedimento, não está a dificultar ou a prejudicar, arbitrária e desproporcionalmente, o acesso desse trabalhador aos tribunais e a uma efetiva tutela jurisdicional.

III) Com efeito, o trabalhador para se furtar a essa presunção e para impugnar judicialmente o seu despedimento sem a cominação prevista no n.º 6 [atualmente n.º 5] tem apenas que rejeitar essa compensação.

Conforme disposto no julgado em comento, a questão objeto de sua análise consistia em definir:

a. Se a exceção perentória de aceitação do despedimento por parte do trabalhador, fazendo funcionar a presunção legal prevista nos n.ºs 5 e 6, do artigo 366º, do Código do Trabalho (atuais n.ºs 4 e 5), é ma-

---

jsf?docid=198527&doclang=ES

<sup>500</sup> Fonte: sítio do Ministério da Justiça, bases jurídico-documentais do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. Recuperado de <http://www.gde.mj.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9d-d8b980256b5f003fa814/71e1904c958094f2802581db0033c084?OpenDocument>



terialmente inconstitucional por violação das normas consagradas nos artigos 8º, 18º, n.º 2, 20º, n.º 1, e 53º, da Constituição da República Portuguesa (CRP), e se viola as normas ínsitas nos artigos 6º, 10º e 14º, respetivamente, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos.

Ocorre que a norma portuguesa aplicada e validada no julgado em análise, a saber, o art. 366<sup>501</sup>, itens 4 e 5, firma a presunção de que o trabalhador “aceita o despedimento” quando recebe do empregador a totalidade da compensação prevista neste artigo, a qual só pode ser elidida se a pessoa que a ela se opor disponibilizar a totalidade do montante à disposição do empregador. No parti-

---

<sup>501</sup> Fonte: sítio da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego de Portugal. Texto integral e atualizado do Código de Trabalho português. Segue o teor do dispositivo em análise:

Artigo 366.º

Compensação por despedimento coletivo

1 - Em caso de despedimento coletivo, o trabalhador tem direito a compensação correspondente a 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade.

2 - A compensação prevista no número anterior é determinada do seguinte modo:

a) O valor da retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador a considerar para efeitos de cálculo da compensação não pode ser superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida;

b) O montante global da compensação não pode ser superior a 12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador ou, quando seja aplicável o limite previsto na alínea anterior, a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida;

c) O valor diário de retribuição base e diuturnidades é o resultante da divisão por 30 da retribuição base mensal e diuturnidades;

d) Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado proporcionalmente.

3 - O empregador é responsável pelo pagamento da totalidade da compensação, sem prejuízo do direito ao reembolso, por aquele, junto do fundo de compensação do trabalho ou de mecanismo equivalente e do direito do trabalhador a acionar o fundo de garantia de compensação do trabalho, nos termos previstos em legislação específica.

4 - Presume-se que o trabalhador aceita o despedimento quando recebe do empregador a totalidade da compensação prevista neste artigo.

5 - A presunção referida no número anterior pode ser ilidida desde que, em simultâneo, o trabalhador entregue ou ponha, por qualquer forma, a totalidade da compensação paga pelo empregador à disposição deste último.

6 - Nos casos de contrato de trabalho a termo e de contrato de trabalho temporário, o trabalhador tem direito a compensação prevista no n.º 2 do artigo 344.º e do n.º 4 do artigo 345.º, consoante os casos, aplicando-se, ainda, o disposto nos n.os 2 a 5 do presente artigo.

7 - Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 1, 2, 3 e 6. (Recuperado de <http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/legislacao/CT20032018.pdf#page=136>).

cular, a norma portuguesa subverte a lógica de dependência ou subordinação econômica da classe trabalhadora em relação ao empregador, impondo como única forma de resistência à despedida a recusa ao valor da compensação ou a sua restituição. Não só há violação ao direito à segurança e estabilidade no trabalho (acolhido no art. 53 da Constituição portuguesa<sup>502</sup>), como também afronta ao Direito Humano de garantia de acesso à justiça, no que concerne à justiciabilidade do direito de questionar o término da relação de trabalho, porquanto a Corte Constitucional portuguesa definiu tratar-se de “exceção peremptória”, ou seja, uma forma de permitir a monetização inquestionável do Direito Humano ao Trabalho, baseada numa das condições mais frágeis da pessoa que necessita trabalhar para sobreviver, que é a questão econômica.

Ora, a adoção da “exceção peremptória” inverte completamente a tutela da pessoa trabalhadora, fazendo com que ela tenha de provar não estar de acordo ao despedimento promovido por seu empregador, o que absolutamente não se coaduna à centralidade das interpretações jurídicas na pessoa. Uma vez mais, o Enfoque de Direitos Humanos atuaria corrigindo a assimetria de poder identificada (fragilidade econômica da pessoa no momento da perda do emprego, da sua fonte de subsistência), permitindo o questionamento judicial da despedida, prestigiando o Direito Humano de acesso à justiça, e, em seguida, apreciando o mérito do desligamento, tendo por norte o direito à segurança e estabilidade no emprego fundamentalizado na Constituição portuguesa (que terminou sendo monetizado nas normas questionadas do art. 366 do CT), restituir o posto de trabalho perdido. Houve violação de, pelo menos, dois Direitos Humanos, no caso: do Direito ao Trabalho e do Direito de Acesso à Justiça.

Interessante destacar, também, no contexto de como se opera a formação da doutrina e jurisprudência contratualistas, a referência de interpretação da versão anterior do Código de Trabalho português, ainda antes da posituação da legislação reformista de 2012 monetizadora do direito à seguridade no emprego. No particular, escreve VEIGA<sup>503</sup>:

---

<sup>502</sup> Assim dispõe o art. 53 da Constituição de 1978:

Artigo 53.º  
Segurança no emprego  
É garantida aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos.

Fonte: sítio do Parlamento português. Recuperado de <https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/constituicaoepublicaportuguesa.aspx>

<sup>503</sup> O autor, com a devida vênia, embora desenvolva seu raciocínio questionando a norma quanto à presunção de aceitação da despedida, termina concluindo o texto dentro dos limites do juspositivismo ético (mais um exemplo de contratualismo laboral):

##### 5. Conclusão

Julgamos assim que a norma em apreço deve ser interpretada no sentido de que a “devolução” (colocação à disposição) da compensação ao empregador como condição para o exercício do direito de ilidir a pre-

2.a. No CT 2003 (artigo 401.º)

O Ac. do STJ de 03/04/2013, processo n.º 1777/08.0TTPRT.P1.S1, ainda no âmbito do CT de 2003, onde não se aludia à devolução da compensação, defendeu que o trabalhador não pode limitar-se a declarar que pretende impugnar o despedimento para ilidir a presunção, devendo praticar atos que revelem a intenção de não receber aquele quantitativo, procedendo à sua devolução. Esta devolução constitui um “elemento estruturante da ilisão da aceitação do despedimento”, ancorado na boa-fé então prescrita no artigo 119.º, n.º 1, do CT de 2003. (VEIGA, 2019: 4-5)

Ou seja, em prestígio de princípio tipicamente contratualista (advindo das revoluções burguesas, das formas jurídicas necessárias para a legitimação do poder da burguesia na nascente sociedade mercantil-industrial do Século XVIII), atropelam-se os Direitos Humanos, em busca de uma suposta “moralização das relações de trabalho”, quando, na verdade, o “imoral” ou desumano é legalizar o descarte das pessoas.

A todo momento se percebe, pois, a forte presença de elementos concernentes ao “pecado original” da forma jurídica eleita para as relações de trabalho – o “contrato de trabalho” -, que compromete seriamente o avanço em busca da humanização e democratização das relações entre capital e trabalho.

Os exemplos seriam infundáveis, porquanto a doutrina e jurisprudência correntes dos quatro países pesquisados (Brasil, Argentina, Espanha e Portugal) têm naturalizado o tratamento contratual das relações de trabalho, constituindo-se a visão humanista, neste momento, tão somente de exceção (que confirma a regra). Os julgados selecionados para estudo foram tomados de Cortes Superiores destas nações, como representativos do estamento jurisprudencial prevalente.

#### **IV.3 Visão jurisprudencial humanista**

Em contrapartida aos julgados contratualistas laborais ou juspositivistas, começa, timidamente, aparecer uma nova jurisprudência de viés humanista, reconhecendo os Direitos Humanos do Trabalho e a superioridade dos valores neles contidos em relação à propriedade (capital).

No Brasil, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, encontra-se o seguinte excerto de jurisprudência:

AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIMPEZA URBANA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA DIGNIDADE DA PES-

---

sunção que decorreu do seu recebimento, deve ocorrer aquando da manifestação por parte daquele da sua intenção impugnar o despedimento, o que no limite pode ocorrer até ao termo do prazo para impugnar o despedimento. (VEIGA, 2019: 22)

SOA HUMANA, DA INVIOABILIDADE PSÍQUICA (ALÉM DA FÍSICA) DA PESSOA HUMANA, DO BEM-ESTAR INDIVIDUAL (ALÉM DO SOCIAL) DO SER HUMANO, TODOS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO MORAL DA PESSOA FÍSICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. A conquista e afirmação da dignidade da pessoa humana não mais podem se restringir à sua liberdade e intangibilidade física e psíquica, envolvendo, naturalmente, também a conquista e afirmação de sua individualidade no meio econômico e social, com repercussões positivas conexas no plano cultural - o que se faz, de maneira geral, considerado o conjunto mais amplo e diversificado das pessoas, mediante o trabalho e, particularmente, o emprego. O direito à indenização por dano moral encontra amparo no art. 5º, V e X, da Constituição da República; e no art. 186 do CCB/2002, bem como nos princípios basilares da nova ordem constitucional, mormente naqueles que dizem respeito à proteção da dignidade humana, da inviolabilidade (física e psíquica) do direito à vida, do bem-estar individual (e social), da segurança física e psíquica do indivíduo, além da valorização do trabalho humano. O patrimônio moral da pessoa humana envolve todos esses bens imateriais, consubstanciados, pela Constituição, em princípios fundamentais. Afrontado esse patrimônio moral, em seu conjunto ou em parte relevante, cabe a indenização por dano moral deflagrada pela Constituição de 1988. Na hipótese, o Tribunal Regional, por maioria de votos, reformou a sentença para indeferir o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, “considerando que não foi verificado comportamento ilícito ou negligente por parte da reclamada que justifique o deferimento de indenização por danos morais ao trabalhador, o recurso é provido para excluir da condenação a indenização por dano moral “. No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior passou a considerar que a submissão de trabalhadores que realizam atividade externa de limpeza urbana atrai a incidência da proteção normativa fixada pela NR nº 24 do MT, no sentido de assegurar condições sanitárias e de alimentação minimamente razoáveis. Ainda que não se possa exigir instalações ideais, tem de ser garantido o mínimo básico de condição de trabalho, relativamente às necessidades fisiológicas e de alimentação do ser humano. Ausentes tais condições mínimas, aplica-se a norma constitucional reparadora (art. 5º, V e X, da CF). Julgados desta Corte. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”<sup>504</sup>

O caso versava sobre trabalhador em serviço externo de limpeza urbana, ao qual não eram disponibilizadas instalações sanitárias ou para alimentação, fato que motivou a Corte, corretamente, a reconhecer neste comportamento empresarial, uma ofensa não só à dignidade humana, como também à inviolabilidade física e psíquica da pessoa, e ao bem-estar individual (além do social) do ser humano. Com estes fundamentos, o Tribunal Superior do Trabalho refor-

---

<sup>504</sup> Tribunal Superior do Trabalho. Processo Ag-RR-24886-21.2014.5.24.0021, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 04/09/2020. Fonte: sítio do Tribunal Superior do Trabalho (Brasil). Recuperado de <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#d751e2332ee60e244e88d79be1ad97ad>

mou a decisão da Corte Regional e proferiu condenação em indenização por dano moral para reparação da violação de DDHH ocorrida.

Também na Argentina colhe-se o seguinte precedente<sup>505</sup>, versando sobre discriminação de uma trabalhadora transexual:

*Sentado lo expuesto, y en orden a dichas pautas, debo decir que las pruebas reunidas en la causa dieron cuenta de que D. H. sufrió las situaciones de hostigamiento y discriminación de las que dijo haber sido víctima, como así también indicios relevantes que permitieron inferir una actitud discriminatoria por parte de la demandada al momento de despedirla, justificando así el pago de un resarcimiento adicional a las indemnizaciones por despido (v., en sentido similar, esta Sala in re “Sciammarella, Ana María c/ Fundación Sanidad Naval Argentina s/ Despido”, SD N° 105.581 del 28/02/2019). En efecto, quienes comparecieron a propuesta de la trabajadora -Benítez Insaurralde (fs. 357/358), Trujillo (fs. 359/360), Medina (fs. 366/367) y Albi Martín (fs. 369/370)- fueron contestes en señalar las actitudes de maltrato y discriminación por parte de los supervisores hacia D. H., consistentes en llamarla por el nombre masculino -“Rubén”- o bien en obligarla a presentarse ante los clientes que atendía como tal, a la par de no permitirle utilizar el baño para mujeres, como así también que fue sancionada por tomarse un día para realizar el trámite de cambio de nombre en su DNI.<sup>506</sup> (páginas 10-11)*

Segundo os fatos provados, a conduta empresarial levada a cabo por supervisores consistia em chamar a trabalhadora por seu nome masculino, obrigando-a a apresentar-se aos clientes como tal, proibindo-lhe o uso do banheiro feminino e penalizando-a no dia tomado para tramitar a mudança de nome no documento de identidade. Não há dúvida tratar-se de atos flagrantemente discriminatórios e atentatórios da dignidade humana e da liberdade sexual da pessoa. Nos fundamentos do voto, encontram-se os seguintes fundamentos-base de Direitos Humanos:

*Tal como lo he sostenido en otras oportunidades, incluso como Juez de 1ª Instancia (en autos “Areco, Maximiliano c/ Praxair S.A.s/ Juicio sumarisimo”, SD N° 10.991 del 23/06/2006, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 37), no cabe duda que resulta aplicable la ley 23.592 a las relaciones laborales; norma que no sólo se encuentra avalada ya por la Constitución Nacional de 1853 por los arts. 14 y 16, luego por el art. 14 bis CN y además hoy día, a partir de la reforma constitucional de 1994 -art. 75 inc. 22-, encuentra sustento en normas internacionales que garantizan el principio de igualdad: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración*

---

<sup>505</sup> Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Autos D.H.R.J. c/ Aegis Argentina S.A. y outro s/ despido, sentencia de 29 de marzo de 2019, ponente Dra. Silvia E. Pinto Varela. Fonte: notícia constante do sítio *Diario Judicial.com*, de 09 de agosto de 2020, intitulada “La identidad es un derecho”. Recuperado de <https://www.diariojudicial.com/nota/84131>

<sup>506</sup> Fonte: página do sítio de *Diário Judicial.com*. Recuperado de <https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/085/552/000085552.pdf>

*Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas; la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; asimismo, la discriminación arbitraria está expresamente vedada por los Convenio N° 87, 98 y 111 de la OIT, y por la Declaración Sociolaboral del Mercosur; y la ley 26.485 y su decreto reglamentario 1011/2010 de Protección Integral a las Mujeres, normativa que tiende a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los cuales desarrollen sus relaciones interpersonales -entre los que, claramente, se encuentra el ámbito laboral-. (página 9)*

Assim, o julgado em questão abre-se à apreciação do caso sob a ótica dos Direitos Humanos e mantém a condenação da empresa pelos danos morais inequivocamente sofridos pela trabalhadora, em razão de discriminação de gênero. Destaca-se a inversão do ônus da prova feita pela Corte, ao apontar que cabe à empresa provar que sua atitude não foi discriminatória. Não obstante, parte do raciocínio da Corte restou ainda estruturado dentro da moldura jurídica contratual:

*En suma, a partir de las consideraciones vertidas, entiendo que la demandada no logró demostrar lo argumentado como sustento de su defensa, de modo que el despido decidido devino claramente injustificado -máxime teniendo en consideración que procedió a despedir a la trabajadora cuando aún no había obtenido el alta médica definitiva-, encuadrando, a mi juicio, en lo previsto por el mentado art. 212 LCT en su 3° párrafo, en tanto ha transgredido los principios de continuidad del contrato y de buena fe que deben primar en este ámbito (arg. arts. 10 y 63 de la LCT). (página 5)*

Portanto, vê-se que a abertura humanista da jurisprudência segue carecendo de uma metodologia própria e capaz de localizar o Direito do Trabalho nos Direitos Humanos e não o contrário, restando permeável aos vícios originais do contratualismo laboral, ao referir o julgado supra, v.g., a aplicação do princípio de continuidade do contrato (que seria substituído pelo princípio da segurança e da estabilidade no trabalho) e do princípio da boa-fé (que, na hipótese, deveriam ser referidos os da não-discriminação e equidade).

Para imprimir essa metodologia no desempenho da atividade judicante em matéria laboral, o EDH se constitui de ferramenta imprescindível, apta à superação do contratualismo e do apego técnico ao juspositivismo, que sempre invisibilizam e limitam o exame dos Direitos Humanos do Trabalho.



Na Espanha, por sua vez, o Tribunal Supremo manteve a declaração de nulidade de despedida de trabalhadora ocorrida no mesmo dia em que reclamou do gozo de suas férias, conforme a seguinte ementa:

*DESPIDO DISCIPLINARIO. Nulidad del despido de trabajadora por supuesto bajo rendimiento el mismo día que reclamó verbalmente a sus superiores contra la negativa de la empresa a concederle el periodo de vacaciones solicitado. Hay un indicio de represalia muy grande porque aunque la queja fue verbal, ella había hecho saber que tendría que reclamar judicialmente. Vulneración de la garantía de indemnidad. Falta de contradicción con el supuesto alegado en el que el trabajador se negó hacer más horas extras pero se concilió, y el despido fue un año después.*

*Por falta de contradicción, el TS desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina y confirma la sentencia del TSJ Madrid que declaró nulo el despido disciplinario.<sup>507</sup>*

Com efeito, a Corte reconheceu que a despedida disciplinar da trabalhadora no mesmo dia em que apresenta uma reclamação verbal contra as datas assinaladas para gozo de suas férias pela empresa viola o direito fundamental de incolumidade, como desdobramento do direito humano de acesso à justiça (tutela judicial efetiva), presumindo-se represália da empregadora contra a atuação obreira.

Além da correta conclusão a que chegou o Tribunal Supremo, prestigian-do direitos fundamentais da trabalhadora e denegando o recurso empresarial, colhe-se também da fundamentação da decisão recorrida<sup>508</sup> dois pontos relevantes: primeiro, que o direito de acesso à justiça compreende não só questões ocorridas dentro do processo como represálias pelo empregador quanto a atos preparatórios ou prévios ao exercício de uma ação judicial, o que vulnera, por conseguinte, a garantia fundamental de incolumidade que decorre do direito a uma tutela judicial efetiva, consoante previsto no art. 24.1 da Constituição espanhola. Depois, a decisão recorrida destaca que, nas causas em que seja alegado um comportamento empresarial discriminatório ou lesivo de direitos fundamentais dos trabalhadores, o ônus da prova recai sobre o empregador, de comprovar que inexistiu lesividade na conduta.

---

<sup>507</sup> Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia n. 730/2019, de 23 de octubre de 2019, Recurso de unificación doctrina n. 1790/2017, ponente Excmo. Sr. D. Sebastian Moralo Gallego. Fonte: sítio Iberley. Recuperado de <https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-social-n-730-2019-ts-sala-social-sec-1-rec-1790-2017-23-10-2019-48086831>

<sup>508</sup> Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 3 de la Sala de lo Social, Sentencia n. 133/2017, de 23 de febrero de 2017, Roj: STSJ M 2549/2017, Id Cendoj: 28079340032017100145, ponente Jose Ignacio de Oro-Pulido Sanz. Fonte: sítio do Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Recuperado de: <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/53b1b1721a75d34a08edc0d7f106b1b1ff2f4990d650bf12>

Cabe ponderar que seria aplicável ao caso, ainda, o disposto na Convenção 132 da OIT, cujo art. 10 dispõe que a pessoa empregada deverá ser consultada sobre a fixação do período de gozo, devendo ser consideradas não somente as necessidades do trabalho como também as possibilidades de repouso e diversão ao alcance da trabalhadora.

Portanto, das decisões das Cortes argentina e espanhola, colhe-se um elemento comum: a inversão do ônus da prova em situações discriminatórias ou atentatórias a direitos fundamentais, que constitui justamente um dos tópicos que envolve a aplicação do Enfoque de Direitos Humanos, embora o EDH proposto nesta investigação seja mais amplo, preconizando esta inversão em quaisquer situações envolvendo relações assimétricas de poder.

#### **IV.4 Aplicação do Enfoque de Direitos Humanos à hermenêutica juslaboral e a efetividade dos Direitos Sociais**

Por todo o já exposto, é possível perceber, com clareza, que a visão tradicional do Direito do Trabalho estrutura a construção jurídico-laboral a partir da ótica contratualista, ou seja, o contrato individual ou coletivo de trabalho, em que duas partes – o trabalhador individualmente considerado ou a pessoa coletiva que o representa (entidade sindical) e o empregador (ou entidade sindical empresarial) -, acertam direitos e obrigações entre si, tendo o Estado como um mero ente expectador e exercente de uma espécie de papel “moderador”, regulando o que pode e o que não pode ser negociado, e intervindo na distribuição de justiça (função pública judicante).

É clara, pois, a necessidade de resgatar o espírito de Filadélfia (SUPIOT, 2010), centralizando as ações estatais nas pessoas nas relações de trabalho (OIT, 2019). Além disso, deve ser superada a visão contratualista do trabalho em favor da visão humanista, reconectando o Direito do Trabalho à sua gênese junto aos Direitos Humanos.

Para tanto, é necessário localizar os Direitos Humanos do Trabalho e revitalizá-los com nova força imanente ao princípio da progressividade e à supremacia dos DDHH sobre o poder econômico, o que demanda a atuação do Estado em favor das pessoas trabalhadoras, em todos os momentos das relações de trabalho, na fase regulatória (normativa), na execução (inspeção de trabalho, políticas públicas, formação, qualificação e requalificação profissional, recolocação em postos de trabalho etc.), e na judicante (facilitação do acesso à justiça, efetividade e presteza do serviço judiciário para concretização dos Direitos Humanos do Trabalho).

Vale repisar a observação de HERRERA FLORES<sup>509</sup>, ao afirmar que um Direito Humano fundamental se constitui exatamente nos próprios meios e condições necessárias para pôr em prática os processos de luta pela dignidade humana e que o conteúdo básico dos Direitos Humanos não é o direito a ter direitos, mas o conjunto de lutas pela dignidade, pois a dogmática tradicional do Di-

---

<sup>509</sup> HERRERA FLORES (2007: 18-29).

reito do Trabalho impede esse processo de lutas, invisibilizando a natureza de DDHH dos direitos sociais com a máscara civilista do Direito das Obrigações, de cunho contratual e de sujeição dócil da vontade das pessoas trabalhadoras ao poder econômico pelo argumento do empenho da palavra dada do trabalhador desnudo frente ao proprietário da chave de acesso à sua sobrevivência.

Tornando às lições de SOUSA SANTOS<sup>510</sup>, sobre a necessidade de desmascarar o que denomina de reduções hegemônicas, não restam dúvidas de que a ideologia do “contrato de trabalho”, seja individual ou coletivo, é uma delas, a qual, desnudada, deixa muito clara a que propósitos serve: de domesticação das pessoas trabalhadoras aos interesses do capital e de invisibilização dos Direitos Humanos do Trabalho, apagando da memória coletiva os processos de lutas sociais. É mais: a forma jurídica da sociedade burguesa do capitalismo emergente dos primórdios da Revolução Industrial, correspondente à contratualização, perpetuada até os dias de hoje, representa um modelo de dominação do capital sobre o trabalho, da classe proprietária sobre a classe despossuída, incompatível com os postulados de uma sociedade democrática, livre e solidária, nos alvares do terceiro milênio.

Não é, pois, por acaso, que as tendências neoliberais contemporâneas, externadas nas reformas trabalhistas apregoadas pelo Banco Mundial e pelo FMI mundo afora, e que se concretizaram na Grécia, Itália, Portugal, Espanha e Brasil, buscam acentuar a contratualização das relações de trabalho na fórmula de desregulamentação do Direito do Trabalho e cada vez mais prevalência do negociado (contrato individual ou coletivo) sobre o legislado – afirmação da “autonomia” da vontade para melhor dominação do poder econômico. Ou seja, deixar a regulação do trabalho ao sabor da vontade das partes, como se por um passe de mágica a pessoa trabalhadora restasse em situação igual ao poder econômico “contratante”.

Como dito ao longo deste trabalho, se faz urgente estabelecer um pensamento diferente e apto a construir uma plataforma de concretização da dignidade humana para todos os povos e, também, de um instrumento que permita a efetividade dos Direitos Humanos no mundo globalizado, para que o desenvolvimento alcance todas as pessoas. Pois, se, por um lado, localizar os Direitos Humanos apenas no plano internacional e supralegal os deixam etéreos, o Direito do Trabalho, já positivado pelos Estados, merece apenas uma releitura humanista e crítica para visibilizar os direitos trabalhistas (todos) como Direitos Humanos que são, a permitir tornar efetivos e concretos os DDHH (em especial os direitos econômicos e sociais que aportam uma vida digna), e conquistar ao trabalho humano a dimensão de bem jurídico de primeira grandeza, não contratualizável, e, portanto, merecedor de total atenção dos Estados com centralização nas pessoas trabalhadoras. Ora, recordando o que afirma GALLARDO<sup>511</sup>, ante o fato de que o Estado não é um ser neutro nem universal, mas parte da

---

<sup>510</sup> SOUSA SANTOS (2000: 326-327).

<sup>511</sup> GALLARDO (2010: 58-62).

conformação social e tradutor das exclusões e injustiças, tal compreensão crítica e humanista blinda o Direito do Trabalho (e, por conseguinte, as normas jurídicas sociais) do controle dos Estados pelo poder econômico, como também a hermenêutica juslaboral, que deverá estar sempre orientada pelos princípios próprios aos Direitos Humanos e não ao dos contratos, evitando que a categoria vulnerável das pessoas trabalhadoras venha a ficar à mercê das mudanças de regime de governo e da legislação (e das constantes e sucessivas reformas neoliberais redutoras de direitos econômicos e sociais).

Portanto, os conceitos extraídos da interpretação ontológica humanística dos Direitos Humanos do Trabalho, que os vinculam à sua essência (o trabalho como expressão da personalidade humana e sua projeção na esfera pública, no contexto das relações sociais) e com os valores correspondentes ao bem comum, à democracia, ao próprio Estado de Direito e, sobretudo, à concretização da dignidade humana, jamais vão se coadunar a interesses escusos e opressores do capital vinculados a máscaras de normas, conceitos ou de qualquer outra forma jurídica que lhe venha a servir de instrumento.

Entender o Direito do Trabalho como Direito Humano implica na sua releitura sob a ótica da principiologia aplicável aos DDHH, conforme tratados internacionais citados neste estudo (com particular referência à Constituição da OIT de 1919, à Declaração de Filadélfia de 1944, à Declaração e Programa de Viena de 1993, ao PIDCP e PIDESC), concernentes à integralidade, interdependência, indivisibilidade, universalidade, progressividade, supremacia dos Direitos Humanos e o *in dubio pro homine*, quer dizer, que os direitos trabalhistas são de validade universal (para todos e todas, sem discriminação), integrais (não podem ser fragmentados, fracionados), que o descumprimento de um compromete o dos demais, que dentre duas interpretações possíveis deverá ser prestigiada a *pro persona* ou que se existe mais de uma norma de um mesmo direito se aplique a mais favorável à pessoa, não se admitindo, jamais, retrocesso social. Isto significa abrir uma nova perspectiva de sua observância, interpretação e aplicação, e não só em relação à hermenêutica jurídica laboral, às decisões judiciais, mas também às ações estatais e às políticas públicas, já que os Estados têm obrigação de se posicionar a favor dos DDHH e suas autoridades deverão atuar para respeitar, proteger, garantir e promover os direitos trabalhistas e, em caso de violação, deverão investigar, sancionar os responsáveis e reparar os danos às vítimas<sup>512</sup>.

Em referência aos julgamentos de valor a que se refere MARCUSE (1973), expostos na introdução, como justificativa de uma teoria crítica, com urgência a vida de quem trabalha deve ser tornada uma vida digna de viver, e um instrumento para a consecução dessa finalidade, é, sem dúvida, a aplicação do Enfoque de Direitos Humanos na hermenêutica juslaboral.

---

<sup>512</sup> À similitude da reforma adotada na Constituição do México, em 2011, conforme estudo da Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, intitulada *Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos*. Recuperado de <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf>

A potencialidade da ferramenta está defendida nas anteriores análises jurisprudenciais que justificam seja adotada uma metodologia ou paradigma distinto para a interpretação e aplicação do Direito do Trabalho para que se alcance a máxima potencialidade de efetivação dos direitos econômicos e sociais, para a concretização da dignidade humana e realização de justiça social. Nesta direção, recomendando a expansão do Enfoque de Direitos Humanos, afirmaram recentemente PACKER–BALAN (2020):

*Las Naciones Unidas definen el EBDH como un marco para el proceso de desarrollo humano que se basa normativamente en estándares internacionales de derechos humanos y que está operacionalmente dirigido a promover y a proteger los derechos humanos. Bajo el EBDH, las políticas públicas y el desarrollo se conceptualizan en términos de otorgar a los individuos un conjunto de derechos humanos -una elección garantizada de oportunidades y medios para la realización personal. Esta es una obligación del estado y una función central de las autoridades públicas, con los correspondientes derechos de los individuos y de los grupos de exigir el respeto y la aplicación de sus disposiciones. Además, el EBDH exige acciones prioritarias dirigidas a los más vulnerables con el fin de cumplir con la ética de “No dejar a nadie atrás”. Finalmente, el EBDH ubica a los mismos titulares de derechos al volante de la acción como los principales agentes en la formulación de las políticas y el desarrollo: “¡Nada sobre nosotros, sin nosotros!” (PACKER–BALAN, 2020)*

Assim, não só a reconstrução crítica e humanista do Direito do Trabalho é necessária como prática social emancipadora, como também a ela está vinculada o EDH para torna-la operante, pois segundo a crítica de HOBBSAWM (2000) à doutrina dos Direitos Humanos:

(...) os direitos, no sentido amplo de reivindicação de uma vida boa ou tolerável, não são fins em si mesmos, mas aspirações vastas que podem ser realizadas somente através de estratégias sociais complexas e mutantes, sobre as quais eles não esclarecem nada de específico. HOBBSAWM (2000: 433)

Trata-se o EDH aplicado à hermenêutica juslaboral, pois, de essencial instrumento dotado de fundamentos teórico-práticos suficientes e aptos para efetivar os direitos econômicos e sociais, promovendo mudança, superação do contratualismo, visibilização dos Direitos Humanos do Trabalho, e para impedir que o capitalismo permaneça se apropriando do Direito Laboral como forma de exercício da dominação da classe trabalhadora e propagação de miséria, sofrimento social e debilitação da democracia e do Estado de Direito.

Recordando a preconizada aplicação do EDH à hermenêutica jurídica exposta no capítulo II, sua operacionalização no âmbito do Direito do Trabalho ocorre da seguinte maneira:

- Identificação dos Direitos Humanos do Trabalho em jogo, no caso, do núcleo das obrigações a eles relativas, e de toda a normatividade internacional e nacional aplicável;
- Observância da supremacia dos Direitos Humanos;
- Cumprimento do princípio da progressividade ou não retrocesso;
- Eficácia *erga omnes* vertical e horizontal (observância dos DDHH nas relações das pessoas com o Estado e, também, nas relações entre particulares);
- Aplicação do *in dubio pro homine* (que no Direito do Trabalho toma o nome de *in dubio pro operario*);
- Respeito aos direitos e garantias inerentes à democracia;
- Caráter coercitivo (*ius cogens*), de ordem pública, das normas de Direitos Humanos;
- Efetivação do valor social do trabalho, cumprindo-se a função social da propriedade como sustentáculo de vida digna;
- Concretização da dignidade humana e realização de justiça social.

Estes elementos básicos, pelo menos, deveriam constituir-se de pressupostos para a construção de quaisquer teorias, doutrinas ou jurisprudências sobre Direitos do Trabalho.

Retornando ao capítulo II, com as adaptações necessárias ao Direito do Trabalho, a rotina básica de raciocínio de aplicação do EDH na hermenêutica jurídica laboral envolve partir das seguintes premissas: 1) a compreensão, nos Direitos Humanos do Trabalho, da genealogia de lutas sociais e conquistas populares contra todas as formas de discriminação e privilégios, e de busca de igualdade, dignidade, alteridade, interculturalidade, solidariedade, justiça, espaços públicos democráticos de expressão e reivindicação etc.; 2) a necessidade de tornar visíveis as relações assimétricas de poder e seus instrumentos de dominação ocultos nas relações de trabalho; 3) a localização e seleção dos valores e bens da vida preponderantes para a correta e adequada tutela humanista e holística dos DDHH do Trabalho, atentando especialmente para o respeito à dignidade humana, em toda a sua dimensão, para o valor social do trabalho e para a função social da propriedade.

Em segundo lugar, deve compreender os seguintes requisitos: identificação dos Direitos Humanos do Trabalho envolvidos na relação jurídica em estudo e os bens jurídicos que tutelam; análise da forma com a qual se vulneram os Direitos Humanos laborais e os bens jurídicos neles protegidos no contexto da relação de trabalho em apreciação; análise das obrigações dos Estados em virtude do Direito Internacional dos Direitos Humanos e sua aplicação prática no caso concreto; no âmbito processual trabalhista, inversão do ônus da prova para favorecer a parte mais débil na relação assimétrica de poder (na prática, discriminações, assédio, vínculo empregatício, acidente de trabalho etc.); identificação e aplicação da forma de corrigir as práticas ilícitas e a distribuição injusta de poder que subjaz a relação de trabalho em apreciação, e a assimetria que perpetua a impunidade de quem viola DDHH do Trabalho.



No desenvolvimento do raciocínio, reprisando, cabe ter em consideração as finalidades do EDH: a) o controle de legitimação popular e humana na interpretação e aplicação do Direito do Trabalho; b) correção de desigualdades, seja no âmbito do Direito material ou no processual; c) efetividade dos Direitos Humanos do Trabalho; d) produção de justiça social e concretização da dignidade humana; e) tutela da vida e do bem-estar universal; f) submissão do direito à propriedade conforme a ordem jurídico-humanitária laboral, ou seja, na ponderação entre a lesão ao direito à propriedade e à lesão a Direito Humano do Trabalho (subordinação do uso e gozo da propriedade ao interesse social, conforme art. 21.1 da CADH, ou função social da propriedade); g) aferição da legitimidade da interpretação e aplicação encontradas pela correspondência ao cumprimento dos seus objetivos.

De outra parte, as diretrizes de aplicação do EDH propostas neste trabalho para a hermenêutica jurídica, de forma geral, são também aplicáveis à interpretação e aplicação do Direito do Trabalho, ou seja: o EDH não pode servir de estímulo ao uso reverso da ordem jurídico-democrática humanista, não deve ser invocado ou aplicado em situações em que, a pretexto de salvaguarda de DDHH, o resultado provocar injustiça social ou a violação de outro Direito Humano de importância superior no caso concreto; a dosimetria e a adaptação das medidas derivadas do raciocínio de aplicação do EDH devem ser desenhadas e compatibilizadas ao caso concreto, prestigiando a vida e os Direitos Humanos, reiterando-se, sem causar injustiças nem risco à ordem jurídico-democrática humanista; os juízos de adequação e aplicação do EDH ao caso concreto devem ser pautados pelo binômio necessidade-capacidade, ou seja, atendendo a necessidade do mais débil na medida da capacidade do outro.

No momento da aplicação do Direito pelo Poder Judiciário, é de se considerar, ainda, as características de atenção dedicada do aparato judicial trabalhista necessárias previamente à consecução do EDH na prática (justicialização dos direitos econômicos e sociais): como dito anteriormente, compreende um *iter* que vai desde a prévia disponibilização de equipamentos públicos judiciais suficientes até o amplo acesso à justiça (compatibilidade, adequação ou qualidade, publicidade, aceitação e adaptabilidade dos instrumentos, ou seja, das ações, dos ritos processuais e dos procedimentos).

Os quatro países que foram destaque neste trabalho (Brasil, Argentina, Espanha e Portugal) são dotados de estrutura judiciária especializada e processos diferenciados. Os ajustes concernentes ao caminho prévio supra apontado podem ser facilmente efetuados na condução dos processos e procedimentos pelo juízo condutor (na aplicação das normas internacionais e do EDH), seja, por exemplo, através de dispensa de custas, emolumentos e honorários às partes reivindicadoras de Direitos Humanos do Trabalho (como espécie de direitos econômicos sociais e culturais que demandam um recurso rápido, gratuito e eficaz); pela disponibilidade de intérprete àqueles que não se comunicam na língua local (como indígenas, migrantes); e, sobretudo, sensibilidade social do órgão jurisdicional, do membro, membra do Ministério Público e da advocacia

nas audiências e a todo o momento na marcha do processo (e antes dele, à atenção da vítima de violação de DDHH do Trabalho), atentando para que quanto maior for o grau de vulnerabilidade da pessoa, quanto maior tiver sido a sua exploração na relação de trabalho ou a violência sofrida aos seus direitos (assédio, discriminação, violência física, verbal, exposição da vida ou saúde a risco grave e iminente, acidente com culpa grave ou dolo do empregador ou tomador de serviço, lesão corporal grave ou morte, omissão de socorro do empregador ou tomador de serviço etc.), maior deverá ser o cuidado para a plena atenção da pessoa – o objetivo do EDH, lembrando, é centrar a interpretação e aplicação do Direito do Trabalho no ser humano.

Como exemplo hipotético, uma pessoa migrante que tenha sido explorada em condições análogas à escravidão deverá ter toda a consideração da justiça na atenção particular que demanda sua condição de vulnerabilidade potencializada (violência estrutural sofrida, condição de migrante, super-exploração, dificuldades com a interação linguística e social etc)<sup>513</sup>. Inclusive, uma forma de garantir a atenção dedicada necessária a casos de especial vulnerabilidade da vítima de violação de Direitos Humanos do Trabalho seria já assinalar desde o ajuizamento do processo o grau de atenção prioritária<sup>514</sup> e, também, dedicação (correspondente à atenção a ser dada a características particulares do caso que requeiram cuidados processuais, procedimentais ou judiciais diferenciados, como no caso de indígenas, migrantes, vítimas de trabalho escravo ou a ele análogo, pessoas em situação de violência doméstica, vítimas de assédio sexual etc).

Quanto à justiciabilidade dos Direitos Humanos do Trabalho, não dever ser olvidada ou menosprezada a necessidade de adaptabilidade do processo ou procedimento laboral à situação particular da pessoa que demanda um Direito Humano do Trabalho: a garantia do amplo acesso à justiça de forma efetiva requer, caso não tenha sido bem encaminhada a ação ou seu pedido, que o juízo proceda (observados os princípios do contraditório e da ampla defesa da parte contrária), às adaptações necessárias no rito e na entrega da prestação jurisdicional. Cabe lembrar aqui que o recurso rápido, simples e efetivo que preconizam os principais diplomas de DDHH (como o art. 25.1 da CADH) para a tutela de direitos fundamentais (e, como visto, a maioria dos Direitos Humanos do Trabalho estão fundamentalizados nas Constituições) deveria ser similar ao *habeas corpus*, *habeas data* ou mandado de segurança (amparo em alguns países), de característica predominantemente sumária, mandamental e gratuita. As ritualísticas existentes, como no Brasil, de um rito especial para o processo do trabalho (desdobrado em ordinário, sumário e sumaríssimo, de acordo com o valor da causa), não atendem ao comando da normativa internacional, o que

---

<sup>513</sup> Esta consideração deveria começar da recepção da pessoa no fórum trabalhista, acompanhamento por assistente social nomeada pela justiça, audiência humanizada (sensibilidade no tratamento da vítima em juízo) etc.

<sup>514</sup> No Brasil, por exemplo, processos de pessoas idosas são assinalados como de tramitação prioritária.

constitui mais um fundamento relevante para a adaptabilidade e flexibilidade do processo e de suas decisões para a melhor forma de tutela dos Direitos Humanos em análise.

Por fim, para prestação de contas e medição de responsabilidade social do Poder Judiciário, na aplicação da hermenêutica jurídica com EDH, caberia estabelecer indicadores de justiça social destinados a aferir o impacto de políticas e decisões judiciais, da atuação do Ministério Público, da Advocacia e das Defensorias Públicas em relação à efetividade dos Direitos Humanos do Trabalho. Não se trata de tarefa difícil, já que a realização de audiências públicas para discussão com a comunidade laboral, com representação tripartite de governo judicial, classe trabalhadora e classe empresarial pode definir as políticas judiciais trabalhistas para determinado período, assim como se pode efetuar consultas para uniformização de jurisprudência mediante simples publicização e disponibilização de propostas no sítio dos Tribunais. Os indicadores sociais podem estar relacionados com a melhoria da segurança e estabilidade no emprego, *v.g.*, combate à discriminação nas relações de trabalho, redução de sinistralidade laboral etc. Ou seja, há várias formas criativas de democratizar o Direito do Trabalho e, sobretudo, sua hermenêutica.

Destarte, como caminho para a construção e respeito da dignidade das pessoas trabalhadoras de forma macro, é imprescindível entender o Direito do Trabalho como instrumento portador de Direitos Humanos, de forma a garantir uma nova interpretação e aplicação, especialmente em conformidade aos princípios de progressividade e supremacia dos DDHH, buscando, ato contínuo, que eles sejam globalizados, ou seja, estendidos a todas e todos que vivem no planeta, através da educação e da conscientização dos povos para que, no futuro, cada pessoa esteja ciente de seus direitos laborais e dotada de mecanismos capazes de possibilitar a implementação ou efetividade do Direito Humano do Trabalho que não esteja sendo observado ou que venha a ser violado.

## CONCLUSÕES

Tornando às lições de FERRAJOLI<sup>515</sup>, a desigualdade se estrutura em relações assimétricas de poder-dever e no sentimento de desigualdade das identidades próprias e alheia que lhe acompanha. Logo, como explica o autor, poderes e direitos fundamentais constituem a base de duas formas opostas de subjetividade: a igualdade produzida pelos direitos fundamentais é o pressuposto das identidades dos sujeitos como pessoas e de sua livre comunicação, com respeito e reconhecimento recíprocos. E, no reverso, “a desigualdade produzida pelos poderes jurídicos e não jurídicos é o pressuposto das identidades dos sujeitos através dos rôis e das hierarquias que personificam, assim como das relações despersonalizadas e de alienação recíproca que mediante tais funções se estabelecem entre eles”. Ou, recordando a ARZATE–MARTÍNEZ<sup>516</sup>, o produto das relações assimétricas de poder resulta em assimetrias sistemáticas de perspectivas de vida.

Não é mais possível admitir que em Estados Democráticos de Direito permaneçam entidades funcionando de maneira absolutamente autoritárias: não há nada mais antidemocrático do que a estrutura absolutista que a visão liberal ou neoliberal preconiza à empresa – manda mais quem tem mais capital, empoderando a propriedade e o poder econômico em detrimento de sua função social e da ordem social. Nesta concepção, a empresa nada mais é que um aparelho de subjetivação de pessoas, como explica BAYLOS<sup>517</sup>:

*La construcción de una relación directa de autoridade sobre el trabajador individual que está inscrita en el ADN del contrato de trabajo, se radicaliza como poder de coerción sobre cada trabajador individualmente considerado, en un contexto en el que el sindicato y las representaciones unitarias en la empresa se convierten en intermediarios de las decisiones inmodificables de la dirección y se extiende y consolida la precariedad laboral y existencial de una gran parte de la población trabajadora, especialmente jóvenes y mujeres. (BAYLOS, 2020: 29-30)*

Assim, relações assimétricas de poder constituem elementos de subjetivação negativa, diminuição ou anulação de cidadania, degradação humana, ao passo que a concretização de Direitos Humanos, ao reverso, produz subjetivação emancipadora, cidadã, igualitária e positiva (empoderadora). Ao longo da investigação tratou-se de evidenciar a realidade que mascara e perpetua essa assimetria de poder nas relações de trabalho, reproduzindo subjetividades que abarcam sentimentos que vão desde a frustração, perda, tristeza, ressentimento, até a criminalidade, imbecilização, violência e crueldade – podendo desbordar em fascismo -, implicando sérios riscos às democracias e ao Estado de Direito, e pior, causando miséria social e sofrimento.

---

<sup>515</sup> FERRAJOLI (1995: 934). Obs.: com tradução.

<sup>516</sup> ARZATE–MARTÍNEZ (2018: 99).

<sup>517</sup> BAYLOS (2020: 29-30).

Neste contexto, manter o Direito do Trabalho vinculado à sua essência e às lutas sociais que o originaram (trabalho humano e Direito Humano de respeito à condição humana, à liberdade e dignidade da pessoa), e não à forma que mascara relação assimétrica de poder (contrato), conforme alertava GOMES na década de 1950, e mais tarde SUPIOT (1994) e DUSSEL (2013), dentre outros, também foi uma das preocupações deste trabalho, para alcançar algo efetivamente novo e requalificador das relações de trabalho do ponto de vista da Ciência do Direito, como merece este início do terceiro milênio da humanidade.

Desta forma, à luz da Teoria Crítica dos Direitos Humanos, a categoria do “contrato de trabalho”, como dogma de doutrina e jurisprudência, se mostra incompatível com os Direitos Humanos, por conformar juridicamente uma relação assimétrica de poder-dever não superável nem mesmo pela força do sindicalismo (que sempre pode ser desvirtuado ou enfraquecido por necropolíticas laborais, por darwinismo legislativo, por novas formas de organização precarizantes do trabalho, por práticas antissindicais etc.). Reprisando WARAT<sup>518</sup> e o problema da elucidação da verdade proposicional descomprometida da problemática ideológica, tratar Direitos Humanos do Trabalho sob o manto do contrato resultaria em verdade falseada, pois, como apontado anteriormente, a expressão “contrato de trabalho” oculta, mascara a reprodução da ideologia da servidão e da vassalagem. Nestes termos, não é correta a leitura asséptica e desconectada da realidade histórica que permita a continuidade do uso dessa ficção jurídica reproduzindo, na contemporaneidade, o objetivo pelo qual foi criada no início do século XIX: capturar “legalmente” os corpos das pessoas despossuídas para o trabalho.

Como visto no capítulo III, a aplicação do “contrato” como instituto jurídico disciplinador das relações de trabalho produz diversas consequências negativas: a invisibilização dos Direitos Humanos do Trabalho (tudo é reduzido a um pacto com suas cláusulas e a prevalência da vontade das partes); a normalização ou naturalização das violações de DDHHT nas relações de trabalho (que passam a ser vistas como descumprimentos contratuais, inadimplementos de obrigações, e não como atentados a direitos e garantias fundamentais, v.g.); e com esta normalização, a consequente monetização das lesões aos direitos econômicos e sociais (a lógica dos Princípios Diretores da ONU sobre Empresas e DDHH<sup>519</sup> de “proteger, respeitar e reparar” opera no vazio, já que tudo pode ser vertido em pecúnia).

---

<sup>518</sup> WARAT (1995: 62).

<sup>519</sup> Em conformidade aos Princípios Diretores sobre Empresas e DDHH, proteger corresponde ao dever do Estado de atuar contra abusos de Direitos Humanos; respeitar, a responsabilidade empresarial de evitar violar DDHH e enfrentar os impactos adversos de eventual infração; reparar, a garantia de responsabilização e de reparação adequada, e ampliação de acesso às vítimas de recursos efetivos, judiciais ou extrajudiciais. Fonte: sítio da ONU, notícia intitulada “Conselho de Direitos Humanos aprova princípios orientadores para empresas, publicada em 16 de junho de 2011. Recuperado de <https://nacoesunidas.org/conselho-de-direitos-humanos-aprova-principios-orientadores-para-empresas/>

Logo, o dogma abstrato da venda da força de trabalho como categoria dissociada da pessoa e sua correspondência na visão mercantil-contratualista da relação de trabalho restam incompatibilizados com o atual estágio evolutivo do Direito, que localiza o Direito do Trabalho nos Direitos Humanos. Esta abstração-máscara de alienação “consentida” do corpo, que conforma a naturalização das transgressões de DDHH como simples descumprimentos contratuais, não pode mais seguir vigente. Afinal, a abundância ou escassez de força de trabalho não pode mais servir para regular condições de trabalho e salário, pois o trabalho é um Direito Humano, não corresponde a uma mercadoria e nem a um contrato, sendo incompatível com o tratamento de *res in commercio*.

Uma vez afastada a ideologia do contrato, que comprometeria a eficiência do instrumento proposto de requalificação do Direito do Trabalho, o EDH, passou-se à busca de formulação de uma hermenêutica compatível com a teoria proposta. Assim, desde a proposta desconstrutiva de WITKER<sup>520</sup> de superação das epistemologias e metodologias tradicionais para o redesenho de novas bases epistêmicas, incorporando o pensamento complexo e os métodos holísticos ou de totalidade como coadjuvantes à abordagem transdisciplinar, agregando o uso do elemento de compreensão histórico-jurídica e adaptação ao presente contido na hermenêutica proposta por GADAMER<sup>521</sup>, e a advertência de LUKÁCS<sup>522</sup> para evitar o distanciamento entre sujeito e objeto e sua linguagem ideológica derivada, e imprimir uma perspectiva ontológica do ser social<sup>523</sup> (afinada ao trabalho), propôs-se nesta investigação dimensionar os direitos laborais conforme a devida compreensão histórico-sociológica evolutiva, de forma crítico-tutelar, humanista e com enfoque transdisciplinar. Sempre sem desconectar fenômeno da essência, sujeito do objeto, entendendo-se o trabalho como expressão do ser humano com projeção na esfera pública (relações sociais), com o descarte da ficção do objeto trabalho destacado do sujeito (ser humano).

Portanto, obter a efetiva visão humanista e holística (totalidade concreta) do trabalho humano, de enfoque crítico-tutelar e transdisciplinar, exige análise do processo histórico de formação das normas laborais internacionais, de seu movimento entrelaçado com as revoluções burguesas, guerras imperialistas do capital, e suas respectivas ideologias de dominação, que subjuguem reiteradamente a classe despossuída conformando-a em relações assimétricas de poder mascaradas em formas jurídicas privatistas e individualistas (contratos de “compra e venda e locação de escravos”, de “locação de serviços”, de “compra e venda de força de trabalho”, de vinculação a uma “plataforma de serviços”, “gestão por algoritmo” etc.), em perpétua manutenção da exploração da classe despossuída e invisibilização dos Direitos Humanos do Trabalho e da própria condição humana de quem necessita “vender” sua força de trabalho para a subsistência.

---

<sup>520</sup> WITKER (2018: 144).

<sup>521</sup> GADAMER (1999: 462-463).

<sup>522</sup> LUKÁCS (2013: 93-94).

<sup>523</sup> Idem, *ibidem*, p. 355).



Em direção ao objetivo de lograr a efetividade dos direitos sociais e realizar justiça social, proposto como uma das finalidades desta investigação, estabeleceu-se a premissa de trabalho do EDH, desde este marco teórico histórico-evolutivo crítico, transdisciplinar e normativo superior (humanista), como método para alcançar um aporte teórico promotor das mudanças indispensáveis e ora propugnadas à interpretação e aplicação do Direito do Trabalho, desvinculando-o completamente de seu “pecado original”, o “contrato”, e ideologias afins (mercantilismo, contratualismo, desenvolvimento, neoliberalismo).

Ainda, desde o enfoque transdisciplinar aliado à Teoria Crítica, demonstrou-se a conexão de práticas imperialistas e neocolonialistas produtoras de degradação dos direitos da classe trabalhadora, pois a leitura parcial do trabalho humano ou desconexa de outras perspectivas necessárias para a sua compreensão clara e completa não alcançaria a conformidade almejada do Direito do Trabalho com a disciplina dos DDHH para a correta aplicação do Enfoque de Direitos Humanos.

Com esta linha crítico-holística de trabalho, evitou-se o risco do lugar comum do estado da arte da doutrina e jurisprudência atuais, que localizam os Direitos Humanos no Direito do Trabalho (e não o contrário, como deve ser), e ainda “adaptando” à lógica do contratualismo.

Como adverte BAILONE<sup>524</sup>:

*Los derechos fundamentales pueden vulnerarse en forma indirecta a través de la creación de un desaliento a ejercitarlos. Este desaliento generalmente es producto de ciertas políticas públicas que convierten en demasiado oneroso el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido, y que el Estado está obligado a alentar y promover. Muchas veces el desaliento es un efecto provocado por un conjunto indeterminado de factores, que incluyen los miedos normales de la gente a su propio desconocimiento jurídico, al error judicial, a la condena social de determinadas conductas y al mayor o menor compromiso ciudadano de cada uno. (BAILONE, 2010: 531)*

Ou seja, a institucionalidade contratual pode ser vista como vulneração tanto direta como indireta dos Direitos Humanos do Trabalho. Na linha crítica de SUPLOT (2011), apontando os contrastes inerentes ao Direito do Trabalho contratualista, geradores de zonas conceituais de difícil compatibilização, esta vulneração se traduz pela indução ao desconhecimento jurídico da existência de DDHHT (invisibilização), erros de julgamento e menor compromisso cidadão das pessoas quanto ao tema. Por isto, apesar de que, mesmo que a lógica de raciocínio invertida (Direitos Humanos no Direito do Trabalho e não o revés), ainda assim provoque uma melhor interpretação e aplicação do Direito do Trabalho, pelo simples fato de dar um vislumbre de humanidade ao “pacto laboral” ou às “novas” formas de subordinação laboral (“plataformas” e algoritmos), tal perspectiva não possui capacidade para produzir a necessária evolução e eman-

---

<sup>524</sup> BAILONE (2010: 531).

cipação do trabalho humano para o seu lugar na história e na vida em sociedade que merece, e o devido resgate da dignidade e liberdade da classe despossuída.

Como explica SUPLOT<sup>525</sup> sobre a gênese do contrato de trabalho e do Direito do Trabalho, este nasceu para regular o intercâmbio do trabalho por dinheiro – e nesse sentido se desenvolveu e estruturou. Portanto, o ramo acabou incorporando a lógica de mercado, com a naturalização das monetizações das violações aos direitos sociais. AVELÃ NUNES (2015) faz crítica mais forte, entendendo o Direito do Trabalho como instrumento a serviço do capital para dominação e subordinação da classe trabalhadora. Por conseguinte, frise-se, para permitir sua evolução e superação da ótica mercantilista, utilitarista do Direito, a lógica de estudo, investigação, interpretação e aplicação desse ramo deve se dar desde a disciplina dos Direitos Humanos e não o contrário. Somente assim se podem soltar as amarras do contratualismo e de novas ficções da subordinação laboral, como as que chegam pelo capitalismo de plataforma e algoritmos de aplicativos – que tornam a invisibilizar e mercantilizar os Direitos Humanos do Trabalho, e reificar as pessoas -, e buscar e empreender a leitura verdadeiramente humanista e holística das relações laborais. É neste viés que se encontra a aptidão da compreensão humanista do trabalho para trazer equilíbrio às relações entre capital e trabalho, e instituir a prevalência do trabalho humano sobre o capital e a lógica de mercado do capitalismo contemporâneo. Afinal, não se preserva a vida e a liberdade tratando as pessoas e seus corpos como objeto de um contrato disputado na lei da oferta e da procura.

É já passado o tempo de abandonar o contratualismo como lógica econômica para categorias insuscetíveis do processo de apropriação típico da *lex mercatória*, como o trabalho humano. Neste compasso, cita-se a oportuna observação de MAFFESOLI (2010):

Sejamos lúcidos. Ultrapassemos os conformismos do pensamento e as facilidades da *doxa* intelectual. O indivíduo e o individualismo são categorias adequadas, não à pós-modernidade nascente, mas, sim, à modernidade que termina. São mesmo as pedras angulares da construção social que, a partir da filosofia do século XVII, vai reforçar-se no Contrato Social do século XVIII e afirmar-se nos sistemas sociais do século XIX.

Estes são o apogeu da modernidade. Depois, esse indivíduo contratante vai sobreviver, alguns decênios no século XX, para terminar como a pessoa protagonista dos diversos PACTOS (societal, ecológico, afetivo) da pós-modernidade. (MAFFESOLI, 2010: 77)

Pois a única categoria que deve sobreviver, na revisão histórico-sociológico evolutiva do “contrato”, seja ele individual ou social, na pós modernidade, deve ser a de um pacto pela humanidade, para que todas as pessoas que estudam, interpretam e aplicam o Direito do Trabalho se comprometam em superar um modelo jurídico de dominação e transformar o antigo “contrato de trabalho” e o vetusto “Direito Privado do Trabalho” em Direito Humano do Trabalho,

---

<sup>525</sup> SUPLOT (2008: 17-19).

emancipador, plural, coletivo, democratizador, progressista, público, libertador e dignificante das classes despossuídas.

De outra parte, a geopolítica e os processos de exploração e ocupação dos territórios (pessoas e recursos naturais) feitos por grandes potências, desde a modalidade colonizadora até o capitalismo corporativo e globalizado neocolonialista da atualidade, estão diretamente imbricados na precarização das condições sociais da classe trabalhadora. Conforme citado no estudo de geopolítica, GÓES<sup>526</sup> fez dois alertas importantes, no particular: a nova forma pós-moderna de estatalidade desenhada pelos EUA para reconsolidar sua hegemonia mundial, de viés neoliberal (com desprestígio do Estado westfaliano, redução jurídica do Estado e busca pela competitividade internacional); e a conexão do termo globalização à geopolítica estadunidense, como instrumento de disputa global.

Por conseguinte, o Imperialismo, outrora escravista e atualmente precarizante, persiste entretendo avanços sociais ou provocando retrocessos, como os ocorridos na América Latina durante as ditaduras, ou nas atuais reformas sociais precarizantes impostas pelo capitalismo corporativo e financeiro das grandes potências, sobretudo EUA, operando a ideologia da atualidade, o neoliberalismo.

E ao falar de geopolítica, imperialismo e globalização, percebe-se uma conexão direta do trabalho humano ao desenvolvimento, conceito no qual se localiza outra ideologia relacionada ao imperialismo. Cabe reprimir a advertência de AGAMBEN<sup>527</sup> de que o projeto capitalista de eliminar as classes pobres através do desenvolvimento, não só reproduz o povo dos excluídos como também transforma em vida nua todas as populações do terceiro mundo, sendo necessário um novo modelo, no que também coincide SUPLOT (2020):

*En efecto, hay que también tener en cuenta el carácter insostenible del modelo de desarrollo inherente a la globalización. En la perspectiva de una globalización respetuosa de la diversidad de culturas y de entornos naturales, conviene por tanto abrirse a una tercera dimensión de la justicia social: la de la justa división del trabajo que, vinculada a la acción, responde también al desafío provocado por la revolución informática. (SUPLOT, 2020)*

E nessa direção a presente investigação seguiu desmitificando e afastando máscaras jurídicas e ideologias, como a do desenvolvimento/subdesenvolvimento, conectando os males da globalização à precarização laboral e ao neocolonialismo, propondo, em contraponto, uma nova acepção de desenvolvimento inclusiva da seguridade econômica como garantia da efetiva liberdade de trabalho e da dignidade humana, para que a pessoa possa eleger livremente trabalho, ao invés de entregar sua força ao leilão do “mercado”, que sempre oferta preço vil e as piores condições. E neste sentido, frise-se, o Direito Humano ao desenvolvimento assentado na seguridade econômica configura-se como instrumento

---

<sup>526</sup> GÓES (2020: 513-515).

<sup>527</sup> AGAMBEN (2002: 186).

de resistência ao neocolonialismo contemporâneo e à globalização precarizadora – sendo oportuno recordar a confissão de Greenspan<sup>528</sup> de que a insegurança no trabalho é uma força poderosa para a “economia”.

Na sequência, após a abordagem da relação entre geopolítica, economia política e seus efeitos no Direito do Trabalho, da desconstituição do mito do “contrato de trabalho” e das ideologias mercantilista, contratualista, utilitarista, do desenvolvimento e neoliberalismo, e suas formas de subjetivação da classe trabalhadora, também se descreveu o campo conflitivo contemporâneo de operação do EDH, diante do totalitarismo tecnofinanceiro e seu impacto no Estado de Direito, na democracia e na ordem jurídica, com perversas tendências atuais de degradação e eliminação de direitos econômicos e sociais, que vêm sendo denominadas Geodireito, Direito do Trabalho do Inimigo, Necropolíticas laborais, Necrodireito do Trabalho etc.

Na sequência, primeiramente, estruturou-se o EDH de forma geral na interpretação e aplicação do Direito, uma vez que a teoria é compatível especialmente com ramos tutelares ou sempre que estiver presente um Direito Humano numa relação jurídica, não se constituindo a possibilidade de seu acoplamento ao Direito do Trabalho como exclusiva, e nem excludente de outras questões distintas das relações de trabalho, já que o EDH pode ser utilizado para as mais diversas situações da vida em que se apresente uma relação assimétrica de poder e a necessidade de tutela de DDHH.

Como exposto, a base ontológica do EDH é o Estado Democrático de Direito e a justiça social, e sua aplicação à hermenêutica jurídica tem objetivos de controle de legitimação popular e humana na interpretação e aplicação do Direito; correção de desigualdades; efetividade dos Direitos Humanos; produção de justiça social; tutela da vida e do bem-estar universal.

Passando ao direcionamento do EDH ao Direito do Trabalho, a investigação procurou demonstrar o potencial libertário e emancipador que a doutrina do Enfoque de Direitos Humanos pode trazer às relações laborais, prestigiando e efetivamente centrando a construção jurídica nas pessoas, para a consecução da paz e da justiça social propagadas pela Constituição da OIT desde 1919. Uma mirada para a emancipação e empoderamento da classe trabalhadora, em busca de efetivação de seus DDHHT, e para que quem trabalha receba tratamento de ser humano na relação laboral, e não como um bem de consumo, objeto ou coisa que se compra e se descarta. Seres que trabalham não são seres sobranes, são pessoas que estruturam a vida humana naquilo que possui de mais digno, o trabalho como expressão da personalidade nas relações sociais em busca de desenvolvimento material, espiritual e coletivo (e não só para sobrevivência), razão pela qual a própria democracia e a cidadania se assentam na dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho.

---

<sup>528</sup> Fonte: publicação do jornal *The New York Times*, de 27.02.1997, intitulada *Job Insecurity of Workers Is a Big Factor in Fed Policy*, pelo repórter Louis Uchitelle. Recuperado de <https://www.nytimes.com/1997/02/27/business/job-insecurity-of-workers-is-a-big-factor-in-fed-policy.html>.

De modo que, desde a Teoria Crítica dos Direitos Humanos e com perspectiva dedicada através do EDH, a análise histórico-evolutiva humanista, de caráter crítico-tutelar e transdisciplinar das relações de trabalho pode superar não apenas as injustiças que o contratualismo laboral vigente provoca, como também impedir novas formas de opressão do capital sobre as pessoas despossuídas. É mais: não importa a roupagem jurídica que seja criada pelas leis advindas do “darwinismo normativo” (SUPIOT, 2010), a localização do trabalho humano como um valor universal supremo, sua reafirmação teórico-prática de posicionamento taxonômico como um Direito Humano que demanda enfoque como tal e interpretação e aplicação centrada nas pessoas, possui aptidão para desvendar relações ocultas de assimetrias de poder e desigualdade e corrigir injustiças.

No embasamento da aplicação da teoria do EDH ao Direito do Trabalho, evidenciou-se a íntima e inafastável conexão dos Direitos Humanos do Trabalho com o Estado Democrático de Direito, cujo respeito é indispensável para alcançar a paz e a justiça social. E trabalhando a fundamentalidade superior dos Direitos Humanos do Trabalho, com base em FERRAJOLI, TERRADILLOS BÁSCOCO e, principalmente, SUPIOT, revelou-se que a dignidade humana, na acepção proposta na Declaração de Filadélfia, complementada na Carta Constitutiva da ONU e na Declaração Universal de Direitos Humanos, é o elemento central desta alta fundamentalidade. Na verdade, a atual evolução da organização social e política não comporta modelo de Estado dela desvinculado, pois desnaturaria a própria condição de Estado de Direito, inviabilizando a democracia. Com efeito, no capitalismo corporativo globalizado e financeiro os lucros já independem do aumento de oferta de trabalho, logo, em tais condições, o trabalho se transforma no eixo central de preservação da dignidade humana, o limite entre civilização e barbárie.

Constitui-se, desta forma, o Enfoque de Direitos Humanos como fruto de um Estado Social, Democrático e Humano de Direito, cujo emprego na hermenêutica jurídica tem potência para transformar relações assimétricas de poder em realidades de justiça social, centralizando a interpretação e aplicação do Direito nas pessoas. Se até este momento o Direito serviu para acomodar relações de poder e dominação das elites, classes abastadas, corporações e poder econômico de forma geral, através do contrato e outras formas jurídicas impróprias (e constituídas ideologicamente, para dar ares de legitimidade à opressão econômica), o EDH surge como instrumento de inversão dessa lógica na regulação das relações humanas, com o fim de emancipação social e empoderamento das classes despossuídas ou vulneráveis e relegitimação das normas desde sua interpretação e aplicação centralizada nas pessoas.

O EDH aporta ao Direito do Trabalho novos princípios derivados dos Direitos Humanos, de progressividade, supremacia dos DDHH sobre o poder econômico, o *in dubio pro homine*, integralidade, interdependência, indivisibilidade, universalidade, equidade e a submissão da propriedade e da ordem econômica à ordem social e ao valor social do trabalho. Representa um novo

marco de valoração das relações de trabalho conforme a sua gênese humana, e não de mercado e nem de contrato.

Logo, a aplicação do EDH ao Direito do Trabalho possui efeito revitalizador e requalificador deste ramo das ciências jurídicas, recapacitando-o para superar injustiças ou ilegitimidades contidas nas normas laborais, acoplando-se naturalmente à dimensão jurídica das relações de trabalho, observadas desde a ótica dos Direitos Humanos, pois, considerando a universalidade dos DDHH, a doutrina de EDH aplicada nas relações de trabalho acompanha a categoria principal: aonde houver uma relação laboral, existirão os DDHHT e a necessidade de seu enfoque para valorização das pessoas e correção das desigualdades inerentes às relações assimétricas de poder.

A não mudança, a permanência do sistema atual em franco retrocesso (normativo, interpretativo), de forma completamente dominada pelo capital (totalitarismo econômico ou tecno-financeiro), poderá causar graves consequências para a humanidade. Comentando as saídas para o dilema, PISTOR (2019)<sup>529</sup> explana:

*Codifying new rights in law may be another path out of the dilemma we currently face, caught between capital holders that claim the law for themselves and a democratic public that is desperately trying to regain control over its own destiny by electing whoever promises to do so.*

...

*The only other trajectories are a violent disruption of the current order, that is, a true revolution, or, short of it, the further erosion of law's legitimacy as a means of social ordering. (...) The second trajectory may, sadly, already be under way, as illustrated by the rampant attacks on independent judiciaries and the free press, not only in relatively young democracies, such as Poland or Hungary, but in countries with a long tradition of democracy and the rule of law, such the United Kingdom and the United States. If these trends continue, naked power will once*

---

<sup>529</sup> Tradução livre:

Codificar novos direitos na lei pode ser outro caminho para sair do dilema que enfrentamos atualmente, presos entre detentores de capital que reivindicam a lei para si e um público democrático que está tentando desesperadamente recuperar o controle sobre seu próprio destino, elegendo quem promete fazer isso.

...

As únicas outras trajetórias são uma ruptura violenta da corrente ordem, quer dizer, uma verdadeira revolução, ou, na falta dela, a maior erosão da legitimidade do direito como meio de ordenamento social. (...) A segunda trajetória pode, lamentavelmente, já estar em marcha, como ilustrado pelos ataques desenfreios contra os poderes judiciais independentes e à imprensa livre, não só em democracias relativamente jovens, como Polônia ou Hungria, mas em países com uma larga tradição de democracia e estado de direito, como Reino Unido e os Estados Unidos. Se estas tendências continuarem, o poder desnudo voltará a dominar outra vez sobre a ordem jurídica, como já o fez durante a maior parte da história humana, e todos nós estaremos piores por isso.



*more gain sway over legal ordering, as it has done over most of human history — and we will all be worse off for it.* (PISTOR, 2019: 233-234)

Portanto, com base na experiência histórica de conflitos bélicos ocorridos nos últimos séculos, e consoante apontamentos doutrinários citados ao longo deste trabalho, reforçados pelo conteúdo de documentos internacionais reiterativos (Constituição da OIT, Declaração de Filadélfia, Constituição da ONU, Declaração do Centenário da OIT), a permanência da degradação, invisibilização e normalização da violação de Direitos Humanos do Trabalho constitui grave risco à democracia e à paz mundial.

Nesta investigação, propõe-se uma quarta via às citadas por PISTOR, como necessidade de primeira ordem: relegitimar o ordenamento jurídico, em especial o laboral, que tutela a maioria da população (despossuída ou de pequenas posses), com uma visão histórico-evolutiva crítico-tutelar e humanista, de caráter transdisciplinar, empregando o EDH como instrumento de direcionamento das normas à ampla proteção social e empoderamento da classe trabalhadora, em busca de um mundo mais justo, sem dominantes e dominados.

O EDH faz preponderar a lei do mais débil sobre a lei do mais forte, representando, no Direito Humano do Trabalho, a prevalência efetiva do Direito do Trabalho sobre o direito da propriedade. Recordando a referência de ARENDT<sup>530</sup> à Grécia Antiga, mencionada no início desta investigação, e a interessante compreensão do político como liberdade entendida em seu sentido negativo de não ser dominado e não dominar, e de forma positiva como espaço de mobilidade entre iguais, não há democracia se o capital domina o trabalho e as pessoas que trabalham, já que esta relação de dominação inviabiliza a condição política da classe trabalhadora (a *nautonomia* de Held<sup>531</sup>). Urgem instrumentos que equilibrem esta relação, apresentando-se o EDH na hermenêutica jurídico-laboral como elemento central para reverter o processo contemporâneo de degradação da condição social das pessoas despossuídas e para sua inadiável emancipação e empoderamento. Pois como assevera FERRAJOLI, da observância de Direitos Humanos nasce a igualdade, sendo esta a chave de requalificação do Direito do Trabalho.

A falta de equilíbrio nas relações entre capital e trabalho, como se percebe em milênios de história da humanidade, se persistir, seguirá gerando conflitos e disputas por territórios para exploração de pessoas e recursos naturais pelos detentores do poder econômico. Essa é a lição registrada na Constituição da OIT, em 1919, e reafirmada na Declaração de Filadélfia e na Constituição da ONU, na mensagem de que a paz repousa sobre a justiça social. Como corolário lógico, o futuro das próximas gerações depende da efetivação da justiça social e da concretização da dignidade humana nas relações de trabalho.

Destaque-se as significativas diferenças entre a hermenêutica tradicional e a proposta neste trabalho, sendo a primeira estática, contratualista, utilitarista,

---

<sup>530</sup> ARENDT (2017: 69-70).

<sup>531</sup> Apud ARZATE-MARÍNEZ (2018: 99).

negocial, obrigacional, limitadora, preponderantemente privada, patrimonialista, conformando-se como justiça de mercado produtora de desigualdade social. Em contrapartida, a hermenêutica jurídica com EDH, se apresenta dinâmica, humanista, universal, ampla, igualitária, democrática, crítica, progressista, legítima e busca concretizar a dignidade humana para realizar justiça social.

Uma vez que a hermenêutica jurídica laboral tradicional interpreta e aplica o Direito positivo segundo as regras do “contrato de trabalho” e se presta à justiça de mercado, não é apta a distribuir justiça social e concretizar dignidade humana nas relações de trabalho, logo, não cumpre a finalidade do Estado Democrático de Direito (não se legitima).

Esta função deve ser cumprida através de uma nova hermenêutica, a crítico-tutelar humanista, transdisciplinar, com Enfoque de Direitos Humanos, centralizando o resultado no ser humano para produzir justiça social e a tutela da vida em todas as suas dimensões e formas, concretizando a dignidade humana. Nesta direção, o EDH aplicado à hermenêutica juslaboral assume natureza tríplice, pois na mesma medida em que prestigiava o trabalho como bem jurídico superior da humanidade, não comercializável nem contratualizável, da mesma forma permite tornar mais concretos os Direitos Humanos, apropriando-se dos ordenamentos laborais, revistos e revisitados com nova principiologia emancipadora, e empodera a classe trabalhadora. Com isto, desempenha o papel de efetivar os direitos econômicos e sociais como esteio dos demais Direitos Humanos, e a finalidade de tornar a vida das pessoas despossuídas uma vida digna de viver, ressignificando e impondo o trabalho no lugar que lhe compete, como um valor superior ao do capital ou propriedade.

Investigar é permitir-se descobrir o novo, reinventar, liberar-se de preconceitos e erros e admitir a realidade da vida, com a sua beleza e suas mazelas. A elaboração deste trabalho ao longo de três anos, desde o início do curso de Doutorado em Ciências Jurídicas na UMSA, em 2017, foi ganhando maturidade sobre as constantes e profundas reflexões que o tema provoca, até as presentes conclusões. É difícil contrapor-se à hegemonia, mas sobre a realidade dos fatos, investigada com rigor científico, é necessário revelar o oculto.

A importância da investigação se projeta para o futuro, ao reconectar o Direito à economia humana (a que garante segurança econômica e dignidade humana, posta a serviço das pessoas e não o contrário, abandonando a lógica utilitarista e de acumulação incessante de capital), evitando consequências sociais nefastas no âmbito da nova fase de Revolução Industrial (a infodigital ou tecno-informática) que ocorre em meio a uma globalização imperialista que dá asas ao capital mas confina as pessoas em espaços de super exploração.

KLEIN (2020), falando sobre a pandemia COVID-19 e o futuro, alerta:

*It's a future in which our homes are never again exclusively personal spaces but are also, via high-speed digital connectivity, our schools, our doctor's offices, our gyms, and, if determined by the state, our jails. Of course, for many of us, those same homes were already turning into our never-off workplaces and our primary entertainment venues before*

*the pandemic, and surveillance incarceration “in the community” was already booming. But in the future under hasty construction, all of these trends are poised for a warp-speed acceleration.*

*This is a future in which, for the privileged, almost everything is home delivered, either virtually via streaming and cloud technology, or physically via driverless vehicle or drone, then screen “shared” on a mediated platform. It’s a future that employs far fewer teachers, doctors, and drivers. It accepts no cash or credit cards (under guise of virus control) and has skeletal mass transit and far less live art. It’s a future that claims to be run on “artificial intelligence” but is actually held together by tens of millions of anonymous workers tucked away in warehouses, data centers, content moderation mills, electronic sweatshops, lithium mines, industrial farms, meat-processing plants, and prisons, where they are left unprotected from disease and hyperexploitation. It’s a future in which our every move, our every word, our every relationship is trackable, traceable, and data-mineable by unprecedented collaborations between government and tech giants.<sup>532</sup> (KLEIN, 2020)*

E desde outra perspectiva também adverte WOOD<sup>533</sup> que, no contexto de um sistema de concorrência internacional, o imperativo dominante é o da maximização do benefício, significando que a natureza e a escala de produção não são determinadas pelas necessidades humanas, responsabilidade social ou os

---

<sup>532</sup> Tradução:

É um futuro em que nossas casas nunca mais serão espaços exclusivamente pessoais, mas também, por meio da conectividade digital de alta velocidade, nossas escolas, nossos consultórios médicos, nossas academias e, se determinado pelo estado, nossas prisões. É claro que, para muitos de nós, essas mesmas casas já estavam se transformando em nossos locais de trabalho intermináveis e nossos principais locais de entretenimento antes da pandemia, e o encarceramento de vigilância “na comunidade” já estava crescendo. Mas, no futuro em construção apressada, todas essas tendências estão preparadas para uma aceleração em velocidade *warp*.

Este é um futuro no qual, para os privilegiados, quase tudo é entregue em casa, seja virtualmente por *streaming* e tecnologia de nuvem, ou fisicamente por veículo sem motorista ou drone, enquanto a tela é “compartilhada” em uma plataforma mediada. É um futuro que emprega muito menos professores, médicos e motoristas. Ele não aceita dinheiro ou cartões de crédito (sob o pretexto de controle de vírus) e tem transporte massivo esquelético e muito menos arte ao vivo. É um futuro que afirma ser executado com base na “inteligência artificial”, mas na verdade é mantido por dezenas de milhões de trabalhadores anônimos escondidos em depósitos, centros de dados, fábricas de moderação de conteúdo, fábricas exploradoras de eletrônicos, minas de lítio, fazendas industriais, fábricas de processamento de carne e prisões, onde ficam desprotegidos de doenças e hiperexploração. É um futuro no qual cada movimento nosso, cada palavra nossa, cada relacionamento nosso é rastreável, traçável e explorável por meio de colaborações sem precedentes entre o governo e gigantes da tecnologia.

<sup>533</sup> WOOD (2018: 198).

requerimentos do Estado, mas pela contribuição direta à produção e reprodução dos capitais individuais. Nestas condições, segundo a autora, a produção adota formas socialmente dilapidatórias ou ecologicamente destrutivas, fazendo com que uma imensa e eficiente capacidade produtiva coexista com uma pobreza massiva, ruína urbana, escassez de moradia, saúde e educação, podendo o capital destruir a produção doméstica para investir em mão-de-obra mais barata em outros lugares, ou até mesmo abandonar totalmente a produção industrial em favor de investimentos mais rentáveis.

Como afirmou BECK<sup>534</sup>, “o capitalismo destrói o trabalho”, no sentido de que o desemprego afeta potencialmente a toda a sociedade e a própria democracia, assim, o capitalismo global, ao declarar-se isento de responsabilidade diante do emprego e da democracia, está comprometendo a sua própria legitimidade<sup>535</sup>.

Portanto, em um mundo globalizado e pós-moderno em espiral de aceleração dos processos de aproximação e conflitividade humana, e, por conseguinte, da história, em que o capital se volatiliza rapidamente enquanto o trabalho digno desaparece em formas opressoras de organização derivadas de novas tecnologias, com sucessivas crises cada vez mais precarizantes das classes despossuídas, a vida não pode continuar permeável à degradação humana e planetária em nome do lucro, do benefício, da vantagem, do rentismo e do parasitismo financeiro.

Nos objetivos neoliberais pretende-se globalizar tudo, o capital, os lucros, a ganância, a defraudação fiscal, a exploração, o individualismo, menos o efetivo desenvolvimento humano, o que demanda a imediata rejeição dessa ideologia e suas vertentes afins, como o utilitarismo ou a análise econômica do Direito, em prol da adoção de outras formas políticas, econômicas e jurídicas que tenham primado humanista, evitando-se que o progresso seletivo de poucos signifique retrocesso social de muitos, nos moldes em que atualmente concebido pela visão hegemônica que potências imperialistas e suas corporações e bancos impõem.

A atualidade da aplicação do EDH à hermenêutica jurídica, desse modo, se faz presente para um contraponto fundamental ao sistema assim constituído, desnudando relações assimétricas de poder e corrigindo desigualdades, desde a lógica dos Direitos Humanos e de suas dinâmicas nos processos históricos de lutas sociais. E seu acoplamento à hermenêutica juslaboral tem o significado de emancipação social da classe despossuída, visibilizando e prestigiando Direitos Humanos propositalmente esquecidos ou menosprezados ao longo da história.

Trabalhar é inerente à condição humana. Não trabalhar é o privilégio constituído historicamente pelas elites e pelo poder econômico, oprimindo o povo despossuído, a cada momento secular inventando um novo artifício de dominação, até chegar ao ápice da atualidade, o capital financeiro e o rentismo na

---

<sup>534</sup> BECK (1998: 92). Obs: traduzido.

<sup>535</sup> Idem, *ibidem*, pp. 92-93.

lógica utilitarista de mercado, uma maneira de transformar a vida em números e obrigar que muitas pessoas trabalhem em favor de poucas, mediante o artifício do “contrato de trabalho”, a forma jurídica do privilégio de classe do capital. E na pós-modernidade, adotam-se formas jurídicas ainda mais agressivas, seja acentuando a autonomia da vontade no âmbito do contrato (princípio da vassalagem ou feudalização do contrato, segundo SUPLOT – desfundamentalização, desregulamentação dos DDHHT), seja pela tentativa de quebrar o paradigma de vínculo entre empresa e quem trabalha, deslocando as pessoas para um espaço anômico, no chamado capitalismo de plataforma e da lógica algorítmica tecnototalitária.

Neste norte, as novas organizações de trabalho pós-modernas se estruturaram no modelo *darwiniano*, gerador do precariado, massa informe, despida de identidade e solidariedade, marcada pela insegurança e pelo dissabor existencial de uma vida sem esperança e sem capacidade de reação, subjetivada para o rendimento, para o privado e o individualismo, e esmagada pela opressão econômica neoliberal em condições que a inabilitam para o associativismo sindical emancipador, e a afastam do coletivo e do público.

A Revolução Francesa marcou a história da humanidade na luta contra o privilégio e o poder absoluto. No Século XXI, outra revolução é necessária: impor limites, domesticar o poder econômico que se torna cada vez mais selvagem e voraz, consumindo vidas humanas e o meio ambiente, para terminar com os privilégios dos detentores do capital que exploram o povo através do rentismo<sup>536</sup>. E rentismo significa capital improdutivo, ilegítimo, que não cumpre sua função social, gerador de profundas chagas sociais pela ganância e cupidez sem limites do capital financeiro e especulativo. DOWBOR (2020) esclarece o cenário de operação do capital improdutivo:

O grande aporte de Thomas Piketty foi de deixar absolutamente claro o fato de que o sistema assumiu características de autorreprodução, pois as aplicações financeiras rendem mais do que os investimentos na economia real. As aplicações renderam, em média, considerando as últimas décadas, entre 7% e 9% ao ano. O PIB mundial cresce, em média,

---

<sup>536</sup> De fato, como demonstra WOOD (2018: 141), a cultura rentista, atavicamente ligada à burguesia, permaneceu até os dias atuais:

*El absolutismo real mantuvo algo similar a esta cultura rentista, simplemente reemplazando, o incrementando, el viejo patriciado urbano por una nobleza radicada en la corte y por cuerpos de funcionarios. La «burguesía» del viejo régimen francés estaba, después de todo, definida por su estatus de honorabilidad, por su diferenciación de los miembros inferiores del Tercer Estado quienes estaban obligados a ensuciarse las manos con el trabajo físico. La típica ocupación burguesa no era la industria, ni siquiera el comercio y la venta, sino la carrera de notable, un profesional, un funcionario, un rentista. Ni siquiera el desarrollo industrial de los Estados postabsolutistas, motivado por las presiones militares y geopolíticas además de por la competencia económica de otros lugares, erradicó esta clásica mentalidad burguesa.*

entre 2% e 2,5%. O grosso da população mundial não faz aplicações financeiras, gasta o que ganha ou até mais do que ganha, endivida-se e paga juros. Os que auferem rendimentos de aplicações financeiras constituem a nata econômica da sociedade. São pessoas que pouco ou nada produzem, mas possuem “papéis”, como ações, títulos de dívida pública e outras formas imateriais de riqueza, que passam a constituir o que temos chamado de “rendimentos não produtivos” ou “renta” (em inglês, “unearned income”, ou “rent”, diferente de “income”; em francês, “rente”, diferente de “revenu”, que é renda originada em processos produtivos). (DOWBOR, 2020)

Afinal, o que vem primeiro, o trabalho ou a propriedade, enquanto valores de uma sociedade verdadeiramente democrática, justa e solidária? A resposta que se pode encontrar no bojo desta investigação é a de que a propriedade é fruto do trabalho e não o contrário, e que o direito de propriedade só pode ser legitimado através do trabalho. O valor social do trabalho dimensiona e condiciona a função social da propriedade, sem o primeiro, a propriedade não se legitima. Portanto, o trabalho está acima da propriedade como bem jurídico e bem universal. Como diz FERRAJOLI (2010), a propriedade não é absoluta nem universal, diferentemente do trabalho humano.

Por isto mesmo, o desempenho de atividade econômica com o uso de trabalho alheio só se legitima se houver equilíbrio e compartilhamento dos lucros e da gestão dos meios de produção, forma de democratização do capital e das relações de trabalho prevista desde a Declaração de Filadélfia (e reproduzida nas Constituições de Argentina, Espanha, Portugal e Brasil) mas cronicamente sofismada pela incompatibilidade da moldura jurídica aplicada, que permite o exercício desmedido do poder por quem tem capital, alijando a classe trabalhadora do processo de tomada de decisões do empreendimento, da divisão justa do resultado, e da posse dos meios de produção. Em outras palavras, a função social da propriedade está ontologicamente vinculada à geração e manutenção de trabalho digno e decente, com responsabilidade público-social e de forma democrática, a repelir arroubos autoritários do poder econômico. Da mesma forma, a dimensão do valor social do trabalho, ontologicamente vinculado à dignidade humana, implica considerar que são Direitos Humanos do Trabalho não só os que estão previstos nos tratados e documentos internacionais, mas também todos os direitos trabalhistas positivados nos ordenamentos jurídicos e aqueles que nascem das relações de trabalho, correspondentes à incorporação progressiva dos processos de luta e de seus resultados na construção jurídica do Direito Humano do Trabalho<sup>537</sup>, como decorrência lógica da aplicação do princípio de progressividade, desde a teoria crítica dos DDHH.

Em síntese, o valor social do trabalho é condicionante da função social da propriedade e, por conseguinte, de sua legitimidade, que se verifica através do

---

<sup>537</sup> Do contrário se voltaria para a armadilha ideológica do contrato, com alguns Direitos Humanos do Trabalho reconhecidos e outros direitos “negociáveis”, “comercializáveis”, “privatizados” – ou seja, direitos menores ou não-direitos.



cumprimento desta função social<sup>538</sup>, atrelada ao respeito à dignidade humana em toda a sua dimensão e desdobramentos nas relações de trabalho.

Para recordar o que está em jogo, a deterioração acentuada das classes despossuídas possibilitou a ascensão do nazismo e do direito de sua época (o jusnazismo), constituindo o exemplo chocante da banalidade do mal e da opressão geradas por uma disputa capitalista e neocolonialista entre grandes potências industrializadas, cujos extremos levaram ao massacre e morte de 60 milhões de pessoas. As armas de destruição em massa que se construíram desde então, na corrida armamentista entre grandes potências do pós-guerra, hoje são capazes de destruir o planeta e não deixam mais margem para repetição de erros do passado que motivem novos conflitos globais. Não deve ser olvidado que a disputa entre capital e trabalho sempre esteve de pano de fundo, fazendo com que o medo da perda dos meios de produção e do poder estatal pelo poder econômico, diante da revolução russa de 1917 – o temor que motivou a criação da OIT em 1919 -, também motivasse o que SUPLOT (2010) chamou de “espírito de Filadélfia”, no final da segunda grande guerra, em 1944. Sem este espírito versado na Declaração de Filadélfia, não teria sido possível a construção dos Estados de Bem-Estar Social, desde a fundamentalização dos direitos econômicos e sociais, entregando relativa qualidade de vida à classe despossuída, e que agora se torna inexistente na estatalidade minimalista neoliberal pós moderna, que justamente tenta desfundamentalizar os DDHHT.

Vale transcrever as observações de RODOTÁ (2014) sobre o período imediato ao pós-segunda Guerra:

*Volvamos a los años que siguieron a aquellos dramáticos de la segunda guerra mundial. En un tiempo ciertamente constituyente, hay dos constituciones, la italiana de 1948 y la alemana de 1949, que no se basan en el modelo fundado en el código de la libertad y de la igualdad que había acompañado el constitucionalismo moderno hasta Weimar y que había sido reconfirmado por la Constitución francesa de 1946. Dignidad y trabajo son ahora los dos puntos clave; no es que cancelen los fundamentos de la libertad y de la igualdad sino que renuevan y refuerzan su sentido situándolos en un contexto en el que asume importancia capital la condición real de la persona, por aquello que la caracteriza en lo más profundo, la dignidad, y por aquello que la sitúa en la dimensión de las relaciones sociales, el trabajo. El sujeto abstracto se hace carne en la persona concreta. Y aquí se manifiesta una nueva antropología que hallará después múltiples expresiones, especialmente en la nueva temperie cultural e institucional marcada por la tecnociencia. (RODOTÁ, 2014: 174)*

---

<sup>538</sup> Exatamente por isso a Constituição brasileira (art. 243) prevê a expropriação de propriedades urbanas e rurais e de quaisquer bens de valor econômico usados para exploração de trabalho em condições análogas à escravidão, deslegitimando o direito daquele que atuar nesse sentido, que fica sujeito, ainda, às penas da lei (crime de exploração de pessoas em condição análoga à escravidão, capitulado no art. 149 do Código Penal).

Assim, o Direito do Trabalho deve cumprir seu papel distributivo de justiça social e realizador de dignidade humana, evitando a repetição da história e novos conflitos e desastres humanos. Não é outra a razão da Declaração do Centenário da OIT, de 2019, ao promover a centralidade do trabalho no ser humano. Destarte, fazer da visão humanista acompanhada do EDH o *leitmotiv* (motivo condutor) do novo *zeitgeist* (espírito do tempo) que se espera no terceiro milênio, implica incompatibilizar modelos opressores do passado com a urgente necessidade de implantação de justiça social, já atrasada há alguns séculos. É neste sentido que os Direitos Humanos constituem o novo *lebensraum* (espaço vital) do Direito do Trabalho, ou melhor, o espaço da vida da classe despossuída, no qual esta se identifica com os processos históricos de lutas sociais que permearam as conquistas de marcos jurídicos indispensáveis à vida digna, se apropria e faz valer os seus direitos sem a moldura contratual que agride a soberania indispensável à prevalência do trabalho sobre a propriedade.

Pensando no futuro, PACKER–BALAN (2020) apresentam o EDH como uma necessidade mundial pós pandemia:

*El EBDH no crea “nuevos” derechos humanos, no requiere de la adopción de nuevos instrumentos ni de dinero extra. Tampoco pretende ser una panacea. Más bien, se trata de infundir pleno significado y más vida a los viejos y universalmente adoptados estándares de derechos humanos y a sus promesas, trayéndolos desde los márgenes de debates especializados o slogans populares hasta la maquinaria central de toma de decisiones y gestión gubernamental global, nacional y local.*

*El EBDH genuino, con todos sus elementos clave: objetivos de derechos humanos, acción prioritaria en los vulnerables para “no dejar a nadie atrás”, agencia en manos de los mismos titulares de derechos (“Nada sobre nosotros, sin nosotros”), debe adoptarse en todos los niveles del gobierno. Esto implica nuevos mecanismos de toma de decisiones inclusivas y participativas, de conducta y responsabilidad, con cambios en las actitudes y en el liderazgo responsable. Conlleva un enfoque global del sistema, más que una etiqueta de “derechos humanos” o incluso de “incorporación de derechos humanos”. El EBDH no se trata de hacer de los derechos humanos un elemento o una dimensión más de los procesos dominantes; se trata de convertirlos en el marco fundamental y en la base de todo proceso de organización y desarrollo socio-político.*

*El EBDH puede salvar vidas, mejorar el bienestar y contribuir a la paz y al desarrollo sostenible. Adoptado con determinación y aplicado sistemáticamente, el EBDH ayudará a cada sociedad, estado y comunidad internacional a “reconstruir de una mejor manera”. Su aplicación está en mora. (PACKER–BALAN, 2020)*

A assertiva dos autores citados coincide a todo o exposto no desenvolvimento desta investigação, propondo-se a aplicação do EDH à hermenêutica juslaboral como instrumento para promover as mudanças necessárias no Direito do Trabalho para que, finalmente, as pessoas despossuídas sejam tratadas como seres humanos nas relações de trabalho, e não como mercadorias, tor-

nando efetiva a prevalência do trabalho sobre o capital. Com a centralidade do Direito do trabalho nas pessoas promove-se a alteração da lógica econômica atual, redimensionando o desenvolvimento consoante a dignidade humana e a justiça social.

Consoante explanou HOBBSAWM<sup>539</sup>, “conceitos, tais como o direito de viver uma vida decente, somente podem se tornar operacionais numa sociedade construída de forma a torná-los possíveis”, portanto, constitui-se o EDH aplicado à hermenêutica juslaboral como ferramenta para este desiderato, para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa, solidária, plural, multicultural, emancipadora da classe despossuída, e imune a métodos de dominação do passado, presente ou futuro.

---

<sup>539</sup> HOBBSAWM (2000: 435).

## VII – Bibliografia

### VII.1 Referentes:

- Abellán, J. C. (2002). *El desarrollo moderno. la consagración de una idea*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide.
- Abellán, J. C. (2002). *El modelo hegemónico de desarrollo, definición y orígenes*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide.
- Abellán, J. C. (2002). *Orígenes del proceso moderno de desarrollo*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide.
- Abellán, J. C. (2002). *¿Qué Desarrollo? Introducción*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide.
- Abramovich, V. (2006). Una Aproximación al Enfoque de Derechos en las Estrategias y Políticas de Desarrollo de América Latina. Em *Revista CEPAL*, (nº. 88), abr., pp. 35-50.
- Abramovich, V., Pautassi, L. C. (2006). *Dilemas actuales en la resolución de la pobreza. El aporte del enfoque de derechos*. Buenos Aires: UNESCO, Secretaría de Derechos Humanos y Universidad Nacional Tres de Febrero.
- Agamben, G. (2015). *Meios sem fim: notas sobre a política*. Belo Horizonte: Autêntica Editora.
- Alston, P. (2017). Direitos humanos sob ataque: como reagir à ameaça populista que os direitos humanos enfrentam. Em *SUR Revista Internacional de Direitos Humanos*, São Paulo: Conectas Direitos Humanos, v.14 (nº. 25), pp. 267-273.
- Arendt, H. (2017). *¿Qué es política? 4ª. reimp.* Buenos Aires: Paidós.
- Arzate, E. U., Martínez, A. F. (2018). El Estado en crisis y la volatilidad de los Derechos Humanos: estudio sobre una debacle anunciada. Em Sánchez Vázquez, R. (Coord.) *Derechos Humanos, Seguridad Humana, Igualdad y Equidad de Género*. 2018. México: CNDH, pp. 97-123.
- Avelãs Nunes, A. J. (2015). A “Europa como ela é”: matriz constitucional, problemas estruturais. Em *Quaestio Iuris*, Rio de Janeiro, vol. 01, (nº 01), pp. 516-670.
- Bailone, M. (2011). El bien vivir: una cosmovisión de los pueblos originarios andino-amazónicos. Em Zaffaroni, E. R. *La pachamama y el humano*. 2011. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.
- Bailone, M. (2010). El antiterrorismo como paradigma de desaliento de la participación ciudadana. Em Díez-Picazo, L. M., Martín, A. N. *Los Derechos Fundamentales en el Derecho Penal Europeo*. 2010. Navarro: Civitas-Thomson Reuters, pp. 529-546.
- Bauman, Z. (2014). *¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? 2014*. Buenos Aires: Paidós.
- Bauman, Z. (2011). *En busca de la política. 5ª. reimp.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Bauman, Z. (1999). *La globalización: consecuencias humanas*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

- Beck, U. (1998). *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Bourdieu, P. (1998). *Contrafuego: Tácticas para enfrentar a invasão neoliberal*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Bueno, N. (2018). Del derecho al trabajo a la libertad frente al trabajo: introducción a la economía humana. Em Namora, N. C., et al. (Edits.). *The balance between worker protection and employer powers: insights from around the world*. 2018. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 167-200.
- Casara, R. R. (2018). *El estado post-democrático. Neoliberalismo y gestión de los indeseables*. Valencia: Tirant lo Blanch Alternativa.
- Cunill Grau, N. (2010). Las Políticas con enfoque de derechos y su incidencia en la institucionalidad pública. En *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (nº. 46), fev., pp. 41-72.
- D'Ambroso, M. J. F. (2019). *Direitos Humanos e Direito do Trabalho: uma conexão para a dignidade*. Belo Horizonte: RTM.
- Debord, G. (2003). *A sociedade do espetáculo*. São Paulo: eBookLibris.
- Defensor del Pueblo (España). (2012). *La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles*. Madrid: Defensor del Pueblo.
- Deleuze, G. (2017). *Derrames II: aparatos de Estado y axiomática capitalista*. Buenos Aires: Cactus.
- Deleuze, G. (2006). Post-scriptum sobre las sociedades de control. Em *Polis Revista Latinoamericana*, Santiago: CEDER, (nº13). [em linha]. Recuperado de <http://journals.openedition.org/polis/5509>
- Deleuze, G.; Foucault, M.; Negri, A.; Zizek, S.; Agamben, G. (2007). *Ensaio sobre biopolítica. Excesos de vida*. Buenos Aires: Paidós.
- Dussel, E. (2013). *16 Tesis de Economía Política. Una Filosofía Política de la Economía*. Buenos Aires: Docencia.
- Engels, F. (2010). *A situação da classe trabalhadora na Inglaterra*. São Paulo: Boitempo.
- Fariñas Dulce, M. J. (2018). La lucha por los Derechos Humanos en el siglo XXI. Em Proner, C., Olasolo, H., Villán Durán, C., Ricobom, G., Back, C. (2018). *70º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La protección de los Derechos Humanos en cuestión*. Valencia: Tirant lo Blanch - Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, pp. 481-491.
- Fariñas Dulce, M. J. (2005). *Mercado sin Ciudadanía: Las falacias de la Globalización Neoliberal*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Ferrajoli, L. (2010). *La ley del más débil*. 7ª. ed. Madrid: Trotta.
- Ferrajoli, L. (2009). *Los fundamentos de los Derechos Fundamentales*. 4ª. ed. Madrid: Trotta.

- Ferrajoli, L. (1995). *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*. Madrid: Trotta.
- Festi, R. (2020). A distopia do capitalismo de plataforma. Em *Correio Braziliense*. Brasília. [em linha]. Recuperado de [https://www.correio braziliense.com.br/app/noticia/opiniaio/2020/02/25/internas\\_opiniaio,830394/artigo-a-distopia-do-capitalismo-de-plataforma.shtml](https://www.correio braziliense.com.br/app/noticia/opiniaio/2020/02/25/internas_opiniaio,830394/artigo-a-distopia-do-capitalismo-de-plataforma.shtml).
- Filgueiras, V., Antunes, R. (2020). Plataformas digitais, uberização do trabalho e regulação no capitalismo contemporâneo. Em *Contracampo*. Niterói, v. 39, (nº. 1), abr.-jul.
- Foucault, M. (2016). *La sociedad punitiva: curso en el Collège de France (1972-1973)*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Foucault, M. (1996). *A verdade e as formas jurídicas*. Rio de Janeiro: Nau.
- Foucault, M. (1992). *Microfísica del poder*. 3ª. ed. Madrid: La Piqueta.
- Gadamer, H. (1999). *Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica*. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Vozes.
- Gallardo, H. (2010). Teoría crítica y derechos humanos: una lectura latinoamericana. Em *Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales*, Año II, (nº. 4), jul.-dez., pp. 57-89.
- Gambacorta, M. L. (2020). Protección de los Derechos Sociales y economía informal. Em *Estado de Direito*. [em linha]. Recuperado de <http://estadodedireito.com.br/proteccion-en-el-ambito-de-la-economia-informal-y-derechos-sociales-vs-no-empleables-descartables-y-excluidos/>
- Góes, G. S. (2018). Geopolítica mundial e America's grand national strategy: diálogos epistemológicos indissociáveis. Em *Revista da Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro*, v. 24, (nº. 3), set.-dez., pp. 500-541.
- Gomes, O. (1952). A crise do Direito. Em *Revista da Faculdade de Direito do Ceará*. Fortaleza: Faculdade de Direito do Ceará, v. 6, pp. 183-198.
- Gonçalves, M. G. M. (2014). *Psicologia, subjetividade e políticas públicas*. São Paulo: Cortez Editora.
- Hardt, M., Negri, A. (2012). *Imperio*. 2ª. ed., Buenos Aires: Paidós.
- Harvey, D. (2018). *Para entender o capital*. São Paulo: Boitempo.
- Harvey, D. (2013). *Os limites do capital*. São Paulo: Boitempo.
- Herrera Flores, J. (2008). Cultura y derechos humanos: la construcción de los espacios culturales. Em *I/C - Revista Científica de Información y Comunicación*, (nº. 5), pp. 26-72.
- Herrera Flores, J. (2008). La Complejidad de los derechos Humanos. Bases teóricas para una Redefinición contextualizada. Em *Revista Internacional de Direito e Cidadania*, (nº. 1), jun., pp. 103-135.
- Herrera Flores, J. (2007). *La reinvencción de los derechos humanos*. Andalucía: Atrapasueños.



- Herrera Flores, J. (2005). De habitaciones propias y otros espacios negados (una teoría crítica de las opresiones patriarcales). Em *Cuadernos Deusto de Derechos Humanos*; Bilbao: Universidad de Deusto-Instituto de Derechos Humanos, (nº. 33).
- Herrera Flores, J. (2004). “Direitos humanos, interculturalidade e racionalidade de resistência”. Em Wolkmer, Antonio Carlos (Org.). *Direitos humanos e filosofia jurídica na América Latina*. 2004. Rio de Janeiro: Lumen Juris, pp. 359-385.
- Herrera Flores, J. (2002). Los derechos humanos en el contexto de la globalización: tres precisiones conceptuales. Em Sánchez Rubio, D., Herrera Flores, J., Carvalho, S. (Coords.). *Direitos humanos e globalização: fundamentos e possibilidades desde a Teoria Crítica*. 2002. Rio de Janeiro: Lumen Juris, pp. 65-101.
- Herrera Flores, J. (1985). A Proposito de la Fundamentacion de los Derechos Humanos y de la Interpretación de los Derechos Fundamentales. Em *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*. Madrid: CEPC - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, (nº. 45), maio-jun., pp. 177-212.
- Herrero, Y. (2019). Límites, fascismo territorial y la derecha sin complejos. Em *Revista Contexto*. Madrid: Contexto, (nº. 206). [em linha]. Recuperado de <https://ctxt.es/es/20190130/Firmas/24130/fascismo-extractivismo-cambio-climatico-boaventura-da-sousa-yayo-herrero.htm>
- Hobsbawm, E. (2000). *Mundo do trabalho: novos estudos sobre História Operária*. 4ª. ed. rev. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Jiménez Benítez, W. G. (2007). El enfoque de los derechos humanos y las políticas públicas. Em *Revista Civilizar*, Bogotá, (nº. 7), jan.-jun., pp. 31-46.
- Klein, N. (2017). *Não basta dizer não: resistir à nova política de choque e conquistar o mundo do qual precisamos*. Bertrand Brasil: Rio de Janeiro.
- Lindgren Alves, J. A. (2019). Direitos universais ou americanização total? Em *Revista Lua Nova (Dossiê Direitos Humanos sob tensão)*, São Paulo: CEDEC, (nº.108), set.-dez.
- Lukács, G. (2018). *Prolegômenos para a ontologia do ser social: obras de Georg Lukács volume 13*. 2018. Maceió: Coletivo Veredas, 2018.
- Lukács, G. (2013). *Para uma ontologia do ser social, 2*. São Paulo: Boitempo.
- Mascaro, A. L. B. (2017). Direitos humanos: uma crítica marxista. Em *Lua Nova*, São Paulo, (nº.101), pp. 109-137.
- Mascaro, A. L. B. (2016). *Filosofia do Direito*. 5ª.ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Atlas.
- Mbembe, A. (2018). *Necropolítica. Biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte*. 2018. 3ª.ed., São Paulo: N-1 Edições.
- Mészáros, I. (2011). *Para além do capital: rumo a uma teoria da transição*. São Paulo: Boitempo.
- Namora, N. C. et al. (Edits.). (2018). *The balance between worker protection and employer powers: insights from around the world*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

- Narváez Hernandez, J. R. (2018). *El necroderecho y los Derechos Humanos*. Em Sánchez Vázquez, R. (Coord.). (2018). *Derechos Humanos, Seguridad Humana, Igualdad y Equidad de Género*. México: CNDH, pp. 175-186.
- Narváez Hernández, J. R. (2006). *Historia Social del Derecho y de la Justicia*. 2006. México: Editorial Porrúa.
- Negri, A., Hardt, M. (2016). *Declaração: isto não é um manifesto*. 2ª.ed., São Paulo: N-1 Edições.
- Organização das Nações Unidas. (2010). *Principios y Directrices Recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de personas. Comentarios*. Nova Iorque e Genebra: ONU.
- Packer, J., Balan, S. (2020). Un genuíno Enfoque basado em Derechos Humanos para nuestro futuro postpandemia. Em *OpenGlobalRights*. [em linha]. Recuperado de <https://www.openglobalrights.org/genuine-human-rights-based-approach-for-post-pandemic-future/?lang=Spanish>
- Proner, C., Olasolo, H., Villán Durán, C., Ricobom, G., Back, C. (2018). *70º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La protección de los Derechos Humanos en cuestión*. Valencia: Tirant lo Blanch - Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia.
- Rodríguez Garavito, C. (2018). *Empresas y derechos humanos en el siglo XXI*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Rodotà, S. (2014). *El derecho a tener derechos*. Madrid: Trotta.
- Sánchez Rúbio, D., Herrera Flores, J., Carvalho, S. (Orgs.). (2010). *Direitos humanos e globalização: fundamentos e possibilidades desde a teoria crítica*. 2ª. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS.
- Sánchez Vázquez, R. (Coord.). (2018). *Derechos Humanos, Seguridad Humana, Igualdad y Equidad de Género*. México: CNDH.
- Saxe-Fernández, J. (2001). Globalización, regionalización y crisis capitalista. Em Saxe-Fernández, J., Petras, J., Veltmeyer, H., Núñez, O. *Globalización, Imperialismo y Clase Social*. 2001. Buenos Aires: Lumen Humanitas, pp. 07-33.
- Saxe-Fernández, J., Petras, J., Veltmeyer, H., Núñez, O. (2001). *Globalización, Imperialismo y Clase Social*. Buenos Aires: Lumen Humanitas.
- Sen, A. (2010). *Desenvolvimento como liberdade*. 2ª. reimp. São Paulo: Companhia das Letras.
- Sen, A., Kliksberg, B. (2009). *Primero la gente: una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas del mundo globalizado*. Buenos Aires: Editorial Temas.
- Streeck, W. (2013). *Tempo comprado: a crise adiada do capitalismo democrático*. Lisboa: Conjuntura Actual Editora.
- Supiot, A. (2020). El trabajo no es una mercancía. Contenido y sentido del trabajo en el siglo XXI. *Pasos a la Izquierda*, Barcelona: Javier Aristu y Javier Tébar. [Em Linha], Recuperado de <https://pasosalaizquierda.com/el-trabajo-no-es-una-mercancia-contenido-y-sentido-del-trabajo-en-el-siglo-xxi-2/>

- Supiot, A. (2012). *Homo Juridicus. Ensayo sobre la función antropológica del derecho*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Supiot, A. (2011). *Critique du Droit du Travail*. Paris: PUF.
- Supiot, A. (2010). *L'esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total*. Paris: Éditions du Seuil.
- Supiot, A. (2008). *Derecho del Trabajo*. Buenos Aires: Heliasta.
- Supremo Tribunal Federal (Brasil). (2017). *Coletânea Temática de Jurisprudência: Direitos Humanos*. Brasília: STF.
- Terradillos Basoco, J. M. (2019). Constitución Federal de Brasil y Protección Penal de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Em Araújo, A. R., D'Ambroso, M. J. F. *Democracia e neoliberalismo: o legado da Constituição de 1988 em tempos de crise*. 2019. 2ª. ed. rev., atual. e amp. Salvador: JusPodivm, pp. 207-230.
- Tribunal Superior Do Trabalho (Brasil). (2011). *A história da Justiça do Trabalho no Brasil: Multiplicidade de olhares*. São Paulo: LTr.
- Toussaint, E. (2012). *Neoliberalismo. Breve historia del Infierno*. Buenos Aires: Capital Intelectual (Le Monde Diplomatique).
- Valverde Gefaell, C. (2015). *De la necropolítica neoliberal a la empatía radical: violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización*. Barcelona: Icaria Editorial.
- Vázquez, D., Delaplace, D. (2011). Políticas públicas con perspectiva de derechos humanos: un campo en construcción. Em *SUR - Revista Internacional de Direitos Humanos*, São Paulo: Sur-Rede Universitária de Direitos Humanos, v. 8, (nº.14), pp. 35-65.
- Witker, J. (2018). *Derechos Humanos e Investigación Jurídica*. Em Sánchez Vázquez, R. (Coord.) *Derechos Humanos, Seguridad Humana, Igualdad y Equidad de Género*. 2018. México: CNDH, pp. 143-173.
- Wolkmer, A. C. (2003). *História do Direito no Brasil*. 3ª. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense.
- Wolkmer, A. C. (2006). Pluralismo jurídico, direitos humanos e interculturalidade. Em *Seqüência: Estudos Jurídicos e Político*. Florianópolis, jan., pp. 113-128.
- Wood, E. M. (2018). *La prístina cultura del capitalismo. Un ensayo histórico sobre el Antiguo Régime y el Estado moderno*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Zaffaroni, E. R. (2018). *El enemigo en el Derecho Penal*. Buenos Aires: Ediar.
- Zaffaroni, E. R. (2017). *Derecho, Derecho Penal Humano y Poder Financiero (Conferencias de Guatemala)*. Rosario: Remanso.
- Zaffaroni, E. R. (2015). *El Derecho Latinoamericano em la fase superior del colonialismo*. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

Zaffaroni, E. R. (2011). *La pachamama y el humano*. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

Zizek, S. (2015). *Em defesa das causas perdidas*. 3ª. reimp. São Paulo: Boitempo.

## **VII.2 Bibliografia geral de consulta:**

Acale Sánchez, M.; Gallardo García, R. M.; Terradillos Basoco, J. M. (2005). *Siniestralidad laboral. Un análisis criminológico y jurisprudencial*. Cadiz: Universidad de Cadiz.

Adorno, T. W. (2003). *Ensayos sobre la propaganda fascista*. Barcelona: Voces y Cultura.

Agamben, G. (2017). *Profanaciones*. 5ª. ed., Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Agamben, G. (2015). *Meios sem fim: notas sobre a política*. Belo Horizonte: Autêntica Editora.

Agamben, G. (2004). *O estado de exceção*. São Paulo: Boitempo.

Agamben, G. (2002). *Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I*. Belo Horizonte: UFMG.

Agamben, G. *et al.* (2020). *Sopa de Wuhan*. Pablo Amadeo Editor.

Aguado, J. A. M., González, K. B., Montes, C. (2014). Por un buen vivir dentro de los límites de la naturaleza. Cuando el modelo de desarrollo occidental no es el camino. Em *Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, (nº. 125), pp. 153-163.

Aguiar, R. A. R. (1984). *Direito, poder e opressão*. 2.ed., São Paulo: Alfa-Omega.

Aguillar, F. H. (1996). *Metodologia da Ciência do Direito*. São Paulo: Max Limonad.

Alavina, F. (2017). Agamben: profanar a democracia representativa. São Paulo: Outras Palavras Comunicação Compartilhadas e Pós Capitalismo. [em linha]. Recuperado de <https://outraspalavras.net/brasil/dialogo-com-agamben-profanar-a-democracia-representativa/>

Aldas, E. N. (ed.). (2002). *Medios periodísticos, cooperación y acción humanitaria*. Barcelona: Icaria – Sociedad y Opinión.

Alemán, J. (2015). Hegemonía y Poder Neoliberal. *Lacan Quotidien*. Paris: Navarin Editeur.

Almeida, H. T. N. (2015). A exceção (é) a regra: os direitos humanos entre a biopolítica e o Estado de exceção em Giorgio Agamben. Recife: O Autor. [em linha]. Recuperado de <http://www.bdtd.ufpe.br/bitstream/handle/123456789/17445/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Almeida, M. R. (2014). Rudimentos de biopolítica no Direito Romano. *Humanitas*, Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, vol. LXVI, pp. 207-229.

Alonso Iglesias, J. L. (2003). Los Derechos Humanos de tercera generación y los movimientos sociales. *Humanismo y Trabajo Social*, León: Universidad de León, (nº. 02), pp. 47-70.

- Altava Lavall, M. G. (Coord.) (2003). *Lecciones de Derecho Comparado*. Castelló de la Plana: Publicaciones de la Universitat Jaume I.
- Amin, S. (2005). O imperialismo, passado e presente. Em *Revista Tempo*, vol. 9, (nº. 18), jan.-jun.
- Amnistía Internacional. *Pobreza y Derechos Humanos. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. (Comité DESC) Declaración sobre la pobreza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. [em linha]. Recuperado de <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-economicos-sociales-culturales/>
- Amster, E.J. (2020). History's crystal ball: What the past can tell us about COVID-19 and our future. Em *The Conversation US*, Boston: TCUS. [em linha], [consultado 07 julho 2020]. Disponível em: <https://theconversation.com/historys-crystal-ball-what-the-past-can-tell-us-about-covid-19-and-our-future-140512>
- Amuchástegui, J. G. (2002). Las Teorías de Derechos Humanos. Em *Revista de Administración Pública. Los derechos humanos: teoría, praxis nacional e internacional*, (nº. 105), pp. 19-41.
- Andrade, D. C. M. (2018). Historicidade da propriedade privada capitalista e os cercamentos. Em *História: Debates e Tendências*. vol. 8, nº. 3, set.-dez., pp. 408-419.
- Angulo Sánchez, N. (2007). El desarrollo como derecho humano. Em *Revista Glocal*, (nº. 10-11). [em linha]. Recuperado de <http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/hoy/index.php?id=2863&canal=Articulos&ghoy=current>
- Anjos Filho, R. N. (2009). *Direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas no Brasil*. Tese de doutorado. São Paulo: USP. [em linha]. Recuperado de [http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-05012012-075449/publico/VERSAO\\_RESUMIDA\\_Direito\\_ao\\_desenvolvimento\\_de\\_comunidades.pdf](http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-05012012-075449/publico/VERSAO_RESUMIDA_Direito_ao_desenvolvimento_de_comunidades.pdf)
- Antunes, R., Bialakowsky, A. L., Pucci, F., Quiñones, M. (Coords.). (2019). *Trabajo y capitalismo. Relaciones y colisiones sociales*. Buenos Aires: Teseo-CLACSO.
- Ararteko. (2012). Los Derechos Humanos como base de las Políticas Públicas en Tiempos de Crisis Económica. Em *Estudio del Ararteko*, Jun.
- Araújo, A. R., D'ambroso, M. J. F. (2019). *Democracia e neoliberalismo: o legado da Constituição de 1988 em tempos de crise*. 2ª. ed. rev., atual. e amp. Salvador: JusPodivm.
- Arendt, H. (2017). *Origens do totalitarismo*. 5ª reimp. São Paulo: Companhia das Letras.
- Atienza, M. (2017). *El Sentido del Derecho*. 5ª. reimp., Barcelona: Ariel Derecho.
- Ayala, N. (2003). *Derechos humanos y globalización: un análisis preliminar para América Latina*. Montevideo: D3E.
- Bailone, M., D'Ambroso, M. J. F., Lima, L. F., Vázquez, A. N. (2020). *Inmigrantes y apátridas en situación de riesgo: la tutela laboral en Brasil y Argentina*. Belo Horizonte: RTM.

- Barbosa, G. G. (2009). Imperialismo, Capitalismo e burguesia: Revisitando as contribuições teóricas de Joseph Schumpeter e Hannah Arendt. Em *Revista Colombia Internacional*, (nº, 70), pp. 145-165.
- Batista Jiménez, F. (2006). La dignidad de la persona en la Constitución española: naturaleza jurídica y funciones. Em *Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, vol. 1, (nº14).
- Baylos, A. (2020). Recordando a Weimar: Constitución del trabajo y democracia en la empresa. [em linha]. Recuperado de <http://www.relats.org/documentos/DERECHO.Baylos.Weimar2020.pdf>
- Baylos, A., Terradillos, J. M. (2009). Derecho Penal del Trabajo: Una Reflexión General a partir de la Experiencia Normativa Española. [em linha]. Recuperado de [https://www.researchgate.net/publication/228639484\\_Derecho\\_Penal\\_del\\_Trabajo\\_Una\\_Reflexion\\_General\\_a\\_partir\\_de\\_la\\_Experiencia\\_Normativa\\_Espanola](https://www.researchgate.net/publication/228639484_Derecho_Penal_del_Trabajo_Una_Reflexion_General_a_partir_de_la_Experiencia_Normativa_Espanola)
- Baylos, A., Terradillos, J. M. (1997). *Derecho Penal del Trabajo*. Madrid: Trotta.
- Becker, G. (1968). Crime and punishment: an economic approach. *Journal of Political Economy*, v. 76 (nº. 2), mar.-abril 1968, pp. 169-217.
- Benoist, A. (2006). *Más allá de los derechos humanos: defender las libertades*. [em linha]. Recuperado de [https://seminariopoliticayfilosofia.files.wordpress.com/2019/01/mas\\_alla\\_de\\_los\\_derechos\\_humanos.pdf](https://seminariopoliticayfilosofia.files.wordpress.com/2019/01/mas_alla_de_los_derechos_humanos.pdf)
- Berraondo López, M. (Coord.). (2006). *Pueblos indígenas y Derechos Humanos*. Bilbao: Universidad de Deusto - Instituto de Derechos Humanos.
- Berraondo López, M. (2006). Tierras y territorios como elementos substantivos del derecho humano al medio ambiente. Em Berraondo López, M. (Coord.). *Pueblos indígenas y Derechos Humanos*. 2006. Bilbao: Universidad de Deusto - Instituto de Derechos Humanos, pp. 469-488.
- Binding, K., Hoche, A. (2009). *La licencia para la aniquilación de la vida sin valor de vida*. Buenos Aires: Ediar.
- Bobbio, N. (1992). *A Era dos Direitos*. Rio de Janeiro: Campus.
- Bobbio, N. (2016). *Contra os novos despotismos*. São Paulo: UNESP.
- Bobbio, N. (1997). *Liberalismo e Democracia*. 6ª. ed., São Paulo: Brasiliense.
- Bobbio, N. (1989). *Teoria do Ordenamento Jurídico*. São Paulo-Brasília: Polis -Universidade de Brasília.
- Bolzan de Moraes, J. L. (2010). Direitos Humanos, Estado e Globalização. Em Rúbio, D. S., Herrera Flores, J., Carvalho, S. (Orgs.). *Direitos humanos e globalização: fundamentos e possibilidades desde a teoria crítica*. 2010. 2ª. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS.
- Brie, R; J. (1997). *Los Hábitos del Pensamiento Riguroso*. Buenos Aires: Ediciones del Viejo Aljibe.



- Brígido, E. I. (2013). Michel Foucault: Uma Análise do Poder. Em *Revista de Direito Econômico e Socioambiental*, v.4, (nº.1), pp. 56-75.
- Bringas, A. M. (2008). Los pueblos indígenas ante la construcción de los procesos multiculturales. Inserciones en los bosques de la biodiversidad. Em Martínez, A. R. et al. *Teoría Crítica dos Direitos Humanos no Século XXI*. 2008. Porto Alegre: EDIPUCRS, pp. 269-299.
- Brown, M. B. (1995). *Models in political economy: a guide to the arguments*. 2ª.ed. rev. e amp., Nova Iorque: Penguin Books.
- Bryner, N. (2015). Aplicando el principio “in dubio pro natura” para la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental. Em Organización de los Estados Americanos. Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos. Departamento de Desarrollo Sostenible. *Estado de derecho en materia ambiental: Tendencias en las Américas: Ensayos seleccionados*. Montego Bay: OEA, pp. 174-181.
- Buarque de Hollanda, H. (Org.). (1992). *Pós-modernismo e Política*. Rio de Janeiro: Rocco.
- Bueno, C. (1997). Da Pax Britannica à hegemonía norte-americana: o integracionismo nas Conferências Internacionais Americanas (1826-1906). Em *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, (nº. 20), pp. 231-250.
- Butler, J. (2020). El capitalismo tiene sus límites. Em Agamben, G. et al. (2020). *Sopa de Wuhan*. Pablo Amadeo Editor, pp. 59-66.
- Cadernmartori, D. M. L., Cadernmatori, S. U. (2013). Democracia e revolução: a gênese dos ideais democráticos e do Constitucionalismo na revolução francesa. [Em linha]. Recuperado de <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=05a624166c8eb827>
- Canclini, N. G. (2020). Los peligros después de una pandemia: ¿Una globalización distinta cada mes? Em *Revista Anfibia*, San Martín: Universidad Nacional de San Martín. [em linha]. Recuperado de <http://revistaanfibia.com/ensayo/una-globalizacion-distinta-cada-mes/>
- Cantor, E. R., Ruiz, M. C. R. (2009). *Las Generaciones De Los Derechos Humanos: Libertad - Igualdad – Fraternidad*. 7ª. ed. Bogota: Universidad Libre.
- Carballido, M. E. G. (2013). *Hacia un pensamiento crítico en derechos humanos: aportes en diálogo con la teoría de Joaquín Herrera Flores*. Tesis Doctoral. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide. [em linha]. Recuperado de [https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/628/manuel\\_gandara\\_tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/628/manuel_gandara_tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Carcanholo, M. D., Baruco, G. C. C. (2008). A atual ideologia conservadora e o capitalismo contemporâneo: uma crítica à teoria pós-moderna neoliberal. [em linha]. Recuperado de <https://econpapers.repec.org/paper/anpen2008/200807091134410.htm>
- Cárcova, M. C. (2012). *Las Teorías Jurídicas Post Positivistas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Carson, Rachel. (1964). *Primavera silenciosa*. 2ª. ed. São Paulo: Melhoramentos.
- Carvajal Contreras, M. (2016). Los sistemas internacionales de protección a los Derechos Humanos. Em *Revista de la Facultad de Derecho de México*, tomo LXVI (nº. 265), jan.-jun.

- Castells, M. (1999). *A sociedade em rede*. 6ª. ed. rev. e amp. São Paulo: Paz e Terra.
- Castells, M. (2001). *The information age: economy, society and culture - vol. III (End of Millenium)*. 2ª.ed., Blacwell: Oxford.
- Casimiro, F. H. C. (2018). As classes dominantes e a nova direita no Brasil contemporâneo. Em Gallego, E. S. (Org.). *O ódio como política: a reinvenção das direitas no Brasil*. 2018. São Paulo: Boitempo, pp. 41-5.
- Castoriadis, C. (1995). La democracia como procedimiento y como régimen. Em *Leviatán: Revista de hechos e ideas*. España, (nº. 62), pp. 65-84.
- Castro, L. A. (2010). *Criminología de los Derechos Humanos*. Buenos Aires: del Puerto.
- Cecchini, S. (2016). Protección social con enfoque de derechos para la América Latina del siglo XXI. Em *Revista Opera*, (nº. 18). [em linha]. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.18601/16578651.n18.03>.
- Cecchiini, S., Filgueira, F., Martínez, R. Rossel, C. (edits.). (2015). *Instrumentos de protección social: Caminos latinoamericanos hacia la universalización*. Santiago: CEPAL.
- Cecchini, S., Rico, M. N. (2015). El enfoque de derechos en la protección social. Em Cecchiini, S., Filgueira, F., Martínez, R. Rossel, C. (edits.) *Instrumentos de protección social: Caminos latinoamericanos hacia la universalización*. 2015. Santiago: CEPAL, pp. 331-362.
- Cerrutti, P. (2009). Derecho penal, guerra y estado de excepción: Enemigos y criminales en el mundo contemporáneo. Em *Revista Questión*, vol. 1, (nº. 21). [em linha]. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/32214>
- Chaves Júnior, J. E. R. (2017). O Direito do Trabalho e as plataformas eletrônicas. Em *Revista de Derecho Social Latinoamerica*, Albacete: Editorial Bomarzo, (nº3-4), pp. 99-118.
- Chaves Junior, J. E. R., D'Ambroso, M. J. F. (2018). Precificando o Direito: a era do advogado e do juiz contadores. Em *Consultor Jurídico*. [em linha]. Recuperado de <https://www.conjur.com.br/2018-mar-26/opinio-precificando-direito-advogado-juiz-contadores>
- Chomsky, N. (2017). *Mídia: propaganda política e manipulação*. São Paulo: WMF/Martins Fontes.
- Chomsky, N. (1995). *Secrets, lies and democracy*. Tucson: Odonian.
- Colling, L. (2001). Agenda-setting e framing: reafirmando os efeitos limitados. Em *Revista FAMECOS*. Porto Alegre, (nº.14), abr., pp. 88-101.
- Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe (Cepal). (2009). *Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas*. Santiago: Sandra Huenchuan Editora.
- Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (copredeh). *Manual para la transversalización del enfoque de derechos humanos con equidade*. Guatemala. [em linha]. Recuperado de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/28829.pdf>

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia Caso Herzog e outros vs. Brasil, 15 mar. 2018. [em linha]. Recuperado de [http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_353\\_por.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_353_por.pdf).
- Cortina, A. (2009). *Las fronteras de la persona. El valor de los animales, la dignidad de los humanos*. Taurus: Madrid.
- Coutinho, A. R. (2013). Direito capitalista e democrático do trabalho nos marcos do Estado Providência: 70 anos da Consolidação das Leis do Trabalho Brasileira. Em *Estudos do Século XX*, (nº. 13), pp. 167-180.
- Cristobal Montes, A. (1965). La “res extra commercium” en el Derecho Romano. [em linha]. Recuperado de [http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/32/rucv\\_1965\\_32\\_81-101.pdf](http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/32/rucv_1965_32_81-101.pdf)
- D'Ambroso, M. J. F. (2014). A Convenção n. 169 da OIT e o trabalho indígena no Brasil. Em Alvarenga, R. Z., Colnago, L. M. R. (Coords.). *Direito internacional do trabalho e convenções internacionais da OIT comentadas*. 2014. São Paulo: LTr, pp. 333-340.
- D'Ambroso, M. J. F. (2020). Anarcocapitalismo, necropolítica y necrojusticia: bitácora de una muerte presagiada. Em *La Tecla em Revista*. Buenos Aires. [em linha]. Recuperado de <https://lateclaenerevista.com/anarcocapitalismo-necropolitica-y-necrojusticia-bitacora-de-una-muerte-presagiada-marcelo-jose-ferlin-dambrosopor/>
- D'Ambroso, M. J. F. (Coord.). (2017). *Direito do Trabalho, Direito Penal do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e a reforma trabalhista*. São Paulo: LTr.
- D'Ambroso, M. J. F. (2019). *La imputación penal objetiva en los delitos de siniestralidad laboral*. Belo Horizonte: RTM.
- D'Amico, M. V. (2016). La definición de la desigualdad en las agendas recientes de Los organismos internacionales para América Latina. Em *Revista Colombiana de Sociología*, vol. 39, (nº. 1), pp. 221-240.
- Díez-Picazo, L. M., Martín, A. N. (2010). *Los Derechos Fundamentales en el Derecho Penal Europeo*. Navarra: Civitas-Thomson Reuters.
- Deleuze, G. (2017). *Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia*. 5ª. reimp., Buenos Aires: Cactus.
- Deleuze, G., Guattari, F. (2010). *O Anti-Édipo (capitalismo e esquizofrenia 1)*. São Paulo: Editora 34.
- Donas, J. B. (2010). La cuarta generación de derechos humanos en las redes digitales. Em *Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación)*, Madrid: Fundación Telefónica, out./dez.
- Dowbor, L. (2020). *Potência e miséria da economia do conhecimento*. São Paulo: Outras Palavras. [em linha]. Recuperado de <https://outraspalavras.net/pos-capitalismo/dowbor-potencia-e-miseria-da-economia-imaterial/>
- Dowbor, L. (2018). *A era do capital improdutivo*. 2ª.ed., São Paulo: Outras Palavras.

- Dworkin, R. M. (2007). *O império do Direito*. 2ª ed., São Paulo: Martins Fontes.
- Dworkin, R. M. (2005). *Uma questão de princípio*. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes.
- Dworkin, R. M. (2002). *Levando os direitos a sério*. São Paulo: Martins Fontes.
- Ehrlich, I. (1973). Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation. Em *The Journal of Political Economy*, vol. 81 (nº 3), maio-jun., pp. 521-565.
- Elias, N. (1993). *O processo civilizador (vol. 1 – uma história dos costumes)*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Elias, N. *O processo civilizador (vol. 2 – formação do Estado e civilização)*. 1993. Rio de Janeiro: Zahar.
- Equipe do Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. (2011). TRT4: Um olhar do Sul. Em Tribunal Superior do Trabalho (Brasil). *A história da Justiça do Trabalho no Brasil: Multiplicidade de olhares*. 2011. São Paulo: LTr, pp. 137-172.
- Estévez, C., Taibo, C. (Eds). (2008). *Voces contra la globalización*. Barcelona: Crítica.
- Faria, J. E. (1997). Direitos humanos e globalização econômica: notas para uma discussão. Em *Dossiê Direitos Humanos*, São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, vol. 11, (nº. 30), maio-agosto. [em linha]. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141997000200004>
- Faria, J. E. (1978). *Poder e legitimidade*. São Paulo: Perspectiva.
- Fariñas Dulce, M. J. (2020). La amenaza tecnototalitaria. Em *Dominio Público*. [em linha]. Recuperado de <https://blogs.publico.es/dominiopublico/33064/la-amenaza-tecnototalitaria/>.
- Fariñas Dulce, M. J. (2018). Constitución o Biblia. Em *Dominio Público*. [em linha]. Recuperado de <https://blogs.publico.es/dominiopublico/25857/constitucion-o-biblia/>.
- Fariñas Dulce, M. J. (2018). Guerra Jurídica y Estrategia Neoliberal. Em *Dominio Público*. [em linha]. Recuperado de <https://blogs.publico.es/dominiopublico/27431/guerra-juridica-y-estrategia-neoliberal/>.
- Fariñas Dulce, M. J., D'Ambroso, M. J. F. (2018). Ameaças à democracia brasileira e a crise da contemporaneidade. Em *Estado de Direito*. Porto Alegre. [em linha]. Recuperado de <http://estadodedireito.com.br/ameacas-democracia-brasileira-e-crise-da-contemporaneidade/>
- Ferrajoli, L. (2011). *Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional*. Madrid: Minima Trotta.
- Ferraz JR., T. S. (1997). *Teoria da Norma Jurídica*. 3ª. ed., Rio de Janeiro: Forense.
- Franco, R. V., Moreira, L. N. (2011). História da Justiça do Trabalho no Brasil: O olhar do TST. Em Tribunal Superior do Trabalho (Brasil). (2011). *A história da Justiça do Trabalho no Brasil: Multiplicidade de olhares*. São Paulo: LTr, pp. 15-52.
- Froelich, I. V. (2005). A política externa americana e seus críticos. Em *Revista Brasileira de Política Internacional*, Brasília: IBRI, v. 48, (nº. 2), pp. 205-215.

- Forsythe, D. P. (1998). *Derechos Humanos y Política Mundial*. Buenos Aires: Eudeba.
- Foucault, M. (2014). *Las redes del poder*. 2014. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Fumagalli, A., Lucarelli, S., Marazzi, C., Mezzadra, S., Negri, A., Vercellone, C. (2009). *La gran crisis de la economía global. Mercados financieros, luchas sociales y nuevos escenarios políticos*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Galeano, E. (2012). *As veias abertas da América Latina*. Porto Alegre: L&PM.
- Gambacorta, M. L. (2017). Institucionalidad estatal, relaciones laborales y paradigmas desreguladores neoliberales en argentina: hacia un estado social de derecho más allá de la economía social del mercado. Em *Revista Juris Poiesis*, Rio de Janeiro, vol.20, (n°22), pp. 01-16.
- Garcia, E. V. (2002). Estados Unidos e Grã-Bretanha no Brasil: transição de poder no entreguerras. Em *Contexto Internacional*, Rio de Janeiro, vol. 24, (n° 1), jun.
- García Figueroa, A. (2017). Neoconstitucionalismo y argumentación jurídica. Em *Revista Derecho PUCP*, n° 79, pp. 9-32.
- George, S. (2008). Es necesaria otra globalización (entrevista). Em ESTÉVEZ, C., TAIBO, C. (Eds.). (2008). *Voces contra la globalización*. Barcelona: Crítica, pp. 37-52.
- Ghai, D. (2003). Trabajo decente. Concepto e indicadores. Em *Revista Internacional del Trabajo*. OIT, 122, (n° 2), pp.125-160.
- Giménez Mercado, C.; Valente Adarme, X. (2010). El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas: ideas para un debate en ciernes. Em *Cuadernos del CENDES*, Caracas: CENDES, vol. 27 (n° 74), maio-ago. 2010, pp. 51-80.
- Golub, P. S. (2002). O Evangelho do Neocolonialismo. Em *Dossiê 11 de Setembro*, Brasília: Biblioteca Diplô, 01 set. 2002. [Em linha]. Recuperado de <http://diplô.org.br/2002-09,a428>
- Gómez Aguilera, F. (2010). *Las palabras de Saramago*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Gómez-Galán, M., Pavón Piscitello, D., Sainz Olero, H. (2013). *El Enfoque Basado en Derechos Humanos en los programas y proyectos de desarrollo*. Madrid: CIDEAL.
- Gómez Isa, F. (1999). *El derecho al desarrollo como derecho humano en el ámbito jurídico internacional*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Gómez Isa, F. (Dir.), Pureza, J. M. (2004). *La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- González Álvarez, R. (2008). *Aproximaciones a los Derechos Humanos de Cuarta Generación*, Em *Revista SOPECJ*, Cusco.
- González Casanova, P. (2007). Colonialismo interno (uma redefinição). Em *A teoria marxista hoje. Problemas e perspectivas*. Buenos Aires: CLACSO, pp. 431-458.
- Guamán, A., Aragoneses, A., Martín, S. (Dirs.). (2019). *Neofascismo: la bestia neoliberal*. Madrid: Siglo XXI.

- Güendel Gonzalez, L. La política pública y la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos: La búsqueda de una nueva utopía. [em linha]. Recuperado de <https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/derechos-humanos-y-polc3adticas-pc3bablicas-guendel-1.pdf>.
- Güendel González, L. (2002). Políticas Públicas y Derechos Humanos. Em *Revista de Ciencias Sociales*. San José: Universidad de Costa Rica, ano/vol. III, (n.º 097), pp. 105-125.
- Habermas, J. (2002). *A crise de legitimação no capitalismo tardio*. 2002. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
- Han, B-C. (2012). *La sociedad del cansancio*. 3ª. reimp. Madrid: Herder.
- Handl, G. (2012). Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Declaración de Estocolmo), de 1972, y Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992. Nueva Iorque: ONU. [em linha]. Recuperado de [https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche\\_s.pdf](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_s.pdf)
- Harvey, D. (2014). *Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo*. 2014. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Held, D. (1997). *La democracia y el orden global, del Estado moderno al gobierno cosmopolita*. Barcelona: Paidós.
- Herkenhoff, J. (1993). *Direito e utopia*. 2ª. ed., São Paulo: Acadêmica.
- Hobsbawm, E. (2012). *A Era do Capital (1848-1875)*. 27ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Hobsbawm, E. (1977). *A Era das Revoluções (1789-1848)*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Hobsbawm, E. (2002). *A Era do Império (1875-1914)*. 7ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Houtart, F. (2008). Otra moral es posible (entrevista). Em ESTÉVEZ, Carlos, TAIBO, Carlos (eds.). (2008). *Voces contra la globalización*. Barcelona: Crítica, pp. 21-36.
- Hüfner, K., Schlaak, C. (2012). *Violaciones de los Derechos Humanos: ¿Qué puedo hacer? Mecanismos y procedimientos de derechos humanos en la práctica*. Berlin: Asociación Alemana para las Naciones Unidas y la Comisión Alemana para la UNESCO.
- Ibarra Colado, E. (2003). Capitalismo académico y globalización: la universidad reinventada. Campinas: Educ. Soc., vol. 24, (n.º. 84), set. pp. 1059-1067.
- Imberti, J. (Coord.). (2006). *Comunicación, desarrollo y derechos humanos – Cuadernillo 1*. Buenos Aires: UNICEF Argentina.
- Institut de Drets Humans de Catalunya. (2012). *La Inclusión De Los Derechos Humanos En Las Políticas Públicas: Informe sobre el Plan de derechos humanos español y recomendaciones para el futuro*.
- Irti, N. (2007). Geodiritto. Em *Enciclopedia Italiana*, VII Apendice, Roma: Istituto Giovanni Treccani. [em linha]. Recuperado de [http://www.treccani.it/enciclopedia/geodiritto\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/geodiritto_%28Enciclopedia-Italiana%29/)



- Jakobs, G. (2007). *Direito Penal do Inimigo: noções e críticas*. 2ª. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado.
- Jameson, F. (1992). Periodizando os anos 60. Em Buarque de Hollanda, H. (Org.). (1992). *Pós-modernismo e Política*. Rio de Janeiro: Rocco, pp. 81-126.
- Jayme, E. (2003). Visões para uma Teoria pós-moderna do Direito Comparado. Em *Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: PPGDir./UFRGS, v.1 (nº 1), mar., p. 120.
- Jayme, E. (1995). Identité culturelle et intégration: le Droit International Privé postmoderne. Em *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye*, Haya: Kluwer, II, pp. 36 e ss.
- Junges, M. (2016). O poder das finanças e as estratégias para romper a crise sistêmica. (Entrevista com Yann Moulier Boutang). Em *Revista IHU On-Line*, (nº. 492). [em linha]. Recuperado de <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/560028-uma-outra-financa-e-possivel-yann-moulier-boutang-e-a-economia-da-polinizacao>
- Junqueira, F. A. M., D'Ambroso, M. J. F. (2017). Poderes corrompidos: a inconstitucionalidade da tragicômica medida provisória 808-17. Em *Revista Empório do Direito*, Florianópolis: Empório do Direito, 27 dez. 2017. [Em linha]. Recuperado de <http://emporioidireito.com.br/leitura/poderes-corrompidos-a-inconstitucionalidade-da-tragicomica-medida-provisoria-808-17>
- Kelbert, F. O. (2011). *Reserva do possível e a efetividade dos direitos sociais no direito brasileiro*. Porto Alegre: Livraria do Advogado.
- Klein, N. (2020). How big tech plans to profit from the pandemic. Em *The Guardian*. [em linha]. Recuperado de <https://www.theguardian.com/news/2020/may/13/naomi-klein-how-big-tech-plans-to-profit-from-coronavirus-pandemic>
- Klein, N. (2015). *La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre*. 2ª.ed., 3ª. reimp. Barcelona: Paidós.
- Krivenko, E. Y. (Edit.). *Human Rights and Power in Times of Globalisation*. 2018. Leiden; Boston: Brill Nijhoff.
- La Boétie, É. (2009). *Discurso da servidão voluntária*. 2ª. ed., São Paulo: Martins Claret.
- Lacerda, B. A. (2010). A Dignidade Humana em Giovanni Pico Della Mirandola. Em *Revista Legis Augustus (Revista Jurídica)*, vol. 3 (nº. 1), set., pp. 16-24.
- Levaggi, V. (2004). ¿Qué es el trabajo decente? [em linha]. Recuperado de [https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS\\_LIM\\_653\\_SP/lang--es/index.htm](https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm)
- Lima, L. F., D'Ambroso, M. J. F. (2018). Manifestações do estado de exceção contemporâneo: nas pegadas do nazismo. Em *Estado de Direito*. Porto Alegre. [em linha]. Recuperado de <http://estadodedireito.com.br/manifestacoes-do-estado-de-excecao-contemporaneo-nas-pegadas-do-nazismo/>

- Lima Marques, C. (2009). *Manual de direito do consumidor*. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- Lindgren Alves, J. A. (2018). *É preciso salvar os direitos humanos*. São Paulo: Perspectiva.
- Lindgren Alves, J. A. (2000). A atualidade retrospectiva da Conferência de Viena sobre direitos humanos. Em *Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo*, São Paulo: IMESP, (nº 53), jun., pp. 13-66.
- Liquidato, V. L. V. (2019). Direitos fundamentais da pessoa humana: classificação em “gerações”/ dimensões. Em Ministério Público Federal (Brasil). (2019). *Direitos humanos fundamentais: 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 20 anos do reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e as mudanças na aplicação do direito no Brasil: coletânea de artigos*. Brasília: MPF, pp. 11-17.
- López, M. B. (2004). *Los derechos humanos en la globalización. Mecanismos de garantía y protección*. San Sebastián: Alberdania.
- Lucero, J. (2018). Constituyendo el principio *in dubio pro natura*: transversalizando la esencia del derecho ambiental latinoamericano contemporáneo. [em linha]. Recuperado de <https://www.unifor.br/documents/392178/3142554/Anais+2018+GT+2+-+Jairo+Lucero.pdf/2502cb4e-7f06-7e14-da7b-67602f9be90d>.
- Luxemburg, Rosa. (1991). *A Revolução Russa*. Rio de Janeiro: Petrópolis.
- Macedo Junior, R. P. (2017). Ronald Dworkin - Teórico do direito. Em Campilongo, C. F., Gonzaga, A. A.; Freire, A. L. (coords. de tomo). (2017). *Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Tomo: Teoria Geral e Filosofia do Direito*. São Paulo: Pontificia Universidade Católica de São Paulo.
- Machado, F. P. M. (2010). Hegemonia, Internacionalização do Estado e Direito Internacional segundo a Teoria Neogramsciana. Em *Revista Primas: Direito, Políticas Públicas, Mundialização*. Brasília: UNICEUB, v. 7, (nº. 1), pp. 173-221.
- Machado, L. A., Galvão Júnior, P. (2018). Países nórdicos: números de causar inveja. [em linha]. Recuperado de <https://espacodemocratico.org.br/artigos/paises-nordicos-numeros-de-causar-inveja/>
- Machado Júnior, A. A. (2009). *Proteção jurídica dos direitos fundamentais sociais. Uma abordagem consentânea com o estabelecimento de novos critérios materiais*. Em *Jus Navigandi*, Teresina, 13 (nº 2133). [em linha]. Recuperado de <http://jus.com.br/revista/texto/12735/protecao-juridica-dos-direitos-fundamentais-sociais>
- Macías Chávez, K. C. (2015). El neocolonialismo en nuestros días: la perspectiva de Leopoldo Zea. *Universitas Philosophica* 65, ano 32, jul.-dez., pp. 81-106.
- Maffesoli, M. (2010). *Saturação*. São Paulo: Iluminuras.
- Maffesoli, M. (2009). *A república dos bons sentimentos*. São Paulo: Iluminuras.
- Malaguido, F. S. (2019). Hermenêutica Jurídica no Estado Democrático de Direito. Em *Âmbito Jurídico*. [em linha]. Recuperado de <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/hermeneutica-juridica-no-estado-democratico-de-direito/>.

- Marcuse, H. (2018). *El hombre unidimensional*. 3a. imp., Barcelona: Austral.
- Marcuse, H. (1973). *A ideologia da sociedade industrial*. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Zahar.
- Martínez, A. R. et al. (2008). *Teoria Crítica dos Direitos Humanos no Século XXI*. Porto Alegre: EDIPUCRS.
- Martins, R. C. (2013). *A hora dos cadáveres adiados: corrupção, expectativa e processo penal*. São Paulo: Atlas.
- Marx, K. (2015). *O capital (Livro I)*. São Paulo: Boitempo.
- Mascaro, A. L. B. (2020). *Crise e Pandemia*. São Paulo: Boitempo.
- Mascaro, A. L. B. (2013). *Introdução ao Estudo do Direito*. 4ª. ed. São Paulo: Atlas.
- Matos, J., Machado, I., Arellano, M. (2009). Globalización y derechos humanos desde una perspectiva ética. Em *Fermentum - Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, vol. 19, (nº. 54), pp. 159-183.
- Mattelard, A. (2000). *A globalização da comunicação*. Bauru: EDUSC.
- Mbembe, A. (2017). A era do humanismo está acabando. Em *Revista IHU Online*. Porto Alegre: Instituto Humanitas Unisinos. [em linha]. Recuperado de <http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/564255-achille-mbembe-a-era-do-humanismo-esta-terminando>.
- Ministério Público Federal (Brasil). (2019). *Direitos humanos fundamentais: 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 20 anos do reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e as mudanças na aplicação do direito no Brasil: coletânea de artigos*. 2019. Brasília: MPF.
- Muñoz, F. A. *La paz imperfecta*. Granada: Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada (Espanha). [em linha], [consultado 25 fevereiro 2018]. Disponível em: [www.ugr.es/~fmunoz/documentos/pimunozespañol.pdf](http://www.ugr.es/~fmunoz/documentos/pimunozespañol.pdf).
- Muñoz, F. A., Rueda, B. M. (Coords.). (2004). *Manual de Paz y Conflictos*. Granada: Universidad de Granada.
- Narváez Hernandez, J. R. (2017). *Necroderecho*. México: Editorial Libitum.
- Negri, A. (1993). *A anomalia selvagem. Poder e potência em Spinoza*. Rio de Janeiro: Editora 34.
- Negri, A., Cocco, G. (2006). *Global: biopoder y luchas en una América Latina globalizada*. Barcelona: Paidós.
- Nietzsche, F. (2017). *Aurora*. N. ed. Barcelona: Ediciones Brontes.
- Nikken, P. (2008). Los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos: la perspectiva del acceso a la justicia y la pobreza. Em *Revista IIDH*. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, vol. 48, ago., pp. 63-105.
- Novack, G. (1999). *Democracy and revolution*. 5ª. reimp., Nova Iorque: Pathfinder.

- Organização dos Estados Americanos. (2015). Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos. Departamento de Desarrollo Sostenible. 2015. *Estado de derecho en materia ambiental: Tendencias en las Américas: Ensayos seleccionados*. Montego Bay: OEA.
- O'Donnell, D. (2007). *Derecho internacional de los derechos humanos: Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano*. Ciudad de México: Editorial Tierra Firme-Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- Ortubay Fuentes, et al. (2006). *Tutela penal de la seguridad en el trabajo. Cuadernos Penales José María Lidón*. Bilbao: Universidad de Deusto, nº 3.
- Patasso, D. (2017). Crítica Internacional - os 100 anos da Revolução Russa. Em *Revista do Instituto Humanitas*, São Leopoldo, (nº. 505). [em linha]. Recuperado de <http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/6888-critica-internacional-os-100-da-revolucao-russa-e-seus-impactos-internacionais>.
- Pautassi, L. C. (2007). El cuidado como cuestión social desde un enfoque de derechos. Em *CEPAL - Série Mujer y Desarrollo*, Santiago: CEPAL, (nº. 87).
- Perales, J. A. S. (2002). Cooperación al desarrollo y globalización: entre la beneficencia pública y el estado del bienestar mundial. Em Aldás, E. N. (Ed.). (2002). *Medios periodísticos, cooperación y acción humanitaria*. Barcelona: Icaria – Sociedad y Opinión, pp. 39-64.
- Perez Luiz, R. (2016). O estado de exceção como paradigma de governo: a pessoa humana a partir de uma leitura em Giorgio Agamben. Santa Cruz do Sul: UNISC. [em linha]. Recuperado de <https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/efpd/article/download/15003/3625>
- Pereira, F. (2019). *A miséria do Direito. Ordem jurídica, dominação e pensamento crítico*. Salvador: Lemarx.
- Polo Blanco, J. (2019). *¿Fue el fascismo una reacción anticapitalista?* Em Guamán, A., Aragonese, A., Martín, S. (Dirs.). (2019). *Neofascismo: la bestia neoliberal*. Madrid: Siglo XXI, pp. 39-59.
- Pomares Cintas, E. (2015). La revisión de los delitos contra los derechos de los trabajadores según la reforma de 2015. Em Olnares, G. Q. (Dir.). (2015). *Comentario a la reforma penal de 2015*. Pamplona: Thomson Reuters – Aranzadi, pp. 633-642.
- Proner, C. (2012). A Lei de Anistia Brasileira sob a ótica do Direito Internacional e da Imprescritibilidade dos Crimes de Lesa Humanidade. Em *Revista de Direito Internacional*. Brasília: UNICEUB, v. 9, (nº. 1), pp. 125-142, jan.-jun.
- Pucheta, M. (2015). Derechos humanos y derecho del trabajo: un vínculo que requiere mayor desarrollo en el ámbito regional. Em *RSTPR*, Asunción, v. 3, (nº. 6), pp. 123-139.
- Radbruch, G. (1979). *Filosofia do Direito*. Coimbra: Antonio Amado.
- Rajagopal, B. (2005). *El Derecho Internacional desde Abajo: el desarrollo, los movimientos sociales y la resistencia del Tercer Mundo*. Bogotá: ILSA.

- Rancière, J. (2017) *La noche de los proletarios: archivos del sueño obrero*. 2ª. ed. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Rancière, J. (2014). *O ódio à democracia*. São Paulo: Boitempo.
- Rayo, J. T. (2006). *Cultura de Paz, Derechos Humanos y Educación para la Ciudadanía Democrática*. [em linha]. Recuperado de [http://www.aecidcf.org.co/documentos/MI\\_11.669.pdf](http://www.aecidcf.org.co/documentos/MI_11.669.pdf)
- Resende, J. P., Andrade, G. A. (2011). Crime social, castigo social: desigualdade de renda e taxas de criminalidade nos grandes municípios brasileiros. Em *Estudos Econômicos*, São Paulo: FEA-USP, vol. 41 (nº. 1), jan./mar. [em linha]. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-41612011000100007>
- Ribaudo, M. (2017). *Liberismo e ordoliberalismo, detti in breve*. Em *MovES*. Reggio nell'Emilia. [em linha]. Recuperado de <http://www.movimentoesseresinistra.it/blog-movimento/politica/2017/07/01/neoliberalismo-ordoliberalismo/>
- Rist, G. (2002). *El desarrollo: historia de una creencia occidental*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Robl Filho, I. N. (2017). Constituição Mexicana de 1917 e os Avanços dos Direitos Sociais no Brasil. Em *Cuestiones Constitucionales - Revista Mexicana de Derecho Constitucional*. México, (nº. 36), jan.-jun., pp. 361-363,
- Rocha, J. C. S. (2002). Direito Ambiental do Trabalho: reflexo da contemporaneidade. Em *Revista de Direito Sanitário*, São Paulo: USP, v. 3 (nº 1), mar., pp. 118-133.
- Rodríguez, C. (1997). *La decisión judicial: el debate Hart - Dworkin*. Bogotá: Siglo del Hombre-Universidad de Los Andes.
- Rodríguez Garavito, C. (2009). *La globalización del Estado de Derecho*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Ros, C., Wlosko, M. R. (2019). Trabajo y producción subjetiva en docentes investigadores de Universidades Nacionales. Em Antunes, R., Bialakowsky, A. L., Pucci, F., Quiñones, M. (Coords.). (2019). *Trabajo y capitalismo. Relaciones y colisiones sociales. 2019*. Buenos Aires: Teseo-CLACSO.
- Rosenmann, M, R. (2013). *Tiempos de Oscuridad. Historia de los Golpes de Estado en América Latina*. Madrid: Ed. Akal.
- Sá, A. F. (2009). *O conceito de Teologia Política no Pensamento de Carl Schmitt e o Decisionismo como Ficção Jurídica*. Covilhã: LusoSofia.
- Sachsida, A., Mendonça, M. J. C. (2013). Evolução e determinantes da taxa de homicídio no Brasil. *Texto para discussão*, Brasília: IPEA, jan. [em linha]. Recuperado de [http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/973/1/TD\\_1808.pdf](http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/973/1/TD_1808.pdf)
- Salles, L. C. (2014). *Ensino jurídico como atividade especializada do aparelho ideológico escolar*. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia.
- Sanders, M. J. (2012). *O que o dinheiro não compra*. São Paulo: Civilização Brasileira.

- Saramago, J. (2008). Repensar la esperanza (entrevista). Em Estévez, C., Taibo, C. (eds.). *Voces contra la globalización*. Barcelona: Crítica, pp. 315-324.
- Sartre, J. P. (1965). *Colonialismo y Neocolonialismo (Situations V)*. Buenos Aires: Editorial Losada.
- Segade, C. B., Varela, P. G., Lorite, R. H. (2011). *El enfoque basado en Derechos Humanos: Evaluación e Indicadores*. Madrid: AECID-Red en Derecho.
- Serrano, G. P. (2005). *Derechos humanos y educación social*. Em *Revista de Educación*, (nº. 336), pp. 19-39.
- Shaheed, F. (2010). Los derechos humanos son herramientas esenciales para un diálogo intercultural efectivo - Declaración de un grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 2010. [em linha]. Recuperado de [http://www.ohchr.org/Documents/Issues/CulturalRights/Statement\\_cultural\\_diversity21052010\\_sp.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Issues/CulturalRights/Statement_cultural_diversity21052010_sp.pdf)
- Slaughter, S., Leslie, L. L. (1997). *Academic capitalism: politics, policies and the entrepreneurial university*. Baltimore: Johns Hopkins.
- Smith, A. (1981). *Riqueza das Nações (Vol. I)*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Smith, A. (1983). *Riqueza das Nações (Vol. II)*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Soros, G. (1999). *La crisis del capitalismo global: la sociedad abierta en peligro*. 5ª.ed. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Sousa Santos, B. (2000). *A crítica da razão indolente – contra o desperdício da experiência, para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática*. 2ª.ed. São Paulo: Cortez Editora, vol. 1.
- Sousa Santos, B. (2016). *A difícil democracia: reinventar as esquerdas*. São Paulo: Boitempo.
- Sousa Santos, B. (2017). *La difícil democracia*. Madrid: Akal.
- Souza, J. (2018). *Subcidadania brasileira: para entender o país além do jeitinho brasileiro*. Rio de Janeiro: LeYa.
- Stiglitz, J. E. (2012). *El precio de la desigualdade: el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita*. Madrid: Taurus.
- Streck, L. L. (2014). *Hermenêutica jurídica e(m) crise – uma exploração hermenêutica da construção do Direito*. 11ª ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado.
- Tamames, R. (1968). Los Derechos Económicos en la Declaración de Derechos Humanos. Em Aranguren, J. L., Tamames, R., Cordon, F., Campoalange, C. *Los Derechos Humanos*. 5ª. ed., Madrid: Editorial Ciencia Nueva, pp. 29-38.
- Tasioulas, J. (2008). La Realidad Moral de los Derechos Humanos. Em *Anuario de Derechos Humanos 2008*, pp. 41-67. [Em linha]. Recuperado de [www.anuariocdh.uchile.cl](http://www.anuariocdh.uchile.cl)



- Terradillos, J. M. (2017). Explotación laboral, trabajo forzoso, esclavitud. ¿Retos político-criminales para el siglo XXI? Em D'Ambroso, M. J. F. (2017). *Direito do Trabalho, Direito Penal do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e a reforma trabalhista*. São Paulo: LTr, pp. 245-259.
- Terradillos, J. M. (Dir.). (2009). *La siniestralidad laboral. Incidencia de las variables "género", "inmigración" y "edad"*. Albacete: Bomarzo.
- Terradillos, J. M., Acale, M. (Coords.). (2005). *Estudios Jurídicos sobre siniestralidad laboral*. Jerez de la Frontera: Junta de Andalucía (Consejería de Empleo).
- Terradillos, J. M.; Acale, M. (Coords.). (2008). *Nuevas tendencias en Derecho Penal Económico*. Cádiz: UCA.
- Thoreau, H. D. (2017). *A Desobediência Civil*. Porto Alegre: L&PM Pocket.
- Tiburi, M., Casara, R. (2017). Imbecilizadores profissionais. Em *Revista Cult*. [em linha]. Recuperado de <https://revistacult.uol.com.br/home/marcia-tiburi-imbecilizadores-profissionais/>
- Tigar, M. E., Levy, M. R. (1978). *O Direito e a ascensão do capitalismo*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Traverso, E. (2019). *The new faces of fascism: Populism and the Far Right*. Londres: Verso.
- Trindade, A. A. C. (1984). As Nações Unidas e a Nova Ordem Econômica Internacional (com atenção especial aos Estados latino-americanos). Em *Revista Inf. Legislat.*, Brasília, a. 21, (n.º 81), pp. 213-32.
- Trujillo, N. L. (2017). Yayo Herrero: 'El clasismo ambiental afecta a los más pobres (Entrevista). Em *La Marea 54*. [em linha]. Recuperado de <https://www.lamarea.com/2017/11/11/yayo-herrero-el-clasismo-ambiental-afecta-a-los-mas-pobres/>
- Valim, R. (2017). Estado de exceção: a forma jurídica do neoliberalismo. Em *Jornal GGN*. [em linha]. Recuperado de <https://jornalggn.com.br/noticia/estado-de-excecao-a-forma-juridica-do-neoliberalismo-por-rafael-valim>
- Vargas Hernández, J. G. (2005). Neocolonialismo, resistencia, crisis y transformación del estado. Em *Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades*. Año XV (julho-dezembro). [em linha]. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415210>.
- Vasak, K. (Ed.). (1982). *The International dimensions of human rights*. Westport, Paris: Greenwood Press, UNESCO, Vol. 1.
- Veiga, A. (2019). A presunção de aceitação do despedimento como consequência do recebimento da compensação (artigo 366.º do Código do Trabalho) - sua ilusão. Em *Julgar online*. Lisboa, mar. [em linha]. Recuperado de: <http://julgar.pt/wp-content/uploads/2019/03/20190325-ARTIGO-JULGAR-Devolu%C3%A7%C3%A3o-Compensa%C3%A7%C3%A3o-pelo-trabalhador-Antero-Veiga-v4.pdf>
- Warat, L. (1995). *O Direito e sua linguagem*. 2ª. ed. aum. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris.
- Warat, L. A. (1995). Incidentes de ternura - o ensino jurídico, os direitos humanos e a democracia nos tempos do pós-totalitarismo, ensino jurídico: o fracasso de um sonho. Em Borges Filho,

- N. (Org.). (1995). *Direito, Estado, Política e Sociedade em Transformação*. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris/CPGD-UFSC, pp. 127-128.
- Wolkmer, A. C. (1989). *Ideologia, Estado e Direito*. São Paulo: Revista dos Tribunais.
- Wolkmer, A. C. (1991). *Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico*. Porto Alegre: Acadêmica.
- Wolkmer, A. C. et al. (1995). *Direito, Estado, Política e Sociedade em Transformação*. Porto Alegre: Fabris/CPGD-UFSC.
- Zaffaroni, E. R. *Muertes anunciadas*. 2016. Buenos Aires: Punto de Encuentro.
- Zaffaroni, E. R. (2003). *Criminología: aproximación desde un margen*. 3ª. reimp. Bogotá: Temis.
- Zaffaroni, E. R. (2001). Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Revan.
- Zanon Junior, O. L. (2014). Pós-positivismo 3: a versão hermenêutica de Streck. Em *Âmbito Jurídico*. Rio Grande, XVII, (nº. 121), fev.
- Zoja, L. (2015). *La muerte del prójimo*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

### **VII.3 Fontes:**

#### VII.3.1. Legislação supranacional, documentos e tratados internacionais

- Associação das Nações do Sudeste Asiático. Declaração Asiática de Direitos Humanos. Phnom Penh: 2012. [em linha]. Recuperado de [https://www.asean.org/storage/images/ASEAN\\_RTK\\_2014/6\\_AHRD\\_Booklet.pdf](https://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf)
- Conselho da Europa. Convenção Europeia sobre Direitos Humanos. Roma: 1950. [em linha]. Recuperado de [https://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_POR.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf)
- Conselho Islâmico. Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos. Paris: 1981. [em linha]. Recuperado de <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/declaracaoislamica.html>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86: la expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. São José (Costa Rica), 09.05.1986. [em linha]. Recuperado de [www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_06\\_esp.doc](http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_06_esp.doc)
- Fórum Social Mundial. Carta de Princípios. Porto Alegre: 2001. [em linha]. Recuperado de <https://fsm2016.org/en/sinformer/a-propos-du-forum-social-mondial/>
- Organização das Nações Unidas. Oficina do Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 2011. [em linha]. Recuperado de [https://acnudh.org/load/2012/01/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_SP.compressed-ilovepdf-compressed-2.pdf](https://acnudh.org/load/2012/01/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.compressed-ilovepdf-compressed-2.pdf)

- Organização das Nações Unidas. Oficina do Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Princípios e Diretrizes sobre Direitos Humanos e o Tráfico de Pessoas. 2002. [em linha]. Recuperado de <http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/diretrizesprinc-dhtraficopessoas.pdf>
- Organização das Nações Unidas. Declaração do Milênio. Nova Iorque: 2000. [em linha]. Recuperado de <https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/declaracao-do-milenio.html>
- Organização das Nações Unidas. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Nova Iorque: 2000. Recuperado de <https://nacoesunidas.org/tema/odm/>
- Organização das Nações Unidas. Declaração e Programa de Ação de Viena. Viena: 1993. [em linha]. Recuperado de <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/declaracao-e-programa-de-acao-de-viena.html>
- Organização das Nações Unidas. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento). Rio de Janeiro: 1992. [em linha]. Recuperado de [www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf](http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf)
- Organização das Nações Unidas. Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento (Resolução 41/128). Nova Iorque: 1986. [em linha]. Recuperado de <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-ao-Desenvolvimento/declaracao-sobre-o-direito-ao-desenvolvimento.html>
- Organização das Nações Unidas. Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Nova Iorque: 1979. [em linha]. Recuperado de: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/2002/D4377.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm)
- Organização das Nações Unidas. Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano. Estocolmo: 1972. [em linha]. Recuperado de <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-ambiente-humano.html>
- Organização das Nações Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nova Iorque: 1966. [em linha]. Recuperado de <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
- Organização das Nações Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nova Iorque: 1966. [em linha]. Recuperado de <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>
- Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Paris: 1948. [em linha]. Recuperado de <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>
- Organização das Nações Unidas. Carta Constitutiva. São Francisco: 1945. [em linha]. Recuperado de <https://nacoesunidas.org/carta/>
- Organização da Unidade Africana. Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Nairobi: 1981. [em linha]. Recuperado de <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/africa/banjul.htm>

Organização dos Estados Americanos. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. San Jose: 1969. [em linha]. Recuperado de [https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao\\_americana.htm](https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm)

Organização Internacional do Trabalho. Declaração do Centenário da OIT. 108ª Conferência Internacional do Trabalho. Genebra: 2019. [em linha]. Recuperado de [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms\\_706928.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_706928.pdf)

Organização Internacional do Trabalho. Declaração da OIT sobre justiça social para uma globalização justa. Genebra: 2008. [em linha]. Recuperado de [https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS\\_714618/lang--pt/index.htm](https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_714618/lang--pt/index.htm)

Organização Internacional do Trabalho. Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho. Genebra: 1998. [em linha]. Recuperado de [https://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration\\_portuguese.pdf](https://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration_portuguese.pdf)

Organização Internacional do Trabalho. Declaração de Filadélfia. Filadélfia: 1944. [em linha]. Recuperado de: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasil/documents/genericdocument/wcms\\_336957.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasil/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf).

Organização Internacional do Trabalho. Convenções. Genebra: OIT. [em linha]. Recuperado de <http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm>

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. [em linha]. Recuperado de [www.oecd.org/investment/mne/16975360.pdf](http://www.oecd.org/investment/mne/16975360.pdf)

União Europeia. Constituição Europeia. Bruxelas: 2003. [em linha]. Recuperado de <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=OJ:C:2004:310:TOC>

União Europeia. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (versión consolidada Niza). Niza: 2002. Diario Oficial de la Unión Europea C 364, 24 de diciembre de 2002, pp. 33-184.

União Europeia. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Niza: 2000. Diario Oficial de la Unión Europea C 364, 18 de diciembre de 2000, pp. 01-22. [em linha]. Recuperado de [www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_es.pdf](http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf)

### VII.3.2. Legislação nacional

Brasil. Constituição Federal de 1988. Brasília: Presidência da República. [em linha]. Recuperado de [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)

Brasil. Decreto 4377/02, de 13 de setembro de 2002, que promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. [em linha]. Recuperado de: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/2002/D4377.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm)

Brasil. Decreto 591 (1992). Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação. Brasília: Presidência da República. [em linha]. Recuperado de [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/d0591.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm)

Brasil. Decreto 592 (1992). Pacto Internacional sobre Direitos Cívicos e Políticos. Promulgação. Brasília: Presidência da República. [em linha]. Recuperado de [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/d0592.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm)

Brasil. Lei 10835, de 08 de janeiro de 2004. Institui a renda básica de cidadania e dá outras providências. [em linha]. Recuperado de [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/lei/110.835.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.835.htm)

Brasil. Lei 8080 de 1990, de 19 de setembro, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, da organização e do funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, 20 de setembro de 1991, p. 18055.

Brasil. Lei 4504/64, de 30 de novembro de 1964, dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá outras providências. [em linha]. Recuperado de: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L4504.htm#tituloiicapituloivse%C3%A7aoi](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4504.htm#tituloiicapituloivse%C3%A7aoi)

Brasil. Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, de 01 de maio. Diário Oficial da União, 09 de agosto de 1943.

Brasil. Código Penal, de 07 de dezembro de 1940. Diário Oficial da União, 31 de dezembro de 1940, p. 2391.

### VII.3.3. Legislação internacional

Argentina. Constitución de la Nación Argentina. Ley 24430 (1994). Buenos Aires: Presidencia de la Nación. [em linha]. Recuperado de <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>

Argentina. Ley 26.773, de 24 de outubro de 2012, establece el régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. [em linha]. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26773-203798/texto>

Argentina. Ley 20744, de 27 de setembro de 1974, Ley de Contrato de Trabajo. [em linha]. Recuperado de <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=25552>

Espanha. Constitución española de 1978. Madrid: Ministerio de la Presidencia. [em linha]. Recuperado de [https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229)

Espanha. Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de maio, por el que establece el ingreso mínimo vital. [em linha]. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5493>.

Espanha. Real Decreto Legislativo 2/15, de 23 de outubro, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. [em linha]. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf>

Espanha. Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública. Boletín Oficial del Estado, 5 de octubre de 2011, n. 240, p. 104593.

Espanha. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Boletín Oficial del Estado, 10 de noviembre de 1995, n. 269, pp. 32590 a 32611.

França. Código Civil de 1804. [em linha]. Recuperado de: <http://www.assemblee-nationale.fr/evenements/code-civil-1804-1.asp>

Portugal. Constituição de 1976 (Fonte: sítio do parlamento português. Recuperado de <https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/constituicaoorepublicaportuguesa.aspx>).

Portugal. Código do Trabalho, Lei 7/2009. [em linha]. Recuperado de <https://data.dre.pt/eli/lei/7/2009/p/cons/20190904/pt/html>

União Europeia. Diretiva 2000/78/CE, de 27 de Novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional [em linha]. Recuperado de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32000L0078>

#### VII.3.4. Jurisprudência

Argentina. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Autos D.H.R.J. c/ Aegis Argentina S.A. y outro s/despido, sentencia de 29 de marzo de 2019, ponente Dra. Silvia E. Pinto Varela. [em linha]. Recuperado de <https://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/085/552/000085552.pdf>

Argentina. Corte Suprema de Justicia de La Nación. Sentencia de 27 de Septiembre de 2018. Id SAIJ: FA18000076. Recuperado de <http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-recurso-hecho-deducido-demandada-causa-paez-alfonzo-matilde-otro-asociart-art-sa-otro-indemnizacion-fallecimiento-fa18000076-2018-09-27/123456789-670-0008-1ots-eupmocsollaf?>

Argentina. Corte Suprema de la Nación. Causa N°17.768C. *Simón*, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. [em linha]. Recuperado de: <https://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Simon-CSJN.pdf>

Brasil. Supremo Tribunal Federal do Brasil: Processo Rcl 5.758, rel. min. Cármen Lúcia, julg. em 13 de maio de 2009. DJ de 7-8-2009.

Brasil. Supremo Tribunal Federal. Processo HC 87.585/TO, julg. em 12.03.2008. [em linha]. Recuperado de: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/HC87585VISTACM.pdf>

Brasil. Supremo Tribunal Federal. Processo RE 407.688, rel. min. Cezar Peluso, julg. Em 08 de fevereiro de 2006. DJ de 6-10-2006.



- Brasil. Supremo Tribunal Federal. Processo HC 82.424, rel. min. Maurício Corrêa, julg. em 17 de setembro de 2003. DJ de 19-3-2004. Recuperado de: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=17>
- Brasil. Supremo Tribunal Federal. Processo ADI 2.213 MC, rel. min. Celso de Mello, julg. em 04 de abril de 2002. DJ de 23-4-2004.
- Brasil. Supremo Tribunal Federal. Processo Ext 783 QO-QO. Rel. min. Ellen Gracie, voto do min. Celso de Mello, julg. em 28 de novembro de 2001. DJ de 14.11.2003. [em linha]. Recuperado de <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=17>
- Brasil. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula 369. [em linha]. Recuperado de: [http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas\\_com\\_indice/Sumulas\\_Ind\\_351\\_400.html#SUM-369](http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400.html#SUM-369)
- Brasil. Tribunal Superior do Trabalho. Processo Ag-RR-24886-21.2014.5.24.0021, 3ª Turma, rel. min. Mauricio Godinho Delgado. DEJT 04/09/2020. [em linha]. Recuperado de <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#d751e2332ee60e244e88d79be1ad97ad>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Recuperado de: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_179\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_179_esp.pdf)
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Parecer Consultivo OC-6/86, de 9 de maio de 1986. Série A Nº. 6. Governo da República Oriental do Uruguai. [em linha]. Recuperado de [https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha\\_tecnica\\_opinion.cfm?nId\\_Ficha=13&lang=en](https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica_opinion.cfm?nId_Ficha=13&lang=en)
- Espanha. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia n. 730/2019, de 23 de octubre. Recurso de unificación doctrina n. 1790/2017, ponente Excmo. Sr. D. Sebastian Moralo Gallego. [em linha]. Recuperado de <https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-social-n-730-2019-ts-sala-social-sec-1-rec-1790-2017-23-10-2019-48086831>
- Espanha. Tribunal Constitucional da Espanha. Sentencia 118/2019, de 16 de octubre. BOE n. 279, de 20 de noviembre de 2019, ponente: Andrés Ollero Tassara. [em linha]. Recuperado de <https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26061>
- Espanha. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 3 de la Sala de lo Social, Sentencia n. 133/2017, de 23 de febrero (Id Cendoj: 28079340032017100145). [em linha]. Recuperado de: <http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/53b1b1721a75d34a08edc0d7f106b1b1ff2f4990d650bf12>
- Portugal. Suprema Corte de Justiça. 4ª. Secção. Processo. 9224/13.0T2SNT.L1.S1. Rel. Ferreira Pinto. Julg. em 16 de novembro de 2017. [em linha]. Recuperado de <http://www.gde.mj.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/71e1904c958094f2802581db0033c084?OpenDocument>
- União Europeia. Tribunal de Justiça da União Europeia. *Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera*, de 18 de janeiro de 2018. [em linha]. Recuperado de <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198527&doclang=ES>

#### **VII.4. Webgrafia**

- Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. (13 de setembro de 2020). Recuperado de <https://www.ohchr.org>
- Assemblée Nationale Française. (14 de setembro de 2020). Recuperado de: <http://www.assemblee-nationale.fr/>
- Brasil de Fato. 18 de fevereiro de 2019. Sanções dos EUA contra a Venezuela causaram perda de 3 milhões de empregos em 5 anos. Recuperado de <https://www.brasildefato.com.br/2019/02/18/sancoes-dos-eua-contra-a-venezuela-causaram-perda-de-3-milhoes-de-empregos-em-5-anos/>
- Carel, I. (19 de julho de 2017). ¿Qué son los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos? Foro sobre Empresas y Derechos Humanos. Recuperado de: <http://panorama.ridh.org/que-son-los-principios-rectores-sobre-empresas-y-derechos-humanos/>
- Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego de Portugal. (14 de setembro de 2020). Recuperado de <http://cite.gov.pt/asstscite/downloads/legislacao/CT20032018.pdf#page=136>
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. (14 de setembro de 2020). Recuperado de <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/34-Principios-universalidad.pdf>
- Conferência de Bandung. (13 de setembro de 2020). Recuperado de [https://www.ecured.cu/Conferencia\\_de\\_Bandung](https://www.ecured.cu/Conferencia_de_Bandung)
- Consejo General del Poder Judicial de España. (13 de setembro de 2020). Recuperado de <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/>
- Corriere della Sera. 01 de fevereiro de 2018. Amazon brevetta il bracciale elettronico che controlla i lavoratori: scoppia la polemica. Recuperado de [https://www.corriere.it/cronache/18\\_febbraio\\_01/amazon-brevetta-bracciale-elettronico-che-controlla-lavoratori-scoppia-polemica-6eacf7d2-0760-11e8-8886-af603f13b52a.shtml](https://www.corriere.it/cronache/18_febbraio_01/amazon-brevetta-bracciale-elettronico-che-controlla-lavoratori-scoppia-polemica-6eacf7d2-0760-11e8-8886-af603f13b52a.shtml)
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (14 de setembro de 2020). Repositório de jurisprudência. Recuperado de <https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (13 de setembro de 2020). Digesto de jurisprudencia da CIDH. Recuperado de: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_179\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_179_esp.pdf)
- Deutsche Welle. 12 de março de 2017. 1947: Divulgada a Doutrina Truman. Recuperado de <https://www.dw.com/pt-br/1947-divulgada-a-doutrina-truman/a-305913>
- Diario Judicial.com. 09 de agosto de 2020. La identidad es un derecho. Recuperado de <https://www.diariojudicial.com/nota/84131>
- El Observatorio de Condiciones de Trabajo. España. (19 de julio de 2018). Recuperado de: <http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/>

Estadão. 09 de novembro de 2018. “Ou todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego”, diz Bolsonaro. Recuperado de <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,recebi-projetos-sobre-previdencia-e-pouco-sera-aproveitado-diz-bolsonaro,70002599184>

Estratégia Española de Seguridad y Salud em el Trabajo 2015-2020 (en catálogo). (20 de julio de 2018). Recuperado de: <http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a366300cfa2cc410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD>

EUR-Lex. (14 de setembro de 2020). Recuperado de <https://eur-lex.europa.eu>

Fiscalía Especialista en Materia de Siniestralidad Laboral. (19 de julio de 2018). Recuperado de: [https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal\\_especialista/siniestralidad\\_laboral/](https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/fiscal_especialista/siniestralidad_laboral/)

Fórum Social das Resistências: Democracia e Direitos dos Povos e do Planeta. Brasil. (13 de setembro de 2020). Recuperado de <http://forumsocialportoalegre.org.br/forum-social-mundial/>

Fundacentro. Brasil. (19 de julio de 2018). Recuperado de: <http://www.fundacentro.gov.br/>

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). España. (19 de mayo de 2018). Recuperado de: <http://www.insht.es/portal/site/Insht/>

Instituto Nacional de Seguridade Social. Brasil. (18 de julio de 2018). Recuperado de: <https://www.inss.gov.br/>

Ministério da Economia. Secretaria Especial da Fazenda. (15 de setembro de 2020). Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. Recuperado de <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/atuacao-internacional/ponto-de-contato-nacional/diretrizes-da-ocde-para-empresas-multinacionais>

Ministério da Justiça de Portugal. (14 de setembro de 2020). Bases jurídico-documentais do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. Recuperado de <http://www.gde.mj.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/71e1904c958094f2802581db0033c084?OpenDocument>

Ministério de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. SAJJ. (13 de setembro de 2020). Recuperado de <http://www.sajj.gob.ar/>

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. España. (19 de julio de 2018). Recuperado de: <http://www.empleo.gob.es/>

Ministério do Trabalho. Brasil. (19 de julio de 2018). Recuperado de: <http://trabalho.gov.br/>

Ministério Público de Portugal. Gabinete de Documentação e Direito Comparado. (13 de setembro de 2020). Recuperado de: <http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/diretrizesprinc-dhtraficopessoas.pdf>

Ministério Público do Trabalho. Brasil. (19 de julio de 2018). Recuperado de: [http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal\\_mpt/mpt/ompt](http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/ompt)

- Organização das Nações Unidas. (19 de julio de 2018). Recuperado de: <http://www.un.org/es/index.html>
- Organização das Nações Unidas. (13 de setembro de 2020). Informe Social Mundial 2020: la desigualdad en un mundo en rápida transformación. Recuperado de <https://news.un.org/es/story/2020/01/1468241>
- Organização das Nações Unidas. (13 de setembro de 2020). O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a agência líder da rede global de desenvolvimento da ONU e trabalha principalmente pelo combate à pobreza e pelo Desenvolvimento Humano. Recuperado de <https://nacoesunidas.org/agencia/pnud/>
- Organização das Nações Unidas. 16 de junho de 2011. Conselho de Direitos Humanos aprova princípios orientadores para empresas. Recuperado de <https://nacoesunidas.org/conselho-de-direitos-humanos-aprova-principios-orientadores-para-empresas/>
- Organização dos Estados Americanos. (13 de setembro de 2020). Recuperado de <http://www.oas.org/es/default.asp>
- Organização dos Estados para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. (19 de julho de 2018). Recuperado de: <https://www.oecd.org/spain/>
- Organização Internacional do Trabalho. (19 de julio de 2018). Recuperado de: <http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm>
- OXFAM. (13 de setembro de 2020). Resumo executivo de janeiro de 2017 (Uma economia para os 99%). Recuperado de <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620170/bp-economy-for-99-percent-161017-summ-pt.pdf?sequence=31&isAllowed=y>
- Palácio do Planalto. Subchefia para Assuntos Jurídicos. (13 de setembro de 2020). Recuperado de <http://www.planalto.gov.br>
- Parlamento português. (14 de setembro de 2020). Recuperado de <https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/constituicaoerepublicaportuguesa.aspx>
- PMI.It. 22 de maio de 2020. Reddito di Emergenza e Reddito di Cittadinanza: differenze. Recuperado de <https://www.pmi.it/economia/lavoro/333124/reddito-di-emergenza-e-reddito-di-cittadinanza-differenze.html>
- PNUD. O que é o IDH. Acesso em 13 de setembro de 2020. Recuperado de <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html>
- Poder Judicial de España. (19 de julho de 2018). Recuperado de: [http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder\\_Judicial](http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial)
- Real Academia Española. (13 de setembro de 2020). Recuperado de <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=sostenible>

- Revista Exame, publicada em 26 de maio de 2014, intitulada “*Jeff Bezos, da Amazon, é eleito o pior chefe do mundo*”. Recuperado de <https://exame.com/negocios/jeff-bezos-da-amazon-e-eleito-o-pior-chefe-do-mundo/> Também em notícia mais recente, divulgando a oposição do governo da Itália à prática da empresa, no jornal
- Revista Galileu. 23 de junho de 2016. Escravos da moda: os bastidores nada bonitos da indústria fashion. Recuperado de <https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2016/06/escravos-da-moda-os-bastidores-nada-bonitos-da-industria-fashion.html>
- Sabedoria Política. (13 de setembro de 2020). Breve biografia de John Maynard Keynes compilada por Alexandro M. Medeiros. Recuperado de <https://www.sabedoria politica.com.br/filosofia-politica/filosofia-contempor%C3%A2nea/john-keynes/>
- Seguridad Social. España. (19 de julho de 2018). Recuperado de <http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio>
- Supremo Tribunal Federal. (13 de setembro de 2020). Legislação anotada pelo STF, A Constituição e o Supremo. Recuperado de: <http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=17>
- The New York Times Magazine. 28 de março de 1999. Manifesto for the fast world. Recuperado de <https://www.nytimes.com/1999/03/28/magazine/a-manifesto-for-the-fast-world.html>
- The New York Times. 27 de fevereiro de 1997. Job Insecurity of Workers Is a Big Factor in Fed Policy. Repórter Louis Uchitelle. Recuperado de <https://www.nytimes.com/1997/02/27/business/job-insecurity-of-workers-is-a-big-factor-in-fed-policy.html>.
- Tribunal Europeu de Direitos Humanos. (13 de setembro de 2020). Recuperado de <https://www.echr.coe.int/>
- Tribunal Superior do Trabalho. Brasil. (19 de julho de 2018). Recuperado de: <http://www.tst.jus.br/>
- Tribunal Superior do Trabalho. Brasil. (14 de setembro de 2020). Recuperado de <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#d751e2332ee60e244e88d79be1ad97ad>
- Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Brasil. (19 de julho de 2018). Recuperado de <https://www.trt4.jus.br/portais/trt4>
- Universidade de São Paulo. Biblioteca virtual de Direitos Humanos. Brasil. (13 de setembro de 2020). Recuperado de <http://www.direitoshumanos.usp.br>
- Universidade de São Paulo. Biblioteca virtual de Direitos Humanos. 13 de setembro de 2020. Memorial descritivo do Tribunal Penal Internacional. Recuperado de <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Tribunal-Penal-Internacional/o-que-e.html>.

UOL notícias. 05 de junho de 2020. Bolsonaro ameaça retirar Brasil da OMS, a exemplo dos EUA. Recuperado de: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/06/05/bolsonaro-ameaca-retirar-brasil-da-oms-a-exemplo-dos-eua.htm>

UOL. Página do professor Dráuzio Varella sobre doenças e sintomas. (14 de setembro de 2020). Síndrome de burnout (esgotamento profissional). Recuperado de: <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/sindrome-de-burnout-esgotamento-profissional/>

Valor Econômico. 29 de agosto de 2016. Tributação de empresas deve mudar nos EUA após eleição. Recuperado de: <https://www.valor.com.br/internacional/4690129/tributacao-de-empresas-dos-eua-deve-mudar-apos-eleicao>



ANEXO (LEGISLAÇÃO HISTÓRICA)<sup>540</sup>

*Décret du 17 juin 1791 relatif aux assemblées d'ouvriers et artisans de même état et profession*<sup>541</sup>

**Article 1**

L'anéantissement de **toutes espèces de corporations** des citoyens du même état ou profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit.

**Article 2**

Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs **prétendus intérêts communs**.

**Article 3**

Il est interdit à tous les corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition pour la dénomination d'un état ou profession, d'y faire aucune réponse; et il leur est enjoint de **déclarer nulles les délibérations** qui pourraient être prises de cette manière, et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite ni exécution.

**Article 4**

Si, contre les principes de la liberté et de la constitution, des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, ou faisaient entre eux des conventions tendant à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations et conventions, accompagnées ou non du serment, sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la **Déclaration des Droits de l'Homme**, et de nul effet; les corps administratifs et municipaux seront tenus de les déclarer telles. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal de police, à la requête du **procureur de la commune**, condamnés chacun en 500 livres d'amende, et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyen actif et de l'entrée dans toutes les assemblées primaires.

**Article 5**

Il est défendu à tous corps administratifs et municipaux, à peine par leurs membres d'en répondre en leur propre nom, d'employer, admettre ou souffrir qu'on admette aux ouvrages de leurs professions dans aucuns travaux publics, ceux des entrepreneurs, ouvriers et compagnons qui provoqueraient ou signeraient lesdites délibérations ou conventions, si ce n'est dans le cas où, de leur propre mouvement, ils se seraient présentés au greffe du **tribunal de police** pour se rétracter ou désavouer.

**Article 6**

Si lesdites délibérations ou convocations, affiches apposées, lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des actes ou écrits seront punis d'une **amende** de 1000 livres chacun et de trois mois de **prison**.

**Article 7**

Ceux qui useraient de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la **liberté accordée par les lois constitutionnelles au travail et à l'industrie**, seront poursuivis par la voie criminelle et punis suivant la rigueur des lois comme perturbateurs du repos public.

---

<sup>540</sup> Organizadas por ordem cronológica.

<sup>541</sup> Fonte: sítio *Institutions Professionnelles*. Recuperado de: <https://institutions-professionnelles.fr/reperes/documents/119-1791-la-loi-le-chapelier-interdit-les-corporations>. Acesso 20 agosto 2020.

**Article 8**

*Tous attroupements composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail appartenant à toutes sortes de personnes, et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré, ou contre l'action de la police et l'exécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques de diverses entreprises, seront tenus pour attroupements séditieux et, comme tels, ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur en seront faites, et punis selon toute la rigueur des lois sur les auteurs, instigateurs et chefs desdits attroupements, et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence.*

**Décret du 17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes<sup>542</sup>**

**Article 1**

À compter du 1<sup>er</sup> avril prochain, les droits connus sous le nom de **droits d'aides**, perçus par inventaire ou à l'enlèvement, la vente ou revente en gros, à la circulation, à la vente en détail sur les boissons; ceux connus sous le nom **d'impôts et billots et devoirs** de Bretagne, **d'équivalent du Languedoc**, de **masphaneng** en Alsace, le privilège de la vente exclusive des boissons dans les lieux qui y étaient sujets; le droit des quatre membres et autres de même nature, perçus dans les ci-devant provinces de Flandre, Hainaut, Artois, Lorraine et Trois-Évêchés; le **droit d'inspecteur aux boucheries**, et tous autres droits d'aides ou réunis aux aides, et perçus à l'exercice dans toute l'étendue du royaume; les droits sur les papiers et cartons; le droit maintenant perçu sur les cartes à jouer, et autres dépendant de la **régie générale**, même les **droits perçus pour les marques et plombs** que les manufacturiers et fabricants étaient tenus de faire apposer aux étoffes et autres objets provenant de leurs fabriques et manufactures, manufactures, sont abolis.

**Article 2**

À compter de la même époque, les **offices** de perruquiers-barbiers-baigneurs-étuvistes, ceux des agents de change, et tous autres offices pour l'inspection et les travaux des arts et du commerce, les brevets et les lettres de maîtrise, les droits perçus pour la réception des maîtrises et jurandes, ceux du collège de pharmacie, et tous privilèges de professions, sous quelque dénomination que ce soit, sont également supprimés. Le **comité de judicature** proposera incessamment un projet de décret sur le mode et le taux des remboursements des offices mentionnés au présent article.

**Article 3**

Les particuliers qui ont obtenu des maîtrises et jurandes, ceux qui exercent des professions en vertu de privilèges ou brevets, remettront au commissaire chargé de la liquidation de la dette publique, leurs titres, brevets et quittances de finance, pour être procédé à la liquidation des indemnités qui leur sont dues, lesquelles indemnités seront réglées sur le pied des fixations de **l'édit du mois d'août 1776** et autres subséquents, et à raison seulement des sommes versées au Trésor public, de la manière ci-après déterminée.

**Article 4**

Les particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes depuis le 4 août 1789 seront remboursés de la totalité des sommes versées au Trésor public. À l'égard de ceux dont la réception est antérieure à l'époque du 4 août 1789, il leur sera fait déduction d'un trentième par année de jouissance, cette déduction néanmoins ne pourra s'étendre au-delà des deux tiers du prix total; et ceux qui jouissent depuis vingt ans et plus recevront le tiers des sommes fixées par l'édit d'août 1776 et autres subséquents. Les remboursements ci-dessus énoncés seront faits par la caisse de l'extraordinaire; mais ils n'auront point lieu pour les particuliers qui auraient renoncé à leur commerce depuis plus de deux ans. Quant aux particuliers aspirant à la maîtrise, qui justifieront avoir payé des sommes à compte sur le prix de la maîtrise qu'ils voulaient obtenir et qui, à la faveur de ces paiements, joui de la faculté d'exercer leur profession, ils seront remboursés de ces avances, dans les proportions ci-dessus fixées pour les maîtres qui ont payé en entier le prix de la maîtrise.

---

<sup>542</sup> Fonte: sítio *Institutions Professionnelles*. Recuperado de: <https://institutions-professionnelles.fr/reperes/documents/120-1791-le-decret-d-allarde-supprime-les-maitrises-et-jurandes>. Acesso 20 agosto 2020.

**Article 5**

Les *syndics des corps et communautés d'artisans et marchands* seront tenus de représenter ou de rendre leurs comptes aux municipalités, lesquelles les vérifieront, formeront l'état général des dettes actives et passives et biens de chaque communauté. Ledit état sera envoyé aux *directoires* de district et de département, qui, après vérification le feront passer au commissaire du Roi chargé de la liquidation de la dette publique, lequel en rendra compte au comité des finances, pour en être par lui fait rapport à l'*Assemblée nationale*. Le commissaire du Roi ne pourra néanmoins surseoir à la liquidation des remboursements des offices de chaque individu; il se fera remettre les états, titres, pièces et renseignements nécessaires pour constater l'état actuel, et achever, s'il y a lieu, la liquidation des dettes contractées antérieurement au mois de février 1776, par les corps et communautés.

**Article 6**

Les fonds existant dans les caisses des différentes corporations, après l'apurement des comptes, qui seront rendus au plus tard dans le délai de six mois à compter de la promulgation du présent décret, seront versés dans la caisse du district, qui en tiendra compte à celle de l'extraordinaire. Les propriétés soit mobilières, soit immobilières desdites communautés, seront vendues dans la forme prescrite pour l'aliénation des biens nationaux et le produit desdites ventes sera pareillement versé dans la caisse de l'extraordinaire.

**Article 7**

À compter du 1<sup>er</sup> avril prochain, il sera libre à toute personne de **faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon**; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une **patente**, acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. Sont exceptés de l'obligation de se pourvoir de patentes: 1° Les fonctionnaires publics exerçant des fonctions gratuites, ou salariés par le Trésor public, pourvu néanmoins qu'ils n'exercent point d'autres professions étrangères à leurs fonctions; 2° Les cultivateurs occupés aux exploitations; 3° Les personnes qui ne sont pas comprises au rôle de la contribution mobilière pour la taxe de trois journées de travail; 4° Les apprentis, compagnons et ouvriers à gages, travaillant dans les ateliers de fabricants pourvus de patentes; 5° Les propriétaires et les cultivateurs pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions excepté le cas où ils vendraient les boissons de leur cru à pinte et à pot; 6° Les vendeurs et vendeuses de fleurs, fruits, légumes, poissons, beurre et œufs, vendant dans les rues, halles et marchés publics, ne sont point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu'ils n'aient ni boutiques ni échoppes, et qu'ils ne fassent aucun autre négoce, à la charge par eux de se conformer aux règlements de police.

**Article 9**

Tout particulier qui voudra se pourvoir de patente en fera, dans le mois de décembre de chaque année, à la municipalité du ressort de son domicile, sa déclaration, laquelle sera inscrite sur un registre à souche; il lui en sera délivré un certificat coupé dans la feuille de sa déclaration. Ce certificat contiendra son nom et la valeur locative de ses habitation, boutique, magasin et atelier. Il se présentera ensuite chez le receveur de la contribution auquel il paiera comptant le quart du prix de la patente, suivant les taux ci-après fixés, et fera sa soumission de payer le surplus par parties égales, dans les mois de mars, juin et septembre. Ce receveur délivrera quittance de l'acompte et récépissé de la soumission, au dos du certificat; et sur la représentation de ces certificat, quittance et récépissé, qui seront déposés et enregistrés aux archives du district, la patente lui sera délivrée au secrétariat du directoire pour l'année suivante. Ceux qui auront payé le quart du prix de leurs patentes et qui négligeront d'acquitter les autres parties aux termes fixés y seront contraints comme pour le paiement de la contribution mobilière. Les déclarations, certificats, quittances, soumissions et patentes, seront sur papier timbré, et conformes aux modèles annexés au présent décret.

**Article 10**

*Ceux qui voudront faire le négoce ou exercer une profession, art et métier quelconque, quelconque, la présente année, seront tenus de se présenter à leurs municipalités avant le 1<sup>er</sup> avril prochain et de remplir, avant la fin du même mois, les formalités prescrites par les articles précédents. Ils acquitteront un tiers du droit et fourniront leur soumission de payer un second tiers dans le courant de juillet prochain et le surplus dans le courant d'octobre suivant. La jouissance des patentes qui leur seront délivrées commencera au 1<sup>er</sup> avril prochain et les prix en seront fixés aux trois-quarts des patentes qui, dans la suite, seront accordées pour une année.*

**Article 11**

*Les particuliers qui, dans le courant d'une année, voudront se pourvoir de patentes, en auront la faculté en remplissant les formalités prescrites, et le droit sera compté pour le restant de l'année à dater du premier jour du quartier dans lequel ils auront demandé des patentes.*

**Article 12**

*Les prix des patentes annuelles pour les négoces, arts, métiers et professions, autres que ceux qui seront ci-après exceptés, sera réglé à raison du prix du loyer, ou de la valeur locative de l'habitation des boutiques, magasins et ateliers occupés par ceux qui les demanderont, et dans les proportions suivantes: - 2 sous pour livre du prix du loyer jusqu'à 400 livres; 2 sous 6 deniers pour livre, depuis 400 jusqu'à 800 livres; et 3 sous pour livre au-dessus de 800 livres.*

**Article 13**

*Les boulangers qui n'auront pas d'autre commerce ou profession ne paieront que la moitié du prix des patentes réglé par l'article précédent.*

**Article 14**

*Les particuliers qui voudront réunir à leur négoce, métier ou profession, les professions de marchands de vin, brasseurs, limonadiers, distillateurs, vinaigriers, marchands de bière et de cidre, aubergistes, hôteliers donnant à boire et à manger, traiteurs-restaurateurs, les fabricants et débitants de cartes à jouer, les fabricants et débitants de tabac, ceux mêmes qui n'exerceraient que les professions ci-dessus dénommées, paieront leurs patentes dans les proportions suivantes, savoir: - 30 livres quand le loyer total de leur habitation et dépendances sera de 200 livres et au-dessous; 3 sous 6 deniers pour livre du prix de ce loyer, quand il sera au-dessus de 200 livres, jusques et compris 400 livres; 4 sous pour livre du prix de ce loyer quand il surpassera 100 livres, jusques et compris 100 livres; 4 sous 6 deniers quand il sera de 600 livres à 800 livres; et enfin 5 sous pour livre pour les loyers au-dessus de 800 livres.*

**Article 15**

*Il sera délivré des patentes pour un ou plusieurs mois aux propriétaires et cultivateurs qui voudront vendre en détail des boissons leur cru; le prix desdites patentes sera de 3 livres par mois: elles ne seront délivrées qu'après l'accomplissement des formalités prescrites et que le prix en aura été acquitté entre les mains du préposé au recouvrement des contributions mobilières et d'habitation; mais ces patentes ne pourront être accordées pour plus de six mois dans le cours de l'année: au-delà de ce terme, elles seront réputées patentes annuelles et seront payées comme telles.*

**Article 16**

*Les colporteurs exerçant le négoce dans les villes, campagnes, foires et marchés, les forains exerçant le négoce ou leur profession hors de leur domicile et hors les temps de foires, seront tenus de se pourvoir de **patentes particulières et spéciales**, conformément aux modèles annexes au présent décret, et après avoir rempli les formalités prescrites. Le prix entier des patentes des colporteurs et forains sera payé comptant et fixé suivant les proportions de l'article 12, mais ne pourra être au-dessous de 10 livres pour les marchands portant la balle, de 50 livres pour ceux qui emploieront à leur commerce un cheval ou autre bête de somme, et de 80 livres pour ceux qui se serviront*

*d'une voiture, quand même le prix du loyer de leur domicile établirait une proportion inférieure. Lesdits colporteurs et marchands forains seront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de justifier de leur domicile et de leur taxe mobilière et d'habitation, même de représenter leur patente de colporteur ou forain aux officiers municipaux des lieux où ils exerceront leur commerce.*

**Article 17**

*Il sera versé 2 sous pour livre du prix de chaque patente dans la caisse de la commune pour servir à ses dépenses particulières. Les **officiers municipaux** tiendront la main à ce qu'aucun particulier ne s'imisce dans l'exercice des professions assujetties à des patentes par le présent décret, sans avoir rempli les formalités ci-devant prescrites, et sans avoir acquitté le droit.*

**Article 18**

*Tout particulier qui aura obtenu une patente sera obligé, avant d'en faire usage, de la rapporter à la municipalité, où il sera apposé un visa au bas de la déclaration prescrite par l'article 9. Tout colporteur et forain sera de plus obligé de faire viser sa patente dans toutes les municipalités, autres que celles de son domicile. Est excepté de cette règle le forain en temps de foire seulement. Il sera dressé, dans chaque municipalité, une liste ou un registre alphabétique des noms des personnes qui auront obtenu une patente ainsi que de ceux des forains ou colporteurs qui auront fait viser les leurs. Cette liste sera déposée au secrétariat de la municipalité et il sera libre à toute personne de la voir.*

**Article 19**

*Tout particulier qui fera le négoce, exercera une profession, art ou métier quelconque, sans avoir rempli les formalités prescrites dans les articles précédents et s'être pourvu d'une patente, sera condamné à **une amende du quadruple du prix fixé pour la patente** dont il aurait dû se pourvoir.*

**Article 20**

*Les marchandises qui seront fabriquées ou mises en vente par des personnes non pourvues de patentes seront confisquées.*

**Article 21**

*Toute personne non inscrite sur le registre des pourvus de patentes pourra être appelée au tribunal de district, à la réquisition du procureur-syndic du département, de celui du district ou du procureur de la commune, pour déclarer, audience tenante, s'il exerce ou non une profession sujette à la patente et, en cas d'aveu, être condamné aux peines prescrites par le présent décret.*

**Article 22**

*Aucun particulier assujetti à prendre une patente ne pourra former de demande en justice pour raison de son négoce, profession art ou métier; ni faire valoir aucun acte qui s'y rapporte, par forme ou par moyen d'exception et défense, ou enfin passer aucun acte, traité ou transaction en forme authentique qui y soit relatif, s'il ne produit sa patente en original ou en expédition; et il en sera fait mention en tête de l'acte ou exploit. Tout huissier et notaire qui contreviendra à cette disposition sera condamné à 50 livres d'amende pour chaque contravention; en cas de récidive, à 500 livres. Aucun acte civil ou judiciaire, aucun exploit fait en contravention au présent article, non plus qu'aucun acte sous seing privé relatif à l'exercice d'une profession soumise à la patente, ne pourront être admis à l'enregistrement si la patente, en original ou en expédition, prescrite pour l'exercice de la profession à laquelle se rapportent lesdits actes ou exploits, n'est représentée au receveur, qui en fera mention, à peine de 50 livres d'amende pour chaque contravention et de 500 livres en cas de récidive.*

*Nul ne pourra pareillement présenter ses registres au juge pour recevoir la cote et le paraphe, dans le cas où ces formalités sont prescrites par les lois pour l'exercice des professions assujetties à la patente, s'il ne produit en même temps la patente prescrite en original et en expédition; et le juge ne pourra, en ce cas, apposer sa cote et son paraphe, à peine de 50 livres d'amende pour*



chaque contravention. Nul ne pourra être inscrit sur la liste des personnes éligibles aux **tribunaux de commerce** ou sur celles des officiers servant près des tribunaux, ou assermentés et sujets à la patente, si elle n'a produit sa patente en original ou en expédition.

Les **commissaires du Roi** près des tribunaux veillent à l'exécution du présent décret.

**Article 23**

Moyennant le paiement d'un triple droit, il sera délivré des patentes de supplément à ceux qui, ayant des actions à exercer ou des défenses à proposer pour raison d'une profession soumise à la patente, auraient négligé de s'en pourvoir.

**Article 24**

Nul ne sera admis à faire déduire de sa **contribution mobilière** la **taxe proportionnelle** à la valeur locative de ses ateliers, chantiers, boutiques et magasins, qu'il n'ait produit sa patente en original ou en expédition.

**Article 25**

Toute personne pourvue d'une patente pourra, en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des marchandises fabriquées ou vendues par des fabricants, ouvriers ou marchands dont les noms ne seraient pas inscrits dans la liste ou registre qui sera tenu au secrétariat des municipalités en vertu de l'article 18 et en poursuivre la confiscation. Le **procureur de la commune** sera obligé de faire ses réquisitions et poursuites quand il y aura lieu.

**Article 26**

Tout procureur de commune qui aura connaissance d'une profession, fabrication ou négoce exercé sans patente et sans être poursuivi dans d'une autre municipalité du même district, requerra la saisie et poursuivra la confiscation des marchandises ainsi fabriquées ou vendues en contravention. Les procureurs-syndics de district feront, dans les mêmes cas, les mêmes poursuites et réquisitions dans toute l'étendue de leur district, les procureurs-syndics de département dans toute l'étendue de leur département.

**Article 27**

En cas de poursuites exercées par des particuliers pourvus de patentes, le produit des amendes et confiscations sera partagé par moitié entre le Trésor public et eux; en cas de poursuites de la part d'un procureur de commune, le produit sera partagé entre la caisse municipale et le Trésor public. En cas de poursuites de la part d'un procureur-syndic de district ou de département, le produit appartiendra entièrement au Trésor public et sera, dans le premier cas, appliqué aux besoins des particuliers du district ; dans le second, à ceux du département.

**Article 28**

Les contraventions seront constatées et poursuivies dans les formes prescrites pour les procédures civiles et devant les tribunaux de district.

Le présent décret sera porté sans délai à l'acceptation du Roi.

**LEI N. 108 - DE 11 DE OUTUBRO DE 1837<sup>543</sup>**

***Dando varias providencias sobre os Contractos de locação de serviços dos Colonos.***

O Regente interino em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II faz saber a todos os Subditos do Imperio que a Assembléa Geral Legislativa Decretou e elle sancionou a Lei seguinte.

**Art. 1º** O contracto de locação de serviços, celebrado no Imperio, ou fóra, para se verificar dentro d'elle, pelo qual algum estrangeiro se obrigar como locador, só póde provar-se por escripto. Se o ajuste fór tratado com interferencia de alguma Sociedade de Colonisação reconhecida pelo Governo no Municipio da Côrte, e pelos Presidentes nas Provincias, os titulos por ellas passados, e as certidões extrahidas dos seus livros, terão fé publica para prova do contracto.

**Art. 2º** Sendo os estrangeiros menores de vinte hum annos perfeitos, que não tenham presentes seus pais, tutores, ou curadores, com os quaes se possa validamente tratar, serão os contractos autorizados, pena de nullidade, com assistencia de hum curador, o qual será igualmente ouvido em todas as duvidas, e acções, que dos mesmos contractos se originarem, e em que algum locador menor fôr parte, debaixo da expressada pena.

**Art. 3º** Para este fim, em todos os Municipios, onde houver Sociedades de Colonisação, haverá hum Curador geral dos colonos, nomeado pelo Governo na Côrte, e pelos Presidentes nas Provincias, sobre Proposta das Mesas de Direcção das mesmas Sociedades.

Nos outros Municipios servirão os Curadores geraes dos orphãos. Nas faltas, ou impedimentos de huns e outros, nomearão as sobreditas Mesas de Direcção para autorisação dos contractos, e os Juizes respectivos para os casos das acções que se moverem, pessoa idonea que o substitua.

**Art. 4º** Não apresentando os menores documento legal da sua idade, será esta estimada no acto do contracto, á vista da que elles declararem, e parecer que podem ter; e ainda que depois o apresentem, este não valerá para annullar o contracto, mas se estará pela idade, que no acto deste se houver estimado, para os effeitos sómente da validade do mesmo contracto.

**Art. 5º** He livre aos estrangeiros de maior idade ajustarem seus serviços pelos annos que bem lhes parecerem; mas os menores não poderão contractar-se por tempo que exceda á sua menoridade, excepto se fôr necessario que se obriquem por maior prazo para indemnisação das despezas com elles feitas, ou se forem condemnados a servir por mais tempo, em pena de terem faltado ás condições do contracto,

**Art. 6º** Em todos os contractos de locação de serviços, que se celebrarem com os mesmos menores, se designará a parte da soldada que elles devão receber para suas despezas, que não poderá nunca exceder da metade: a outra parte, depois de satisfeitas quaesquer quantias adiantadas pelo locatario, ficará guardada em deposito na mão deste, se fôr pessoa notoriamente abonada, ou não sendo, prestará fiança idonea para ser entregue ao menor, logo que acabar o tempo de serviço a que estiver obrigado, e houver sahido da menoridade. Fóra destes casos será recolhida no cofre dos Orphãos do Municipio respectivo.

Nos Municipios, onde houver Sociedades de Colonisação reconhecidas pelo Governo, serão taes dinheiros guardados nos cofres das mesmas Sociedades.

**Art. 7º** O locatario de serviços, que, sem justa causa despedir o locador antes de se findar o tempo por que o tomou, pagar-lhe-ha todas as soldadas, que este devêra ganhar, se o não despedira. Será justa causa para a despedida:

1º Doença do locador, por fôrma que fique impossibilitado de continuar a prestar os serviços para que foi ajustado.

<sup>543</sup> Fonte: Senado Federal do Brasil. Leis do Império. Recuperado de: <http://legis.senado.leg.br/norma/541072/publicacao/15632760>. Acesso em 20 agosto 2020.

2º Condemnação do locador á pena de prisão, ou qualquer outra que o impeça de prestar serviço.

3º Embriaguez habitual do mesmo.

4º Injúria feita pelo locador á seguridade, honra, ou fazenda do locatario, sua mulher, filhos, ou pessoa de sua familia.

5º Se o locador, tendo-se ajustado para o serviço determinado, se mostrar imperito no desempenho do mesmo serviço.

**Art. 8º** Nos casos do numero 1º e 2º do artigo antecedente, o locador despedido, logo que cesse de prestar o serviço, será obrigado a indemnizar o locatario da quantia que lhe dever. Em todos os outros pagar-lhe-ha tudo quanto dever, e se não pagar logo, será immediatamente preso, e condemnado a trabalhar nas obras publicas por todo o tempo que fôr necessario, até satisfazer com o producto liquido de seus jornaes tudo quanto dever ao locatario, comprehendidas as custas a que tiver dado causa.

Não havendo obras publicas, em que possa ser admittido a trabalhar por jornal, será condemnado a prisão com trabalho, por todo o tempo que faltar para completar o do seu contracto: não podendo todavia a condemnação exceder a dous annos.

**Art. 9º** O locador, que, sem justa causa, se despedir, ou ausentar antes de completar o tempo do contracto, será preso onde quer que fôr achado, e não será solto, em quanto não pagar em dobro tudo quanto dever ao locatario, com abatimento das soldadas vencidas: se não tiver com que pagar, servirá ao locatario de graça todo o tempo que faltar para o complemento do contracto. Se tornar a ausentar-se será preso e condemnado na conformidade do artigo antecedente.

**Art. 10.** Será causa justa para rescisão do contracto por parte do locador:

1º Faltando o locatario ao cumprimento das condições estipuladas no contracto.

2º Se o mesmo fizer algum ferimento na pessoa do locador, ou o injuriar na honra de sua mulher, filhos, ou pessoa de sua familia.

3º Exigindo o locatario, do locador, serviços não comprehendidos no contracto.

Rescindindo-se o contracto por alguma das tres sobreditas causas, o locador não será obrigado a pagar ao locatario qualquer quantia de que possa ser-lhe devedor.

**Art. 11.** O locatario, findo o tempo do contracto, ou antes rescindindo-se este por justa causa, he obrigado a dar ao locador hum attestado de que está quite do seu serviço: se recusar passa-lo, será compellido a faze-lo pelo Juiz de Paz do districto. A falta deste titulo será razão sufficiente para presumir-se que o locador se ausentou indevidamente.

**Art. 12.** Toda a pessoa que admittir, ou consentir em sua casa, fazendas ou estabelecimentos, algum estrangeiro, obrigado a outrem por contracto de locação de serviços, pagará ao locatario o dobro do que o locador lhe dever, e não será admittido a allegar qualquer defesa em Juizo, sem depositar a quantia a que fica obrigado, competindo-lhe o direito de havê-la do locador.

**Art. 13.** Se algum alliciar para si directamente, ou por interposta pessoa, algum estrangeiro obrigado a outrem por contracto de locação de serviços, pagará ao locatario o dobro do que o locador lhe fôr devedor, com todas as despezas, e custas a que tiver dado causa; não sendo admittido em Juizo a allegar sua defesa sem depositar. Se não depositar, e não tiver bens, será logo preso, e condemnado a trabalhar nas obras publicas por todo o tempo que fôr necessario, até satisfazer ao locatario com o produto liquido dos seus jornaes. Não havendo obras publicas em que possa ser empregado a jornal, será condemnado a prisão com trabalho por dous mezes a hum anno.

Os que alliciarem para outrem, serão condemnados a prisão com trabalho, por todo o tempo que faltar para cumprimento do contracto do alliciado, com tanto porém que a condemnação nunca seja por menos de seis mezes, nem exceda a dous annos.

**Art. 14.** O conhecimento de todas as acções derivadas de contractos de locação de serviços, celebrados na conformidade da presente Lei, será da privativa competencia dos Juizes de Paz do

foro do locatario, que as decidirão summariamente em audiencia geral, ou particular para o caso, sem outra fôrma regular de processo, que não seja a indispensavelmente necessaria para que as partes possam allegar, e provar em termo breve o seu direito; admittindo a decisão por arbitros na sua presença, quando alguma das partes a requerer, ou elles a julgarem necessaria por não serem liquidadas as provas.

**Art. 15.** Das sentenças dos Juizes de Paz haverá unicamente recursos de appellação para o Juiz de Direito respectivo. Onde houver mais de hum Juiz de Direito, o recurso será para o da primeira Vara, e na falta deste para o da segunda, e successivamente para os que se seguirem.

O de revista só terá lugar naquelles casos, em que os réos forem condemnados a trabalhar nas obras publicas para indemnisação dos locatarios, ou a prisão com trabalho.

**Art. 16.** Nenhuma acção derivada de locação de serviços será admittida em Juizo, se não fôr logo acompanhada do titulo do contracto. Se fôr de petição de soldadas, o locatario não será ouvido, sem que tenha depositado a quantia pedida, a qual todavia não será entregue ao locador, ainda mesmo que preste fiança, senão depois de sentença passada em julgado.

**Art. 17.** Ficção revogadas as Leis em contrario.

Mando portanto a todas as Autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumprão, e fação cumprir, e guardar tão inteiramente, como nella se contém. O Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, encarregado interinamente dos do Imperio, a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palacio do Rio de Janeiro em onze de Outubro de mil oitocentos trinta e sete, decimo sexto da Independencia e do Imperio.

**PEDRO DE ARAUJO LIMA.**

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial manda executar o Decreto da Assembléa Geral Legislativa, que houve por bem sancconar, em que se dão providencias sobre os contractos de locação de serviços de estrangeiros, na fôrma acima declarada.

Para Vossa Magestade Imperial ver.

Antonio José de Paiva Guedes de Andrade a fez.

Bernardo Pereira de Vasconcellos.

Sellada na Chancellaria do Imperio em 18 Outubro de 1837. - João Carneiro de Campos.

Nesta Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio foi publicada a presente Lei aos 14 de Outubro de 1837. - Luiz Joaquim dos Santos Marrocos.

Registrada nesta Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio a fl. 226 do Livro 6º das Leis, Alvarás e Cartas. Rio de Janeiro em 16 de Novembro de 1837. - Antonio José de Paiva Guedes de Andrade.

**Código Comercial de 1850 – Lei 556, de 25 de junho de 1850<sup>544</sup>**

**TÍTULO X  
DA LOCAÇÃO MERCANTIL**

Art. 226 - A locação mercantil é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a dar à outra, por determinado tempo e preço certo, o uso de alguma coisa, ou do seu trabalho. O que dá a coisa ou presta serviço chama-se locador, e o que a toma ou aceita o serviço, locatário.

Art. 227 - O locador é obrigado a entregar ao locatário a coisa alugada no tempo e na forma do contrato; pena de responder pelos danos provenientes da não-entrega.

A presente disposição é aplicável ao empreiteiro que deixar de entregar a empreitada concluída no tempo e na forma ajustada.

Art. 228 - Durante o tempo do contrato, não é lícito ao locador retirar a coisa alugada do poder do locatário, ainda que diga ser para uso seu; nem a este fazer entrega dela ao locador, antes de findo o tempo convencionado; salvo pagando por inteiro o aluguel ajustado.

Art. 229 - O locatário não é obrigado a indenizar o dano que a coisa alugada sofrer por caso fortuito; salvo se por alguma forma puder atribuir-se a culpa sua, como, por exemplo, se tiver empregado a coisa alugada em outro destino ou lugar que não seja o designado no contrato, ou por um modo mais violento e excessivo que o regularmente praticado.

Art. 230 - O locatário é obrigado a entregar ao locador a coisa alugada, findo o tempo da locação; se recusar fazer a entrega, sendo requerido, pagará ao locador o aluguel que este arbitrar por toda a demora, e responderá por qualquer danificação que a coisa alugada sofrer, ainda mesmo que proceda de força maior ou caso fortuito.

Art. 231 - Nos ajustes de locação de serviços, se o locador, oficial ou artífice se encarregar de fornecer a matéria e o trabalho, perecendo a obra antes da entrega, não terá direito a paga alguma; salvo se, depois de pronta, o locatário for negligente em a receber.

Art. 232 - Se o empreiteiro contribuir só com o seu trabalho ou indústria, perecendo os materiais sem culpa sua, perecem por conta do dono, e o empreiteiro não tem direito a salário algum; salvo se, estando a obra concluída, o locatário for omissivo em a receber, ou a coisa tiver perecido por vício próprio da sua matéria.

Art. 233 - Quando o empreiteiro se encarrega de uma obra por um plano designado no contrato, pode requerer novo ajuste, se o locatário alterar o plano antes ou depois de começada a obra.

Art. 234 - Concluída a obra na conformidade do ajuste, ou, não o havendo, na forma do costume geral, o que a encomendou é obrigado a recebê-la; se, porém, a obra não tiver na forma do contrato, plano dado, ou costume geral, poderá enjeitá-la ou exigir que se faça abatimento no preço.

Art. 235 - O operário que, por imperícia ou erro do seu ofício, inutiliza alguma obra para que tiver recebido os materiais é obrigado a pagar o valor destes, ficando com a obra inutilizada.

Art. 236 - O que der a fabricar alguma obra de empreitada poderá a seu arbítrio resilir do contrato, posto que a obra esteja já começada a executar, indenizando o empreiteiro de todas as despesas e trabalhos, e de tudo o que poderia ganhar na mesma obra.

Art. 237 - Se a obra encomendada tiver sido ajustada por medida ou números, sem se fixar a quantidade certa de medida ou números, tanto o que fez a encomenda como o empreiteiro podem dar por acabado o contrato quando lhes convier, pagando o locatário a obra feita.

Art. 238 - O empreiteiro é responsável pelos fatos dos operários que empregar, com ação regressiva contra os mesmos.

---

<sup>544</sup> Fonte: sítio do Palácio do Planalto, Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República (Brasil). Recuperado de: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/LIM/LIM556.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM556.htm)

Art. 239 - Os operários, no caso de não serem pagos pelo empreiteiro, têm ação para embargar na mão do dono da obra, se ainda não tiver pago, quantia que baste para pagamento dos jornais devido.

Art. 240 - A morte do empreiteiro dissolve o contrato de locação de obra. O locatário, quando a matéria tiver sido fornecida pelo empreiteiro, é obrigado a pagar a seus herdeiros ou sucessores, à proporção do preço estipulado na convenção, o valor da obra feita, e dos materiais aparelhados.

Art. 241 - Os mestres, administradores, ou diretores de fábricas, ou qualquer outro estabelecimento mercantil, não podem despedir-se antes de findar o tempo do contrato, salvo nos casos previstos no artigo nº 83; pena de responderem por dano aos preponentes; e estes despedindo-os fora dos casos especificados no artigo nº. 84, serão obrigados a pagar-lhes o salário ajustado por todo o tempo que faltar para a duração do contrato.

Art. 242 - Os mesmos mestres, administradores, ou diretores, no caso de morte do preponente, são obrigados a continuar na sua gerência pelo tempo do contrato, e na falta deste até que os herdeiros ou sucessores do falecido possam providenciar oportunamente.

Art. 243 - Todo o mestre, administrador, ou diretor de qualquer estabelecimento mercantil é responsável pelos danos que ocasionar ao proprietário por omissão culpável, imperícia, ou malversação, e pelas faltas e omissões dos empregados que servirem debaixo das suas ordens, provando-se que foi omisso em as prevenir (artigo nº. 238).

Art. 244 - O comerciante empresário de fábrica, seus administradores, diretores e mestres, que por si ou por interposta pessoa aliciarem empregados, artífices ou operários de outras fábricas que se acharem contratados por escrito, serão multados no valor do jornal dos aliciados, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, a benefício da outra fábrica.

Art. 245 - Todas as questões que resultarem de contratos de locação mercantil serão decididas em juízo arbitral.

Art. 246 - As disposições do Título VI - Do mandato mercantil - têm lugar a respeito dos mestres, administradores ou diretores de fábricas, na parte em que forem aplicáveis.



**DECRETO Nº 2.827, DE 15 DE MARÇO DE 1879<sup>545</sup>**

Dispondo o modo como deve ser feito o contrato de locação de serviços.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa Geral:

**CAPITULO I**

**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei só comprehende:

§ 1º A locação dos serviços applicados á agricultura.

§ 2º As empreitadas e trabalhos concernentes a obras e fabricas respectivas á agricultura, que serão regulados pelas disposições dos arts. 226 e seguintes do Codigo do Commercio quando fôr omissa a presente Lei.

Art. 2º As demais locações de serviços continuarão a regular-se pela Ordenação, liv. 4º, tits. 29a 35, arts. 226 e seguintes do Codigo do Commercio.

Parapho unico. O Governo mandará annexar a esta Lei as disposições legislativas a que ella se refere.

Art. 3º Esta Lei é applicavel tanto ao locador nacional como ao estrangeiro.

Ficam revogadas as Leis de 13 de Setembro de 1830 e 11 de Outubro de 1837.

Art. 4º O contrato de locação de serviços exige, para sua fôrma e para sua prova, a escriptura publica, celebrada perante o Escrivão de Paz do districto onde fôr situado o predio rustico, ao qual se destinar o serviço, ou na capital das provincias maritimas, perante Tabellião de Notas, ahi achando-se o locador.

Uma publica-fôrma do contrato será entregue ao locatario e outra ao locador gratuitamente.

Art. 5º O contrato feito fóra do Imperio, para ser executado no Imperio, será authenticado pelo Consul ou Vice-Consul brasileiro.

Art. 6º Os menores de 21 annos serão nos contratos de locação de serviços assistidos por seus pais, ou, se forem orphãos, por seus tutores, mediante prévia licença do Juiz de Orphãos, e quando os orphãos sejam estrangeiros, por seus Consules, onde os houver.

Art. 7º O Juiz dos Orphãos será o dos districtos designados no art. 4º

Art. 8º O locatario é obrigado a apresentar o contrato de locação de serviços ao Secretario da Camara Municipal da cabeça da comarca onde estiver situado o predio, no qual haja de servir o locador, para ser averbado em livro proprio numerado e rubricado pelo Presidlente da Camara e escripto alphabeticamente.

O Governo nos regulamentos determinará o modo da averbação e os emolumentos que por ella competem ao Secretario da Camara Municipal, os quaes correrão a cargo do. locatario.

**CAPITULO II**

**DA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**

Art. 9º Esta Lei admite:

§ 1º A locação de serviços propriamente ditos.

---

<sup>545</sup> Fonte: Câmara Legislativa Federal do Brasil. Legislação informatizada. Recuperado de: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2827-15-marco-1879-547285-publica-caoriginal-62001-pl.html>. Acesso em 24 agosto 2020.

§ 2º A locação de serviços, mediante a parceria nos fructos do predio rustico, denominada - parceria agricola.

§ 3º A locação de serviços mediante a parceria na criação de animais uteis á lavoura, denominada - parceria pecuaria.

### CAPITULO III

#### DA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PROPRIAMENTE DITA.

Art. 10. A locação de serviços propriamente dita será regulada pela disposição dos artigos seguintes:

Art. 11. A duração della, sendo brasileiro o locador, não passará de seis annos, salvo o direito de renovação.

Art. 12. Não havendo tempo ajustado, presume-se ser o de tres annos agrarios, contados conforme o costume do logar.

Art. 13. Considera-se renovada a locação de serviços por outro tanto tempo sobre o convencionado (art. 11) ou o presumido (art. 12), se, até o ultimo mez do anno agrario, nem o locatario der, nem o locador exigir dispensa do serviço.

Art. 14. Sendo estrangeiro o locador, o prazo convencional da locação não excederá de cinco annos, salvo expressa renovação.

Art. 15. Na locação do serviços de menor não se estipulará duração que transponha a minoridade.

Art. 16. O prazo da locação de serviços dos libertos é o mesmo determinado pela Lei de 28 de Setembro de 1871.

Art. 17. O locatario não póde, sem o aprazimento do locador, transferir a outrem a locação de serviços.

§ 1º Este aprazimento deve constar de escriptura de cessão, na qual intervirá como assistente o locador.

§ 2º Nem o locador póde, sem outorga do locatario, pôr outra pessoa em seu logar.

§ 3º Se o locatario annuir á substituição, o locador não será responsavel pelos factos do substituto.

Art. 18. A disposição do primeiro membro do artigo antecedendo não é applicavel ao caso em que o predio rustico, no qual servir o locador, passe a outrem por qualquer titulo.

Art. 19. São nullos de pleno direito:

§ 1º Os contratos que impuzerem ao locador obrigações por dividas de outros, que não forem sua mulher ou filhos menores, ou que impuzerem ao locador obrigações por dividas não provenientes da locação e posteriores a ella.

§ 2º Os contratos que impuzerem ao locador a obrigação de pagar mais do que metade das passagens e despesas de instituição.

§ 3º Os contratos que estipularem juros pelo debito do locador.

§ 4º Não é nullo o contrato que estipular o preço da locação em determinada quantidade de fructos; mas, não havendo convenção, presume-se consistir o preço em dinheiro.

Art. 20. E> licito ao locador estrangeiro, contratado fóra do Imperio, chegando ao Imperio, mas dentro de um mez depois de sua chegada, romper o contrato com o qual veiu, e celebrar outro com terceiro, pagando integralmente as passagens e todas as quantias adiantadas.

Art. 21. Nos contratos de locação de serviços, celebrados com menores, o locatario se responsabilizará, como depositario, sob as penas respectivas, pela terça parte da soldada, que guardará para entregar ao menor, findo o contrato, qualquer que seja o debito d'elle nesse tempo.

Art. 22. O locatario é obrigado a ter um livro de conta corrente com os locadores do mesmo predio rustico, livro aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo Juiz de Paz a que se refere o art. 4º

Art. 23. Deste livro devem constar chronologica e successivamente os artigos de credito e debito, assim como os recibos das quantias recebidas, passados no mesmo livro pelo locador ou pessoa por elle designada.

Art. 24. Este livro deve estar em poder do locatario, mas será exhibido no caso de contestação do locador, por ocasião de ajustar-se a conta corrente annual ou definitiva, e bem assim toda a vez que o locador reclame.

Art. 25. O Governo nos seus regulamentos determinará a fôrma da escripturação do livro, a prova que deve fazer, e o processo, o tempo, assim como a perempção das contestações e reclamações.

Art. 26. Findo ou resolvido o contrato, dará o locatario ao locador um attestado consignando achar-se findo ou resolvido o contrato.

Art. 27. Se o locatario, sem causa legitima, recusar o attestado, o Juiz de Paz, impondo-lhe, depois de ouvi-lo, a multa de 50\$000 a 100\$000, mandará passar pelo Escrivão de Paz um certificado, que assignará, declarando que o contrato está findo, ou resolvido, conforme a lei.

Art. 28. Todavia, ainda findo o contrato, o locatario não é obrigado, salvo sendo o locador menor, e attingindo a maioridade, a dar-lhe attestado, se, no ajuste definitivo da conta corrente, alguma quantia lhe dever o locador, e não puder pagal-a, sem apparecer quem por elle pague, ou se constitua seu fiador.

Art. 29. Neste caso, o Juiz de Paz, tomando conhecimento do negocio, determinará a prorrogação da locação por um ou dous annos, consignando uma quota dos salarios, a qual não excederá de metade delles, para ser applicada á solução do debito.

Art. 30. Se, porém, algum terceiro offerecer-se para tomar a locação de serviços do locador, responsabilizando-se a guardar e entregar ao locatario certa quota de salarios, nunca superior a terça parte delles, o Juiz de Paz procederá conforme o art. 27, declarando, no attestado ou certificado, o debito do locador.

Paragrapho unico. Do mesmo modo procederá o Juiz de Paz, havendo a fiança de que trata o art. 28.

Art. 31. Este attestado ou certificado ficará sem vigor, se dentro em oito dias, não fôr apresentado ao Juiz de Paz o novo contrato de locação, e se cumprirá então o que determina o art. 29, sujeito o terceiro refractario á multa de 50\$ a 100\$, cujo processo os regulamentos do Governo determinarão.

Art. 32. Quando o locador se despedir com justa causa, ou for despedido sem justa causa, mas dever ao locatario alguma quantia, o attestado do locatario ou o certificado do Juiz de Paz (art. 27) deve declarar a importancia do debito.

Art. 33. O novo locatario é obrigado. a retêr, para entregar ao antigo locatario, a terça parte dos salarios ajustados, até effectivo embolso da divida constante do attestado.

Art. 34. O antigo locatario tem acção executiva para haver do novo locatario a quota dos salarios marcados no artigo antecedente.

Art. 35. Não aproveita ao novo locatario a defesa fundada em lhe não ter mostrado o locador o attestado ou certificado do art. 32, salvo se a locação dos serviços (art. 8º) foi em outra comarca.

Neste caso a responsabilidade do novo locatario começa desde a notificação judicial feita pelo antigo locatario.

Art. 36. Cessa a locação de serviços:

§ 1º Sendo findo o seu tempo.

§ 2º Sendo resolvido o contrato.

Art. 37. Resolve-se a locação:

§ 1º Pela morte do locador, mas não pela do locatário.

§ 2º Despedindo-se o locador por justa causa.

§ 3º Sendo despedido o locador por justa causa.

§ 4º Sendo o locador condenado á pena criminal que o impossibilite de servir.

§ 5º Assentando praça o locador como sorteado, ou como voluntario, em tempo de guerra.

Art. 38. São justas causas para o locatário despedir o locador :

§ 1º Doença prolongada que ao locador impossibilite de continuar a servir.

§ 2º Embriaguez habitual do locador.

§ 3º Injúria feita pelo locador á honra do locatário, sua mulher, filhos ou pessoa de sua família.

§ 4º Imperícia do locador.

§ 5º Insubordinação do locador.

Art. 39. São justas causas para despedir-se o locador:

§ 1º Falta de pagamento dos salarios no tempo estipulado no contrato, ou por tres mezes consecutivos.

§ 2º Imposição de serviços, não compreendidos no contrato.

§ 3º Enfermidade que o prive de continuar a servir.

§ 4º Haver-se casado fóra da freguezia.

§ 5º Não permittir o locatário que o locador compre a terceiro os generos de que precise, ou constrel-o a vender só a elle locatário os seus productos, salvo, quanto á venda, convenção especial.

§ 6º Se o locatário fizer algum ferimento na pessoa do locador, ou injurial-o na sua honra e na de sua mulher, filhos ou pessoa de sua família.

Art. 40. Despedindo-se o locador com justa causa, ou sendo despedido com justa causa, não tem direito senão aos ganhos vencidos, descontado o seu debito (art. 3º).

Art. 41. Sendo o locador despedido sem justa causa (art. 32) antes de findo o tempo do contrato, o locatário é obrigado a pagar-lhe os salarios vencidos e os por vencer, correspondentes ao resto do tempo do contrato.

Art. 42. O locador tem acção executiva para haver do locatário os seus salarios.

#### CAPITULO IV

##### DA PARCERIA AGRICOLA

Art. 43. Considera-se parceria agricola o contrato pelo qual uma pessoa entrega á outra algum predio rustico, para ser cultivado, com a condição de partirem os estipulantes entre si os fructos pelo modo que accórdarem.

Parapho unico. A regra da partilha é a meiação, salvo convenção diversa.

Art. 44. Predios rusticos, no sentido desta Lei, são todos os destinados á agricultura. Sendo, porém, terrenos de sesmaria, fazenda ou sitio, é preciso que sejam divididos entre si, e tenham morada para o cultivador, salvo se o contrato estipular a morada em edificio central, com repartições convenientes.

Art. 45. O senhor do predio rustico chamar-se-ha parceiro locatário, e aquelle que o cultivar parceiro locador.

Art. 46. O parceiro locador não póde sublocar ou ceder a parceria sem expresso accôrdo do parceiro locatario.

Art. 47. A parceria resolve-se pela morte do parceiro locador.

Salvo se, ao tempo da morte, a cultura estiver começada, ou o parceiro locador tiver feito despesas adiantadas.

Paragrapho unico. Neste caso continúa o contrato com os herdeiros do fallecido, pelo tempo necessario para serem aproveitados os trabalhos e despesas.

Art. 48. Todos os fructos do predio rustico, tanto naturaes como industriaes, serão partilhados entre os parceiros (art. 43, e paragrapho).

Art. 49. Salvo convenção em contrario:

§ 1º As sementes correm por conta da parceria.

§ 2º As plantas, para substituir as que perecem ou cahem fortuitamente, serão prestadas pelo parceiro locatario.

§ 3º Os utensilios necessarios para exploração do predio rustico deverão ser prestados pelo parceiro locado.

§ 4º Tambem ao parceiro locador incumbe as despesas para a cultura ordinaria dos campos e colheita dos fructos.

Art. 50. O parceiro locador não póde colher os fructos, sem sciencia do parceiro locatario.

Art. 51. A perda, por caso fortuito, de toda a colheita dos fructos, que devem ser partilhados, ou parte della, corre por conta dos parceiros, e não dá a nenhum delles acção de indemnização.

Art. 52. Não se rescinde a parceria senão por um dos motivos seguintes:

§ 1º Não implemento do contrato por uma ou outra parte.

§ 2º Por parte do locador, impericia, molestia habitual ou prolongada, condemnação á pena criminal, ou obrigação de serviço militar.

Art. 53. Sao applicaveis a parcerias as disposições dos arts. 11, 12, 13, 14, 17 § 3º, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 39 § 5º desta Lei, assim como o art. 292 do Código Criminal.

Art. 54. São, outrosim, applicaveis ás parcerias as disposições legaes relativas á retenção dos predios rusticos, findo o arrendamento delles.

(Ord., Liv. 4º, Tit. 54.)

Art. 55. Aos parceiros compete acção executiva para pagamento do saldo da conta corrente respectiva.

Art. 56. Ao parceiro locatario compete a acção de despejo incontinente, contra aquelle que occupa o predio rustico violando o art. 46.

Art. 57. Subsistirá a parceria, não obstante a alienação do predio rustico, a que ella disser respeito, ficando, neste caso, o adquirente subrogado nos direitos e obrigações do parceiro locatario.

## CAPITULO V

### DA PARCERIA PECUARIA

Art. 58. Parceria pecuaria é o contrato pelo qual uma pessoa entrega a outra os seus animaes para os guardar, nutrir e pensar, sob a condição de partilharem ellas entre si os lucros futuros pelo modo que accordarem.

Paragrapho unico. Salvo convenção e, em falta della, o costume do logar, se o houver, a parceria pecuaria será regulada pelas disposições dos artigos que se seguem, de 59 a 68.

Art. 59. O proprietario dos animaes é o parceiro proprietario e aquelle que guarda, nutre e pensa o parceiro pensador.

Art. 60. Constituem objecto de partilha:

§ 1º As lãs, pellos e crinas.

§ 2º As crias.

Art. 61. Pertencem ao parceiro pensador:

O trabalho do gado.

O esterco.

O leite e suas transformações.

Art. 62. Se os animaes perecem por caso fortuito, a perda é do parceiro proprietario.

Art. 63. Nem o parceiro pensador, sem consentimento do proprietario, nem este, sem annuencia daquelle, poderão dispôr de cabeça alguma do gado principal ou accrescido.

Art. 64. O parceiro pensador não tosquiará o gado lanigero sem que previna o parceiro proprietario, sob pena de pagar-lhe em dobro o valor da parte que lhe pertenceria na partilha.

Art. 65. O parceiro proprietario é obrigado a garantir a posse e uso dos animaes da parceria, substituindo os que faltarem no caso de evicção.

Art. 66. Pertence ao parceiro proprietario todo o proveito que se posse tirar dos animaes que perecerem.

Art. 67. E> nullo o contrato no qual se estipular que o parceiro pensador supportará na perda parte maior que nos lucros.

Art. 68. São applicaveis á parceria pecuaria as disposições dos arts. 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 36, 46, 47, 52, 55 e 57 desta Lei, e art. 292 do Codigo Criminal.

## CAPITULO VI

### MATERIA PENAL

Art. 69. (a) O locador, que, sem justa causa, ausentar-se (art. 39);

(b) O que, permanecendo no estabelecimento, não quizer trabalhar;

(c) O que ceder: sublocar o predio da parceria;

(d) O que o retiver a titulo de dominio;

(e) O parceiro pensador, que, sem consentimento do proprietario, dispuzer do gado da parceria:

Incorrerão na pena de prisão por 5 a 20 dias.

Art. 70. A prisão deixa de effectuar-se, ou cessa, pelo perdão do parceiro locatario ou do parceiro proprietario, assim como por transacção delles.

Art. 71. Resolve-se a prisão, no caso do art. 69 (a e b):

§ 1º Pagando o locador seu debito, comprehendidos nelle os serviços pelo tempo que reste do contrato.

§ 2º Havendo quem seja fiador por esse debito.

Art. 72. Resolve-se a prisão no caso do art. 69 (c e d), pela restituição do predio ou gado e multa de 20\$ a 100\$ em favor do parceiro locatario ou proprietario.

Art. 73. A sentença que condemna o locador, nos casos a e b do art. 69, obrigar-o-ha a voltar ao serviço, logo que a pena fôr cumprida.



Art. 74. Voltando o locador ao serviço depois de cumprida ou perdoada a pena, e reincidindo em ausentar-se, ou em não querer trabalhar, ser-lhe-ha imposta a prisão pelo dobro do tempo da primeira.

Esta disposição compreende o caso de não querer o locador voltar ao serviço depois de cumprida a pena.

Art. 75. Voltando o locador ao serviço depois de cumprida a segunda pena, se reincidir segunda vez, o contrato considerar-se-ha ipso facto resolvido.

Art. 76. Igualmente considerar-se-ha resolvido o contrato não querendo o locador voltar ao serviço depois de cumprida a primeira e segunda pena.

Art. 77. Nas hypotheses do art. 69 (a e b), por todos os factos commettidos collectivamente por alguns locadores, serão esses infractores detidos até o julgamento, que com urgencia promover-se-ha n'um só processo.

Art. 78. Os locadores, que, para fazer paredes, ameaçarem ou violentarem a outros locadores, serão presos e remettidos á autoridade policial, afim de provar-se, mediante acção publica, a sua punição, como incursos no art. 180 do Codigo Criminal.

Art. 79. Se effectuarem a parede, e por meio della commetterem ameaças e violencias, serão punidos pelos crimes praticados.

Art. 80. (A) Aquelles que seduzirem para seu serviço, e admittirem ou consentirem, em suas casas, fazendas ou estabelecimentos, individuos obrigados a outrem por contrato de locação de serviços prestaveis em qualquer parte do Imperio;

(B) Aquelles que tomarem para seu serviço individuos obrigados a outrem por contrato de locação de serviços prestaveis na mesma comarca, sem o attestado de que tratam os arts. 27, 30 e 32;

(C) Aquelles que, apesar de judicialmente notificados pelo locatario, conservarem em seu serviço individuos obrigados por locação de serviços prestaveis em qualquer outra comarca, sem preencher a obrigação do art. 33;

Pagarão ao locatario, além das despezas e custas a que tiverem dado causa, o dobro do que o locador lhe dever, e não serão admittidos a allegar qualquer defesa em juizo, sem depositar essa quantia.

Compete acção executiva ao locatario para haver este pagamento.

## CAPITULO VII

### DO PROCESSO E COMPETENCIAS

Art. 81. Todas as causas derivadas da locação de serviços comprehendida nesta Lei, incumbem aos Juizes de Paz da situação do predio rustico (art. 4º) com alçada ate 50\$, e competencia, mediante appellação devolutiva para o Juiz de Direito, qualquer que seja a quantia.

Art. 82. Quanto á materia penal, de que trata o cap. 6º, a competencia do Juiz de Paz é sempre com recurso suspensivo para o Juiz de Direito.

Art. 83. O processo penal será regulado pelas seguintes disposições:

§ 1º A petição inicial deverá conter a indicação das provas, e será acompanhada do instrumento do contrato.

§ 2º Citado o réo, e presente na audiencia com as suas testemunhas, que poderá levar independentemente de citação, ou á revelia do mesmo réo, se não comparecer, o Juiz de Paz ouvirá as testemunhas de uma e outra parte, mandando tomar por termo os seus depoimentos.

§ 3º Concluidas as inquirições e tornado o depoimento ou o juramento de qualquer das partes, se fôr ordenado pelo Juiz, serão ellas ouvidas verbalmente. juntando-se aos autos, com quaesquer

allegações, os documentos que offerecerem, depois do que o Juiz proferirá sua sentença na mesma audiência ou na seguinte.

Art. 84. O processo civil será o processo summario, estabelecido pelos arts. 237 e seguintes do Regulamento n. 737 de 1850.

Art. 85. Quando, porém, esta Lei autoriza acção executiva contra outros que não o locatario ou locador, fica entendido que a jurisdicção para processal-a e julgal-a é a do Juiz Municipal do domicilio do réo, com appellação devolutiva para o Juiz de Direito, tendo o processo a mesma fôrma determinada pelas leis do processo civil.

Art. 86. Fica autorizado o Governo a dar os regulamentos necessarios para execução desta Lei.

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, do Meu Conselho, Senador do Imperio, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Março de 1879, 58º da Independencia e do Imperio.

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.

Chancellaria-mór do Imperio. - Lafayette Rodrigues Pereira.

Transitou em 26 de Março de 1879. - José Bento da Cunha Figueiredo Junior.

Publicada na Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 29 de Março de 1879. - Augusto José de Castro Silva.

**Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.**<sup>546</sup>

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

*A todos los que la presente vieren y entendieren.*

*Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:*

PREÁMBULO

*El despido por faltas de asistencia al trabajo regulado en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores es un precepto que legitima el despido objetivo de las personas trabajadoras que incurren en faltas de asistencia al trabajo, tanto justificadas como injustificadas, que superen determinados porcentajes. Aunque todas las faltas injustificadas pueden ser contabilizadas a efectos de aplicar el despido objetivo por faltas de asistencia, las faltas de asistencia justificadas que pueden ser contabilizadas son limitadas, puesto que el propio artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores establece expresamente aquellas que no son admisibles para aplicar esta modalidad de despido. A lo largo de los años el precepto ha ido incorporando nuevas inasistencias que no admiten contabilización a efectos de la aplicación del despido objetivo (suspensión por riesgo durante el embarazo o la lactancia, faltas de asistencia vinculadas a la violencia de género, etc.), lo que ha supuesto en la práctica que el supuesto aplicativo del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores haya quedado reducido de hecho a las faltas de asistencia injustificadas y a las bajas por contingencias comunes de duración inferior a veinte días.*

*Otras modificaciones normativas operadas en el precepto han tenido también relevancia en la definición del supuesto: hasta el año 2012 se requería para la aplicación del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, además de las faltas de asistencia de la persona trabajadora en los porcentajes establecidos, que existiera un cierto nivel de absentismo global en la empresa (5 por ciento). El requisito de cierto volumen de inasistencias de la persona trabajadora (20 o 25 por ciento) y el requisito de cierto volumen de absentismo global de la empresa (5 por ciento, que en algún momento fue del 2,5 por ciento) servía para incorporar el análisis de adecuación y proporcionalidad, que en otros países se constataban por medio del análisis caso por caso. En 2012, en España se eliminó el requisito de existencia de un absentismo general en la empresa de esta causa de despido objetivo. Desde entonces, el despido por faltas de asistencia del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores se aplica en España cuando se alcanzan los porcentajes de faltas de asistencia establecidos, sin que el precepto requiera expresamente que se realice en cada caso juicio de adecuación y proporcionalidad.*

*En definitiva: la fórmula del despido por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores actualmente vigente es un mecanismo que legitima la extinción contractual con derecho a una indemnización reducida en el caso de que existan tanto inasistencias injustificadas como bajas médicas por contingencias comunes de duración inferior a veinte días de la persona trabajadora que superen determinados porcentajes, refiriéndose estos porcentajes tan solo a la persona trabajadora, y sin que existan en el precepto mecanismos que tengan en cuenta la adecuación y proporcionalidad de la medida extintiva en relación con la situación de la empresa. Debe asimismo tenerse en cuenta que el ordenamiento español ya dispone de mecanismos para*

---

<sup>546</sup> Fuente: sitio do Boletín Oficial del Estado, Espanha. Publicado no BOE nº. 194, em 16/07/2020, entrou em vigor em 17/07/2020. Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7937#dd>

asegurar la sanción para la persona que tiene faltas de asistencia injustificadas (artículo 54.2.a) del Estatuto de los Trabajadores).

## II

El despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo regulado en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores ha dado lugar recientemente a relevantes pronunciamientos judiciales, tanto por parte del Tribunal Constitucional (Sentencia 118/2019, de 16 de octubre) como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 18 de enero de 2018, asunto Ruiz Conejero).

En el fallo de la sentencia dictada en el asunto Ruiz Conejero se establece lo siguiente: «El artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a un trabajador debido a las faltas de asistencia de este al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, cuando tales ausencias sean consecuencia de enfermedades atribuibles a la discapacidad de ese trabajador, salvo que dicha normativa tenga la finalidad legítima de combatir el absentismo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad, lo cual corresponde evaluar al órgano jurisdiccional remitente». En esta sentencia el TJUE establece la inadecuación del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores a la Directiva 2000/78, por considerar que su formulación puede ser constitutiva de discriminación por razón de discapacidad, a menos que existan cauces de control de adecuación (finalidad de combatir el absentismo) y proporcionalidad (que no vaya más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad).

## III

La cuestión del despido por causa de absentismo es de gran trascendencia porque obliga a confrontar, de un lado, el legítimo interés de la empresa a contar con la fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo del proyecto empresarial y a no tener que asumir los costes derivados de su falta y, de otro, el derecho de las personas trabajadoras a no ser penalizadas por circunstancias personales de las que no son responsables, como son las relacionadas con la enfermedad.

El despido de personas enfermas no solo entronca con el derecho a la no discriminación por razón de discapacidad, como ha señalado en numerosas ocasiones el TJUE, sino que también genera en la persona trabajadora que ve extinguido su contrato una situación de gran vulnerabilidad profesional, personal y social. En este contexto, el actual artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores no está sirviendo para dar una adecuada respuesta a la cuestión planteada.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 118/2019, de 16 de octubre, dictaminó que el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores no era contrario a la Constitución, porque no vulneraba ni el derecho a la integridad física (artículo 15 CE), ni el derecho al trabajo (artículo 35.1 CE), ni el derecho a la protección de la salud (artículo 43.1 CE).

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de enero de 2018, dictada en el asunto Ruiz Conejero, estableció que el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores no se acomoda a la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por atentar al derecho a la no discriminación por razón de la discapacidad, admitiendo solo con carácter excepcional, limitado y condicionado su aplicación cuando existiera análisis de adecuación y proporcionalidad. En el fallo de la STJUE de 18 de enero de 2018, dictada en el asunto Ruiz Conejero, el Tribunal advierte del carácter discriminatorio del precepto español entendiendo, no obstante, que si el ordenamiento admite mecanismos de control de proporcionalidad y adecuación de la medida, cabría admitir su acomodación a la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000. En la STJUE de 11 de septiembre de 2019, asunto Nobel Plastiques Ibérica, el TJUE volvió de nuevo a establecer que el despido al que se llegara como consecuencia de una situación de bajas médicas reiteradas podía ser constitutivo de discriminación por razón de discapacidad. Pero en esta sentencia el TJUE

estableció, además, que el empresario está obligado a realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo antes de proceder al despido de la persona con discapacidad derivada, entre otros factores, de sus faltas de asistencia al trabajo.

En definitiva, la doctrina del TJUE (en los asuntos Ruiz Conejero y en Nobel Plastiques Ibérica) obliga a que existan mecanismos dirigidos a contraponer y evaluar la situación concreta caso por caso, a efectos de determinar si la medida es proporcionada. Por contra, esta previsión de análisis *ad hoc* no existe en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, que se aplica con carácter automático cuando concurren los porcentajes de inasistencia que refiere. La situación generada a partir de la jurisprudencia referida requiere la inmediata corrección normativa a efectos de asegurar que se aplica adecuadamente en España la doctrina establecida por el TJUE.

#### IV

El despido objetivo tiene como finalidad posibilitar la extinción del contrato laboral a un coste reducido para la empresa cuando concurren una serie de circunstancias que resultan ajenas a la propia empresa y a la persona trabajadora que hacen que el mantenimiento de esta en su puesto de trabajo resulte desproporcionadamente oneroso para la empresa. A tales efectos el ordenamiento legitima la extinción contractual unilateralmente por parte de la empresa, dando lugar, en beneficio del trabajador, a una indemnización de veinte días de salario por año de servicio con el límite de doce mensualidades (artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores).

El despido por causa económica, técnica, organizativa o de producción es una de las manifestaciones del despido objetivo, sin duda la que ha suscitado mayor interés normativo y jurisprudencial. Hay, sin embargo, otras posibles causas de extinción por causas objetivas que no disponen de esta intensa regulación normativa. En la mayoría de los ordenamientos de nuestro entorno la validez de estas causas de extinción contractual se analiza en el contexto del concepto genérico de despido por justa causa (por ejemplo, *cause réelle et sérieuse*, L-1232-1, del Código de Trabajo francés). Con esta genérica formulación normativa son los Tribunales los que llevan a cabo el análisis de justificación y proporcionalidad en atención a la situación concurrente en cada caso. Este es el escenario que el TJUE tuvo en cuenta en la sentencia dictada en el asunto Ruiz Conejero. Sin embargo, otros países, entre los que se encuentra España, regulan específicamente estas otras causas de despido justificado, diferentes del despido por causa económica, técnica, organizativa y de producción y del despido disciplinario. En el ordenamiento español el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores contempla y regula, además del despido por causa económica, técnica, organizativa o de producción y del despido por insuficiente consignación presupuestaria, el despido objetivo por ineptitud de la persona trabajadora (artículo 52.a) del Estatuto de los Trabajadores), el despido por falta de adaptación (artículo 52.b) del Estatuto de los Trabajadores) y el despido por faltas de asistencia al trabajo (artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores). A diferencia de la mayoría de los ordenamientos europeos, el ordenamiento español establece, por tanto, un sistema de legitimación del despido objetivo en el que se establecen supuestos concretos y se especifican las circunstancias que deben concurrir para que el despido sea legal.

#### V

Como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta legítimo el interés por disminuir el absentismo en la empresa, pero ello no puede llevarse a cabo sin tener en cuenta el efecto que puede tener en el colectivo de personas con discapacidad. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras admitir que no puede generalizarse la idea de que un despido por razón de enfermedad constituya despido discriminatorio (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de julio de 2006, asunto Chacón Navas), matizó que las personas con diversidad funcional pueden tener un volumen de bajas intermitentes de baja duración mayor que las restantes personas asalariadas, por lo que el despido objetivo que se basara en estas faltas de asistencia puede suponer una discriminación indirecta por razón de discapacidad (Sentencias del

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de abril de 2013, asunto H.K. Danmark; y de 18 de enero de 2018, asunto Ruiz Conejero).

*Pero no solo el despido por absentismo que recae en personas con discapacidad reconocida puede ser constitutivo de discriminación indirecta por razón de discapacidad: también en el caso de que el despido objetivo por absentismo recayera en personas con enfermedades de larga duración podría producirse discriminación indirecta por razón de discapacidad. En efecto, las personas con enfermedades de larga duración merecen la misma protección contra el despido injustificado que las que tienen una diversidad funcional reconocida (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de diciembre de 2016, asunto Daouidi). Consiguientemente, dado que las personas con enfermedades de larga duración pueden ser susceptibles de un mayor volumen de bajas intermitentes de corta duración como consecuencia de la patología de base, el despido objetivo por inasistencia puede, también en este caso, ser constitutivo de discriminación indirecta por razón de discapacidad.*

*En definitiva, la legitimación de cualquier despido que pueda recaer con mayor frecuencia en personas con discapacidad o con enfermedades de larga duración requiere de garantías más intensas de las que actualmente configura el actual artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores porque, tal y como advierte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entra en juego el derecho a la no discriminación por razón de la discapacidad establecido en la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000.*

## VI

*Hay una razón adicional de gran trascendencia que debe ser también tenida en cuenta: el despido objetivo por faltas de asistencia establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores es susceptible de afectar particularmente a las mujeres, dada la mayor participación de las mujeres en las actividades de cuidado, fundamentalmente por las dificultades de conciliación derivadas de factores múltiples. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio de 2013 (asunto Riezniece) estableció que el trato peyorativo dispensado a las personas que ejercitaran derechos de conciliación puede ser constitutivo de discriminación indirecta por razón de sexo si se constata la mayor afectación femenina. Los datos históricos y actuales del Instituto Nacional de Estadística indican que, aunque la participación de los hombres en el cuidado de dependientes ha aumentado, las mujeres siguen siendo las que mayoritariamente asumen las tareas de cuidado de dependientes. Por tanto, un despido objetivo como el establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores puede ser constitutivo de discriminación indirecta por razón de género.*

*En un contexto como el actual, en el que faltan todavía mecanismos que garanticen el derecho de las personas a las ausencias por fuerza mayor familiar y en el que, pese a los avances realizados en los últimos meses (Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo), existen obstáculos para la efectiva conciliación de responsabilidades en términos de corresponsabilidad, la figura establecida en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores no solo puede servir para legitimar que se expulse del mercado de trabajo a las personas cuidadoras, sino que también está lanzando el mensaje erróneo de que la cuestión de la conciliación recae tan solo en la persona y no en la empresa y en la sociedad. Por ello su inmediata supresión resulta presupuesto imprescindible para la configuración de un nuevo contexto en el que la conciliación y la corresponsabilidad constituyan un referente imprescindible.*

*En definitiva, el mecanismo establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, entendido como procedimiento de aplicación automática que no permite el juicio de adecuación y proporcionalidad requerido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es un instrumento susceptible de provocar discriminación indirecta por razón de discapacidad y también de género.*



*Adviértase que la ausencia injustificada al trabajo cuenta en nuestro ordenamiento con canales específicos de sanción, entre ellos el despido disciplinario. Resulta injustificada, pues, la existencia de una fórmula extintiva que legitima el despido tanto por ausencias justificadas como injustificadas, cuando ello puede suponer, tal y como ha reconocido el TJUE, una mayor afectación para las personas con discapacidad. Procede, por ello, la inmediata derogación del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores a efectos de garantizar el derecho a la no discriminación de las personas, así como para evitar el riesgo de exclusión social de colectivos de especial vulnerabilidad.*

## VII

*La presente Ley procede del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Dicho Real Decreto-ley respetó los límites materiales establecidos en el artículo 86.1 de la Constitución. Por un lado, se trataba de una reforma puntual que incidía únicamente en un precepto del Estatuto de los Trabajadores, por lo que no llevaba a cabo una regulación del régimen general de los derechos reconocidos en el título I CE. Por otro lado, el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo no contraría el contenido o los elementos esenciales de ninguno de estos derechos (SSTC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 189/2005, de 7 de julio, FJ 7).*

*Más concretamente, el citado Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, no supuso una «afectación» en el sentido constitucional del término, ni del derecho al trabajo del artículo 35 CE, ni de la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 CE. No se franqueó el límite material que al decreto-ley impone el artículo 86.1 CE respecto de estos derechos porque no se regulaba el régimen general de tales derechos, ni el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo se configura como uno de sus elementos esenciales.*

*Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad establecido en el artículo 86.1 CE, el contenido del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, se fundamentó en motivos objetivos y de oportunidad política que requerían su aprobación inmediata. En primer lugar, dicho Real Decreto-ley garantizaba el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea y, en concreto, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, cumpliendo así con el principio de primacía del derecho europeo. Además, aseguraba la adecuada e inmediata traslación al ordenamiento jurídico español de lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 18 de enero de 2018, que admitió solo con carácter excepcional, limitado y condicionado la aplicación del artículo 52.d) del Estatuto de Trabajadores y la supeditó a un análisis específico de adecuación y proporcionalidad.*

*En segundo lugar, la derogación de este precepto por el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, respondía a la necesidad imperativa de evitar que se produjeran más resoluciones judiciales a nivel interno que resultasen contradictorias entre sí. Se daba la circunstancia de que algunos órganos judiciales interpretaban el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores conforme a la normativa y la jurisprudencia europeas, en tanto que otros se limitaban a aplicar el porcentaje previsto en el citado precepto sin sujetarlo a un juicio de adecuación y proporcionalidad. Así, en aras de la defensa del principio de seguridad jurídica constitucionalmente reconocido, el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, clarificó los términos de la cuestión para evitar que, en un futuro, se dictaran resoluciones judiciales internas contrarias al espíritu y finalidad de la norma europea y de la interpretación dada por el TJUE al artículo 2.2.b), inciso i), de la Directiva.*

*En tercer lugar, el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, tenía el claro objetivo de evitar que se produjeran, como consecuencia de la aplicación del precepto que se derogaba, discriminaciones directas o indirectas para colectivos especialmente vulnerables que se encuentran en alto riesgo de exclusión profesional y social (por ejemplo, por razón de discapacidad o género).*

*En definitiva, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, se inscribía en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, suponía una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC de 30 de enero de 2019, recurso de inconstitucionalidad número 2208-2019), centradas en el cumplimiento de los compromisos europeos, la seguridad jurídica y la protección de los colectivos especialmente vulnerables de nuestra sociedad.*

*Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, constituyó un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción del citado Real Decreto-ley (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).*

*La inmediatez de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, resultaba también oportuna, puesto que otra alternativa hubiera requerido de un plazo muy superior en el tiempo. Esta acción normativa urgente aseguró la derogación legal en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia (SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).*

*La circunstancia de que la situación a la que quería hacerse frente viniera produciéndose desde la reforma laboral acometida en el año 2012 no impide que el Gobierno usara, en aquel momento, la legislación de urgencia. La valoración de la extraordinaria y urgente necesidad de esta medida es independiente de que la misma tuviera su origen en la previa inactividad del Gobierno (que, por otra parte, estuvo en funciones desde marzo de 2019 hasta enero de 2020). El dato relevante no es tanto la causa de las circunstancias que justificaron la legislación de urgencia, cuanto el hecho de que tales circunstancias efectivamente concurrían (STC 11/2002, de 17 de enero, FJ 6). A mayor abundamiento, la Sentencia del TJUE de 2018 añadió una nueva razón a la necesidad de aprobar el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero: a los motivos de garantizar el principio de seguridad jurídica a nivel interno y de proteger a los colectivos discriminados por razón de discapacidad o género, se añadió la reciente exigencia de cumplir con la interpretación dada por el TJUE con ocasión de enjuiciamiento del precepto que se derogaba.*

*Existía la necesaria conexión entre la situación de urgencia expuesta y la medida concreta adoptada para subvenir a ella. Resultaba clara la necesidad de derogar el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores para erradicar la situación susceptible de generar discriminaciones, inseguridad jurídica e incumplimiento de las obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3; 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).*

*Finalmente, la satisfacción del objetivo perseguido por esta reforma requería, sin duda, la aprobación de una disposición con rango de ley, pues se trataba de una previsión recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.*

## VIII

*La presente Ley se dicta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.*

**Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.**

*Queda derogado el apartado d) del artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.*

**Disposición derogatoria única.**

*Queda derogado el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.*

**Disposición final primera. Título competencial.**

*Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.*

**Disposición final segunda. Entrada en vigor.**

*La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».*

*Por tanto,*

*Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.*

*Madrid, 15 de julio de 2020.*

FELIPE R.

*El Presidente del Gobierno,  
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN*

Esta obra, de conteúdo crítico e transdisciplinar, contempla a publicação da tese de doutorado do autor adaptada para o formato de livro. Considerando as relações de trabalho como relações assimétricas de poder, sustenta-se a necessidade de aplicação da teoria do Enfoque de Direitos Humanos (EDH) - inicialmente concebida para aplicação às políticas públicas -, como um instrumento para obtenção de maior efetividade dos direitos sociais, quando acoplada na hermenêutica jurídica trabalhista. Assim, propõe-se a aplicação do EDH ao Direito do Trabalho como ferramenta indutora de transformações de significado, essência, conteúdo jurídico e amplitude de interpretação e aplicação práticas necessárias para que, finalmente, as pessoas despossuídas sejam tratadas como seres humanos nas relações de trabalho, e não como mercadorias. Com o paradigma de centralidade do Direito do Trabalho nas pessoas, a partir do EDH promove-se a alteração da lógica econômico-jurídica atual, redimensionando o desenvolvimento consoante a dignidade humana e a justiça social, para que o trabalho e as pessoas trabalhadoras tenham prevalência sobre o capital. Da mesma forma, conectando-se o valor social do trabalho à função social da propriedade, e com a visibilização da pessoa trabalhadora como ser humano nas relações de trabalho, através do EDH se almeja a tutela da dignidade humana em seu sentido mais amplo nas relações laborais.

O livro se estrutura em quatro capítulos, compreendendo a Teoria Crítica e os Direitos Humanos do Trabalho; o Enfoque de Direitos Humanos e a Hermenêutica Jurídica; a Compreensão do Direito Humano do Trabalho em contraposição ao Contrato de Trabalho; e, finalmente, o Enfoque de Direitos Humanos aplicado à Hermenêutica Juslaboral.

Consoante explanou Hobsbawm, “conceitos, tais como o direito de viver uma vida decente, somente podem se tornar operacionais numa sociedade construída de forma a torná-los possíveis”, portanto, constitui-se o EDH aplicado às relações de trabalho como um instrumento para esta finalidade, para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa, solidária, plural, multicultural, emancipadora da classe despossuída, e imune a métodos de dominação do passado, presente ou futuro.

Marcelo José Ferlin D’Ambroso



978-65-5509-159-5